CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1996

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ
PRESIDENTE

LICDO. ELIGIO A. SALAS — LICDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

DRA. AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
PRESIDENTA ENCARGADA

LICDO. JOSÉ MANUEL FAUNDEZ — DR. FABIÁN ECHEVERS

LICDO. MARIANO HERRERA
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA — DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

DRA. AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ — LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

PONENCIA

LA TUTELA COMO INSTRUMENTO DE PAZ

CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Presidente de la Corte Constitucional de Colombia

1. Una dicotomía cara al realismo jurídico norteamericano: el derecho en el papel y el derecho en la vida.

La conferencia pronunciada en Harvard por el famoso juez Oliver Wendell Holmes a finales del siglo pasado, El sendero del derecho, no es un hito insignificante en el pensamiento jurídico contemporáneo. Allí se aventura una definición del derecho que sin duda alude a la actividad cotidiana de los abogados: "Entiendo por derecho -dice- las profecías acerca de lo que los jueces harán".

El énfasis en la decisión judicial, es lo que en ella me interesa destacar. Ya está allí prefigurado el derrotero que habrá de transitar el "realismo jurídico norteamericano", con sus afirmaciones radicales de que "el derecho es lo que los jueces declaran como tal" o "lo que los jueces **dicen**" o, en su versión más extrema, "lo que los jueces **hacen**".

Un accidentado itinerario ha recorrido entonces la concepción del derecho, desde que los exégetas lo habían identificado con la ley. Por que la incógnita medular que nos propone la teoría jurídica es, precisamente, la de cómo se relacionan la ley y el fallo. Para la exégesis la respuesta es clara y contundente: el derecho es la ley; la sentencia es sólo una inferencia lógica a la que se llega indefectiblemente al subsumir el caso particular bajo la norma general. El protagonista del proceso jurídico es, entonces, el legislador. La función judicial es subalterna y vicaria, pues se limita a revelar de qué manera la situación concreta se halla regulada y comprendida en la ley.

Si los exégetas asimilan el proceso judicial a un razonamiento silogístico, meramente racional, axiológicamente incontaminado, los realistas, en abierta antítesis, van a desvelar el carácter ideológico de dicha asimilación, afirmando que las cosas ocurren de un modo bien distinto, a saber: el juez una vez conocido el asunto **sub-júdice** asume frente a él una actitud, de adhesión o rechazo, y luego busca una ley o un precedente que legitime su valoración.

Bajo esa perspectiva, el derecho no es asimilable a la norma jurídica de carácter general que, en embrión, contiene ya el fallo, sino a la decisión judicial, susceptible de ser referida a una ley o a un precedente que pueda invocarse como su fundamento. El protagonismo en el proceso creador del derecho, se ha desplazado, abruptamente, del legislador al juez. Y, como inevitable corolario, se ha contradicho la concepción del pensamiento jurídico como estructura de derivación **more geométrico**, en cambio una suerte de pensamiento problemático que no encuentra en la lógica, sino en la retórica, su paradigma discursivo.

Yo, entonces, no tengo los derechos contenidos en el precepto general, que el juez se limita a identificar siguiendo un método lógico, valorativamente aséptico, sino los que el propio juez me adjudica, por estimarlos justificables conforme a una regla (legislativa o jurisprudencial) del ordenamiento, a la que se llega como término final de un proceso cetético (de búsqueda).

Si es el juez quien decide con autoridad acerca de los derechos y obligaciones de cada quien, es él quien encarna el "derecho en la vida" mientras que la norma general (ley o precedente), posible de diferentes interpretaciones y cuya pertinente aplicación al caso concreto puede también problematizarse, simboliza el "derecho en el papel".

2. ¿Rigió alguna vez la Constitución colombiana de 1886?

Referida a esa útil dicotomía, cabe formular una pregunta relacionada con

el asunto que nos incumbe, a saber: ¿Informó la Constitución colombiana de 1886, de modo significativo nuestro "derecho en la vida"? Creo que no es aventurado responder negativamente esa cuestión, y de modo muy especial en lo atinente a los derechos humanos, que en ella se denominaban "Derechos Civiles y Garantías Sociales". Podríamos hacer un repaso de ese catálogo, no demasiado ambicioso pero suficiente para asegurar la convivencia sobre bases civilizadas, confrontándolo con lo que en la práctica ocurría, para concluir sin muchas dificultades que él era un buen ejemplo de lo que los realistas norteamericanos denominan "derecho en el papel".

Como recurso pedagógico legítimo podemos hacer esta afirmación deliberadamente exagerada pero significativa; el único artículo de la Carta anterior que durante un largo período tuvo plena vigencia fue el 121, que era precisamente el que habilitaba al gobierno para restringir o suspender el ejercicio de las libertades públicas y para sustraer de la competencia de los jueces ordinarios el juzgamiento de ciertos delitos, los políticos invariablemente, y atribuirla a los tribunales castrenses, donde el debido proceso y el derecho de defensa era una irrisión.

La Constitución cumplía a cabalidad su función ideológica (presentar como justa y civilizada una realidad degradada) pero el ciudadano carecía de cualquier medio idóneo para que se le adjudicaran, en concreto, los derechos que de manera generosa se le reconocían en abstracto.

Si bien la coincidencia total entre esos dos mundos ("derecho en el papel" y "derecho en la vida") no pasa de ser una construcción utópica, la brecha que podía advertirse en Colombia, en la época que he señalado, era paradigmática por lo abismal. Tanto que en el caso hipotético de dos observadores extraños interesados ambos en conocer el país, pero que hubieran optado por métodos diversos, el uno por el estudio de los estatutos jurídicos más importantes, y el otro por la observación empírica de la vida real (incluida la práctica de los tribunales), se habría llegado a un desenlace sorprendente por lo paradójico: habrían tenido, al término de su experiencia, la sensación de haber elegido como objeto de estudio dos países bien distintos: el primero ubicable dentro de los pueblos civilizados, y el segundo bastante cercano a la barbarie. Porque nada tan opuesto a la filosofía demoliberal de los textos entonces vigentes, como las prácticas vitandas del "estado de sitio", que, por adehala, tenían como efecto secundario el paulatino indoctrinamiento del funcionario en la ideología de la arbitrariedad.

3. El proceso de apropiación institucional por los destinatarios.

Suelen contrastarse la Constitución colombiana de 1886 y la de 1991, más o menos de este modo: la primera era breve, en general coherente, técnicamente formulada y bien escrita. La segunda, inusitadamente extensa, farragosa, con evidentes incongruencias y escrita en un español que poco recuerda al de Miguel Antonio Caro. Ese contrapunto, tan impregnado de nostalgias gramaticales que velan un trasfondo fuertemente conservadurista, escamotea, sin embargo, un hecho inquietante: la segunda, con todas sus ineptitudes, ha revelado un poder de penetración en la conciencia ciudadana que la primera jamás tuvo. [1] ¿Por qué?

Una respuesta cabal a esa pregunta, comportaría la consideración de muchos

[1] La aseveración puede corroborarse por circunstancias tan significativas como éstas: mientras la Constitución anterior era texto de consulta sólo de los profesores de la materia y algunos otros especialistas (el resto de los ciudadanos la ignoraba por completo y ni siquiera advertía la laguna), sorprende gratamente comprobar ahora en foros y en conferencias con auditorios conformados en su gran mayoría por ciudadanos comunes, cuántas inquietudes importantes se formulan en torno al contenido de la Constitución y cuánto interés tienen para la opinión ública los fallos de constitucionalidad y los que deciden acciones de tutela. Basta con echar una ojeada a los medios de comunicación para advertir que una gran proporción de las noticias tiene que ver con asuntos atinentes a la Constitución.

hechos que no estoy ahora en condiciones de analizar, algunos de los cuales no resultan siquiera pertinentes para nuestro propósito. Pero vale la pena indicar algunos que sí lo son, así parezcan insignificantes.

El grave estado de anomia que padecía el país (y que en alguna medida aun persiste) en el momento en que se propuso una reforma constitucional, determinó que en la opinión pública se crearan grandes expectativas en torno a los efectos positivos que tal reforma podría generar, y una inusitada curiosidad sobre un asunto que hasta entonces había sido ignorado por el ciudadano común: ¿qué es una Constitución y para qué sirve? Las mesas de trabajo que funcionaron en todo el país antes de que se instalara formalmente la asamblea, constituyen un excelente índice de cuánta esperanza había puesto la ciudadanía en la eficacia benéfica de una nueva Carta, más democrática y más atenta a las necesidades reales de la comunidad. Por primera vez el ciudadano corriente cobraba conciencia de que el derecho, en su expresión más alta, de algún modo se relacionaba con su vida.

Los debates que tuvieron lugar en todo el territorio nacional sobre cuál habría de ser la fisonomía de la nueva Constitución, se convirtieron, sin que sus protagonistas se lo propusieran, en una eficiente catequisis política y en un proceso de pedagogía constitucional de efectos insospechados. Tales circunstancias crearon una ambiente propicio para la recepción de la nueva normatividad.

4. Libertad seguridad y libertad participación.

Sin duda el Constituyente, conformado por un grupo bastante heterogéneo de personas, tímido esbozo de las asimetrías culturales, sociales, políticas y económicas del país, tuvo el propósito plausible de interpretar los deseos de la comunidad más insistentemente expresados y susceptibles de ser plasmados en una Carta Política. En concordancia con esa idea, amplió significativamente el catálogo de derechos y libertades (llamados ahora "derechos fundamentales"), para fortalecer e incrementar la zona de **libertad seguridad**, hollada de modo tan inclemente durante la vigencia de la Constitución anterior, y particularmente en los últimos 50 años de régimen, casi continuo, de estado de sitio.

De otra parte, existía el sentimiento bastante generalizado de que las instituciones representativas no satisfacían a cabalidad el anhelo democrático de que cada uno participe en las decisiones políticas que lo afecten y, por tanto, que era urgente incorporar a la nueva Carta, instituciones y mecanismos propios de la democracia directa, ampliando así los límites de la llamada **libertad participación** que no sólo afina y perfecciona la **praxis** democrática sino que se erige en la mejor garantía de la vigencia de las libertades. Se trataba, entonces, no sólo de enriquecer y afianzar las **libertades negativas** sino de incrementar las **positivas**, para usar un lenguaje corriente en autores como Berlin y Bobbio.

5. La tutela: artículo 86 de la Constitución.

Si me viera precisado a señalar la más importante de las reformas introducidas a nuestro ordenamiento normativo por la Constitución de 1991, consciente como soy de que son muchas y muy significativas, no vacilaría en señalar la contenida en el artículo 86, que consagra la acción de tutela, en los siguientes términos:

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación".

La norma citada vino a recoger, tardíamente, una tradición latinoamericana que había tenido manifestaciones incipientes en las Constituciones de Cundinamarca y Tunja de 1811, pero que fue claramente inaugurada por México en 1857 y continuada por El Salvador y Honduras a finales del siglo pasado; por Guatemala y la provincia de Santafe (en la República Argentina) al comenzar la década del 20, por Brasil en los años treinta, Panamá y Costa Rica en los años cuarenta, y por Venezuela, Bolivia, Ecuador y Paraguay, en los sesenta.

Con algunas diferencias de un país a otro y bajo diferentes nombres (aunque el más constante es **amparo**), las normas en cuestión, buscan, en esencia, el mismo objetivo que persigue nuestra acción de tutela: judicializar la defensa de los derechos y garantías consagrados en la Constitución.

6. Vigencia o vacuidad de los derechos fundamentales.

El incremento notable del catálogo de derechos fundamentales, y la atribución a los jueces de potestades compulsivas para preservar su vigencia, removiendo situaciones amenazantes o dejando sin vigor actos oficiales (o asimilables a ellos) que los vulneren, implican dos cosas, dignas de ser desveladas desde la perspectiva teórica que hemos asumido en esta ponencia: 1) La convicción de que las reglas generales (y de ellas son un ejemplo las que plasman principios) sí tienen fuerza motivante sobre los funcionarios que actúan el derecho en casos específicos, (aserto frente al cual los realistas se mostraban escépticos) y 2) El reconocimiento de que, en lo atinente a "derechos fundamentales, volver "vivo" el "derecho en el papel" es un proceso que ineludiblemente comporta su judicialización.

La primera de esas observaciones tiende a rescatar el carácter preponderante de la norma como factor determinante de la sentencia, en contra de algunas formulaciones extremas del realismo que, al reducir el derecho a "lo que los jueces declaran como tal", consideran que la norma es sólo un **hecho** más, al lado de otros de carácter social, psicológico, ideológico y económico, cuya virtualidad de incidencia en el fallo no debe sobrestimarse, so pena de distorsionar la forma como el control jurídico tiene lugar. El derecho -desde esa perspectiva- es sólo lo que el juez declara, condicionado por un juego de factores dentro de los cuales la regla general en que su decisión pretende fundarse es uno más, y ni siquiera el más importante.

Propuestas teóricas tan dispares como las de Kelsen y Hart coinciden, sin embargo, a propósito de la interpretación, en destacar el hecho de que los jueces regularmente fundamentan sus fallos en las normas generales (leyes o precedentes) y que justamente, la detección de las decisiones desviadas es una tarea relativamente simple porque éstas no se dejan reducir a las reglas en que pretenden fundarse, y esa sola circunstancia es suficiente para formular un reproche de invalidez.

Cosa diferente es que a la norma general no se la conciba ya, al modo de los exégetas, como una formulación unívoca capaz de fundamentar sólo una decisión correcta, sino como un esquema abierto de interpretación de la conducta humana, dentro del cual varias opciones son posibles (todas ellas **jurídicas**) competiendo al juez elegir la que juzgue mejor.

La segunda observación (la judicialización como condición de **vida** del

derecho), tiene una conexión directa con el tema que primordialmente nos ocupa: la acción de tutela. Porque de nada sirve el enriquecimiento del catálogo de derechos y libertades sin un mecanismo que permita hacerlos efectivos cada vez que una instancia oficial (u homóloga) los desconozca. Es decir, que garantice un alto grado de coincidencia entre los derechos enunciados en abstracto, y los que en concreto se le adjudican a su titular.

7. La paz, como factor convocante del proceso constitucional de 1991.

Creo que si es posible destacar entre los múltiples factores determinantes del proceso constitucional que culminó con la expedición de la Carta de 1991, el más sobresaliente, ése es sin duda el deseo vehemente de paz, compartido por la inmensa mayoría de los colombianos.

Se encontraba el país (y aún se encuentra, por desventura) padeciendo una situación muy próxima al "estado de naturaleza" descrito por Hobbes, caracterizado por la más insensata violencia de todos contra todos, donde la obsesión prioritaria consiste en sobrevivir, y se pensó entonces en la "renovación del pacto social" como una posibilidad redentora. La reforma de la Constitución se avizoró pues como el camino más expedito para alcanzar el objetivo anhelado.

Pero, en contra de lo que cabría esperarse, no fue el pesimismo hobbesiano frente a la naturaleza del hombre el que informó la propuesta. No se pensó que un sistema de corte autoritario, con poderes omnímodos férreamente concentrados en un gobernante, fuera el llamado a superar la situación anómica que imposibilitaba la convivencia. Al contrario: con sorprendente lucidez la Asamblea Constitucional entendió que no eran ni el exceso de libertades, (que el país jamás ha conocido), ni la excesiva largueza en las posibilidades participativas de la comunidad en la vida política (bien mezquinas hasta entonces), los factores determinantes del caos social. Que más bien uno y otra debían ensayarse como nuevas formas de convivencia, a ver si bajo condiciones menos constrictivas que las que habían prevalecido hasta entonces, en un ambiente político más propicio para el ejercicio de la libertad y de la democracia, se obraba la transformación benéfica que postulaba Rousseau, como consecuencia de la eliminación de los yugos que pervierten la bondad natural del hombre.

8. La paz como valor jurídico. Concepto kelseniano de paz.

Puede afirmarse, sin la más mínima vacilación, que la teoría pura del derecho, como construcción intelectual, marca una etapa sobresaliente en la historia del pensamiento jurídico. Lo que su autor, Han Kelsen, se propuso, fue elaborar un aparato conceptual que diera cuenta cabal del derecho, más allá de sus contingencias históricas e ideológicas, poniendo de lado el sincretismo metódico que había conducido a la identificación del objeto jurídico con contenidos morales, políticos, psicológicos y hasta biológicos, que lo escamoteaban y empobrecían so pretexto de enriquecerlo.

Tal propósito implicaba una definición del derecho que prescindiera de cualquier referencia axiológica. V. gr. "ordenamiento normativo regulador del uso de la fuerza dentro de la comunidad, que dispone, en consecuencia, quién, cómo, cuándo y en qué medida puede realizar actos de coacción en contra de otros".

Podemos, en armonía con la directriz kelseniana, evaluar como justo o injusto el ejercicio de la fuerza tal como queda regulada, pero lo que no puede cuestionarse es su juridicidad. Derecho y justicia quedan, pues, completamente deslindados, en contra de una vigorosa tradición que pugnaba por identificarlos. No obstante, el pensador austríaco reconoce que el estado de cosas así generado, aún siendo compatible con mucha ignominia, es en sí mismo valioso. Y al valor en él implícito lo denomina paz. De ese modo, el derecho resulta ser un ordenamiento de paz, que monopoliza el uso de la fuerza dentro de la comunidad, adscribiendo ese monopolio a los llamados "órganos del Estado". Así pues, cada uno tendrá la certidumbre de que sólo podrá ser sujeto pasivo de un acto de coacción bajo determinadas circunstancias y de que sólo de ciertos sujetos puede proceder la coacción.

Podrá parecer corto, y poco ambicioso, ese concepto de paz, pero hay que convenir en que la situación que él describe constituye un supuesto fáctico esencial para la convivencia. El que justamente se echa de menos en la situación anómica que de un tiempo para acá hemos venido padeciendo los colombianos. La recuperación por el Estado del monopolio en el ejercicio de la fuerza, ha sido uno de los propósitos determinantes del proceso constitucional de 1991, del que podemos decir aún, que apenas comienza su curso.

Que las personas estén expuestas no sólo a los actos de fuerza que en su contra pueda ejercer válidamente el Estado cuando su conducta encuadra en las hipótesis que a ellos están asociadas, sino a los más indiscriminados e imprevistos hechos de violencia, procedentes de los grupos subversivos o de la delincuencia común, organizada o saltuaria, es, sin duda, inquietante factor desestabilizante de la mínima cohesión y solidaridad social exigidas para que pueda hablarse de convivencia.

9. La tutela como instrumento de paz.

¿Cómo articular, parece entonces la pregunta pertinente, dentro de las reflexiones precedentes, la tutela como instrumento de paz? Permítanme apelar a un ejemplo trivial pero revelador de nuestra práctica social y jurídica, para extraer de él algunas conclusiones que no parecen abusivas. El caso, que no es insólito sino paradigmático (en Colombia), me lo contó un amigo que ejerce la abogacía.

En un barrio de clase alta de alguna de nuestras ciudades, el propietario de un lote situado en la parte superior de una colina, ensanchó artificialmente su superficie, llenando con tierra y escombros un espacio vacío. Al poco tiempo de terminarse la construcción empezaron a flaquear sus bases, amenazando seriamente las viviendas y las vidas de los moradores de la parte inferior. Requerido por los eventuales damnificados para que pusiera remedio a la situación, se negó rotundamente a enmendar su yerro. Los procedimientos policivos resultaron infructuosos y, más tarde, como era de esperarse, el desmoronamiento de una parte de su residencia afectó severamente la de uno de sus vecinos. El afectado, entonces, le propinó tres tiros al renuente. En curso el proceso de responsabilidad civil, que ha durado 7 años y aún no concluye, uno de los intervinientes en la diligencia de inspección judicial, con una gran dosis de sentido común se permitió observar: "Lo que hoy se hubiera solucionado con una tutela".

Sin entrar a hacer una disección rigurosa del caso narrado (v. gr.: el lugar donde ocurre y las personas implicadas en la situación, no las más violentas, de ordinario), la moraleja parece ineludible: qué eficiente factor de discordia y de violencia, es la impotencia frente a la injusticia.

Cuando al ciudadano se le desconocen sus derechos más elementales de un modo insolente y la única vía pacífica de resarcimiento está constituida por tortuosos e interminables procedimientos al término de los cuales todo sigue avizorándose como incierto, la autotutela, tan incompatible con la convivencia civilizada, surge a menudo como un incontrolable mecanismo de reacción.

Con cuánta razón se desmorona la fe en el derecho, cuando se cobra conciencia de que los contenidos de los textos jurídicos poca relación guardan con la vida cotidiana del hombre común. Cuando sutilmente se manipula la conciencia de "la gente" para determinarla a creer que vive en el mundo del observador 1. (relacionado atrás) cuando los hechos, de manera inclemente, se encargan de mostrarle que su mundo real es el del observador 2. Es decir cuando se advierte la brecha, tematizada por los realistas, que separa "el derecho en el papel" del "derecho en la vida".

Que el ciudadano sepa que mediante un proceso ágil y expedito el juez va a impedir que se le conculquen sus derechos o va a ordenar que se remuevan los hechos que han determinado la violación de los mismos, es factor decisivo para que el derecho haga tránsito del topos uranos, en el que sólo es accesible a unos pocos predestinados, a este mundo de la realidad tangible, el de la realidad trivial y cotidiana que es la vida del hombre común, quien así capta la cara

amable del derecho que para él había permanecido oculta. Sabe entonces que el derecho sirve de veras para apartar factores de zozobra es decir, para ayudarle al hombre a ser menos infeliz. Y no hay duda de que el estado de cosas sí inducido constituye un supuesto esencial de ese bien tan anhelado que llamamos la paz.

10. El "desbordamiento" de la tutela en Colombia.

De un tiempo para acá, y casi desde el mismo momento en que empezó a regir la Constitución de 1991, se ha vuelto un lugar común en los círculos forenses, y particularmente en los ámbitos más próximos a las altas Cortes, la afirmación de que la tutela se salió de madre, que anda desbordada, que es urgente una nueva reglamentación que la vuelva a su sitio. Consecuencia de esa persistente opinión "autorizada" es la propuesta del gobierno, incluida en el proyecto de reforma constitucional que actualmente cursa en el Congreso, encaminada a "reencauzar" la acción de tutela.

No juzgo pertinente ahora, en esta circunstancia, detenerme a analizar las enmiendas propuestas, sino más bien llamar la atención sobre un hecho que me parece inquietante: se ha dado por supuesto que los males de la tutela radican en ella misma y no en factores externos que la tutela ha ayudado a desvelar y a identificar y que son, ellos sí, los que claman por una reforma.

El Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas de la Universidad de los Andes (CIJUS), que dirige el jurista y sociólogo del derecho Mauricio García Villegas, ha realizado un valioso y esclarecedor trabajo de investigación denominado "Incidencia Social de la acción de tutela", que demuestra, con suficiencia, que la citada acción ha producido efectos provechosos en el ámbito en que está llamada a operar y ha determinado consecuencias colaterales plausibles en órbitas afines, donde los hábitos de indolencia y de irrespeto por los derechos fundamentales, se abroquelaban detrás de procedimientos dilatorios y prácticas burocráticas encaminadas a escamotear el derecho y no a hacerlo efectivo.

Una apretada síntesis de sus conclusiones nos la ofrece el profesor García Villegas en los siguientes términos:

"1. Las encuestas realizadas a los actores de la tutela -demandantes, demandados y jueces- ponen de presente la existencia de una notable opinión positiva en relación con este mecanismo de protección judicial de derechos. Así por ejemplo, el 79% de los demandantes consideran que la tutela es un mecanismo útil para la protección de sus derechos. Este porcentaje es mucho mayor que el porcentaje de tutelas generalmente concedidas por los jueces (sólo 29%). En consecuencia, buena parte de los demandantes que han recibido decisiones negativas siguen considerando que la tutela es útil. De otra parte la encuesta a demandados dio como resultado una opinión mayoritaria favorable a la acción. Finalmente, es importante anotar cómo el 92% de los jueces tienen una opinión positiva sobre la acción.

2. La utilización masiva de la tutela por parte de los colombianos encuentra parte de su explicación en dos hechos relacionados 1) la deficiente eficacia de los mecanismos judiciales ordinarios establecidos para la protección de derechos ([2] y 2) el deterioro de los mecanismos sociales de solución de

---

[2] El problema de lentitud y congestión en los despachos judiciales tiene características estructurales de larga data, de tal manera que la acción de tutela no es una causa, sino más bien un intento de solucionar este problema. Desde el punto de vista sociojurídico, la congestión judicial no puede ser mirada como un fenómeno autónomo, sino como una parte -mínima además- del fenómeno conocido como "la pirámide de la litigiosidad". En efecto, los conflictos sociales susceptibles de ser afrontados por la justicia son sólo un mínimo porcentaje de los que realmente resultan tratados por los jueces. El mayor o menor porcentaje de oferta judicial en relación con la demanda se debe a múltiples factores que no es del caso analizar en este momento. Lo cierto es que en Colombia la disociación entre estos dos factores demanda potencial y oferta

conflictos. Aproximadamente el 40% de las demandas de tutela son consideradas "pequeñas causas". Los conflictos subyacentes a estas demandas claramente podrían encontrar solución en mecanismos informales, no judiciales. El éxito de la tutela como acción judicial se explica entonces no sólo por sus bondades intrínsecas -ampliamente defendidas en la doctrina y jurisprudencia nacionales- sino también por el contexto de deterioro de los procedimientos sociales e institucionales de justicia.

Desde este punto de vista la tutela contribuye al mejor funcionamiento del sistema democrático, en cuanto la democracia es un sistema político de solución de conflictos por medio de terceros independientes que deciden con fundamento en normas depositarias de la voluntad popular.

3. La acción de tutela ha producido transformaciones institucionales importantes a lo largo de estos primeros años de aplicación. El caso más evidente es el de los procedimientos para el reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación de Cajanal y otras instituciones similares. Gracias a la tutela los pensionados pueden hoy obtener sus derechos pensionales a través de la tutela con una relativa rapidez, lo cual era impensable cuatro años atrás. En términos generales, la protección del derecho a la igualdad por medio de la acción de tutela ha transformado de manera silenciosa algunas relaciones privadas e institucionales claramente discriminatorias en materias tales como educación, trabajo, petición, salud.

4. La tutela también ha sido útil como instrumento de educación social en materia de derechos fundamentales. Las decisiones de los jueces de tutela han puesto al descubierto una cantidad enorme de comportamientos violatorios de derechos que anteriormente no aparecían como tales. Desde este punto de vista la tutela ha servido para crear ciudadanos activos y conscientes de sus derechos".

11. Lo que comporta la judicialización de los derechos fundamentales consagrados en la Carta.

En un hermoso ensayo ("El pudor de la historia"), Jorge Luis Borges escribe lo siguiente: "El 20 de septiembre de 1792, Johann Wolfgang von Goethe (que había acompañado al Duque de Weimar en un paseo militar a París) vio al primer ejército de Europa inexplicablemente rechazado en Valmy por unas milicias francesas y dijo a sus desconcertados amigos: En este lugar y el día de hoy, se abre una época en la historia del mundo y podemos decir que hemos asistido a su origen. Desde aquel día han abundado las jornadas históricas y una de las tareas de los gobiernos (singularmente en Italia, Alemania y Rusia) ha sido fabricarlas o simularlas, con acopio de previa propaganda y de persistente publicidad. Tales jornadas, en las que se advierte el influjo de Cecil B. de Mille, tienen menos relación con la historia que con el periodismo: yo he sospechado que la historia, la verdadera historia, es más pudorosa y que sus fechas esenciales pueden ser, asimismo, durante largo tiempo, secretas. Un prosista chino ha observado que el unicornio, en razón misma de lo anómalo que es, ha de pasar inadvertido. Los ojos ven lo que están habituados a ver. Tácito no percibió la Crucifixión, aunque la registra su libro".

Luego señala algunos de esos acontecimientos que sí cambian el curso de la

---

efectiva de justicia- es demasiado grande e incide cada día más en el ahondamiento de la brecha entre el Estado y la sociedad civil.

La acción de tutela ha sido un instrumento judicial que sin duda ha contribuido a disminuir dicha disociación. La simplicidad de su procedimiento, la posibilidad de que cualquier persona pueda hacer uso de ella sin necesidad de abogado y, en general, su carácter ágil y accesible, hacen de la tutela una acción especialmente efectiva para resolver los problemas de la gente. Es cierto que estas características también pueden ser aprovechadas justamente para entorpecer la justicia, en un país donde no son escasos abogados temerarios e inescrupulosos. Sin embargo, sería una torpeza y una rendición injustificada, acabar con la tutela o desnaturalizarla, por estas disfunciones.

historia aun cuando no hubieran merecido la atención de los periodistas, por no satisfacer las condiciones de dramatismo y espectacularidad que de un hecho ordinario se exige para que haga noticia. Cito uno solo de ellos: cuando Esquilo, según cuenta Aristóteles en la Poética, elevó de uno a dos el número de actores ... "un día, quinientos años antes de la era cristiana, los atenienses vieron con maravilla y tal vez con escándalo (Víctor Hugo ha conjeturado lo último) la no anunciada aparición de un segundo actor ... Un espectador profético hubiera visto que multitudes de apariencias futuras lo acompañaban: Fausto y Segismundo y Macbeth y Peer Gynt, y otros que, todavía, no pueden discernir nuestros ojos".

Como quien dice: ese hecho aparentemente insignificante contenía ya, en embrión, todo el teatro occidental que no se concibe sin el diálogo.

A los acontecimientos de esa clase, enunciados por Borges, yo me atrevería a añadir uno: el día del año 1804, en que el juez John Marshall, al desatar el caso Marbury vs. Madison, reivindicó para los jueces, sin norma explícita previa, la potestad, aneja a su función, de interpretar la norma fundamental del Estado, y extraer de ella conclusiones individualizadas y concretas.

No parece un mero azar que hayan sido contemporáneos suyos, quienes, en este siglo, hayan antepuesto al derecho abstracto contenido en los textos, el derecho vivo que dicen los jueces.

Por eso decía al comienzo, que el dar vigencia a los preceptos constitucionales y muy especialmente a los que consagran los derechos fundamentales, implica, sin duda alguna, su judicialización.

Los colombianos, entonces, podemos leer nuestra Carta del 91, particularmente cuando diseña el mecanismo de la tutela, como el más significativo intento por vivificar el derecho hermosamente consagrado en los textos. Y como el propio Kelsen ha admitido que la paz es el primer don que la vigencia plena del derecho comporta, que esa Carta de 1991, como un juego de espejos, es una propuesta de conquistar la paz, que no tenemos, por la única vía civilizada que la humanidad conoce, a saber: el derecho.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÍNDICE

PONENCIA i

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ANALISA MORENO DE AROSEMENA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MOTORES INTERNACIONALES, S. A. (MOINSA) CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 18 DE OCTUBRE DE 1996, DICTADO POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SAMUEL VELÁSQUEZ DÍAZ EN REPRESENTACIÓN DE GABRIEL OSCAR MIRÓ ROVIRA CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DIARIO EL UNIVERSAL PARA LA ELECCIÓN DEL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DICTADA POR LA COMISIÓN DE CREDENCIALES, JUSTICIA INTERIOR, REGLAMENTO Y ASUNTOS JUDICIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 9

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PATTÓN, MORENO Y ASVAT, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA AGROMARINA DE PANAMÁ, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER, CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 6 DE 10 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL DE LA PROVINCIA DE COCLÉ, MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 10

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HÉCTOR CASTILLO RÍOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PLÁSTICOS GENERALES, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 15

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LIC. GILBERTO BÓSQUEZ DÍAZ EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD VIGILANCIA ESPECIAL, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 21

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO EMILIO ROYO LINARES, EN REPRESENTACIÓN DE RICARDO VICKER JOHNSON RAYMORE Y DARNA GLORIA RAYMORE DE POCASANGRE CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA JUEZ CUARTA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 25

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA LICENCIADA KARIN CÉSPEDES, EN REPRESENTACIÓN DE JUANA SEVILLANO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO CIVIL N° 0034 DE 9 DE AGOSTO DE 1996, PROFERIDO POR EL TRIBUNAL DE CONSULTAS Y APELACIONES DE COCLÉ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 26

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO ERNESTO ESPINAL, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA YINH Y ASOCIADOS, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA CJ-9 DE 16 DE DICIEMBRE DE 1993, PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9 DE LA PROVINCIA DE COLÓN (PROCESO LABORAL ENTRE GABRIEL GÓNDOLA CONTRA YINH Y ASOCIADOS, S. A.). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Y SEIS (1996). 27

AMPARO DE GRANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LCDO. GIOVANI A. FLETCHER H., EN REPRESENTACIÓN DE MIGUEL A. DURÁN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 1169 DE 3 DE JUNIO DE 1996, DICTADO POR LA JUEZ CUARTA DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 33

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LCDO. JAIME CHOY GARCÍA EN REPRESENTACIÓN DE JAIME CHEVALIER VALENCIA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA N° PJ-7 (FALLO ORAL INMEDIATO), PROFERIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 7 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL INCOADO POR VÍCTOR M. FONSECA CONTRA JAIME CHEVALIER VALENCIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 35

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RAÚL E. RODRÍGUEZ ARAÚZ EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FALCON SECURITY INVESTMENT, INC. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 41-DGT-96 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 36

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICDO. MANUEL SALVADOR HERRERA DELGADO, EN REPRESENTACIÓN DE TOMÁS ALBERTO HERNÁNDEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 14 DE 14 DE FEBRERO DE 1996, EXPEDIDA POR RAQUEL NG, DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 38

RECURSO DE HABEAS CORPUS 39

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NOEL A. CEDEÑO CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 39

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUO WEI MING O LUO WEI MENG CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 40

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN ALBERTO GARIBALDI CHIFUNDO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 43

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAIME DE COSTA COBOS CONTRA EL FISCAL TERCERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 44

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS, A FAVOR DE ANTONIO JESÚS HOQUEE MORALES, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 45

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ CONTRA LA JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO DE COCLÉ, RAMO PENAL, MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 46

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE IVÁN RENÉ MARTÍNEZ ESPINOZA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

(1996). 50

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MAGDALENA ESCOBAR DE MORALES CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 51

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GERARD DOBARRO BELART, CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, LCDO. ROSENDO MIRANDA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 55

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ALBERTO GUILLÉN CASTILLO, CONTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 56

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA RUIZ POON Y CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 57

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS EN FAVOR DE LA SEÑORA DALYS GARCÍA DE OBERTO, Y CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 58

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FELIPE DE GRACIA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 59

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EUDALDO CARABALLO DÍAZ CONTRA EL FISCAL CUARTO DE CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 60

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL AMADOR PALMA TUÑÓN CONTRA LA JUEZ DÉCIMA PRIMERA DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 61

RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR LIC. MIGUEL DEEN A FIN QUE SEA CONCEDIDA LA APELACIÓN INTERPUESTA CONTRA LA SENTENCIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL RELATIVA AL RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ISAÍAS GAHONA GUTIÉRREZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 63

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO REYES GONZÁLEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 66

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA CELSA MARÍA SALAZAR, CONTRA LA FISCAL DELEGADA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS DE COLÓN Y SAN BLAS, MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 68

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CAMARGO GORDÓN CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 69

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE NELSON BENÍTEZ LONDOÑO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 72

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANEL SANTIAGO TORN ACUÑA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 75

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO LÓPEZ VILLARREAL CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 78

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VLADIMIR QUINTANA BONILLA CONTRA EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 81

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL ANTONIO DÍAZ MATEO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 82

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN EURIBÍADES RODRÍGUEZ CONTRA LA FISCAL SEGUNDA DE CIRCUITO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 83

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANFRED ERICH ALBERT FEUCHT CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 84

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CAMILO VALDESPINO AGRAZAL CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 87

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS ERNESTO JARAMILLO RAMOS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 90

APELACIÓN EN ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICTOR MANUEL HINESTROZA DÍAZ CONTRA LA JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 91

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN BAUTISTA AGUILAR SANTOS CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 93

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PATROCINIO ROMERO CUBILLAS CONTRA EL FISCAL DÉCIMO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 95

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ISRAEL OCTAVIO CANDO MADRID CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 98

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CÉSAR MORA Y GENARINO MORA CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA

(30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 98

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICENTE FOSATTI CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 101

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO ANTONIO ALMANZA VILLARREAL CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 104

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ LUIS PAZ VALDELAMAR EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 105

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCO ANTONIO AGUILAR CONTRA EL FISCAL QUINTO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 108

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDDY DAVIS HENRY, CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 109

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 110

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO CANDELARIO SANTANA DENTRO DEL PROCESO LABORAL MARCOS HERNÁNDEZ VS BANCO DE LA EXPORTACIÓN, S. A. (BANEXPO). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 110

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS VARELA CONTRA EL ARTÍCULO 1736 DEL CÓDIGO JUDICIAL, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO DE MENOR CUANTÍA PROMOVIDO POR SILVESTRO QUINTERO CONTRA NICOLÁS AIZPURÚA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 111

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDA, EN REPRESENTACIÓN DE AEROLÍNEAS PACÍFICO ATLÁNTICO, S. A., CONTRA LOS ARTÍCULOS 19, 20, 21, Y 22 DE LA RESOLUCIÓN N° 173 DE MAYO DE 1980, DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE AERONÁUTICA CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 112

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARIO VAN KWARTEL CONTRA LAS EXPRESIONES "EMOLUMENTOS Y ASIGNACIONES" CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 49 DE 1984 (ARTÍCULO 226 DEL TEXTO ÚNICO), POR MEDIO DEL CUAL SE DICTA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CINCO (5) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 119

CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD, FORMULADA POR LA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONTRA EL ARTÍCULO 796 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 123

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL PERSONERO SEGUNDO MUNICIPAL DE PANAMÁ CONTRA EL DECRETO EJECUTIVO N° 476 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A PEDRO MARCOS JUSTINES POR EL SUPUESTO DELITO DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 123

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO LUIS CARLOS CEDEÑO DE GRACIA, EN REPRESENTACIÓN DE IRASEMA SUBÍA HERNÁNDEZ, CONTRA EL ARTÍCULO 980 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL, QUE ÉSTA LE SIGUE AL BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ, S. A. (BANAICO), EN LIQUIDACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) . . 125

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE MORGAN & MORGAN CONTRA LA PROVIDENCIA N° 102 DE 2 DE FEBRERO DE 1995; 207 DE 16 DE MARZO DE 1995 Y LA SENTENCIA N° 15 DE 27 DE MARZO DE 1995, DICTADA POR EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN (PROCESO LABORAL INTERPUESTO POR DMITIEV YURIV, SHCHERBAKOV VLADIMIR Y OTROS VS M/N FORTUNA III Y VITYAZ SHIPPING COMPANY). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 125

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO CARLOS GUILLERMO CAMPBELL MARTÍNEZ EN SU CONDICIÓN DE FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, CONTRA EL AUTO DE 1° DE FEBRERO DE 1996, PROFERIDO POR EL PRIMER CIRCUITO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. (PROCESO ORDINARIO CONSORCIO VAN DAM-SOSA & BARBERO -VS- INDUSTRIAS METALÚRGICAS VAN DAM, C. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 131

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO CANDELARIO SANTANA VÁSQUEZ CONTRA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 242 (REFORMADO) DEL CÓDIGO DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL INTERPUESTO POR ABDIEL SAGEL CONTRA EL BANCO DE LA EXPORTACIÓN, S. A. (BANEXPO). MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 141

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR EL LIC. RAFAEL RODRÍGUEZ SOBRE EL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO PENAL DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA JOSÉ ANTONIO VALLADARES POR EL DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO EN PERJUICIO DE KATY LOURDES QUINTERO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 142

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. LEOPOLDO CASTILLO G. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR UBALDO ANTONIO BARRIA M. CONTRA EL ARTICULO N° 4 DEL DECRETO DE GABINETE N° 235 DE 30 DE JULIO DE 1969. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 145

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR ORLANDO RAMOS CONTRA LA APLICACIÓN DE LA LEY NO. 67 de 1947, DENTRO DEL PROCESO LABORAL INTERPUESTO POR RICARDO WONG CONTRA ISLA MARGARITA DEVELOPMENT, INC. PROCEDENCIA JUZGADO 2o. DE TRABAJO DE LA IRA. SECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 147

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO E. PALACIOS R. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL DENTRO DEL PROCESO SUMARIO PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD BERASVAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 148

TRIBUNAL DE INSTANCIA 151

RECONSIDERACIÓN DE SANCIÓN IMPUESTA DENTRO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PROPUESTA A FAVOR DE JAIME RAÚL GONZÁLEZ DELGADO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 151

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ EN LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR OAMYRA GARCÍA DE BERBEY DENTRO DEL SUMARIO SEGUIDO A EDUARDO HARMODIO BERBEY MELGAR

SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA EN PERJUICIO DE AIDELENA PEREIRA. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 153

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO A. COLLADO T., DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALCIDES ZAMBRANO G., EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR AMBROSIO FIGUEROA NÚÑEZ, CONTRA EL FISCAL DE CIRCUITO DE LOS SANTOS, LICENCIADO HUMBERTO A. COLLADO CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 154

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, DENTRO DE LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PATRINA GUARNIERI CONTRA LOS ARTÍCULOS 788 Y 793 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 155

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR AURA IRIS AGUDO SOLÍS, LIZ MARY CASTRELLÓN BRIMINGHAM Y TERESA ORTIZ GUEVARA, CONTRA LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS SUCRE. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 156

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 158

ACLARACIÓN DE SENTENCIA 159

MARÍA DE LOS SANTOS FUENTES DE VEGA, FÉLIX AMABLE PONCE Y COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA QUE AQUELLA LE SIGUE A ESTOS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 159

APELACIONES 159

APELACIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL CASTILLO SANJUR CONTRA EL AUTO DEL 14 DE JUNIO DE 1996 DICTADO POR EL REGISTRO PÚBLICO, RELACIONADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA N° 3176 DE 10 DE ABRIL DE 1996, INGRESADA AL REGISTRO PÚBLICO BAJO EL ASIENTO 9511 DEL TOMO 245 DEL DIARIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 159

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO 161

SEABOARD MARINE LTD. Y SEA CARGO, S. A. APELA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 1996 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SEABOARD MARINE LTD. Y SEA CARGO, S. A. A CÍA. NACIONAL DE SEGUROS, S. A. AHORA ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. (POR FUSIÓN). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A.FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 161

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 163

INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE FINACAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 163

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA BOQUETEÑA, R. L. Y RODERICK TEDMAN Y CONSERVAS DE ANTAÑO, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA BOQUETEÑA, R. L. LE SIGUE A

RODERICK TEDMAN Y CONSERVAS DE ANTAÑO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 168

ROSA MATILDE DELGADO VDA. DE ARZE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE CÉSAR AUGUSTO ACHÓN BALLESTEROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 170

EDUARDO AUGUSTO VIZCARRA SILVA Y JUANA ADELA CONDE MENDOZA DE VIZCARRA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A EDGAR HUMBERTO TEJADA KONG. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 178

ENERSA MARÍA RÍOS SAMANIEGO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A MANUEL ANTONIO SAMANIEGO NIETO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 180

CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE PANAMÁ RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE REVOCATORIA DE SECUESTRO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROMOVIDO POR PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. CONTRA CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 181

ISABEL SÁNCHEZ RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE OPOSICIÓN A TÍTULO QUE LE SIGUE A INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 182

IMPEDIMENTO 189

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL DOCTOR CALIXTO MALCOLM, JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE PESQUERA TABOGUILLA, S. A. LE SIGUE A ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 189

INCIDENTE 189

INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE PÉREZ-CARRERA & CO. CON AUDIENCIA DEL HONORABLE JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO INTERPUESTO POR GERMÁN BANGUERA CONTRA MOTONAVE NABAJOT. MAGISTARDO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 189

RECURSO DE REVISIÓN 190

WASHINGTON MAURILLO MORA RUIZ, ACTUANDO EN SU CONDICIÓN DE TESORERO Y REPRESENTANTE LEGAL, Y EN AUSENCIA DEL TITULAR, DE LA SOCIEDAD INDUSTRO-COMERCIAL INTERAMERICANA, S. A. (SICOISA) INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INTERPUESTO POR SOCIEDAD INDUSTRI-COMERCIAL INTERAMERICANA, S. A. (SECOISA) CONTRA JERRY LEE HAMAGIS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 190

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 192

ACUSACIÓN PARTICULAR 193

ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR EL LICENCIADO DAVID G. MEJÍA C., EN REPRESENTACIÓN DE OSCAR DE JESÚS OCAMPO CEBALLOS, CONTRA LUIS FERNANDO OQUENDO BAENA, POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA.

MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 193

AUTO APELADO 194

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE CONCEDE FIANZA DE EXCARCELACIÓN EN FAVOR DE OMAR LORENZO TRUJILLO, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, COMETIDO EN PERJUICIO DE ANANÍAS PRETTEL SEGURA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 194

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 196

JUICIO PENAL SEGUIDO A LUIS ARNULFO CONTRERAS VEITÍA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, COMETIDO EN PERJUICIO DE JUAN NAPOLEÓN RODRÍGUEZ JUAN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 196

AUTO CONSULTADO 206

SUMARIAS SEGUIDAS A MIGUEL CRUZ MARTÍNEZ MENDIETA Y EDUAR JAVIER AGUDELO MORÁN, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE NILSON JAIRO RAMÍREZ CÓRDOBA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 206

AUTO DE SOBRESEIMIENTO APELADO 208

APELACIÓN DE AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A RICARDO ROGELIO TORRES DEER, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE HAROLD GEORGE LAWTOS MARSDEN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 208

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 210

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A LUIS ENRIQUE CALVO VARGAS Y JOSÉ DE LOS SANTOS CÁRDENAS VARGAS, SINDICADOS POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DE ZOILO VARGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 210

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE A MOSTAFA NOR ALDEN O LUIGI MANDIS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 212

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARCOS EMILIANO UBARTE DUCASA SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 213

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A LORENZO SILVANO PERRY CARRASQUILLA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 214

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FERNANDO JAÉN DE LEÓN, POR DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS, EN DETRIMENTO DE CAVA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 215

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A LUIS ALBERTO ZALDÍVAR, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y SEIS (1996). 217

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FERNANDO JAÉN DE LEÓN, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 218

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A NIVALDO MADRIÑÁN APONTE, FELIPE CAMARGO AMAYA, RUBÉN AURELIO BULGIN ROBINSON Y ALAÍN ARCENIO ODA, POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE CARLOS RODOLFO WORREL BEST. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 219

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL INCIDENTE DE CONTROVERSIA, INTERPUESTO POR RAÚL CASTILLO SANJUR, CONTRA EL FISCAL SEXTO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, EN EL PROCESO PENAL SEGUIDO A DOLLY BTESH DE ABADI Y OTROS POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 223

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MEDINA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 225

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A NICOLÁS MORENO MOSQUERA Y LUIS ARTURO G., SINDICADOS POR EL DELITO DE HURTO PECUARIO, EN PERJUICIO DE LEONARDO DE JESÚS PORRAS SULUAGA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 226

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A GEOFREY S. LINDELL, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO Y LESIONES PERSONALES CULPOSAS, COMETIDO EN PERJUICIO DE DAMARIS DE LINDELL, NIDIA DE BETHANCOURT, KIMARA FAMANÍAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 227

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SILVINTON BARKER BAILEY, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 228

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LERYS CANO CEDEÑO, POR DELITO DE LESIONES PERSONALES EN DETRIMENTO DE FILEMÓN MORALES. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 230

LUCINO MIRANDA MORENO RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FELIPE CAMARGO, NIVALDO MADRIÑAN APONTE, LUIS ANTONIO CÓRDOBA MORALES, LUCINO MIRANDA MORENO, ARCENIO ODA ALAIN, ALFONSO MADRID Y OTROS, POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL, EN PERJUICIO DE EDUARDO SANCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. 231

INCIDENTE 232

APELACIÓN DEL INCIDENTE DE CONTROVERSIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A OMAR ALCIDES MEJÍA MUÑOZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JAIME RÍOS CASE. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 232

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 233

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ABELARDO ANTONIO

HERRERA, CONTRA LA RESOLUCIÓN CALENDADA 12 DE NOVIEMBRE DE 1996, DENTRO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, EN EL PROCESO PENAL SEGUIDO A JORGE ALBERTO MOSQUERA MURILLO, SINDICADO POR DELITO DE PECULADO, EN DETRIMENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 233

RECURSO DE HECHO 235

RECURSO DE HECHO, CONTRA PROVIDENCIA DE 10 DE OCTUBRE DE 1996, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, POR MEDIO DE LA CUAL SE DENIEGA EL AUTO DE 7 DE OCTUBRE DE 1996, MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZA DE PLANO EL INCIDENTE DE NULIDAD. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 235

RECURSO DE REVISIÓN 237

RECURSO DE REVISIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A IVÁN DE LOS REYES GODOY, POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 237

LA DEFENSA TÉCNICA DE VIRGILIO HERNÁNDEZ FLORES, INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENA A SU REPRESENTADO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL, COMETIDO EN PERJUICIO DE LA MENOR EDILSA AVECILLA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 238

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ELIZABETH ESPAÑA GIRALDO, SINDICADA POR DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 239

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CECILIO AUSTIN JACKSON, SINDICADO POR EL DELITO DE POSESIÓN AGRAVADA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 240

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A HÉCTOR ROLANDO PÉREZ, CONDENADO POR EL DELITO DE HURTO AGRAVADO, COMETIDO EN PERJUICIO DE INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 241

SENTENCIA APELADA 242

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENA A NIVALDO DE GRACIA SANJUR A LA PENA DE 9 AÑOS DE PRISIÓN, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE COMETIDO EN PERJUICIO DE EUDES ARNOLDO ARJONA JURADO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 242

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A DAMIÁN DE LEÓN BERROA, POR DELITO DE HOMICIDIO, EN PERJUICIO DE CARLOS ALBERTO IBARRA AMORES. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 243

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JUAN BARRÍA JIMÉNEZ Y CÉSAR AUGUSTO ROLDÁN DE GRACIA, POR DELITOS DE HOMICIDIO Y PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LIBERTAD INDIVIDUAL, EN PERJUICIO DE RAYMOND MONROE DRAGSETH Y FERNANDO BRATHWAITE. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 245

PROCESO SEGUIDO CONTRA BENIGNO ORTÍZ RÍOS SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE VÍCTOR SAMUEL PÉREZ CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 249

TRIBUNAL DE INSTANCIA 250

SOLICITUD FORMULADA POR FRANCISCO CÓRDOBA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CINCO (5) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 250

QUEJA PRESENTADA CONTRA LA LICENCIADA ELVIA BATISTA, MAGISTRADA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ROBERTO LÓPEZ VILLARREAL Y MELQUISEDEC DE LEÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 251

DENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO JUAN FAUSTINO QUINTO ÁLVAREZ CONTRA JORGE A. PLATA M. Y JOSÉ LUIS NAVARRO GUEVARA, POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 252

DENUNCIA PRESENTADA CONTRA HAYDEE G. PAOLO, CARLOS DE ICAZA, MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, Y CONTRA ALCIBÍADES RODRÍGUEZ, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 253

DENUNCIA PRESENTADA POR FELICIA RIVERA DE ARAOLAZA CONTRA EL INGENIERO HÉCTOR MONTEMAYOR, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y LOS MIEMBROS DEL GRAN JURADO DE ELECCIONES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 255

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 257

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 258

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. DONALDO SOUSA GUEVARA EN REPRESENTACIÓN DE JAIME JAVIER OLIVE, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 889-96 D-G- DE 18 DE JUNIO DE 1996 DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 258

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALONSO ORTIZ DE ZEVALLOS, EN REPRESENTACIÓN DE CLÍNICA RADEL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-490 DE 12 DE FEBRERO DE 1996,EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 259

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR OLMEDO SANJUR G., EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE M. ILLUECA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO N° 5 DE 10 DE ABRIL, DICTADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 260

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EMILIO DE LEÓN LOKEE, EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS IGLESIAS, PARA QUE

SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 028 DE 31 DE MAYO DE 1995, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 261

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. RIGOBERTO A. VERGARA, EN REPRESENTACIÓN DE BLANCA PANAMÁ BRIONES DE PAREDES PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 03-95 D. G. DE 2 DE JUNIO DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 267

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO Y YOUNG EN REPRESENTACIÓN DE LLANTAGANGAS DE PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 87-96 DE 29 DE MAYO DE 1986, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS, EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 276

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. SOFÍA PUELLO DE IGLESIAS, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA POSITIVA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 25-95 DE 14 DE FEBRERO DE 1995, DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 278

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ECUATORIANA DE AVIACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 1994, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 284

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO RAMÍREZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN ALEXIS RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL OFICIO DE 15 DE ENERO DE 1996, SUSCRITO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL, LA RESOLUCIÓN N° 169 DE 28 DE MARZO DE 1996 DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL Y LA RESOLUCIÓN N° 180 DE 29 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ELOY ALFARO DE ALBA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 287

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. VASCO TORRES DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LAS NOTAS N° VIP-638-95 DE 23 DE JUNIO DE 1995 Y N° VIP-805-95 DE 24 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDAS POR EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS, BECAS Y SABÁTICAS, APROBADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN SU REUNIÓN N° 39-95 DE 30 DE AGOSTO DE 1995, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 287

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. JAIME J. JOVANÉ, EN REPRESENTACIÓN DE MARVIODAL, S. A. Y LUJÁN, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 201-589 DE 25 DE MARZO DE 1994, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN

OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 294

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ C., EN REPRESENTACIÓN DE EUSEBIO YEPES M. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S/N DE 13 DE AGOSTO DE 1996, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS MELCHOR LASSO DE LA VEGA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 295

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ MARÍA LEZCANO, EN REPRESENTACIÓN DE OLGA MARÍA SANTOS DE EVANS, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° 2220/762/96 DE 14 DE JUNIO DE 1996, EXPEDIDA POR EL VICE-MINISTRO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 297

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ROSCAM, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 35-95 F. C. DE 13 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 1 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 298

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS, EN REPRESENTACIÓN DE RIGOBERTO ANTONIO SOSA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 96-1592 DE 17 DE ABRIL DE 1996, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 298

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR MANUEL E. BERMÚDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE CONFECCIONES INTERNACIONALES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 12-96-JD DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 1996, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 299

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE PROMED INTERNATIONAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1081-96-D. G. DE 10 DE JULIO DE 1996, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 300

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ISTHMIAN CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 301

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO NELSON ROVETTO, EN REPRESENTACIÓN DE CARMELO ISAAC GARCÍA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL MEMORÁNDUM N° 237-95D-ADM DE 20 DE FEBRERO DE 1995, SUSCRITO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

. 308

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ MENA DE BARRÍA DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE CHIRIQUÍ LAND COMPANY, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 264-92 DE 13 DE OCTUBRE DE 1992, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRAD0 PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 309

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO ANTONIO CANDANEDO, EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE ELIZONDRO AGUILAR, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DRP N° 466-96 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 316

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE TAMARA RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, PROFERIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 319

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MIRIAM AMORES CORREA, EN REPRESENTACIÓN DE ERIC A. RAMÍREZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL DECRETO DE PERSONAL N° 171, DEL 14 DE JUNIO DE 1996, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 319

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR HUMBERTO RICORD, EN REPRESENTACIÓN DE ABRAHAM BELL E., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° FAP-D 467 DE 13 DE JUNIO DE 1996, EXPEDIDA POR LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y LA RESOLUCIÓN N° 96-2312 DE 24 DE JUNIO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECTORA DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 320

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO UBALDINO RODRÍGUEZ BOTELLO, EN REPRESENTACIÓN DE DOMINGO ANTONIO BONVINI YANIS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL DECRETO GERENCIAL N° 17 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1996, EXPEDIDO POR EL GERENTE DE LA SUCURSAL LAS AMÉRICAS DE LA CAJA DE AHORROS, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 321

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 322

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE JAIME NELSON CARRANZA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 731 DE 22 DE AGOSTO DE 1990, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 322

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. EMILIO EFFIO, EN REPRESENTACIÓN DE CONTADORA RESORT INC., S. A., PARA QUE SE

DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 5°, 6°, 11°, Y 12° DEL ACUERDO N° 6 DE 2 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BALBOA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 324

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA LUQUE, CORONELL Y LAM, EN REPRESENTACIÓN DE UTRACOLPA, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS RESUELTOS N° 397 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1993 Y EL N° 153 DE 31 DE MAYO DE 1996, AMBOS DICTADOS POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 331

IMPEDIMENTO 332

CALIFICACIÓN DE IMPEDIENTO DE LA MAGISTRADA KALIOPE TSIMOGIANIS, DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL PROCESO EN EL CUAL SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EL SEÑOR AVELINO SAMANIEGO, POR IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LAS RECAUDACIONES FISCALES EN EL MATADERO DE AZUERO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 332

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL BUFETE VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DE LATINO AMERICANA DE REASEGUROS, S. A., (LARSA) LATIN AMERICAN REINSURANCE, COMPANY, INC., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° CNR-17 DE 7 DE JULIO DE 1993, EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE REASEGUROS DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE. MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 333

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO OSCAR VARGAS VELARDE, DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ANTECEDENTES N° 12-01-95-DAG-DEAE, QUE GUARDA RELACIÓN CON LOS FONDOS ASIGNADOS AL EX LEGISLADOR DÁMASO LOMBARDO DE LA COMARCA DE SAN BLAS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 334

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA,SOLICITUD DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE PLUTARCO ANTONIO CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4-1 DE 20 DE FEBRERO DE 1992, PROFERIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, Y EL CONTRATO CELEBRADO POR EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL Y BERASVAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 336

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO LUIS CERVANTES DÍAZ, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA & DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA FAMILIAR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 6337-94 SUB-D. G., DE 30 DE MAYO DE 1994, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 337

JURISDICCIÓN COACTIVA 337

EXCEPCIÓN DE NOVACIÓN Y DE ILEGITIMIDAD DE UNO DE LOS DEMANDADOS INTERPUESTO POR EL LCDO. ISAÍAS BARRERA EN REPRESENTACIÓN DE JUSTINIO CEDEÑO PÉREZ DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A JUSTINO CEDEÑO, LECHERÍA LA VIRGINIA, S. A. Y JOSÉ RAFAEL SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 338

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ DOMINGO FAJARDO, EN REPRESENTACIÓN DE CHATARRA SUDAMERICANA, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO LE SIGUE A CHATARRA AMÉRICA CENTRAL, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 340

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO A. DE YCAZA DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE GARRIDO & GARRIDO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO, QUE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, LE SIGUE A LA EMPRESA AEROVÍAS LAS AMÉRICAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 342

TERCERÍA EXCLUYENTE INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA CORTÉS EN REPRESENTACIÓN DE OMICRON PANAMÁ CORPORATION, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE AERONÁUTICA CIVIL LE SIGUE A AEROVÍAS LAS AMÉRICAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 344

EXCEPCIÓN DE PAGO E INEXISTENCIA DE MOROSIDAD POR ERROR ARITMÉTICO, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS EN REPRESENTACIÓN DE ROSA ELVIRA SERRACÍN, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 346

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL PONCE GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE BENJAMÍN RÍOS, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, SUCURSAL DE VOLCÁN, A WALTER SANTAMARÍA E ISABEL MIRANDA O ISABEL SANTAMARÍA. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 347

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDRULFO ESPINALES MIRANDA, EN REPRESENTACIÓN DE NELSON VARGAS MARTÍNEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 350

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ EN REPRESENTACIÓN PROPIA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 352

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA LIDIA V. MEDINA DE AIZPURÚA, EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO DE ISTMO, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, LE SIGUE A TRANSPORTACIONES DE TIERRAS Y DERIVADOS, S. A., TRACTORES DEL ATLÁNTICO, S. A. Y MANUEL ESPINO. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 353

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 355

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO SIXTO ÁBREGO CAMAÑO, EN REPRESENTACIÓN DE EPIFANIO LINARES TORRES, CONTRA LA SENTENCIA DE 1° DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EPIFANIO LINARES TORRES - VS- INDUSTRIA NACIONAL DE PLÁSTICO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 355

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JUAN B. ACOSTA, EN

REPRESENTACIÓN DE VÍCTOR SÁNCHEZ Y OTROS, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 30 DE MAYO DE 1996 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: VÍCTOR SÁNCHEZ Y OTROS VS DÍAZ Y GUARDIA, S. A. Y/O D. G. ARQUITECTOS E INGENIEROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 359

TRIBUNAL DE INSTANCIA 365

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA LANDERO, MORALES & CHIARI EN REPRESENTACIÓN DE MARYLIN ANGUIZOLA LASTRA Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 201-377 DE 26 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS. MAGISTRADO PONENTE: ELOY ALFARO DE ALBA. PANAMÁ, VIENTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 365

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 366

CARTA ROGATORIA 367

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA ISLA CAIMÁN, EN LA CAUSA N° 35 DE 1996, ENTRE CHILE HOLDINGS (CAYMÁN) LIMITED CONTRA SGO. DE CHILE HOTEL CORPORATION, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 367

CARTA ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA ISLA CAIMÁN EN LA CAUSA N° 36 DE 1996 CARATULADA ARGENTINE HOLDINGS (CAYMÁN) LIMITED (PRESUNTO DEMANDANTE) CONTRA BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION, S. A. Y OTROS (PRESUNTOS DEMANDADOS). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 368

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA ISLA CAIMÁN EN LA CAUSA N° 36 DE 1996, CARATULADO ARGENTINE HOLDINGS (CAYMÁN) LIMITED (PRESUNTO DEMANDADOS) CONTRA RHONE DEVELOPMENTS, S. A. Y OTROS (PRESUNTOS DEMANDADOS). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 370

COMISIÓN ROGATORIA S/N LIBRADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, VENEZUELA DENTRO DEL PROCESO DE OFERTA REAL SEGUIDO CONTRA LA SOCIEDAD MERCANTIL MITSUBISHI INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 372

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 374

RICARDO MARTÍNEZ ROBLES, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO PROFERIDA POR LA CORTE DEL CIRCUITO DEL 11° CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE DADE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, CON FECHA 24 DE AGOSTO DE 1995, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA A LA SEÑORA MARTA MARÍA PÉREZ DE CORCHO DE LEÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 374

ALEX DARÍO VALDÉS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR LA CORTE SUPREMA DE CALIFORNIA, CONDADO DE SANTA CLARA, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN VIRTUD DE LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA A LA SEÑORA ANA MITZILA REYES VALDÉS. MAGISTRADO RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 375

MELISSA BERTUCCI DE JORDAN, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DEL ESTADO DE LOUISIANA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DENTRO DEL PROCESO DE GUARDA, CUSTODIA Y REGLAMENTACIÓN DE VISITAS DE LOS MENORES WILL MARTIN JORDAN BERTUCCI Y DE

JOHN PAUL JORDAN BERTUCCI. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 377

VILMA FARIN DE LONGMAIRE A TRAVÉS DE SU APODERADO ESPECIAL EL LICENCIADO EDUARDO VILLAREAL CISNEROS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE SUPREMA DEL ESTADO DE NUEVA YORK, CONDADO DE BRONX, FECHADO 23 DE MAYO DE 1988. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 378

EXHORTOS 380

EXHORTO S/N DE 10 DE JULIO DE 1996, LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 8 SECRETARÍA N° 15 (JUEZ DR. JORGE A. URSO), DE LA CAPITAL FEDERAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, DENTRO DE LA CAUSA N° 1577 CARATULADA "MONNER SANS, RICARDO S/DENUNCIA". MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 380

EXHORTO S/N DEL 7 DE FEBRERO DE 1995 LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 35, SECRETARÍA ÚNICA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, EN LOS AUTOS CARATULADOS "ROMERO, BASILIO VÍCTOR CONTRA TECHINT CÍA. TÉCNICA INTERNACIONAL, S. A. C. I., SOBRE S/DAÑOS Y PERJUICIOS", EXPEDIENTE N° 94.962/92. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 382

RECURSO DE APELACIÓN 383

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR JUDITH ESTER COSSÚ DE HERRERA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 01-96 DE FECHA VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996), EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO FAMILIA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 383

TRIBUNAL DE INSTANCIA 385

FULVIA DE SIMMONS INTERPONE DENUNCIA CONTRA EL LICENCIADO ARIEL CARRERA PITTÍ POR FALTA A LA ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO. AGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 385

PROCESO DISCIPLINARIO EN CONTRA DEL FUNCIONARIO ROBERTO ROMERO, PRESENTADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS EN RELACIÓN A AUSENCIAS A SU PUESTO DE LABORES SIN AUTORIZACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 389

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

DICIEMBRE 1996

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ANALISA MORENO DE AROSEMENA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MOTORES INTERNACIONALES, S. A. (MOINSA) CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 18 DE OCTUBRE DE 1996, DICTADO POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada ANALISA MORENO DE AROSEMENA, actuando a nombre y en representación de la sociedad MOTORES INTERNACIONALES, S. A. ha promovido proceso de amparo de garantías constitucionales contra la orden del JUEZ MARÍTIMO, de 18 de octubre de 1996, que consiste en la orden de llevar a cabo aseguramiento de pruebas de los libros y demás documentos, entre otros, de la sociedad en referencia, otorgado por los miembros mayoritarios de la Junta Directiva de la expresada sociedad, por conducto de los directores JOSÉ DE LA ROSA RAMOS, AMELIA RAMOS DE DOBRAS y CARLOS CHULJAK, como consta en el certificado del Registro Público, visible a foja 3 del expediente contentivo del proceso de amparo.

La acción constitucional se enmarca dentro de una petición extraprocesal de aseguramiento de pruebas, como ya ha quedado señalado, promovido por la sociedad COLDRAGADOS, S. A., y cuyo objeto son documentos de las empresas MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A. y MOTORES INTERNACIONALES, y de los cuales existe constancia o relación en:

> "OBJETOS Y EFECTOS SOBRE LOS CUALES HABRÁ DE RECAER LA DILIGENCIA EXHIBITORIA.
>
> Honorable Juez del Tribunal Marítimo, pedimos que la diligencia exhibitoria se determine y efectúe sobre los siguientes objetos y efectos:
>
> PRIMERO: Sobre todos los libros y registros contables de la empresa MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A., y MOTORES INTERNACIONALES, S. A. incluido libro mayor y balance, diario, documentaciones relativas a la contabilidad y declaraciones de renta.
>
> SEGUNDO: Sobre todos los contratos y demás instrumentos legales que guarden relación con la relación bilateral mantenida entre MOTORES INTERNACIONALES, S. A. y/o MANZANILLO INTERNACIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A., por una parte, y por la otra, COLDRAGADOS PANAMÁ, S. A.
>
> TERCERO: Sobre los documentos contables que registren los pagos hechos a COLDRAGADOS PANAMÁ, S. A. en virtud del contrato suscrito entre nuestra patrocinada y las empresas a demandar.
>
> CUARTO: La exhibición del proyecto de contrato o contrato original, que recoja la compra y venta de las empresas MOTORES INTERNACIONALES, S. A. y MANZANILLO INTERNACIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A. y a fin de determinar, de modo claro, cuál es el monto o precio real de venta, qué es lo que se vende, y qué determinación se dispone en función de los acreedores de las empresas a vender, qué es lo que efectivamente se vende, etc.
>
> QUINTO: Determinar, mediante la exhibición, los originales de las cartas de cobro de la suma de VEINTICINCO MILLONES DE DÓLARES (U $25,000,000.00) que COLDRAGADOS PANAMÁ, S. A. hace a las presuntas demandadas.
>
> SEXTO: Determinar en las oficinas administrativas y demás dependencia del Puerto de Manzanillo, en Colón, si los trabajos de dragados, respecto a la Primera Fase del contrato celebrado entre

COLDRAGADOS PANAMÁ, S. A. y los presuntos demandados, efectivamente fueron determinados y de conformidad al tenor contractual". (Fs. 9, 10 y 11).

La demanda de amparo contiene, como hechos, los que se transcriben:

"PRIMERO: Mediante escrito fechado 15 de octubre de 1996, el licenciado Silvio Guerra Morales, actuando como abogado sustituto de COLDRAGADOS PANAMÁ, S. A. interpuso solicitud de Aseguramiento de Pruebas en contra de las compañías MOTORES INTERNACIONALES, S. A. y MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A.

SEGUNDO: Con base en la solicitud antes mencionada, el Juez del Tribunal Marítimo de Panamá emitió auto de 18 de octubre de 1996 y decretó medida de Aseguramiento de Pruebas de Acción Exhibitoria en contra de nuestros representados.

TERCERO: El día 18 de octubre de 1996 tomaron posesión en la empresa MOTORES INTERNACIONALES, S. A. los peritos nombrados por el tribunal para llevar a cabo la diligencia, licenciados Luis Chen, Gustavo Gordon Lay, y la licenciada Marta Lucía Cañola Betancur. No obstante, los peritos no han tomado a la fecha posesión del cargo en la empresa MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A. Así mismo, la empresa MOTORES INTERNACIONALES, S. A. no ha exhibido todavía el original del libro de registro de acciones, ni las acciones de la compañía, por razones de orden práctico, y por considerar que dicha orden es violatoria de sus derechos individuales consagrados en la Constitución Nacional de Panamá. De lo anterior se colige que el presente recurso de Amparo de Garantías Constitucionales pretende la reparación de un perjuicio actual, no pasado u ocurrido mucho tiempo atrás, tal como ha expresado el pleno de la Corte en sentencia de 20 de julio de 1992, y cuyo criterio ha sido mantenido en sentencias de 26 de noviembre de 1992, 15 de marzo de 1993, 12 de mayo de 1993, 25 de junio de 1993, 14 de julio de 1993, 27 de agosto de 1993, 30 de septiembre de 1993, 15 de abril de 1994 y 13 de enero de 1994; consistiendo el perjuicio actual en la lesión que sufrirán nuestros poderdantes en su derecho constitucional a la privacidad de la correspondencia y demás documentos privados, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, si la orden recurrida fuese puesta en práctica.

CUARTO: Finalmente cabe señalar que el presente recurso de Amparo de Garantías Constitucionales se presenta luego de agotados todos los recursos jurisdiccionales que caben contra el auto recurrido. A tal efecto, los licenciados Luis Ramón Fábrega Sánchez y Rolando García-Maritano se apersonaron al Tribunal Marítimo de Panamá el día 22 de octubre de 1996 para interponer recurso de reconsideración contra el auto de 18 de octubre de 1996 proferido por el Tribunal Marítimo. Tal y como consta en las declaraciones juradas de los antes mencionados licenciados Fábrega Sánchez y García-Maritano las cuales se adjuntan como prueba N° 2 y N° 3 al presente recurso, tanto el secretario del Tribunal, licenciado Aldo Burgos, como el mismo Juez Marítimo, licenciado Francisco Mata, se negaron a recibir el escrito contentivo del recurso de reconsideración antes mencionado, alegando que el auto en mención era irrecurrible (artículo 804 del Código Judicial de Panamá). Aceptando el criterio del Tribunal Marítimo como válido, se ha agotado la vía jurisdiccional para recurrir el auto de 18 de octubre de 1996. (Fs. 26, 27 y 28).

La orden impugnada mediante la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales viola, en apreciación del accionante, la garantía constitucional contenida en el artículo 29, que, como se sabe, consagra el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. La censura al artículo constitucional la explica la demandante en la forma que se transcribe:

"Consideramos que la disposición constitucional infringida por el

auto de 18 de octubre de 1996 es el artículo 29 de la Carta Magna, el cual consagra el consabido principio la inviolabilidad de los documentos privados.

Dicho artículo es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 29: La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser ocupados o examinados sino por disposición de autoridad competente, para fines específicos y mediante formalidades legales. En todo caso, se guardará reserva sobre los asuntos ajenos al objeto de la ocupación o del examen. Igualmente, las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas. El registro de papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar".

Tal y como ha manifestado la Corte Suprema de Justicia en fallo de 16 de febrero de 1996, "**la disposición transcrita** (artículo 29 de la Constitución) **consagra como regla general la inviolabilidad de documentos privados y establece al respecto una excepción: el examen de tales documentos puede tener lugar con el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) que lo realice autoridad competente, b) que el examen tenga fines específicos, c) que se respeten las formalidades que establece la ley**".

El principio garantía fundamental a la inviolabilidad de documentos contenido en el artículo 29 de la Carta Magna, también está plasmado en el artículo 89 del Código de Comercio, el cual es del tenor siguiente:

"Tampoco podrá decretarse la comunicación, entrega o reconocimiento general de libros, correspondencia y demás papeles y documentos de comerciantes o corredores, excepto en los casos de sucesión o quiebra, o cuando proceda la liquidación.

Fuera de estos casos, **sólo podrá ordenarse la exhibición de determinados asientos de los libros y documentos respectivos, a instancia de parte legítima** o de oficio, cuando la persona a quien pertenezcan, tenga interés o responsabilidad en el asunto o cuestión que se ventila.

El reconocimiento se hará en el escritorio del comerciante o corredor, a su presencia o a la de un comisionado suyo, y se limitará a tomar copia de los asientos o papeles que tengan relación con el asunto ventilado.

Si los libros se hallaren fuera de la residencia del juez que ordene la exhibición, se verificará ésta en el lugar en donde existan dichos libros, sin exigirse en ningún caso su trasladación al lugar del juicio.

Cuando un comerciante haya llevado libros auxiliares, puede ser compelido a su exhibición en la misma forma y en los mismos casos antes señalados. Ninguna autoridad está facultada para obligar al comerciante a suministrar copias o reproducciones de sus libros (o parte de ellos), correspondencia o demás documentos en su poder. Cuando procediere obtener algún dato al respecto, se decretará la acción exhibitoria correspondiente. El comerciante que suministre copia o reproducciones de sus libros (o parta de ellos), correspondencia o demás documentos en su poder. Cuando procediere obtener algún dato al respecto, se decretará la acción exhibitoria correspondiente. El comerciante que suministrare copia o reproducciones del contenido de sus libros, correspondencia u otros documentos para ser usada en litigio en el exterior, en acatamiento a orden de autoridad que no sea de la República de Panamá, será

penado con multa no mayor de cien balboas (B/.100.00)".

Leída la norma del Código de Comercio anteriormente transcrita junto con el principio constitucional establecido en el artículo 29 de la Carta Magna, se deduce que para que proceda la exhibición de documentos y correspondencia de los comerciantes deben darse los siguientes requisitos:

a) que la exhibición se realice por orden de autoridad competente;
b) que el examen tenga fines específicos;
c) que se respeten las formalidades que establece la ley; entre ellas, que la exhibición se solicite en un proceso de quiebra o sucesión, o **que se solicite a instancia de parte legítima** o de oficio, cuando la persona a quien pertenezcan los documentos tenga interés o responsabilidad en el asunto o cuestión que se ventila.

Por su parte, el artículo 805 del Código Judicial de Panamá, el cual se encuentra en la sección 1era. (Diligencia Exhibitoria) del Capítulo II (Aseguramiento de Pruebas) del Título VII (Pruebas), establece que para los efectos de las limitaciones a que se refiere el artículo 89 del Código de Comercio, se tendrá como **parte legítima** en las diligencias exhibitorias extrajudiciales, a la parte que solicita la medida, siempre que "**exprese en su solicitud cuál es la relación sustancial o el interés jurídico que pretende probar con la diligencia y en qué forma le interesa personalmente**".

La orden de hacer proferida por el Juez Marítimo de Panamá mediante auto de 18 de octubre de 1996, y a través de la cual ordena que se absuelvan las preguntas 9, 12, 13 y 15 del cuestionario adjunto a la solicitud de Aseguramiento de Pruebas presentado por COLDRAGADOS PANAMÁ, S. A. viola el principio a la inviolabilidad de correspondencia de los comerciantes consagrado en el artículo 29 de la Constitución nacional de la siguiente manera:

1. las preguntas 9, 12 y 13 del cuestionario pretende la exhibición de documentos que demuestren quienes son los accionistas de las compañías MOTORES INTERNACIONALES, S. A. y MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A. así como la determinación de cuales son las compañías subsidiarias, sucursales, agencias, representantes o compañías en general que tengan alguna relación jurídica con MOTORES INTERNACIONALES, S. A.

En el escrito de petición de Aseguramiento de Pruebas presentado por el licenciado Silvio Guerra, y el cual está fechado 15 de octubre de 1996, el licenciado Guerra aduce en representación de COLDRAGADOS PANAMÁ, S. A. como relación sustancial o el interés jurídico que se pretende probar con la diligencia, la existencia de un contrato de dragado que su representada "**realizó en el Puerto de Manzanillo, propiedad de la empresa MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A., anexa e indisolublemente ligada, igualmente, a la empresa MOTORES INTERNACIONALES, S. A.**"

No menciona, sin embargo, el licenciado Guerra en ninguna parte de su escrito cuál es la relación sustancial o interés jurídico que pretende probar mediante la exhibición de documentos que demuestren quienes son los accionistas de las compañías MOTORES INTERNACIONALES, S. A., y MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A., o cuales son sus subsidiarias, agentes, representantes o compañías vinculadas a las mismas. Es un principio consabido en nuestro sistema jurídico que los accionistas de las sociedades no responden por las deudas de ésta (artículo 251 del Código de Comercio y 39 de la ley 32 de 1927). También ha dicho la Corte Suprema que el velo corporativo se levantará únicamente en circunstancias excepcionales, y únicamente por la comisión de actos ilícitos (fallo de la Corte de 16 de febrero de 1996 y de 29 de

enero de 1991).

Por lo tanto, al no haber expresado el licenciado Guerra en su escrito cuál es la relación substancial o el interés jurídico existente entre las compañías jurídicamente vinculadas a MOTORES INTERNACIONALES, S. A. y MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A. y al haber motivado el Juez del Tribunal Marítimo el auto de 18 de octubre de 1996 con base en la petición del licenciado Guerra, violó el Juez Marítimo mediante la orden de hacer recurrida en el presente Amparo de Garantías el principio consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, al no haberse seguido las formalidades que establece la ley en el artículo 89 de Código de Comercio, y 805 del Código Judicial.

2. Igualmente, adujo el licenciado Guerra en su escrito de solicitud de Medida de Aseguramiento de Pruebas que el interés personal de COLDRAGADOS PANAMÁ, S. A. para solicitar la medida, consiste en **"el derecho que le asiste a cobrar la suma de VEINTICINCO MILLONES DE DÓLARES (US $25,000.000.00) de las empresas a demandar"**. No menciona por ninguna parte de su escrito el licenciado Guerra cuál es el interés personal de la empresa COLDRAGADOS PANAMÁ, S. A. para con los accionistas o agentes, representantes, subsidiarias o compañías jurídicamente vinculadas a MOTORES INTERNACIONALES, S. A. y MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A.

Por lo tanto, al no haber expresado el licenciado Guerra en su escrito cuál es el interés personal existente entre la compañía COLDRAGADOS PANAMÁ, S. A. y los accionistas o compañías jurídicamente vinculadas a MOTORES INTERNACIONALES, S. A. y MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A. y al haber motivado el Juez del Tribunal Marítimo el auto de 18 de octubre de 1996 con base en la petición del licenciado Guerra, violó el Juez Marítimo mediante la orden de hacer recurrida en el presente Amparo de Garantías el principio consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, al no haberse seguido las formalidades que establece la ley en el artículo 89 de Código de Comercio, y 805 del Código Judicial.

3. Finalmente, el Juez Marítimo ordenó en su auto de 18 de octubre de 1996 que se absolviera la pregunta 15 del cuestionario adjunto a la solicitud de Aseguramiento de Pruebas presentada por COLDRAGADOS, S. A. y en la cual se solicita a los peritos que indiquen **"cualquier otra situación o asunto que se relacione con los puntos anteriores y dentro del margen ampliamente liberal que rige la prueba pericial"**.

Como hemos expresado en el presente escrito, la prueba pericial (propiamente diligencia extrajudicial de aseguramiento de pruebas en el caso que nos ocupa) cuando versa sobre libros y documentos de los comerciantes y a de practicarse extrajudicialmente, dista mucho de ser ampliamente liberal. Por el contrario, está limitada por los artículos 89 del Código de Comercio y 805 del Código Judicial.

Por lo tanto, dada la generalidad de la pregunta No.15 del cuestionario adjunto a la solicitud de Aseguramiento de Pruebas solicitada por COLDRAGADOS PANAMÁ, S. A. violó el Juez Marítimo mediante la orden de hacer recurrida en el presente Amparo de Garantías el principio consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, al no haberse seguido las formalidades que establece la ley en el artículo 89 del Código de Comercio, y 805 del Código Judicial. Igualmente violó dicha orden el propio tenor literal del artículo 29 de la Carta Magna, el cual requiere que la orden en cuestión se practique para fines específicos. Tal como ha manifestado la Corte Suprema de Justicia en fallo de 16 de febrero de 1996, cuando el objeto de la diligencia es demasiado amplio o

comprensivo, surge entonces una colisión con lo normado por el artículo 29 de la Carta Fundamental". (Fs. 28 a 31).

El Pleno observa que, ciertamente, el objeto del aseguramiento de pruebas lo constituye una generalidad de documentos de contabilidad, registros contables y documentos contentivos de contratos y misivas relacionados con una supuesta relación contractual, que habrá de ser utilizado, al decir de los peticionarios, en proceso marítimo posterior. La petición está concebida con gran generalidad, pues abarca todos los libros de contabilidad de las dos empresas, así como información relacionada con intereses de terceras personas, accionistas de sociedades, o subsidiarias de las sociedades presumiblemente sujetas a proceso jurisdiccional. Y es precisamente la generalidad en que la petición está enderezada la censura que encuentra constitucionalmente injustificado el Pleno, quien se ha ocupado, sobre el derecho fundamental a la inviolabilidad de la correspondencia y otros documentos, además de la sentencia que se reproduce parcialmente en la demanda de amparo, también en la sentencia de 21 de abril de 1993, en la que tuvo ocasión de pronunciarse, en los términos que se permite este Pleno reproducir:

"...
Conviene tener en cuenta que la necesidad de precisar los puntos sobre los cuales habrá de recaer la acción exhibitoria, no solo viene contemplado en el artículo 89 del Código de Comercio como una garantía que establece la ley en favor del comerciante, sino que esta protección a sus documentos privados en alguna forma y desde más amplias perspectivas tiene su génesis en la inviolabilidad de la correspondencia y de los documentos que pertenezcan a cualquier particular, los cuales sólo pueden ser examinados de conformidad con las limitaciones previstas en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por supuesto que en los casos en que el objeto de la diligencia exhibitoria es un banco, también habría que tener en cuenta el principio de la confidencialidad bancaria que, sin ser de carácter absoluto, exige una clara determinación de la información que se desea obtener, sin caer en las pesquisas o exámenes de carácter general, ya sea sobre la contabilidad bancaria o bien sobre los archivos y documentos del banco o de los particulares que depositan su confianza en la entidad bancaria.

Por otra parte, tratándose como en efecto se trata en este caso, de medidas que se adoptan inoída parte, la desviación de la diligencia exhibitoria hacia propósitos más amplios y abarcadores que los previstos en la ley, constituye una violación de la garantía del debido proceso, que en este caso ampara el comerciante afectado con la medida de exhibición".
(Registro Judicial. Abril de 1993. Fs. 45 y 46).

Como ha señalado este Pleno anteriormente, ha de cumplir esta prueba con un triple orden de requisitos para que prospere, a saber: a) que lo realice la autoridad competente; b) que el examen tenga fines específicos, y no genéricos, como lo constituye un examen generalizado de la contabilidad de otra presunta demandante o demandada; c) que se realice con arreglo a las formalidades legales.

En cuanto respecta a terceras personas o accionistas de sociedades, el registro de acciones constituye información que tutela el derecho a la intimidad de dichas personas, por lo que su admisión debe estar rodeada de condiciones que asegure la tutela de los derechos por los propios interesados, con lo que se hace necesaria la oportuna audiencia de la parte que sea afectada con informaciones que integran el derecho de la intimidad de éstas, dentro de cuyo derecho se encuentra inscrito el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. Este último derecho, por su parte, tiene una rancia tradición en el constitucionalismo panameño, al punto de que la norma, con el contenido esencial que aparece reproducido en el artículo 29, ha sido incorporado a todas las Constituciones que han regido a la sociedad panameña en la Era Republicana, desde sus orígenes, en el Estatuto de 1904 (artículo 28), pasando por la de 1941 (artículo 37), continuando con la de 1946 (artículo 29), la de 1972 (artículo 28) y finalizando en las reformas de 1983, en el artículo 29, que es el artículo que ha sido

censurado por la demandante en esta acción constitucional. Derecho fundamental de tal prosapia, que coincide con el tratamiento que, en los diversos tratados multilaterales de derechos fundamentales, se le ha dispensado, desde la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas de 1948 (artículo 12), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José (artículo 11) y en la propia Declaración de Derechos y Deberes del Hombre (artículo IX), lo que conduce a que los diferentes operadores jurídicos, y en especial los miembros del Órgano Judicial, tengan que mantener una muy profunda cautela sobre la utilización de este mecanismo de aseguramiento probatorio con alcances no individualizados, aunado al hecho de que resulta dudoso que el aseguramiento de pruebas dentro de procesos marítimos futuros, sea conducente con arreglo a su legislación orgánica.

No entra a considerar el Pleno las consideraciones que, sobre el ejercicio del derecho procesal relativo al aseguramiento de pruebas, hacen los amparistas, ni al señalamiento del interés sustancial que tienen, como sustento para su petición, toda vez que la discusión sobre los aspectos de estricta legalidad y sobre la oportunidad de la petición, así como el contenido de la misma, es algo que carece de rango constitucional, pudiendo ser, en la oportunidad procesal correspondiente, discutida en los procesos jurisdiccionales ordinarios en los cuales se pretenda practicar o hacer uso de la prueba recabada. Al carecer, por lo tanto, de sustancia constitucional las formulaciones que realiza la amparista en apoyo o sustento a su demanda de amparo de garantías constitucionales, dado que la censura que le formula se desenvuelve, con ser importante, en el terreno de la mera legalidad, cuestionamiento que no es idóneo por la vía de la acción constitucional que ha intentado la amparista.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el recurso de amparo de garantías constitucionales interpuesto por la licenciada ANALISA MORENO DE AROSEMENA, en nombre y representación de MOTORES INTERNACIONALES, S. A. (MOINSA) y, en consecuencia, REVOCA la orden expedida por el JUEZ MARÍTIMO DE PANAMÁ, contenida en la resolución de 18 de octubre de 1996.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

La generalidad del examen de los documentos contables, registros y documentos contentivos de contratos y misivas vinculadas con la supuesta relación contractual, no es tal, porque lo que determina la extensión es la finalidad del examen de los mismos, expresada por quien solicita la diligencia.

En este caso, la empresa **COLDRAGADOS DE PANAMÁ, S. A.** está legitimada en cuanto al cobro de servicios que afirma haber prestado a **MOTORES INTERNACIONALES, S. A.** y **MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A.**, en virtud de contrato celebrado entre ellos.

La actora de la diligencia exhibitoria desea saber quiénes son los accionistas de **MOTORES INTERNACIONALES, S. A.** y **MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL-PANAMÁ, S. A.**, así como el número y clase de sus acciones.

También se solicitó en la diligencia el conocimiento de las empresas que se adscriban, pertenezcan o adjunten a **MOTORES INTERNACIONALES, S. A.**, a manera de subsidiarias, sucursales, agencias, representantes o cualquier otra condición (sociedad de hecho, v. gr.).

En ese sentido, se pretende averiguar si P. C. C. es una de dichas sociedades, y si los libros y demás documentos y archivos de **MOTORES INTERNACIONALES, S. A.** hacen referencia a contratos y transacciones que relacionen a **COLDRAGADOS PANAMÁ, S. A.** con P. C. C., y cualquier información relacionada con los puntos anteriores.

El asunto aquí es encontrar la información buscada; que el interesado no puede saber de antemano en dónde precisamente está; pero se trata de una información específica; y el examen se detendrá sólo en los libros y documentos en donde esa información existe.

La empresa demandante ha solicitado la exhibición de la documentación impugnada con la finalidad de asegurar su derecho a cobrar el monto de crédito que dice tener contra las dos empresas afiliadas (legitimación).

En otro orden de cosas, no comparto el criterio vertido en la Resolución, referente a la confidencialidad de la información del Libro de Acciones. Excepcionalmente podría ocurrir; pero no es la regla. En tal caso, la parte pasiva de la acción exhibitoria debería adelantar los elementos que sirvieran al menos para conjeturar tal situación de excepción.

Exagerar la nota puede dar lugar a un ocultamiento injustificado de información, que en un momento dado debe ser conocida por el Juzgador o por quien solicita la exhibición, para la defensa de sus intereses.

Las consideraciones sobre el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia no es pertinente. El artículo 29 del Título III de la Constitución, sobre Derechos y Deberes Individuales y Sociales, se refiere a correspondencia y documentos privados. En tal categoría no se incluyen los documentos comerciales de que se trata.

Por estas razones respetuosamente salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SAMUEL VELÁSQUEZ DÍAZ EN REPRESENTACIÓN DE GABRIEL OSCAR MIRÓ ROVIRA CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DIARIO EL UNIVERSAL PARA LA ELECCIÓN DEL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DICTADA POR LA COMISIÓN DE CREDENCIALES, JUSTICIA INTERIOR, REGLAMENTO Y ASUNTOS JUDICIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Samuel Velásquez Díaz en representación del señor **GABRIEL OSCAR MIRÓ ROVIRA**, ha presentado demanda de amparo de garantías constitucionales contra el acto de la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales de la Asamblea Legislativa, que aparece publicado en el Diario El Universal de Panamá, el día 16 de noviembre de 1996, mediante el cual "declara abierto el período de postulaciones para el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 numeral de la Constitución Política de la República" (sic).

Como allí mismo se establece el período de postulaciones es de dos días hábiles, el 18 y 19 de noviembre, en el horario regular del Pleno de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con los hechos de la acción de amparo presentada, se trata de que el Magistrado del Tribunal Electoral que será nombrado, ocupará la posición que cuando se dictó el acto recusado ocupaba el Doctor Guillermo Márquez Amado. Sostiene el demandante de amparo que el período para el cual fue designado el Doctor Márquez Amado vence el 23 de noviembre de 1998.

Cita como disposiciones constitucionales infringidas los artículos 70 y 136 de la Constitución Nacional. El primero se refiere a que ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las formalidades que establezca la Ley; el otro, en lo pertinente, dispone que los Magistrados del Tribunal Electoral serán nombrados para un período de diez años.

La acción de amparo de garantías constitucionales la establece el artículo 50 de la Constitución Nacional "para toda persona contra la cual se expida o ejecute ... una orden de hacer o no hacer, que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra".

De este texto constitucional se desprende claramente que el demandante de amparo de garantías constitucionales, señor **GABRIEL OSCAR MIRÓ ROVIRA**, carece de legitimación en la causa, porque no es la persona contra la cual se haya expedido o ejecutado orden de hacer o no hacer violatoria de sus derechos y garantías constitucionales.

Por las razones expresadas el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el señor GABRIEL OSCAR MIRÓ ROVIRA contra el acto de la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales que declara abierto el período de postulaciones para el cargo de Magistrados del Tribunal Electoral, dictado en el mes de noviembre de 1996.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PATTÓN, MORENO Y ASVAT, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA AGROMARINA DE PANAMÁ, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER, CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 6 DE 10 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL DE LA PROVINCIA DE COCLÉ, MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante providencia de 21 de octubre del año que decurre, concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maribel Acevedo de Pascual, contra la resolución de 18 de octubre que deniega la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la empresa **AGROMARINA DE PANAMÁ, S. A.** contra la orden de hacer contenida en la **Resolución N° 6 de 10 de julio de 1996, dictada por el Director Regional de Trabajo y Bienestar Social de la Provincia de Coclé.**

La orden de hacer que se impugna declara que según la Cláusula 42 de la Convención Colectiva convenida entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Ganadería y Leche (SITIAGL) y la empresa AGROMARINA DE PANAMÁ, S.

A., fechada el 15 de septiembre de 1993, el trabajo extraordinario que realicen los trabajadores para la empresa, se pagará según lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Trabajo y no por lo que establece el artículo 3 de la Ley 1 de 17 de marzo de 1986.

La amparista señala que mediante resolución N° 119 de 30 de septiembre de 1994 de la Dirección General de Industria del Ministerio de Comercio e Industrias, se le reconoció como empresa que destina el 100% de su producción a la exportación y como tal, al tenor de lo dispuesto por la Ley 1 de 17 de marzo de 1986, el tiempo extraordinario de los trabajadores se paga con un recargo de 25%. Otro argumento que esgrime como fundamento de la acción promovida es la falta de competencia de la Dirección Regional de Trabajo para decidir si a la accionante se le aplica o no la Ley 1 de 1986, en virtud de que esta materia es de conocimiento privativo de la jurisdicción laboral, al tenor del artículo 339 del Código de Trabajo.

El Tribunal de Amparo de primera instancia al resolver la cuestión de fondo de la acción presentada, consideró que la Ley 53 de 1975 le atribuye competencia al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social para conocer de las demandas relativas a la interpretación en derecho o a la validez de las cláusulas pactadas en una Convención Colectiva u otro pacto o acuerdo de naturaleza colectiva, y como quiera que el Sindicato (SITIAGL) le solicitó al Director Provincial de Trabajo de Coclé la interpretación de la cláusula N° 42 del Contrato Colectivo celebrado entre las partes, estima que a través de la declaración acusada se ha interpretado una cláusula convencional existente, en la cual surgieron dudas, cumpliendo así una función atribuida por la ley, sin caer en la infracción del artículo 32 constitucional.

La apelante al rebatir los puntos centrales del fallo impugnado, se manifiesta en estos términos:

> "En nuestro criterio en el caso en particular si bien nos encontramos ante una Cláusula de un Convenio Colectivo de Trabajo no conlleva la cláusula la interpretación de la misma sino a la determinación de la aplicación de la legislación de trabajo concretamente la Ley 1ª de 17 de marzo de 1986 y el Artículo 33 del Código de Trabajo ya que la cláusula a ello se refiere, por lo cual la Dirección Regional de Trabajo de Coclé no es competente, ya que la cláusula se conduce es a la aplicación de una disposición legal y no a una demanda de interpretación propiamente tal, adicional a que la demanda instaurada contiene no solamente una pretensión de condena, sino a su vez el requerimiento que se declarase que no es aplicable la Ley 1 de 17 de marzo de 1986 en lo cual incurrió la Dirección Regional de Trabajo de Coclé y para lo cual no tiene competencia.
>
> El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas se limita a señalar que se ha pedido la interpretación en abstracto de la cláusula 42 de la Convención Colectiva de Trabajo lo cual no corresponde a la realidad de los hechos de la demanda interpuesta.
>
> Del contenido de la Cláusula no se desprende la interpretación de la cláusula sino la aplicación de la legislación de trabajo, es decir, el Artículo 33 de la legislación laboral vigente relativo al pago del tiempo extraordinario y la correspondiente modificación la Ley 1 de 17 de marzo de 1986.
>
> La interpretación de la legislación de trabajo como la determinación de si es aplicable o no a una empresa una determinada Ley, como establecer cuando corresponde la diferenciación o no de los recargos del Artículo 33 del Código de Trabajo máxime cuando se reclama igualmente una condena pecuniaria, corresponde a los Juzgados Seccionales de Trabajo, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 339 de la Ley 67 de 1947 que estipula lo siguiente:"

La Corte al revisar los puntos controvertidos, se percata que entre las disposiciones constitucionales que se señalan como violadas, se encuentra el artículo 32, en la parte referida a la garantía fundamental de orden procesal que le confiere a toda persona el derecho a ser juzgada por autoridad competente. El punto a dilucidar es si las autoridades administrativas laborales están facultadas por la ley para interpretar las cláusulas de una convención colectiva y resolver a su vez sobre la aplicación o no de una ley modificatoria de un artículo del Código de Trabajo. Ello es así, porque en este caso un sindicato promueve un proceso de interpretación de una convención colectiva y a su vez plantea la prevalencia de lo dispuesto en dicha cláusula y lo que prevé una ley especial sobre el recargo en el pago de las horas extraordinarios en los casos de empresas de exportación, ley anterior a la convención colectiva, que por la materia que regula modifica el artículo 33 del Código de Trabajo.

Como quiera que el Sindicato también incluyó en la demanda de interpretación una pretensión pecuniaria que por su naturaleza rebasa las atribuciones asignadas al Ministerio de Trabajo en esta materia, no cabe duda alguna que la violación de la norma constitucional invocada se encuentra debidamente establecida porque la materia resuelta rebasa la competencia que la Ley atribuye a las autoridades del Ministerio de Trabajo y por tanto debe resolverse en ese sentido.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el fallo apelado y en consecuencia ACOGE la acción de amparo de garantías propuesta en este caso y REVOCA la Resolución N° 6 de 10 de julio de 1996, emitida por la Dirección Regional de Trabajo de Coclé y confirmada por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, mediante Resolución N° DM 29/96 de 5 de septiembre de 1996.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO)

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
ELIGIO A. SALAS Y RAFAEL A. GONZÁLEZ

Consideramos que contrariamente a lo decidido por mayoría, el acto demandado (una resolución del Director Regional de Trabajo de Coclé, que por iniciativa de parte, interpreta cláusula de una convención colectiva de trabajo) no es inconstitucional.

En efecto, Agromarina de Panamá, S. A. ha presentado recurso de amparo constitucional para que se revoque la Res. N° 6 de 10 de julio de 1996, proferida por la Dirección Regional de Trabajo de Coclé y confirmada por el Ministerio de Trabajo en lo esencial, cuando dispone:

"RESUELVE:

ARTÍCULO UNO: DECLARAR que la cláusula N° 42 de la Convención Colectiva celebrada entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria y Leche (SITIAL) y la empresa Agromarina de Panamá, S. A. fechada 15 de septiembre de 1993, referente a la remuneración del tiempo extraordinario no le es aplicable lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 1 de 17 de marzo de 1986. Así debe interpretarse esta norma.

ARTÍCULO DOS: Anular como en efecto anula el Auto N° 003- DRTC/96 de 12 de agosto mediante el cual se condena en costas a la empresa

Agromarina de Panamá, S. A.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 53 de 23 de agosto de 1975.

Notifíquese y Cúmplase.

MITCHELL DOENS
Ministro de Trabajo y Bienestar Social

A. ANTONIO DUCREUX S.
Viceministro de Trabajo y Bienestar Social"

El conflicto de intereses es como sigue:

1) El Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria y Leche (SITIAL) pidió a la Dirección Regional de Trabajo de Coclé que fuera interpretada la Cláusula 42ª de la Convención, respecto al pago de horas extras de trabajo.

2) La Convención Colectiva se acordó el 15 de septiembre de 1993.

3) La Cláusula 42ª expresa que las horas extraordinarias "serán remuneradas de conformidad con la Ley, artículo 33 del Código de Trabajo".

4) El artículo 33 del Código de Trabajo establece un régimen de remuneración de las horas extraordinarias de trabajo, más favorable al trabajador que el establecido en el artículo 3° de la Ley 1ª de 1986.

5) Se trata de dos regímenes que rigen simultáneamente.

6) Tanto el Director Regional de Coclé como el Ministro de Trabajo dejaron establecido que la remuneración que correspondía, de acuerdo con la Convención, es la que establece el artículo 33 del Código de Trabajo.

7) El amparo que presenta la Empresa argumenta en el sentido que la Dirección General de Trabajo no es competente porque se trata de "dilucidar si la Ley 1ª de 17 de marzo de 1986 le es aplicable o no a Agromarina de Panamá, S. A.". Y que dilucidar este punto no es competencia sino de los tribunales laborales.

Por su parte la decisión de mayoría sostiene:

> "El punto a dilucidar es si las autoridades administrativas laborales están facultadas por la ley para interpretar las cláusulas de una convención colectiva y resolver a su vez sobre la aplicación o no de una ley modificatoria de un artículo del Código de Trabajo. Ello es así, porque es este caso un sindicato promueve un proceso de interpretación de una convención colectiva y a su vez plantea la prevalencia de lo dispuesto en dicha cláusula y lo que prevé una ley especial sobre el recargo en el pago de las horas extraordinarias en los casos de empresas de exportación, ley anterior a la convención colectiva, que por la materia que regula modifica el artículo 33 del Código de Trabajo.
>
> Como quiera que el Sindicato también incluyó en la demanda de interpretación una pretensión pecuniaria que por su naturaleza rebasa las atribuciones asignadas al Ministerio de Trabajo en esta materia, no cabe duda alguna que la violación de la norma constitucional invocada se encuentra debidamente establecida porque la materia resuelta rebasa la competencia que la Ley atribuye a las autoridades del Ministerio de Trabajo y por tanto debe resolverse en ese sentido".

En el texto transcrito se mantiene como criterio:

1) Que se trata de si la Dirección Regional está facultada para interpretar la Convención Colectiva y resolver a su vez sobre si la Ley 1ª de 1986 se aplica

o no se aplica.

2) Que el Sindicato pidió "la interpretación de la Cláusula de la Convención Colectiva", y a su vez plantea la prevalencia de lo dispuesto en dicha cláusula y lo que prevé la ley especial. Agrega que el Sindicato "incluyó una pretensión pecuniaria que por su naturaleza rebasa las atribuciones asignadas al Ministerio de Trabajo".

En relación con estos puntos de la decisión disentida se hacen los siguientes comentarios:

1. No es cierto que se trate de la interpretación de la Convención y "resolver a su vez" sobre si la Ley 1ª de 1986 se aplica o no se aplica. Con tal planteamiento se da la impresión de que la Ley 1ª de 1986 se aplica a una situación en que no media una convención colectiva. Basta afirmar que se trata de la interpretación de la Cláusula 42ª de la Convención Colectiva.

2. Que el Sindicato además de la interpretación de la cláusula del Convenio Colectivo "incluyó una pretensión pecuniaria que por su naturaleza rebasa las atribuciones asignadas al Ministerio de Trabajo", es cuestión irrelevante, porque el Director Regional de Trabajo y el Ministerio se limitaron a lo que son sus atribuciones, y dictaron una resolución declarativa, no de condena. Si el Ministerio de Trabajo se hubiese excedido, resolviendo otros puntos distintos a los que resolvió, en ese caso el amparo cubriría sólo la parte de la decisión en que se hubiese excedido. Pero, se repite, no hubo desborde de atribuciones del Ministerio de Trabajo.

Salvamos el voto porque respetuosamente no compartimos los planteamientos de la mayoría. La Ley 53 de 1975, artículo 1°, ordinal 3°, le otorgó competencia privativa al Ministerio de Trabajo para conocer y decidir de "demandas relativas a la interpretación en derecho o a la validez de las cláusulas pactadas en una Convención Colectiva u otro pacto o acuerdo de naturaleza colectiva".

Podemos apreciar de la lectura de la parte resolutiva del acto contra el cual se interpone el amparo, transcrito al comienzo de este escrito, que es una decisión meramente declarativa, no condenatoria, ajustada ceñidamente al criterio sentado por la propia Corte Suprema en la Sentencia de 4 de julio de 1990, en el caso de Poll Cabrera P., Ministerio de Trabajo (tomado de 14ª edición del Código de Trabajo, 1995, editado por Jorge Fábrega P. y otros).

No podemos dejar de apreciar, por otra parte, que el artículo 33 del Código de Trabajo no fue derogado, reformado o modificado por el artículo 3 de la Ley 1 de 1986, sino simplemente complementado por éste y, por lo tanto, el primero no ha perdido su vigencia. Por eso, aún cuando el artículo 3 de la Ley 1 establece un recargo específico para remunerar el trabajo extraordinario cumplido en determinado tipo de industrias, es evidente y obvio que, si se negocia una convención colectiva acordándose en ella que el pago de las horas extras se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Trabajo, lo razonable es entender que las partes estaban desechando la forma de pago consagrada por la otra disposición legal (art. 3 de la Ley 1 de 1986), tal como fue interpretado por el Ministerio de Trabajo en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1, ordinal 3°, de la Ley 53 de 1975.

Por esas razones salvamos el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HÉCTOR CASTILLO RÍOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PLÁSTICOS GENERALES, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1996,

DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La sociedad PLÁSTICOS GENERALES, S. A. ha presentado amparo de garantías constitucionales con la finalidad de que se revoque, en todas sus partes, la orden contenida en la nota de 23 de septiembre de 1996, mediante la cual fue acogido en la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, en virtud del cual se ordena darle traslado a la empresa del pliego de peticiones consistentes en la celebración de una convención colectiva de trabajo entre la misma y la organización social denominada UNIÓN NACIONALES (SIC) DE TRABAJADORES DEL PLÁSTICO Y AFINES (UNIPLAS), por estimar que dicha orden vulnera derechos fundamentales constitucionales de la empresa.

El amparista expone los hechos de la demanda de amparo en los términos que se transcriben:

> "PRIMERO: En el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, consta bajo el Registro N° 65-93 de 8 de octubre de 1993, debidamente registrada la Convención Colectiva, suscrita entre el **Sindicato Industrial de Trabajadores de Productos Plásticos y Similares <SITPPLAS>** y la empresa **PLÁSTICOS GENERALES, S. A.**
>
> SEGUNDO: La Dirección General de Trabajo, conociendo la existencia y vigencia de la Convención Colectiva, descrita en el hecho primero próximo anterior, aceptó recibir, acogió y notificó a la sociedad **PLÁSTICOS GENERALES, S. A.**, de un nuevo **PLIEGO DE PETICIONES**, presentado por otra organización Sindical denominada **SINDICATO UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE PLÁSTICOS y AFINES (UNIPLAS).**
>
> TERCERO: Según la cláusula 47 y 50 la Convención Colectiva vigente, suscrita entre el Sindicato Industrial de Trabajadores Plásticos y Similares **(SITPPLAS)** y la Sociedad **PLÁSTICOS GENERALES, S. A.** dicha convención tiene una duración de cuatro (4) años; que comprenden el período de 8 de octubre de 1993 a 7 de octubre de 1997.
>
> CUARTO: Encontrándose vigente la Convención Colectiva, el Ministerio de Trabajo, aceptó el nuevo Pliego de Peticiones presentando por otra organización sindical, **que no es signataria de la actual Convención Colectiva**, por lo que incurrió en violación del artículo 32 de la Constitución Nacional, congruente con el artículo 15 de la Ley 8° de 1981". (F. 52).

La demandante considera que la orden impugnada viola el artículo 32 de la Constitución Política, y explica, de la forma que se transcribe, el concepto de la infracción:

> "...
> La violación del artículo 32 de la Constitución Nacional se produce desde la circunstancia de que la garantía del debido Proceso Legal encuentra fundamento en algún texto de la Ley. Con esto se indica que el Debido Proceso Legal como institución instrumental es de carácter general, y por tanto alcanza a todos los procesos, exceptos los que excluye la propia constitución.
>
> Esta gama de protección incluye, desde luego, el principio de la seguridad jurídica que en este caso dimana de un texto claro de la Ley Laboral como lo es el artículo 15 de la Ley 8ª de 1981, para que resuelva esta clase de solicitudes por la necesidad del Estado de tutelar, en determinadas circunstancias, la fuente de trabajo con

preferencia al interés particular.

Esta gestión de tutela, que el Estado, delega en el Ministerio de Trabajo, en el presente caso, no se cumplió, y en consecuencia violó la garantía Constitucional y legal de la empresa recurrente. Esto es así, porque con conocimiento pleno de la vigencia de la Convención Colectiva suscrita entre el **Sindicato Industrial de Trabajadores de Productos Plásticos y Similares <SITPPLAS>** y la empresa **PLÁSTICOS GENERALES, S. A.**, la cual tiene una duración de cuatro (4) años, aceptó recibió y dio traslado a la empresa, de un nuevo Pliego de Peticiones, presentado por otra organización sindical, que no es signatario de la Convención vigente.

La Dirección General de Trabajo, por omisión dejó de considerar y aplicar el artículo 15 de la Ley 8ª de 1981, que le faculta a no admitir un Pliego de Peticiones que tenga por objeto introducir modificaciones directas o indirectas o cláusulas nuevas a la Convención Colectiva vigente.

Con la aceptación del Pliego de Peticiones la Dirección General de Trabajo, dejó expuesta a la empresa y sometida al procedimiento de Conciliación previsto en el artículo 432 y siguientes del Código de Trabajo, aún cuando la Convención Colectiva vigente, vence en octubre de 1997.

La Dirección General de Trabajo, sometió prematuramente a la empresa, a un Proceso de Conciliación iniciado por una organización sindical que no es signatario de la Convención.

El artículo 416 del Código de Trabajo, según quedó modificado por el artículo 57 de la Ley 44 de 14 de agosto de 1995, establece que la negociación de una nueva Convención Colectiva, puede solicitarla, **cualquiera de las partes** en una Convención Colectiva, por vencimiento del plazo, desde los tres meses anteriores al mismo.

Además establece, en caso de concurrencia se aplicará lo dispuesto en el artículo 402 del Código de Trabajo.

En el presente caso la Convención Colectiva está vigente y vence el 8 de octubre de 1997, y ninguna de las partes en esa Convención a solicitado anticipadamente la negociación de una nueva Convención, (párrafo final de artículo 57 Ley 44 de 1995), sinembargo (sic), en contradicción, la Dirección General de Trabajo, aceptó y dio traslado a la empresa, de un Pliego de Peticiones, presentado por una organización sindical que no es parte en la Convención Colectiva vigente.

Esta nueva organización sindical, sólo podrá **CONCURRIR**, en la fecha en que cualquiera de las partes, en la actual y vigente Convención Colectiva, solicite la negociación de una nueva. Como quiera que esto no ha ocurrido, resulta improcedente el Pliego de Peticiones, presentado por la organización sindical, denominada **Unión Nacional de trabajadores del Plástico y Afines (UNIPLAS)**. La decisión de la Dirección General de Trabajo de admitir un nuevo Pliego de Peticiones presentado por una Organización Sindical que no es parte de la Convención Colectiva vigente, constituye un acto violatorio del debido proceso legal, al no impartir con efectividad el trámite legal correspondiente previsto en el artículo 15 de la Ley 8ª de 1981, que lo autoriza y faculta a rechazar un Pliego de Peticiones presentado con evidente infracción de dicha norma; ya que la empresa no puede ser sometida bajo ningún pretexto, a un prematuro proceso de conciliación para negociar una nueva Convención Colectiva, porque quien la promueve no es parte en la convención vigente; además porque, al no haberse iniciado una nueva negociación entre las partes signatarias, no hay lugar a la **CONCURRENCIA** de otra

organización sindical que alegue ser representante mayoritario de los trabajadores de la empresa, y con mejor derecho, para negociar la nueva Convención Colectiva.

En aras de evitar un precedente desafortunado, y de preservar el principio de la seguridad jurídica y el debido proceso legal, reiteramos nuestra solicitud de **REVOCATORIA TOTAL** de la Orden de Hacer, cuya impugnación promoveremos, dictada por el Director General de Trabajo el día 23 de septiembre de 1996, por la que ordenó acoger y dar traslado a Plásticos Generales, S. A. de un Pliego de Peticiones manifestamente improcedente.

PRUEBAS:

1. Poder conferido a nuestro favor.

2. Certificado de existencia de la sociedad.

3. Copia de la Convención Colectiva vigente, suscrita entre Plásticos Generales, S. A. y el Sindicato Industrial de Trabajadores de Productos Plásticos y Similares **(SITPPLAS).**

4. Copia autenticada del Pliego de Peticiones presentado por el Sindicato **UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE PLÁSTICOS y AFINES (UNIPLAS).**" (Fs. 53, 54 y 55).

El magistrado sustanciador admitió la demanda de amparo y le comunicó dicha circunstancia a la autoridad acusada, esto es, la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, mediante Nota N° SPG-1787, de 8 de noviembre de 1996, solicitándole la remisión de lo actuado o un informe acerca de los hechos materia de esta acción constitucional, procediendo el Director General de Trabajo a hacer ambas cosas, la remisión de expedientes contentivos de la actuación, y el informe mediante Nota N° 352-SJ-96, de 12 de noviembre de 1996, en la cual expresa:

"Magistrado Fábrega:

En respuesta a su Nota N° SGP-1787 de 8 de noviembre de 1996 y acatando lo preceptuado en el Artículo 2612 del Código Judicial en relación al AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES propuesto por el Licenciado Héctor Castillo Ríos en Representación de la empresa PLÁSTICOS GENERALES, S. A. contra la orden de hacer contenida en la nota calendada 23 de septiembre de 1996 proferida por mi persona en mi calidad de Director General de Trabajo, informo al Pleno lo siguiente.

El día 18 de septiembre de 1996, el SINDICATO UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL PLÁSTICO Y AFINES (UNIPLAS) presentó ante el Departamento de Relaciones de Trabajo, el cual está adscrito a esta Dirección, Pliego de Peticiones a la empresa PLÁSTICOS GENERALES, S. A.

Verificados los requisitos establecidos en el Artículo 403 del Código de Trabajo, se admitió la documentación y se libró la Resolución calendada 23 de septiembre de 1996, por la cual se ordena la notificación del Pliego de la empresa requerida, de conformidad con lo que preceptúa el Artículo 435 del Código de Trabajo.

El día 30 de septiembre la empresa PLÁSTICOS GENERALES, S. A. contestó el PLIEGO oponiéndose a la negociación ya que a su entender se estaba violentando la presentación de un PLIEGO DE PETICIONES cuando a la vigente le faltaba un (1) año para expirar, por lo que debía ser rechazado de Plano por Improcedente.

En este sentido el Funcionario Mediador continúo con el

procedimiento normal de cursar las citaciones a la empresa requerida para cumplir con la etapa de negociación, en donde esta mantuvo la posición de no negociar la nueva Convención Colectiva hasta tanto para cumplir con la etapa de negociación, en donde esta mantuvo la posición de no negociar la nueva Convención Colectiva hasta tanto esta Dirección no se pronunciara en relación a las alegaciones vertidas en la contestación al Pliego.

Precluido el término previsto en el numeral 1° del artículo 443 del cuerpo de leyes que nos atañe, el Funcionario Mediador remitió la documentación a esta Dirección el día 21 de octubre último, suspendiéndose toda actuación a este nivel y dos (2) días después es decir, el 23 de octubre el UNIPLAS solicitó Arbitraje dada la Renuencia de la empresa a negociar.

Estando pendiente nuestra actuación en el referido caso, a fecha 28 de octubre de 1996, el SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y SIMILARES (SITPPLAS) presentó Pliego de Peticiones en contra de la misma empresa.

Nuestra demora obedeció a que la contestación al Pliego no es la vía idónea para exponer las inconformidades jurídicas surgidas frente a una orden de hacer proferida por esta Autoridad Administrativa.

Existen reiterados precedentes en donde esta Dirección ha expresado que es la vía del Incidente a través del cual la empresa requerida puede exponer las razones que la motivan para negarse a negociar una Convención Colectiva que viola directamente la ley, en detrimento de sus derechos.

La contestación al Pliego se refiere a cada uno de los puntos de conflicto planteado por el Sindicato proponente del pliego, por esta razón el Funcionario Mediador dio inicio a la negociación prevista en los Artículos 439 y 440 del Código de trabajo, aunado al hecho de que la Cláusula N° 50 de la Convención Colectiva vigente, pactada entre el SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y SIMILARES (SITPPLAS) y la empresa PLÁSTICOS GENERALES, S. A., establece sin lugar a dudas la duración de la misma, la cual es de cuatro (4) años, contados a partir del 1° de octubre de 1993 hasta el 1° de octubre de 1996.

No obstante la presentación del Segundo Pliego de Peticiones, el día 28 de octubre de 1996 por el SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y SIMILARES (SITPPLAS) origina un conflicto adicional el cual era necesario dilucidar en una sola cuerda, toda vez que según el Artículo 402 del Código de Trabajo cuando se da esta figura, debe dirimirse atendiendo qué Sindicato posee mayoría de afiliados dentro de la empresa, para tener la legitimidad de negociar la Convención Colectiva.

Aún cuando la empresa PLÁSTICOS GENERALES, S. A., no utilizó la figura procesal idónea para expresar sus inconformidades jurídicas esta Autoridad se encontraba resolviendo el conflicto planteado por SINDICATO UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL PLÁSTICO Y AFINES (UNIPLAS)-PLÁSTICOS GENERALES, S. A. y SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y SIMILARES (SITPPLAS), cuando se nos presentó su requerimiento conforme lo dispone el artículo 2612 del Código Judicial.

Estimamos con todo respeto, que los interesados deben observar el procedimiento y utilizar los mecanismos procesales establecidos para hacer valer sus derechos.

Esta Dirección ha observado los precedentes sentados por la Honorable Corte Suprema de Justicia en relación a esta materia y aún cuando los Artículos 433 y 434 del Código de Trabajo nos impide

rechazar un Pliego de Peticiones, hemos sentado la vía de la incidencia, simultánea a la contestación al Pliego, para que las empresas que estimen vulnerables sus derechos así lo expresen a esta Autoridad y nos permitan a través de este mecanismo procesal resolver los mismos.

Consideramos que si la empresa requerida hubiese dialogado a nivel de la Dirección estuviera orientada acerca del instrumento procesal idóneo para exponer su oposición a la negociación del Pliego, pero no fue sino hasta la preclusión del término previsto en el numeral 1° del Artículo 443 del Código de Trabajo cuando la Funcionaria Mediadora nos remite la documentación para que resolvamos lo pertinente.

Para mayor ilustración remitimos adjunto copia de toda la gestión y actuación así como copia de la Convención Colectiva vigente.

Con nuestro más alto respeto, quedo del Honorable Magistrado, Atentamente,

(Fdo.)
SANTIAGO SANFORD U.
Director General de Trabajo".

De la lectura del informe se desprende la circunstancia de que la Dirección General de Trabajo estaba concluyendo las fases procedimentales para la tramitación de pliego de condiciones para la celebración de la convención colectiva con el SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y SIMILARES (SITPPLAS), con el sometimiento del conflicto a arbitraje, cuando se presentó a la misma Dirección General de Trabajo un nuevo pliego de peticiones, con la misma finalidad de celebrar un convenio colectivo de trabajo con otra organización sindical, en este caso, la UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y SIMILARES (UNIPLAS). Argumenta el funcionario acusado en su informe por una parte que, ante la presentación de un pliego de condiciones, la autoridad laboral no le queda mas remedio que darle el trámite que corresponde, que es el de darle traslado a la empresa con la cual la organización sindical plantea la negociación del convenio colectivo con base en el proyecto adjuntado en el pliego de condiciones. Argumenta, además, que la empresa debe limitarse a contestar el pliego y que si tuviese objeciones de naturaleza jurídica, debe tramitar las mismas a través de una incidencia.

El Pleno ya ha señalado en ocasiones anteriores, que la Dirección General de Trabajo no puede interpretar aisladamente la obligación que le impone el artículo 431, sino en conjunto con otras normas que resulten de aplicación al analizar el contenido de un pliego de condiciones, y debe propiciar la corrección, reestructuración o, aún, rechazo del pliego, si a su juicio, el mismo es manifiestamente improcedente, como ocurre en el presente caso, en que existe una convención colectiva celebrada, y registrada en el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social (Registro N° 65/93, foja 19), por lo que resulta palmario que el segundo pliego de condiciones y el proyecto de convenio colectivo que lo adjunta no puede prosperar, toda vez que el artículo 431 del Código de Trabajo es diáfano al expresar que si se trata de dos convenios colectivos celebrados por organizaciones sindicales diferentes, habrá de actuarse conforme a la regla contenida en el artículo 402, a cuyo precepto legal expresamente remite el artículo 431 del Código de Trabajo. Es evidente, por lo tanto, que el obligar a una empresa a negociar un segundo convenio colectivo mientras se encuentra vigente el primero (salvo el caso de un convenio colectivo con un sindicato gremial, que no es el caso) se traduce en una violación al debido proceso, por cuanto que la segunda organización sindical carece de legitimación en el procedimiento administrativo que regulan la negociación de los pliegos de condiciones y de un convenio colectivo, carencia de legitimación que es esencial a la garantía del debido proceso.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales interpuesto por el licenciado HÉCTOR CASTILLO RÍOS, en nombre

y representación de PLÁSTICOS GENERALES, S. A. contra la orden de hacer contenida en la nota de 23 de septiembre de 1996 dictada por la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO y, REVOCA EN TODAS SUS PARTES la orden mediante la cual se le corre traslado a la empresa PLÁSTICOS GENERALES, S. A. del pliego de peticiones y proyecto de convenio colectivo entre la empresa y la organización sindical denominada UNIÓN NACIONAL DE PLÁSTICOS Y AFINES (UNIPLAS), de 23 de septiembre de 1996.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Se trata de un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la empresa PLÁSTICOS GENERALES, S. A., contra "la **Orden** de Hacer proferida por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo contenida en la Nota de 23 de septiembre de 1996, en virtud de la cual, ordenó darle traslado a la empresa **PLÁSTICOS GENERALES, S. A.** del Pliego de Peticiones, presentado por el Sindicato **UNIÓN NACIONALES DE TRABAJADORES DEL PLÁSTICO Y AFINES (UNIPLAS)**". (Foja 51).

La decisión de mayoría expone que esta orden es violatoria del debido proceso porque la UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL PLÁSTICO Y AFINES (UNIPLAS), "carece de legitimación en el procedimiento administrativo que regula la negociación de los pliegos de condiciones y de un convenio colectivo" y, en consecuencia, concede el amparo y revoca la orden impugnada.

Respetuosamente, considero que la presente acción constitucional no es viable. La controversia envuelve la presentación de dos pliegos de peticiones a la empresa PLÁSTICOS GENERALES, S. A., para la celebración de una convención colectiva. El primero fue presentado ante el Departamento de Relaciones de Trabajo el 18 de septiembre de 1996, por el SINDICATO UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL PLÁSTICO Y AFINES (UNIPLAS) y el segundo por el SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y SIMILARES (SITPPLAS), el 28 de octubre de 1996. Sin embargo, el amparo impugna, únicamente, el traslado a la empresa de uno de ellos.

De acuerdo con el informe rendido por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, esa autoridad se encontraba resolviendo el conflicto planteado entre ambas organizaciones sociales y la empresa PLÁSTICOS GENERALES, S. A. (en atención a lo que establece el artículo 402 del Código de Trabajo) cuando se le ordenó que suspendiera la actuación, hasta tanto se decidiera el presente amparo.

Considero que es la Dirección General de Trabajo quien debe dirimir el conflicto surgido entre la empresa y los dos sindicatos y no el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante una acción de amparo de garantías constitucionales que únicamente se dirige contra la orden de traslado de uno de los pliegos de peticiones.

Se observa que el demandante de amparo plantea el hecho de la vigencia de una convención colectiva, que impide que el SINDICATO UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES PLÁSTICOS Y AFINES, S. A. (UNIPLAS), presente un pliego de peticiones. Sin embargo, no menciona (y hasta niega) el otro pliego de peticiones, del SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES PLÁSTICOS Y SIMILARES (SITPPLAS), con lo cual desfigura la realidad de las cosas.

Por las razones anteriores respetuosamente salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LIC. GILBERTO BÓSQUEZ DÍAZ EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD VIGILANCIA ESPECIAL, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado **Gilberto Bósquez Díaz**, en representación de la sociedad denominada **VIGILANCIA ESPECIAL, S. A.**,, contra la orden de hacer proferida por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, contenida en el edicto N° 86 de la Secretaría Judicial de la Dirección General de Trabajo.

El SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD presentó ante la Dirección General de Trabajo, el día 9 de agosto de 1996, un pliego de peticiones contra la sociedad **VIGILANCIA ESPECIAL, S. A.**, lo que dio inicio a los procedimientos de conciliación, conforme con lo dispuesto en el artículo 432 del Código de Trabajo. Se hizo la notificación a la sociedad **VIGILANCIA ESPECIAL, S. A.** (Art. 435), y el representante legal de la empresa, Licenciado **Gilberto Bósquez Díaz**, contestó que la empresa a la que representaba no aceptaba ninguna de las cláusulas presentadas en el pliego de peticiones (Art. 436 del C. de T.), es decir, que rechazó todas las peticiones de los trabajadores. Luego, el licenciado **Gilberto Bósquez Díaz**, presentó incidente por considerar que existían anomalías de fondo en el pliego de peticiones, según lo establecido en el artículo 430 del Código de Trabajo. Por su parte, la Dirección General de Trabajo en la resolución sub-examine, indicó que la situación descrita en el incidente:

> "... no se da en el presente caso, toda vez que este pliego ha sido presentado por un grupo organizado, por tanto su representación solo debe cumplir los requisitos que se estipulan en los Artículos 427, 428 y 429 del Código de Trabajo.
>
> Por lo que la presentación de este pliego de peticiones no tiene ningún vicio que conlleve a su nulidad." (F. 2).

En la resolución N° 65-DGT-96 de 17 de septiembre de 1996 (fs. 1 a 3), la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social resolvió rechazar por improcedente el incidente presentado por el licenciado **Gilberto Bósquez Díaz**; declaró que la sociedad **VIGILANCIA ESPECIAL, S. A.**, debía negociar con el SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE AGENCIAS DE SEGURIDAD; ordenó al Departamento de Relaciones de Trabajo, que girara las citaciones correspondientes a fin de iniciar el período de negociaciones conforme lo dispone el Artículo 432 del Código de Trabajo; y negó por improcedente la apelación interpuesta por el licenciado **Gilberto Bósquez Díaz**.

Así, pues, para determinarse la admisibilidad de la demanda de amparo de garantías constitucionales, la misma ha de atenerse a los requisitos consignados en el artículo 2610 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 654 del mismo Código.

En el libelo de la demanda (fs. 4 a 9), -a pesar de que la demanda se dirigió a los Magistrados de la Corte Suprema, Pleno, y no al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, siendo éste la autoridad a quien debió dirigirse, como requisito formal de toda demanda-, se establece el nombre del servidor público que impartió la orden atacada -Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social-, se enumeran los hechos en que se funda la pretensión, se explican las garantías fundamentales infringidas (Art. 32 de la Constitución Nacional) y el concepto en que lo han sido (violación directa). Además, con la demanda se acompañó la prueba de la orden impartida, es decir, copias debidamente autenticadas de la resolución N° 65-DGT-96 de 17 de septiembre de 1996 (fs. 1-2) y del edicto N° 86 de 19 de septiembre de 1996 (f. 3). No obstante, observa la Corte, que al confrontar los hechos de la demanda existe cierta confusión con respecto a la identificación de la orden impugnada.

Así, pues, de los hechos de la pretensión expuestos en la presente demanda se advierte que el supuesto acto violatorio de las garantías fundamentales establecidas en el artículo 32 de la Constitución Nacional, lo constituyen, según la opinión del demandante, la notificación ilegal efectuada mediante edicto de la resolución N° 65-DGT-96 de 17 de septiembre de 1996, por parte de la Secretaría Judicial de la Dirección General de Trabajo, por no cumplir con los requisitos formales establecidos en el artículo 12 de la Ley 53 de 1975, siendo que la misma debió hacerse personalmente. Y, a su vez, el demandante sostiene que el rechazo de la apelación por improcedente, por parte de la Dirección General de Trabajo, mediante la resolución impugnada, resultó contraria a lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley 53 de 1975. Finalmente, el demandante solicita la suspensión provisional de la orden de hacer referente a la obligación de negociar el pliego de peticiones presentado por el SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE AGENCIAS DE SEGURIDAD contra la sociedad **VIGILANCIA ESPECIAL, S. A.**

Ante tales circunstancias, pasaremos a enumerar las razones varias que, a juicio de esta Superioridad, conllevan a la inadmisión de la presente demanda.

Primeramente, observa el Pleno, que los actos impugnados, que en su conjunto se trata de uno solo, no son órdenes de hacer propiamente tales, por cuanto no constituyen mandatos arbitrarios emanados de la autoridad, dirigidos a imponer la ejecución de un acto que lesione el goce de algún derecho reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. La Corte ha mantenido el criterio de que las decisiones judiciales, si bien constituyen órdenes explícitas o implícitas, la interposición de la acción de amparo resulta inoperante cuando las mismas son dadas en virtud de las leyes que regulan los procesos y, por lo tanto, no procede como medio de impugnación de actos procedimentales violatorios o no de disposiciones legales contentivas de derechos de rango legal, toda vez que las leyes procesales atribuyen competencia y proveen los medios legales aplicables para corregir los errores de cualquier clase en que incurran los jueces para su aplicación. En tal virtud, la acción de amparo sólo procedería si la autoridad demandada se apartara del orden jurídico establecido, dictando órdenes de hacer o de no hacer, violatorias directamente de los derechos y garantías constitucionales.

Ante tales circunstancias, observamos que el demandante más que impugnar la resolución dictada por la Dirección General de Trabajo, se refiere a la ilegalidad de la notificación de la misma a través del edicto N° 86 de 19 de septiembre de 1996, lo que resulta incompatible con la finalidad del amparo, que consiste en obtener la invalidación de un acto -orden de hacer o de no hacer- que afecta al impugnante, con el propósito, como hemos dicho, de enervarlo por violatorio de las garantías constitucionales.

Aunado a lo anterior, la existencia de un remedio jurisdiccional en la vía ordinaria del proceso laboral, siendo éste el incidente de nulidad, que según el artículo 889 del Código de Trabajo, es el medio idóneo para solicitar la nulidad de las notificaciones realizadas de manera distinta a la establecida en los artículos 877 y siguientes del Código Laboral, la cual sólo procede en caso de agravio o perjuicio procesal al que la alega, salvo las nulidades insubsanables en las que media un interés público. En este caso, de considerar el interesado que el acto de notificación no había alcanzado el fin al cual estaba destinado,

el demandante debió agotar la vía ordinaria para impugnar el acto que consideraba violatorio de sus derechos legales, y así cumplir con el principio de la definitividad del amparo como elemento procesal indispensable para su procedencia. Sobre el particular son consultables los fallos de 21 de octubre de 1994; 16 de febrero de 1995; 24 de febrero de 1995; 2 de marzo de 1995; 31 de marzo de 1995; 25 de abril de 1996; 26 de julio de 1996; 5 de agosto de 1996; y 14 de agosto de 1996, entre otros.

Partiendo del criterio seguido por la Corte, en el sentido de que en casos relacionados con el procedimiento de conciliación resulta aplicable la Ley N° 53 de 1975, que atribuye competencia privativa al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social para conocer de ciertos asuntos, la aplicación de los artículos 12 y 13 de la Ley citada, contrario a lo alegado por el demandante, nos llevan a la conclusión de que la resolución bajo estudio al no poner término al proceso ni imposibilitar su continuación, sino que más bien tiende a impulsar su tramitación, fue notificada legalmente mediante edicto que fue fijado por 24 horas en lugar público de la Secretaría Judicial de la Dirección General de Trabajo.

En este orden, la resolución que se dicte con respecto a un incidente rechazado por improcedente es irrecurrible, por su naturaleza, según lo establecido en el artículo 629 del Código de Trabajo y, si bien el artículo 29 de la Ley 53 de 1975, establece que las resoluciones que dicte el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social en los asuntos de su competencia, sólo admiten los recursos de apelación y reconsideración, salvo que se aluda expresamente a uno de éstos, al confrontar dicha disposición con lo establecido en el artículo 16 de la misma Ley, concluimos que por no ser la resolución apelada de las que deciden la causa o ponen fin o imposibilitan la continuación del proceso, es por lo que, a nuestro juicio, fue rechazada la apelación. Con respecto a la apelación rechazada, tampoco se ha dado cumplimiento al requisito contemplado en el artículo 2606, numeral 2, del Código Judicial, que conllevaría el agotamiento de los medios ordinarios previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial atacada, porque no se interpuso el recurso de hecho, contemplado en el artículo 932 y siguientes de Código de Trabajo, contra la negativa de la Dirección General de Trabajo, de conceder la apelación solicitada.

Siendo que la vía constitucional de amparo no es una tercera instancia ni un medio de impugnación que pueda utilizarse alternativamente con respecto a los medios ordinarios de impugnación, con fundamento en el principio de la definitividad de la acción de amparo, que acarrea el agotamiento de la vía ordinaria (Art. 2606, numeral 2 del C. J.) ya que la garantía del debido proceso, a través de una norma negativa dispone el cumplimiento de las formalidades procesales dentro de un proceso legal, es decir, el cumplimiento de los trámites procesales, el juzgamiento por la autoridad competente y la prohibición del doble juzgamiento, el acto o los actos acusados, no es posible enervarlos por la vía del recurso de amparo de garantías constitucionales por las razones mencionadas y, en razón de esto, esta Superioridad considera que la demanda bajo estudio resulta manifiestamente improcedente y, según se desprende del artículo 2611 del Código Judicial, no debe admitirse.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado Gilberto Bosquez Díaz, en representación de la sociedad denominada VIGILANCIA ESPECIAL, S. A., contra la orden de hacer proferida por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, contenida en el edicto N° 86 de la Secretaría Judicial de la Dirección General de Trabajo.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ELOY ALFARO (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretario General Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Estoy de acuerdo con que la presente acción no constituye una tercera instancia, y que el amparista lo que pretende es referirse a la ilegalidad de la notificación de la resolución emitida por la Dirección General de Trabajo, por medio del edicto N° 86, de 19 de septiembre de 1996.

Pero pienso que el "remedio jurisdiccional" ofrecido por la legislación laboral para corregir el problema planteado por el amparista, más bien está contenido en el Capítulo IV del Título III, Libro III del Código de Trabajo, referente a los "Procedimientos de Conciliación" (artículos 432 a 447 del Código de Trabajo), que constituye una actuación calificada en virtud de su propia naturaleza.

La Ley N° 53 de 1975 no es la Ley aplicable al presente caso, toda vez que en su artículo primero, establece los casos en que tiene competencia la Dirección General de Trabajo, siendo ellos:

> "ARTÍCULO 1. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá competencia privativa para conocer y decidir los siguientes asuntos:
>
> 1. Demandas por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo;
>
> 2. Demandas para determinar el salario mínimo legal o convencional aplicable, con o sin reclamo de la diferencia adeudada, si la hubiere, independientemente de la cuantía;
>
> 3. Demandas relativas a la interpretación en derecho o a la validez de las cláusulas pactadas en una Convención Colectiva u otro pacto o acuerdo de naturaleza colectiva;
>
> 4. Demandas sobre la aplicación del artículo 240 del Código de Trabajo, para determinar si existe alteración unilateral de la zona o ruta asignada al trabajador y en los casos de autorización para el rediseño de zonas o rutas o inclusión en las mismas de nuevos trabajadores por razones económicas, cuando no existiere acuerdo entre las partes;
>
> 5. Las impugnaciones a que se refiere el artículo 394 del Código de Trabajo, a prevención con los tribunales de trabajo. ..."

Como se advierte, ninguna de las situaciones contempladas por la norma transcrita corresponde a la situación planteada en este caso. Por lo tanto, esta Ley no es aplicable, contrariamente a lo que señala la Sentencia.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO EMILIO ROYO LINARES, EN REPRESENTACIÓN DE RICARDO VICKER JOHNSON RAYMORE Y DARNA GLORIA RAYMORE DE POCASANGRE CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA JUEZ CUARTA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de derechos fundamentales interpuesta por el licenciado Emilio Royo Linares, en representación de RICARDO VICKER JOHNSON RAYMORE y DARMA GLORIA RAYMORE DE POCASANGRE, contra resolución de 12 de septiembre de 1996 proferida por la Juez Cuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal.

La alzada se dirige contra resolución de 13 de noviembre de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual no se admite la presente iniciativa constitucional.

Por sustentada la apelación en tiempo oportuno, debe la Corte decidir lo que corresponda en derecho, a lo que procede.

Estima la Corte que la resolución atacada en esta vía constitucional subjetiva, a saber la providencia de 12 de septiembre de 1996, expedida por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, no reviste la forma de una orden de hacer, que pueda considerarse arbitraria por vulnerar los derechos fundamentales de los amparistas.

Mediante la referida resolución se señala el 28 de octubre del año en curso "para la celebración de la **AUDIENCIA PÚBLICA** dentro del proceso seguido a **RICARDO VICKERS JHONSON (sic) RAYMORE y DARMA GLORIA RAYMORE DE POCASANGRE** por un delito **CONTRA EL PATRIMONIO** en perjuicio de Pablo Gaspar Arosemena" (f. 5), por lo que la resolución acusada lo que dispone es un acto de mera tramitación, tal como lo manifiesta el a-quo en el auto apelado.

En efecto, el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante resolución de 13 de noviembre del año que decurre, no admitió la iniciativa constitucional que ahora nos ocupa, por considerar que el acto atacado no contiene orden de hacer alguna, que la juez de la causa simplemente "se limita a fijar la fecha en que ha de tener lugar la audiencia oral en dicho proceso penal, lo cual constituye un asunto de mero trámite" (f. 61).

El acto acusado en la vía constitucional de amparo no contiene en su parte resolutiva un mandato imperativo dirigido al afectado o a un funcionario del tribunal, del cual se derive la violación de los derechos fundamentales subjetivos de los demandantes.

Por las consideraciones que anteceden, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 13 de noviembre de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, que NO ADMITE la demanda de amparo de derechos fundamentales interpuesta por el licenciado Emilio Royo Linares, en representación de Ricardo Vicker Johnson Raymore y Darma Gloria Raymore de Pocasangre.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA LICENCIADA KARIN CÉSPEDES, EN REPRESENTACIÓN DE JUANA SEVILLANO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO CIVIL N° 0034 DE 9 DE AGOSTO DE 1996, PROFERIDO POR EL TRIBUNAL DE CONSULTAS Y APELACIONES DE COCLÉ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A.

ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, acción de amparo de derechos fundamentales interpuesta por la licenciada Karim Céspedes, quien actúa en representación de JUANA SEVILLANO, contra la resolución N° 0034 de 9 de agosto de 1996, proferida por el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Circuito de Coclé.

La alzada se dirige contra resolución de 14 de noviembre del año que decurre, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante la cual no se admite la presente iniciativa procesal.

Como quiera que el recurso de apelación se interpuso en tiempo oportuno, procede la Corte a decidir lo que en derecho corresponda.

A juicio del Pleno el acto atacado en la vía extraordinaria de amparo no constituye una orden de hacer o de no hacer que pueda considerarse arbitraria o conculcatoria de los derechos constitucionales de la demandante. En efecto, el Auto Civil N° 0034 de 9 de agosto de 1996, dictado por el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Circuito de Coclé, simplemente "CONFIRMA la resolución del 4 de agosto de 1995, proferida por el Alcalde del Municipio de Aguadulce" (f. 56). Lo anterior pone en evidencia que la demandante pretende enervar un **acto confirmatorio**, que no contiene en su parte dispositiva un mandato imperativo dirigido al afectado o a un funcionario estatal, del cual se derive la violación de los derechos fundamentales subjetivos de la amparista, lo que conlleva la no admisión de la demanda.

La resolución N° 83 de 4 de agosto de 1995, expedida por la Alcaldía Municipal del Distrito de Aguadulce, confirmada por la resolución atacada en sede constitucional, constituye el **acto originario**, y es en él donde se contiene la orden que pudiera estimarse violatoria de los derechos constitucionales de Sevillano.

Reiteradas son las sentencias de este tribunal de garantías constitucionales que identifican a la vía extraordinaria de amparo como medio de protección de derechos fundamentales consagrados en el Código Político Superior, la que debe ser utilizada con la finalidad de enervar actos de autoridad, verdaderas órdenes de hacer o de no hacer que aparecen en actos originarios y no en los simplemente confirmatorios, expedidos o ejecutados en el ejercicio de funciones públicas. En este sentido, se tienen los fallos de 8 de febrero de 1994, 18 de abril de 1994, 21 de abril de 1994 y de 20 de junio de 1995.

Por otra parte, observa la Corte que, al explicar el concepto en que se dice infringido el artículo 32 de la Carta Fundamental, la demandante censura la competencia del Tribunal de Apelaciones y Consultas del Circuito de Coclé para conocer del caso concreto, situación que debe ser dilucidada a través de un incidente por la vía ordinaria, tal como lo observa el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en la resolución recurrida, lo que implica la falta de agotamiento de los medios ordinarios de ley para la impugnación del acto que se pretende atacar en amparo, igualmente con la consecuencia de la no admisión de esta iniciativa procesal.

Por las razones que anteceden, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 14 de noviembre de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que NO ADMITE la demanda de amparo de derechos fundamentales interpuesta por la licenciada Karim Céspedes, en representación de Juana Sevillano.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO ERNESTO ESPINAL, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA YINH Y ASOCIADOS, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA CJ-9 DE 16 DE DICIEMBRE DE 1993, PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9 DE LA PROVINCIA DE COLÓN (PROCESO LABORAL ENTRE GABRIEL GÓNDOLA CONTRA YINH Y ASOCIADOS, S. A.). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JULIO ERNESTO ESPINAL, actuando en representación de la sociedad YINH Y ASOCIADOS, S. A., ha promovido acción constitucional de amparo de garantías constitucionales, por considerar que la orden de hacer contenida en la sentencia CJ-9, de 16 de diciembre de 1993, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 9 de la Provincia de Colón, viola los derechos fundamentales de la expresada sociedad, singularmente la garantía constitucional contenida en el artículo 32 de la Constitución Política, que incorpora al ordenamiento constitucional la denominada garantía del debido proceso.

Por considerar que la demanda de amparo se ajustaba a los criterios que, para la impugnación por esta vía constitucional extraordinaria, tiene establecido el artículo 2606 y la doctrina que, sobre el particular, la asentado este Pleno, la acción constitucional fue admitida mediante resolución de 13 de noviembre de 1996 y requerido el funcionario acusado un informe sobre la actuación y, en su caso, enviar el expediente que contiene el proceso laboral dentro del cual se produjo la orden cuestionada por esta vía constitucional, mediante telegrama oficial de la misma fecha.

Los hechos contenidos en la demanda de amparo han sido expuestos en la forma que se transcribe:

> "**PRIMERO**: Mediante escrito de demanda fechado el 21 de mayo de 1991 el Lic. **RAFAEL CARVAJAL ARCIA** demandó a la sociedad **YINH Y ASOCIADOS, S. A.**, EN REPRESENTACIÓN DE **GABRIEL GÓNDOLA**, a efecto de que, previo los trámites legales se condenara a la empresa al pago de B/.2,294.91 en concepto de tiempo restante del contrato (5 meses), 6% correspondiente al tiempo restante y XIII mes correspondiente al tiempo restante;
>
> **SEGUNDO**: Mediante Resolución Providencia N° 19-J. C. D. de viernes 17 de enero de 1991 se admitió la demanda y se ordenó el traslado al demandado, señalando fecha de Audiencia para el 7 de julio de 1992 a las 2 de la tarde;
>
> **TERCERO**: Mediante resoluciones sucesivas de 7 de febrero, 19 de mayo, 21 de julio, 3 de diciembre todos de 1992 y 27 de enero, 23 de junio, 19 de julio, 9 y 18 de octubre, 9 de noviembre y 16 de diciembre, todos de 1993; ordenó correr traslado de la demanda y fijar la respectiva fecha de audiencia.
>
> **CUARTO**: Mediante oficio N° 141-93 de 6 de diciembre de 1993, el Secretario Judicial de la Junta de Conciliación N° 9, **CARLOS BELMO**, envió copia autenticada de la Providencia 11-93 de 6 de diciembre de

1993, según la cual señaló fecha de audiencia para el 16 de diciembre de 1993.

QUINTO: Que la resolución y el oficio 141-993 fueron enviados mediante correo recomendado 010884 de diciembre de 1993.

SEXTO: Que el edicto 7-93, en el cual se notificaba la resolución de 6 de diciembre de 1993 fue fijado en los estratos del despacho el día 13 de diciembre y desfijado el 14 de diciembre de 1993.

SÉPTIMO: Que el día 16 de diciembre de 1993 se celebró la audiencia, sin la comparecencia de la empresa demandada ni de su apoderado por no habérsele notificado ni la demanda, ni la fecha de la audiencia, con anterioridad.

OCTAVO: Que la notificación de la fecha de audiencia, antes mencionada, es decir, por correo recomendado 010884, nunca fue entregada a la persona a quien iba dirigida y reposa en el expediente.

NOVENO: Que mediante sentencia CJ-9 de 16 de diciembre de 1993, proferida por la Junta de Conciliación N° 9 de Colón se Declara injustificado el despido del trabajador **GABRIEL GÓNDOLA**, y en consecuencia condena a la empresa **YINH Y ASOCIADOS, S. A.** a pagarle al trabajador la suma de Dos Mil Doscientos Noventa y Cuatro Balboas con Noventa y un Centavo (B/.2,294.91), en concepto de tiempo restante del contrato, 6% de vacaciones proporcionales, XIII mes proporcional, todos del tiempo restante del contrato, dentro del proceso laboral interpuesto (sic) por **GABRIEL GÓNDOLA VS YINH Y ASOCIADOS, S. A.**

DÉCIMO: Que la sentencia de 16 de diciembre fue notificada al apoderado de **YINH Y ASOCIADOS, S. A.**, quien apeló el día 4 de marzo de 1994, siendo a su vez confirmada la misma por el tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá en Sentencia de 2 de octubre de 1996". (Fs. 98-99).

La norma constitucional vulnerada mediante la resolución jurisdiccional laboral la constituye, como ya ha quedado expresado, el artículo 32, que recoge la institución del debido proceso. El amparista, señala, como concepto de la infracción constitucional, en lo sustancial, lo que se transcribe a continuación:

"...

2. Debe agregarse que el artículo N° 11 de la Ley N° 7 de 25 de febrero de 1995, por medio de la cual se crea, dentro de la jurisdicción Especial del Trabajo, las Juntas de Conciliación y Decisión establece:

"Artículo 11: A la parte demandada y demandante, se les notificará personalmente la resolución que ordena el de la demanda, la cual también contendrá la fecha de audiencia."

Como resultado de esta omisión, la parte demandada no ha sido debidamente oído en el proceso, lo que la ha dejado en indefensión y constituye una violación del debido proceso, pues ni siquiera pudo acceder al proceso para aceptar o no los hechos de lo demandado, pues tenía hasta el momento de la audiencia para contestarla y no le fue notificada ni la demanda, ni la fecha de audiencia.

La fecha de la audiencia no le fue notificada legalmente al apoderado de la demandada o a la misma demandada, ya que existiendo constancia de que el apoderado y la demandada tenían oficinas en otra ciudad y no en la ciudad de Colón, en forma muy casual el coordinador señala, después de muchas fechas y violaciones al procedimiento, una fecha para audiencia, sin notificar personalmente la demanda y como digo, en forma casual, el mismo día que se señala

> se le notifica al apoderado del demandante y luego para notificar la fecha al demandado que es el más importante, pues la misma ley establece como sanción la nulidad, aplica una norma en forma sorpresiva amañada e ilegal, dejando en indefensión total a la empresa que es quien será afectada en su patrimonio y a quien la norma le obliga a notificar y como primera medida para trabar la litis". (Fs. 101-102).

La garantía del debido proceso que incorpora la Constitución Política en su artículo 32, tiene un rancio abolengo como institución fundamental garantizadora de los derechos fundamentales, en todas nuestras Cartas Constitucionales, y ha sido objeto de copiosísima jurisprudencia por parte de este Pleno. Consiste, como ha puntualizado el Magistrado ARTURO HOYOS, en "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por el contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos" (ARTURO, Hoyos, "El Debido Proceso", Editorial Temis, S. A. Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1996, pág. 54).

Uno de los derechos esenciales que integran la institución del debido proceso, lo constituye sin ningún género de dudas el acto de comunicación procesal denominado la notificación o el emplazamiento de la demanda a quien aparece como demandado, instituto procesal de primerísima importancia, de allí que los ordenamientos procesales de la más variada naturaleza hayan dedicado un número apreciable de disposiciones que regulen dicho acto procesal de comunicación, erigiéndolo, incluso, como causal de nulidad en la medida en que no se realice con arreglo a las normas procedimentales que la regulan. Pero el hecho de que dicha regulación esté contenida en normas procesales de rango legal, no puede llevar a la conclusión de que este acto procesal no reviste materia constitucional de aquéllas que pueden sustentar la acción de amparo constitucional, ya que, como acertadamente sostiene el Magistrado Arturo Hoyos, "integra esta garantía fundamental un derecho elemental de las personas de ser oídas por el tribunal que conoce del caso antes de que éste sea decidido mediante sentencia" (Cfr. Arturo Hoyos, "El debido proceso, página 62, Editorial Temis, Bogotá, 1996).

Desde la vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva (la que, con arreglo a la doctrina de este Pleno forma parte de la garantía constitucional del debido proceso), la doctrina española le ha dedicado una importancia decisiva, como derecho fundamental. Así, por ejemplo, FRANCISCO CHAMORRO BERNAL, ha señalado:

> "...
> El derecho a la tutela incluye, como una derivación del derecho a ser parte que ya hemos analizado, el ser llamado al proceso en el que se tenga interés y que el emplazamiento para el mismo sea personal y directo cuando el demandado esté identificado, siendo ello una garantía para el afectado y una carga que corresponda levantar al Juez o Tribunal, formando parte del contenido esencial del derecho consagrado en el art. 24 de la CE.
>
> Cuando las notificaciones tienen por objeto el emplazamiento de una persona para que comparezca en un determinado procedimiento, cumplen la finalidad de permitir el acceso al mismo y por tanto afectan directamente al derecho a la tutela. Cuando tales notificaciones son de resoluciones que se producen dentro de un procedimiento ya iniciado, las infracciones que en la práctica de las mismas puedan producirse afectan al derecho a la tutela, no en cuanto derecho de acceso al proceso (en el que ya se está comparecido) sino en cuanto vulneran el derecho a la defensa que pudiera ejercitarse

> precisamente contra las resoluciones no notificadas o deficientemente notificadas".
> (FRACISCO CHAMORRO BERNAL, "La tutela judicial efectiva", Editorial Bosch, 1994, pág. 60).

IÑAKI ESPARSA LEIBAR, por su parte, dice:

> "...
> El principio de contradicción requiere del OJ que este se asegure, en la medida de lo posible, de que la citación o emplazamiento a quienes deban comparecer en la litis sea personal. Las pautas a las que atenerse sobre esta materia las fija la jurisprudencia del TS que establece: a) Que la citación por edictos haya de ser considerada, cual aparece plasmado en el art. 269 LEC, como el último de los medios de comunicación que el ordenamiento procesal establece a dichos efectos; b) Que el órgano judicial competente, ante un alegado ignorado paradero de la contraparte, se funde para acudir a dicho postrer remedio, en criterios de razonabilidad; c) A su vez, el cumplimiento de dichas garantías ha de ponerse en conexión con la conducta de las partes procesales, ya que mientras si la imposibilidad de la citación personal es provocada por quien pretende escudar en ella la indefensión, ésta no es admisible; más cuando la ocultación deliberada del domicilio de la contraparte sea obra del demandante, -principios de lealtad y buena fe- es lógico deba perjudicar a éste y no a su oponente".
> (IÑAKI ESPARZA LEIBAR, "El Principio del Proceso Debido", Impreso en España 1995, pág. 184).

Desde la vertiente del derecho de defensa, este Pleno, en sentencia de 13 de septiembre de 1996 ha dicho:

> "...
> Es así como el proceso está constituido por una serie de elementos dirigidos a asegurar la efectiva o adecuada defensa de las partes en el mismo. A estos elementos procesales se refiere el Doctor Arturo Hoyos en su interesante obra sobre el debido proceso, al indicar que "si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho a aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medio de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de éstas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguirse un trámite distinto al previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo, desconoce la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional" (HOYOS, Arturo. **El debido proceso**. Editorial Temis, S. A., Santa Fe de Bogotá, 1995, págs. 89-90).
>
> Es importante agregar, que en numerosos precedentes, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la violación del debido proceso únicamente ocurre cuando se desconocen o pretermitan trámites esenciales del proceso que, efectivamente, conlleven a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes".
> (Sentencia de 13 de septiembre de 1996. Ponente: Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera. Fs. 10-11).

El acto procesal de notificación, como acto inicial del proceso, mediante el cual la parte demandada es puesta en conocimiento de la pretensión de la demandante, que, en términos generales, ha de ser realizada personalmente al demandado o al apoderado debidamente constituido en el proceso, es, además, una señalada carga para el Tribunal, que debe desplegar particular esfuerzo en propiciar la notificación personal de la demanda; pero si el acto de comunicación

procesal no puede llevarse a cabo, pese a la diligencia desplegada por el tribunal que conoce de la pretensión de la parte actora, ante esta deficiencia no puede cruzarse de brazos el tribunal, a quien le está encomendada la dirección del proceso, sino que el ordenamiento procesal panameño, sea el civil, penal, contencioso administrativo o laboral, instituye mecanismos alternos, cuando el paradero del demandado es desconocido para el demandante o para el tribunal (artículo 562 del Código de Trabajo), como cuando el apoderado, debidamente constituido el proceso, haciendo gala de deslealtad procesal, se sustrae deliberadamente a la notificación, por parte del tribunal, de la demanda, ofreciendo medidas alternativas de suplir la notificación personal, como lo es la que se contiene en el artículo 888 del Código de Trabajo, y, aún, cuando median actos de la parte demandada o de su apoderado que manifiestan conocer la demanda interpuesta en su contra, suplen tal acto de asentimiento con la notificación (artículo 885 del Código de Trabajo), mecanismos alternativos de notificación personal que, naturalmente, han de ser utilizados de manera excepcional por el tribunal y una vez que haya desplegado un particular celo enderezado a realizar la comunicación procesal de la demanda, artículos éstos del Código de Trabajo que son de aplicación en los procesos laborales que se surten ante las JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN (véase sentencias de 29 de junio de 1995 y de 2 de febrero de 1996). Arribar a una conclusión contraria llevaría a la tesis, absurda por lo demás, de que es una de las partes en el proceso, en este caso el demandado, quien determina la dirección del proceso, en lugar del Juez o tribunal competente, que haría, además, nugatorio el derecho de acción, inserto dentro del principio de la tutela judicial efectiva.

Si se analiza adecuadamente el proceso laboral, sobre todo en la primera instancia, surtida ante la Junta de Conciliación y Decisión competente, debemos llegar a la conclusión de que el tribunal realizó, mas allá del celo normal de todo juzgador, esfuerzos encaminados a hacer efectiva la notificación personal de la sentencia, al punto de que se llevaron a cabo siete intentos de notificación personalmente por los agentes del tribunal laboral, 6 en forma telefónica, una comunicación por vía edictal, y una comunicación por correo certificado, y, debido a esta increíble demostración de deslealtad procesal, la fecha de la audiencia, que forma parte del acto de comunicación procesal, hubo de ser pospuesta, por falta de notificación del apoderado de la parte demandada en doce ocasiones diferentes, conducta ésta que amerita ciertamente una sanción por parte de este Pleno, con fundamento en el numeral 15 del artículo 199 del Código Judicial.

A mayor abundamiento, a foja 37 del cuaderno contentivo del proceso laboral, allegado a este Pleno, se puede apreciar una comunicación que el apoderado de la demandada dirige al tribunal laboral, visible a foja 37, solicitando posposición de la audiencia convocada para el día 5 de agosto de 1993, instante mismo en que se configuró el supuesto normativo contenido en el ya citado artículo 885 del Código de Trabajo, que este Pleno se permite transcribir:

> "Artículo 885. Si la persona a quien deba notificarse una resolución, se refiere a dicha resolución en escrito suyo, o en otra forma se manifestare sabedora o enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión en relación con la misma, dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal".

Es evidente, por lo tanto, que la orden impugnada mediante este proceso constitucional no ha violado disposición procesal alguna de orden laboral, como ha quedado plenamente demostrado en este proceso constitucional, sino, por el contrario, ha reflejado acto de deslealtad procesal por parte del procurador de la parte demandada, conducta procesal ésta que amerita la imposición de una sanción por parte de este Pleno, vista la conducta desleal desplegada por dicho procurador judicial.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado JULIO ERNESTO ESPINAL, en representación de la persona jurídica YINH Y ASOCIADOS, S. A., contra la orden

de hacer contenida en la sentencia CJ-9 de 16 de diciembre de 1993, proferida por la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9, de Colón.

Se impone una sanción de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00), al apoderado de la parte demandada y amparista en este proceso constitucional.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GRANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LCDO. GIOVANI A. FLETCHER H., EN REPRESENTACIÓN DE MIGUEL A. DURÁN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 1169 DE 3 DE JUNIO DE 1996, DICTADO POR LA JUEZ CUARTA DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción interpuesta por el Lcdo. Giovani A. Fletcher H., en representación de MIGUEL A. DURÁN, contra la Orden de Hacer contenida en el Auto N° 1169 de 3 de junio de 1996, dictado por la Juez Cuarta de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil.

El Magistrado Sustanciador de Primera Instancia decidió NO ADMITIR la acción de Amparo, tal como se aprecia a fs. 29 del expediente, por las siguientes razones:

> "Al respecto, se ha de señalar, que la misma enfrenta un obstáculo de carácter formal que impide su admisibilidad. Y es que, en la parte de la resolución judicial atacada mediante el amparo (ver foja 11-12 de este cuaderno), la funcionaria de la jurisdicción civil demandada no ha expedido ninguna orden de hacer o no hacer en contra del accionante, lo que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Nacional, en relación con el artículo 2610 del Código Judicial, se erige en una condición sine qua non para la viabilidad del amparo.
>
> Como ya tuvo la oportunidad de dejarlo sentado este Tribunal en Auto de fecha 7 de marzo de 1995 (donde se ventilaba materia similar al amparo que nos ocupa) se trata simplemente de una decisión judicial en la que se rechaza de plano un incidente que a juicio de la Juez acusada (tomando como fundamento una norma del Código Judicial) no cabe interponerse en un proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de trámite, como lo es el asunto en el que se promovió dicha incidencia (en este sentido resulta ilustrativa, entre otras, la sentencia de 16 de mayo de 1994 y 28 de marzo de 1996, dictadas por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia en materia constitucional)."

La parte actora al notificarse del Auto de 25 de noviembre de 1996, anunció recurso de apelación de tal resolución, el día 26 de noviembre de 1996, como consta a f. 30 del expediente.

Observa este Tribunal Colegiado de Segunda Instancia, que vencido el

término para la sustentación del recurso de apelación, no se presentó escrito alguno.

En vista de que nos encontramos frente a un recurso de apelación contra un Auto, lo procedente es declararlo desierto, en atención a lo dispuesto en el artículo 1122 del Código Judicial.

En consecuencia, los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN DESIERTO el recurso de apelación anunciado por el Licenciado Giovani A. Fletcher H., en representación de MIGUEL A. DURÁN, contra la Orden de Hacer contenida en el Auto N° 1169 de 3 de junio de 1996, dictado por la Juez Cuarta de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO FABIÁN A. ECHEVERS

En el caso que nos ocupa, considero que lo procedente es conocer el fondo del negocio constitucional y no declarar desierto el recurso de apelación interpuesto, en tiempo oportuno, por el apoderado judicial del amparista. La sentencia tiene por fundamento jurídico el artículo 1122 del Código Judicial, párrafo tercero, cuyo texto es el que sigue:

> "Si el apelante no sustentare su recurso y se tratare de providencia o auto apelado, el Juez lo declarará desierto, con imposición de costas".

La norma citada constituye una regla de carácter general, establecida en el Libro Segundo ("Procedimiento Civil") de la excerta procesal, que no tiene aplicación preferente sobre lo normado por el artículo 2616 ibídem, que dispone que el recurrente "podrá sustentar la apelación al interponerla", de conformidad con los canones de interpretación jurídica que establece el Código Civil (a. 14).

Se colige claramente del texto del artículo 2616 del Código Judicial que es potestativo de la parte el sustentar el recurso de apelación anunciado, por lo que la ausencia de esta ritualidad no debe implicar sanción alguna para el amparista.

El declarar desierto el recurso de apelación anunciado, con base al artículo 1122 C. J., como ocurre en la causa bajo examen, constituye no sólo un desconocimiento de la normativa procesal sobre amparo, sino también de la finalidad de este instituto constitucional.

Por lo antes expuesto, SALVO RESPETUOSAMENTE EL VOTO.

Fecha ut supra.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Por no compartir el criterio de mayoría, respetuosamente, salvo el voto.

La resolución señala que "vencido el término para la sustentación del

recurso de apelación, no se presentó escrito alguno" y añade que en vista de que dicho recurso de apelación se interpuso contra un auto, "lo procedente es declararlo desierto, en atención a lo dispuesto en el artículo 1122 del Código Judicial".

En primer lugar considero que la resolución que no admite amparo de garantías constitucionales es una sentencia inhibitoria y no un auto, como se señala en la resolución de mayoría. Consecuentemente estimo que son aplicables los artículos 2616 y 2617 del Código Judicial, que se refieren a la apelación de los fallos dictados en primera instancia dentro de los procesos de amparo de garantías constitucionales. Dichos artículos establecen que el recurrente podrá o no sustentar la apelación al interponerla, debiendo el Superior, en todo caso, decidir la alzada sin más trámite, con vista de lo actuado.

En segundo lugar la resolución tiene como fundamento legal el artículo 1122 ibídem, que establece que una vez recibido el expediente por el Superior, se señalará un término para que el apelante lo sustente y para que el opositor haga valer sus objeciones. No obstante, en los procesos de amparo no hay término de sustanciación, y el presente caso no se concedió, como cuestión de hecho, término alguno para hacerlo.

Por esas consideraciones, salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LCDO. JAIME CHOY GARCÍA EN REPRESENTACIÓN DE JAIME CHEVALIER VALENCIA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA N° PJ-7 (FALLO ORAL INMEDIATO), PROFERIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 7 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL INCOADO POR VÍCTOR M. FONSECA CONTRA JAIME CHEVALIER VALENCIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JAIME CHOY GARCÍA en su condición de apoderado especial de **JAIME CHEVALIER VALENCIA** ha interpuesto acción de **AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES** contra la sentencia PJ-7 emitida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 7, fechada el 25 de abril de 1996.

El examen de la demanda de amparo revela que cumple con los requisitos formales que establece la ley, pues está debidamente formulada, sin embargo, a simple vista se infiere de su contenido que resulta manifiestamente improcedente.

La improcedencia de este extraordinario remedio constitucional, en este caso, se debe a que se está utilizando con el propósito de que la Corte, como tribunal constitucional, revise la actividad de valoración probatoria que desempeñó la Junta de Conciliación y Decisión para resolver el proceso.

Así, el accionante cita como infringido el artículo 32 de nuestra Carta Política, aduciendo que no fueron consideradas las pruebas que él aportó. Para efectos de la conculcación de esta norma (sobre el debido proceso), la jurisprudencia ha reiterado que, en lo que concierne al derecho de presentar pruebas y contradecirlas, "lo que se protege es el derecho a practicarlas, pero la labor de darles mérito legal, dentro del proceso le corresponde sólo al proceso ordinario, y como ya se ha dicho, en el proceso extraordinario de amparo la evaluación probatoria es completamente extraña a su naturaleza" (Fallo de 15

de enero de 1993).

Igualmente, cabe reiterar que la acción de amparo no es una instancia más dentro del proceso, para que el tribunal de amparo revoque la decisión que ha dictado el tribunal natural en uso de las facultades que le otorga la ley. En tal sentido, el "examen probatorio y el valor que al caudal de pruebas le otorga el juzgador, no tiene que ver con violaciones a garantías constitucionales" (Fallo de 4 de marzo de 1994, Reg. Jud. pág. 4).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por JAIME CHEVALIER VALENCIA.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RAÚL E. RODRÍGUEZ ARAÚZ EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FALCON SECURITY INVESTMENT, INC. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 41-DGT-96 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Raúl E. Rodríguez Araúz, interpuso ante esta Corporación de Justicia acción de amparo de garantías constitucionales en su calidad de Presidente y Representante Legal de la empresa **FALCON SECURITY INVESTMENT, INC.**, contra la orden de hacer emitida por el Sr. Santiago Sanford, Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social a través de la resolución N° 41 DGT-96 del 5 de agosto de 1996, confirmada por la resolución N° 66 DGT-96 del 18 de septiembre del mismo año, dictada por la Dirección General de Trabajo; y por la resolución N° DM-39-96 del 15 de octubre del año que decurre, emitida por el Ministro de Trabajo y Bienestar Social, que resolvió la apelación en subsidio y ordenó a la empresa **FALCON SECURITY INVESTMENT, INC.** que iniciara el proceso de negociación del pliego de peticiones presentado por el **SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE AGENCIAS DE SEGURIDAD.**

Es motivo del presente negocio -a juicio del amparista- que el Ministro de Trabajo ordenó a través de la resolución impugnada que la empresa iniciara el proceso de negociación del pliego de cargos presentado por el **SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE AGENCIAS DE SEGURIDAD**, sin determinar si el pliego fue suscrito por las personas que aparecen allí, y si tiene mayor respaldo que el **SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA FALCON SECURITY INVESTMENT, INC.**

Fundamenta el amparista su acción, principalmente en los siguientes hechos:

Que la empresa **FALCON SECURITY INVESTMENT, INC.** fue notificada por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social de la solicitud de dos pliegos de peticiones presentados indistintamente por el **SINDICATO INDUSTRIAL DE LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD** que contaba -según expresa- con el apoyo de 56 "supuestos" trabajadores, y por el **SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA FALCON SECURITY INVESTMENT, INC.**, que contaba con el apoyo de 100 trabajadores.

Que la Empresa contestó, y señaló que en de los 56 firmantes del pliego del **SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD** sólo 18 trabajaban con la empresa con contratos por tiempo definido; y en cuanto al **SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA FALCON SECURITY INVESTMENT, INC.**, los firmantes sí laboraban en esa empresa.

Que luego de la contestación de ambos pliegos, el conflicto se debió solucionar de conformidad con lo que señala el artículo 402 del Código de Trabajo: verificar si los suscriptores del pliego eran fidedignos, si eran empleados de la Empresa en ese momento y cuál de los 2 Sindicatos tiene mayor respaldo de los empleados, por ende mayor representatividad dentro de la Empresa.

Pero que la Dirección General de Trabajo dictó la resolución 41 DGT-96 del 5 de agosto, mediante la que determinó que le correspondía negociar al **SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD** por tener mayor representación, y ordenó al Departamento de Relaciones de Trabajo girar las citaciones correspondientes para iniciar el período de negociación colectiva según lo dispuesto por el artículo 432 del Código de Trabajo.

Que la resolución en comento fue impugnada mediante recursos de reconsideración y apelación en subsidio por el apoderado del **SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA FALCON SECURITY INVESTMENT, INC.** "... ya que se desconoce quiénes son estas personas."

Considera el impugnante que las resoluciones acusadas de inconstitucionales violan los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Nacional.

Afirma que el Director General de Trabajo infringe la primera de las normas de manera directa "... al no cumplir con su deber constitucional y legal de atender las observaciones formuladas por la empresa en la contestación del pliego de cargos; y no verificar si efectivamente los supuestos miembros del Sindicato Industrial de Trabajadores de las Agencias de Seguridad efectivamente laboran en la empresa Falcon Security Investment, Inc."

El artículo 18 constitucional es infringido -a juicio del Licdo. Rodríguez Araúz- de manera directa por el Director General De Trabajo por omisiones en el ejercicio de sus funciones al "no cumplir con el debido proceso" para determinar la verdadera representatividad de los sindicatos que participaron en el conflicto sindical.

También es infringido el artículo 32 de la Carta Magna, porque la Dirección General de Trabajo no verificó previo a la iniciación del proceso de conciliación si quienes respaldan el pliego de cargos presentados por ambos sindicatos laboran en la empresa **FALCON SECURITY INVESTMENT, INC.**, trámite que debe ser cumplido por el funcionario acusado.

En otro sentido, es transgredido -según el accionante- el artículo 73 del Estatuto Fundamental, toda vez que el conflicto sindical que se examina no se cumplió con las normas constitucionales y legales que regulan la jurisdicción del trabajo, porque no se verificó en la Empresa si los trabajadores que apoyan las diferentes organizaciones sindicales trabajan o no en dicha Empresa para determinar quiénes pueden representar a los trabajadores.

Advierte esta Corporación de Justicia que la esencia de la presente acción es el incumplimiento del señor Director General de Trabajo, Licdo. Santiago Sanford, de la verificación de la representatividad de los sindicatos involucrados en el presente conflicto, incumpliendo lo normado en los artículos 402 y 432 del Código de Trabajo.

El artículo 402 establece las reglas a seguir en caso de que varias organizaciones de trabajadores pidan la celebración de una convención colectiva en la misma empresa, y no se pusieren de acuerdo entre ellas.

Por su parte, el artículo 432 del mismo Código señala que presentado el pliego de peticiones se inicia el proceso de conciliación.

Lo anterior demuestra que las normas impugnadas como violatorias de las garantías constitucionales de la empresa **FALCON SECURITY INVESTMENT, INC.** son de carácter eminentemente legal, y no tienen rango constitucional para ser consideradas mediante la presente acción.

La jurisdicción constitucional no constituye una tercera instancia para deliberar sobre lo correcto o erróneo de las consideraciones que tuvo el Director General de Trabajo para disponer el Sindicato que ostentaba la representatividad para negociar la convención colectiva en nombre de los trabajadores de la empresa amparista.

Ha de tratarse de la violación de garantías fundamentales establecidas por la Constitución que hayan sido directamente desconocidas.

Por lo anterior, considera esta Colegiatura que no es viable la presente acción.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el Licdo. Raúl E. Rodríguez Araúz como Presidente y Representante Legal de la empresa FALCON SECURITY INVESTMENT, INC.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICDO. MANUEL SALVADOR HERRERA DELGADO, EN REPRESENTACIÓN DE TOMÁS ALBERTO HERNÁNDEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 14 DE 14 DE FEBRERO DE 1996, EXPEDIDA POR RAQUEL NG, DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Manuel Salvador Herrera Delgado interpuso acción de amparo de garantías constitucionales en representación de **TOMÁS ALBERTO HERNÁNDEZ,** contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 14 del 14 de febrero de 1996, dictada por **RAQUEL NG**, Directora Nacional de Administración del Ministerio de Educación, y confirmada por la resolución N° 40 del 10 de octubre de 1996, expedida por el Dr. **PABLO THALASSINOS**, Ministro de Educación.

La resolución en comento solicita al Órgano Ejecutivo la destitución del amparista, del cargo de Trabajador Manual en la Dirección General de Educación.

Por encontrarse el negocio en etapa de admisibilidad, procede la Corte a verificar el cumplimiento de los requisitos legales para su concesión.

Se observa que el libelo cumple con las exigencias normadas por el artículo 2610 del Código Judicial, ya que hace mención expresa de la orden impugnada; señala el nombre del servidor público que la impartió; así como la Institución a la que pertenece; establece los hechos en que fundamenta su pretensión; y las garantías fundamentales que considera violadas y el concepto en que lo han sido.

Pero se advierte una omisión que impide admitir la acción; al expresar el amparista los hechos en que fundamenta su acción, revela que no acudió a la vía contencioso-administrativa a través de un recurso de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de esta Corporación de Justicia, para que se concediera su pretensión.

Ya esta Colegiatura ha señalado innumerables veces que al agotarse la vía gubernativa -a través de los recursos de reconsideración y apelación- es menester que el impugnante recurra ante la citada jurisdicción, y lograr un pronunciamiento de la Sala Tercera para considerar agotados todos los recursos judiciales en los amparos de garantías constitucionales.

Por lo tanto, no cumple la presente acción con el requisito normado en el segundo párrafo del artículo 2606 del Código Judicial, que exige el agotamiento de todos los recursos legales disponibles para poder admitir una acción como la presente, y no hay otro remedio que declarar la acción inadmisible.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales presentado por el Licdo. Manuel Salvador Herrera en representación del señor TOMÁS ALBERTO HERNÁNDEZ contra la orden de hacer contenida en la resolución N° 14 del 14 de febrero de 1996, expedida por RAQUEL NG, Directora Nacional de Administración del Ministerio de Educación.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NOEL A. CEDEÑO CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **ERIC ELIÉCER PRADO IZQUIERDO**, apoderado judicial de **NOEL A. CEDEÑO**, interpuso recurso de Habeas Corpus contra EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, por considerar que esta autoridad mantiene detenido ilegalmente a su representado.

Así las cosa, al ingresar el expediente al despacho sustanciador y encontrándose el proyecto para la lectura del resto de los Magistrados, que conforma el Pleno de esta Alta Corporación de Justicia, se recibió en la Secretaría General escrito de **DESISTIMIENTO** presentado por el proponente de la acción de habeas corpus que a su letra dice:

> "HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, REPÚBLICA DE PANAMÁ, EN PLENO, E. S. D.
>
> Quien suscribe, Licdo. **ERIC ELIÉCER PRADO IZQUIERDO**, ABOGADO en ejercicio, actuando en mi condición de defensor técnico del joven **NOEL A. CEDEÑO**, comparezco respetuosamente ante vuestra honorabilidad a objeto de presentar formar DESISTIMIENTO de la acción constitucional de HABEAS CORPUS interpuesta en favor del

prenombrado y en contra de la Fiscalía Ira. Especializada en Delitos Relacionados con Drogas del Ministerio Público.

Panamá, noviembre de 1996. (sic)

Con Consideración y Respeto,

(fdo.) Lcdo. ERIC ELIÉCER PRADO IZQUIERDO
Idoneidad Profesional N° 2941."

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA EL DESISTIMIENTO presentado, ORDENA EL CESE del procedimiento; y, el ARCHIVO del expediente.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUO WEI MING O LUO WEI MENG CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. **JOSÉ BAL**, actuando en representación de LOU WEI MING o LUO WEI MENG, ha interpuesto recurso de habeas corpus en contra del Director Nacional de Migración.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Director Nacional de Migración, dicho funcionario contestó mediante la Nota N° DNMYN-357-96 de 7 de noviembre de 1996, lo siguiente:

"a) El señor LOU WEI MING de nacionalidad china fue aprehendido por unidades de la Policía Técnica Judicial el día 24 de julio de 1996 y remitido a nuestra institución mediante nota de la misma fecha. Posteriormente, se procedió a ordenar la detención del mismo mediante Resolución N° DNMSI-0023 del 25 de julio de 1996.

b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicho ciudadano son:

PRIMERO: Que, el día 24 de julio de 1996, unidades de la Policía Técnica Judicial procedieron a realizar un operativo por motivo del secuestro cometido contra el ciudadano NUNG AU YUENG. Dicho operativo, tal y como lo explica la Policía Técnica Judicial en informe remitido a nuestra Institución, culminó con la aprehensión de varios sujetos de origen asiático, entre ellos el señor LOU WEI MING.

SEGUNDO: Posteriormente, y a raíz de que los sujetos involucrados, todos de origen asiático, proporcionaron nombres falsos a la Policía Técnica Judicial, dicha institución procedió a remitirlos a la Dirección Nacional de Migración y Naturalización a fin de verificar su status migratorio y su identificación verdadera.

TERCERO: Una vez en nuestra Institución se pudo verificar que el nombre verdadero era en efecto LOU WEI MING.

CUARTO: Se procedió entonces a remitir la orden de Deportación del territorio nacional del señor LOU WEI MING, conjuntamente con los otros asiáticos involucrados en el hecho, por motivos de seguridad u orden público, tal cual lo expresa el Artículo 36 y 65 de nuestro Decreto Ley en donde se manifiesta que pueden ser deportados y en consecuencia, cancelar las Permanencias Definitivas, si el extranjero se encuentra en alguna de las situaciones expuestas en el Artículo 36.

QUINTO: Dicha Resolución de Deportación fue debidamente notificada a los interesados y a la fecha se encuentra ejecutoriada.

SEXTO: Se han mantenido conversaciones con los representantes del Gobierno de la República Popular de China, para el ingreso de dichos ciudadanos en ese país, para así poder efectuar la deportación. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna; pero es importante señalar, que por el hecho de carecer de una representación diplomática de este país en Panamá, el proceso de deportación se hace más demorado.

SÉPTIMO: Es importante señalar que mediante fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 13 de septiembre de 1996, se declaró legal la detención del señor LUO WEI MING por parte de la Dirección Nacional de Migración. En aquella oportunidad, la Corte consideró procedente declarar legal la medida cautelar de prevención de libertad, impuesta a dicho ciudadano por esta institución aplicando lo establecido en el segundo párrafo del artículo 65 del Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960. Los motivos de derecho están fundamentados en los procesos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6ª del 5 de marzo de 1980, específicamente los Artículos 36, 65, 80 y 85 que al tenor establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 36: El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al país o el tránsito por el mismo a cualquier extranjero, asó como expulsar del territorio nacional a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, siempre que ello sea necesario o conveniente por razones de seguridad, salubridad o de orden público.

ARTÍCULO 65: Los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingreso o que permanecieran en el mismo después de vencer sus visas de transeúntes, turismo, tránsito o visitante temporal, o sus tarjetas de turismo o de tránsito, sin residencia autorizaran puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para ser deportados o para tomar, respecto de ellos, cualquier otra medida que sea de lugar. El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá cancelar los permisos definitivos, provisionales o de visitante temporal, así como los permisos o visas de transeúntes, turismo, visitante temporales o de tránsito cuando sus tenedores se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los Artículos 36, 37 y 38 de este Decreto Ley. Estos extranjeros serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para su deportación, salvo los casos en que ésta sea decretada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, de acuerdo con el primer inciso de ese Artículo.

ARTÍCULO 80: Son atribuciones del Departamento de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia, las siguientes:

e) Hacer cumplir las sanciones de multa y deportación que se impongan, de conformidad con lo que establecen las disposiciones de este Decreto Ley;

ARTÍCULO 85: El Director del Departamento de Migración despachará y decidirá en primera instancia los asuntos relacionados con la

> Migración en general. Las resoluciones dictadas por este funcionario de conformidad con las disposiciones de este Decreto Ley, serán notificadas personalmente al interesado o a su representante o apoderado. Si no pudieren ser notificados personalmente, se fijará un edicto en papel común en lugar público del respectivo Despacho por el término de tres (3) días hábiles, con inserción de la parte dispositiva de la resolución.
>
> c) El señor LOU WEI MING, de nacionalidad china se encuentra a nuestras órdenes en espera de poder efectuar la deportación del territorio nacional y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 4891 Bis del 31 de julio de 1996."

El apoderado judicial de la parte actora manifiesta en su escrito, que el señor LUO WEI MING no es una persona extranjera indocumentada, pues, posee sus documentos migratorios en regla e incluso obtuvo la permanencia definitiva en calidad de residente mediante la Resolución N° 19.964 de 23 de enero de 1992, con derecho a cédula de identidad de personal. A ello añade, que el pasaporte de su representado distinguido con el número 2808122 fue entregado el 8 de octubre de 1996 a las autoridades de la Policía Técnica Judicial, quienes posteriormente remitieron dicho documento al Departamento Nacional de Migración mediante la Nota DG-01-218-96 de 9 de octubre de 1996. Afirma el Lcdo. Bal que ante la incorporación al proceso del documento de su representado, se formalizó el 15 de octubre del presente año, una solicitud de libertad fundamentada en que el señor LUO WEI MING, no es una persona asiática indocumentada. Finalmente, sostiene el Lcdo. Bal que el señor LUO WEI MING es padre de dos menores panameños.

Vale destacar que mediante resolución de 13 de septiembre de 1996, el Pleno de esta Corporación declaró legal la detención de la que es objeto el señor LUO WEI MING con fundamento en lo establecido en el artículo 65 del Decreto 16 de 1960 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36 de la misma ley. En esa oportunidad, el Pleno, al entrar a considerar el mérito del recurso de habeas corpus, observó que el señor LUO WEI MING o LUO WEI MENG entró al país el día 18 de noviembre de 1988 en calidad de turista y el 13 de noviembre de 1989 obtuvo visa y permiso provisional de permanencia. Posteriormente, presentó solicitud de permanencia definitiva en calidad de residente y mediante Resolución N° 19.964 del 23 de enero de 1992, se le concedió permanencia definitiva con derecho a cédula de identidad personal. En cuanto a los hechos que motivaron la detención preventiva de la cual es objeto el señor LOU WEI MING, el Pleno trajo a colación que el 24 de julio de 1996, unidades de la Policía Técnica Judicial efectuaron un operativo por motivo del secuestro del señor NUNG AU YUENG que culminó con la aprehensión de varios sujetos de origen asiático, entre ellos, LOU WEI MING el cual es objeto de investigación según el informe rendido por el Director de la Policía Técnica Judicial mediante Nota N° A. L. 1113-96 de 16 de agosto de 1996. Se destacó igualmente que en dicho informe se señala, que al procurar una identificación veraz de los sindicados, se pudo constatar que los pocos documentos aportados eran falsos o alterados de muy mala fe, razón por la cual fueron puestos a órdenes del Director Nacional de Migración y Naturalización.

Ahora bien, si bien es cierto que el apoderado judicial del señor LUO WEI MING fundamenta su solicitud en que su representado no es una persona extranjera indocumentada sino que, por el contrario, posee todos sus documentos migratorios en regla, e inclusive, aparece certificación de la Dirección Nacional de Migración en la que consta que el señor LUO WEI MING es portador de cédula de identidad personal, no es menos cierto que al efectuar nuevamente un análisis a los hechos planteados, el Pleno reitera que el Decreto Ley 16 de 1960 modificado por la Ley 6 de 1980, faculta al Director Nacional de Migración y Naturalización para tomar medidas directas sobre quienes permanezcan en nuestro territorio nacional. Así, el segundo párrafo del artículo 65 del Decreto 16 de 1960, es claro y faculta al Ministerio de Gobierno y Justicia a cancelar "los permisos definitivos, provisionales o de visitante temporal, así como los permisos o visas de transeúntes, turismo, visitantes temporales o de tránsito ...", cuando sus tenedores se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los artículos 36, 37 y 38 de dicho decreto. En ese sentido, el artículo 36 antes citado, es enfático cuando señala que, "el Ministerio de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al país o el tránsito por el mismo a cualquier extranjero, así como

expulsar del territorio nacional a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, siempre que ello sea necesario o conveniente por razones de seguridad, salubridad o de orden público "(Subraya el Pleno).

De todo lo anterior, se desprende que, efectivamente, el señor LOU WEI MING o LOU WEI MENG ha sido privado de su libertad mediante la Resolución N° DNMSI-0023 de 25 de julio de 1996, expedida por autoridad competente y de conformidad con lo dispuesto el Decreto Ley 16 de 1960, y no ve el Pleno razón alguna para variar el criterio, por lo que lo procedente es, pues, declarar legal la medida cautelar de privación de libertad impuesta a dicho señor, por el Departamento de Migración y Naturalización.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la medida cautelar de privación de libertad expedida y practicada por el Departamento de Migración y Naturalización contra LOU WEI MING.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN ALBERTO GARIBALDI CHIFUNDO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado José Antonio Henríquez Solano, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus a favor de JUAN ALBERTO GARIBALDI CHIFUNDO y contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Acogida la acción mediante Auto de 13 de noviembre de 1996, expedido por el Juzgado Cuarto Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, se libró mandamiento de habeas corpus al Jefe de la Sub Estación de Policía de Alcalde Díaz, a fin de que pusiera al detenido a órdenes de dicho Juzgado y rindiera el informe sobre las materias a que se refiere el artículo 2582 del Código Judicial. El funcionario antes mencionado rindió el informe mediante Nota DAL-1281-96 del 13 de noviembre de 1996, en la cual señala que no tiene bajo su custodia ni a sus órdenes al ciudadano Juan Alberto Garibaldi Chifundo y que el mismo fue transferido a la Policía Técnica Judicial de Ancón, ya que en su contra existía Oficio N° 258 emitido por el Juzgado Primero de Circuito de Colón por Posesión Ilícita de Drogas. En vista de lo antes expuesto el Juez Cuarto Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, mediante resolución expedida el 13 de noviembre de 1996, se inhibió del conocimiento de la presente demanda de habeas corpus y la remitió al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Acogido el presente recurso de habeas corpus mediante resolución expedida el 14 de noviembre de 1996, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Director de la Policía Técnica Judicial quien rindió el informe mediante Nota N° A. L. 1516-96 de 15 de noviembre de 1996, en el cual señaló lo siguiente:

> "A. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **JUAN ALBERTO GARIBALDI CHIFUNDO**.
>
> B. No tiene razón de ser, en base al punto anterior.

C. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al prenombrado **JUAN ALBERTO GARIBALDI CHIFUNDO.** El mismo fue trasladado a la Cárcel Modelo mediante Oficio N° 1901 de 12 de noviembre de 1996 y se encuentra a disposición del Juzgado Primero de Circuito Penal, de la Provincia de Colón."

Frente a la situación planteada, se deduce que en el negocio sometido a consideración en esta oportunidad, la Corte Suprema carece de competencia para conocerlo, como quiera que, según lo establece el numeral 2 del artículo 2602 del Código Judicial, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial son competentes para conocer de la acción de habeas corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia, lo cual es aplicable a la acción de habeas corpus que se examina, ya que según lo expresa el Director de la Policía Técnica Judicial, no tienen bajo su custodia al señor GARIBALDI, pues se encuentra en la Cárcel Modelo a órdenes del Juzgado Primero de Circuito Penal de la Provincia de Colón.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE del conocimiento de la acción de habeas corpus presentada a favor de JUAN ALBERTO GARIBALDI CHIFUNDO y DECLINA su conocimiento en el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, para que se le dé el trámite que la ley establece.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAIME DE COSTA COBOS CONTRA EL FISCAL TERCERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señorita **YAZDEN YASSULY SANTANA HERRERA**, actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 2573 del Código Judicial y 23 de la Constitución Nacional, promovió acción de habeas corpus a favor de **JAIME DE COSTA COBOS,** detenido preventivamente por orden de la Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial.

Mediante providencia de 21 de noviembre de 1996 legible a foja 5 del presente negocio, se libró mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado para que en el término de ley, rindiera un informe sobre las causas de la detención del señor **JAIME DE COSTAS COBOS.**

En ese sentido el representante del Ministerio Público rindió oportunamente el informe que le fue solicitado, y el pasado 26 de noviembre se sometió a la consideración del resto de los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el correspondiente proyecto de sentencia.

Encontrándose en lectura de los honorables Magistrados el mencionado proyecto de resolución judicial, la señorita **YAZDEN YASSULY SANTANA HERRERA** desistió de la acción de habeas corpus propuesta. Dicho escrito calendado 27 de noviembre de 1996, fue recibido ese mismo día en la Secretaría General de esta Corporación (cfr. fs. 10 del expediente).

Como quiera que "toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente" conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por la señorita YAZDEN YASSULY SANTANA HERRERA dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de JAIME DE COSTA COBOS, y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS, A FAVOR DE ANTONIO JESÚS HOQUEE MORALES, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El 26 de noviembre de 1996, el licenciado Arturo McTaggar Escartín, presentó ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia escrito contentivo de la acción de Habeas Corpus a favor del señor **ANTONIO JESÚS HOQUEE MORALES**, contra el **DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL.**

Cumplidos los trámites del reparto, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada quien, mediante Nota N° A. L. 1574-96 de 29 de noviembre de 1996 (f. 6), manifestó lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **ANTONIO JESÚS HOQUEE MORALES.**
> 2. No tiene razón de ser en base a la respuesta anterior.
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al prenombrado **HOQUEE MORALES.**"

Del informe transcrito se concluye que el señor **ANTONIO JESÚS HOQUEE MORALES** se encuentra en pleno goce de su libertad ambulatoria y la acción de habeas corpus está destinada constitucionalmente a preservar ésta libertad, contra cualquier orden de detención que no reúna las exigencias que la ley señala y en el presente caso, la persona a favor de quien se le promovió la acción correspondiente se encuentran en libertad; luego entonces, no procede la continuidad procesal de la acción interpuesta.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA EL CESE de procedimiento en el presente caso y ORDENA el archivo del mismo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ CONTRA LA JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO DE COCLÉ, RAMO PENAL, MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Tomás Arturo Góndola Díaz ha interpuesto recurso de apelación contra sentencia de 13 de noviembre de 1996 proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante la cual se declara legal la orden de detención preventiva de la cual es objeto el señor Hernando Sánchez López.

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial decretó legal la orden de detención emitida por el Juzgado Segundo Circuito de Coclé, Ramo Penal pues, en su criterio, si bien es cierto que el imputado, al momento de ser aprehendido, aceptó que poseía drogas para su consumo personal, hay fuertes indicios que lo vinculan con los hechos que se le imputan, como lo son el hecho de que el dinero que le fuera incautado era fruto de su trabajo de buhonería y que nada acredita esa labor. Por otro lado, el Psiquiatra Forense certificó que el imputado no presenta signos de adicción a las drogas, lo que resulta incongruente con su declaración en la que afirma que desde los 12 años consume sustancias ilícitas y que su consumo diario es de tres carrizos los cuales adquiere a un costo de dos balboas (B/.2.00). La Magistrada Delia Carrizo de Martínez salvó su voto, ya que consideró que la detención preventiva del imputado es ilegal debido a que no se ha comprobado que se dedique a la venta de drogas.

El licenciado Góndola sustenta su apelación en los siguientes términos:

"PRIMERO: El día 15 de junio de 1996 a las 4:00 p. m. en la Cantina Tuly de Rio (sic) Hato al momento de hacer efectiva una Boleta de Captura, agente de la Pilícia (sic) de ese Distrito observaron a Sánchez López y le solicitaron la cédula.

SEGUNDO: Ante tal situación "Según los agentes de Polícia" (sic) HERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ se puso nervioso razón por lo que fue conducido a la Sala de Guardia de la Sub Estacion (sic) de Polícia (sic) de Rio (sic) Hato, para el registro de rigor.

TERCERO: Que en el recinto Policial en referencia al efectuar el registro fue que se encontró el Dinero y la Droga incautada.

CUARTO: Al ser analisada (sic) la Sustancia ilícita la misma arrojo (sic) resultados positivos para la determinación de Cocaína en un peso de 0.24 gramos.

QUINTO: El imputado al rendir Indagatoria acepta que la droga incautada era para su consumo y que el dinero era producto de la buhoneria (sic).

RAZONES DE LA ILEGALIDAD DE LA DETENCIÓN:

La requisa a la persona de HERNANDO SÁNCHEZ LÓPEZ fue realizada en un recinto Policial, sin orden de Autoridad competente para hacerle en flagrante violación del debido proceso toda vez que la misma se hace en desmedro de las garantías procesales y el equilibrio que debe existir entre los embates del estado y el derecho a defensa.

No le corresponde al imputado probar la licitud del dinero encautado (sic), por el contrario corresponde al estado la carga de la prueba.

> El suscrito solícito (sic) al Juez acusado Medida Cautelar sustitutiva de la detención preventiva misma que fue sustituida e impugnada por el Ministerio público, siendo revocada por el Tribunal Superior no es consono (sic) con la realidad procesal situación a la que se suma la Honorable Magistrada DELIA CARRIZO DE MARTÍNEZ en su salvamento de voto, quien esterioriza (sic) que la medida otorgada por la Juez de grado era la más cónsona con la realidad procesal, toda vez que 0.24 gramos de Cocaína es una cantidad menor, distribuidas en Seis (6) Carrizos no da ha (sic) pensar que fuese para el tráfico o la venta y no se ha comprobado en Autos que el dinero encautado (sic) haya sido producto de la venta de droga aunado al hecho de que aunque cintificamente (sic) no se haya aportado prueba de adicción, tal afirmación no lo excluye de que efectivamente dicho sujeto consuma droga." (Fs. 16 y 17).

Se trata de un proceso iniciado de oficio, por cuanto que al señor Hernando Sánchez López se le vincula a delito relacionado contra la Salud Pública.

A foja 1 de las sumarias consta el informe de novedad suscrito por el cabo 1° 11511 Tobías Lorenzo que señala que estando en servicio de ronda, en compañía del Cabo 2° 2010 Jorge Prado, entraron en la Cantina Tuly en el área de Río Hato y encontraron al ciudadano Hernando Sánchez López quien al solicitarle la cédula de identidad personal, se puso nervioso, razón por la cual fue conducido a la sala de guardia de la Sub-estación de Policía de Río Hato para su registro, encontrándosele veinticinco balboas en billetes de un balboas con tres monedas de veinticinco centésimos y dos monedas de diez centésimos que daban un total de noventa y cinco centésimos (0.95), y una bolsita plástica transparente con seis carrizos que contenían un polvo blanco, presumiblemente droga.

La Corte observa de fojas 19 a 20 de las sumarias, la providencia que declara la detención preventiva en la cual se informan las circunstancias que culminaron con la detención del ciudadano Hernando Sánchez López.

Consta a foja 30 del expediente la Nota N° 213 de 21 de junio de 1996 suscrita por el doctor Octavio E. De León, médico psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal, en el que certifica que el señor Sánchez no presenta signos de adicción a las drogas.

También consta de fojas 16 a 18 la declaración indagatoria de Hernando Sánchez López quien admite que los seis carrizos son para el consumo de drogas y que los veinticinco balboas en billetes de uno son producto de su trabajo de buhonería, además señala que consume drogas desde los 12 años. A fojas 55 y 56 se amplía esta indagatoria en la que señala que como menor de edad fue recluido por espacio de tres años y cuatro meses por una investigación por delito de homicidio.

La Policía Técnica Judicial certifica que el señor Sánchez López no mantiene informe relacionado con actividades relacionadas con drogas.

Una vez efectuado el estudio de las sumarias, el Pleno de la Corte Suprema no coincide con los criterios expuestos por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, ya que a pesar de que el Instituto de Medicina Legal certifica que el señor Sánchez no presenta signos de adicción y de que el dinero que se le encontró en su poder corresponde a la suma de B/.25.00 en billetes de B/.1.00, el informe de laboratorio indica que la cantidad de droga incautada era mínima, es decir, 0.24 gramos.

En virtud de lo anterior, el Pleno de esta Corporación concluye que como no se encuentra en el expediente ninguna prueba que indique que el señor Hernando Sánchez López se dedicara al tráfico ilícito de drogas, aunado a que la cantidad de drogas incautada era mínima, debe declararse ilegal su detención.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia de 13 de noviembre de 1996 proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, DECLARA ILEGAL la orden de detención preventiva de la cual es objeto

el señor Hernando Sánchez López y DISPONE que el detenido sea puesto en libertad, si no existe otra causa penal en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DORINDO CONSUEGRA CONTRA EL JUEZ SECCIONAL DE MENORES DE DARIÉN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado René Carvajal ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución N° 11-H. C. T. proferida por el Tribunal Superior de Menores el 22 de octubre de 1996, mediante la cual se declara legal la orden de detención emitida por el Juzgado Seccional de Menores de Darién.

El Tribunal Superior de Menores decretó legal la orden de detención emitida por el Juzgado Seccional de menores de Darién pues, en su criterio, existe morosidad en el pago de la obligación alimentaria, pero que para el Tribunal existe ambigüedad respecto a la suma realmente consignada por el obligado a proporcionar alimentos, porque no consta en el expediente los originales de los recibos aportados por el apoderado judicial del mismo y consultables a fojas 4 a 19 del presente cuaderno, haciendo imposible determinar la cuantía adeudada.

Por otro lado, el Tribunal señala una serie de irregularidades de actuación y orden en el expediente, como lo es el hecho que ha sido conocido por distintos entes, jurisdiccionales como lo son la Alcaldía de Chepo, Juzgado Municipal del Distrito de Pesé y Juzgado Seccional de Menores de Darién, lo que ha repercutido negativamente sobre su orden y foliación del expediente. También señala que la resolución N° 148 de 29 de agosto de 1996, tiene su sustento jurídico en el informe secretarial visible a foja 187 de los antecedentes, que indica que el señor Consuegra tiene una morosidad de B/.1,348.00 en concepto de pensiones alimenticias atrasadas, pero se observa un telegrama remitido al Juzgado Seccional de Menores de Herrera, el cual manifiesta que el señor Consuegra, mediante su apoderado judicial, presentó una serie de giros postales que corresponden a la suma de B/.780.00, por lo que ya no sería el total de B/.1,348.00 lo adeudado.

El licenciado Carvajal sustenta el recurso de apelación en los siguientes términos:

> "PRIMERO: Que mediante Resolución 11-HC-T de 22 de octubre de 1996, el Tribunal Superior de Menores declaró Legal la Orden de Detención dictada en contra del señor DORINDO CONSUEGRA, por el Juzgado Seccional de Menores de Darién.
>
> SEGUNDO: Que la Orden de Detención viola claros principios constitucionales y legales.
>
> TERCERO: Que se ha ordenado el arresto del señor DORINDO CONSUEGRA, por desacato, por no haber pagado pensiones alimenticias atrasadas, y el mismo no es procedente, por cuanto mediante fallo de 18 de abril de 1996, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al decidir un recurso de Apelación interpuesto por el Dr. ULISES PITTÍ, señaló

> sobre ésta (sic) materia que en estos casos "Lo que procede es la ejecución de la Resolución que ordena el pago de dichas pensiones atrasadas". (El subrayado es nuestro) y, es obvio que el señor DORINDO CONSUEGRA, llegó a un acuerdo en Juzgado de Los Pozos de Herrera dentro de sus posibilidades con la demandante a pagar lo atrasado y ha estado cumpliendo responsablemente dada la lejanía de la Provincia de Darién.
>
> CUARTO: Para el señor DORINDO CONSUEGRA pagar mas (sic) de B/.500.00 en concepto de pensiones alimenticias atrasadas, representa una suma astronómica ya que como peón en la agricultura apenas (sic) alcanza a ganar B/.2.00 o B/.3.00 diarios máxime que reside en un lugar tan lejano como lo es Los Cerrito (sic) de Los Pozoso (sic) de Herrera.
>
> La orden de detención en contra del señor CONSUEGRA lesiona el interes (sic) superior del menor, ya que se estaría poniendo en peligro la fuente de empleo de nuestro representado sino que también es obvio que el señor DORINDO CONSUEGRA, jamás podría cumplir en estos momentos con el pago de tan elevada suma, sin poner en peligro sus propias necesidades y la de sus hijos, que también tienen derecho alimentarse." (Fs. 38-39).

El Pleno observa que el hecho de que este proceso de alimentos haya sido conocido por diversos entes jurisdiccionales como la Alcaldía Municipal de Chepo, Juzgado Municipal del Distrito de Pesé, Juzgado Seccional de Menores de Darién, ha causado irregularidades de actuación y orden.

Se observa que, en efecto, el Auto N° 148 de 29 de agosto de 1996, por medio del cual se sanciona con pena hasta de 30 días al señor Consuegra por desacato, tiene como base el informe secretarial de 28 de agosto de 1996 del Juzgado Seccional de Menores en Darién (f. 187 de los antecedentes), el cual informa que el señor Consuegra tiene una cuenta pendiente de B/.1,348.00 correspondiente a julio de 1991 a agosto de 1996, pero a foja 192 se observa un telegrama enviado, por el Juez Seccional de Menores de la Provincia de Herrera por medio del cual se informa que el señor Consuegra presentó una serie de giros postales que corresponden de julio de 1991 hasta agosto de 1996 los que ascienden a la suma de B/.780.00, quedando una deuda de B/.604.00.

Consta a fojas 47 a 49 del cuadernillo, el oficio N° 1155 de 15 de noviembre de 1996 del Juzgado Seccional de Menores en el que se certifica que, efectivamente, el señor Consuegra presentó ante ese Despacho fotocopias de giros postales y certificaciones de pago que, según él, estaban destinadas al cumplimiento de la pensión alimenticia que nos ocupa, no todos dirigidos a la demandante Teófila Bravo de Peña, sino que también a nombre de Benigno Peña, Maribel Peña y Mariela Peña Bravo.

En virtud de lo anterior, se colige que el señor Consuegra está cumpliendo en la actualidad puntualmente con el pago de la pensión alimenticia, ya que como consta en el oficio mencionado, el señor Consuegra ha cumplido con sus cuotas hasta el mes de agosto de 1996. Por lo tanto, no ha estado **renuente** al pago de la pensión alimenticia fijada a favor de su hija menor. Además, girar una orden de arresto contra el alimentante, resulta lesivo al interés superior del menor, pues, pone en peligro la fuente de empleo del señor Consuegra.

El Pleno coincide con los criterios expuestos por la parte actora, dado que, efectivamente, el Pleno de esta Corporación ha sostenido en el fallo de 18 de abril de 1996, que "no procede el desacato cuando la condena consiste en pagar una suma de dinero en concepto de pensiones alimenticias atrasadas", ya que lo que procede "es la ejecución de la resolución que ordena el pago de dichas pensiones atrasadas".

En vista de lo antes anotado, el Pleno concluye que la orden de arresto del señor DORINDO CONSUEGRA resulta ilegal porque como se dijo en el fallo de 18 de abril de 1996, emitido por esta Corporación, la deuda por alimentos vencidos merece un tratamiento especial. En este caso el señor Consuegra hizo un pago sustancial de la suma atrasada y el saldo es una obligación especial que es

exigible por los medios procesales previstos en la Ley, pero que no amerita la detención.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Resolución N° 11-H. C. T. proferida por el Tribunal Superior de Menores el 22 de octubre de 1996 y, en consecuencia, DECLARA ILEGAL la orden de arresto contra el señor DORINDO CONSUEGRA.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE IVÁN RENÉ MARTÍNEZ ESPINOZA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado FRANCISCO LEOCADIO TORRERO HERRERA ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de **IVÁN RENÉ MARTÍNEZ ESPINOSA** contra el **Juez Nocturno de Policía**.

El Juzgado Noveno de Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial, se inhibió para conocer del habeas corpus y remitió el respectivo expediente a esta Corporación de Justicia, debido a que el sindicado se encontraba a órdenes de la Policía Técnica Judicial.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada, se informó que la persona estaba a disposición de la Fiscalía Auxiliar de la República.

Finalmente, esta última dependencia del Ministerio Público respondió el mandamiento informando que había remitido el expediente a la Fiscalía Octava del Circuito de Panamá mediante oficio 17237 de 20 de noviembre de 1996. Además, informó que la aprehensión del imputado se dejó sin efecto ya que se le aplicaron medidas cautelares de tipo personal (Fs. 14).

A pesar de lo señalado por el funcionario, que hace suponer que el favorecido con esta acción constitucional no se encuentra privado de su libertad, se observa que la persona está a órdenes de otra autoridad instructora (Fiscalía de Circuito), por lo tanto, los autos deben ser remitidos al funcionario judicial competente para que resuelva lo de lugar, según lo dispone el artículo 2588 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la presente acción de habeas corpus, interpuesta a favor de IVÁN RENÉ MARTÍNEZ ESPINOZA, al Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MAGDALENA ESCOBAR DE MORALES CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ha presentado el Licenciado VÍCTOR M. HARDING acción de habeas corpus a favor de la señora **MAGDA ELENA ESCOBAR DE MORALES**, contra el Fiscal Especializado en Delitos relacionados con drogas.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, el funcionario acusado remitió su informe de conducta en los siguientes términos:

> "PRIMERO: Sí es cierto que este Despacho ordenó la detención de la señora MAGDA ELENA ESCOBAR DE MORALES, mediante resolución motivada, calendada ocho (8) de noviembre del año en curso.
>
> SEGUNDO: Los fundamentos de hecho que inspiraron dicha decisión tienen inicio mediante operativo policial realizado por la Policía Nacional del área "A", San Felipe, en el sector de calle 21 Chorrillo, edificio Hortencia N° 14, donde fuera retenida la señora MAGDA ELENA ESCOBAR DE MORALES en compañía de sunieta de nombre CAROLINA KATIUSKA GUZMÁN, debido a la actitud de nerviosismo de la primera. Ambas fueron trasladadas a la subestación policial y sometidas a registro por una unidad femenina que le encontró a la menor en la ropa interior, entre sus piernas, un cartucho plástico color blanco con rayas rojas, el cual contenía en su interior trece (13) bolsitas plásticas transparentes, de las cuales doce (12) contenían veinticinco (25) carrizos plásticos transparentes y la otra, veinticinco (25) carrizos plásticos transparentes y la otra, veinticuatro (24) carrizos plásticos, haciendo un total de trescientos veinticuatro carrizos transparentes contentivos de un polvo blanco que se presume sea droga (Cocaína).
>
> Tales hechos hicieron mérito suficiente para que este Despacho ordenase la indagatoria de la encartada. En la misma, la señora ESCOBAR DE MORALES manifestó que la menor le dijo en estación de policía que el cartucho en cuestión se lo había entregado una muchacha en momentos en que bajaba las escaleras para dirigirse a su casa. Afirma que desconoce al propietario de las evidencias incautadas y niega dedicarse a la venta, distribución o consumo de sustancias ilícitas.
>
> TERCERO: Las sustancias incautadas fueron remitidas junto con la menor a la Policía de Menores por lo cual no se ha recibido en este Despacho el resultado del análisis practicado a las sustancias incautadas, el mismo no ha sido remitido a la fecha.
>
> CUARTO: El fundamento de Derecho que nos obliga a ordenar y mantener la detención preventiva de la ciudadana MAGDA ELENA ESCOBAR DE MORALES, se encuentra contemplado en lo que se establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial." (Fs. 9-10).

De fojas 17 a 18 del expediente principal reposa la providencia por medio

de la cual la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos relacionados con drogas ordena la detención de **MAGDA ELENA ESCOBAR DE MORALES**. Para fundamentar dicha decisión, el funcionario de instrucción indica que contra la prenombrada "existen indicios de presencia y oportunidad que la vinculan al ilícito investigado además de los señalamientos de los agentes captores".

Del examen de lo actuado en la investigación que nos ocupa, se desprende que el día 6 de noviembre de 1996, agentes de la Policía Nacional realizaron un operativo para revisar a todo el que entrara y saliera del Edificio Hortensia N° 14 ubicado en calle 21 del barrio El Chorrillo de esta ciudad. En dicho operativo fue retenida la menor **CAROLINA KATIUSKA GUZMÁN**, nieta de la señora **MAGDA ELENA ESCOBAR DE MORALES**, en momentos en que ésta última solicitó al agente JULIO PÉREZ que dejara salir a la menor del Edificio para que se fuera a su casa. Conducida la menor a la sub-estación de Barraza fue objeto de una requisa, se le encontró entonces en su ropa interior trescientos veinticuatro carrizos (324) transparentes contentivos de un polvo blanco que se presume sea droga (Cocaína).

Al analizar la presente acción de habeas corpus y la copia del expediente que se acompañó con la contestación del mismo, el Pleno observa y señala lo siguiente:

Primero: de conformidad con lo que expone el sub-teniente JULIO PÉREZ, de servicio en la sub-estación de policía de Barraza, en el informativo de novedad visible a fojas 3, en razón de que telefónicamente se le comunicó del supuesto paradero de artículos hurtados en EL PACO, "procedieron a implementar un operativo en la calle 21, el Chorrillo, rodeando el Edificio Hortensia N° 14, para que todo el que saliera y entrara del edificio fuera revisado".

Segundo: Estando en ese operativo, se presentó la señora MAGDA ELENA ESCOBAR, acompañada de una niña y le pidió permiso "para dejar salir a la menor del edificio", a lo cual él accedió, "pero a escasos metros del lugar, que la niña se había retirado, le informé a una unidad que la detuviera y la condujera a la sub-estación de Barraza".

Tercero: La señora MAGDA ELENA ESCOBAR, cuando se enteró que se había detenido a la menor, se dirigió al sub-teniente PÉREZ, encargado del operativo, y le solicitó que le permitiera ir donde estaba la niña "ya que la misma se podía poner nerviosa por estar sola, entonces yo absedi (sic) y la dejé salir".

Cuarto: En la estación de policía de Barraza, cuando la agente BLANCA DEL CID registra a la menor, se le encuentra entre sus piernas, sostenido por su ropa interior, un cartucho plástico el cual contenía en su interior "trece bolsitas plásticas transparentes, las cuales doce de éstas contenían en su interior veinticinco carrizos plásticos, y la otra contenía veinticuatro carrizos plásticos, haciendo un total de trescientos veinticuatro carrizos, de color transparente que en su interior contienen un polvo blanco que se presume sea droga (Cocaína)".

Quinto: No es cierto, como se expresa en la resolución que ordena la detención preventiva de MAGDA ELENA ESCOBAR ni como se dice en el informe del funcionario acusado, que dicha señora fue retenida en el operativo organizado en el Edificio Hortensia, en el barrio del Chorrillo y tampoco existe respaldo probatorio que indique, como se afirma en la orden de detención de que dicha señora fue retenida por "la actitud nerviosa de la señora ESCOBAR".

Sexto: De acuerdo a lo que se deja consignado en el informe de novedad, del sub-teniente a cargo del operativo, la retención de la menor se produjo momentos después que él había autorizado la salida de la menor y momentos después, cuando MAGDA ELENA ESCOBAR conoce que la menor estaba en la sub-estación de policía de Barraza, ésta le solicita al referido sub-teniente que le permita ir donde estaba la niña, él accede y la señora se dirige a la sub-estación de policía y es allá, cuando la menor es registrada, que se retiene a la señora ESCOBAR como detenida.

Séptimo: De otro modo el encargado del operativo, en su informe de novedad no expresa que la señora MAGDA ELENA estaba nerviosa y que por ello ordenó la

retención de la menor sino que manifiesta que al ir la señora ESCOBAR a pedirle que le dejara ir hasta donde se encontraba la menor, le dijo que la menor "se podía poner nerviosa por estar sola".

Octavo: Aún cuando en la diligencia en que se le recibe indagatoria a la señora MAGDA ELENA ESCOBAR, el despacho instructor expresa que "al realizarse la prueba de campo de rigor dio resultado positivo para la determinación de droga, siendo ésta cocaína", no existe en el cuaderno principal evidencia alguna que corrobore la veracidad de esta información, y por en contrario, al contestarse la acción interpuesta, el funcionario acusado exterioriza que todavía "no se ha recibido en este despacho el resultado del análisis practicado a las sustancias incautadas".

Noveno: En el informativo que rindiera la menor CAROLINA KATIUSKA GUZMÁN en el Juzgado Segundo Seccional de Menores expresa lo siguiente:

> "Señora Juez, yo estaba jugando con mi primita YELENI, de cinco (5) años, el día miércoles, y yo baje (sic) y una muchacha blanca alta flaquita, me metió algo en mi panty que no sé que era y me dijo que no mirara eso, ya que ella era mi tía y me iba a pegar con un palo y yo me fuí de nuevo para arriba. Mi abuela no sabía nada y le dijo a los guardias que me dejara que yo me fuera, porque yo me iba para mi casa, mi abuela no sabía que yo tenía eso, y un guardia me dijo que fuéramos para el Cuartelito para revisarme, yo me iba para mi casa y mi abuela me fue a reclamar y la dejaron metida alla (sic). Después yo me monté en un patrulla y montaron a mi abuela y la dejaron en San Felipe y me llevaron para la Policía de Menores en San Francisco, me montaron en un bus y me llevaron para el Tutelar. PREGUNTADA: Diga la informante en compañía de quién o quiénes se encontraba Usted, al momento de que la joven que Usted menciona como blanca, alta flaquita, le metió algo en su panty. CONTESTÓ: Señora Juez, con nadie". (Fs. 1-2).

Décimo: Por su parte, la señora MAGDA ELENA ESCOBAR al rendir indagatoria, manifiesta que al llegar al cuartel habían ya registrado a su nieta, y al preguntar el por qué la tenían allí, uno de los guardias le dijo "mire lo que tenía" y al preguntarle a la niña que quién le había dado eso, ella le dijo que una muchacha se lo había metido en el panty, en la escalera. Expresó que no tenía nada que ver con drogas, que nunca ha tenido esa clase de problemas, que su nieta va a su casa a comer y a buscar algo para "cositas" y después se va para donde vive y acerca de lo sucedido informó lo siguiente:

> "PREGUNTADA: Diga la indagada qué tiene Ud. que decir con relación a los hechos que se le imputan y que se le han explicado con anterioridad. CONTESTÓ: Señor Fiscal, la policía llegó a hacer un allanamiento con revólver en mano, mi nieta acababa de llegar de la escuela y cuando yo escuché eso yo la llamé, ella se encontraba en el segundo piso del edificio jugando con otra niña, como yo vivo en la planta baja yo le dije que se fuera para su casa porque iba a hacer un operativo, bajó corriendo y la llevé hasta la puerta donde estaban los policías y yo les dije a los policías que la dejaran ir que iba para su casa y ella se fue, cuando salió del edificio y se fue por la parte de atrás del edificio, uno de los guardias se la llevó al cuartel, y yo estaba dentro del edificio porque los guardias no dejaban salir a nadie, cuando una vecina me llama y me dice que un policía se llevaba a mi nieta al cuartelito y yo le dije al guardia que me dejara salir porque iba a reclamar mi nieta porque ella es menor de edad y yo no esperé que ella me dijera nada y yo salí, y fuí a reclamarla, ya había transcurrido un tiempo de que se habían llevado, cuando llegué allá, ya la habían registrado y tenían un cartucho, diciendo que ella lo tenía, y me dijeron que yo no me podía ir porque estaba detenida".

Décimo Primero: conforme a las constancias procesales, parece ser cierto que la menor CAROLINA vive en casa distinta a la de su abuela, pues la residencia de ésta se encuentra en calle 21, el Chorrillo, Edificio Hortensia N° 14,

apartamento N° 3 y la de la madre de la menor, MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN ESCOBAR es la calle 23, Edificio Hortensia N° 6, apartamento N° 60, donde vive con su menor hija, según se desprende del informativo que se le tomó a la menor en el Juzgado Segundo Seccional de Menores.

Décimo Segundo: No obstante que el hecho que motivó esta investigación se produjo el 6 de noviembre del presente año, a la fecha de contestación del habeas corpus no existe constancia en la copia del proceso penal que se acompañó, de que se haya recibido declaración al sub-teniente encargado del operativo ni a los otros agentes que pudieran tener conocimiento del hecho ni tampoco existe diligencia alguna en procura de localizar a la persona que, según la menor CAROLINA, le "metió algo en mi panty", de quien ésta expresó que era una "muchacha blanca, flaquita", como tampoco se ha intentado recibirle declaración a la persona que la imputada señala en su indagatoria como su vecina MELVA y además, precisar si en habitación situada arriba de la que reside la señora ESCOBAR reside la menor "YELENI", con la que afirma CAROLINA se encontraba jugando en esos momentos.

Décimo Tercero: en el proceso no encontramos hasta estos momentos indicios serios que evidencien que la señora MAGDA ELENA ESCOBAR haya entregado a la menor CAROLINA el cartucho plástico contentivo de la sustancia blanca que presumiblemente sea droga (cocaína). La menor señala que otra persona fue la que lo hizo y es enfática en su informativo cuando indica que su abuela no lo hizo ni "sabía que yo tenía eso". Si analizamos lo expresado por la menor CAROLINA en el informativo que rindiera a las diez y cuarenta y cinco (10:45 a. m.) del día 8 de noviembre del presente año en el Juzgado Segundo Seccional de Menores con lo declarado por la señora MAGDA ELENA ESCOBAR en la indagatoria que se le tomó a las diez y treinta de la mañana (10:30 a. m.) del ocho de noviembre de este año ante la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con drogas, apreciamos que en lo fundamental coinciden en lo que exponen, no sólo en cuanto al hecho de que la señora ESCOBAR desconocía del cartucho plástico portador de la sustancia supuestamente ilícita, sino en cuanto a otros aspectos a que hace referencia la menor, que también coinciden con lo que expuso la señora ESCOBAR en dicha diligencia.

Décimo Cuarto: Por otra parte, si el operativo, al decir del encargado del mismo, sub-teniente JULIO PÉREZ consistía en revisar a todo el que saliera y entrara del Edificio Hortensia N° 14, un sentido de prudencia y de protección personal indica que la señora ESCOBAR no iba a solicitar autorización para que la menor CAROLINA saliera del edificio, conociendo que la misma portaba entre su ropa interior un cartucho dentro del cual existía una cantidad apreciable de cocaína.

El artículo 2147-A del Código Judicial establece que: "nadie será sometido a medida cautelar si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra y el artículo 2159 ibídem, en sus numerales 2° y 3° señalan que en toda detención preventiva se expresarán los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible y los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena.

De lo actuado hasta aquí, se considera que a la investigación sumarial no se ha allegado los elementos probatorios para la comprobación del hecho punible ni los necesarios para vincular fehacientemente a la señora MAGDA ELENA ESCOBAR DE MORALES con el ilícito investigado y que permitan, fundado en derecho, justificar la detención preventiva decretada en su contra, razón por la cual se estima ilegal su detención, sin perjuicio de que posteriormente aparezcan nuevos elementos en el proceso que justifiquen tal medida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de la señora MAGDA ELENA ESCOBAR DE MORALES, y en consecuencia, ORDENA que sea puesta inmediatamente en libertad, siempre y cuando no tenga otra causa pendiente por la cual deba permanecer detenida.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ELOY ALFARO
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
LUIS CERVANTES DÍAZ Y RAFAEL A. GONZÁLEZ

Consideramos que la detención preventiva de la señora MAGDA ELENA ESCOBAR DE MORALES es legal.

La sustancia ilícita fue encontrada dentro de la ropa interior de una menor de edad de 8 años, quien se encontraba en casa de su abuela (beneficiaria del presente habeas corpus), ubicada en el edificio Hortencia del Corregimiento del Chorrillo, en momentos en que se efectuaba un operativo policial. El informe consultable a foja 3 del cuadernillo principal narra que la señora MAGDA ELENA ESCOBAR solicitó autorización para que dejaran salir a la menor de edad y debido a su insistencia el agente de la policía accedió, "pero escasos metros del lugar que la niña se había retirado, le informé a una unidad que la detuviera y la condujera a la sub-estación de Barraza".

A pesar de que la menor sostiene que no fue la señora ESCOBAR quien le escondió la droga en su ropa interior sino otra persona, estimamos que existen suficientes indicios de oportunidad y presencia que vinculan a la beneficiaria de la presente acción constitucional con el delito que se investiga, por lo que debe mantenérsele la detención preventiva.

Por estas razones salvamos el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GERARD DOBARRO BELART, CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, LCDO. ROSENDO MIRANDA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Gonzalo Antonio Moncada Luna, mediante escrito presentado a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el día 14 de Noviembre del año que decurre, promovió acción de Habeas Corpus contra el licenciado Rosendo Miranda, Fiscal de Delitos relacionados con Drogas, y a favor del señor **GERARD DOBARRO BELART**, a fin de que se resuelva sobre la legalidad de su privación de libertad.

Cumplidas las reglas de reparto, se libró el mandamiento correspondiente contra la autoridad acusada, quien dio respuesta al mismo mediante oficio N° 11366 (fs. 8-11) en el que manifiesta que es cierto que ordenó la detención de Dobarro Belart mediante resolución motivada, calendada el 28 de marzo de 1995 y respecto a los fundamentos de hecho, explicó que el caso tuvo su origen en una operación encubierta llevada a cabo en marzo de 1995, en la que se pudo detectar la participación de Dobarro y un socio de apellido Katz que fue quien recibió la droga en Europa.

Además del informe, se adjuntó copia del expediente en el que aparece la declaración indagatoria del imputado en la cual acepta que participó en el envío de la droga a Europa y suministró los demás detalles sobre los contactos y las rutas utilizadas para enviar la droga.

El accionante sostiene que el Fiscal ha retardado en exceso el término de instrucción del sumario, violando disposiciones que establecen el máximo de duración de esa fase del proceso y que ha obstaculizado la defensa, impidiendo que se le suministren las copias del expediente, ni se le ha permitido el acceso al mismo.

En este caso, el Pleno de la Corte conoció de una acción similar que fue resuelta el 5 de octubre de 1995, y en la que se declaró legal la orden de detención. Durante el curso de la investigación de esa fecha al presente, se han aportado otros elementos de juicio que refuerzan la incriminación inicial que se le hiciera y su vinculación al tráfico internacional de droga, a través de una forma de delincuencia transnacional organizada, con diferentes nexos y contactos tanto en panamá como en otros países.

Si bien es cierto que la investigación se ha prolongado excesivamente en espera de asistencia internacional para completar alguna información importante en relación con el caso, esta morosidad que afecta la agilización de los procesos y los derechos de los detenidos a tener un juicio rápido e imparcial, no incide en la legalidad de la detención que es la finalidad del Habeas Corpus, como institución de garantía contra las privaciones de libertad contrarias a la Constitución y la Ley.

En las condiciones apuntadas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de GERARD DOBARRO BELART y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ALBERTO GUILLÉN CASTILLO, CONTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, se recibió en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia la acción de habeas corpus presentada por **LUIS ALBERTO GUILLÉN CASTILLO**, en su propio nombre y contra la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CORRECCIÓN del Ministerio de Gobierno y Justicia**.

Cumplidos los trámites de reparto, se solicitó el informe correspondiente relacionado con la detención del accionante y los motivos de hecho y de derecho que tuvo para ello.

En nota de 21 de noviembre, la Directora Nacional de Corrección informó que no ha impartido la orden de detención contra Luis Antonio Guillén Castillo y que se ha limitado a darle cumplimiento a la sentencia N° 43 de 28 de julio de 1994, emitida por el Juzgado Primero Municipal de David, Ramo Penal, en virtud de la

cual se le impuso la pena de 18 meses de prisión y cincuenta (50) días multa por el delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito en perjuicio de NICOLÁS MIRANDA. Añade, que de conformidad a la información proporcionada por el Director de la Cárcel Pública de David, licenciado Orlando Guerra Lassonde, Luis Alberto Guillén ingresó a ese centro penitenciario el día 28 de agosto de 1996 y al tenor de la sentencia condenatoria antes mencionada, cumplirá la totalidad de la pena el 23 de marzo de 1998.

Al examinar el escrito mediante el cual se sustenta la acción de habeas corpus se advierte que el accionante se queja de no haber sido procesado por delito alguno y no tener conocimiento del por qué de su detención, porque nunca se le había notificado la resolución condenatoria a fin de interponer los recursos que fueran del caso. Señala también que ha solicitado formalmente el derecho a reemplazo de la pena por la suspensión condicional de la misma y que no ha recibido respuesta favorable a dichas solicitudes.

No cabe duda alguna que la acción de habeas corpus no es el medio procesal idóneo para atender las pretensiones del señor Guillén Castillo, en virtud de que su privación de libertad obedece al cumplimiento de una sentencia condenatoria, debidamente ejecutoriada y emitida por el Tribunal penal competente, desde el 28 de julio de 1994. Existen otras acciones y recursos, como el de revisión, que permite hacer un examen de las resoluciones penales ya ejecutoriadas, siempre y cuando se cumplan las exigencias legales con fundamento en las causales y los medios probatorios que permiten hacer ese tipo de examen, pues se trata del principio de cosa juzgada y por tanto, de seguridad jurídica, que no puede ser alterada por cualquier vía procesal, sino por aquellas que de manera específica determina la ley.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de LUIS ALBERTO GUILLÉN CASTILLO en el presente caso y ordena que sea puesto nuevamente a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA RUIZ POON Y CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El abogado Luis A. Ortega V., mediante escrito presentado a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el 20 de noviembre del año en curso, promovió acción de Habeas Corpus preventivo a favor de la señora **PATRICIA RUIZ POON** y contra el **FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA**, a fin de que no sea privada de libertad.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus contra la autoridad acusada, se recibió el Oficio N° 17334 (fs. 4), mediante el cual informa que la Fiscalía Auxiliar no ha ordenado la detención de la señora PATRICIA RUIZ POON, ni verbalmente ni por escrito, ya que su despacho se limitó a recibir una denuncia

de la empresa Sunny Enterprise Ltd. el 3 de Julio de 1996, la que fue remitida a la Policía Técnica Judicial para el trámite de las investigaciones que correspondan.

Con motivo de la respuesta que antecede, se dispuso librar otro mandamiento al Director de la Policía Técnica Judicial, quien rindió informe a través de su Nota A. L. 1552-96 de 25 de noviembre de 1996, en la que señala que no es cierto que haya ordenado la detención de la accionante, no tiene razón alguna para hacerlo y la misma no se encuentra bajo sus órdenes.

La jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia durante esta década, en tutela de la libertad personal, le ha dado cabida al habeas corpus preventivo en aquellos casos en que se dicta una orden de detención y todavía la persona no ha sido privada de libertad, evitando de esta manera -si la orden no se ajusta a los requerimientos legales ni ha sido proferida por la autoridad competente- que se aplique la medida cautelar personal mencionada. Tal no es el caso que nos ocupa, en virtud de que la acción presentada se origina en la negación de una solicitud de fijación de fianza para no ser detenido, por cuanto en el sumario adelantado por la Fiscalía Auxiliar la señora RUIZ POON no aparece como sindicada o imputada y el supuesto delito que pudiera endilgarse a dicha señora es de acción privada que sólo prospera mediante acusación formal del ofendido, prueba preconstituída y la consignación de una garantía, y ninguno de esos presupuestos procesales se han reunido en esta causa.

La doctrina que se refiere al habeas corpus preventivo admite esta acción contra "las amenazas a la libertad" de los particulares y que hacen inminente su privación de libertad (Cfr. Hernández Valle, La Tutela de los Derechos Fundamentales, 1990. pág. 52). La información acopiada no permite concluir que estamos ante un caso donde se dan evidencias claras, fehacientes, de solidez probatoria que permitan deducir esa amenaza a la libertad de la accionante.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de Habeas Corpus preventivo presentado.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS EN FAVOR DE LA SEÑORA DALYS GARCÍA DE OBERTO, Y CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Andrea Solís Castillo interpuso acción de Habeas Corpus en favor de la señora **DALYS GARCÍA DE OBERTO**, y contra el **FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS**, el día 29 de noviembre de 1996.

Encontrándose el expediente para la lectura y firma, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, recibió el 4 de diciembre de 1996, escrito de desistimiento de la acción de Habeas Corpus presentada por la señora Andrea Solís Castillo.

La Corte en reiterados pronunciamientos ha sostenido que es viable el desistimiento de la acción, siempre y cuando lo expresen el detenido o su apoderado legal, como es el caso que nos ocupa, es por ello que esta Corporación Judicial no tiene nada que objetar en cuanto al escrito de desistimiento presentado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por la señora Andrea Solís Castillo, en la acción de Habeas Corpus promovida a favor de la señora DALYS GARCÍA DE OBERTO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FELIPE DE GRACIA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora **INDIRA PÉREZ DE GRACIA** ha interpuesto recurso de habeas corpus a favor de **FELIPE DE GRACIA**, contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, conforme lo estatuye el artículo 2578 del Código Judicial, el mismo fue contestado dentro del término de ley, informando lo siguiente:

"...
1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor FELIPE DE GRACIA.
2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al prenombrado FELIPE DE GRACIA."

Según se desprende del informe transcrito, la autoridad demandada no ha ordenado la detención del favorecido con esta acción, ni tiene bajo su custodia persona registrada con su nombre. Estas consideraciones demuestran que el señor **FELIPE DE GRACIA** no se encuentra privado de su libertad, por lo que el procedimiento de habeas corpus debe cesar según lo preceptúa el artículo 2572 del Código Judicial.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento y el ARCHIVO del expediente correspondiente a la acción de habeas corpus propuesta a favor de FELIPE DE GRACIA contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EUDALDO CARABALLO DÍAZ CONTRA EL FISCAL CUARTO DE CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado Giovani Fletcher a favor de EUDALDO CARABALLO y contra el Fiscal Cuarto de Circuito Judicial de Colón.

ANTECEDENTES DEL CASO

Las sumarias instruidas permiten conocer que en horas de la noche del día 23 de septiembre del año que decurre, en el sector de la barriada Luther King, Corregimiento de Cativá, Provincia de Colón, varios individuos armados se introdujeron en un autobús de la ruta Panamá-Colón, despojando tanto al conductor como a los pasajeros de sus pertenencias. Producto de un operativo realizado por unidades de la Fuerza Pública, fueron capturados en la residencia F-25 de esa barriada, de propiedad de Cristina Murphy, los ciudadanos Miguel Ariel Rodríguez, Francisco Murphy y Eudaldo Caraballo.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia de 5 de noviembre del año que decurre, declaró legal la detención preventiva de Caraballo.

El juzgador a-quo consideró que existen en el expediente elementos incriminatorios suficientes para mantener la medida cautelar de carácter personal aplicada, ya que Caraballo está detenido por ser "uno de los que asaltó el autobús y a todos los pasajeros como al conductor y ayudantes" (f. 31).

DECISIÓN DE LA CORTE

Aun cuando el recurrente no presentó escrito de sustentación de alzada, se cuenta con las extensas argumentaciones que trae el libelo de habeas corpus, las cuales giran, fundamentalmente, en torno a la competencia o capacidad legal del Corregidor de Policía del Corregimiento de Sabanitas, distrito de Colón, para decretar la detención de Caraballo y el allanamiento de la residencia donde fue capturado.

En cuanto al primero de estos objetos de impugnación, si bien es cierto que el Corregidor "no estuvo presente durante el acto de robo agravado" (f. 3), esa circunstancia no lo descalifica para ejecutar la medida privativa de la libertad que por esta vía se impugna. Nuestra ley de procedimiento reconoce la legitimidad de la figura legal conocida como "arresto ciudadano", según la cual "Cualquier persona podrá capturar al individuo sorprendido en flagrancia, sin esperar orden de la autoridad competente y entregarlo a ésta o a la autoridad administrativa cercana". Esta investigación da cuenta de la concurrencia del requisito de flagrancia, toda vez que, en una ejemplar demostración de acción ciudadana, los asaltantes del autobús fueron perseguidos por conductores de taxi "toda la distancia" hasta la residencia donde se ocultaron y fueron aprehendidos por las autoridades, "lo cual no tomó ni media hora", según relata Osvaldo Camargo Ruiz, uno de los asaltados (f. 60). Las particularidades del caso corren conformes con la previsión del artículo 2149 del Código Judicial, según la cual "Existe flagrancia cuando el infractor es sorprendido ... después de cometerlo (el hecho punible) y como resultado de la persecución material a que es sometido.

En cuanto a la alegada ilegalidad del "allanamiento" supuestamente practicado por la autoridad administrativa, lo cierto es que, a pesar de que efectivamente fue decretado mediante diligencia visible a folio 16, la diligencia que culminó en la captura de los asaltantes fue practicada "no sin antes tener

la autorización de la propietaria", según se expresa en el informe de folio 17. La circunstancia de la autorización es confirmada por la dueña de la residencia, señora Cristina Esther Moro vda. de Murphy: Yo abrí la puerta y los guardias permanecieron afuera hasta que llegó el Corregidor y **los dejé entrar y que revisaran ya que no tenía nada que ocultar.** Sobre este particular nuestra normativa procesal señala expresamente que "el allanamiento se verificará ... siempre que (el individuo cuya casa ha de ser registrada) se negare a entregar voluntariamente la persona que se busca" (a. 2189, C. J.). Resulta entonces claro que no hubo necesidad de allanar la residencia y que la captura fue llevada a cabo por personas legalmente investidas de la facultad para hacerlo, con vista de información suministrada por moradores del área -según se indica en el informe de novedad de folio 14- y el reconocimiento de los sospechosos que al momento de la captura hicieran tanto Osvaldo Camargo Ruiz (f. 61) como Arturo Camargo Díaz (f. 7).

No menos importante es la incriminación directa que resulta del testimonio de uno de los detenidos, Francisco Murphy Moros, ocupante de la residencia y amigo de Caraballo Díaz, quien resultara también detenido a pesar de que niega vinculación con el hecho delictivo. Refiriéndose a Caraballo y a Miguel Ariel Rodríguez Alveo manifestó que "en la Policía Técnica Judicial de Colón, **los escuché hablando del robo**".

Se trata en este caso de un hecho delictivo que lesiona sensiblemente nuestra imagen internacional, por la frecuencia conque es ejecutado en perjuicio de turistas y comerciantes extranjeros, así como la seguridad pública de los nacionales, por lo que merece una sanción ejemplar de parte de las autoridades.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 5 de noviembre de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL AMADOR PALMA TUÑÓN CONTRA LA JUEZ DÉCIMA PRIMERA DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema, la acción de habeas corpus interpuesta por el Licenciado RICARDO RODRÍGUEZ DEL VALLE a favor de **MANUEL AMADOR PALMA TUÑÓN** contra la Juez Décima Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá, del Ramo Penal.

El Segundo Tribunal Superior mediante Resolución de veintinueve (29) de octubre de 1996 declaró legal la detención del recurrente. Este Tribunal consideró que la tesis esbozada por el demandante para concluir que el apoderamiento arbitrario del bien ajeno se hizo con destreza excluyendo la violencia, es inadmisible puesto que se ha demostrado en autos que el imputado se valió de medios violentos para despojar del collar a la sujeto pasiva, y que incluso la amiga de ésta forcejeó con el primero en momentos en que intervino

otro señor que impidió la fuga del imputado con la prenda; luego entonces se trata del delito de robo tipificado en el artículo 185 del Código Penal, que permite la detención preventiva. También indica el a-quo que la existencia y propiedad de la cosa objeto del delito fue demostrada de acuerdo con el artículo 2090 del Código Judicial; el negocio es conducido por autoridad competente, tiene fijada fecha para la celebración de audiencia preliminar, el procesado es asistido debidamente por un abogado defensor y además constan graves indicios en su contra.

Por su parte, el defensor de **MANUEL AMADOR PALMA TUÑÓN**, en su sustentación de apelación visible de fojas 21 a 24 manifiesta su inconformidad con el fallo del Segundo Tribunal Superior, en primer lugar, porque considera que el caso citado por él, en el cual esta Corporación resolvió favorablemente en favor de JEFFRIE FONGER FAÚNDES, no es diferente del de su defendido, sino por el contrario, a favor de éste concurren circunstancias tales como la humildad de su hogar, su corta edad adulta, su buena conducta anterior y el hecho de haber cometido el delito bajo una sobredosis de drogas, lo cual no fue detectado por las autoridades al no someterlo a un examen médico. Sostiene el jurista, que si bien es cierto el informe de Medicina Forense indica que **MANUEL AMADOR PALMA TUÑÓN** presenta un cuadro de abuso de drogas, sin ser adicto, no son menos ciertos los dos informes médico-psiquiátricos de las Clínicas San Antonio y Bella Vista que hablan de los tratamientos que recibió dicho joven por el consumo de drogas. Cuestiona el recurrente la diligencia en la que se asignó el valor a la prenda robada (collar), pues los peritos no dejan constancia de que la misma estuviera reventada o rota, por lo cual surge la incógnita de que si su defendido le arrebató o no el collar a la joven **KATHERIN MELISA ORTEGA MIRANDA.** Dedica parte de su escrito, a un estudio doctrinal de lo que es una excoriación, con el propósito de demostrar que las lesiones inferidas a la denunciante no son otra cosa sino un rasguño producido por el propio collar o por las uñas de su patrocinado. Finalmente cita un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de fecha 24 de febrero de 1965, en el cual dicha Sala sostuvo que la acción de arrebatarle el collar a una persona, no es más que "el simple acto físico de aprehensión de la cosa que es necesario para desplazarla o tomarla del poder de quien la tiene". Solicita que se reemplace la medida cautelar a su representado y se tipifique el delito como de hurto con destreza.

De las constancias procesales se desprende que el día 28 de junio de 1996 la joven **KATHERINE MELISA ORTEGA MIRANDA** fue víctima de un atraco por parte de un sujeto que le arrancó del cuello un collar con un dije. No obstante, **MILEYKA SANTOS**, quien acompañaba a la joven ORTEGA, forcejeó con el sujeto hasta que el señor **JUAN ALBERTO SAMANIEGO AMAYA** intervino empujando al sujeto y evitando así que escapara con la prenda. El sujeto en cuestión, que responde al nombre de **MANUEL AMADOR PALMA TUÑÓN** al rendir indagatoria incurre en serias contradicciones aunque finalmente niega su participación en el hecho, pese haber sido detenido in fraganti, alegando que se trata de una confusión.

La propiedad y preexistencia del bien han sido debidamente demostradas, así como también la imputabilidad del procesado que según el informe del forense no se enmarca en las prerrogativas de los artículos 24 y 25 del Código Penal.

Contrario a lo alegado por el recurrente, consideramos que calificar el delito bajo estudio, como de hurto con destreza es inadmisible, puesto que han concurrido todos los presupuestos del delito de robo simple, entre ellos la violencia contra las personas, de la cual fue víctima KATHERINE MELISA ORTEGA en este caso.

Por otro lado, el hecho de que **MANUEL AMADOR PALMA TUÑÓN** sea consumidor de drogas, no lo hace inimputable, tal como lo indicara la médico-psiquiatra en su informe, y mucho menos le exime de la responsabilidad que le cabe en este caso.

Los lesiones que sufriera la víctima y que el recurrente califica como simples rasguños, evidencian que, en efecto, al momento de arrebatarle el collar, el imputado no hizo uso de ninguna destreza, sino por el contrario, utilizó violencia para apoderarse de la prenda.

Por todo lo anterior, esta Corte comparte plenamente el criterio del Segundo Tribunal Superior, en cuanto se trata de un delito de robo simple tipificado en el artículo 185 del Código Penal, que admite detención preventiva, pues la pena mínima es mayor de dos (2) años de prisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia de veintinueve (29) de octubre de 1996, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención preventiva de MANUEL AMADOR PALMA TUÑÓN.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR LIC. MIGUEL DEEN A FIN QUE SEA CONCEDIDA LA APELACIÓN INTERPUESTA CONTRA LA SENTENCIA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL RELATIVA AL RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ISAÍAS GAHONA GUTIÉRREZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de hecho contra la resolución de 25 de septiembre de 1996, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que rechazó por improcedente el recurso de apelación anunciado contra la resolución de 18 de septiembre de 1996 del citado Tribunal, en el proceso de habeas corpus promovido por el licenciado **Miguel Deen Rodríguez** a favor de **ISAÍAS GAHONA GUTIÉRREZ**, contra la Juez Tercera de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial.

El recurrente solicita que se ordene al tribunal a quo, conceder la apelación interpuesta contra la resolución de 18 de septiembre de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro de la acción de habeas corpus propuesta a favor de **ISAÍAS GAHONA**, sindicado por el delito contra el pudor y la libertad sexual en perjuicio de ROSA PÉREZ. El licenciado **Miguel Deen** en la parte medular de su escrito alega lo siguiente:

> "A partir del mes de noviembre de 1991 la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia en materia de control constitucional de las medidas que afectan la libertad ambulatoria viene reiterando en forma sostenida que la Acción de Habeas Corpus es el instrumento idóneo para impugnar cualesquiera medidas, ya sean privativas o restrictivas de la libertad ambulatoria, bien que hayan sido ejecutadas (habeas corpus reparador) o bien que hayan sido dictadas pero su ejecución esté pendiente (habeas corpus preventivo) y que la Sentencia con que se decide la respectiva pretensión admite el recurso de apelación en efecto suspensivo, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 2599 del Código Judicial. Se trata pues de una reforma introducida vía jurisprudencial, que ha sido aceptada y que vienen observando en forma uniforme los tribunales de la República." (Fs. 10-11).

En la resolución de 18 de septiembre de 1996 (fs. 1 a 3), contra la cual

se intentó recurrir en apelación, el Segundo Tribunal Superior de Justicia se abstuvo de pronunciarse sobre el asunto y, en consecuencia, ordenó el archivo del cuadernillo de habeas corpus (Ver fs. 8 a 10), con fundamento en que el habeas corpus sólo es viable para impugnar la detención preventiva efectuada al margen de la ley (habeas corpus reparador), o contra la orden ilegal de hacer efectiva ésta (habeas corpus preventivo), no así contra las demás medidas cautelares personales. En esa resolución expresó el Tribunal que: "Tras el análisis de lo actuado, observamos que se trata de un recurso de habeas corpus mediante el cual se pretende censurar una medida cautelar distinta a la detención preventiva y siendo ello así, no hay razón para pronunciarse sobre lo postulado y por tanto debe el Tribunal abstenerse de ello".

Al promoverse el recurso de apelación contra lo decidido por el Tribunal, el mismo fue rechazado por improcedente, en providencia de 25 de septiembre de 1996 (f. 7) dictada por el Magistrado Sustanciador del Segundo Tribunal Superior de Justicia, en Sala Unitaria y contra esa negativa se recurre de hecho a esta Corporación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1121 del Código Judicial, la resolución del juez que niega la concesión del recurso de apelación, puede ser impugnada -a través del recurso de hecho-, ante el superior jerárquico, el cual resolverá si procede o no conceder dicha apelación. Como señala el profesor Jorge Fábrega P., el recurso de hecho "Tiene por objeto obligar al juez que negó la concesión del recurso de apelación, a que conceda dicho recurso. ... Ello se debe a que la concesión de un recurso de apelación no debe estar subordinado a la voluntad del juez a-quo, por el peligro que ello entrañaría" (FÁBREGA P., Jorge. **Instituciones de Derecho Procesal Civil**. Editorial SERVIPRENTA, S. A. Panamá, 1976. pág. 441).

Precisa en esta etapa determinar si en el caso presente se cumple con los presupuestos contemplados en el artículo 1141 del Código Judicial, para lo relativo a la admisibilidad del mismo. En ese orden de ideas, observamos que el recurso de apelación contra la resolución de 18 de septiembre proferida por el Tribunal Superior fue presentado oportunamente, pues se recibió el día 24 de septiembre de 1996 a las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde (4:55 p. m.), como es visible a fojas 5 y 6 lo que indica que se presentó cincuenta y cinco (55) minutos después de haberse desfijado el edicto correspondiente.

Como se deja transcrito, el Tribunal negó, por improcedente el recurso de apelación interpuesto ante esta Superioridad y dentro del término del caso, acompañado de las copias respectivas, se ha recurrido de hecho contra la resolución que niega la concesión del recurso. Faltaría por determinar si la apelación contra la cual se interpuso el recurso es recurrible a través del recurso de apelación. El Tribunal fundamenta la negativa a la concesión expresando que lo que se pretende censurar con el habeas corpus interpuesto es "una medida cautelar distinta a la detención preventiva" y la Corte observa que el habeas corpus interpuesto con esa finalidad -la declaratoria de ilegalidad contra cualquier medida cautelar personal interpuesta contra **ISAÍAS GAHONA GUTIÉRREZ**- fue en su momento admitido y contestado por la Juez acusada, absteniéndose el Tribunal de pronunciarse sobre el mismo y ordenándose el archivo del cuadernillo de habeas corpus, razón por la cual se estima que en el fondo existe una negativa a la pretensión que se busca con la acción interpuesta, negativa que a tenor de los dispuesto por el artículo 2599 del Código Judicial y teniendo en cuenta, además, que esta Corporación hasta el momento ha venido conociendo a través de la acción de habeas corpus de medidas cautelares distintas a la detención preventiva, como se aprecia por ejemplo en los fallos de 26 de junio de 1992 y más recientemente el de 15 de febrero de 1996, se estima que la resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, fechada el 18 de septiembre de 1996, es recurrible mediante el recurso de apelación.

En el fallo a que nos referimos de 15 de febrero del presente año, el Pleno expresó:

> "En cuanto a que a la imposición de la medida cautelar del ordinal (a) del artículo 2147-B del Código Judicial puede ser causa de

> acción de habeas corpus, ello es cierto. EL PLENO de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ha sostenido que la limitación del derecho de transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de migración (artículo 27 de la Constitución), es un derecho desde luego constitucional, que el recurso de habeas corpus protege, con las limitaciones señaladas. Tal derecho comprende la prerrogativa de viajar al exterior".

Igualmente, al referirse al tema, el doctor Carlos H. Cuestas, expone lo siguiente:

> "El derecho a la libertad personal es sin duda el derecho que intenta fundamentalmente garantizar la libertad física del individuo, su libertad ambulatoria y esa garantía conlleva la libertad de movimiento. Garantiza el derecho natural de todo ser humano, de irse o de quedarse o la facultad de desplazarse libremente de un punto a otro sin interferencias indebidas y el objetivo inmediato de este derecho tutelado, como vamos a ver a través del habeas corpus, es proteger al individuo de cualquier privación o restricción ilícita de la libertad en el sentido más amplio en que se pueda interferir con el ejercicio de la misma. ...
>
> Sobre este tema, la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el arresto domiciliario, las relegaciones administrativas, la negativa de otorgar salvoconductos para salir del país a personas asiladas en la sede de embajadas o misiones diplomáticas, pueden constituir restricciones a la libertad personal y en algunos casos, resultar arbitrarias y reñidas con el derecho a la libertad personal.
>
> En otras palabras, cuando hablamos de la tutela de la libertad personal a través de las garantías constitucionales y fundamentalmente a través del habeas corpus, tenemos que hacerlo en un sentido amplio y no solamente con la tradicional privación de la libertad por una orden de detención preventiva o por una prisión fundamentada en una sentencia judicial." (CUESTAS G., Carlos H. **Cuadernos de Educación Judicial N° 7**. El Habeas Corpus Preventivo. Panamá, septiembre 1995. págs. 4-5 y 12).

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de hecho contra la resolución de 25 de septiembre de 1996, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que rechazó por improcedente el recurso de apelación anunciado contra la resolución de 18 de septiembre de 1996 del citado Tribunal, en el proceso de habeas corpus promovido por el licenciado Miguel Deen Rodríguez a favor de ISAÍAS GAHONA GUTIÉRREZ, contra la Juez Tercera de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, y en consecuencia, ORDENA que se remita el expediente respectivo a fin de que sea tramitada la apelación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ELOY ALFARO
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO REYES GONZÁLEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Rosario Granda de Brandao ha promovido acción de habeas corpus a favor de Roberto Reyes González, y contra el señor Fiscal especializado en delitos relacionado con drogas.

Manifiesta la parte actora que el señor Roberto Reyes González fue detenido preventivamente por agentes de la policía cuando se dirigía a la casa de su madre, el día 4 de marzo de 1996. Señala además, que al momento de su detención, los agentes de la policía no encontraron sustancias ilícitas en su poder. Las municiones calibre 38 y la droga incautada por los agentes estaba aproximadamente a dos metros de distancia del lugar donde se practicó la detención del señor Reyes González, escondida en un macetero, y este negó ser propietario de la droga encontrada al rendir declaración indagatoria, y afirmó que no se dedica a la venta ni al consumo de drogas.

Dictado el mandamiento de habeas corpus correspondiente se solicitó un informe al señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, quien lo rindió en los siguientes términos:

> "1. Si es cierto que se ordenó la detención preventiva del señor ROBERTO REYES GONZÁLEZ, la misma fue decretada mediante Resolución razonada de este Despacho, fechada 6 de marzo de 1996.
>
> 2. La orden proferida contra el señor ROBERTO REYES GONZÁLEZ, surge de los señalamientos formulados en su contra, a través del informe de novedad, visible a fojas dos (2) del sumario, donde señala al señor REYES GONZÁLEZ como el propietario de la sustancia ilícita que motivó la presente detención.
>
> Narra los captores en su informe, que el día 4 de marzo del presente año, unidades del área "B" de la Zona de Policía de San Miguelito, en momentos que efectuaban un recorrido por el sector de Veranillo, entre veredas, logran visualizar a dos (2) ciudadanos, los cuales al darle la voz de alto uno de ellos se dio a la fuga y el otro fue retenido, quien al ser requisado no se le encontró sustancia ilícita alguna en su poder.
>
> El señor REYES GONZÁLEZ, no portaba documentos de identificación personal, pero dijo llamarse ROBERTO REYES GONZÁLEZ, posteriormente se revisó el lugar, encontrándose a escasos metros de donde se encontraban los dos sujetos en mención, un (1) cartucho de color verde con rayas blancas, contentivos de un paquetito de plástico transparente con 12 sobrecitos que tenían una sustancia en forma de polvo de color blanco que se presume sea droga (Cocaína), debajo de una piedra y 8 municiones vivas calibre 38, todo se encontró a escasos 2 metros en un macetero.
>
> Señalan también los captores en su informe, que previo a los hechos que se investigan, tenían información por parte de los moradores, que un sujeto es decir, ROBERTO REYES GONZÁLEZ, se dedicaba a vender todas las noches (sustancias ilícitas) y que la guardaba en el macetero que se encontraba frente a su residencia.
>
> Al ser indagado el señor ROBERTO REYES GONZÁLEZ, el mismo niega toda vinculación a los hechos que se investigan y dice desconocer quién o quiénes pueden ser los propietarios de la sustancia ilícita que motiva la presente investigación.
>
> A foja 37-39 del expediente, reposa la declaración bajo juramento del señor ENRIQUE DEL VALLE, quien se afirma y se ratifica del informe de novedad de fojas dos (2), señalando que el motivo por el cual se detuvo al señor REYES GONZÁLEZ, se debió a que con anterioridad a los hechos que nos ocupa, se había dado a la fuga

> varios sujetos que estaban en el lugar donde se había denunciado que se escondía droga en un macetero ubicado a orilla de vereda, en la parte de afuera de la casa de la madre del señor ROBERTO REYES GONZÁLEZ.
>
> Como elemento probatorio que acredita la existencia del hecho punible que nos ocupa, consta de fojas 21-22 del expediente, el resultado del análisis de la droga incautada, emitida por el Laboratorio Especializado de la Policía Técnica Judicial, el cual arrojó resultado positivo para la determinación de COCAÍNA en la cantidad de 2.40 gramos, distribuidos en 12 carricitos plástico (fs. 6-7) ..."

Mediante providencia fechada 6 de marzo de 1996, el funcionario instructor ordenó la detención del señor Roberto Reyes González, a raíz de los hechos relatados en el informe visible a foja 2 del sumario, en el cual consta que los agentes de Policía del Valle, Carrizo y González llevaron a cabo la detención del señor Reyes González el día 4 de marzo de 1996, cuando estaban de ronda en el sector de Veranillo y vieron a dos ciudadanos en actitud sospechosa. Al darles la voz de alto uno de los sujetos se dio a la fuga, y el otro fue detenido y registrado sin encontrarle ninguna sustancia ilícita en su poder. Inmediatamente los agentes registraron el área y descubrieron en el interior de un macetero un cartucho que contenía 12 bolsitas plásticas con una sustancia blanca que se presumió era droga (cocaína) y 8 municiones vivas calibre 38.

Los agentes de la policía también informaron que los moradores del área señalaban que el señor Reyes González se dedicaba a la venta de drogas, la que ocultaba en un macetero.

Consta en el sumario de foja 37 a 39 la declaración jurada de Roberto Enrique del Valle, uno de los agentes de la policía que participó en la detención del señor Reyes González, quien se ratificó de todo el contenido del informe comentado y manifestó lo siguiente: "Señor Fiscal, si se tenía conocimiento de que en el lugar se vende drogas, ya con anterioridad se habían recibido varias llamadas en donde se denunciaba que en ese lugar siempre había un grupo de personas que vendían drogas, ..."

A foja 22 del sumario se lee el dictamen pericial del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, en el cual consta que la sustancia incautada es Cocaína y pesa 2.40 gramos.

De lo expuesto se infiere que los hechos investigados vinculan al señor Roberto Reyes González con el delito contra la Salud Pública configurado en el párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal, sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión, sin perjuicio de que estos hechos sean posteriormente desvirtuados con nuevas pruebas que se alleguen a los autos.

Como la orden de detención decretada contra el señor Roberto Reyes González cumple con los requisitos señalados en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y no viola las normas constitucionales que garantizan la libertad ambulatoria, es legal y así debe declararse.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor ROBERTO REYES GONZÁLEZ, ordenada por el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, mediante diligencia fechada el 6 de marzo de 1996, por Delito Contra la Salud Pública, y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ELOY ALFARO (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA CELSA MARÍA SALAZAR, CONTRA LA FISCAL DELEGADA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS DE COLÓN Y SAN BLAS, MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante providencia de 15 de noviembre de 1996, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, concedió en el efecto suspensivo, el recurso de apelación anunciado por el licenciado Gerardo Carrillo en representación de la señora **CELSA MARÍA SALAZAR TUÑÓN**, contra la sentencia de 24 de octubre del presente año, que al resolver la acción de habeas corpus promovida contra la Fiscal Especial de Delitos relacionados con Drogas en la Provincia de Colón, declaró legal la detención.

Al revisar los fundamentos fácticos y jurídicos de la resolución recurrida se advierte que el Tribunal se basó en el informe procedente de la Fiscalía y en las constancias de autos, que permiten vincular a la accionante a la droga localizada en un allanamiento practicado en su residencia y en la de un vecino. La decisión adoptada por el Tribunal adjunta el salvamento de voto de la magistrada Sandra Huertas de Icaza, quien sustenta su disidencia en la ilicitud de la prueba aportada contra la accionante y la carencia de vinculación a los hechos investigados.

Según se desprende de los documentos incorporados al expediente, los hechos tienen su origen en un allanamiento practicado en la casa S/N, ubicada en Río Alejandro, corregimiento de Puerto Pilón en la provincia de Colón, propiedad del señor Gilberto Medina Salazar, lugar donde encontraron unos envoltorios de sustancias, presumiblemente marihuana y piedra. Como Medina Salazar señaló que esa droga le pertenecía a un vecino de nombre Luis Carlos Ornano, el Corregidor dispuso practicar seguidamente un allanamiento en esa residencia y al no encontrar al propietario de la vivienda, detuvo a su compañera o concubina, señora Celsa María Salazar, con el fin de que informara sobre el paradero de Luis Carlos Ornano.

Posteriormente el Corregidor le otorgó la libertad, pero el alcalde ordenó su detención (fs. 13), atendiendo informe de la policía sobre las irregularidades que se dieron en el allanamiento y en el levantamiento de las dos actas sobre las diligencias realizadas en esa ocasión, orden que se mantuvo por resolución de 25 de septiembre de la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos relacionados con Drogas (fs. 16-17). No aparece en autos certificación de los laboratorios del Instituto de Medicina Legal o de la Policía Técnica Judicial que determine la clase y cantidad de sustancia encontrada, tampoco se han incorporado las declaraciones indagatorias ni los testimonios u otros elementos de juicio que vinculen a la señora Salazar a la propiedad, tenencia, uso u otra acción ilícita relacionada con drogas, salvo la incriminación que se hace contra su marido.

Tanto la doctrina como la legislación panameña, ratificada por la jurisprudencia, ha establecido que la medida cautelar personal de la detención preventiva es el último recurso, cuando se hayan cumplido los presupuestos normativos contenidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. En el presente caso, en lo que respecta a la señora Celsa Salazar no se han reunido los elementos de juicio que sustenten la medida adoptada en su contra.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución de 24 de octubre de

1996, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, declara ILEGAL la orden de detención contra la señora CELSA MARÍA SALAZAR y ORDENA su inmediata libertad, siempre que no exista otra causa penal pendiente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CAMARGO GORDÓN CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Danilo Montenegro ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de Francisco Javier Camargo Gordón (a) "Pocho" y contra el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial.

Acogido el recurso se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial quien, mediante oficio de 21 de octubre de 1996, rindió el siguiente informe:

> "1. Es cierto que este Despacho ordenó, la detención del señor **FRANCISCO JAVIER CAMARGO GORDÓN**, mediante providencia fechada el día 27 de noviembre de 1995, la cual reposa de fojas 290 a 295 del presente dossier.
>
> 2. Según se desprende de la providencia in comento, la detención de **FRANCISCO CAMARGO GORDÓN** tuvo como fundamento de hecho las declaraciones de los señores IDELSA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, BRÍGIDO ANTONIO LEWIS PINZÓN, VICENTE PALACIOS GUTIÉRREZ, los cuales al rendir sus respectivas declaraciones concordaron al decir que se encontraban en el balcón de la casa 41 en la calle Pedro Obarrio, Corregimiento de El Chorrillo, en el velorio de "MAROMERO", GILBERTO CISNEROS MÁRQUEZ (a) TORO, HERMINIO RIVERA, VICENTE PALACIOS GUTIÉRREZ (a) TUMAY, IDELSA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (a) AIDA Y BRÍGIDO ANTONIO LEWIS PINZÓN (a) TORO, momentos antes de que iniciara el último reso (sic) del velorio cuando llegó por la calle Pedro Obarrio un pick-up, doble cabina de color rojo y se estacionó frente a la casa "41", bajandose (sic) de dicho vehículo un hombre vestido de oscuro, el cual se entrevistó con "POCHO" quien se encontraba en la prte (sic) de abajo de la casa. Señalan que el hombre vestido de oscuro conducía el pick-up y al bajarse a la planta baja de la casa "el" (sic) y a los pocos minutos escuchan varios disparos observándose que el hombre vestido de oscuro corria (sic) hacia el pick-up acelerando el mismo al punto de hacer chirriar las llantas e irse del lugar a gran velocidad y viendo a "POCHO" salir con un arma en la mano hacia la construcción de enfrente y luego de que arrojó algo se alejó del lugar.
>
> En cuanto al fundamento de derecho, la providencia citada tiene como fundamento, en cuanto a la detención se refiere los artículos 2148 y 2159.

3. En efecto el señor FRANCISCO CAMARGO GORDÓN, se encuentra a nuestras órdenes, recluído (sic) en la Cárcel Modelo." (Fs. 9-10).

Por su parte, el licenciado Danilo Montenegro, estima que la detención preventiva de la cual es objeto el señor FRANCISCO JAVIER CAMARGO GORDÓN es ilegal, ya que los elementos de convicción que sustentaban su detención se desvanecieron, ello es así debido a que los tres testigos que declararon en su contra, admitieron haber declarado falsamente y, además, otro de los imputados, Herminio Rivera Alonso, en la diligencia de careo, declaró que todos los señalamientos que realizó contra Francisco Javier Camargo Gordón, se debieron a las constantes amenazas que recibió por parte de Gilberto Cisneros (a) Toro.

En este momento, corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

La Corte observa que constan de foja 290 a 295 del sumario, que la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá ordenó, mediante providencia de 27 de noviembre, la detención preventiva del señor Francisco Javier Camargo Gordón (a) Pocho pues, se le considera infractor del Capítulo I, Título I, del Libro Segundo del Código Penal, esto es por el delito genérico de homicidio cometido en detrimento de Gamaliel García Urriola.

El Pleno de la Corte Suprema observa que, efectivamente, las declaraciones de los señores Idelsa Martínez Rodríguez (fs. 270 a 273), Brígido Antonio Lewis Pinzón (a) Toño (fs. 274 a 277) y Vicente Palacios Gutiérrez (a) Tumay (fs. 282 a 285), concuerdan en que se encontraban en el balcón de la casa 41 en la calle Pedro Obarrio momentos antes de que terminara el último rezo en el velorio de "MAROMERO" cuando llegó por la calle Pedro Obarrio un pick up, doble cabina, de color rojo y se estacionó frente a la casa "41", bajándose de dicho vehículo un hombre vestido de oscuro, el cual se entrevistó con "Pocho" quien se encontraba en la parte baja de la casa, poco después se escucharon varios disparos, observándose que el hombre vestido de oscuro corría hacia el pick-up, saliendo a gran velocidad y viendo a Pocho salir con un arma en la mano hacia la construcción de enfrente y luego de arrojar algo se alejó del lugar. Estas declaraciones se efectuaron con el objeto de verificar la veracidad de las versiones dadas por Gilberto Cisneros Márquez (fs. 101-112) y Herminio Antonio Rivera Alonso (fs. 257-262), en sus respectivas declaraciones indagatorias, en las que señalan que se encontraban en compañía de los testigos, mencionados anteriormente, cuando ocurrieron los hechos.

No obstante, advierte el Pleno que en la diligencia de careo entre los señores Francisco Javier Camargo Gordón y Herminio Antonio Rivera Alonso (fs. 354 a 360), el señor Rivera declara que mintió al efectuar los cargos contra Camargo, ya que fue amenazado constantemente por el difunto Gilberto Cisneros (a) Toro, quien le indicó cómo debía declarar, dándole un papel con los nombres de los testigos falsos, los cuales, señala el señor Rivera, no se encontraban en el balcón de la casa 41.

En relación a lo anterior, fueron citados para ampliar su declaración Idelsa Martínez Rodríguez (a) Aida (fs. 365-367 y 378 -381), Brígido Antonio Lewis Pinzón (a) Toño (fs. 368-370) y Vicente Palacios Gutiérrez (a) Tumay (fs. 391-394). En la ampliación de la declaración de Idelsa Martínez Rodríguez, ésta manifiesta haber declarado falsamente contra Camargo a solicitud de una hermana de Gilberto Cisneros (a) Toro de apodo NELLA quien, mediante un papel, le indicaba la forma en que debía declarar. Por su parte, Brígido Antonio Lewis Pinzón manifiesta haber declarado contra Camargo a petición de su amiga IDELSA quien le dio un papel en donde estaba anotado lo que tenía que decir, además manifiesta que momentos antes de declarar en la Fiscalía, una muchacha le explicó lo que debía hacer o decir. En relación a esto, fue llamada a declarar Nereida Cisneros de Higuera (a) Nella, quien expresó no haberle entregado ningún papel a Idelsa Martínez Rodríguez y manifiesta que no conoce a Brígido Antonio Lewis. Mientras que el señor Vicente Palacios Gutiérrez, en la ampliación de su declaración (fs. 391-394), manifestó apodarse Tumay y que se ratificaba en su declaración anterior, ya que él se encontraba en el balcón de la casa 41 con Toro, Herminio, Idelsa y Toño cuando Camargo, le disparó a Galamiel García

Urriola, guardia de seguridad, y que si estos últimos habían cambiado su declaración era porque los tenían sugestionados. Sin embargo, admite haber mentido en otra ampliación (fs. 466-468), señalando que se hizo pasar por Tumay a petición de la hermana y la mujer de Herminio, las cuales se llaman Lucy Rivera y Vanessa respectivamente. La hermana de Herminio le manifestó que la hermana de Toro iba a conseguir a los otros dos testigos y que sí estuvo en esa casa para el velorio, pero no estaba en el balcón cuando le dispararon al guardia de seguridad. También manifiesta que Lucy le indicó la forma en que debía de declarar por medio de un papel.

A raíz de la declaración de Vielka Gordón de Camargo (fs. 459-461), madre de Francisco Javier Camargo Gordón, quien señala que el verdadero Tumay es Cornelio Smith, marido de Chabela hermana de Gilberto Cisneros Márquez (a) Toro, se llamó a declarar a Rosa Isabel Cisneros Márquez (fs. 462-464), hermana de Gilberto Cisneros, quien declara que el verdadero Tumay es su marido de nombre Cornelio Smith Gaslin.

De fojas 382 a 385 se observa la declaración de Gustavo Watson Alfred, Sargento 1° de la Policía Metropolitana, en la que señala que visualizó al menor Michael Antonio Gordón Watson (a) Richi, quien corrió hacia una casa de madera en donde reside junto a una mujer que lo protege de nombre o apodo Linda que resulta ser cuñada de Francisco Javier Camargo (a) Pocho.

Cabe mencionar las declaraciones efectuadas por Luz María Rivera Alonso y Vanessa Liz Pérez Rodríguez, hermana y compañera de Herminio Rivera Alonso respectivamente. La primera manifiesta que Herminio Rivera le indicó que se cuidara y que cuidara a su madre e hijos. También agregó que su hermano debe estar siendo amenazado para que haya cambiado su versión porque él le juraba que fue Francisco Javier Camargo Gordón el que asesinó al señor Galamiel García Urriola. Por su parte, Vanessa Liz Pérez Rodríguez, declara que Herminio Rivera Alonso le manifestó su deseo de volver a declarar, pero que temía que Pocho le pudiera hacer daño en la Cárcel Modelo.

Del estudio de las sumarias, el Pleno estima que debido a las anteriores circunstancias y dado lo incipiente que aún se encuentra la fase sumarial, no existen suficientes criterios para valorar la veracidad de la retractación de las declaraciones de los testigos que incriminan directamente al señor Camargo, y por otro lado, pesan sobre el señor Camargo Gordón graves indicios de presencia y oportunidad, por lo que lo procedente es declarar legal la detención del señor Camargo Gordón.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor FRANCISCO JAVIER CAMARGO GORDÓN (a) POCHO y por lo tanto DISPONE que el detenido sea puesto de inmediato a órdenes del FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE NELSON BENÍTEZ LONDOÑO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Darío Morice Carrillo interpuso ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, acción de habeas corpus en favor de **JORGE NELSON BENÍTEZ LONDOÑO**, ciudadano colombiano con residencia permanente en Panamá, quien se encuentra detenido en la Cárcel Modelo sin que se justifique -a su juicio- dicha detención con una orden motivada.

Manifiesta el letrado que la causa de la actual aprehensión de **BENÍTEZ LONDOÑO** estriba en una orden de detención ordenada dentro de un proceso desarrollado en 1993, que concluyó con un "sobreseimiento provisional e impersonal y un sobreseimiento definitivo", pero que no se levantó la orden cautelar que nos ocupa, lo cual hace la detención -a su juicio- ilegal.

Además, afirmó el abogado defensor que la ilegalidad radica en que la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas pidió la reapertura de ese expediente, radicado en el Juzgado Sexto de Circuito de Panamá, Ramo Penal, "... sin aportar pruebas vinculadas al hecho que motivó el sobreseimiento impersonal, aunado a haber enviado copias de un caso de armas de fuego donde el señor **JORGE BENÍTEZ LONDOÑO** fue puesto en libertad por la Fiscalía Auxiliar de la República, ..."

Luego de recibida la acción, el Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá libró de inmediato el mandamiento de habeas corpus de rigor; al que respondió el Juez Sexto de Circuito de Panamá, Rubén Royo, mediante Oficio N° 2140 del 7 de noviembre del presente año, que el prenombrado **BENÍTEZ LONDOÑO** fue puesto a órdenes del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, mediante Oficio N° 2127 del 6 de los corrientes.

Entonces, mediante resolución del 8 de noviembre de 1996 -luego de verificar que el expediente se encontraba en dicha Fiscalía- el Segundo Tribunal Superior de Justicia remitió el negocio al PLENO de esta máxima Corporación de Justicia, por corresponderle la competencia para conocer los procesos que adelantan las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, según lo dispone la Ley N° 13 de 1994.

Asumida la competencia, el PLENO enderezó el mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, quien lo respondió mediante Oficio N° 12162 del 14 de noviembre, de la siguiente manera:

> "1. Si es cierto que se ordenó la detención del señor JORGE BENÍTEZ LONDOÑO, la misma fue emitida en forma escrita y decretada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución de dieciocho (18) de mayo de 1993 (fs. 56-58).
>
> 2. Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva del encartado, se desprenden de los hechos acaecidos el pasado 13 de mayo de 1993, cuando fueron ocupadas dos (2) cajas de cartón, contenidas de treinta y cinco (35) paquetes, los que al practicársele la respectiva prueba de campo, resultó positiva a la droga conocida como COCAÍNA. De esta carga se responsabilizó el ciudadano panameño SILDO BARRETT, por ser éste la persona que entregó dicha cajetas en la Compañía Challenge (Aeropuerto de Tocumen), a fin de que fueran transportadas a Miami. Al ser indagado FRANCISCO SILDO BARRET, aporta información que involucra a los sujetos de nacionalidad Colombiana JORGE NELSON BENÍTEZ (Fernando Londoño) y DESIDERIO TORRES SÁNCHEZ; esta información fue corroborada con las posteriores investigaciones que realizara la entonces, Secretaría de Drogas, y además, obra en autos que, el vehículo utilizado para transportar la droga fue rentado por los prenombrados BENÍTEZ LONDOÑO y TORRES SÁNCHEZ, todo lo cual sirvió de fundamento para que el Procurador General de la Nación, ordenara la captura y posterior detención de los antes señalados.

> 3. Si es cierto que en la actualidad, el sumariado JORGE NELSON BENÍTEZ LONDOÑO (FERNANDO LONDOÑO), está a órdenes de este despacho de instrucción; ya que el Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de lo Penal, nos remitió dicho sumario, y filió al detenido a nuestras órdenes, tal como se aprecia a fojas 278 del expediente.
>
> Cabe señalar, que se solicitó en esta ocasión al Tribunal el cuaderno penal respectivo, con el objeto de sugerir lo procedente, que debe ser sin lugar a dudas, la reapertura del sumario, para agotar la investigación."

Ya encontrándose el negocio en estado de resolver, se recibió un escrito del actor, Licdo. Carrillo, en el que hace algunas apreciaciones sobre el informe recién reproducido, de las que se pueden apreciar las siguientes.

Que consta en el proceso seguido en el Juzgado Sexto de Circuito, una certificación del Departamento de Migración, que **JORGE NELSON BENÍTEZ LONDOÑO** es persona distinta de **FERNANDO LONDOÑO**, quien posee registro de entradas y salidas del país; empero, la Fiscalía de Drogas le atribuye la identidad del segundo al primero.

Que -respecto al punto primero del informe del Fiscal- existe un informe de un funcionario de la Fiscalía de Drogas -apellidado **MARTÍNEZ**- y que se encuentra en el expediente, en el que le informa al Fiscal que **BENÍTEZ LONDOÑO** fue detenido con una orden que debió ser levantada por haberse producido un sobreseimiento provisional, hecho que demuestra la ilegalidad de la detención que nos ocupa.

Que -en relación al segundo punto del mismo informe- las razones allí expuestas fueron resueltas con el sobreseimiento, lo que "confirma la carencia de fundamento legal" para mantener la aprehensión del detenido.

Que -en lo tocante al tercer punto del informe en referencia- el mismo no es cierto, toda vez que la Fiscalía puso a disposición del Juzgado Sexto al detenido, solicitándole la reapertura del proceso, adjuntándole como prueba "una fotocopia mal hechas y referente a un caso distinto" en donde el señor **BENÍTEZ LONDOÑO** fue puesto en libertad por la Fiscalía Auxiliar de la República -y que consta en el proceso adjuntado- siendo que no le tomó éste, declaración indagatoria.

También arguyó el Licdo. Darío Morice Carrillo que el Juez, ante la falta de pruebas "... se dedicó a mantener una comunicación telefónica fluida con el fiscal de droga manifestándome que le requería enviara originales de las fotocopias que le habían remitido, pero el Juez en vez de fallar conforme a Derecho decide ponerlo a disposición nuevamente de la fiscalía, que como bien señala el Fiscal, para ver qué prueba consiguen que les permita seguir manteniendo la detención ilegal."

Ahora bien, ponderando los elementos importantes del escrito sobre las consideraciones al informe rendido por el Fiscal Segundo de Delitos Relacionados con Drogas, podemos hacer las siguientes estimaciones.

En cuanto al primer comentario, referente a la constancia de la certificación del Depto. de Migración, en la que se afirma que **JORGE NELSON BENÍTEZ LONDOÑO** es persona diferente a **FERNANDO LONDOÑO**, considera esta Corporación de Justicia que el mismo es irrelevante, toda vez que se observa que **JORGE NELSON BENÍTEZ LONDOÑO** es la misma persona involucrada en el operativo realizado contra el señor **HAZERA LÓPEZ**.

También se observó, a foja 288 la copia del Acta del Allanamiento ordenado por el Juzgado Primero de Policía Nocturno del Distrito de Panamá, que externa que se encontraron en el habitación de **HAZERA LÓPEZ** armas e instrumentos para el procesamiento de droga, lo que -según el Fiscal de Drogas- vincula nuevamente a **BENÍTEZ LONDOÑO** con ese tipo de ilícito.

Entonces, el funcionario instructor utilizó este informe como argumento para solicitar la reapertura del expediente en el que estuvo involucrado **BENÍTEZ LONDOÑO.**

El sobreseimiento que se dictó en el proceso anterior es irrelevante, toda vez que estamos frente a una nueva situación procesal de **JORGE NELSON BENÍTEZ LONDOÑO**, que parece vincularlo a la comisión de un delito análogo al que estuvo involucrado anteriormente, pese a que no detiene a **HAZERA LÓPEZ**, principal implicado, según se aprecia en resolución emitida por dicha autoridad -f. 296 y 297-; por ello el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas solicitó que se mantuviera la detención preventiva de **JORGE NELSON LONDOÑO BENÍTEZ**, en virtud de los nuevos hechos.

Ahora bien, a foja 298 del expediente principal, se observa la Resolución del 18 de octubre del presente año en la cual el Fiscal Auxiliar de la República dispuso "dejar sin efecto la aprehensión" de **BENÍTEZ LONDOÑO**, motivado en que en la investigación sólo se le encontró un arma 9 milímetros sin el respectivo permiso, estimándolo como falta administrativa que no ameritaba mantener su detención, que se efectuó a raíz del allanamiento a la residencia de **HAZERA LÓPEZ**; pero esa decisión no contenía el conocimiento del allanamiento realizado al apartamento del supracitado.

Pero mediante resolución de 22 de octubre el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas puso a **BENÍTEZ LONDOÑO** a órdenes del Juzgado Sexto de Circuito, Ramo Penal, y sugirió la reapertura de ese caso, por haber sido requerido en esa investigación, al haberse allanado la residencia de **HAZERA**, que presuntamente lo vincula con los hechos relacionados con drogas, y por ser detenido junto a personas vinculadas a ese mismo tipo de delito, lo que -a su juicio- "constituye nuevos elementos probatorios o indiciarios en su contra".

Considera esta Corporación de Justicia que en virtud de la nueva situación procesal que atraviesa **LONDOÑO BENÍTEZ**, dada la posibilidad de que el detenido se de a la fuga por la probabilidad de que se decida reabrir el caso, su detención es legal, pese a que no se ordenó la detención de **VLADIMIR ALEJANDRO HAZERA LÓPEZ**, principal implicado.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de JORGE NELSON BENÍTEZ LONDOÑO, y lo pone a órdenes del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANEL SANTIAGO TORN ACUÑA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Ana Lorena Brenes presentó acción de habeas corpus a favor del señor ANEL SANTIAGO TORM ACUÑA contra el fiscal especializado en delitos relacionados con droga, por considerar que la privación que sufre su patrocinado

es ilegal.

Admitida la acción de habeas corpus y librado el mandamiento correspondiente, el fiscal de drogas lo contestó en forma amplia y el Tribunal lo expone en forma breve de la siguiente manera:

> 1. Sí es cierto que se ordenó la detención preventiva del señor ANEL TORM, la misma fue decretada mediante Resolución razonada de este Despacho, fechada 26 de junio de 1996.
>
> 2. La orden decretada contra el señor ANEL SANTIAGO TORM ACUÑA, surge de los señalamientos formulados en su contra, a través de los informes de Compra Simulada y de Allanamiento visibles a fojas 5, 6, 11, 12, 17, 18 y 19 del sumario,donde se le acusa de vender sustancias ilícitas y ser propietario de cierta cantidad de droga y dinero fraccionado, los cuales fueran encontrados en el cuarto N° 29 de propiedad de la señora MAGALY VEGA.
>
> Refieren las unidades que el día 11 de junio del presente año, efectuaron una compra simulada en compañía del Secretario de la Fiscalía de Drogas, RAÚL POLO, quien se desempeñó como testigo a ruego de los detalles de la compra. Siendo aproximadamente las 10:15 de la mañana, se apersonaron al lugar para comprar la sustancia ilícita y de esta forma comprobar la veracidad de la venta y distribución de sustancias ilícitas. Al contactar al informante, el mismo hizo entrega de cinco (5) fragmentos de color crema, la cual se presume sea droga (crack). El informante manifestó que quien vendió la piedra había sido un sujeto de nombre `ANEL', el mismo dijo a las unidades que el tal ANEL le manifestó que `si querían más, regresaran en la tarde que en ese momento la estaban cocinando.'

La licenciada Ana Lorena Brenes, funda su acción de habeas corpus principalmente, en las siguientes razones:

> "PRIMERO: El día 24 de junio de 1996, el señor ANEL SANTIAGO TORM ACUÑA, fue detenido en el pasillo de la casa # 847 de la calle 30 y Mariano Arosemena mientras se realizaba un allanamiento al cuarto # 29 de la mencionada casa, allanamiento realizado por unidades de la Policía Técnica Judicial y funcionarios de la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con drogas, al señor TORM, al ser requisado por las unidades de la P. T. J., no se le encontró en su poder droga o sustancia ilícita alguna.
>
> SEGUNDO: El Cuarto N° 29, allanado por las autoridades arriba señaladas, es donde fue encontrada la supuesta droga, y no pertenece ni es residencia del señor ANEL TORM ACUÑA, sino que pertenece a otra persona.
>
> TERCERO: A nuestro patrocinado se le acusa de habérsele encontrado en su poder treinta y cuatro billetes de a un dólar (B/.34.00), de los cuales ocho (8) de ellos pertenecen o son producto de una supuesta compra simulada de droga, como prueba de ello los funcionarios de la fiscalía especializada en delitos relacionados con droga, fotocopiaron y autenticaron ocho (8) billetes de denominaciones de un dólar ($1.00) para realizar la supuesta compra simulada, ver fojas 7,9 y 10 del expediente en causa.
>
> Sin embargo, Honorables magistrados, si cotejamos el listado de las numeraciones respectivas de los ocho (8) billetes fotocopiados y autenticados por la fiscalía especializada en delitos relacionados con droga, una de las numeraciones de los billetes encontrados en poder de mi defendido no corresponde con el listado que aparece en las fojas 7, 9 y 10 del expediente en mención. O sea que solo siete (7) de los treinta y cuatro billetes de a dólar ($34.00) encontrados en poder del presunto acusado corresponden a los ocho (8) utilizados

para la supuesta compra simulada, esto guarda relación y tiene concordancia con las declaraciones del señor TORM, en cuanto que en su declaración manifiesta, que minutos antes de ser requisado por los funcionarios de la P. T. J., una persona se le acerco y le pidió que le cambiara diez billetes de un dólar ($1.00), por uno de diez DÓLARES ($10.00), cosa que realizo, como se aprecia en foja 43 del expediente, probando con ello la forma en que mi representado adquirió tales billetes y que formaban parte de unos billetes marcados, que fueron utilizados para una supuesta compra simulada de droga y de la cual el mismo no tuvo participación alguna, toda vez que solo hizo un favor a una persona desconocida.

Un examen de las actuaciones realizadas hasta el momento permiten establecer que la detención decretada es legal.

A foja 17 y siguiente del expediente que contiene el sumario se puede apreciar un informe del allanamiento practicado por los detectives Manuel García, Anel Bradiel y Ana María González, en el que se dice lo siguiente:

"Al momento de llegar los Detectives al lugar antes descrito se observó al Señor ANEL TORM corriendo en forma precipitada por el pasillo del inmueble, el cual fue detenido y requisado encontrándose en el bolsillo del pantalón la cantidad de treinta y cuatro (34) balboas todos estos en billetes de a uno. Cabe mencionar que previo a esto se realizó una compra simulada utilizando billetes marcados fotocopiados y autenticados por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, que al efectuarle en compañía del Secretario el Señor GABRIEL PINZÓN la debida comparación de los billetes fotocopiados los mismos se encontraban en poder del Señor ANEL TORM, los cuales responden a la siguiente numeración:

SERIE F7759278D F26326290F F15533079FF40957280C F26327798 F14718663FF24705555E D40353942A.

Dando esta una diferencia en total de veintiséis (26) Balboas ya que los otros ocho (8) balboas restantes fueron utilizados por nuestro Informante para lograr efectuar dicha compra simulada, añadiendo a esto se logró encontrar en el cuarto útiles para la confección de esta sustancias como dos (2) paquetes de bolsitas plásticas, una pesa calibrada en gramos digital, una (1) caja de Baking Soda, la cual estaba abierta, dos (2) hojas de navajas."

...

Más adelante el mismo informe dice:

"Al cuestionar la ciudadana de que sí (sic) ella mantenía alguna otra sustancias (sic) en el cuarto, la misma manifestó que en el Altillo se encontraba una droga que pertenece al Señor ANEL TORM, procediendo esta a buscar dicha sustancias voluntariamente encontrándose dentro de una cajeta con ropa la cantidad de cuatro (4) bolsitas plásticas transparentes que contenían en su interior cierta sustancias (sic) sólida de color crema que se presume sea droga (Piedra) descritas de esta manera la primera bolsita plástica contenía en su interior la cantidad de cincuenta (50) sustancias sólidas de color crema, la segunda bosita (sic) plástica contenían su interior setenta y un (71) sustancias sólidas de color crema, la tercera bolsita plástica contenía en su interior la cantidad de treinta y un (31) sustancias sólidas de color crema, y la cuarta bolsita contenía en su interior la cantidad de cincuenta (50) sustancias sólidas de color crema."

Igualmente consta a foja 32 del expediente parte de la declaración de la señora Magaly Edith Vega Baloyes quien sostiene:

"Señor Fiscal, bueno resulta ser que para la fecha del día lunes 24 de Junio del presnte (sic) mes y año en curso, el día Domingo 23 se presentó el joven ANEL TORM a mi casa, él me preguntó que si yo iba

ha (sic) estar allí yo le dije que no, entonces ANEL TORM me dijo que le prestara la llave de mi casa porque él iba ha (sic) cocinar una bolsa de piedra y que él me dijo que me iba ha (sic) dar algo de la ganancia, luego yo acepté que Anel Torm cocinara la droga en mi casa ya que necesitaba ese día dinero para los gasto (sic) de la universidad el día sigueinte (sic) Lunes 24 de Junio del presente año, ya que el me dijo que se iba a llevar la droga el día lunes 24 de junio en horas de la mañana, entonces pasaban la hora y el joven Anel Torm, no se presentaba a la casa porque él se encontraba vendiendo su piedras (sic) en el pasillo del inmuebles, (sic) luego a eso de las once 11:00 a. m. de la mañana de ese mismo día se presentaron los miembros de la PTJ, lo vieron vendiendo droga (piedras) en el pasillo lo corretiaron (sic) y lo agarraron."

Todos los señalamientos anteriores permiten vincular al señor ANEL TORM ACUÑA con el delito investigado, por lo que se cumple con lo dispuesto en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención del señor ANEL SANTIAGO TORM ACUÑA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO LÓPEZ VILLARREAL CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En el caso en estudio la demandante promueve una acción de habeas corpus para que sea declarada ilegal la detención del señor Roberto López Villarreal, filiado en la cárcel El Renacer, a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia, en relación con el sumario que se instruye por el delito de homicidio en perjuicio de Luis Huertas Dávalos.

Esta acción se fundamenta en el hecho de que el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial ha ordenado, por cuarta vez según afirma la demandante, mediante Resolución fechada el 15 de noviembre de 1996, el agotamiento de la ampliación del sumario, en violación de las normas del procedimiento penal que solo permiten ordenar la ampliación del sumario una vez, "postergando así en forma ilegal la calificación del mérito de la investigación con el consiguiente perjuicio directo en contra de ROBERTO LÓPEZ VILLARREAL en el sentido que se le mantiene detenido con relación a una causa en la que incluso la propia agencia Fiscal ha solicitado su sobreseimiento".

En cuanto a la resolución dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el 15 de noviembre de 1996, debe señalarse que no corresponde a este Tribunal de Habeas Corpus pronunciarse sobre su ilegalidad o inconstitucionalidad.

El objeto de la acción de Habeas Corpus es darle el derecho a todo individuo detenido, por una autoridad, fuera de los casos y la forma que

prescriben la Constitución y la Ley, de comparecer inmediata y públicamente ante la autoridad judicial para que lo oiga y resuelva si es o no fundada tal detención y en caso negativo lo ponga inmediatamente en libertad. Cuando la detención sea consecuencia de un sumario, proceso o actuación, la demanda de habeas corpus se decidirá por lo que resulte de la actuación enviada por el funcionario demandado. Este es el habeas corpus que la doctrina denomina "reparador".

Nuestra jurisprudencia ha admitido en virtud del principio favor libertatis el habeas corpus "preventivo" que se da cuando se ha girado la orden de detención, pero la persona no ha sido aún detenida. También ha admitido el habeas corpus "correctivo" que se da en los casos en que la orden de detención es legal pero, o bien la detención no se está cumpliendo en el establecimiento carcelario que señala la ley, o bien la evaluación hecha por el funcionario demandado de las exigencias cautelares requeridas en el caso concreto, no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 2147-D del Código Judicial, y procede la sustitución de la detención preventiva por otra medida cautelar.

En el caso en estudio estamos ante un habeas corpus "reparador" porque lo que se pretende es que se declare ilegal la detención decretada contra López Villarreal y se ordene su inmediata libertad.

El Pleno de esta Corporación de Justicia ya se pronunció sobre la legalidad de la detención de López Villarreal, en la sentencia de habeas corpus fechada el 13 de septiembre de 1993, con fundamento en las siguientes razones:

> "A juicio del Pleno de la Corte, tanto los hechos relacionados con la venta ilegal de las tierras del Asentamiento Campesino "UNIÓN 23 de abril", o sea la venta de las 207 hectáreas que hace el señor JOAQUÍN HUERTAS SAMANIEGO al señor ROBERTO ARIEL LÓPEZ VILLARREAL por la suma de B/.7,000.00 y los litigios que ese hecho provoca, como la conducta amenazante adoptada por el imputado LÓPEZ VILLARREAL contra MELQUISIDEC DE LEÓN en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial, al hacerle una seña "con el dedo a manera de que se pusiera como un zipper en la boca y luego se pasó el dedo por el cuelo", según se desprende de la declaración que bajo juramento rindió su compañero de celda JUAN HUMBERTO TRUJILLO ORTEGA (fs. 509), la cual fue corroborada por el Agente de Policía de la Policía Técnica Judicial LUIS A. ARROCHA a fojas 504 constituyen graves indicios que lo vinculan al hecho de sangre ocurrido en perjuicio de LUIS ANTONIO HUERTA DÁVALOS, por lo que la detención preventiva ordenada en su contra debe declararse legal". (Fs. 998-999).

Después de dictada esta resolución, el 10 de marzo de 1994, Luis Alberto Arrocha Rojas rindió declaración en la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial y relató, con mayores detalles el hecho que motivó el informe rendido y suscrito por él, el 14 de abril de 1993, que reposa a fojas 504 del sumario, en los siguientes términos:

> "Este hecho ocurrió de esta manera. Yo como Jefe del Departamento de Homicidios acostumbro a laborar con las puertas de mi despacho abiertas para enterarme del manejo de trabajo de mis subalternos que están bajo mi cargo. Para esa fecha 14 de abril se encontraban alrededor de siete detenidos en una preventiva que da a un costado con mi oficina; una preventiva es una pequeña celda que por seguridad los mantenemos en nuestro despacho. Esa oficina colinda también con el Secretario Ad-Hoc de la Fiscalía donde se encontraba un detenido que su nombre recuerdo se llama Melquisidec, razón esa que era hora de las doce a dos de la tarde de tomar los alimentos. Porque recuerdo esto, porque la señora esposa del señor Villarreal quería una entrevista con mi persona, ya que ella le había manifestado a uno de mis subalternos que ella venía procedente de Los Santos y que estaba hospedada donde un familiar por los alrededores de Torrijos Carter o Cerro Batea, si no me equivoco yo le mandé a avisar que sí la iba a atender. Pero en un lapso de unos

> quince a veinte minutos de diferencia en que le mandé la razón se suscitó un incidente donde el señor Villarreal le hacía una seña al señor Melquisidec desde la celda preventiva, razón esa que me disgustó y mandé a Melquisidec para que lo trasladaran al sistema carcelario. Posteriormente, mandé a sacar al señor Villarreal que me lo trajeran a mi despacho y para que no se sintiera que era una presión de parte de nosotros, aproveché la ocasión y le dije a su señora esposa que pasara. También mandé a buscar al Lic. Bonome para que estuviera presente en la entrevista. Estando reunidos en mi despacho le pregunté al señor Villarreal, el por qué le estaba haciendo señas al señor Melquisidec desde la celda, una seña muy temerosa, donde manifestaba con esa seña de que guardara silencio. De inmediato, el señor Villarreal en un estado de nervios empezó a llorar delante de su señora esposa y la señora le manifestó a él que mejor dijera todo lo que él sabía si él estaba involucrado en la investigación que se estaba haciendo. Continuaba llorando fuertemente, y situación que al verlo yo en esa situación como investigador, decidí que la señora se retirara y que posteriormente me iba a entrevistar con él. Pero que resulta, que cuando nosotros nos percatamos, nos reunieron a los dos detenidos juntos en una misma celda, quizás por falta de conocimiento del que manejaba el sistema, de la investigación que se estaba haciendo. PREGUNTADO: Sírvase el declarante a describir el tipo de seña que realizó el señor Roberto López al señor Melquisidec de León. CONTESTÓ: El tipo de seña era de un dedo pasándose por la boca y luego otro por el cuello insinuando un tipo de expresión como que si hablas se te degolla". (Fs. 1574-1575).

La celebración de la entrevista con el detenido López Villarreal, a que se refiere en su declaración Arrocha Rojas, fue corroborada por Manuel Bonome Rivera, el 7 de abril de 1994, ante el Fiscal Tercero Superior del Primer Distrito Judicial. Este testimonio reposa a fojas 1758 y 1759 del sumario y en lo pertinente Bonome Rivera afirma:

> "No estaba presente cuando se suscitó el hecho, pero el Inspector Arrocha inmediatamente me comunicó la situación anómala que él se percató se dio entre Ariel López Villarreal y Melquisidec de León y aparte de él evidenció el hecho un detenido que estaba cerca de Ariel López Villarreal que lo confirmó por medio de una entrevista con el Inspector Arrocha. La finalidad de la llamada del inspector Arrocha era para que yo estuviera presente en la entrevista que él iba a realizar con el detenido Ariel López Villarreal y cuando ésta se produjo y el inspector empezó a cuestionarle de las señas de amenaza de muerte en contra de Melquisidec de León, éste, Ariel López Villarreal en un estado de nerviosismo se puso a llorar y no pudo ser posible que manifestara el por qué lo había hecho. Estaba también presente en el despacho del Inspector Arrocha la esposa de Ariel López Villarreal que le solicitaba a su esposo que dijera toda la verdad sobre el asunto que el estaba involucrado sin lograr respuesta positiva de parte de la persona indicada. Quiero aclarar que el Inspector Arrocha a través de su larga trayectoria de trabajo dentro de la Policía Técnica Judicial y su suspicacia en las investigaciones, captó este preciso momento de amenaza de muerte y cumplió con el procedimiento indicado mediante los informes pertinentes y la entrevista rutinaria del caso y es más, cumplió con avisarme inmediatamente sobre el hecho y fui testigo de las preguntas que se le hacían a Ariel López Villarreal y la forma negativa como respondió sin poder defenderse ante tal evidencia de ser sorprendido in fraganti ante la amenaza que estaba infiriendo, descontrolándose su sentido anímico y su personalidad a tal forma que únicamente se puso a llorar" (fs. 1758-1759).

A López Villarreal se le señala como instigador del homicidio de Huerta Dávalos, y siendo esto así, a juicio del Pleno, desde que se dictó la citada sentencia de habeas corpus, no se han allegado al sumario pruebas que hagan ilegal la detención preventiva que sufre.

Un nuevo Agente del Ministerio Público encargado de la investigación, en su Vista Fiscal, emitida después de la ampliación del sumario, solicita que se dicte auto de sobreseimiento provisional en favor de López Villarreal, con fundamento en las nuevas diligencias de investigación practicadas, relativas a que no tuvo la oportunidad de cometer el ilícito porque el día y la hora en que ocurrió el homicidio investigado estaba en Capira, asistiendo a la práctica de una diligencia judicial. También toma en consideración el señor Fiscal al emitir concepto que el testigo Trujillo Ortega, quien afirmó haber visto a Roberto López Villarreal hacerle señales amenazantes a Melquisidec de León, al ser careado con ambos imputados, se retracto.

Sin embargo, el Pleno considera, para resolver la presente acción de habeas corpus, que la detención continúa siendo legal porque a López Villarreal se le imputa la autoría intelectual del ilícito y si bien el testigo Trujillo Ortega se retractó, las señas amenazantes que le hizo López Villarreal a Melquisidec de León también las vio el Inspector Luis Arrocha y el Inspector Bonome fue testigo de la entrevista en que aquél le hizo saber a López Villarreal que había visto cuando amenazó mediante señas a Melquisidec de León y López Villarreal se puso a llorar.

En mérito de lo expuesto la orden de detención impugnada debe declararse legal porque ha sido decretada cumpliendo con los requisitos señalados en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y sin violar las normas constitucionales que garantizan la libertad individual, sin perjuicio de la valoración de la fuerza probatoria de todos los nuevos elementos probatorios que deberá hacer el Tribunal del conocimiento, al calificar el sumario.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor Roberto López Villarreal decretada por el señor Fiscal Auxiliar de la República, mediante diligencia fechada 20 de abril de 1993, y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes del funcionario demandado.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS A. MUÑOZ POPE
(fdo.) ELOY ALFARO (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VLADIMIR QUINTANA BONILLA CONTRA EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado HORACIO RAMSEY MORALES, presentó acción de habeas corpus en favor de VLADIMIR QUINTANA BONILLA. Sostiene en la demanda que su representado se encuentra a órdenes de Director de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia, y que actualmente se mantiene detenido en las instalaciones de dicho departamento, supuestamente, por no contar con sus documentos legales de estadía en el país, debidamente autorizados.

Al liberarse el mandamiento de habeas corpus, se notificó al Director Nacional de Migración para que pusiera al detenido a órdenes de esta Corporación y rindiera el informe correspondiente, en el término de dos (2) horas.

El Director de Migración, presentó el informe que se transcribe a continuación:

"...
Honorable Magistrado:

Por este medio y con el debido respeto, damos respuesta a su mandamiento remitido a este Despacho con ocasión del Recurso de Habeas Corpus interpuesto ante esa corporación a favor de Vladimir Quintana Bonilla contra el Director de Migración y Naturalización.

Procedemos a rendir nuestro informe sobre los puntos requeridos en los siguientes términos:

a) No es cierto que ordenamos la detención del Señor Vladimir Quintana Bonilla de nacionalidad nicaragüense.
b) No existen al momento motivos, fundamentos de hecho ni de derecho para la detención del señor Vladimir Quintana Bonilla.
c) No tenemos bajo nuesta custodia ni a nuestras órdenes al señor Vladimir Quintana Bonilla. El mismo fue deportado del territorio nacional el día 26 de noviembre de 1996, mediante Resolución N° 9023 DNMYN del 25 de noviembre de 1996.

Atentamente,

Licdo. GERMÁN G. SÁNCHEZ T.
DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN"

De conformidad con el artículo 2572 del Código Judicial, el procedimiento de habeas corpus cesa una vez que el detenido haya recuperado por cualquier causa su libertad corporal. La situación planteada en esta disposición se da para el caso presente, por cuanto que, según lo expresa el Director de Migración, VLADIMIR QUINTANA BONILLA, en la actualidad no está privado de su libertad corporal, ni existe orden de detención en su contra, ya que fue deportado del país mediante Resolución N° 9023 DNMYN de 25 de noviembre de 1996, tal como lo señala expresamente el Director Nacional de Migración, en el informe transcrito anteriormente, y visible a fojas 10 del expediente.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EL CESE de la presente acción de habeas corpus.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL ANTONIO DÍAZ MATEO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **Julia Chitrit Smaja**, actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 2573 del Código Judicial y 23 de la Constitución Nacional, promovió acción de habeas corpus a favor de **MANUEL ANTONIO DÍAZ MATEO**, detenido preventivamente y puesto a órdenes del Director del Departamento de Migración y Naturalización.

Mediante providencia de 13 de diciembre de 1996, legible a fojas 4 del presente negocio, se libró mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado para que, en el término de ley, rindiera un informe sobre las causas de la detención del señor **MANUEL ANTONIO DÍAZ MATEO.**

No obstante, antes de que dicho informe fuera remitido a esta superioridad, la licenciada **Julia Chitrit Smaja**, apoderada legal del señor **MANUEL ANTONIO DÍAZ MATEO**, desistió de la acción de habeas corpus propuesta. Dicho escrito calendado 17 de diciembre de 1996, fue recibido el 19 de diciembre de 1996, en la Secretaría General de esta Corporación (cfr. fs 5 del expediente), y su contenido es del tenor siguiente:

> "... vengo ante ustedes de la manera más respetuosa, con la finalidad de **DESISTIR** formalmente del **HABEAS CORPUS** presentado el día 13 de diciembre de 1996, a favor del señor en mención quien se encontraba detenido en la cárcel del departamento de migración, ya que el señor, **DÍAZ MATEO** quiso abandonar el país, por lo que no tiene objeto la presente acción".

Como quiera que "toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente", conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por la licenciada Julia Chitrit Smaja, dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de MANUEL ANTONIO DÍAZ MATEO, y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Director Nacional de Migración.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN EURIBÍADES RODRÍGUEZ CONTRA LA FISCAL SEGUNDA DE CIRCUITO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Juan Antonio Ledezma ha interpuesto recurso de apelación contra sentencia de 27 de noviembre de 1996 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se declara legal la orden de detención preventiva de la cual es objeto el señor Juan Euribíades Rodríguez.

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial decretó legal la orden de detención emitida por la Fiscalía Segunda de Circuito del Tercer Circuito Judicial pues, en su criterio, dado el incipiente estado de las investigaciones, el delito imputado a Juan Euribíades Rodríguez es el tipificado en el artículo 186 del Código Penal y, además, su detención cumple con los requisitos formales que exige la ley, pues ha sido ordenada por escrito y por autoridad competente.

Por su parte, el licenciado Juan Antonio Ledezma estima que la detención

preventiva de la cual es objeto el señor Rodríguez es ilegal, ya que fue detenido por unidades de la Policía Nacional, sin orden escrita de ninguna autoridad competente y, además, contra el mismo no se ha dictado ninguna resolución que ordene su detención preventiva.

Se trata de un proceso iniciado a raíz de la denuncia interpuesta por Digna Meneses Sánchez, el 13 de octubre de 1996, ante la Policía Técnica Judicial, Agencia de la Chorrera. En la misma indicó que en la madrugada de ese día estaba caminando en compañía de Alcides Alveo y Chino cuando fueron interceptados por cuatro sujetos. Uno de los sujetos la agarró por la camisa, le puso un cuchillo en el cuello y les dijo que le dieran todo lo que traían encima o si no le metería una puñalada a ella. Sus dos amigos lograron escaparse y tres de los sujetos decidieron irse, quedando a solas con uno de ellos. Este sujeto la llevó a un campo de fútbol abandonado, le rompió la camisa, le tocó los senos, le pidió que se bajara el pantalón, dándose cuenta de que la misma tenía la menstruación, por lo que decidió no abusar de ella y luego de dos horas la dejó ir. Agregó que puede identificar a los sujetos porque se encontraban en la fiesta y al que tenía el cuchillo lo conocen como "Brujita".

El Pleno observa de fojas 35 a 36 consta la resolución proferida por la Fiscalía Segunda de Circuito Judicial de Panamá de 20 de noviembre de 1996, mediante la cual se dispuso ordenar la detención preventiva e indagatoria de Luis Smith y Juan Rodríguez por encontrarse involucrados en el delito de robo a mano armada.

Una vez efectuado el estudio de las sumarias, el Pleno de esta Corporación de Justicia coincide con los criterios expuestos por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dado que existen fuertes indicios que vinculan al señor Juan Euribíades Rodríguez con los hechos que se le imputan. Lo anterior es así, por un lado, pues consta la denuncia efectuada por Digna Emérita Meneses Sánchez (fs. 4-6) en la que señala que puede identificar a los sujetos que los asaltaron y que al sujeto con el cuchillo lo conocen como "Brujita". Por otro lado, consta la declaración jurada rendida por Juan Euribíades Rodríguez (fs. 19-21) en la que aceptó que junto a los jóvenes apodados Los Mellos, Toño y Yiyo, procedieron a asaltar a estas tres personas amenazándolas con cuchillos. También aceptó que se quedó a solas con la muchacha, a quien le manifestó que no le pasaría nada e incluso la acompañó a la parada, en donde la joven lo besó, pero escuchó que comenzaron a llamar a la joven, por lo que la llevó a un campo de juego cercano quedándose hasta las cuatro de la mañana, la acompañó hasta la parada y ella lo volvió a besar, acordando verse al día siguiente.

En virtud de lo antes anotado, el Pleno concluye que en la detención del señor JUAN EURIBÍADES RODRÍGUEZ, no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas que regulan la detención preventiva que fue ordenada por autoridad competente, razón por la cual lo procedente es confirmar la decisión del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 27 de noviembre de 1996 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor JUAN EURIBÍADES RODRÍGUEZ y dispone que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) YANIXA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANFRED ERICH ALBERT FEUCHT CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Félix León Paz Marín, actuando en representación de MANFRED ERICH ALBERT FEUCHT, ha interpuesto recurso de habeas corpus contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Director de la Policía Técnica Judicial, dicho funcionario contestó mediante la Nota N° A. L.-1511-96 de 14 de noviembre de 1996, lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor MANFRED ERICH ALBERT FEUCHT.
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
> 3. Tenemos bajo custodia al prenombrado MANFRED ERICH ALBERT FEUCHT; no obstante el mismo fue puesto a órdenes del Departamento de Migración y Naturalización por la Fiscalía Auxiliar de la República el día 3 de septiembre de 1996, mediante Oficio N° 13096 de la misma fecha. El citado Departamento mediante Oficio N° DNMSI-598-96 de 9 de septiembre de 1996, nos solicitó custodiáramos al detenido, ya que sus instalaciones no cuentan con la debida seguridad."

Librado nuevamente el mandamiento de habeas corpus, en esta ocasión contra el Director Nacional de Migración, dicho funcionario contestó mediante la Nota DNMYN-375-96 de 29 de noviembre de 1996 lo siguiente:

> a) El señor Manfred Albert Feucht, de nacionalidad alemana fue remitido a nuestra institución por la Fiscalía Auxiliar de la república, mediante Oficio N° 13096 del 3 de septiembre del presente año, en vista de que el ciudadano en mención no portaba documentación que acredite su estadía en la república. Posteriormente, se dicta orden de detención contra el señor Manfred Albert Feucht, de nacionalidad alemana, mediante Resuelto N° DNMSI-0048 del 6 de septiembre de 1996, por no portar documentos que acrediten su residencia legal en el país.
>
> b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicho ciudadano son:
>
> PRIMERO: Que, el señor MANFRED ALBERT FEUCHT se encontraba sindicado en la Fiscalía Auxiliar de la República por el delito contra el Patrimonio, cometido en perjuicio de Max Herman Jurgen Beckman.
>
> SEGUNDO: Que, el Lcdo. Carlos Augusto Herrera, Fiscal Auxiliar de la República, remitió mediante Oficio N° 13096 del 3 de septiembre del presente año al señor Manfred Erick Albert Feucht, de nacionalidad alemana para que se determinara su status migratorio y demás fines de rigor correspondiente.
>
> TERCERO: Que, una vez en nuestra instalaciones se comprobó que el señor Manfred Albert Feuch entró por última vez al territorio nacional el 7 de mayo de 1994 y a la fecha no porta ninguna documentación que acredite su residencia o permanencia en el país.
>
> CUARTO: Que, mediante Nota N° SG-2098 y Oficio N° 2562 del 15 de junio de 1994, enviada a este despacho por el Licdo. Andrés García Barrera, Fiscal Octavo del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, se solicita se le impida la Salida del país, ya que el mismo es requerido en una sumarias que se instruyen en ese despacho del Ministerio Público y que a la fecha no se ha enviado nota u oficio levantando tal impedimento.

QUINTO: Que es del conocimiento de nuestra institución que el señor Manfred Albert Feucht tiene casos pendientes por estafa, contra Naren Sahfroni-Fiscalía Tercera del Circuito; Dalys Haydée González de Caluche-Fiscalía Segunda del Circuito, Rosa Elena Gudiño de Phillips-Fiscalía Segunda del Circuito, Teresa de Jesús Barrantes de Sima-Fiscalía Primera del Circuito y Emeterio Miller Ramírez-Fiscalía Primera del Circuito.

SEXTO: No se ha efectuado orden de deportación hacia el señor Manfred Albert Feucht, debido a la suma de casos que posee ante el Ministerio Público, los cuales no han cumplido su proceso todavía, mas sin embargo, la Fiscalía del Dortmun-Alemania, ha ofrecido el pago de los boletos aéreos, tanto del señor Feucht como para un oficial de policía acompañante, en caso de la deportación del mismo, en vista de que éste posee casos pendientes en ellos.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 16 del 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 del 20 de septiembre de 1965 y adicionado por la Ley 6ta., del 5 de marzo de 1980, específicamente los artículos 36, 53 y 85, que al tenor establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 36: El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al país o el tránsito por el mismo a cualquier extranjero, así como expulsar del territorio nacional a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, siempre que ello sea necesario o conveniente por razones de seguridad, salubridad o de orden público.

ARTÍCULO 53: A todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional sin ser residente autorizado se le impondrá una multa de veinticinco a doscientos cincuenta balboas (B/.25.00 a B/.250.00) o arresto equivalente.

ARTÍCULO 85: El Director del Departamento de Migración despachará y decidirá en primera instancia los asuntos relacionados con la Migración en general.

Las resoluciones dictadas por este funcionario de conformidad con las disposiciones de este Decreto Ley, serán notificadas personalmente al interesado o a su representado apoderado. Si no pudieren ser notificados personalmente, se fijará un edicto en papel común en lugar público del respectivo Despacho por el término de tres (3) días hábiles, con insercción de la parte dispositiva de la resolución.

c) En la actualidad el señor Manfred Albert Feucht se encuentra a nuestras órdenes, pero se le solicitó al Licdo. Alejandro Moncada Luna, Director de la Policía Técnica Judicial, mediante Nota N° DNMSI-598-96, mantener en custodia en su sistema carcelario al ciudadano en mención, hasta tanto se defina su situación judicial en la república, en vista de que nuestras instalaciones no son de las más óptimas para mantener a un detenido de tal envergadura, así como también no contamos con el personal adecuado para su custodia."

Al entrar a considerar el mérito del presente recurso de habeas corpus, la Corte observa que el señor MANFRED ERICH ALBERT FEUCHT entró al país el día 2 de mayo de 1994 en calidad de turista. Del informe de filiación se observa igualmente, que mediante Nota SG-1422 y mediante Oficio 1547 del 12 de mayo de 1994 enviado por el entonces Fiscal Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Lcdo. Edgardo E. Arias a la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, donde solicita se le impida la salida del país, en virtud de sumarias seguidas en ese despacho en su contra. Posteriormente, mediante Oficio 2562 del 15 de junio de 1994, el Lcdo. Andrés García Borrero, Fiscal Octavo del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, solicita se le impida la salida del país ya que el mismo es requerido en unas sumarias que se instruye en

ese despacho. Finalmente, se le concede la citación N° 3477 por 30 días para que se presente a esa sección el día 2 de septiembre de 1994, por tener impedimento de salida.

Observa igualmente el Pleno, en cuanto a los hechos que motivaron la detención preventiva de la cual es objeto el señor MANFRED ALBERT FEUCHT, que dicho señor se encontraba sindicado en la Fiscalía Auxiliar de República por el delito contra el Patrimonio cometido en perjuicio de Max Herman Jurgen Beckman, razón por la que el Fiscal Auxiliar solicita al Ministerio de Gobierno y Justicia determine su status migratorio. Se pudo comprobar, que el señor MANFRED ALBERT FEUCHT entró por última vez al territorio nacional el 7 de mayo de 1994 y a la fecha no portaba documentación alguna que acreditara su residencia o permanencia en el país.

Al efectuar un análisis a los hechos antes planteados, tenemos que el Decreto Ley 16 de 1960 modificado por la Ley 6 de 1980, faculta al Director Nacional de Migración y Naturalización para tomar medidas directas sobre quienes hubiesen llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el país después de vencer sus visas de transeúntes, turismo, visitantes temporales o de tránsito serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para ser deportados o para tomar respecto de ellos cualquier otra medida que sea de lugar, en este caso la detención preventiva.

De todo lo anterior, se desprende que el señor MANFRED ERICH ALBERT FEUCHT ha sido privado de su libertad mediante la Resolución N° DNMSI-0048 de 6 de septiembre de 1996, expedida por autoridad competente y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 16 de 1960, razón por la cual lo procedente es, pues, declarar legal la medida cautelar de privación de libertad impuesta a dicho señor, por el Departamento de Migración y Naturalización.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la medida cautelar de privación de libertad expedida y practicada por el Departamento de Migración y Naturalización contra MANFRED ERICH ALBERT FEUCHT.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) YANIXA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CAMILO VALDESPINO AGRAZAL CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Iván A. Gántes Castillo ha interpuesto acción de habeas a favor de Camilo Valdespino Agrazal y contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Acogido el recurso se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas quien, mediante Oficio N° 12002 de 13 de noviembre de 1996, rindió el siguiente informe:

"A. La orden de detención preventiva del ciudadano **CAMILO VALDESPINO**

AGRAZAL, fue decretada por este despacho el 22 de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996).

B. Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva del ciudadano **CAMILO VALDESPINO AGRAZAL**, se centran en que el pasado 19 de octubre de los corrientes el Corregidor de Policía de Tocumen en compañía de unidades de la Policía nacional del Área "E" de Tocumen, efectuaron una Diligencia de Allanamiento en el sector N° 20 de la Ciudad Jardín Las Mañanitas residencia s/n. dando con el hallazgo dentro de la mencionada residencia dentro de un hueco en la pared de la habitación de mano derecha, un cartucho amarrado de color blanco de material plástico, el cual contenía la cantidad de treinta y cinco (35) trocitos de carrizos de material plástico transparente, que en su interior contenía una sustancia en forma de polvo de color blanco que se presumió era Cocaína. En el cartucho también se detectó una planchita de un material sólido de color cremoso que se presume era droga. Como responsable del inmueble se identificó el ciudadano **CAMILO VALDESPINO AGRAZAL**, quien al momento de la diligencia de allanamiento aceptó ser el propietario del dinero y droga antes descrita (véase fs. 2-3 y 7-9 del sumario). Además, se encontraba en compañía del señor **JUAN VICENTE MORENO**, al cual al efectuarle el registro de rigor en la mano derecha tenía la cantidad de cinco (5) envoltorios de papel periódico los cuales lanzó al piso y al ser revisados se conformo (sic) que en su interior mantenía una sustancia en forma de hierba seca la cual se presumió era marihuana. En la vivienda se logro (sic) ubicar la suma de sesenta y ocho dólares con noventa y cinco centavos ($68.95), en dinero fraccionado.

En este despacho se da inicio la investigación de los hechos por estar frente la posible comisión de un delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, relacionado con drogas, efectuándosele a la sustancia en cuestión una prueba de campo lo que arrojo (sic) resultados positivos para la determinación de **COCAÍNA, CRACK Y MARIHUANA.**

De lo anotado, se observa la comisión de un delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, relacionado con drogas y operan en contra del ciudadano **CAMILO VALDESPINO AGRAZAL** el informe de novedad suscrito por el Cabo **1° SABINO ROJAS;** la Orden y la Diligencia de allanamiento emitidas conforme a los señalamientos legales por la autoridad de Policía de Corregimiento de Tocumen; la Diligencia de Prueba de Campo efectuada en la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, que inicialmente ha arrojado resultados positivos para las drogas **COCAÍNA, CRACK Y MARIHUANA;** el informe de Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial fue solicitado mediante oficio 11416 fechado 24 de octubre aún no se nos ha remitido.

Pese a que, al rendir declaración indagatoria, **CAMILO VALDESPINO AGRAZAL** niega los cargos que se le formulan, manifestando que las sustancias encontradas en la residencia de su cuñado de nombre **RUBÉN DARÍO ARIAS** son propiedad del ciudadano **JUAN VICENTE MORENO DOMÍNGUEZ** y de que **MORENO DOMÍNGUEZ**, en su declaración indagatoria acepto (sic) ser dueño de las sustancias ilícitas, destinada para consumirla en Portobelo y de que pretende excluir a **VALDESPINO AGRAZAL.** Los elementos probatorios e indiciarios acoplados hasta el momento reflejan una realidad distinta, donde emana la vinculación del primero con el hecho que se investiga y ello sirvió para ordenar la detención preventiva del mismo.

El fundamento de derecho para ordenar y mantener la detención preventiva del señor CAMILO VALDESPINO AGRAZAL, se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

C. Actualmente el ciudadano CAMILO VALDESPINO AGRAZAL, se encuentra

detenido y filiado a nuestras ordenes (sic), y es inmediatamente puesto a órdenes de esta alta corporación." (Fs. 7 y 8).

Por su parte, el licenciado Iván A. Gántes manifiesta que la detención de la que es objeto el señor Camilo Valdespino Agrazal es ilegal, ya que Juan Moreno en su declaración indagatoria acepta que se introdujo en la residencia de Camilo Valdespino y que la droga encontrada era de su propiedad. También señala el licenciado Gántes que la suma de B/.68.95 incautadas son producto del trabajo del señor Valdespino como pescador.

En este momento, corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada, cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

La Corte observa que a fojas 31 y 32 de las sumarias, reposa la resolución fechada el 22 de octubre de 1996, mediante la cual la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Droga, una vez efectuado un análisis inicial de los hechos, estimó que los mismos vinculan al señor Camilo Valdespino Agrazal, razón por la cual ordenó su detención preventiva.

Observa el Pleno que se trata de un proceso iniciado de oficio, por cuanto que al señor Camilo Alberto Valdespino Agrazal se le imputa delito contra la Salud Pública.

La Corte observa a fojas 6 a 9 diligencia de allanamiento con fecha de 19 de octubre de 1996, suscrita por Aecio Moreno, Corregidor de Tocumen, asistido por el secretario, en funciones de agente especial, en la que se destacan las circunstancias que culminaron con la detención del ciudadano Camilo Alberto Valdespino Agrazal.

Igualmente, consta a fojas 2 y 3 de las sumarias el Informe de Novedad, suscrito por el Cabo 1° 6169 Sabino Rojas de la Sub-Dirección de Información e Investigación Policial, Área E, en el cual se destaca que el día sábado 19 de octubre de 1996, procedió al Sector #20 de Ciudad Jardín Las Mañanitas, residencia s/n, ya que según información obtenida se encontraba en dicha residencia un sujeto con arma de fuego, el cual era prófugo de la justicia, por lo que se coordinó un allanamiento con el corregidor en turno y en compañía del Cabo 1° 3812 Andrés Martínez, el Cabo 6169 Sabino Rojas, Cabo 2° 14392 Jan Roger Icaza. Añade que al efectuar el allanamiento en presencia del propietario de la residencia, Camilo Alberto Valdespino Agrazal, notó en un hueco de la pared de uno de los cuartos, un cartucho amarrado de color blanco de material plástico transparente el cual contenía treinta y cinco (35) trocitos de carrizos de material transparente con un polvo de color blanco que se presume sea droga. También en el mismo cartucho se encontró una planchita de un material sólido cremoso que se presume sea droga. Además, señala que en la misma residencia se encontró a Juan Vicente Moreno quien al efectuársele el registro de rigor se le encontró en la mano derecha cinco (5) envoltorios de papel periódico que al verificar su contenido, se encontró hierba seca que se presume sea droga Marihuana. Añade que al efectuarse el registro de Valdespino Agrazal se le encontró sesenta y ocho balboas con noventa y cinco centésimos (B/.68.95) desglosados de la siguiente manera: treinta y tres billetes de un balboa (B/.1.00), cuatro billetes de cinco balboas, un billete de diez balboas (B/.10.00), dieciséis monedas de veinticinco centésimos (0.25), dos monedas de cincuenta centésimos (0.50), cinco monedas de diez centésimos (0.10) y nueve monedas de cinco centésimos (0.05). También consta en el informe de novedad que el señor Valdespino aceptó que el dinero y las sustancias encontradas en el cartucho eran de su propiedad.

Consta a foja 14 del expediente el informe de laboratorio que certifica que las muestras analizadas resultaron positivas, para la determinación de Cocaína, en la cantidad de 2,10 gramos; Cocaína (Crack), en la cantidad de 9,44 gramos y Marihuana en la cantidad de 1,11 gramos.

No obstante, observa el Pleno que de fojas 23 a 30 consta, efectivamente, la declaración indagatoria rendida por Juan Vicente Moreno Domínguez, quien señala ser el dueño de la toda droga incautada y la cual tiró en la casa de

Camilo Valdespino Agrazal a quien dice conocer sólo de vista.

Del estudio de las sumarias, el Pleno estima que el informe de novedad, la diligencia de allanamiento y el informe de laboratorio constituyen indicios suficientes que vinculan al señor Camilo Valdespino Agrazal con los hechos a él imputados.

En virtud de lo antes expuesto, el Pleno de esta Corporación estima que la detención preventiva del señor Camilo Valdespino Agrazal, no ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que lo procedente es, pues, declarar legal la detención.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor Camilo Valdespino Agrazal y, por tanto, dispone que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) YANIXA YUEN DE DÍAZ
Secretario General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS ERNESTO JARAMILLO RAMOS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Ricardo Arturo Boza Barsallo, presentó recurso de habeas corpus a favor del señor ALEXIS ERNESTO JARAMILLO RAMOS y contra una supuesta orden de detención, de hecho, ordenada por el Director de la Policía Técnica Judicial.

Librado de inmediato el mandamiento de habeas corpus el referido Director de la Policía Técnica Judicial, mediante Nota A. L. 1579 de tres (3) de diciembre de 1996, rindió el siguiente informe:

> "Respetuosamente me dirijo a Usted, para dar contestación al Mandamiento de Habeas Corpus, presentado a favor del señor ALEXIS ERNESTO JARAMILLO RAMOS en contra del suscrito Director de la Policía Técnica Judicial.
>
> De acuerdo a lo establecido mediante el artículo 2582 del Código Judicial, me permito rendir el siguiente informe:
>
> 1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor ALEXIS ERNESTO JARAMILLO RAMOS.
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al prenombrado JARAMILLO RAMOS."

Dado que del informe presentado por el Director de la Policía Técnica Judicial se colige claramente que el ciudadano a favor del cual se ha presentado este recurso de habeas corpus, señor ALEXIS ERNESTO JARAMILLO RAMOS, no se encuentra privado de su libertad, debe procederse entonces de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 2572 del Código Judicial.

Por todo lo antes expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA el cese de los trámites del recurso de habeas corpus interpuesto en este caso a favor del señor ALEXIS ERNESTO JARAMILLO RAMOS y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) YANIXA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN EN ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICTOR MANUEL HINESTROZA DÍAZ CONTRA LA JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por la Licenciada ANGÉLICA JOHNSON LOWE a favor del señor **VICTOR MANUEL HINESTROZA DÍAZ**, contra la Juez Segunda de Circuito de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.

El cuadernillo proviene del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, luego de que éste declarara **LEGAL** la detención de **HINESTROZA DÍAZ** mediante sentencia de veintidós (22) de noviembre de 1996, la cual en su parte pertinente indica lo siguiente:

> "... Con respecto a los indicios de responsabilidad penal contra el procesado, ellos surgen del señalamiento formulado por la querellante que, al parecer, equivocó la identificación de su agresor con el padre de éste, rectifica la versión y queda comprobado que el imputado es hijo de la persona anteriormente señalada por la querellante, también reside en la misma residencia de aquél, eso es constatado en la diligencia de allanamiento practicada.
>
> Ahora bien, la evaluación psiquiátrica de la querellante descarta enfermedad mental, alucinaciones, pérdida de la memoria o bajo coeficiente intelectual, porque la describe como una persona con inteligencia normal, ésto permite inferir que no está haciendo elucubraciones y es natural que después de ser afectada por un hecho de tal trascendencia, que guarda relación con la dignidad y estabilidad emocional de una mujer, inicialmente incurriera en equivocaciones sobre los señalamientos.".

La recurrente en el presente negocio, no sustentó por escrito la apelación contra la sentencia de habeas corpus del Segundo Tribunal Superior, de modo que procederemos al análisis de dicha sentencia así como de los aspectos formales de la detención preventiva del señor **HINESTROZA DÍAZ.**

De lo actuado en el sumario, se colige que en horas de la madrugada del día domingo 17 de septiembre de 1995 fue abusada sexualmente la joven ANGÉLICA MARÍA MUÑOZ MIRANDA, luego de bajarse de un taxi en el sector del Valle de San Isidro procedente de la casa de su novio después de asistir a una actividad bailable.

En el camino, narra la víctima que fue abordada por un sujeto desconocido quien entabló conversación con ella y cuando iban por un lugar oscuro la comenzó a puyar por la espalda llevándola amenazada a la parte trasera de una casa, que supuestamente era suya y la tenía casi ahorcada. El sujeto le preguntaba cómo se llamaba, a lo que ANGÉLICA respondió que "MICHEL", entonces le dijo que así se llamaba una hermana de él que habían matado y también violado; luego la amenazó que no hiciera nada sino quería que le pasara lo mismo y le empezó a quitar la ropa, luego abusó sexualmente de ella hasta las seis (6:00 a.m.) de la mañana. Cuando ANGÉLICA intentaba algo el sujeto la puyaba con una tijera, también le dió golpes en el estómago con el puño cerrado y la arañó en diferentes partes del cuerpo.

De lo anterior da fé el certificado del Instituto de Medicina Legal visible a fojas 139 que indica que la ofendida está desflorada de reciente data, que existen señales de violencia y de coito; y que presenta excoriaciones en el cuello, en el abdomen, en la región lumbar y en el antebrazo derecho.

El imputado en el presente negocio, el señor **VICTOR MANUEL HINESTROZA DÍAZ** no ha rendido aún declaración indagatoria, sin embargo, contra él pesan los señalamientos directos que hace la víctima de que fue quien abuso sexualmente de ella el día de marras.

La Corte comparte plenamente el criterio del Segundo Tribunal Superior, en cuanto a las condiciones psicológicas de la querellante y la explicación lógica de su estado al confundir a su agresor. Advierte también esta Corporación que la ofendida ha sido enfática al señalar en varias ocasiones que ha visto a su agresor en el sector del Valle de San Isidro, y la descripción que de él hace corresponde tanto a la edad como a otros rasgos físicos con el señor **HINESTROZA DÍAZ.**

Un punto interesante también viene a ser el hecho de que del sitio donde reside el señor **HINESTROZA DÍAZ** al sitio en el que fuera abusada sexualmente ANGÉLICA MUÑOZ, existan, al decir de ésta, menos de cincuenta metros (50 mts.). Igualmente, la víctima al presentar su primera querella indica que el sujeto desconocido le dijo que manejaba autobús del Valle de San Isidro y de Panamá Viejo; y días después del hecho, ella en compañía de un amigo vieron al sujeto en la piquera de buses de El Valle de San Isidro (fs. 102). El amigo de ANGÉLICA le dijo que conocía al sujeto y que le decían "VITITO"; mientras que en declaración indagatoria, el señor **VICTOR MANUEL HINESTROZA BRANCA**, padre del recurrente manifiesta que a su hijo VICTOR MANUEL HINESTROZA DÍAZ le dicen "VITITO" (fs.220).

Por todo lo anterior, el Pleno es del criterio que la decisión tomada por el a-quo en el caso subjúdice es la correcta y por tanto procede su confirmación ya que se encuentran reunidos todos los presupuestos legales necesarios para que la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva sea legal, ya que se trata de delito sancionado con pena mínima superior a dos (2) años.

En mérito de lo expuesto, la **Corte Suprema**, **PLENO**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** en todas sus partes la Sentencia de veintidós (22) de noviembre de 1996, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención preventiva de **VICTOR MANUEL HINESTROZA DÍAZ.**

Notifíquese y cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo). LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo). AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo). ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
SECRETARIA GENERAL ENCARGADA

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN BAUTISTA AGUILAR SANTOS CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO

VISTOS:

El Licenciado ROBERTO KOURUKLIS IVALDY ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema, acción de habeas corpus a favor de **JUAN BAUTISTA AGUILAR SANTOS** contra el Fiscal Especializado en Delitos relacionados con drogas.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, el funcionario acusado rindió su informe de conducta en los siguientes términos:

> "A.- La orden de detención del ciudadano JUAN BAUTISTA AGUILAR SANTOS, fue decretada mediante providencia fechada 24 de septiembre de 1996, por este despacho.
>
> B.- Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de JUAN BAUTISTA AGUILAR SANTOS, se reflejan en que el día 20 de septiembre del año en curso, se realiza Diligencia de Allanamiento en la residencia, ubicada en Juan Díaz Concepción La Vieja, Manzana H, casa #51. En donde primeramente se procede a efectuar una compra simulada con la utilización de cinco billetes de a un balboa y previamente identificados. Al llegar a dicho inmueble fueron recibidos por el señor JUAN BAUTISTA AGUILAR SANTOS, quien manifestó que esa no era su residencia que esa casa le pertenecís (sic) su hermana Delia Esther Santos Aguilar, al proceder al registro del inmueble en la cual se encontró un pantalón color crema y al proceder al registro del mismo se encontró en uno de los bolsillos una bolsa negra de basura un envoltorio de papel amarillo con cierta cantidad de hierba seca que se presume sea Marihuana. Dentro de los predios de la residencia se encontraba el señor Daniel Alexis Parra, quien trató de darse a la fuga por debajo del alambre y lanzó un bulto que al recogerlo resultó ser un revólver calibre 38 marca Taurus, con seis municiones sin detonar del mismo calibre, además la cantidad de ciento trece balboas (B/113.00) en diferentes denominaciones. También se ubicó en el techo de la casa dentro de un cartón de leche marca "Oro" un envoltorio de papel amarillo ontentivo (sic) de regular cantidad de hierba seca que se presume sea Marihuana. Cabe mencionar que en este dinero se encontraron los cinco billetes que se utilizaron para efectuar la compra simulada. Seguidamente se procedió a levantar un Acta de Allanamiento en una residencia s/n, ubicada en el mismo lote, debido a que uno de los sujetos que estaban en la primera residencia se dió a la fuga tratándo de introducirse a la casa s/n y llevando en las manos un bulto. En el registro de la casa antes mencionada se ubicó debajo de una ropa la suma de B/24.00 balboas en billetes de a uno y de cinco, también se encontró un bipper marca Motorolla y en una cómoda se encontró un cartucho de escopeta sin detnonar(sic) y en una canasta de plástico se encontraron dos sobres plásticos con un polvo color blanco que según la señora Elizabeth Aguilar se trata de ablandador de cocina, en esta residencia no se encontró sustancia ilícita. Cabe mencionar que al preguntarle al señor Aguilar sobre la procedencia del dinero manifestó que era de su madre, al preguntarle a la señora Aguilar sobre el dinero ésta manifestó que no sabía que ese dinero existía y que probablemente era de su hijo, razón por la cual fue conducido para su debida investigación. Al ser indagado el señor negó que la sustancia ilícita incautada le pertenezca y que no tiene conocimiento de quien puedan ser. A fojas cincuenta y seis (56) se encuentra acreditado el resultó(sic) positivo para Marihuana con un peso de 13.14 gramos y 0.55 para Cocaína-Crack.".

De lo actuado en el cuadernillo principal se desprende que el día 20 de septiembre se llevó a cabo un allanamiento en Juan Díaz Concepción La Vieja, Manzana H, casa #51; en dicha diligencia se incautó 13.69 gramos de sustancias ilícitas.

En la diligencia fue detenido **JUAN BAUTISTA AGUILAR SANTOS**, quien recibió a los agentes del D.I.I.P. en la casa #51, que según dijo, pertenece a su señora madre **DELIA ESTHER SANTOS AGUILAR**, quien no se encontraba en el sitio al momento del registro. Mientras se llevaba a cabo la diligencia, se encontró en el bolsillo de un pantalón crema una bolsa negra que en su interior presentaba un envoltorio amarillo contentivo de una hierba seca que se presume sea marihuana. También se encontró sobre el techo de la vivienda un cartón de leche que en su interior contenía otra cantidad de la misma hierba antes mencionada.

Indagado sobre la sustancia ilícita encontrada, **JUAN BAUTISTA AGUILAR SANTOS** declara que no sabe a quién pertenece y niega residir en la vivienda, pues indica que sólo se queda ahí dos o tres días y se va al interior o a casa de una de sus hijas; no obstante, a fojas 36, al indicar sus generales, se lee "con residencia actual en Juan Díaz Concepción, calle B, casa No.51", dirección ésta que corresponde a la de la madre del sindicado y que fuera allanada el 20 de septiembre. También manifiesta que estuvo detenido por un caso similar de un allanamiento en la misma residencia y que salió por medio de un recurso de habeas corpus; que dicho lugar ha sido objeto de allanamiento tres veces y que en dos ocasiones encontraron sustancias ilícitas.

Por otro lado el Teniente de la Policía Nacional **FELICIANO BENITEZ VEGA**, encargado del operativo, se ratificó de fojas 70-75 del informe visible a fojas 4 y 5 del sumario. Indicó el oficial BENITEZ VEGA que la operación de compra simulada se llevó a cabo ya que tuvieron información de que en esa residencia se estaban dedicando al tráfico de drogas y la operación dió resultado positivo. Al cuestionarlo el Fiscal sobre si se había interrogado a las personas que se encontraban en la residencia allanada, a foja 74 del cuadernillo, el oficial **BENITEZ VEGA** afirmó lo siguiente:

> "CONTESTO: Señor Fiscal, sí los interrogamos pero ninguno manifestó nada. Pero al solicitarle la cédula al señor Juan Bautista el mismo manifestó que estaba en su pantalón y al proceder a buscar dicho pantalón para sacar la cédula y efectuarle el registro a dicho pantalón se encontró dentro del mismo un envoltorio con una sustancia en forma de hierba seca, pero dicho ciudadano manifestó no tener conocimiento a quien le pertenecía.".

Lo sostenido por el agente BENITEZ VEGA hace que los descargos que formularan tanto el Licenciado ROBERTO KOURUKLIS como el propio imputado sobre que a éste no se le encontró sustancia ilícita en su poder carezcan de fundamentación fáctica. Si bien es cierto, a **AGUILAR SANTOS** no se le incautó droga que estuviera "materialmente" en sus manos, el pantalón que contenía el envoltorio con la hierba seca (marihuana) le pertenece, tal como lo indica el agente captor; esto hace que existan serias dudas sobre su inocencia.

También convergen en su contra los antecedentes de investigaciones previas realizadas en su contra por allanamientos en la misma residencia y los graves indicios que se desprenden del hecho de ser el propietario del pantalón que contenía parte de la droga incautada.

Tampoco es válida la coartada de que **AGUILAR SANTOS** no reside en la vivienda N° 51, ya que él mismo indicó al manifestar sus generales en la declaración indagatoria que esa es su "residencia actual".

A fojas 56 del sumario se observa el Informe del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, en el mismo se indica lo siguiente:

> "Certificamos que las muestras analizadas resultaron POSITIVAS, para la determinación de MARIHUANA, en la cantidad de 13.14 gramos y

COCAINA (CRACK), en la cantidad de 0.55 gramos.".

El artículo 2148 del Código Judicial establece que cuando se proceda por delito que tenga señalada **pena mínima de dos años de prisión** se podrá decretar la detención preventiva previo el cumplimiento de las formalidades previstas en dicho cuerpo de leyes.

El delito por el cual se encuentra detenido el referido **JUAN BAUTISTA AGUILAR SANTOS** es de aquellos que atentan contra la Salud Pública relacionados con drogas, y específicamente el de tráfico, tipificado en el artículo 258, Capítulo V, Título VII del Libro II del Código Penal, en el que se establece una pena mayor de dos (2) años de prisión.

De lo anterior se desprende que estamos ante un hecho criminoso que amerita la medida cautelar de detención preventiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 2148 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, **PLENO**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA LEGAL** la detención preventiva decretada contra **JUAN BAUTISTA AGUILAR SANTOS**, y en consecuencia **ORDENA** sea filiado nuevamente en el respectivo Centro Penitenciario, a órdenes del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.)ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
SECRETARIA GENERAL ENCARGADA

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PATROCINIO ROMERO CUBILLAS CONTRA EL FISCAL DÉCIMO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a esta Corporación la acción de habeas corpus preventivo propuesto a favor de **PATROCINIO ROMERO CUBILLAS** contra el Fiscal Décimo del Circuito de Panamá, que resolvió el Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante resolución de 29 de noviembre de 1996.

La citada resolución declaró **"LEGAL** la orden de conducción impartida contra **PATROCINIO ROMERO CUBILLAS** dentro del sumario que se instruye por la supuesta comisión de los delitos de **`corrupción de funcionario público** y **`extorsión** , denunciado por la Licda. **Petra María Soriano Araúz."**

Sobre los hechos en se fundamentó el habeas corpus, se menciona, que el Fiscal Auxiliar de la República envió a los Directores de la Policía Técnica Judicial y de la Policía Nacional los oficios N° 15118-FAR y 15119-FAR, respectivamente, por los cuales ordena conducir a su despacho al señor Patrocinio Romero, debido a lo cual, se le priva de su derecho a transitar libremente por el territorio nacional. Dichos mandamientos, fueron mantenidos por el Fiscal Décimo del Circuito de Panamá, quien incurre en la misma violación, a pesar de que no existe orden de detención preventiva contra Romero, dice el recurrente. Sostiene el accionante que lo procedente es la citación personal de Romero porque no hay indicio que lo vincule al delito investigado, de manera que el mantener la orden de conducción, protestada, con el único propósito de tomar declaración indagatoria, viola la Constitución, por lo que solicita sea declarada ilegal.

El Tribunal Superior, en el fallo que resolvió el habeas corpus, cita el informe que le enviara el funcionario demandado que indica que ningún despacho del Ministerio Público ha ordenado la detención preventiva de PATROCINIO ROMERO, además, que no tiene conocimiento de la privación de libertad ambulatoria en su contra y, por tanto, que en el expediente contentivo del sumario que se le sigue junto a otros, "no reposa orden escrita en tal sentido". Sobre el particular explica que la Fiscalía Auxiliar dispuso recibir declaración indagatoria a Patrocinio Romero, por lo que se le considera imputado en el sumario; en atención a la ritualidad del procedimiento su defensa interpuso Incidente de Controversia contra dicha decisión, el cual aguarda concepto del respectivo juzgado; además, a favor del mismo se presentó Incidente de Nulidad de todo el expediente a partir de foja 6, también pendiente de decisión. Informa, que ese sumario lo está conociendo por COMISIÓN de la Procuraduría General de la Nación, encontrándose en espera de diligencias judiciales provenientes de Bocas del Toro, Herrera y Colón, para esclarecer lo denunciado.

De esta forma, el Segundo Tribunal hace un recuento de diversos aspectos del expediente principal que le fuera remitido con el aludido informe, expresando, entre otras cosas, que del mismo se desprende que la licenciada Petra María Soriano Araúz denunció en la Policía Técnica Judicial al Alcalde de Changuinola, Manuel Salvador Guadamúz, "porque a través del señor **Patrocinio Romero** y el Licdo. **Víctor Collado** le habían requerido la entrega de B/.25,000.00 para dejar de perseguir a **Marta Gamboa** -su cliente-, quien es arrendadora de un local en el Mercado Público de Changuinola".

Entre las piezas del expediente a que se refiere la resolución apelada, se destaca la resolución de 7 de octubre de 1996 proferida por la Fiscalía Auxiliar (fs. 386-389), en la que manifestó "que el binomio jurídico para la indagatoria es aplicable a los dos aprehendidos, al igual que al ausente **Patrocinio Romero** por lo que dispuso se les obligara a cumplir con esa diligencia"; en la misma fecha, pero en otra resolución (fs. 412-419), se ordenó oficiar a la Policía Nacional y a la Técnica Judicial la localización de Romero; y, en resolución dictada al día siguiente (fs. 478-480) dispuso solicitar a dichos cuerpos policiales su localización y conducción.

Posteriormente, como conclusión al examen que antecede, el sentenciador se pronuncia en los siguientes términos:

> "Tras analizar las piezas que integran el proceso frente a lo planteado por el demandante se pasa a resolver lo de lugar a través de las siguientes consideraciones:
>
> La denunciante señala a Patrocinio Romero como una de las personas a través de las que Manuel Salvador Guadamúz pretendía la obtención de B/.25,000.00, afirmación que hasta el momento de la investigación no ha sido desvirtuado ni aclarado por el cual procede a citarse al imputado para que aclare su situación a través de una declaración; aún cuando no lo dispuso expresamente en su resolución de 8 de octubre de 1996 visible a fojas 478-480, el Fiscal Auxiliar de la República ordenó la localización y conducción de Patrocinio Romero para que rindiera declaración indagatoria porque, como ya se ha dicho, le son formulados cargos directos de ser autor de los ilícitos denunciados.
>
> En la investigación de los delitos y sus posibles autores, el agente del Ministerio Público está facultado para interrogar a los imputados: es precisamente la indagatoria, uno de los medios de defensa con que cuenta el acusado. La conducción es al perecer (sic) en este caso el único medio para lograr la comparecencia de Romero ya que, pese a ser conocedor de los cargos que se le formulan, no ha concurrido voluntariamente ante el Ministerio Público a poner en claro todo aspecto circundante a dichos cargos, de tal suerte que la medida censurada es legal y así debe declararse." (Fs. 24 a 25).

Por su parte el apelante, en un extenso escrito que consta de fojas 29 a

35, en síntesis formula los siguientes cargos:

> "No existen indicios siquiera para que los agentes de instrucción a(sic) dicten y mantengan vigentes una orden de conducción en contra de nuestro representado PATROCINIO ROMERO CUBILLA, existiendo otras alternativas que no llevan a violentar la libertad ambulatoria de que goza nuestro defendido, porque no pesa en su contra, a pesar de que se le considera imputado ninguna orden de detención preventiva debidamente fundamentada en lo que dispone el artículo 2148 del Código Judicial, ya que el mismo nunca ha sido sorprendido en flagrante delito, ni ha cometido, ni participado en el delito que se investiga, conforme a denuncia presentada en contra de otras personas, ilícitos que tienen señalada pena mínima de dos años de prisión. Ello hace factible explorar la posibilidad de adoptar otras medidas de coerción procesal penal, como una citación, que no afecte la libertad personal, reduciendo el número de casos que se encuentran en la misma situación en la vía Judicial sobre todo ante el Ministerio Público.
>
> Para evitar el estigma que significa la conducción o aprehensión preventiva y sus posibles efectos adversos, dando así alivio a la excesiva carga laboral de los Tribunales, por que existen otros mecanismos que garantizan la comparecencia de una persona ante el instructor o la autoridad y en tal sentido mostramos nuestra inconformidad con la declaratoria de la legalidad de la medida de marras que ha hecho el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA." (Fojas 32 a 33).

Luego de todo lo expuesto, el Pleno de la Corte ha podido observar que mediante la acción de habeas corpus presentada se pretende impugnar una orden de conducción para que una persona rinda declaración indagatoria, porque se considera que se trata de un procedimiento mal empleado y que dicho error violenta el derecho a la libertad ambulatoria.

A juicio de esta Corporación, no es el habeas corpus el remedio pertinente para atacar situaciones como la planteada. En estos casos el representante judicial de la persona requerida para ser indagada tiene a su alcance los medios procesales correspondientes para atacar la decisión de ordenar la indagatoria y la consecuente conducción del imputado, remedios que, en efecto, fueron utilizados dentro de este negocio, pues el abogado presentó reconsideración, incidente de controversia e incidente de nulidad.

Resulta claro que no se ha dictado orden de detención preventiva contra el beneficiado con esta acción y que, si bien existe una orden de conducción para que el mismo comparezca ante el Ministerio Público a enfrentar los cargos que se le imputan, ello no implica que se esté conculcando su derecho a la libertad de tránsito, ni que se está intentando confinar ilegalmente a dicha persona.

En consecuencia la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 29 de noviembre de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ISRAEL OCTAVIO CANDO MADRID CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A.

SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **MARIBEL DEL ROSARIO VEGA VEGA** interpuso acción de habeas corpus a favor del ciudadano ISRAEL OCTAVIO CANDO MADRID contra el FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el funcionario demandado contestó mediante oficio visible de fojas 4 a 12 del expediente.

Encontrándose el expediente en estado de resolver, la proponente de la acción de habeas corpus, presentó escrito donde manifiesta su desistimiento de la presente acción constitucional.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento presentado por la licenciada MARIBEL DEL ROSARIO VEGA VEGA a favor de ISRAEL OCTAVIO CANDO MADRID, ordena el cese y el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CÉSAR MORA Y GENARINO MORA CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **RENÉ A. RODRÍGUEZ G.** ha interpuesto acción de **Habeas Corpus** a favor de **CÉSAR MORA** y **GENARINO MORA** contra el Director General de Aduanas.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el Director de Aduanas contestó expresando que no había ordenado la detención de los prenombrados ciudadanos, pero que sí lo hizo el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, mediante Providencia N° AL-ARA-122, de fecha 22 de noviembre de 1996, en virtud de solicitud elevada por el Departamento de Fiscalización Aduanera.

En efecto, al librar nuevamente el mandamiento de habeas corpus, el mencionado Administrador Regional de Aduanas confirmó el hecho de haber ordenado la detención, mediante la citada resolución, expresando como motivos o fundamentos de hecho y de derecho los siguientes:

Sostiene que la presente encuesta aduanera tuvo su origen en el Acta de Proceso N° 0506 de 18 de noviembre de 1996, firmada por funcionarios del Departamento de Fiscalización Aduanera, donde señalan que en esa fecha detuvieron un camión conducido por GONZALO GARIBALDI BROWN, quien iba acompañado por GENARINO MORA FUENTES, debido a que transportaba mercancía amparada con una documentación que no correspondía a la misma.

También se hace referencia a que fue incluido, previo a la referida Acta,

un Informe de Novedad suscrito por la Licda. Iris F. Araúz, donde describe los procedimientos realizados para capturar el vehículo. En tal sentido, se indica:

> "...
> Luego de observar los movimientos del sujeto y verificar que se trataba de Jorge Pascual el cual es conocido por su vinculación a este tipo de delitos, el mismo procedí al parecer a custodiar dos camiones, uno de ellos perteneciente a TRANSPORTE LOS ANGELES los cuales venían rumbo a la ciudad de Panamá.
>
> Los inspectores de Aduana proceden a detener uno de los camiones al llegar a la altura de la Avenida de los Mártires, observando que el Suzuki Vitara se perdía de vista; al solicitar la documentación que amparaba la mercancía transportada por el conductor que responde al nombre de GONZALO GARIBALDI BROWN, nos mostró copia de la DECLARACIÓN LIQUIDACIÓN, con número piloto 573252 y perforado N071588 y fecha trece (13) de noviembre, cuyo consignatario era el SUPERCENTRO EL ATREVIDO, S. A.; de igual calenda, se la empresa CENTRAL CARGO, S. A., compañía que maneja el señor Pascual. La mencionada liquidación, posee los sellos de EXAMINADOS LOS BULTOS sin firma, ni fecha y con otro sello en el cual se lee Transportes Joel, con fecha 18-11-96". (Fs. 9).

Posteriormente, en la Nota remitida a esta Corporación, se mencionan diversos aspectos aludidos en las declaraciones indagatorias rendidas por GONZALO GARIBALDI y los sindicados, sobre los hechos acaecidos. Veamos:

> "En declaración indagatoria rendida por el Sr. GONZALO GARIBALDI BROWN, a preguntas formuladas respondió que un señor Chicho me dijo que había viaje para Chiriquí, cuando cargaron el camión el señor me entregó los papeles notificándome que ya se podía salir. A la altura del colegio IPTC, se tuvo un flat por lo que se detuvo en la estación de Sabanitas donde se montó el hermano de otro chofer. Al terminar de reparar las dos llantas procedimos a continuar haciendo otro alto en el retén de Chilibre, donde al primer camión le pidieron los papeles y lo autorizaron a seguir, adelantándome a la altura de vista hermosa para tratar de buscar otra Gasolinera.
>
> La mercancía iba supuestamente para Chiriquí, me entregaron dos copias de la liquidación, una que dejé en la puerta y la otra que portaba en el vehículo al ser detenido; declaró que la liquidación original la portaba el otro camión, el cual era un Mack color blanco de Transporte Los Angeles.
>
> Agregó el declarante que se dirigía hacia el almacén Los Atrevidos en Chiriquí. Continúa declarando que ambos camiones luego de salir de Central Cargo se dirigieron a la puerta principal donde fueron examinados por Aduanas. A pregunta formulada contestó que el primer camión presentó en la Y los papeles originales, ya que ellos iban amarrados.
>
> En declaración indagatoria rendida por el Sr. Genarino Mora Fuentes, a preguntas formuladas respondió que él estaba en la Barriada Vista Alegre cuando abordó el camión del hermano; a cierta distancia, en la gasolinera de Sabanita estaba el camión blanco estacionado con una llanta desinflada, y el acompañante de mi hermano me dijo que subiera en el camión blanco porque veníamos incómodos, de allí siguieron hasta Gatún donde repararon la llanta. Explica no conocer el nombre de la persona que viajaba con su hermano, pero lo describió no muy grueso, tez blanca, bigote, cabello un poco liso, de estatura de 1.67 mts., de una 150 libras. Agregó que la mercancía venía de Zona Libre con destino hacia David.
>
> En declaración jurada rendida por el señor CÉSAR MORA en el Departamento de Fiscalización Aduanera, Zona Occidente, de fecha 19 de noviembre de 1996, a preguntas formuladas respondió: que el

camión conducido por él, de propiedad de TRANSPORTES LOS ÁNGELES, descargó en San Miguelito, sin precisar el número de personas que descargaron dicho vehículo y que las mercancías que él llevaba fueron puestas en otro camión.

A pregunta formulada de por qué se encontraba en Chiriquí con el camión vacío respondió: me dirigí hacia Chiriquí para visitar a mi familia que está en Las Lomas y para efectuar ciertos negocios y que le habían dicho que la mercancía tenía como destino Bocas del Toro, pero que no se le dieron a él para el transporte porque él cobraba muy caro.

Es importante señalar que la orden de detención preventiva contra los sindicados se basó legalmente en el Artículo 45 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984 por existir graves indicios de culpabilidad en su contra.

En cuanto a los motivos de hecho y de Derecho que se tuvieron para la Detención Preventiva de los señores CÉSAR MORA y GENARINO MORA, tenemos que por una parte, las contradicciones en que incurren ambos en sus deposiciones nos llevan a suponer que existen indicios graves sobre su actuación, y por la otra, el Artículo 45 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984, en concordancia con la Ley 16 de 29 de agosto de 1979, faculta a esta dependencia para tomar la medida. (FJ. 9, 10).

Finalmente, para concluir el funcionario demandado sostiene lo siguiente:

C. Conforme a la Providencia N° AL-ARA-122 de 22 de noviembre de 1996, los sindicados CÉSAR MORA y GENARINO MORA se encuentran a órdenes del Administrador Regional de Aduanas, Zona oriental hasta tanto se consigne Fianza para obtener su libertad condicional o varíe su situación procesal que amerite dejar sin efecto la medida. Según nota N° 710-01-671-ARAZO de 22 de noviembre de 1996 dirigida a la Policía Nacional San Felipe, Área A, los sindicados CÉSAR MORA y GENARINO MORA se encuentran detenidos en ese Centro Carcelario a órdenes del suscrito hasta la fecha del día de hoy la instrucción sumarial se surte en el Departamento de Fiscalización Aduanera Zona Oriental, a fin de determinar el grado de responsabilidad de los sindicados." (Fs. 11, 12).

Para decidir lo de lugar, la Corte considera:

Como indica la autoridad demandada, sobre la detención preventiva decretada en este caso, en primer término, debe observarse lo dispuesto en la legislación especial, Ley N° 30 de 8 de noviembre de 1984, mediante la cual se dictan medidas sobre el Contrabando y la Defraudación Aduanera.

La mencionada Ley, en su artículo 45 preceptúa lo siguiente:

"ARTÍCULO 45. Los sindicados en un delito aduanero, si existiere plena prueba de éste o graves indicios de culpabilidad, podrán ser detenidos preventivamente hasta tanto consignen la fianza para obtener su libertad provisional o varíe la situación procesal que amerite dejar sin efecto la medida".

Las diversas circunstancias que han concurrido para adoptar la medida privativa de libertad de CÉSAR MORA y GENARINO MORA son conformes a la norma transcrita, pues los mismos se encuentran sindicados por un delito aduanero al haber sido sorprendidos en flagrante delito, cuando transportaban mercancía sin la debida documentación legal, lo que constituye plena prueba del ilícito.

Aunado a lo expuesto, contrario a lo manifestado por el proponente de esta acción, la detención fue ordenada mediante resolución de fecha 22 de noviembre de 1996, dictada por el funcionario competente para decidir este tipo de negocios de contrabando y defraudación aduanera y para adoptar las medidas precautorias

dirigidas a que no sea nugatoria la acción fiscal, entre las cuales se incluye la detención preventiva, según lo dispone la legislación invocada por la autoridad demandada en concordancia con las normas del Código Fiscal (art. 1248 y siguientes).

A juicio de la Corte, hasta el momento se cumplen los presupuestos legales para mantener detenidos a los favorecidos con esta acción de habeas corpus, sin perjuicio de que posteriormente surjan evidencias que puedan cambiar su actual situación procesal y que ameriten dejar sin efecto su detención preventiva.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de CÉSAR MORA y GENARINO MORA y, ORDENA que sean puestos nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICENTE FOSATTI CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada CLAUDIA ELBA BÁRCENAS RANGEL presentó acción de habeas corpus a favor de VICENTE SANTOS FOSATTI, quien se encuentra detenido a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República. Admitida la demanda se libró el mandamiento contra el funcionario demandado, a quien se le solicitó el envío del informe prescrito por el artículo 2582 del Código Judicial. El Fiscal Auxiliar de la República rindió un informe en el cual manifiesta que el señor VICENTE SANTOS FOSATTI actualmente se encuentra bajo las órdenes del Fiscal Cuarto Superior, toda vez que mediante oficio 15593 del 16 de octubre de 1996, fueron remitidas a ese despacho las sumarias seguidas al señor SANTOS FOSATTI.

En vista de lo anterior el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Cuarto Superior, a fin de que ponga al detenido a órdenes de esta Corporación, y rinda el informe correspondiente.

El Fiscal Cuarto Superior, mediante oficio 3596, procedió a dar respuesta al mandamiento de habeas corpus interpuesto en su contra. En la parte medular del mismo se establece:

> "1. Esta agencia de instrucción no ordenó la detención en contra de VICENTE SANTOS FOSSATTI, pero la misma fue ordenada a través de la providencia que aparece a fojas 139-143 del sumario por parte del Fiscal Auxiliar de la República.
>
> 2. En cuanto a los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que se tuvo para hacerlo, los mismos se basan en que el sindicado VICENTE SANTOS FOSSATTI, se encuentra investigado por el delito genérico de HOMICIDIO contemplado en el Capítulo I, Título I, del Libro II del Código Penal, en detrimento de quién en vida se llamara PLINIO SANJUR GUERRERO, hecho de sangre ocurrido el día 12 de octubre del presente año.

> Referente al hecho investigado se logro aprehender al sujeto JULIO CÉSAR MOJICA ORTEGA, quién confeso su actuar delictuar (sic) ocurrido el día 11 de octubre del año que decurre, en donde alego que VICENTE SANTOS FOSSATTI, desconocía las intenciones que este realizaría y argumentó el prenombrado MOJICA ORTEGA, que el mismo no tenía nada que ver con su situación.
>
> Tal cual lo señala en Fiscal Auxiliar en su resolución, al señalar que el fundamento de hecho, que dio margen a ordenar la detención tanto de FOSSATTI como de MOJICA, se debió al hecho de que el testigo MARIO ALBERTO URRIOLA (fs. 10 al 15), señaló que los sujetos que él transportaba hacia el sector de Chivo Chivo la noche de 11 de octubre de 1996, lo asaltaron a mano armada, indicando que el pasajero que iba en el puesto delantero lo encañonó con un arma de fuego, mientras que el sujeto que estaba en el puesto trasero de vehículo, lo agarró por el cuello y le decía al sujeto del puesto de adelante que lo matara, lo que nos indica que a primera vista existía la voluntad, intención y previsión entre ambos sujetos es decir entre FOSSATTI y MOJICA, de cometer un hecho delictivo, en este caso de ROBO A MANO ARMADA, en perjuicio del prenombrado MARIO ALBERTO URRIOLA MOJICA, de conformidad al artículo 186 del Código Penal.
>
> Igualmente resalta lo establecido en el artículo 42 del Código Penal, al compromiso que tienen los participes frente a todo evento delictual.
>
> Otro de los aspectos importantes que podemos resaltar en cuanto a los hechos que dan lugar a la presente instrucción, es la diligencia de Reconocimiento del Cadáver en donde se establece a fojas 2 del sumario que el ciudadano PLINIO SANJUR GUERRERO, presentaba un orificio debajo de la tetilla izquierda, compatible con los producidos con proyectil disparado con arma de fuego, estableciendo la violación de dos (2) figuras penales como lo es el HOMICIDIO DOLOSO y el delito de ROBO con utilización de arma de fuego, hecho que a nivel jurisprudencial, lo excluye a ser beneficiado con medida liberatoria de excarcelación bajo fianza. Por lo que respecta existen en la actualidad suficientes elementos que justifican, que debe mantenerse la detención del indicado VICENTE SANTOS FOSSATTI por haber sido señalado directamente por el testigo presencial y afectado MARIO ALBERTO URRIOLA MOJICA. ..."

Procede el Pleno a resolver el presente proceso constitucional, confrontando los artículo 2148 y 2159 del Código Judicial, que establecen los presupuestos legales que deben concurrir para considerar fundamentada la detención preventiva del individuo.

En primer término, resulta evidente que los delitos de los cuales se acusa al favorecido con la acción de habeas corpus, conllevan pena superior a dos (2) años de prisión; y es así ya que, según se desprende de las investigaciones, los sospechosos, además de perpetrar un asalto a mano armada, causan la lesión de un individuo, que posteriormente muere a causa de dichos sucesos.

De conformidad con lo normado por el artículo 2159 del Código Judicial, la detención fue dictada por funcionario competente mediante resolución motivada, en la que se expresan los hechos punibles, los elementos que demuestran su existencia y las pruebas que existen contra VICENTE SANTOS FOSSATI, visible a fojas 139 y ss.

En el informe remitido por el funcionario acusado, éste señala, como ha quedado expuesto, la declaración de la señor MARIO ALBERTO URRIOLA MOJICA, quien fue afectado con el robo a mano armada. En efecto, en la declaración del señor URRIOLA MOJICA, el mismo advierte:

> "... me negué a continuar con la carrera, dandolo (sic) la vuelta al vehículo sobre la entrada, y poniendolo (sic) en posición contraria

a la que llegue, y entre los dos me decian (sic) que cuanto me debian (sic), y yo le informé que eran B/.4.00 balboas, y él (sic) sujeto de atras (sic) procedio (sic) a pagarme con un billete de B/.20.00, y le dije que no tenía cambio, y entre los dos se preguntaban se tenian (sic) un billete más chico, posteriormente sacaron un billete de B/.10.00 balboas, y como hasta el momento ellos tenían la plata en mano, yo procedi (sic) a darle vuelto, normalmente, pero no se lo había entregado todavía cuando en eso me encañonaron, el sujeto que iba en el puesto de adelante, y este mismo sujeto me dijo quedate quieto, y pon los brazos sobre el "TIMÓN", y por temor lo cumpli (sic) y en ese mismo momento se apersonaba un pick up, el cual era taxi, ya que tenía una luminaria de taxi, y como yo tenía la vía trancada, en ese momento no podia (sic) pasar, y los sujetos me obligaron a salir a la transcismica (sic) nuevamente, cuando llegamos a la cercanía de la escuela REPÚBLICA DE LA INDIA, logré lanzarme del vehículo en marcha, y al ver a los señores del PICK UP, que yo me tiré del vehículo, se detubieron (sic), les pedí auxilio, diciendole (sic) que me querían matar, los señores que estaban en mi taxi, y trate de cubrirme de la parte de atrás del PICK-UP, pero estos continuaron como para ver como parar mi vehículo ya que el mismo seguía en marcha con los sujetos dentro del taxi, y yo corrí hacia un matorral, y un muro donde me escondí y al pasar como ocho minutos, sali (sic) del matorral, pero antes de eso escuché como de dos a tres detonaciones de arma de fuego, cuando trataba de esconderme ...

PREGUNTADO: Diga el declarante, si alguno de los dos sujetos que venían como pasajeros, lo amenazó de muerte en el camino. CONTESTÓ: Señor Inspector, recuerdo que cuando mencioné el camino quebrado, el sujeto que venía en la parte de atras (sic) del taxi, le pedia (sic) al sujeto que estaba en el puesto de adelante que me "MATARA", y este mismo sujeto, me apretaba el cuello ..."

Esta declaración contrasta con la declaración indagatoria de JULIO CÉSAR MOJICA ORTEGA, homicida confeso, quien alega que el imputado SANTOS FOSATTI carecía de responsabilidad en el hecho de sangre, circunstancia esta que, no obstante, deberá determinarse por el tribunal de la causa en el plenario correspondiente.

Encuentra este Pleno suficiente vinculación del imputado con el hecho ilícito que amerita decretar la detención preventiva, tal como lo manifiesta el funcionario instructor en parte de la resolución que ordena dicha medida cautelar, y así lo expresa:

"...
En primer lugar apreciamo que el señor JULIO CÉSAR MOJICA ORTEGA, confiesa su actuar delictual, al momento de que manifiesta que él fue la persona que disparó en contra del sujeto que bajó del carro, con arma en la mano, esa noche del 11 de octubre del año que decurre, en el área de Chivo Chivo y quien resultó ser el infortunado PLINIO SANJUR GUERRERO. De igual manera se desprende que el señor VICENTE SANTOS FOSSATTI, niega toda participación con el ilícito investigado, alegando que desconocía las intenciones del prenombrado MOJICA ORTEGA, quien a su vez señala que éste no tiene nada que ver con su actuación. ...

De lo anterior colegimos que si bien es cierto el señor FOSSATTI, manifiesta no haber tenido conocimiento de las intenciones del señor MOJICA ORTEGA, lo que ha sido corroborado por este último, se tiene el testimonio jurado del taxista JULIO ALBERTO URRIOLA MOJICA, quien señala a ambos sujetos y la participación de cada uno, de lo que se desprende que existía un concierto entre ambos sujetos, para llevar a cabo su fechoría y teniendo en cuenta que se trataba de un delito cometido con arma de fuego, donde no sólo se atenta contra el patrimonio sino también contra la vida de las público, como una posibilidad, los acontecimientos que terminaron con la vida del hoy

occiso PLINO SANJUR GUERRERO.

No obstante la confesión del joven JULIO CÉSAR MOJICA ORTEGA, existen graves indicios de presencia y de oportunidad que los vinculan tanto a él como a SANTOS FOSSATTI, en la comisión del hecho punible que se le imputa ..."

En este caso concurren las exigencias que hacen procedente la detención del favorecido con esta acción de habeas corpus. Por ello, hasta el momento se justifica la detención de VICENTE SANTOS FOSSATTI, sin perjuicio de que posteriormente pueda cambiar su situación.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de VICENTE SANTOS FOSATTI y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO ANTONIO ALMANZA VILLARREAL CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado PEDRO D. TORRES T., actuando en representación del señor RICARDO ANTONIO ALMANZA VILLARREAL, ha presentado recurso de Habeas Corpus contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Recibida la acción y encontrándose el presente negocio en la etapa de resolver, se recibió escrito de DESISTIMIENTO del recurso de Habeas Corpus en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el día 18 de diciembre de 1996, y cuyo tenor es el siguiente:

"HONORABLE MAGISTRADO SUSTANCIADOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
E. S. D.

"Quien suscribe, PEDRO D. TORRES T., Abogado en ejercicio y demás generales conocidas en Autos, en mi calidad de Apoderado Judicial del señor RICARDO ANTONIO ALMANZA VILLARREAL, comparezco ante su digno despacho, con el propósito de presentar formal desistimiento de la ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR ALMANZA VILLARREAL."

De conformidad con el artículo 1073 del Código Judicial, si el desistimiento cumple con las formalidades de la ley, el juez debe admitirlo y dar por terminado el proceso.

"ARTÍCULO 1073. Toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente.

El desistimiento, una vez presentado al Juez es irrevocable.

El demandado puede también desistir de la oposición a la demanda,

caso en el cual en el cual se hace responsable a tenor de la misma, conforme a derecho.

Todo desistimiento se entiende hecho simplemente y sin condición. Si el desistimiento es condicional, han de aceptarlo todas las partes expresamente por medio de memorial".

Cumplidos con los requisitos de la ley, procede acceder a petición de desistimiento formulada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESESTIMIENTO del recurso de Habeas Corpus presentado a favor del señor RICARDO ANTONIO ALMANZA VILLARREAL y ordena que el mismo sea puesto a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ LUIS PAZ VALDELAMAR EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Germán Pineda Patiño interpuso ante esta Corporación de Justicia, acción de habeas corpus en favor de **JOSÉ LUIS PAZ VALDELAMAR**, detenido desde el pasado 15 de octubre a órdenes del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Manifestó el Licdo. Pineda Patiño que la detención de **JOSÉ LUIS PAZ VALDELAMAR** es motivada por estar involucrado el recluso en delito relacionado con venta de droga.

También fundamentó su acción principalmente en los siguientes hechos:

Que el 15 de octubre pasado, el Corregidor del Corregimiento de Tocumen allanó varias viviendas localizadas en el sector de La Siesta-Corregimiento de Tocumen- entre ellas la del señor **PAZ VALDELAMAR**.

Que en su opinión las órdenes de allanamiento de dicho funcionario no cumplían los requisitos legales para proceder al registro de la habitación del aprehendido, violando con ello, el principio constitucional de la inviolabilidad de domicilio.

Afirma que, luego de entrar a la residencia en mención para hablar con los presentes, "... dispuso realizar un allanamiento a la vivienda que habita nuestro representado, sin embargo, la Providencia que Ordena el Allanamiento a la morada del señor Paz Valdelamar, no fue firmada por la Secretaria del Despacho, toda vez que con él no había ningún funcionario que estuviese habilitado para esta función."

También consideró el letrado que el allanamiento se efectuó de manera irregular, toda vez que no hubo ningún secretario que levantara el acta

respectiva y que refrendara con su rúbrica la realización de la medida, tal como lo señala el artículo 2196 del Código Judicial; por ello, la resolución que ordenaba el allanamiento no estaba legalmente formalizada, por faltarle la firma del secretario de la autoridad que ordenaba dicha medida.

Si ello es así, la irrupción a la morada del ahora detenido no estaba "legalmente conformada", constituyendo una violación al ya mencionado principio de inviolabilidad del domicilio, principio establecido en el artículo 26 de la Carta Magna; por lo tanto, ninguna prueba que se le atribuya a **PAZ VALDELAMAR** puede apoyar una investigación en su contra.

Finalmente indicó el Licdo. Germán Pineda que el numeral 2° del artículo 183 del Código Judicial establece como una de las funciones de los secretarios la de autorizar con su firma todas las sentencias, autos, providencias, etc., por lo que se deduce que una orden de allanamiento emitida sin su firma, no tiene valor para ser realizada.

Recibida la acción, se libró inmediatamente el mandamiento de habeas corpus respectivo contra el funcionario instructor, quien lo respondió de la siguiente manera:

> "**PRIMERO:** Sí es cierto que este Despacho ordenó la detención del señor JOSÉ LUIS PAZ VALDELAMAR, mediante resolución motivada, calendada dieciséis (16) de octubre del año en curso.
>
> **SEGUNDO:** Los fundamentos de hecho que inspiraron dicha decisión, tienen inicio mediante diligencia de allanamiento practicada por el Corregidor de Tocumen, a la residencia N° 112, del sector de Ceremi, La Siesta, propiedad del encausado, en donde se pudo detectar dentro de un bolso de tela el cual estaba colgado en la ventana trasera, un cartucho de plástico transparente que en su interior contiene la cantidad de treinta y seis (36) sustancias sólidas de color crema que al efectuarsele (sic) la prueba de campo resultaron positivas para la droga conocida como Piedra.
>
> De la misma forma se pudo detectar, en la residencia, la suma de dieciséis dólares ($16.00), en billetes de un dólar.
>
> Queremos resaltar que, cuando un funcionario procede a practicar una diligencia de allanamiento es porque se ha recibido información previa de una actividad ilícita en un determinado lugar; la dirección y actividad ha sido verificada y luego se ejecuta la diligencia.
>
> Tales hechos hicieron mérito suficiente para que este Despacho, ordenase la indagatoria del encartado. En la misma, el prenombrado niega cualquier vinculación con los hechos que se le imputan, manifestando que el dinero incautado es producto de la fonda donde trabaja la mamá, y que él se lo estaba guardando.
>
> **TERCERO:** A pesar de haber solicitado al Laboratorio Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial el resultado del análisis practicado a las sustancias incautadas, el mismo no ha sido remitido a la fecha.
>
> **CUARTO:** El fundamento de Derecho que nos obliga a ordenar y mantener la detención preventiva del señor JOSÉ LUIS PAZ VALDELAMAR, se encuentra contemplado en lo que establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. Actualmente el señor JOSÉ LUIS PAZ VALDELAMAR, se encuentra detenido y filiado a vuestras órdenes."

Es ostensible que la base de la pretensión es el origen de la orden de detención, más que la relación del detenido con los hechos que conformaron la comisión del ilícito.

En este sentido, observa el PLENO que, efectivamente, la orden de allanamiento emitida por el Corregidor de Tocumen -f. 11- lleva su firma pero no la del Secretario.

No obstante, se trata de un allanamiento practicado con la asistencia del Corregidor, que es un funcionario administrativo (según lo consagra el artículo 1° de la Ley 112 de 1974), con el carácter de Jefe de Policía (artículo 865 del Código Administrativo), expresamente autorizado por el Decreto N° 5 del 3 de enero de 1934, Ministerio de Gobierno y Justicia.

No se trata, pues, de los artículos 2196 y 183 del Código Judicial, que invoca el recurrente en la acción que nos ocupa.

A fojas 27 y 28 del cuadernillo se observa la orden de detención emitida por el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, en el que se hace una relación de los hechos que la motivaron, el delito investigado, así como la relación de **PAZ VALDELAMAR** con la realización del ilícito, ya que señala que hay señalamientos en su contra por parte de los agentes captores y el Corregidor del lugar, cumpliendo con los requisitos impuestos por el artículo 2159 del Código Judicial.

En el mismo sentido, hay que manifestar que el artículo 2158 de la misma excerta señala que luego que el sindicado es aprehendido, la autoridad que realiza la aprehensión tiene 24 horas para ponerlo a órdenes de la autoridad competente, quien a su vez tiene el mismo término (24 horas) para decidir si la detención es procedente, y emitir la orden en ese sentido.

Es decir, que desde que el individuo es detenido físicamente, puede transcurrir un lapso de 48 horas hasta la emisión de la orden de detención preventiva, situación que se ha verificado en este caso. Por lo tanto, también se cumplió con el requerimiento del artículo 2158 del Código Judicial.

Por lo demás, le corresponderá al juzgador competente decidir la situación procesal del inculpado.

Por todo lo anterior, el PLENO es del criterio que la detención del prenombrado PAZ VALDELAMAR es legal.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de JOSÉ LUIS PAZ VALDELAMAR, y lo pone a órdenes del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCO ANTONIO AGUILAR CONTRA EL FISCAL QUINTO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Noé Villarreal Alberola interpuso acción de habeas corpus a

favor del señor **MARCOS ANTONIO AGUILAR**, quien se encuentra detenido a órdenes de la Fiscalía Segunda Especializada en Asuntos de Familia y el Menor, por la supuesta comisión de delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, en perjuicio de su hija ZORAYA IBETH AGUILAR.

Mediante resolución de 29 de noviembre de 1996 el Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró legal la detención del señor Aguilar, porque consideró que fue dictada de acuerdo con los requisitos que la ley exige.

Por su parte el apoderado judicial del beneficiario de la presente acción constitucional, en el escrito de sustentación de la apelación interpuesta contra la decisión del Segundo Tribunal Superior, sostiene que la detención del señor Aguilar es ilegal, pues no constan en el sumario los elementos probatorios "que conformen los presupuestos procesales necesarios a fin de que acrediten la existencia del Hecho Punible atribuible a nuestro defendido."

El presente sumario se inicia con la denuncia presentada el 7 de agosto de 1996 por la señora CATALINA VALDÉS, madre de la joven ZORAYA AGUILAR, contra el beneficiario del presente habeas corpus por supuesto delito contra el pudor y la libertad sexual. La señora Valdés manifestó que el día 5 de agosto de 1996 encontró en su residencia al señor MARCOS ANTONIO AGUILAR, su ex concubino y padre de sus hijos, "completamente desnudo con mi hija arriba del camarote" y éste al verla se bajó rápidamente del camarote y se tapó con una sábana. Añadió que su hija Zoraya confronta problemas de aprendizaje desde su nacimiento y que recibió tratamiento psiquiátrico desde 1987 a 1992 en la Caja del Seguro Social, "porque es muy distraída y nerviosa".

De foja 56 a 58 del cuaderno principal consta la declaración jurada rendida por la joven ZORAYA IBETH AGUILAR, en la que confirma la versión de su madre, la señora Valdés.

Como elementos probatorios aparece, en primer lugar, a foja 47 de ese mismo expediente el dictamen pericial rendido por el Laboratorio de Serología Forense del Instituto de Medicina Legal, en el que se certifica que en el camisón que vestía la joven Aguilar esa mañana, se determinó la presencia de espermatozoides.

En segundo lugar, a foja 60 aparece el Oficio N° 69-25789 de 23 de septiembre de 1996, en el cual el Licenciado Luis E. Rodríguez, Psicólogo Forense del Instituto de Medicina Legal hace constar que la joven Zoraya "sí puede ser manipulada por otra persona, a fin de que ella acceda a tener relaciones sexuales".

Por último, de foja 106 a 109 se encuentra la resolución dictada por la Fiscalía Segunda Especializada en Asuntos de Familia y el Menor, fechada 21 de noviembre de 1996, mediante la cual ordena la detención preventiva del señor MARCOS ANTONIO AGUILAR, por delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil (incesto).

De lo anteriormente expuesto se colige que existen elementos probatorios que vinculan al señor Aguilar con la comisión del delito que se investiga, el cual conlleva pena mínima de prisión superior a dos años. Consecuentemente la detención preventiva que sufre es legal, en vista de que cumple con los requisitos establecidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 29 de noviembre de 1996, que declaró legal la detención del señor MARCOS ANTONIO AGUILAR y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Segunda Especializada en Asuntos de Familia y el Menor.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDDY DAVIS HENRY, CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Rosario Granda de Brandao, en su calidad de defensora de oficio del señor **EDDY DAVIS HENRY**, sindicado por delito contra la salud pública, presentó acción de habeas corpus a su favor y contra la orden de privación de libertad proferida por la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas.

Como antecedentes y fundamento fáctico de esta acción, la letrada manifiesta que su patrocinado se encuentra detenido desde el día 2 de octubre de 1996, a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas, por haber sido sorprendido por las autoridades de policía cuando portaba en sus partes genitales un bulto envuelto en papel periódico que resultó ser la sustancia vegetal conocida como marihuana en la cantidad de 18.77 gramos. Anota también que Davis Henry es consumidor eventual de ese tipo de droga y que la utiliza en su trabajo de pescador independiente cuando se encuentra en alta mar para combatir el frío.

Librado el mandamiento de habeas corpus, se recibió procedente del despacho de la autoridad acusada, el oficio N° 13747-96 al que se adjunta fotocopia del expediente que se le instruye al accionante, el cual consta de 38 folios. Acepta el señor Fiscal que ordenó la detención de Eddy Davis Henry mediante resolución de 2 de octubre de 1996 porque fue visualizado por unidades de la policía nacional el día 30 de septiembre por los alrededores del Instituto Nacional, en horas del mediodía en actitud sospechosa y al ser revisado le encontraron un bulto de papel en sus partes íntimas, el cual contenía hierba seca que resultó ser marihuana, según informe de los laboratorios de la Policía Técnica Nacional, en la cantidad de 18.77 gramos.

En el informe antes aludido, el Fiscal se refiere a la declaración indagatoria del sindicado, en la cual acepta que la droga era de su propiedad, la cual había adquirido por compra a un sujeto llamado "Calito", localizable en la calle 16 del barrio de Santa Ana, pero que la misma era para su consumo. Al considerar que el caso se subsume en la figura delictiva de venta de drogas, que se ha cumplido con la previsiones normativas de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, se justifica la detención decretada por su despacho.

La Corte, al examinar la orden de detención, se percata que fue proferida por un agente del Ministerio Público, como funcionario de instrucción en delitos relacionados con drogas, cumpliendo las formalidades que establece la ley, no obstante, al calificar provisionalmente el hecho delictivo señala que se trata de un caso de venta de sustancias ilícitas, lo cual no se adecúa a la realidad de los elementos de juicio incorporados a la fase sumaria, ya que las unidades de la policía que sorprendieron a Davis Henry no dan cuenta sobre una conducta de venta de droga atribuible al detenido, sino más bien la de posesión, hecho delictivo que regula el artículo 260 del Código Penal en sus dos modalidades: simple y agravada. En este caso al practicarse la diligencia indagatoria, el sindicado señaló que era consumidor de droga, lo cual se confirma con el informe de la Dra. Elaine Bressan, Psiquiatra Forense del Instituto de Medicina Legal, quien a fojas 31-33 del expediente señala como resultado de la evaluación psiquiátrica forense, que Eddy Davis Henry presenta un cuadro de consumo eventual de drogas ilícitas.

Si bien es cierto que la cantidad de 18.77 gramos excede la dosis posológica de consumo que ha establecido el Instituto de Medicina Legal, cabe considerar que ni la cantidad decomisada ni la forma como se portaba, demuestran su destino a la venta; por otra parte, tratándose de un pescador en alta mar y que es consumidor, la cantidad no es indicadora que se trata de una posesión agravada con fines de tráfico posterior.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva decretada contra EDDY DAVIS HENRY y ordena su inmediata libertad, siempre que no exista otra causa penal en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO CANDELARIO SANTANA DENTRO DEL PROCESO LABORAL MARCOS HERNÁNDEZ VS BANCO DE LA EXPORTACIÓN, S. A. (BANEXPO). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Candelario Santana ha presentado ante las Juntas de Conciliación y Decisión una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 242 del Código de Trabajo y la Coordinadora de la Junta de Conciliación y Decisión N° 4 elevó la consulta respectiva.

Se procede entonces a examinar la advertencia de inconstitucionalidad, a fin de verificar si cumple con los requisitos formales exigidos para este tipo de demanda.

A juicio del Pleno, la advertencia de inconstitucionalidad que nos ocupa no cumple con las formalidades contenidas en el artículo 2551 del Código Judicial, según el cual la misma debe cumplir con los requisitos comunes a toda demanda. En primer lugar, el demandante omite señalar la parte actora, incumpliendo con lo estipulado en la norma antes citada, en concordancia con el artículo 654 del Código Judicial. Por otro lado, el escrito contentivo de la demanda tampoco cumple con los numerales 1 y 2 del artículo 2551 antes mencionado que exigen la transcripción literal de la disposición, norma o acto acusados de inconstitucionales y la indicación de las disposiciones constitucionales que se estiman infringidas y el concepto de la infracción. Ello es así por cuanto la parte actora transcribe sólo una parte de la norma cuya inconstitucionalidad se advierte y, por otro lado, si bien mencionan las disposiciones constitucionales que se estiman infringidas conjuntamente con una breve explicación de la infracción alegada, no se indica el concepto de la infracción.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Licenciado Candelario Santana contra el artículo 242 del Código de Trabajo.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS VARELA CONTRA EL ARTÍCULO 1736 DEL CÓDIGO JUDICIAL, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO DE MENOR CUANTÍA PROMOVIDO POR SILVESTRO QUINTERO CONTRA NICOLÁS AIZPURÚA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Luis Varela G. ha presentado ante el Juez Municipal de Pesé una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 1736 del Código Judicial y el Juez elevó la consulta respectiva.

Se procede entonces a examinar la advertencia de inconstitucionalidad, a fin de verificar si cumple con los requisitos formales exigidos para este tipo de demanda.

A juicio del Pleno, la advertencia de inconstitucionalidad que nos ocupa no cumple con las formalidades contenidas en el artículo 2551 del Código Judicial, según el cual la misma debe cumplir con los requisitos comunes a toda demanda. En primer lugar, el advirtiente omite señalar la parte actora y lo que se demanda, incumpliendo con lo estipulado en la norma antes citada, en concordancia con el artículo 654 del Código Judicial. Por otro lado, el escrito contentivo de la advertencia tampoco cumple con los numerales 1 y 2 del artículo 2551 antes mencionado que exigen la transcripción literal de la disposición, norma o acto acusados de inconstitucionales y la indicación de las disposiciones constitucionales que se estiman infringidas y el concepto de la infracción.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el Licenciado José Luis Varela G. contra el artículo 1736 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDA, EN REPRESENTACIÓN DE AEROLÍNEAS PACÍFICO ATLÁNTICO, S. A., CONTRA LOS ARTÍCULOS 19, 20, 21, Y 22 DE LA RESOLUCIÓN N° 173 DE MAYO DE 1980, DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE AERONÁUTICA CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS, actuando en representación de **AEROLÍNEAS PACÍFICO ATLÁNTICO, S. A.**, ha presentado advertencia de inconstitucionalidad contra los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Resolución N° 173 de 13 de mayo de 1980, dictada por la Junta Directiva de Aeronáutica Civil.

Sometida la advertencia a los trámites del proceso constitucional establecidos en el Libro Cuarto del Código Judicial, pasa el Pleno de la Corte a decidir la controversia de derecho planteada.

El demandante advierte la inconstitucionalidad de los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Resolución N° 173 13 de mayo de 1980, que expresan lo siguiente:

> "**ARTÍCULO 19:** Se establece una Tasa por Servicios al pasajero de Vuelos Domésticos Especiales CHARTERS, que deberá ser pagada por todo viaje de esta naturaleza que se efectúe dentro del territorio nacional. El monto de esta TASA se fija en una suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) sobre el valor del vuelo especial CHARTERS.
>
> PARÁGRAFO 20: Esta Tasa no afecta en ninguna medida el impuesto sobre pasajes aéreos de viajes que se efectúen dentro del territorio nacional, creado por la Ley 54 de 1958.
>
> **ARTÍCULO 20:** Las personas jurídicas que efectúen vuelos especiales "CHARTERS", quedan obligadas a efectuar el cobro de la "Tasa por Servicio al Pasajero Doméstico", al momento de la contratación de los vuelos especiales "CHARTERS".
>
> **ARTÍCULO 21:** Las personas jurídicas que cobren esta Tasa, entregarán a la Dirección de Aeronáutica Civil diariamente el importe cobrado, estas mismas personas, los diez primeros días de cada mes, entregarán a la Administración del Aeropuerto un informe de los ingresos por servicios de transporte correspondiente al mes anterior conjuntamente con cualquier crédito en favor de Aeronáutica de haber diferencia entre el informe y lo remitido diariamente.
>
> **ARTÍCULO 22:** Las sumas que se adeuden por mora o incumplimiento en el pago de la Tasa a que se refiere este Capítulo dentro del período establecido, estarán sujetas a lo que se dispone en el Artículo 29 de esta Resolución".

Sostiene el demandante que dichos preceptos violan, en primer lugar, el artículo 48 de la Constitución Nacional, cuyo texto dice:

> "Artículo 48: Nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto, que no estuviera legalmente establecido y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las leyes."

El concepto de la infracción lo explica de la siguiente manera:

> "Se ha violado el Artículo 48 de la Constitución Nacional, el concepto de la infracción es en forma directa por comisión ...
>
> El artículo transcrito establece el principio de que no "no hay obligación tributaria sin ley que la establezca" y deriva además del principio consagrado en nuestra Constitución de que "nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni se le puede prohibir hacer lo que ella no prohibe". Consideramos que la Resolución N° 173 de 13 de mayo de 1980, en sus artículos 19, 20, 21 y 22 antes transcritos, por los cuales se crea una supuesta Tasa por Servicios al Pasajero de Vuelos Domésticos Especiales CHARTERS, vulnera el Artículo 48 de la Constitución Nacional, por las siguientes razones:
>
> Los fundamentos del principio de legalidad indican que la imposición de una obligación tributaria importa una limitación a la garantía constitucional de la libertad individual y al derecho de propiedad,

lo cual puede establecerse sólo en virtud de una ley que respete los preceptos constitucionales que salvaguardan éstas.

El principio de legalidad que consagra el artículo 48 de la Constitución Nacional establece pues, que la ley es la única que puede crear obligaciones, tributarias tipificando el hecho generador de ellas, modificarlas o suprimirlas ...

Tenemos entonces que si la Dirección de Aeronáutica Civil, no brinda servicio alguno, a los pasajeros de vuelos especiales charters, no puede justificar legalmente la existencia de una tasa por tanto el cobro allí exigido vulnera el Artículo 48 de la Constitución Nacional.

Y es que al regular la Ley 54 de 1958, el impuesto sobre pasajes aéreos, que requiere de la expedición de un boleto o pasaje, que se realicen dentro del país, y al no contemplar a los vuelos especiales charters, porque en estos casos no se expide un pasaje o boleto aéreo, la Dirección de Aeronáutica Civil tomó el camino más corto pero ilegal y por vía de Resolución procedió a autorizarse a sí mismo para cobrar tan antilegal tasa establecida en la resolución N° 173 de 13 de mayo de 1980, que es el fundamento de la Factura N° 36876 que atacamos por ilegal y arbitraria".

En segundo lugar considera infringido el artículo 153, numeral 10 del Estatuto Fundamental que consagra:

"ARTÍCULO 153: La función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Legislativa y consiste en expedir las Leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
...
10. Establecer impuestos y contribuciones nacionales, rentas y monopolios oficiales para atender los servicios públicos".

Conceptúa que la falta se ha dado por comisión, ya que la norma atribuye dicha facultad específicamente al Órgano Legislativo:

"De acuerdo con la norma reproducida, el ejercicio de la función legislativa, en una materia tan delicada e importante, para el desarrollo del Estado, como lo es el establecer impuestos y contribuciones nacionales, es ejercido por la Asamblea Legislativa, por lo tanto, la Dirección de Aeronáutica Civil, al crear una supuesta tasa, que reiteramos, en realidad, se trata de un impuesto, ha violado el artículo 153, Numeral 10 de la Constitución Nacional, por Comisión, ya que la norma restringe dicha facultad específicamente en el Órgano Legislativo ...

Es notorio cómo la propia Constitución reserva la creación, y regulación de los tributos a la Asamblea Legislativa, por ende una resolución de Junta Directiva de Aeronáutica Civil, carece de facultad para crear una tasa o impuesto, que es en realidad lo que fue creado por la Resolución N° 173 de 13 de mayo de 1980, en sus artículos 19, 20, 21 y 22".

Finalmente, señala la violación del artículo 274 de la Norma Suprema, que preceptúa:

"ARTÍCULO 274: Todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar incluidas y autorizadas en el respectivo presupuesto. No se percibirán entradas por impuestos que la ley no haya establecido ni se pagarán gastos no previstos en el Presupuesto."

El concepto de la violación lo explica con los siguientes argumentos:

> "Este artículo se ha violado de manera directa por Comisión, ya que la Dirección de Aeronáutica Civil, pretende cobrar una supuesta tasa por servicios al pasajero de vuelos domésticos especiales charters, que como bien ha quedado demostrado en el presente escrito, no puede mediante una Resolución crear un impuesto, y por otra parte no ha estructurado legalmente la tasa que pretende cobrar, por tanto al exigir el pago de la tasa, vulnera la disposición constitucional."

El Procurador General de la Nación se muestra de acuerdo con la pretensión constitucional del demandante, y expone su punto de vista de la siguiente forma:

> "Esta Procuraduría General estima que la Junta Directiva de Aeronáutica Civil exorbitó el ámbito de sus atribuciones, al fijar este tributo por vía de la Resolución comentada y desatendió la pauta cardinal que contiene el artículo 48 de la Carta Fundamental que reserva a la ley el establecimiento de tributos como el que se propone en la Resolución N° 173 de 13 de mayo de 1980. El proceder de la citada institución del Estado desconoció el principio que ofrece el artículo 274 de la misma, en relación con el precitado artículo 48. Asimismo, desconoce el postulado del artículo 153, numeral 10, que atribuye competencia de fijar impuestos y contribuciones a la Asamblea Legislativa.
>
> Luego, asiste razón al accionante en su pretensión de inconstitucionalidad de las normas acusadas, razón por la cual, consideramos que la Corte debe pronunciarse en el sentido de declarar inconstitucional los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Resolución N° 173 de 13 de mayo de 1989, dictada por la Junta Directiva de Aeronáutica Civil".

Conocido los planteamientos del demandante y del Procurador, el Pleno de la Corte entra a analizar la situación jurídica en conflicto.

Al examinar los fundamentos presentados por la parte actora y por el Procurador General de la Nación, este Tribunal observa que el asunto medular en este negocio gira en torno a la legitimidad de la Junta Directiva de Aeronáutica Civil para establecer tasas por razón de los servicios que brinda, tal como lo hizo mediante los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Resolución N° 173 de 13 de mayo de 1980, en los que actualizó el régimen de tasa y canones sobre servicios e instalaciones aeroportuarias, derechos y facilidades de arrendamientos y explotación comercial, suministrados por dicha Institución en los aeropuertos nacionales, excepto el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Mediante tales disposiciones se crea una Tasa por Servicios al Pasajero de Vuelos Domésticos Especiales CHARTERS. El vuelo doméstico especial charter es aquél que se realiza dentro del territorio nacional, pero no dentro de la ruta normal de la empresa y se da en virtud del arrendamiento de la aeronave, a cambio de una remuneración acordada entre ambas partes. Este tipo de vuelo no implica la compra de boleto aéreo, sino el pago del canon de arrendamiento, contrario a lo que sí sucede en el tipo de vuelo regular, donde sí es obligatoria la compra de un pasaje que lleva gravado el pago del impuesto que exige la Ley 54 de 1958.

Significa que el impuesto establecido en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley 54 de 1958, no incluye a los vuelos especiales charters, como bien podemos observar a continuación:

> "ARTÍCULO 1: Establécese el impuesto sobre pasajes aéreos de viajes que se efectúen dentro del territorio nacional, consistente en un gravamen de 5% sobre el valor de todo boleto que se compre para los fines indicados.
>
> ARTÍCULO 2: El impuesto debe ser pagado por los compradores del pasaje, y las personas naturales o jurídicas que los vendan quedan en la obligación de proceder al cobro del mismo al momento de efectuar la venta de los boletos.

> ARTÍCULO 5: El producto de este impuesto será destinado íntegramente a dotar a los aeropuertos nacionales de los medios de comunicación indispensables para proporcionar a los pasajeros mayor seguridad; así como también dotar a los aeropuertos de personal idóneo necesario para llenar este cometido, y para la compra de instrumentos, señales, etc., que sirvan de auxilio en la navegación aérea."

La resolución N° 173 de 13 de mayo de 1980, advertida de inconstitucional, busca incluir, según el demandante, a los vuelos domésticos especiales CHARTERS, dentro del impuesto de 5% que establecen los artículos, precitados, de la Ley 54 de 1958 para pasajes aéreos de viajes que se efectúen dentro del territorio nacional; debido a que la referida Ley no menciona impuesto por arrendar los servicios de una aeronave por motivos especiales.

En otras palabras, el demandante considera que en realidad Aeronáutica Civil no ha establecido una tasa, sino un impuesto especial, para lo cual no está ni legal, ni constitucionalmente facultada la Junta Directiva de dicha Institución.

Por su parte, el Pleno de la Corte observa que la Tasa por Servicios al Pasajero de Vuelos Domésticos Especiales Charters, se da con ocasión del empleo de una aeronave en un viaje, para lo cual es necesario un aeropuerto, a través del cual se garantice la seguridad y regularidad de la navegación aérea. Por tanto, dicha tasa sí lleva implícita una contraprestación efectiva a favor de los usuarios, característica esencial de las tasas, ya que los fondos recaudados en vuelos charters tienen por finalidad proveer al aeropuerto de los equipos de protección y comunicación requeridos para velar por la seguridad de todas aquellas personas que se transportan vía aérea en nuestro país.

Sin embargo, corresponderá a la Sala Tercera, dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, donde precisamente se ha advertido la presente inconstitucionalidad, declarar si es legal el tributo creado, al determinar si se trata de una tasa o de un impuesto especial, una vez lo confronte con el Decreto de Gabinete N° 13 de 22 de enero de 1969, debido a que éste la faculta para crear tasas y no impuestos. Al Pleno, por su parte corresponde declarar si la Dirección de Aeronáutica Civil, está legitimada para fijar la tasa, cuya naturaleza se discute en la jurisdicción contenciosa.

Al adentrarnos en la temática constitucional se observa que el artículo 48 del Estatuto Supremo consagra el principio de que no hay obligación tributaria sin ley que la establezca, es decir que nadie está obligado a pagar impuesto, ni contribución alguna, que no estuviese legalmente establecido.

Este Máximo Tribunal de Justicia, con relación al Principio de Legalidad en Materia Tributaria, en sentencia de 21 de febrero de 1992, manifestó el siguiente criterio:

> "El artículo 48 constitucional, consagra el derecho de toda persona a no pagar contribución ni impuesto que no estuviera legalmente establecido. Ello significa que en materia tributaria existe el principio de reserva legal o estricta legalidad, que supedita la existencia jurídica de la contribución a una ley formal que le imprima substrato normativo.
> ...
> independientemente de la especificidad del tributo en su alcance fiscal, su coercibilidad y obligatoriedad debe afianzarse en la legalidad de la misma, ya que el principio de legalidad tributaria cubre a las tasas".

Reiteran lo anterior los pronunciamientos del Pleno en sentencias de 26 de mayo de 1994, 2 de julio de 1994, 12 de agosto de 1994, 21 de noviembre de 1994, entre otras. Con respecto **al establecimiento de tasas por iniciativa de los contribuyentes**, en fallo de 19 de agosto de 1994, esta Superioridad señaló:

> "Así como se ha dicho que no hay delito sin ley, también se ha dicho Nulum Tributum sine Lege, no hay tributo sin ley previa que lo establezca. Las tasas por ser un tributo, están sometidas al principio de que sólo pueden ser creadas por Ley. Los municipios pueden reglamentar tasas por acuerdos municipales, autorizados por la ley orgánica de los Municipios y también facultados por la Constitución, de acuerdo con el artículo 243, N° 2 de la Carta Magna, que los faculta para cobrar tasas por el uso de sus bienes y servicios. Igualmente ciertas Instituciones Autónomas cobran tasas por los servicios que prestan debidamente autorizadas por sus respectivas leyes orgánicas. (Subrayado nuestro).
>
> Las Tasas de carácter nacional, como las que trata el Decreto 452 de 1990 sólo pueden ser autorizadas por la ley, ya sea una ley especial que crea las tasas o la ley Orgánica del Ministerio de Salud. El Decreto 452 impugnado no expresa en ninguna parte en qué ley se funda o encuentra autorización para expedir la reglamentación de las mencionadas tasas de servicios de inspección sanitaria. La ley 66 de 1947, (Código Sanitario) se permite fijar el arancel para el registro y análisis de drogas y de especialidades farmacéuticas y los derechos que se deriven del control biológico de los productos que se analicen en Laboratorio Central (Artículo 187 y 188)".

Debe entonces entenderse, que una Institución Autónoma, para crear y cobrar cualquier tipo de tasa, debe estar autorizada por su respectiva Ley Orgánica, por lo que debe esta Superioridad señalar que el acto primario que origina la imposición de la carga tributaria debe emanar exclusivamente del Órgano Legislativo. Tal como se desprende de lo plasmado en fallo de 16 de enero de 1992:

> "el artículo 48 de la Constitución Nacional, relacionado con el artículo 274 de la misma Constitución, establecen de manera clara que no existe obligación de pagar contribución o impuesto que no haya sido establecido por ley. Igualmente el artículo 153 numeral 10 de la Constitución le atribuye la competencia de fijar impuestos y contribuciones a la Asamblea Legislativa ... las tasas de carácter nacional sólo pueden ser autorizadas por la ley, ya sea esta una Ley Especial que crea las tasas o la Ley Orgánica del Ministerio de Salud". (Subrayado nuestro).

Si bien es cierto en Panamá rige el Principio de Legalidad en materia tributaria, lo que significa que los tributos deben ser creados a través de una ley, y en el caso de las entidades autónomas, establecidos por sus leyes orgánicas, se percata este Tribunal, que la Dirección de Aeronáutica Civil se encuentra facultada para fijar, imponer, alterar y cobrar tasas, mediante el Decreto de Gabinete N° 13 de 22 de enero de 1969 "Por el cual se crea la Dirección de Aeronáutica Civil como una entidad autónoma del Estado", específicamente en los artículos 3, 4 y 14 literal h), los cuales transcribimos a continuación:

> "Artículo 3: La Dirección de Aeronáutica Civil estará facultada para estructurar, determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas, rentas y tasas por el uso de sus facilidades o por servicios que presta o suministra. Las tarifas y tasas que fije la Dirección de Aeronáutica Civil deberán ser aprobadas por la Junta Directiva. Estas tasas y tarifas serán fijadas y revisadas de manera que en todo tiempo provean fondos suficientes para el funcionamiento y operación de la Dirección de Aeronáutica Civil. (Subrayado de la Corte).
>
> Artículo 4: Las tarifas y tasas que fije la Dirección de Aeronáutica Civil deberán proveer en todo tiempo fondos suficientes para:
>
> a) Pagar el costo de conservar y explotar los sistemas de Aeronáutica Civil bajo su dirección, incluyendo las reservas necesarias para tales fines y para ampliaciones, reposiciones y depreciación.

> b) Para amortizar el capital y para pagar los intereses sobre los bonos, préstamos o empréstitos emitidos o contratados bajo las disposiciones de este Decreto de gabinete y del Código Fiscal y para formar las reservas necesarias.
>
> c) Para proveer un margen de seguridad para hacer los pagos que se mencionan en literal anterior.
>
> Artículo 14: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:
> ...
> h) Determinar o modificar las tarifas, tasas o canones de arrendamiento por servicios prestados por la Dirección de Aeronáutica Civil, previo los estudios pertinentes que haga el Director General; ...".

Dicho Decreto fue el fundamento legal para que la Dirección de Aeronáutica Civil dictara la Resolución 173 de 132 de mayo de 1980, advertida de inconstitucional. Ahora la pregunta clave es si el precitado Decreto de Gabinete, goza de la jerarquía suficiente para facultar a la Dirección de Aeronáutica Civil, para fijar, reglamentar y actualizar tasas, ya que según jurisprudencia reiterada de la Corte, el principio de legalidad comprende también a las tasas, es decir, deben ser autorizadas por ley formal. Así lo ha sostenido el Pleno de la Corte en fallos de 21 de septiembre de 1950, de 15 de junio de 1954, 8 de agosto de 1967, 11 de abril de 1989 y 21 de febrero de 1992.

Ante lo expuesto, podemos señalar que en nuestro sistema jurídico los **Decretos de Gabinete son actos con valor de ley**, como bien señaló la Corte en resolución de 2 de agosto de 1994, dictada en el Proceso Contencioso Administrativo de Protección a los Derechos Humanos, interpuesto por la firma Rivera y Bolívar, en representación de Cervecería Panamá, S. A. para que se declare nulo, por ilegal el Decreto de Gabinete N° 16 de 15 de abril de 1993:

> "Coincidimos con los planteamientos esbozados por el señor Procurador de la Administración en su escrito de alzada. Toda que al examinar de manera exhaustiva la presente demanda, nos percatamos claramente que el demandante pretende que se declare la nulidad, por ilegal, de un Decreto de Gabinete que en nuestro sistema jurídico es un acto con valor de ley. En este sentido se ha pronunciado esta Sala cuando en Fallo de 13 de septiembre de 1990 dictaminó lo siguiente:
>
> "En efecto, los Decretos de Gabinete son aquellos dictados por gobiernos de facto o por gobiernos de jure en situaciones de hecho excepcionales en las que no hay Órgano Legislativo, por tanto son actos con fuerza de Ley. ...
>
> Por esta razón, contra los Decretos de Gabinete no proceden demandas Contenciosas Administrativas, por ser de igual jerarquía que la ley".

Pues bien, la historia del país registra casos en que el Órgano Ejecutivo ha legislado mediante Decretos de Gabinete, en ausencia de la Asamblea Legislativa, como sucedió en la época en que fuera dictado el Decreto de Gabinete N° 13 de 22 de enero de 1969, por el cual se creó la Dirección de Aeronáutica Civil y se le otorgaron ciertas facultades, entre ellas la de establecer tasas.

De esta forma el mencionado Decreto de Gabinete es un instrumento jurídico que, de acuerdo a la doctrina constitucional, tiene fuerza de ley material; y consiguientemente mantiene su plena vigencia y vigor legal mientras no sea derogado por la Asamblea Legislativa, cuando ésta se encuentra reunida, o declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio del Control Constitucional que le confiere la Constitución Política de la República.

No obstante, la inconstitucionalidad que se demanda no es la del Decreto de Gabinete N° 13 de 1969, cuyo contenido faculta a la Dirección de Aeronáutica

Civil para fijar, alterar, imponer, tasas por el uso de sus facilidades o por los servicios que suministra, sino los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Resolución N° 173 de 13 de mayo de 1980, dictada por dicha entidad, que se fundamentan en el Decreto en mención.

Es por esta razón que se observa que la Dirección de Aeronáutica Civil ha procedido siempre apoyada en dicho precepto a dictar Resoluciones para el establecimiento de las tasas a cobrar, como son la Resolución N° 129 de 29 de agosto de 1974, y la Resolución N° 110 de 30 de julio de 1975, las que luego fueron derogadas por la Resolución N° 173 de 13 de mayo de 1980, ahora advertida parcialmente de inconstitucional.

Una entidad autónoma puede reglamentar tasas por los servicios que presta si para ello se encuentra legalmente habilitada mediante su Ley Orgánica, y en el caso bajo estudio, tal como lo confirma la Ley 9 de 7 de junio de 1991, expedida por la Asamblea Legislativa y publicada en la Gaceta Oficial N° 21.805 de 11 de junio de 1991, el Decreto de Gabinete N° 13 de 22 de enero de 1969, constituye la Ley Orgánica de la Dirección de Aeronáutica Civil. Si bien es cierto la Asamblea Legislativa no ha legislado formalmente la materia de que trata el Decreto de Gabinete N° 13 de 1969, al haberlo modificado mediante ley formal posterior, como lo es la Ley 9 de 7 de junio de 1991, ha reconocido y ratificado su valor de ley y por ende el contenido del mismo Decreto de Gabinete N° 13 de 22 de enero de 1969.

Luego de las explicaciones precedentes, podemos concluir que los artículos demandados no son inconstitucionales ya que, nuestra Constitución, en sus artículos 48 y 153, señala respectivamente que los impuestos y la forma para su cobro deben establecerse mediante leyes, y en el presente caso, la Dirección de Aeronáutica Civil, encuentra fundamento legal, para reglamentar y fijar tasas por los servicios que ofrece, en el Decreto de Gabinete N° 13 de 22 de enero de 1969, que como ya dijimos, tiene valor de ley.

Después de un examen de los argumentos expuestos, la Corte llega a la conclusión de que no le asiste razón al demandante. Una confrontación de los artículos impugnados con las normas constitucionales que se estiman infringidas revelan, de manera indubitable, que no existe colisión entre las normas acusadas y las que se estiman violadas.

Por lo expuesto, el PLENO, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Resolución N° 173 de 13 de mayo de 1980, dictada por la Junta Directiva de Aeronáutica Civil.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARIO VAN KWARTEL CONTRA LAS EXPRESIONES "EMOLUMENTOS Y ASIGNACIONES" CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 205 DE LA LEY N° 49 DE 1984 (ARTÍCULO 226 DEL TEXTO ÚNICO), POR MEDIO DEL CUAL SE DICTA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CINCO (5) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia demanda de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Mario Van Kwartel, en ejercicio del derecho que consagra el artículo 203 de la Carta, contra la frase "emolumentos y asignaciones" que contiene el artículo 205 de la Ley N° 49 de 4 de diciembre de 1984 (artículo 226 del Texto Único), por la cual se aprobó el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa.

DISPOSICIONES VULNERADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Según el demandante, los vocablos antes indicados vulneran los artículos 153, numeral 2, y 63 de la Constitución Nacional. El numeral segundo del artículo 153 de la Constitución Nacional es del siguiente tenor:

> **"ARTÍCULO 153.** La función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Legislativa y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
> ...
> 2. Expedir la Ley general de sueldos propuesta por el Órgano Ejecutivo."

Al explicar el concepto de la infracción, el demandante afirma que "Los señores legisladores no puede equiparar sus emolumentos y asignaciones a los de los ministros de Estado en el Reglamento de su Régimen Interno, ya que ello es objeto de una Ley orgánica que debe ser propuesta por el Órgano Ejecutivo" (f. 3).

Alega también como infringido el artículo 63 de la Carta, que preceptúa:

> **"ARTÍCULO 63.** A trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo, cualesquiera que sean las personas que lo realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas."

Se aduce la vulneración de este precepto, en forma directa, por considerar que mediante ley ordinaria no pueden asignarse idénticos emolumentos a determinados servidores públicos, "sin que previamente el Estado determine que las funciones son iguales en idénticas condiciones" (f. 3), lo que constituye materia que "correspondería a los entes estatales encargados de administrar o planificar las rentas nacionales, tomando en cuenta las particularidades de los casos ... y la ley general de sueldos propuesta por el Órgano Ejecutivo" (f. 3).

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación, a quien correspondió recibir el traslado de la demanda, rindió su opinión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2554 del Código Judicial, mediante la Vista N° 20 de 24 de junio de 1996, en la que se manifiesta de acuerdo con el cargo de inconstitucionalidad relativo al artículo 153, numeral 2, no así al 63 de la Constitución vigente.

En su opinión se infringe el artículo 153, numeral 2, de la Carta Política, toda vez que el Parlamento está legislando sobre una materia que "debe estar comprendida dentro de la `Ley general de sueldos , arrogándose, con ello, una facultad que, de acuerdo a la Constitución, debe ser expedida a `propuesta del `Órgano Ejecutivo " (f. 23).

Estima el Procurador que se vulnera la Constitución "cuando por medio de una Ley ordinaria -Reglamento Interno de la Asamblea- se alude a materia que debe estar comprendida en una Ley orgánica, como lo es lo concerniente a los emolumentos y asignaciones que han de devengar los Legisladores" (f. 25).

En relación con la alegada infracción del artículo 63 de la Ley Fundamental, sostiene el jefe del Ministerio Público que no aparece acreditado el vicio de inconstitucionalidad que se demanda. Afirma que "no se ha establecido

con el acto demandado, un trato desigual, al fijar los sueldos y asignaciones que han de devengar unos y otros funcionarios -los Ministros de Estado y los Legisladores-; además que, entre las funciones que desempeñan éstos, no existe `idénticas condiciones , por la naturaleza de una y otra función" (f. 27).

DECISIÓN DE LA CORTE

De conformidad con las normas procedimentales vigentes, luego de devuelto el expediente por la Procuraduría General de la Nación se fijó en lista el negocio por el término de 10 días, contados a partir de la última publicación del edicto correspondiente en un diario de circulación nacional, para que el demandante y las personas interesadas presentaran argumentos escritos (a. 2555, C. J.), trámite que, por cumplido, coloca el negocio en estado de resolver.

Antes de desatar la controversia constitucional, estima la Corte Suprema conveniente formular algunas consideraciones sobre la norma sometida al control de la constitucionalidad, así como sobre el cuerpo normativo en el que se encuentra inserta.

La frase cuya declaratoria de inconstitucionalidad se solicita está contenida en el artículo 205 de la ley N° 49 de 4 de diciembre de 1984 (artículo 226 del Texto Único), por la cual se dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, cuyo texto es el siguiente:

> "**ARTÍCULO 226.** Los Miembros de la Asamblea Legislativa tendrán, por lo menos, las mismas prerrogativas, emolumentos y asignaciones que los Ministros de Estado" (subraya la Corte).

Del tenor literal de la norma transcrita, así como de su ubicación en el referido cuerpo legal (Capítulo I, "Disposiciones Generales", del Título XIV), claramente se desprende que no guarda relación alguna con el proceso de formación de las leyes, por lo que no forma parte del **bloque de constitucionalidad**, el que, como conjunto normativo en la esfera constitucional, constituye un parámetro utilizado por el Pleno de la Corte Suprema, en tanto que máximo intérprete-operador de la Carta Política, para la emisión de sus pronunciamientos en materia de la guarda de la integridad, supremacía y permanencia de la Ley Fundamental.

El Pleno de esta Corporación tiene establecido que forma parte del bloque de constitucionalidad la normativa de las leyes N° 49 de 1984 y 7 de 1992, aprobatorias del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, concretamente aquellas disposiciones relativas "exclusivamente al ejercicio de la función legislativa de la Asamblea", según sentencia de 16 de octubre de 1991, por lo que es perfectamente viable la función controladora del tribunal constitucional sobre la frase atacada.

Valga agregar que, como quiera que los elementos normativos que integran el bloque de la constitucionalidad constituyen complemento de nuestra Ley de leyes a los efectos de la interpretación constitucional, ante una eventual impugnación de una disposición del Reglamento Orgánico del Régimen Interno del Parlamento relativa al ejercicio de su función legislativa, considera la Corte que también es procedente el ejercicio del control de la constitucionalidad, dada la preeminencia del texto de la Carta Política vigente.

A juicio de la Corte Suprema, el artículo 226 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa lo que hace es **equiparar** las prerrogativas, emolumentos y asignaciones de los legisladores a las que tienen señaladas los ministros de Estado. La norma tachada de inconstitucional **no trata, técnicamente, de un aumento salarial sino de una adecuación de los sueldos de los parlamentarios, por razón de su calidad funcional** tomando como base de comparación para hacer efectivo el referido ajuste, la asignación salarial correspondiente a los ministros de Estado.

Una interpretación sistemática del texto constitucional, en virtud del principio de unidad de la Carta, lleva a la conclusión de que no procede la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase atacada.

En primer lugar, el artículo 153 de la Constitución se refiere a la función primordial de la Asamblea Legislativa, que "consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado ...". El numeral 2 de la citada disposición consagra la función legislativa de la Asamblea relativa a la expedición de una Ley general de sueldos propuesta por el Órgano Ejecutivo. Lo cierto es que en la actualidad no existe ley general de sueldos, por lo que mal puede alegarse la vulneración de dicho precepto constitucional.

De otra parte, el artículo 151 de la Carta Política consagra que los diputados devengarán los emolumentos **"que señale la Ley"**, y prevé la posibilidad de su aumento. No obstante, establece que tales cambios sólo serán efectivos en los períodos siguientes al de los funcionarios que los aprobaren, de forma tal que los titulares de los cargos no puedan usufructuar de aumento salarial durante el período de su desempeño.

Se evidencia, con claridad, que se vulneraría la Carta Fundamental si la norma legal estableciera un incremento salarial propiamente dicho, cuestión muy diferente a lo planteado por el artículo 205 de la Ley N° 49 de 4 de diciembre de 1984 (artículo 226 del Texto Único), que lo que contempla es un procedimiento de equiparación salarial, es decir, el cumplimiento del mandato de una simple nivelación de los emolumentos de unos servidores públicos con los de otros funcionarios.

Por último, es importante indicar que tampoco se vulnera el artículo 63 de la Carta Fundamental, que consagra el principio de igualdad y de no discriminación salarial por razones de sexo, nacionalidad, edad, clase social, ideas políticas o religiosas, pues la norma atacada por esta vía constitucional no pretende confundir las funciones de los legisladores con las de los ministros de Estado, ni establece con la equiparación privilegio personal alguno.

Por las consideraciones expuestas, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la frase "emolumentos y asignaciones", contenida en el artículo 205 de la Ley N° 49 de 4 de diciembre de 1984 (artículo 226 del Texto Único), mediante la cual se adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRASCESCHI DE AGUILERA . . . (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Participo del criterio de que la disposición señalada como inconstitucional, no lo es. Pero en la parte motiva hay expresiones en el sentido de que la equiparación de sueldos de los Legisladores con los de los Ministros de Estado, es cosa tajantemente distinta de la de aumento de salarios.

Creo que no es así.

La equiparación puede llevar en su seno un aumento del salario; o, si se quiere, a la inversa, un aumento de salario se puede realizar a través de una equiparación de salarios.

Cuando ello ocurra tampoco se produciría vicio de inconstitucionalidad; pero debe quedar claro, el aumento aún en caso de equiparación (caso presente), se regiría por lo preceptuado en el artículo 151 de la Constitución: "(el) aumento sólo será efectivo después de terminar el período de la Asamblea

Legislativa que lo hubiere aprobado".

Siento que el texto del fallo de mayoría da margen para pensar lo contrario, en tanto que equiparación no sea aumento.

Por eso respetuosamente salvo el voto, en lo tocante únicamente a este punto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD, FORMULADA POR LA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONTRA EL ARTÍCULO 796 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Cuando ya se había completado la lectura del proyecto de sentencia mediante el cual se resolvía esta consulta de inconstitucionalidad, la Secretaría General nos hizo llegar el siguiente informe secretarial

"INFORME SECRETARIAL

HONORABLE MAGISTRADA SUSTANCIADORA:

Para su conocimiento, informo a usted que bajo la ponencia del Magistrado HUMBERTO COLLADO circula para su firma Sentencia del Pleno que resuelve acción de inconstitucionalidad interpuesta por la firma forense SHIRLEY & DÍAZ contra la frase "siempre que su separación del cargo no obedezca a la comisión de alguna falta grave en el ejercicio de su empleo", contenida en el artículo 796 del Código Administrativo, la cual es similar a la consulta de inconstitucionalidad que formularán los Magistrados que integran la Sala Tercera de esta Corporación sobre la misma frase y norma jurídica, bajo su ponencia, y que actualmente circula en proyecto de lectura.

En consecuencia, paso el presente informe a su Despacho para que determine lo conducente.
Panamá, 22 de noviembre de 1996.

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General"

En efecto, mediante sentencia calendada el 21 de noviembre de 1996 el Pleno se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 796 del Código Administrativo con relación a la misma frase consultada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y por tanto cabe declarar sustracción de materia en este caso, ya que por imperativo constitucional los fallos en esta materia son finales, definitivos y obligatorios.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que ha operado el fenómeno procesal de cosa juzgada constitucional y DISPONE archivar este expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL PERSONERO SEGUNDO MUNICIPAL DE PANAMÁ CONTRA EL DECRETO EJECUTIVO N° 476 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A PEDRO MARCOS JUSTINES POR EL SUPUESTO DELITO DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Personero Municipal de Panamá, presentó ante el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, advertencia de inconstitucionalidad contra el numeral 1° del Decreto N° 476 de 7 de septiembre de 1995, por medio del cual el Encargado de la Presidencia de la República, Señor TOMÁS GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE, decretó INDULTO a favor de los ciudadanos que resulten investigados, sindicados, procesados o condenados, conforme a supuestas conductas transgresoras de la ley, por la comisión de Delitos contra el Honor; contra la Libertad; contra la Personalidad Jurídica del Estado; contra el Patrimonio o contra la Administración Pública.

Encontrándose en la etapa de resolver el presente negocio, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que ya esta Alta Corporación de Justicia, en fallo del 27 de septiembre de 1996, se pronunció sobre la misma materia, mediante una advertencia de inconstitucionalidad presentada por los Fiscales Segundo y Sexto de Circuito del Primer Circuito Judicial, así como también la firma forense MORGAN & MORGAN. Se trata, pues, del misma actuación que se impugna mediante la presente advertencia de inconstitucionalidad.

La sentencia en referencia, en su parte resolutiva expresa:

> "En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE, la advertencia de inconstitucionalidad de los artículos primero, segundo y tercero del decreto Ejecutivo N° 476 de 7 de septiembre de 1995, formulados por el Fiscal Segundo y Sexto de Circuito del Primer Circuito Judicial y de la firma forense MORGAN & MORGAN, dentro de los procesos penales seguidos a MARCOS JUSTINES FERNÁNDEZ, SONIA ALMENGOR, VÍCTOR ANTONIO MORENO GONZÁLEZ Y AMÉRICA VÁSQUEZ DE AIZPRÚA, JAIME PADILLA BELIZ y RUBY PÉREZ DE APARICIO."

Es evidente que mediante la resolución de 27 de septiembre de 1996, este Pleno se ha pronunciado sobre las advertencias presentadas contra el aludido Decreto N° 476 de 7 de septiembre de 1995, declarando que ellas no eran viables y, por tanto, la Corte se abstiene de hacer un nuevo pronunciamiento, toda vez que se ha producido el fenómeno de sustracción de materia.

En la citada advertencia, por lo demás, se deja a salvo la utilización de la acción principal de inconstitucionalidad contra el aludido acto administrativo, por cuanto su constitucionalidad o inconstitucionalidad, por lo tanto, no ha quedado declarada por la sentencia citada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA SUSTRACCIÓN DE MATERIA en la presente advertencia de inconstitucionalidad.

Notifíquese, Archívese y Publíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

En la ocasión anterior (Fallo de 27 de octubre de 1996) se declaró no viable la consulta de inconstitucionalidad provocada por una advertencia de inconstitucionalidad, formulada por los Fiscales Segundo y Sexto del Primer Circuito Judicial y por la firma forense Morgan y Morgan. Es decir, no hubo un pronunciamiento de fondo, ni siquiera una sentencia inhibitoria. Simplemente no se tramitó la consulta.

Por esta razón, no se puede declarar sustracción de materia en la presente consulta.

Si se quiere seguir el mismo criterio de aquella ocasión, habría que declarar no viable este caso, por las mismas razones que se expresaron entonces.

Como lo expresé anteriormente no comparto ese criterio. Opino que la consulta procede, tratándose de un Decreto de Indulto y que no se puede sostener que porque no se trata de una disposición legal o reglamentaria, no es pertinente.

Por estas consideraciones, respetuosamente salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO LUIS CARLOS CEDEÑO DE GRACIA, EN REPRESENTACIÓN DE IRASEMA SUBÍA HERNÁNDEZ, CONTRA EL ARTÍCULO 980 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL, QUE ÉSTA LE SIGUE AL BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ, S. A. (BANAICO), EN LIQUIDACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Admítase la advertencia de inconstitucionalidad formulada por el licenciado Luis Carlos Cedeño De Gracia, en representación de **IRASEMA SUBÍA HERNÁNDEZ**, contra el Artículo 980 del Código de Trabajo, dentro del Proceso Laboral, que ésta le sigue al **BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ, S. A. (BANAICO)**, en liquidación.

Córrase en traslado a la Procuradora de la Administración para que emita concepto, por el término de diez (10) días contados a partir del recibo del expediente.

Se tiene al licenciado **LUIS CARLOS CEDEÑO DE GRACIA**, como apoderado legal del demandante.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE MORGAN & MORGAN CONTRA LA PROVIDENCIA N° 102 DE 2 DE FEBRERO DE 1995; 207 DE 16 DE MARZO DE 1995 Y LA SENTENCIA N° 15 DE 27 DE MARZO DE 1995, DICTADA POR EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN (PROCESO LABORAL INTERPUESTO POR DMITIEV YURIV, SHCHERBAKOV VLADIMIR Y OTROS VS M/N FORTUNA III Y VITYAZ SHIPPING COMPANY). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Actuando en su propio nombre, la firma forense Morgan y Morgan interpuso demanda con el objeto de que se declaren inconstitucionales la Providencia N° 102, de 2 de febrero de 1995, la Providencia N° 207, de 16 de marzo de 1995 y la Sentencia N° 15, de 27 de marzo de 1995, dictadas por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, dentro del proceso laboral que tuviera lugar entre Dmitriev Yuriy, Scherbakov Vladimir y otros vs. M/N FORTUNA III y Vityaz Russian Shipping Company.

Por admitida la demanda, y luego de recibida la contestación del traslado que le fuera corrido al Procurador General de la Nación, el negocio fue fijado en lista y concedido el término para que los interesados presentaran argumentos escritos sobre el caso, por lo que el proceso se encuentra en estado de resolver, a lo que se procede.

SOBRE LA PRETENSIÓN PROCESAL

La demandante sostiene que los actos demandados infringen los artículos 32, 18 y 17 de nuestra Carta Política.

La infracción habría ocurrido en ocasión del trámite, en el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, de demanda laboral propuesta, el 23 de diciembre de 1994, por el capitán y la tripulación de la motonave Fortuna III, reclamando el pago de salarios, indemnizaciones y gastos de repatriación. La aludida motonave ya había sido secuestrada, desde el 13 de septiembre de 1994, por el Tribunal Marítimo de Panamá, dentro de proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado propuesto por Trans-Tec Shipping Inc., mientras que el 7 de octubre de 1994 Perdue Farms Inc., representada por Morgan & Morgan, inició un proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado contra la motonave Fortuna III, por perjuicios sufridos durante la ejecución de contrato de fletamento.

Aunque admite no tener "un interés laboral per se", la demandante sostiene que Perdue Farms Inc., como acreedor privilegiado de la motonave, y en virtud del proceso in rem que le sigue, comparte interés en el objeto del proceso laboral, dentro del cual "Los apoderados legales de las demandadas, cuyo poder les fue conferido inicialmente por uno de los propios Demandantes, mediante Poder especial conferido con la facultad expresa de allanarse a la pretensión, aceptaron todos los `hechos de los demandantes y se allanaron a la pretensión y su cuantía" (f. 85). A juicio de la demandante en esta acción constitucional, las citadas particularidades del juicio laboral "constituyen indicios graves de que el proceso laboral fue un proceso simulado en fraude de los acreedores marítimos privilegiados" (f. 86).

Esa convicción dio origen a la iniciativa de Morgan & Morgan, actuando en representación de Perdue Farms Inc., en el sentido de anunciar su interés por participar en el proceso laboral en calidad de tercero, pretensión que fue resuelta, contrariamente a su interés, mediante los actos acusados de inconstitucionales, que son las providencias (o "proveídos de mero obedecimiento") número 102, de 2 de febrero de 1995, y número 207, de 16 de marzo de 1995, y la sentencia número 15, de 27 de marzo de 1995, dictados por el

Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección.

En una presentación compendiada que hace la firma forense demandante sobre las razones de la inconstitucionalidad que alega, expresa que los actos acusados "infringieron el Artículo 557 del Código de Trabajo, al pretender que sólo existe la intervención adhesiva o coadyuvante; infringió el Artículo 868 del Código de Trabajo, que dispone que las cuestiones accesorias del proceso deben ser resueltas por Auto y no por Providencias ni Proveídos; infringió el Artículo 1116, numeral 3, del Código Judicial, que establece que la intervención de terceros se decide por Auto y admite apelación; e infringió también los Artículos 199, numeral 9, del Código Judicial y 530 del Código de Trabajo, que disponen que el Juez debe rechazar los actos de las partes que se sirven del proceso para realizar actos simulados o perseguir un fin prohibido por la Ley. Todas estas infracciones han dado lugar a la violación del Art. 32 de la Constitución Política de nuestra República que consagra el derecho al DEBIDO PROCESO y que estipula que nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ... (el subrayado es nuestro)" (f. 18).

La infracción del **artículo 32 constitucional**, en concepto de violación directa, por omisión, se hace consistir, entonces, por una parte, en el desconocimiento de la naturaleza del acto que debe decidir sobre la eventual intervención de terceros en un proceso o sobre cualquier cuestión accesoria al mismo. Según afirma la demandante, los artículos 1116 y 868 del Código Judicial ordenan que en ambos casos la decisión se profiera a través de un **auto**, mientras que en la causa sub-judice los dos actos acusados presentan la forma de **providencias**, o "proveídos de mero obedecimiento", con la consecuencia legal de que vedan a los interesados el ejercicio de la vía de recurso que la ley les reconoce. Por otra parte, se dice también infringida la citada norma constitucional, en el mismo concepto, toda vez que la providencia N° 102, de 2 de febrero de 1995, ignora que el artículo 557 del Código de Trabajo admite la intervención "ad excludendum", habida cuenta de que Perdue Farms Inc. "podía ser afectada por la resolución judicial que decidiera el supuesto conflicto entre la tripulación de la motonave FORTUNA III y la motonave y su propietaria". De igual manera, se sostiene que la sentencia N° 15 de 27 de marzo de 1995 afectó gravemente los intereses de Perdue Farms Inc., al condenar a la motonave a pagar un crédito marítimo que goza de un privilegio superior al de los créditos por fletamento y suministro, con el resultado de que la motonave fue rematada en venta judicial por una suma inferior a la de los créditos que existían en su contra.

La infracción del **artículo 18 de la Constitución Política** se dice ocurrida, también en concepto de violación directa, por omisión, al desatender el juez de trabajo las funciones que le atribuye el numeral 9 del artículo 199 del Código Judicial. La norma en cita incluye entre los deberes de los jueces el de "Prevenir, remediar y sancionar ... cualquier tentativa de fraude procesal, de obtener fines prohibidos por la ley o de realizar actos procesales irregulares". La demandante censura la conducta judicial por ignorar el hecho de la inexistencia de controversia real en lo sometido a su consideración, así como el hecho de que la materia era de competencia exclusiva de la jurisdicción marítima. En el mismo sentido se censura la conducta judicial omisiva frente al evento, considerado por el artículo 530 del Código Judicial, de que las partes utilicen el proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley.

En cuanto a la infracción del **artículo 17 de la Constitución Política**, se dice ocurrida "como derivación de las demás infracciones que hemos venido denunciando a lo largo de esta Demanda de Inconstitucionalidad".

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El traslado de la demanda fue contestado en extensa Vista, la que concluye recomendando se declare la inconstitucionalidad de los actos demandados, por violatorios de los artículos 32 y 17 de la Constitución Nacional. En lo medular, la opinión que se comenta sostiene que:

"En resumen, el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, debió admitir la participación como tercero de **PERDUE FARMS INC.**, pues la resolución que allí se fuera a proferir (que por cierto sería condenatoria contra la nave en virtud del allanamiento), le ocasiona menoscabo a los intereses que perseguía sobre dicho objeto (la nave) en la jurisdicción marítima.

Al rechazarse de plano la solicitud de los apoderados judiciales de **PERDUE FARMS INC.**, mediante las Providencias N° 102 de 2 de febrero de 1995 y N° 207 de 16 de marzo de 1995, se infringió el trámite previsto en el artículo 557 del Código de Trabajo, por lo que esta Procuraduría estima que se violó el debido proceso previsto en el artículo 32 de nuestra Carta Fundamental, igual suerte corre con la Sentencia N° 15 del 27 de marzo de 1995, la que se emitió sin permitir la participación de **PERDUE FARMS INC.**

...

Como esta Procuraduría es de la opinión que el cargo de inconstitucionalidad formulado por el demandante demuestra la inconstitucionalidad de los actos acusados, consideramos no entrar al análisis del otro cargo formulado el cual consiste en que el tipo de resolución por medio del cual se resolvió la petición de **PERDUE FARMS INC.**, no era el que procedía, pues si señalamos que se debió permitir la participación como tercero en el proceso laboral, sería una contradicción entrar al análisis del tipo de resolución que negó dicha petición" (f. 114).

OPINIÓN DE LA CORTE SUPREMA

Esta controversia llegó parcialmente a conocimiento de la jurisdicción constitucional, por vía de una acción de amparo de derechos fundamentales que fuera propuesta por la sociedad Perdue Farms Inc. contra el Juez Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, acción en la que se acusaba **la providencia N° 207**, o "proveído de mero obedecimiento", de ser violatoria de la garantía constitucional del debido proceso.

En aquella oportunidad el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante resolución de 28 de abril de 1995, negó la pretensión constitucional, sentenciando que "el Juez demandado aplicó el trámite correspondiente al caso". En abono a esa decisión, sostuvo que:

"La diferencia que puede existir entre su decisión y la opinión del amparista resulta materia de interpretación que no puede ser motivo de esta extraordinaria acción de amparo de garantías constitucionales; y menos aún, cuando como lo señala la norma antes transcrita, dicha disconformidad puede ser examinada por el Superior al atender la sentencia, que dicho sea de paso según se desprende de los antecedentes, ya fue dictada y se encuentra pendiente de notificación" (Registro Judicial, Mayo 1995, p. 46).

Actuando como Tribunal de Apelaciones, el Pleno de la Corte Suprema confirmó la resolución recurrida, mediante sentencia de 30 de mayo de 1995, por considerar que:

"... la solicitud presentada por la sociedad PERDUE FARMS INC., con fundamento en el artículo 557 del Código de Trabajo, es materia incidental del proceso laboral dentro del cual se introdujo. Consecuentemente, es aplicable el artículo 629 del citado Código, que señala que si el incidente es manifiestamente improcedente, el Juez debe rechazarlo `sin más trámite , y además, que dicha resolución es irrecurrible.

En vista de que el Juez Cuarto de Trabajo de la Primera Sección aplicó las normas correspondientes, el acto contenido en el Proveído N° 207, fechado 16 de marzo de 1995, no viola el artículo 32 de la Constitución Nacional". (Registro Judicial, Mayo 1995, p. 46).

La decisión recaída en ese proceso de amparo hace tránsito a **cosa juzgada constitucional en cuanto al Proveído 207**, lo que torna improcedente la pretensión que ahora anuncia la demandante, planteada esta vez por vía de la acción directa de inconstitucionalidad, reclamando un nuevo pronunciamiento sobre la conformidad del mismo acto procesal con la Carta Política.

Sobre la cosa juzgada en el proceso de amparo, afirma Pedro Bertolino:

> "Nos adherimos a quienes, tanto en el orden doctrinal como jurisprudencial, entienden que la sentencia pronunciada en el proceso de amparo pasa en autoridad de cosa juzgada (material). Este es, por otra parte, el carácter que se le ha reconocido a la sentencia recaída en el mandato de seguridad brasileño y en el amparo mejicano (1).
>
> Efectivamente, en el momento en que la sentencia de amparo queda firme (efecto de cosa juzgada formal), la decisión o resolución sobre la pretensión referida a la cuestión, litigio o causa que ha dado lugar al proceso de amparo, adviene inmutable y definitiva. ...
>
> ... conceptuamos que hace cosa juzgada (material) respecto al amparo tanto la sentencia estimatoria como la desestimatoria, esto es, según que satisfaga la pretensión, actuándola o negando su actuación" (BERTOLINO, Pedro J.; La Cosa Juzgada en el Amparo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1968, pp. 61, 62, 64, subraya la Corte).

Las decisiones de la Corte Suprema, tanto en materia de amparo como con ocasión de las demandas autónomas de inconstitucionalidad, constituyen pronunciamientos emitidos en el curso de un proceso constitucional, que en ambos casos tienen por objeto expreso la tutela de la supremacía de la Constitución. Por ser ese el objeto y resultado concreto de ambos procedimientos, resulta consecuente atribuirle al dictamen que recaiga en uno de ellos, **en cuanto a la conformidad constitucional de una norma o acto**, efectos vinculantes sobre cualquier otro procedimiento de conocimiento de la jurisdicción constitucional.

Esta Superioridad ha sostenido en jurisprudencia profusa que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no puede convertirse en tribunal de instancia durante el ejercicio de sus funciones como guardián de la integridad, supremacía y permanencia del ordenamiento constitucional. En este sentido, no le es permitido acceder a la solicitud de verificación de supuestos errores in iudicando, ni mucho menos reexaminar sus propias decisiones tomadas en anteriores procesos constitucionales sobre las mismas normas o actos ya confrontados con la Carta, por mandato expreso de la Constitución. Como excepción a esta regla podemos mencionar los casos de inconstitucionalidad sobreviniente como consecuencia de cambios o reformas constitucionales, y los casos de demandas planteadas por vicios de forma de una ley o acto cuyo contenido material haya sido confrontado y declarado conforme al texto de la Carta Política por el tribunal constitucional, o cuando los vicios de fondo planteados sean completamente distintos a los previamente examinados, lo que no es la situación que nos ocupa.

Fuera de estos ejemplos de relatividad o inestabilidad de la cosa juzgada constitucional, debe insistirse en que, de acuerdo con el artículo 203, párrafo final, de la Constitución, las decisiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio del control de constitucionalidad son finales, definitivas y obligatorias.

Así las cosas, el objeto plural de esta demanda queda reducido sólo a dos de los actos demandados, que son la Providencia N° 102, de 2 de febrero de 1995, y la Sentencia N° 15 de 27 de marzo de 1995, ambos proferidos por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección.

Con respecto a la Providencia 102 de 2 de febrero de 1995, los demandantes del presente proceso constitucional alegan la vulneración del principio del

debido proceso, pues "el Señor Juez Cuarto de Trabajo de la Primera Sección infringió el Artículo 1116 numeral 3 del Código Judicial, utilizando un tipo de resolución judicial que no corresponde a la materia que versa y no admite recurso de apelación" (f. 89). De igual manera, en relación con este mismo cargo se señala el desconocimiento del artículo 868 del Código de Trabajo.

Considera la Corte que se incurre en violación del principio del debido proceso cuando no se le reconoce a quienes intervienen en el debate jurisdiccional las oportunidades que la ley instituye en garantía de su defensa, como lo sería, por ejemplo, si se le impide la presentación de excepciones, aportar pruebas y contrapruebas lícitas o hacer uso de medios de impugnación.

Estima el Pleno que, en el caso de que ahora conoce, el hecho de que se hubiere dictado una resolución con forma o presentación no autorizadas por la ley, en modo alguno impedía la utilización, en la misma vía ordinaria, de los medios de impugnación que la ley pone a disposición de los interesados. Basta leer la eficaz previsión que a estos efectos instituyen los artículos 910 del Código de Trabajo y 1111 del Código Judicial, para los que, independientemente de la forma que presente la resolución, "**se admitirán contra ella los recursos que procedan conforme a su naturaleza**". De esta manera alcanzan concreción dos principios que tutelan la función jurisdiccional, a saber: el principio de economía procesal y el principio de desformalización del proceso (antiformalismo), ambos consagrados en el numeral primero del artículo 212 de la Carta Fundamental.

El último aspecto de la pretensión procesal compuesta que se examina, o sea **en cuanto a la sentencia N° 15 de 27 de marzo de 1995**, proferida por el tribunal laboral, no viene presentado con la debida claridad, con la indicación concatenada de la norma infringida y el concepto de la infracción, como lo requieren la ley y la labor exegética que se impetra. No obstante, y al amparo de la eficacia de los principios de supremacía constitucional y de antiformalismo procesal, la Corte pasa a considerar la procedencia de éste último cargo.

A este respecto señala en esencia la demandante que "la sentencia N° 15 de 27 de marzo de 1995 que, más allá de los límites de la jurisdicción laboral, declara que se adeudan sumas por prestaciones laborales correspondientes al último viaje de la nave, es decir, que declara la existencia de un crédito marítimo privilegiado cuando esto es competencia exclusiva de la jurisdicción marítima según la Ley 8 de 1982 reformada por la Ley 11 de 1986" (f. 92), afirmación que se hace sin indicar la norma específica que le sirve de sustento. Esta argumentación autoriza a inferir que los demandantes alegan la violación del debido proceso, en razón de incompetencia del tribunal laboral, al considerar que el crédito es de naturaleza marítima y que la materia debió ser conocida y decidida por la jurisdicción marítima.

Sobre este particular, un examen sistemático del Código de Trabajo (art. 251) y de la ley 8 de 1982, reformada por la ley 11 de 1986 (art. 18), a la luz de lo normado por el artículo 73 de la Constitución, permite arribar a la conclusión de que corresponde precisamente a la jurisdicción de trabajo pronunciarse sobre la existencia de las prestaciones laborales adeudadas a los marinos por el último viaje de la nave, correspondiéndole al juez marítimo la ejecución de la sentencia y determinar la prelación de los créditos existentes contra el buque.

A partir del artículo 73 de la Constitución Nacional se asume que "Todas las controversias que originen las relaciones entre el capital y el trabajo, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo que se ejercerá de conformidad con lo dispuesto por las Ley". Ya en el ámbito legislativo, el artículo 251 del Código de Trabajo reitera que "Las relaciones entre empleadores y trabajadores en naves que se dediquen al servicio internacional, se rigen en general por este código y en especial por las disposiciones de esta sección". Por su parte, el artículo 18 de la misma normativa que invoca en su resguardo la demandante (**ley 8 de 1982**), es confirmatorio de lo antes señalado, al establecer que, "Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, las acciones que surjan de las disposiciones de la Legislación Laboral de la República de Panamá, son de

competencia privativa de los Tribunales Laborales panameños".

En relación con esta última norma se debe señalar que en su redacción original establecía la competencia **preventiva**, tanto de los tribunales marítimos como de los tribunales laborales de la República, a opción del trabajador. Esa redacción fue precisamente declarada inconstitucional por sentencia de 25 de junio de 1985, para dar paso a la norma vigente que instituye la competencia **privativa** de los tribunales laborales, de conformidad con el mandato constitucional.

Por lo tanto, a juicio de la Corte no existe vulneración del principio del juez natural como elemento subjetivo del derecho a un debido proceso.

En relación con los artículos 17 y 18 de la Constitución vigente, basta decir que, al no comprobarse la vulneración del artículo 32 constitucional, no pueden resultar vulnerados tales disposiciones fundamentales. Jurisprudencia profusa de esta superioridad señala que el artículo 17 de la Carta Fundamental es de carácter programático, mientras que el artículo 18 es una norma constitucional abierta, según calificación acuñada por la doctrina moderna. El resultado en ambos casos es que esos preceptos no pueden ser utilizados, aisladamente, como fundamento de la pretensión constitucional.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES la Providencia N° 102 de 2 de febrero de 1995 y la Sentencia N° 15 de 27 de marzo de 1995, proferidas por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, dentro del proceso laboral que tuviera lugar entre Dmitriev Yuriy, Scherbakov Vladimir y otros vs. M/N FORTUNA III y Vityaz Russian Shipping Company, y que se ha producido el fenómeno de COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL, respecto a la Providencia N° 207 de 16 de marzo de 1995, dictada también dentro del referido proceso.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTEZ DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO CARLOS GUILLERMO CAMPBELL MARTÍNEZ EN SU CONDICIÓN DE FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, CONTRA EL AUTO DE 1° DE FEBRERO DE 1996, PROFERIDO POR EL PRIMER CIRCUITO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. (PROCESO ORDINARIO CONSORCIO VAN DAM-SOSA & BARBERO -VS- INDUSTRIAS METALÚRGICAS VAN DAM, C. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **CARLOS GUILLERMO CAMPBELL MARTÍNEZ**, en su condición de Fiscal Primero de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, ha interpuesto **Demanda de Inconstitucionalidad** contra el Auto de 1° de febrero de 1996 proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la solicitud presentada por **Consorcio VAN DAM -SOSA & BARBERO** para que se ordenase a la Nación, representada por el Ministerio de Obras Públicas, nombrar un árbitro para constituir e integrar el Tribunal de Arbitraje que se encargará de decidir las controversias surgidas entre dicho consorcio y la Nación.

Admitida la demanda por cumplir con las exigencias que determina el artículo 2551 del Código Judicial, se corrió traslado del expediente a la Procuraduría de la Administración para que emitiese concepto.

Devuelto el expediente con la Vista del Ministerio Público, corresponde a esta Corporación emitir la decisión final del caso, previas las siguientes consideraciones.

LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD:

En los hechos en que se fundamenta la demanda se expresa que en el año de 1986 el Consorcio **VAN DAM-SOSA & BARBERO** presentó ante la jurisdicción ordinaria demanda judicial, en la que se pretendía se ordenara a la Nación designar el árbitro correspondiente para resolver las diferencias y controversias existentes entre dicho consorcio y la Nación o, en defecto de ello, hiciere el tribunal dicho nombramiento.

El Juzgado Primero del Circuito de Panamá, Ramo Civil, resolvió, mediante Auto proferido el 20 de septiembre de 1994, que "no procede constituir Tribunal de Arbitraje para decidir las diferencias o controversias surgidas con motivo de la ejecución del Contrato N° 97 de 2 de octubre de 1980, celebrado entre la Nación y el Consorcio VAN DAM SOSSA Y BARBERO ... porque el convenio de proceso arbitral carece de validez".

La citada resolución fue apelada, por lo que el Primer Tribunal Superior de Justicia se pronunció en el sentido de REVOCAR dicho Auto, ordenando al a-quo continuar el trámite correspondiente, es decir, que mandare a la Nación nombrar a la persona que actuaría como árbitro en el Tribunal Arbitral.

Este último Auto de 1° de febrero de 1996, dictado por el Tribunal Superior, fue el que motivó esta demanda de inconstitucionalidad, pues, a juicio de la censura, viola el artículo 195 (numeral 4) y el artículo 2 de la Constitución Nacional.

La primera norma fundamental que se señala como vulnerada es del tenor siguiente:

> **"ARTÍCULO 195**. Son funciones del Consejo de Gabinete:
> ...
> 4. Acordar con el Presidente de la República que éste pueda transigir o someter a arbitraje los asuntos litigiosos en que el Estado sea parte, para lo cual es necesario el concepto favorable del Procurador General de la Nación. ..."

Se sostiene que el citado artículo ha sido violado en forma directa por el acto demandado, pues el mismo está desconociendo el procedimiento a seguir para que se puedan someter a arbitraje las controversias en las que sea parte el Estado.

Así, se explica que la norma constitucional establece que es función del Consejo de Gabinete acordar con el Presidente de la República que éste pueda someter a arbitraje un asunto litigioso -como el debatido en este caso- en que sea parte el Estado y que, "para que se pueda perfeccionar y proceder con lo acordado por el Consejo de Gabinete", es preciso, además, que se cumpla con la exigencia de contar con el concepto favorable del Procurador, lo que resulta desconocido por el Auto de 1° de febrero de 1996, por lo que infringe la Constitución. En esas circunstancias si, mediante el Auto de 1° de febrero de 1996, se ha ordenado que se nombre un árbitro y que se someta a arbitraje un asunto litigioso en que es parte la Nación, sin que se hayan cumplido los requerimientos señalados en el referido ordinal 4 del artículo 195 de la Constitución, la norma resulta infringida por la aludida resolución.

También denúnciase infringido el artículo 2 de la Carta Política, que dispone:

"**ARTÍCULO 2.** El poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración."

Afirma el impugnante que la norma señala que el ejercicio del Poder Público le corresponde al Estado de conformidad con la Constitución. Con lo resuelto en el acto demandado "se obliga al Estado a realizar un acto -someter a arbitraje un litigio- no conforme a lo establecido en ella", además de resultar invadida una esfera reservada a la iniciativa y decisión del Órgano Ejecutivo, en la cual debe participar el Ministerio Público.

En consecuencia, no ha ejercido la autoridad jurisdiccional el Poder Público conforme lo ordena la Constitución, ya que la resolución impugnada no ha observado ni respetado el mecanismo que establece el artículo 195 para que puedan someterse a arbitraje los asuntos litigiosos en los que sea parte el Estado.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

"...
III. NUESTRO CRITERIO.
...
3. El artículo 195 numeral 4, de la Constitución Política, no es aplicable al caso subjúdice, por razón de que esa norma es viable en aquellos casos en que el Estado sea parte en un litigio o proceso en el que desee someterse a arbitraje, pero sin haber pactado previamente un Convenio por escrito, que contenga una cláusula compromisoria en tal sentido.

"La facultad que se concede al Consejo de Gabinete opera exclusivamente en aquellos juicios ya iniciados en los Tribunales, en los que el Estado se ha constituido en una de las partes ..." (Fallo de 19 de febrero de 1976. Pleno).

En los procesos que se señalan en el artículo 195, numeral 4 de la Constitución Política, es evidente que debe darse la participación del Consejo de Gabinete en acuerdo con el Presidente de la República, previo el concepto favorable del Procurador General de la Nación. ...

Obsérvese que el Constitucionalista empleó el verbo "poder", al indicar que el Presidente de la República "podrá" transigir (concluir una transacción, conciliar discrepancias, evitar un conflicto o poner término a uno suscitado) o someter a arbitraje los asuntos litigiosos en que el Estado sea parte. Con ello se quiere implicar que el Estado ya debe ser parte de un proceso y -que como consecuencia del mismo- desee someterse a un arbitraje, lo cual excluye la posibilidad y existencia previa de un Convenio o Contrato en el que se incluya una Cláusula Compromisoria en la que se haya podido pactar previamente el sometimiento a arbitraje.

4. En el caso que nos ocupa, sí se trata de un contrato contentivo de una Cláusula Compromisoria, en la que ambas partes, de común acuerdo, ya han decidido previamente someter sus futuras controversias a arbitraje.

5. En el caso que se describe en el artículo 195 numeral 4, de la Constitución Política, el Estado unilateralmente, a través del señor Presidente de la República, es quien decide si desea o no someterse a un arbitraje, por lo cual es necesario escuchar -previamente- el concepto favorable del Procurador General de la Nación, según lo exige la norma in comento.

La doctrina señala que la Nación, cuando es parte en un proceso, sí puede someterse a un juicio arbitral cuando actúa dentro del campo del derecho privado (en la especie, mediante contratos de derecho común de la administración pública), siempre y cuando no se afecte

el orden público, el orden o sistema constitucional, o implique un agravio o razonamiento a la autoridad del Estado o a su soberanía. (MARIENHOFF, citado por Rogelio A. Fábrega. El Arbitraje en la Contratación Pública, Revista Lex, abril-agosto, 1993, pág. 262). ...

"La jurisprudencia patria, aunque, no muy abundante le reconoce eficacia jurídica a los convenios arbitrales pactados tanto entre particulares, como entre éstos y el Estado ... El primer fallo arbitral que se registra fue dictado por la propia Corte Suprema de Justicia actuando como Tribunal de arbitramiento, en la controversia surgida, entre el Ejecutivo y una compañía de navegación. Dicho fallo tiene fecha 20 de junio de 1919 y el mismo versó sobre una controversia surgida con motivo del pago de unos impuestos de muellaje. ...

Siendo ello así, el Órgano Judicial no ha invadido el radio de acción del Órgano Ejecutivo, al ordenar que se prosiga con el trámite previamente iniciado, y que consiste en el nombramiento del árbitro que represente los intereses del Estado, por lo que no se produce la infracción del artículo 2 de la Constitución Política.

Por todo lo expuesto, esta Procuraduría es del criterio que no se viola el procedimiento contemplado en el artículo 195, numeral 4 de la Carga Magna, ni el principio de separación de los Poderes dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política, ni ninguna otra disposición Constitucional; y como consecuencia de tal conclusión, pedimos respetuosamente a Vuestro Honorables Tribunal que así mismo sea declarado en la Sentencia que resuelva el presente negocio. (F. 40, 47).

CRITERIO DE LA CORTE

En el presente caso se está demandando la inconstitucionalidad del Auto dictado el 1° de febrero de 1996 por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual se ordena a la Nación, representada por el Ministerio de Obras Públicas, nombrar un árbitro para que decida las controversias surgidas entre la Nación y el CONSORCIO VAN DAM-SOSA & BARBERO, por motivo de la ejecución del contrato N° 97 del 2 de octubre de 1980. La inconstitucionalidad de la citada resolución, básicamente, se fundamenta en que la misma se profirió sin observar el procedimiento que para la situación planteada determina el artículo 195, ordinal 4°, de nuestra Carta Política.

Como antecedentes tenemos que la resolución objeto del presente recurso de inconstitucionalidad se origina por el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO VAN-DAM contra el Auto N° 1588 de 20 de septiembre de 1994 dictado por el Juzgado Primero del Circuito de lo Civil, que declaró que no procedía constituir tribunal de arbitraje, porque el convenio arbitral carecía de validez. Esta decisión dejó sin valor la resolución que el mismo sentenciador a-quo había dictado el 12 de mayo de 1992 ordenando a la Nación que, en el término de cinco días, nombrara su árbitro.

En el fallo del Tribunal Superior impugnado se indica que la solicitud presentada por el Consorcio VAN DAM, para que se ordene a la Nación que nombre un árbitro o en su defecto lo nombre el tribunal, se encuadra en lo dispuesto por el artículo 1424 del Código Judicial, por lo que el tribunal ante quien se presenta dicha solicitud debe determinar, en primer lugar, si es competente para conocer del asunto. En segundo lugar, de ser competente, "deberá limitarse a examinar el documento público o privado, a fin de determinar si en el mismo existe o no cláusula compromisoria, ya que no podría ordenar el nombramiento de un árbitro de no existir tal compromiso".

Luego, sostiene que, en el evento de que el tribunal sea competente y de que en el documento exista la cláusula compromisoria, el tribunal dará traslado de la solicitud a la contraparte para que en cinco días nombre su árbitro y de no hacerlo lo nombrará el tribunal.

En primer lugar, estimó el Tribunal Superior que, para efectos de esclarecer si la competencia para conocer de esta solicitud corresponde a la jurisdicción civil o a la contencioso administrativa, se debe tener en cuenta que la controversia para la cual se está solicitando que se ordene a la Nación nombrar su árbitro se origina en el Contrato N° 97 de 2 de octubre de 1980, suscrito entre la Nación, representada por el Ministerio de Obras Públicas, y el Consorcio VAN DAM-SOSA & BARBERO. Por lo que resulta necesario determinar si se trata de un contrato de carácter administrativo o un contrato civil donde el Estado ha actuado como un particular. Sobre este aspecto, sostuvo el juzgador que no podía entrar a decidir dicha situación sino acatar la decisión que al respecto expresó la Sala Tercera de la Corte, mediante resolución de 15 de diciembre de 1983, que resolvió no admitir una demanda de nulidad interpuesta contra las resoluciones números 71 y 72 ambas de fecha 19 de agosto de 1980, expedidas por el Consejo de Gabinete, que aprobaron el Contrato N° 97 de 2 de octubre de 1980 celebrado entre la Nación y CONSTRUCTORA METALÚRGICAS VAN DAM, S. A. y SOSA & BARBERO y el Contrato No.70 de 12 de junio de 1981 celebrado entre la Nación e INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LAKAS, S. A., ya que en las consideraciones de tal resolución se calificó a tales contratos como de naturaleza civil y no administrativa, es decir, que en los mismos el Estado contrató en calidad de particular y no como un ente administrativo, por lo que el acto no podía ser recurrible ante esa jurisdicción (la contencioso administrativa). Dicha decisión fue adoptada por la Sala Tercera, el 21 de febrero de 1984. (Ver Registros Judiciales de diciembre de 1983, pág. 23 y de mayo de 1984, pág. 76, respectivamente).

En consecuencia, el Tribunal Superior señala que en acatamiento de la decisión citada, o sea, que el contrato es de naturaleza civil, es la jurisdicción civil ordinaria la que debe atender la solicitud para que se nombre un árbitro, por lo que lo atinente era establecer y verificar la existencia de la cláusula compromisoria en el contrato. Apunta el Tribunal Superior que para tal fin el Consorcio solicitante presentó copia autenticada del aludido Contrato N° 97, "el cual se encuentra refrendado por el Contralor General de la República, y el cual fue autorizado por la Resolución N° 72 de 19 de agosto de 1980, expedida por el Consejo de Gabinete, razón por la cual cumple con los requisitos que exige el artículo 69 del Código Fiscal a los contratos del Gobierno".

Se destaca, además, que el contrato constituye un documento público auténtico, conformando una prueba válida, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 821, núm. 3, 820 y 822 del Código Judicial.

En desarrollo de su labor, el sentenciador transcribió la cláusula cuadragésimo primera del contrato sobre la solución de conflictos, que dice:

> "Las partes convienen en someter al conocimiento de árbitro cualesquiera diferencias que surjan por razón de EL CONTRATO, o con motivo de su ejecución o interpretación, de acuerdo con lo que al respecto establece el Código Judicial. En éstos casos se seguirán las reglas que se incorporan como Anexo III, en su defecto, lo que estipule el Capítulo Tercero, del Título X, del Libro II del Código Judicial".

Igualmente, se refirió a las pautas a seguir que establece el Anexo III de dicho contrato, en el sentido de que la parte interesada deberá designar su árbitro y comunicar a la otra parte los puntos de la controversia, las cuales, a juicio de esa Superioridad, fueron respetadas por el Consorcio solicitante "al presentarle al Ministerio de Obras Públicas, el 22 de septiembre de 1986, el memorial que reposa de fojas 6 a 10 del expediente".

Concluye el fallo acusado de inconstitucional expresando que, el a-quo en el auto apelado debió constreñirse a actuar conforme lo establece el artículo 1424 del Código Judicial, es decir, en el sentido de "dar traslado a la Nación y apercibirla que si dentro del término de cinco días no hacía su designación el Tribunal la haría", pues en este caso existía una cláusula compromisoria y se había acreditado que el Consorcio había cumplido con lo pautado en el contrato a esos fines.

Finalmente, entre otras consideraciones, se expresa que no se está ante un Proceso Arbitral, sino ante una solicitud tendiente a que se de inicio al Proceso Arbitral. Para poder decidir si se debe o no ordenar a la Nación que nombre su árbitro, "hay que examinar el contrato, pero tal revisión debe limitarse a su validez formal y no a su validez intrínseca", y "el contrato en mención cumple con los requisitos formales exigidos a los Contratos con la Nación", aprecia el Tribunal Superior en su sentencia.

Ante todo, la Corte comparte los planteamientos que hace la Vista de la Procuraduría al sustentar la eficacia o validez jurídica de los convenios arbitrales pactados entre los particulares y el Estado. Queda claro, entonces, que se puede pactar la futura celebración de un arbitraje para solucionar los conflictos entre los contratantes, pues legal, doctrinal y jurisprudencialmente, sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad, ha sido admitido que en la contratación pública en general es permisible la incorporación del pacto compromisorio o arbitral, siempre que no se afecte el interés público.

En este caso estamos frente a una de las modalidades de la contratación pública, donde el ente público es una de las partes; materia esta que, en consideración al objeto de la contratación, la doctrina ha clasificado en contratos privados de la administración y en contratos administrativos, a secas.

En cuanto a esta distinción la jurisprudencia ha dicho:

> "Así, por ejemplo, el **Auto de 25 de junio de 1947** estableció doctrina en el sentido que; `no todos los contratos celebrados por la Administración adquieren por ese solo hecho el carácter de contratos administrativos. Contratos hay entre los celebrados por la Administración que caen dentro del dominio del derecho privado, y ello ocurre cuando su motivo determinante es el interés privado de cada cual. No pasa lo mismo con los contratos administrativos, que se definen como el acuerdo de voluntades, generador de obligaciones, celebrado por la Administración, con el fin de proveer directa o indirectamente la satisfacción de un interés público, lo que hace que se diferencien de los contratos civiles en los cuales no aparece esa característica esencia de los administrativos: el servicios público ". (Revista Lex, abril-agosto de 1993 "EL ARBITRAJE EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA", DR. Rogelio Fábrega Z., Pág. 251).

Esta distinción se observa en nuestro ordenamiento constitucional cuando establece en su artículo 179, numeral 8, la atribución del Órgano Ejecutivo de celebrar contratos administrativos para la prestación de servicios y ejecución de obras públicas, con arreglo a la Constitución y la ley, en relación con lo aludido en los numerales 14 y 15 del artículo 153, en donde sin calificar su naturaleza se mencionan los "contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas".

En este caso, como se tiene dicho, se está cuestionando la constitucionalidad de la resolución dictada dentro de la jurisdicción civil que se refiere a la integración de un tribunal de arbitraje para que ventile las controversias surgidas en relación a un contrato en que una de las partes es la Nación, aduciéndose que no se han cumplido ciertas condiciones constitucionales para proceder al proceso de arbitraje.

Como se infiere del acto impugnado, para decidir en los términos adoptados, el Tribunal Superior corroboró la competencia que tiene la jurisdicción civil para examinar el contrato y verificó la existencia en el contrato del convenio o cláusula arbitral. Como se indicó anteriormente, sobre el aspecto de la competencia se fundamentó en fallos de la Sala Tercera de la Corte recaídos sobre el contrato bajo examen, que definieron la misma. Igualmente, comprobó, al revisar la copia auténtica del contrato, que el mismo fue refrendado por el Contralor General de la República y autorizado mediante resolución del Consejo de Gabinete y que, en su cláusula cuadragésima primera, señala que en caso de conflicto entre las partes se recurrirá al arbitraje conforme a las reglas del Código Judicial. En base a ello, concluyó que se cumplía con los requisitos que exige el artículo 69 del Código Fiscal para los contratos que celebre el

Gobierno.

Aprecia el Pleno que en este caso no caben dudas en cuanto a que la aludida cláusula arbitral invocada por el Consorcio existe y está vigente, según se plasmó en el contrato celebrado, sin que lo anterior signifique que no se deba tener el cuidado de asegurar que la actuación de la autoridad a la que le corresponda procurar que se practique lo que en la cláusula pactada se establece, evite entrar en contradicción o en incompatibilidades con lo que sobre esta materia contemple la Constitución, particularmente en lo pautado por el artículo 195 en su numeral 4.

Siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación en relación con la norma confrontada en este caso, artículo 195, ordinal 4, (anteriormente art. 188, ord. 4) habría que concluir que:

El acto jurisdiccional que motivó la impugnación y que se acusa de haber desconocido el procedimiento que determina el artículo 195 (ord. 4) no ha transgredido dicha norma, pues la misma se refiere a una situación distinta a la que debía analizarse y resolverse a través de aquel acto judicial.

Así, el mandato que expresa el funcionario judicial mediante la resolución demandada de inconstitucional para que se nombre un árbitro (por parte de la Nación), a efectos de que se practique un arbitraje, obedece a la autorización que le otorga una de las cláusulas del contrato para que promueva dicho procedimiento; por tanto, ni ese procedimiento, ni el consecuente arbitraje quedan ubicados exactamente dentro de los marcos descritos por el ordinal 4 del artículo 195 de la Constitución, porque "la facultad que se le concede al Consejo de Gabinete, opera exclusivamente en aquellos juicios ya iniciados en los tribunales, en los que el Estado se ha constituido en una de las partes". (Ver fallo de 19 de febrero de 1976 -Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 4 de la Ley 9 de 5 de febrero de 1976).

En este caso vemos que la autorización para la creación de un tribunal de arbitraje no la dio el Órgano Judicial mediante la resolución impugnada; tampoco se dio en un juicio iniciado en los tribunales, sino que se pactó previamente en un contrato suscrito por la Nación y una empresa privada, por lo cual hay que convenir que hasta este momento tiene rango o categoría de ley entre las partes. Se trata de un acto del Órgano Ejecutivo en donde el Consejo de Gabinete intervino determinando que la tutela de los intereses del Estado resultarían mayormente salvaguardados, por la naturaleza de la materia contractual, "a través de la creación de tribunales técnicos con cabal conocimiento de las cuestiones sometidas a su conocimiento" (Ver jurisprudencia ibídem).

Consecuentemente, no es cierto, como se alude en la presente acción de inconstitucionalidad, que con los resultados del acto demandado se esté obligando al Estado a realizar el acto de someter a arbitraje un litigio y que con ello el tribunal se esté inmiscuyendo en materia privativa de otro Órgano del Poder Público pues, como ha quedado aclarado, el mismo Estado a través del Órgano Ejecutivo -representado por los funcionarios competentes- se comprometió voluntaria-mente a resolver mediante arbitraje las controversias que pudieran surgir por la ejecución, interpretación o resolución del contrato que suscribió. De forma tal que la autoridad judicial, en este caso el Primer Tribunal Superior, bajo ningún punto de vista está violando la Constitución, ni ha invadido funciones reservadas al Consejo de Gabinete, ya que simplemente está desempeñando el papel de mediador para la ejecución de lo convenido por el Órgano Ejecutivo en el contrato por él soberanamente celebrado.

En nuestro ordenamiento jurídico se ha admitido el sometimiento de controversias relacionadas con la celebración, cumplimiento o extinción de la contratación pública en general a un proceso arbitral, es decir, incorporando en este tipo de contratos un compromiso arbitral. En todo caso, si se considera que la cláusula compromisoria pactada, tanto en un contrato administrativo como en un contrato privado de la Administración, no ha sido acordada debidamente, ya sea en relación con lo dispuesto por el artículo 195 o cualquier otro de la Constitución, esa cláusula podría ser objeto de una advertencia de inconstitucionalidad, dentro del juicio y antes de su aplicación, o de una acción

autónoma de inconstitucionalidad, pero enderezada contra la cláusula en sí misma y nunca contra el acto que se refiere a su implementación, o sea, la resolución que aplica el procedimiento para su ejecución, como lo ha demandado, en este caso, el representante del Ministerio Público.

Como se deja dicho, al dictar la resolución demandada, el Tribunal sólo ha cumplido con su obligación de imprimir el impulso procesal requerido por el Consorcio privado que gestiona en su papel de futura parte actora, para poder más tarde iniciar el proceso que pretende instaurar, con el fin de que se resuelva la controversia que se ha originado por razón del contrato que suscribiera con el Estado.

Luego entonces, si el Estado no está de acuerdo con alguno de los puntos que fueron pactados en dicho contrato y pretende ahora que se declare su nulidad, no es a través de una acción de inconstitucionalidad contra una actuación procesal o de mero trámite como ha de obtener su anulación.

Para tratar de obtener la nulidad del acto principal que es el contrato, o de alguna de sus cláusulas originadoras de la actuación procedimental, el Estado tiene, además de los mecanismos ya mencionados de tutela constitucional previstos para esa clase de violaciones, las vías ordinarias ante las respectivas instancias como lo son la demanda de nulidad de lo pactado o cualquier otro recurso que legalmente pueda usarse como defensa, una vez iniciado el proceso ante el tribunal competente.

Es importante destacar que la demanda de inconstitucionalidad no es viable en este caso por no haber sido dirigida contra el objeto idóneo, pues como se ha reiterado, no era la actuación judicial acusada la que tenía que velar por el cumplimiento de los presupuestos constitucionales contenidos en el ordinal 4 del artículo 195 del texto fundamental. Sin embargo, independientemente de que la actividad en que intervenga el Estado como parte (en este caso la contratación) quede comprendida en el ámbito del derecho público o en el del derecho privado, siempre será relevante el interés público que la caracteriza, por lo que nunca estará demás tener presente lo expresado sobre esta materia por el Dr. Rogelio A. Fábrega en la publicación, de la revista Lex (abril-agosto 1993), bajo el título de "EL ARBITRAJE EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA":

> "Podemos, pues, concluir que nuestro ordenamiento jurídico condiciona y limita la celebración de cláusulas compromisorias en los contratos administrativos y también para la celebración de procesos arbitrales para dirimir controversias contractuales, pero tales condicionamientos, lejos de ser potestades discrecionales absolutas del Consejo de Gabinete, constituyen limitaciones impuestas sólo por el interés público, cuya presencia es la única que deberá legitimar el ejercicio de la potestad del Consejo de Gabinete consignada en el ordinal 4° del artículo 195 de la Constitución Política, cuya presencia deberá ser calificada en cada caso. De allí la necesidad de motivar la decisión, para destacar en forma inequívoca la presencia del interés público determinante de la necesidad de sustraerse del proceso arbitral impuesto por una cláusula contractual. Es evidente, por lo demás, que tal decisión es susceptible de ser revisada en sede contencioso administrativa.
>
> Derivar la imposibilidad de pactar cláusulas compromisorias o dirimir las controversias contractuales mediante el proceso arbitral con fundamento en un compromiso arbitral previamente pactado, utilizando como fundamento para ello unas supuestas facultades discrecionales generales e implícitas, carece de fundamento en nuestro ordenamiento jurídico." (F. 276).

Es en atención a las anteriores consideraciones, que la Corte concluye, que el Auto dictado por el Primer Tribunal Superior no es inconstitucional, pues no se conculcó ninguna norma fundamental al emitirse la orden de nombrar un árbitro para la celebración del arbitraje pactado en el Contrato N° 97 celebrado entre el Consorcio VAN DAM-SOSA & BARBERO y el Estado representado por el Ministerio de Obras Públicas.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el Auto de 1° de febrero de 1996, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Discrepo de la decisión de mayoría, no por razón de que sienta que el acto demandado de inconstitucionalidad (Sentencia del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, de 1° de febrero de 1996, Consorcio Van Dam-Sossa & Barbero Vs. La Nación) viole el artículo 195, ordinal 4° o el artículo 2° de la Constitución Nacional, sino porque es contrario a otras disposiciones constitucionales.

Se sabe que en los procesos de inconstitucionalidad, como el presente, el Pleno viene obligado a examinar la relación del acto señalado como inconstitucional con cualquiera otra norma de la Carta Fundamental.

En este caso se trata del contrato celebrado entre La Nación y el Consorcio Van Dam-Sossa & Barbero, para la construcción de una autopista y un puente sobre el Canal de Panamá (Contrato N° 97 de 2 de octubre de 1980).

Este contrato se califica como contrato civil, calificación de la cual se derivan consecuencias que en mi opinión no se ajustan a derecho, en violación de garantías constitucionales.

Hay que observar, en primer lugar, que la actuación del Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso en el cual dictó la resolución acusada de inconstitucional, relacionada con el contrato aludido, constituye un ejercicio de la jurisdicción civil ordinaria, y se plantea si el caso pertenece a la jurisdicción civil ordinaria o, por el contrario, a la contencioso administrativa.

Tanto el Primer Tribunal Superior de Justicia como la decisión de mayoría de Pleno, adoptan la posición de verse obligados por el criterio de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que en alguna ocasión anterior conoció de otras cuestiones relativas al mismo Contrato, y en la parte motiva de las resoluciones que dictó, consideró que la cuestión correspondía a la jurisdicción civil ordinaria.

¿Debía, en efecto, el Primer Tribunal Superior de Justicia al conocer del proceso en el cual dictó la sentencia de 1° de febrero de 1996, que se acusa de inconstitucional, prescindir del examen, no de su competencia, como equivocadamente se expresa, sino lo que es peor, de su jurisdicción?

El prescindir de ese examen me parece un error en que no sólo incurrió el Primer Tribunal Superior de Justicia, sino también un error en que incurre la decisión de mayoría.

Insisto en que no se trata solamente de un problema de competencia, pues lo que está en juego va más allá, es la falta de jurisdicción. En caso de que el Primer Tribunal Superior de Justicia hubiese considerado la cuestión según su propio criterio, no por mero obedecimiento, y hubiese concluido en que el proceso en que dictó la Sentencia de 1° de febrero de 1996, no era de su jurisdicción, debió rechazar la demanda o plantear un conflicto jurisdiccional en vista de las

expresiones de la Sala Tercera de la Corte Suprema, para que se resolviera cuál era la jurisdicción que debía conocer de los conflictos relativos al Contrato 97 de 2 de octubre de 1980.

En mi opinión, contrariamente a lo que expresó en alguna oportunidad la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, se trata de un contrato de evidente carácter administrativo, ajeno absolutamente al conocimiento de la jurisdicción civil ordinaria, de la cual forma parte el Primer Tribunal Superior de Justicia, que ha dictado una resolución ordenando al juzgador de primera instancia que continúe con los trámites del proceso, a objeto de que la Nación nombre un arbitrador, para dilucidar "diferencias que surjan por razón de EL CONTRATO o con motivo de su ejecución o interpretación".

Este derrotero que señala la Sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia está, por otra parte, sembrado de oscuridad, porque no se logra saber con certeza si ese Tribunal arbitral, que se intenta constituir, extiende sus facultades a la consideración de la validez del Contrato 97 de 2 de octubre de 1980.

Probablemente la confusión que prevalece en cuanto a estos problemas tenga que ver con el hecho de equivocar la jurisdicción a la cual se le asigna el conocimiento del conflicto.

Y el punto es de cuidado, porque en la base del debate está el problema de la validez del contrato. Si el Tribunal arbitral no tiene facultades para decidir sobre la validez del contrato, se estaría sancionando por los tribunales de justicia, el cumplimiento de un contrato antes de decidir sobre su validez.

El Contrato 97 de 2 de octubre de 1980, como se ha expresado, trata de la construcción de un nuevo puente de acero sobre el Canal de Panamá y la autopista Arraiján-Panamá, por una suma de varios millones de balboas, lo cual significa caminos y puentes construidos por el Estado; bienes del dominio público, respecto a los cuales el Estado manifiestamente no actúa como persona de derecho privado.

De este punto se deriva que no le corresponde a la jurisdicción civil conocer de la demanda que dio inicio al proceso en el cual se dictó la sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia de 1° de febrero de 1996, que se acusa de inconstitucionalidad ante el Pleno.

O sea que el acto acusado de inconstitucional, es un acto que adolece del vicio de ser una resolución judicial de distinta jurisdicción, lo que constituye nulidad absoluta del acto e implica el deber de todo tribunal de justicia de señalarla de oficio.

En este caso, en el ámbito de la demanda de inconstitucionalidad de la cual conoce el Pleno, el problema toma la concresión de violación del artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece que nadie será juzgado sino por la autoridad competente (la falta de jurisdicción implica la competencia y es más grave aún).

Me permito citar fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 9 de diciembre de 1958, en el juicio propuesto por la Corporación de Ingeniería, S. A., contra la Caja de Seguro Social, en relación con la construcción de la Policlínica del Seguro Social en Calle 17ª, en la cual se sentó jurisprudencia sobre el punto tratado.

> "... la mencionada institución (Caja de Seguro Social) tiene a su cargo los servicios de seguro social y que éstos son uno de los fines primordiales del Estado panameño, reconocido de manera explícita por el artículo 93 de la Constitución de la República, cuyo primer inciso dice:
>
> "Artículo 93. Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. Los servicios de seguro social serán prestados y administrados por entidades autónomas y

> cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y todas las demás contingencias que afecten la capacidad de trabajar y consumir. La Ley proveerá el establecimiento de tales servicios a medida que las necesidades sociales lo exijan".
>
> Para prestar "tales servicios" se creó la Caja de Seguro Social y ésta, al contratar con la Corporación de Ingeniería, S. A. la construcción de un edificio destinado a Policlínica, no hizo otra cosa distinta de atender a la prestación de esos servicios, cuyo carácter público o social no osará nadie discutir seriamente. De todo lo cual se sigue que estamos en presencia de un pleito surgido alrededor de un contrato administrativo, cuyo conocimiento está atribuido a esta Sala. (Numeral 6 del art. 27 de la ley 47 de 1956)".

En aquella ocasión se dejó establecido que negocios como el que nos ocupa atañen a la jurisdicción contencioso administrativo. Comparto el criterio.

De conformidad opino que se debe decretar la inconstitucionalidad de la Sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia de 1° de febrero de 1996. En consecuencia respetuosamente salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO CANDELARIO SANTANA VÁSQUEZ CONTRA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 242 (REFORMADO) DEL CÓDIGO DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL INTERPUESTO POR ABDIEL SAGEL CONTRA EL BANCO DE LA EXPORTACIÓN, S. A. (BANEXPO). MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Primer Tribunal Superior de Trabajo, mediante resolución de 14 de noviembre de 1996 consulta, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la advertencia de inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 242 del Código de Trabajo, presentada por el licenciado Candelario Santana dentro del proceso laboral promovido por ABDIEL SAGEL contra la sociedad Banco de la Exportación, S. A. (BANEXPO), procedente, en grado de apelación, de la Junta de Conciliación y Decisión N° 15 que dictó la Sentencia apelada PJ-15 N° 58-96 de 17 de septiembre de 1996, declarando la inexistencia de la relación de trabajo.

La demanda fue presentada oportunamente en un proceso y para resolver sobre su admisibilidad debe determinarse si cumple debidamente con los requisitos formales establecidos en la ley para su presentación.

A juicio del Pleno, la advertencia de inconstitucionalidad que nos ocupa no cumple con las formalidades exigidas por el artículo 2551 del Código Judicial, según el cual, además de cumplir con los requisitos comunes a toda demanda, debe contener la transcripción literal de la norma acusada y la indicación de los preceptos constitucionales infringidos y el concepto de la infracción.

En primer lugar, el demandante omite los hechos en que fundamenta la pretensión, incumpliendo con lo estipulado en la norma antes citada, en concordancia con el artículo 654 del Código Judicial. Por otro lado, el escrito contentivo de la demanda no transcribe el texto completo de la norma que se acusa de inconstitucional y no se logra expresar el concepto en que se estiman

infringidas las normas constitucionales con la breve explicación que se hace de cada infracción.

Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Candelario Santana en nombre y representación de ABDIEL SAGEL, dentro del proceso laboral por despido injustificado promovido contra el Banco de la Exportación, S. A., para que se declare que es inconstitucional el párrafo segundo del artículo 242 del Código de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS A. MUÑOZ POPE
(fdo.) ELOY ALFARO (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR EL LIC. RAFAEL RODRÍGUEZ SOBRE EL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO PENAL DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA JOSÉ ANTONIO VALLADARES POR EL DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO EN PERJUICIO DE KATY LOURDES QUINTERO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En el proceso que se le sigue a JOSÉ MATEO VALLADARES, proceso éste que fue concluido en primera instancia mediante sentencia de 15 de enero de 1995, proferida por el Juzgado Décimo de Circuito del ramo penal del Primer Distrito Judicial, el que se encuentra en segunda instancia por haber sido apelada la referida resolución judicial, el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, ha remitido a esta corporación de justicia la advertencia de inconstitucionalidad que el defensor, licenciado RAFAEL A. RODRÍGUEZ ha promovido, por estimar que el artículo 51 del Código Penal, el que, en su apreciación, debe aplicarse al presente proceso, es violatorio del artículo 21 de la Constitución Política.

Debe el Pleno, al analizar la advertencia promovida por el licenciado RAFAEL A. RODRÍGUEZ, determinar si ésta cumple con los requisitos que, para este tipo de procesos constitucionales, señala el Código Judicial.

El Magistrado Ponente solicitó, para que le sirviese de elemento de juicio, el expediente contentivo del proceso dentro del cual se encuentra advertida la norma estimada inconstitucional.

Aprecia el Pleno que la advertencia cumple con los requisitos que, para este tipo de procesos, señala el artículo 2551. En efecto; la advertencia cumple con los requisitos que se exigen para la demanda, señalados por el artículo 654 del Código Judicial y, además, transcripción de la disposición que se estima inconstitucional y el concepto de dicha infracción.

De una lectura del recurso, se aprecia que, lamentablemente, el mismo deviene inadmisible.

Este Pleno, en un número plural de ocasiones, se ha pronunciado sobre la procedencia de la advertencia y de la consulta de inconstitucionalidad.

La advertencia de inconstitucionalidad a través de la consulta, como una de las vías de provocar el control o guarda constitucional, persigue depurar el

sistema jurídico eliminando preceptos legales o reglamentarios que infrinjan el Texto Fundamental, previniendo que tales disposiciones lleguen a cimentar resoluciones jurisdiccionales.

Así, al realizarse la advertencia se pretende evitar la aplicación, al caso concreto, de una norma viciada de inconstitucionalidad, que conculque los derechos de las partes.

Por lo tanto, este tipo de control tiene como finalidad preservar la supremacía de las normas constitucionales.

Ahora bien, esta Superioridad en reiterados fallos ha mantenido que la advertencia de inconstitucionalidad, "al tenor de lo que disponen los artículos 2545 numeral 2 y 2549 del Código Judicial, debe referirse a una norma "aplicable" al proceso que se ventila ante el tribunal correspondiente, o sea, de una disposición que va a ser aplicada al caso, no así a una norma que ya fue objeto de aplicación". (Sentencia de 27 de enero de 1995, Registro Judicial Enero 1995, p. 140).

Además, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, en repetidas ocasiones, que, "la advertencia de inconstitucionalidad se limita única y exclusivamente a impugnar las disposiciones legales o reglamentarias aplicables al caso bajo estudio y que las consultas sobre la supuesta inconstitucionalidad de la norma legal o reglamentaria deben formularse antes de que tal disposición sea aplicable, siendo extemporánea la advertencia en el evento de que la referida norma haya sido objeto de aplicación de parte del juzgador". Al respecto, nos permitimos citar los fallos de 27 de octubre de 1981; fallo de 14 de enero de 1991 inserto en el Registro Judicial Enero 1991, p. 26; fallo de 28 de octubre de 1991 contentivo en el Registro Judicial de Octubre de 1991, p. 134.

Dos, por lo tanto, son los requisitos que requiere la consulta inconstitucional; y que, en ausencia de cualquiera de ellas, resulta improcedente la consulta inconstitucional, a saber:

1° Que se formule contra una norma que ha de aplicarse por el juzgador en el proceso de que se trate, norma ésta, de rango legal o reglamentaria, que se refute inconstitucional por parte del juzgador o del advirtente, y
2° Que la norma cuestionada no haya sido aplicada.

El Pleno advierte que la norma cuya inconstitucionalidad se advierte, ya ha sido aplicada por el Juzgado 10° del Circuito en lo penal del Primer Distrito Judicial, como lo reconoce el propio accionante, al señalar en el hecho 3°, lo que este Pleno se permite transcribir:

> "...
> TERCERO: Que el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, mediante resolución de 15 de enero de 1995 sanciona al señor JOSÉ ANTONIO MATEO VALLADARES a la pena de dos (2) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cobrador.
>
> La pena de prisión la CONVIERTE en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS-MULTA, a razón de siete balboas (B/.7.00) por cada día-multa, debiendo pagar al Tesoro Nacional la suma de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS (B/.2,555.00 en concepto de multa.
> ..."

Para el Pleno es evidente que una resolución que ha sido expedida por tribunal competente cumple su cometido desde el momento en que es expedida por el tribunal, para lo cual se ha aplicado ya la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, sin que la circunstancia de que su eficacia quede diferida por pender recurso de apelación en su contra, pueda desvirtuar el hecho de que la sentencia de primera instancia ya aplicó la norma cuestionada mediante la advertencia.

Lo expresado, naturalmente, no es óbice para que el accionante, si así lo estima oportuno, gestione la inconstitucionalidad de la norma contenida en el

artículo 51 del Código Penal, por medio de una demanda de inconstitucionalidad, del ordinal 1° del artículo 203 de la Constitución Política, y del Capítulo IV del Libro IV del Código Judicial, que reglamenta este tipo de procesos constitucionales, planteada al margen del presente proceso.

Por todo lo expuesto la Corte Suprema Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por el Licenciado RAFAEL RODRÍGUEZ sobre el artículo 51 del Código Penal, dentro del proceso seguido contra José Antonio Mateo Valladares por el delito de uso de documentos falsos en perjuicio de Katy Lourdes Quintero.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
CARLOS E. MUÑOZ POPE Y RAFAEL A. GONZÁLEZ

Creo que la advertencia de inconstitucionalidad no se puede formular en primera instancia porque ya en dicha instancia hubo Sentencia; pero sí se puede formular en segunda instancia.

La disposición legal cuya constitucionalidad se consulta no ha sido aplicada definitivamente. En otras palabras, no ha sido aplicada; pero el artículo 203 de la Constitución prescribe que las partes sólo pueden formular advertencias una vez por instancia; agotada la primera con la sentencia, ya en esa instancia no es posible advertir inconstitucionalidad de la norma, no porque haya sido aplicada, sino porque la instancia transcurrió.

Por estas razones salvo respetuosamente el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. LEOPOLDO CASTILLO G. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR UBALDO ANTONIO BARRIA M. CONTRA EL ARTICULO N° 4 DEL DECRETO DE GABINETE N° 235 DE 30 DE JULIO DE 1969. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

V I S T O S:

El Licenciado LEOPOLDO CASTILLO G. ha interpuesto en nombre y representación del señor **UBALDO ANTONIO BARRIA M.** en su calidad de Alcalde del Distrito de la Chorrera, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo N°4 del Decreto de Gabinete N° 235 de 30 de julio de 1969, por medio del cual se crea el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E).

El demandante estima que la mencionada norma viola el artículo 245 de la Constitución Nacional, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 245. El Estado no podrá conceder exenciones de Derechos, tasas o Impuestos Municipales. Los Municipios sólo podrán hacerlo mediante acuerdo Municipal.".

Por su parte el artículo 4° del Decreto de Gabinete N° 235 de 30 de julio de 1969 reza así:

> "Artículo 4. El Instituto, como Institución del Estado, estará exento del pago de cualquier clase o tipo de impuestos, contribuciones, tasas, gravámenes, o derecho de cualquier índole o denominación, ya sean Nacionales o de cualquier otra clase, a excepción de la Cuota patronal del Seguro Social. Igualmente, gozará de todas las prerrogativas y privilegios de la Nación, concedidos a las demás Instituciones oficiales del Estado.".

Considera el demandante que la violación por parte de este artículo a la norma consagrada en el artículo 245 de la Carta Magna es directa, puesto que exime del pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes o derechos de cualquier clase o denominación ya sean nacionales o de cualquier otra clase al I.R.H.E., cuando la Constitución prohibe al Estado conceder exenciones de derechos, tasas o impuestos municipales. Asevera que la Ley 106 de octubre de 1973, sobre Régimen Municipal establece la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, por tanto es su deber impugnar las disposiciones que, como al artículo 4°, consideren inconstitucionales, y los actos legislativos o administrativos emanados de autoridades nacionales que violen la autonomía municipal. Finalmente solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo impugnado.

Corrido el traslado que establece la Ley al señor Procurador de la Administración, éste emitió su criterio a través de la Vista N° 88 de 17 de febrero de 1993. El Procurador explicó que considera inconstitucional la frase "o de cualquier otra clase" contenida en el artículo 4° del Decreto de Gabinete N° 235 de 30 de julio de 1969, ya que está en contravención con lo que consagra el artículo 245 de la Constitución Política. Afirma el señor Procurador que "es lógico que el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, como entidad del Estado no hace frente a los impuestos nacionales, pero no puede considerar el articulado 4 del Decreto in comento que no deba hacer frente a los 'de cualquier otra clase' o sea cualquier otro tipo de impuestos Municipales lo cual pugna como indicamos antes con lo que consagra la norma constitucional referida, es decir el artículo 245.".

En esta etapa le corresponde al Pleno confrontar la norma atacada con la disposición constitucional señalada por el demandante como infringida y cualquier otra que sea pertinente, a lo que procedemos de inmediato.

El Decreto de Gabinete N° 235 de 30 de julio de 1969 por el cual se crea el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E.) ha sufrido una serie de modificaciones en su articulado, de las cuales la más sustancial lo constituye la recién aprobada Ley N° 6 de 9 de febrero de 1995 (Gaceta Oficial N° 22.724 de 14 de febrero de 1995) por la cual se establece la privatización parcial de dicha institución. No obstante, las modificaciones introducidas por dicha Ley y por otros instrumentos jurídicos no han incidido en el artículo 4° del Decreto de Gabinete 235 de 30 de julio de 1969, objeto del presente negocio constitucional, el cual conserva el mismo texto desde su aprobación.

Como se puede observar, el artículo 4° del Decreto bajo examen establece una exoneración de todo tipo de impuesto a favor del I.R.H.E., incluyendo los Municipales, en razón de su calidad de entidad estatal.

Lo anterior nos lleva a disentir del criterio expresado por el señor Procurador de la Administración, en cuanto a la supuesta inconstitucionalidad del artículo impugnado, ya que éste no contradice en ninguna forma lo establecido en el artículo 245 de la Constitución Nacional, que establece la prohibición para el Estado de exonerar del pago de los impuestos Municipales a persona alguna. Lo que no es posible, es que el Estado decrete la exoneración del pago de los impuestos municipales que ya hayan sido establecidos por Ley, pero nada indica

la Constitución en cuanto al señalamiento de los aspectos que pueden ser objeto de impuestos municipales, previo a su institución por los Municipios.

El anterior criterio ha sido mantenido por esta Corte en diversos fallos, de los cuales se destaca la sentencia de 15 de junio de 1993 bajo la ponencia del Magistrado José Manuel Faúndes, en la cual se declaró que no era inconstitucional el artículo 3 de la Ley 9 de 24 de enero de 1958 que prohibe a los Municipios gravar con impuestos, contribuciones, derechos, rentas, tasas y otros gravámenes las mercaderías y efectos de comercio que se introduzcan, almacenen, transformen o retiren de las áreas de Comercio Internacional (zonas libres o zonitas), o a los establecimientos que se dedican dentro de dichas zonas libres al recibo de almacenaje, transformación o expedición de tales mercaderías. En la parte motiva, el Pleno expresó lo siguiente:

> "Siendo que la potestad tributaria de los Municipios es derivada, esto es, que resulta imprescindible que la ley establezca los rubros que pueden ser gravados mediante Acuerdos Municipales, parece lógico que la ley pueda establecer límites a la potestad tributaria de los Municipios, sin que ello represente una lesión al principio consagrado en el artículo 243 (sic) de la Carta Magna.
>
> Desde este punto de vista, el Estado puede limitar, mediante ley, la potestad tributaria de los Municipios, es decir, que el legislador puede señalar las actividades que no pueden ser gravadas por éstos. Pero lo que no puede hacer el Estado es conceder exoneraciones de impuestos, tasas o contribuciones, debidamente establecidas por un Acuerdo Municipal. Este es el sentir del artículo 243 (sic) de la Constitución Nacional.
>
> En el caso que nos ocupa, el artículo 3 de la Ley 9 de 24 de enero de 1958, no establece una exoneración de impuestos, tasas o contribuciones debidamente establecidas en un Acuerdo Municipal. Lo que hace el citado precepto es limitar la potestad tributaria de los municipios: así como la ley establece qué actividades pueden ser gravadas por los municipios, de la misma manera puede establecer límites a la potestad impositiva de éstos. Y esto último no contradice el artículo 243 (sic) de la Carta Política.
>
> En ese sentido, hay que distinguir entre la facultad tributaria de los Municipios -que como se ha dicho deriva de la ley- y la facultad del Estado de prever exenciones tributarias, que ejerce una vez se ha ejercitado la potestad tributaria. Es esta última facultad -la de prever exenciones tributarias de impuestos, tasas o contribuciones establecidas en un Acuerdo Municipal- la que prohibe el artículo 243 (sic) de la Constitución Nacional.". (el artículo correcto es el 245, aclarado mediante resolución de 20 de septiembre de 1993)

Similar criterio mantuvo el Pleno en fallo de ocho (8) de febrero de 1994, veamos:

> "Por consiguiente, podemos concluir afirmando que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (I.D.A.A.N.), por ser una institución del Estado, la ley la exonera de ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias y por tanto está exenta del pago de impuestos, contribuciones, tasas, gravámenes o derechos de cualquier clase o denominación, incluyendo los impuestos municipales, exención que no infringe el artículo 245 de nuestra Carta Magna, ya que **lo que prohíbe la norma es que el Estado exonere del pago de impuestos, tasas o impuestos municipales establecidos en ejercicio de la potestad tributaria expresamente otorgada por la ley, la cual puede también limitar esta potestad tributaria de los Municipios, como en el caso de la norma acusada** en este proceso constitucional.". (lo resaltado es nuestro).

Como hemos visto, el Estado tiene la facultad de indicar a través de la ley, los rubros que pueden ser objeto de impuestos municipales.

Con la exoneración de impuestos municipales al I.R.H.E., mediante el artículo acusado, no se ha transgredido la integridad del artículo 245 constitucional, puesto que el mismo se refiere a las exoneraciones que el Estado pretenda otorgar cuando los impuestos ya han sido establecidos mediante Acuerdos Municipales; caso en el cual ni siquiera los propios Municipios pueden exonerar a algún particular sino es mediante Acuerdo.

De modo pues, que el artículo 4° del Decreto de Gabinete N° 235 de 0 de julio de 1969 refleja esa facultad que tiene el Estado de limitar la capacidad impositiva de los Municipios, sin interferir en los gravámenes que ya han sido establecidos a favor de ellos por Ley. No reviste, pues, rasgos de inconstitucionalidad y así procede declararlo.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, **PLENO**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL** el artículo 4° del Decreto de Gabinete N° 235 de 30 de julio de 1969.

Notifíquese y publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
SECRETARIA GENERAL ENCARGADA

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR ORLANDO RAMOS CONTRA LA APLICACIÓN DE LA LEY NO. 67 de 1947, DENTRO DEL PROCESO LABORAL INTERPUESTO POR RICARDO WONG CONTRA ISLA MARGARITA DEVELOPMENT, INC. PROCEDENCIA JUZGADO 2o. DE TRABAJO DE LA IRA. SECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El LICDO. ORLANDO RAMOS, manifestando actuar como apoderado judicial de la parte demandada dentro del proceso laboral interpuesto por RICARDO WONG contra ISLA MARGARITA DEVELOPMENT, INC., interpuso ante el Pleno de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Advertencia de Inconstitucionalidad "sobre la aplicación de la Ley No. 67 de 1947 (Código de Trabajo) que el Tribunal está haciendo en el auto No. 138 de 24 de mayo de 1996, toda vez que esta disposición está derogada expresamente por el artículo 1067 del Decreto de Gabinete 1067 del Decreto de Gabinete No. 252 de 1971 (nuevo Código de Trabajo).

Procede en primer término, examinar la advertencia formulada para determinar si es del caso admitirla.

En ese entendimiento y sin entrar en otras consideraciones, se manifiesta que dicha advertencia no cumple con lo dispuesto por el numeral 6to. del artículo 654 del Código Judicial, pues se omite expresar los hechos que sirven de fundamento a la advertencia.

En ese sentido, reiteradamente ha señalado esta Corporación que la advertencia debe revestir la forma de una demanda como así se ha dicho, entre otros, en el fallo de 8 de febrero de 1994, donde se manifestó:

"Jurisprudencia del Pleno de esta Corporación de Justicia ha

> reiterado la necesidad de que el peticionario cumpla con la exigencia que establece el citado artículo 2551 de la excerta procesal, concerniente a "los requisitos comunes a toda demanda". Entre tales requisitos figura la expresión de los hechos, debidamente numerados, los que deberán contener una narración o descripción de la secuencia del proceso jurisdiccional que origina la iniciativa constitucional...". (Registro Judicial. Febrero de 1994. Pág. 50).

De otro modo, tampoco se cumple en esta advertencia con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 2551, del Código Judicial, por cuanto no se ha transcrito la Ley cuya aplicación se objeta, ni se ha citado subsidiariamente el número y la fecha de la Gaceta Oficial en que apareció publicada la misma y por otra parte no cita en esta acción constitucional ni la disposiciones constitucionales que se estiman infringidas, ni el concepto de la infracción, todo lo cual nos lleva a la declaratoria de inamisibilidad de la advertencia formulada.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **NO ADMITE**, la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por el LICDO. ORLANDO RAMOS R., dentro del proceso laboral propuesto por RICARDO WONG contra ISLA MARGARITA DEVELOPMENT, INC.

Notifíquese y Archívese,

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
SECRETARIA GENERAL ENCARGADA

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO E. PALACIOS R. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL DENTRO DEL PROCESO SUMARIO PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD BERASVAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Rolando Enero Palacios Robles presentó Advertencia de inconstitucionalidad de los artículos 1335 numeral 2, 1447 numeral 7 y 1465 del Código Judicial, dentro del proceso sumario promovido por la sociedad BERASVAS, S. A., para la corrección de medidas y linderos de la finca N° 6702 inscrita a folio 198 del tomo 1168 del Registro Público, Provincia de Colón, radicado en el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Civil, de la Provincia de Colón, lo que motivó la consulta de que ahora se conoce.

En primer lugar, corresponde determinar si esta iniciativa constitucional ha sido propuesta de conformidad con lo que establecen los artículos 203, párrafo segundo, de la Constitución Nacional, y 2549 del Código Judicial, y si cumple con las directrices jurisprudenciales que el Pleno de la Corte tiene establecidas en esta materia.

De conformidad con la jurisprudencia prevaleciente de la Corte Suprema, la denominada vía indirecta o incidental de constitucionalidad está reservada para el control de normas legales o reglamentarias que puedan ser aplicadas en la decisión del conflicto jurídico que da lugar a la consulta.

En este orden de ideas, tales normas deben poseer la virtualidad de ser aplicables en la solución de la pretensión procesal de origen. Ello requiere que

las normas jurídicas que se advierten deben ser de aquellas que consagran derechos subjetivos o imponen obligaciones. Esta afirmación parece conforme con el mandato constitucional según el cual el funcionario encargado de impartir justicia "continuará con el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir". Resulta evidente que si el objeto de la consulta recae sobre normas de naturaleza adjetiva, concernientes a la ritualidad procesal o que regulan alguna de las etapas procesales, el efecto inevitable sería entonces la paralización del proceso integralmente, resultando vulnerado así el mandato constitucional que dispone sustanciarlo hasta el momento de dictar sentencia.

Se puede entonces afirmar que no son susceptibles de consulta o advertencia, entre otras, las siguientes categorías de normas:

1° Las de organización de los tribunales;
2° Las que fijan jurisdicción o competencia;
3° Las que establecen términos y traslados;
4° Las que regulan la conducción del proceso;
5° Las de ejecución de sentencias;
6° Normas favorables al reo;
7° Las que no decidan la causa.

Por admitido que la consulta sólo tiene efectos suspensivos sobre el acto procesal que resuelve la causa, quebrantaría la previsión constitucional tendiente a evitar la paralización del proceso reconocerle a los litigantes la potestad de dilatarlo mediante la utilización de esta prerrogativa particular.

No por ello debe entenderse que tales preceptos no son susceptibles de control constitucional, toda vez que su impugnación puede plantearse con el ejercicio de la acción directa o autónoma de constitucionalidad. Sin embargo, podrían ser advertidas y consultadas normas formalmente procesales, siempre que en ellas se reconozcan derechos subjetivos a las partes o a los funcionarios jurisdiccionales, cuyo desconocimiento pudiera implicar infracción del debido proceso. Sabido es que el carácter instrumental de una disposición legal o reglamentaria no viene dado por su ubicación dentro de una normativa procesal concreta, sino por el contenido del precepto.

La lectura de los artículos consultados (1335 núm. 2°, 1447 núm. 7° y 1465 C. J.) demuestra que se trata de **normas que conciernen la ritualidad de procesos no contenciosos**, lo que las excluye del ámbito de procedibilidad reservado a esta iniciativa constitucional.

Por las consideraciones anteriores, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la consulta formulada sobre la constitucionalidad de los artículos 1335 numeral 2, 1447 numeral 7 y 1465 del Código Judicial, dentro del proceso sumario promovido por la sociedad BERASVAS, S. A., radicado en el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Civil, de la Provincia de Colón.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

La resolución sostiene firmemente la teoría de que:

"... no son susceptibles de consulta o advertencia, entre otras las siguientes ...

1° Las de organización de los tribunales;
2° Las que fijan jurisdicción o competencia;
3ª Las que establecen términos y traslados;
4° Las que regulan la conducción del proceso;
5° Las de ejecución de sentencias;
6° Normas favorables al reo;
7° Las que no decidan la causa".

Luego se suaviza la posición cuando se agrega:

"Sin embargo, podrían ser advertidas y consultadas normas formalmente procesales, siempre que en ellas se reconozcan derechos subjetivos a las partes o a los funcionarios jurisdiccionales, cuyo desconocimiento pudiera implicar infracción del debido proceso".

La primera afirmación absoluta y de principio pretende basarse en que el artículo 203 de la Constitución expresa que el negocio en el cual se produce la advertencia "continuará el curso ... hasta colocarlo en estado de decidir".

O sea, se argumenta a contrario sensu, cuestión de simple lógica, (que en cuestiones de derecho no siempre sirve de suficiente sustento), en el sentido de que como no se puede continuar el proceso hasta llevarlo al estado de decidir, no procede la advertencia de inconstitucionalidad.

Creo que la advertencia procura el control constitucional, que también debiera ser viable, según el espíritu de la institución (advertencia y consulta), en los casos que se enumeran como excluidos, en tanto que violen principios fundamentales garantizados por la Constitución.

En tales circunstancias, enunciar una teoría tan rotunda podría resultar una posición de excesiva rigidez.

La cuestión debería resolverse, en mi opinión, caso por caso, y la decisión se basaría más en la consideración de si el problema planteado envuelve cuestiones propias del orden de las garantías constitucionales, que correspondan ser dilucidadas en esa jurisdicción. Cuestión que siempre está presente en estos casos.

Por lo demás, la excepción que establece la segunda transcripción hecha, más que confirmar la regla, la destruye, pues consiste en disposiciones legales "que reconozcan derechos subjetivos a las partes o a los funcionarios judiciales, cuyo desconocimiento pudiera implicar infracción del debido proceso". Ese género de disposiciones no constituye un concepto cuyo contenido esté determinado de modo preciso.

Y, por otro lado, el concepto de "derecho subjetivo de los funcionarios judiciales", no parece reflejar realidad alguna. En general, en la práctica nuevamente se estaría en la circunstancia de decidir caso por caso.

Pasando a considerar las normas advertidas como inconstitucionales, el recurrente menciona el artículo 1465 del Código Judicial, porque excluye ciertos conflictos del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Argumenta que si no son de jurisdicción voluntaria, no hay procedimiento o trámites legales a seguir. En fin, sostiene que esos conflictos no pueden ser tramitados en los tribunales. Estas afirmaciones no son razonables ni serias, cuando por la naturaleza de la organización judicial hay una disposición que establece un tipo de proceso mediante el cual se ventila y decide todo asunto contencioso que no esté sometido a trámites especiales (Art. 1213 del Código Judicial). El planteamiento de quien advierte la inconstitucionalidad es inane. Deja de plantear realmente un problema constitucional.

En cuanto a la inconstitucionalidad del ordinal 2° del artículo 1335 del Código Judicial vis à vis el artículo 1213 ibídem como alternativa para tramitar como juicio ordinario lo que la primera disposición ordena que se tramita como juicio sumario, no es un problema constitucional. No hay normas constitucionales a ese nivel que regulen los procedimientos.

También la referencia al ordinal 7° del artículo 1447 del Código Civil, es ajena al orden constitucional y los planteamientos carecen de seriedad.

Me parece que en las circunstancias apuntadas, en efecto, no se debe admitir la advertencia y se debe multar al abogado conforme lo establecen los artículos 462 y 199, ordinal 15 del Código Judicial.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

RECONSIDERACIÓN DE SANCIÓN IMPUESTA DENTRO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PROPUESTA A FAVOR DE JAIME RAÚL GONZÁLEZ DELGADO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante resolución expedida el 24 de octubre del presente año, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió la acción de Habeas Corpus promovida por vía telefax, por el licenciado Cristóbal Garrido Romero, a favor de **JAIME RAÚL GONZÁLEZ DELGADO**, procesado por los delitos de homicidio y robo en perjuicio de **ROSAURA CAMPOS** y **JOSÉ DE LA CRUZ OJO**. En dicha resolución se declaró legal la detención de González Delgado y se le impuso al licenciado CRISTÓBAL GARRIDO ROMERO multa por la suma de quinientos balboas (B/.500.00) por utilizar una medida dilatoria en perjuicio del procesado privado de libertad.

Contra esa decisión, el licenciado Garrido Romero presentó ante la Secretaría del Juzgado Segundo de Circuito de Chitré el día 12 de noviembre, un escrito contentivo de un recurso de reconsideración en cuanto a la multa que se le impuso, escrito que fue recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el 13 de noviembre de 1996.

Si bien es cierto que la decisión del Pleno de sancionar al abogado Garrido Romero por infracción del artículo 462 del Código Judicial, se da dentro de un proceso de Habeas Corpus, cuyos términos de impugnación son muy cortos (horas) al incluir en la sentencia la sanción al accionante, cabe darle curso a la reconsideración presentada.

En el escrito de seis páginas, el recurrente arguye como puntos relevantes, los siguientes:

1. Que la sanción impuesta no está contemplada en la ley.

2. Ha sido condenado sin ser oído, por lo que se ha violado el debido proceso.

3. El artículo 462 del Código Judicial se refiere a las partes y él no es apoderado de Jaime Raúl González Garrido, por cuanto su defensor en el proceso penal lo es el licenciado José Luis Varela.

4. Al tenor del artículo 628 del Código Judicial, no es responsable de las consecuencias del proceso, porque los apoderados no son partes procesales.

5. La pena impuesta ha sido inventada por el Pleno, porque no tiene sustento en norma legal alguna.

6. Presentó el Habeas Corpus "pendiente de la posibilidad de poder hacerme cargo de la defensa penal, faltando un día para la celebración de la audiencia, para que me permitiera estudiar el expediente y planificar una estrategia que me permitiera enfrentarme al sistema procesal penal establecido" (fs. 19).

7. Durante 28 años ha ejercido la profesión de abogado en forma intachable y los últimos diez años ha sido Juez suplente y ha trabajado con empeño para resolver casos estancados.

En primer término, es lamentable que un abogado en ejercicio desconozca las reformas legales introducidas al Código Judicial; en el presente caso, nos referimos al artículo 20 de la Ley 19 de 1991, publicada en la Gaceta Oficial N° 21832 de 18 de julio de 1991, mediante la cual se adiciona el numeral 15 del artículo 199, al establecer entre los deberes, responsabilidades y facultades de los Jueces y magistrados "Sancionar con multa de cien (B/.100.00) a mil (B/.1.000.00) balboas a los apoderados judiciales que incurran en las faltas indicadas en el artículo 462 del Código Judicial".

Por otra parte, cualquier ciudadano, abogado o no, sabe que el Habeas Corpus es una institución de garantía en tutela de la libertad individual en aquellos casos en que se detiene a una persona "fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la Ley" (artículos 2565 y 2566 del Código Judicial), no es la vía procesal idónea para posponer una audiencia, menos aún cuando la designación de un nuevo defensor justifica el otorgamiento de un término para estudiar el expediente y preparar la defensa.

El capítulo III del Título I del Libro III del Código Judicial le asigna la categoría de sujeto procesal al defensor, al igual que al denunciante, al querellante y al acusador. Si bien es cierto que el sancionado no es el defensor de Jaime Raúl González Delgado, presentó la acción de Habeas Corpus a sabiendas de que el Tribunal Superior había fijado la audiencia para el día siguiente y como argumento en la reconsideración sostiene que tenía la posibilidad de actuar como defensor por razón de los quebrantos de salud del licenciado Varela y a través del Habeas Corpus quería obtener tiempo para preparar la defensa.

Como se anotó en la resolución recurrida, el Habeas Corpus fue usado como un mecanismo dilatorio, en un proceso donde se dan las siguientes particularidades: los delitos imputados son los de homicidio y robo, que por su propia naturaleza, ni siquiera tienen derecho a fianza de excarcelación; el auto encausatorio fue apelado y ratificado por la Sala Segunda de la Corte; la fecha de audiencia fijada por el Tribunal ya había sido pospuesta anteriormente a solicitud de la defensa; la acción de habeas Corpus fue presentada con la única finalidad de posponer una segunda fecha de audiencia; la persona a favor de quien se puso el Habeas Corpus se encuentra detenida por un lapso superior a dos años.

El Pleno reconoce que el abogado Garrido Romero es un abogado con larga experiencia, que incluso forma parte del sistema de administración de justicia en su doble carácter: de Juez Suplente por diez años y de abogado litigante por 28 años y por tanto, un colaborador del sistema de justicia.

Esa larga experiencia y el conocimiento de la ley, lejos de debilitar o disminuir la reprochabilidad de su conducta, lo incrimina con mayor fuerza, pues se trata de un comportamiento deliberado, para dilatar un proceso, a través de una acción que protege la libertad de las personas siempre que su detención se haya producido en violación de la Constitución y la ley. Cabe recordar que el señor González Delgado es un procesado sobre quien pende un auto encausatorio firme, confirmado en segunda instancia y lo cual era de pleno conocimiento del letrado.

El Pleno no ha inventado una sanción como dice el recurrente, simplemente ha hecho uso de la facultad legal que le confiere el numeral 15 del artículo 199 del Código Judicial, ya que no estamos ante una acción de Habeas Corpus en tutela de la libertad de una persona ilegalmente detenida, sino del uso de esta garantía para posponer una audiencia, desnaturalizando así la finalidad del Habeas Corpus, pues esta posposición mantiene y prolonga la privación de libertad del supuesto favorecido con la acción, circunstancia que era de pleno conocimiento del

accionante, quien contaba con otros medios procesales para lograr la posposición de una audiencia con la finalidad de estudiar el expediente, sin involucrar una supuesta defensa de la libertad de un procesado.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, MANTIENE la sanción impuesta al licenciado CRISTÓBAL GARRIDO ROMERO en la sentencia de 24 de octubre de 1996.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ EN LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR OAMYRA GARCÍA DE BERBEY DENTRO DEL SUMARIO SEGUIDO A EDUARDO HARMODIO BERBEY MELGAR SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA EN PERJUICIO DE AIDELENA PEREIRA. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS::

La Magistrada AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ ha hecho manifestación de impedimento para conocer el presente negocio en los siguientes términos:

> "Aunque no me encuentro vinculada a la advertidora al tenor de las causales de impedimento previsto en el Artículo 2619 del Código Judicial, debe señalar que ella funge como acusadora en una denuncia presentada contra mi persona y otros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión de Credenciales y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.
>
> Dada la transparencia e imparcialidad que debe caracterizar todas y cada una de nuestras actuaciones en esta Corporación Judicial, ruego a los colegas del Pleno, me separen del conocimiento de esta acción constitucional".

Se comprende el afán de transparencia e imparcialidad que invoca la Magistrada, pero no son suficientes para separarla del conocimiento de la causa dada que atribuirle alguna consideración procesal a los que son tan alegres en denunciar Magistrados sería tanto como abrirles las puertas a los litigantes para que propicien impedimentos cuando sospechen que determinados Magistrados no comparten sus ideas.

Por lo expuesto la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, Declara no Probado el impedimento manifestado por la Honorable Magistrada AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ y se le Mantiene en el conocimiento del caso.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELOY ALFARO
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO A. COLLADO T., DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALCIDES ZAMBRANO G., EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR AMBROSIO FIGUEROA NÚÑEZ, CONTRA EL FISCAL DE CIRCUITO DE LOS SANTOS, LICENCIADO HUMBERTO A. COLLADO CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado **HUMBERTO A. COLLADO TAPIA**, manifestó impedimento para conocer de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, interpuesta por el licenciado Alcides Zambrano G., en representación del señor **AMBROSIO FIGUEROA NÚÑEZ**, contra el Fiscal de Circuito de Los Santos, licenciado **HUMBERTO A. COLLADO CASTILLO.**

La manifestación de impedimento mencionada se expone en los siguientes términos:

> "En el presente amparo, interpuesto contra el Fiscal del Circuito de Los Santos, me encuentro dentro del primer grado de consanguinidad con el funcionario acusado, motivo por el cual y conforme con el artículo 2619 del Código Judicial, solicito que se me declare impedido para el conocimiento del mismo".

El Pleno estima que procede la manifestación de impedimento formula por el Honorable Magistrado **HUMBERTO A. COLLADO TAPIA**, pues la misma se enmarca dentro del artículo 2619 del Código Judicial, con lo que justifica su solicitud y que da lugar para separarlo del conocimiento de este negocio.

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado HUMBERTO A. COLLADO TAPIA.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, DENTRO DE LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PATRINA GUARNIERI CONTRA LOS ARTÍCULOS 788 Y 793 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER en su calidad de Procuradora de la Administración, ha solicitado se le declare impedida para conocer de la advertencia de inconstitucionalidad promovida por PATRINA GUARNIERI contra los artículos 788 y 793 del Código de la Familia.

La Señora Procuradora ha invocado el artículo 2562 del Código Judicial como

se cita a continuación:

> "Esta solicitud de impedimento se encuentra fundamentada en el numeral 2 del artículo 2562 del Código Judicial, que literalmente, expresa:
>
> ARTÍCULO: 2562. Son causales de impedimentos:
> ...
> 2. Haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición; ... (El subrayado es nuestro)".

El solicitante sustenta su petición aduciendo de manera concreta lo siguiente:

> "Es un hecho notorio y público, que desde la década pasada se conformó una Comisión codificadora del Proyecto de Código de la Familia y del Menor", cuyos resultados se plasmaron en la Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994, "Por la cual se aprueba el Código de Familia".
>
> Es así que quien suscribe, formó parte de la Comisión Codificadora, la cual fue creada por Decreto Ejecutivo N° 5 de 20 de enero de 1983, motivo por el cual solicitamos a esa Honorable Corte se declare legal el impedimento invocado, y se nos separe del conocimiento de este proceso en el cual se ventila la constitucionalidad de los artículos 788 y 793 del Código de la Familia en relación con el proceso de Maltrato de una Menor que se lleva cabo en el Juzgado Primero Seccional de Menores".

En casos similares de solicitudes de impedimento la Corte ha admitido como legal la causal invocada y ha separado del conocimiento al funcionario que solicita se le declare impedido. Considera el Pleno de la Corte, que una revisión del mencionado criterio pone de manifiesto que se requiere variar la posición asumida anteriormente, por las siguientes razones.

El hecho de que la Procuradora de la Administración formara parte de la Comisión Codificadora del Código de la Familia, no significa que haya intervenido en la expedición de dicho Código. Este se consuma con la aprobación de la ley por parte de la Asamblea Legislativa. Lo actuado por un miembro de la Comisión, que no es Legislador, es meramente auxiliar, de carácter intelectual, pues es evidente que los Legisladores pueden modificar cualquier concepto de una Comisión Calificadora y añadir y cambiar todo lo que consideren conveniente, por lo que en última instancia son los Legisladores los que determinan el contenido final de un Código o una ley.

La expresión "intervenir en su preparación ..." contenida en el artículo 2562 del Código Judicial no alcanza la colaboración que un particular o un juez o funcionario de instrucción haya prestado en la preparación o discusión de un Proyecto de Ley.

Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por la Señora Procuradora de la Administración licenciada ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER y DISPONE que emita su concepto en la presente advertencia de inconstitucionalidad.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR AURA IRIS AGUDO SOLÍS, LIZ MARY CASTRELLÓN BRIMINGHAM Y TERESA ORTIZ GUEVARA, CONTRA LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS SUCRE. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado EDGARDO MOLINO MOLA ha presentado solicitud para que se le declare impedido y en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por **LIZ CASTRELLÓN, TERESA ORTIZ GUEVARA Y AURA AGUDO SOLÍS**, mediante apoderado legal, contra diversas resoluciones emitidas por la Junta de Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y otras autoridades de la Universidad, por medio de las cuales se les separó de dicha Facultad.

El Magistrado EDGARDO MOLINO MOLA fungió como Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá hasta el 3 de enero de 1990, varios de los actos demandados, como lo son la Resolución N° 10, 11 y 12, fueron firmados por su persona, lo que le imposibilita conocer del presente negocio, de acuerdo al artículo 2562 N° 2 del Código Judicial, que en su parte pertinente dice:

"Artículo 2562. Son causales de impedimentos:
...
2. Haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición; y,
...

En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado EDGARDO MOLINO MOLA, por lo que se le SEPARA del conocimiento del presente caso y ordena llamar a su suplente personal, Dr. Juan A. Tejada Mora, Magistrado Sustanciador del Impedimento.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS SUCRE

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

DICIEMBRE 1996

ACLARACIÓN DE SENTENCIA

MARÍA DE LOS SANTOS FUENTES DE VEGA, FÉLIX AMABLE PONCE Y COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA QUE AQUELLA LE SIGUE A ESTOS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante sentencia fechada 18 de noviembre de 1996, esta Sala de la Corte **NO ADMITIÓ** los **Recursos de Casación** interpuestos por **MARÍA DE LOS SANTOS FUENTES DE VEGA** y por **FÉLIX AMABLE PONCE Y COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A.** contra la resolución de 29 de enero de 1996 dictada por el Primer Tribunal Superior dentro del proceso ordinario que aquella le sigue a éstos últimos.

En virtud de la decisión adoptada, de no admitir el medio de impugnación propuesto por ambas partes, esta Corporación condenó a la demandante y a los demandados al pago de costas (CIEN BALBOAS a cada uno), sin observar la circunstancia de que a la demandante se le concedió "AMPARO DE POBREZA" en resolución que obra de foja 3 a 5 del expediente, por el Juez de la causa.

Así, debido a que entre los derechos y privilegios previstos por la ley vigente en el momento en que se le concedió el amparo de pobre a MARÍA DE LOS SANTOS FUENTES DE VEGA, se encuentra el de no estar obligado a pagar ningún tipo de costas (artículo 1919 del anterior Código Judicial), la Corte procede a modificar de oficio la sentencia que dictó, en cuanto a las costas, tal como lo permite el artículo 986 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la parte resolutiva de la sentencia de 18 de noviembre de 1996 dictada por ésta Corporación, en cuanto a la condena en costas, la cual quedará así:

> "Debido al análisis expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE los recursos de casación interpuestos por MARÍA DE LOS SANTOS FUENTES DE VEGA y por FÉLIX AMABLE PONCE y COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. en el proceso ordinario de mayor cuantía que Aquella le sigue a Estos.
>
> Las costas de casación se fijan en la suma de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00), solamente a cargo de los demandados-recurrentes, FÉLIX AMABLE PONCE y COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A.
>
> Notifíquese."

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIONES

APELACIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL CASTILLO SANJUR CONTRA EL AUTO DEL 14 DE JUNIO DE 1996 DICTADO POR EL REGISTRO PÚBLICO, RELACIONADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA N° 3176 DE 10 DE ABRIL DE 1996, INGRESADA AL REGISTRO PÚBLICO BAJO EL ASIENTO 9511 DEL TOMO 245 DEL DIARIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante procurador judicial, ABRAHAM DAVID MIZRACHI ha promovido ante esta Sala, recurso de apelación contra la decisión del Registrador de la Propiedad de no inscribir actos procesales de transmisión y documentación, decisión contenida en el auto de 14 de junio de 1996. Cumplidas las etapas procedimentales que corresponden a este tipo de asuntos judiciales, la Sala se aboca a decidir el recurso de apelación interpuesto y sustentado contra el acto jurisdiccional del Registrador de la Propiedad.

La Escritura Pública cuya inscripción se negó, en efecto, constituía un instrumento público en virtud del cual se protocolizaron el oficio N° 2947 de 28 de diciembre de 1996, el Auto N° 1964, de 26 de diciembre de 1995, adjunto al oficio en mención, el Oficio N° 339, de 5 de febrero de 1996, y el auto N° 258, de cinco de febrero de 1995, adjunto a este segundo oficio, protocolización que ocurrió en la Escritura Pública N° 3176, de 10 de abril de 1996, otorgada ante la Notaría 11ª del Circuito Notarial de Panamá, la que puede ser consultada a foja 2 del expediente. Dicha Escritura Pública fue presentada al Registro Público para su inscripción por ABRAHAM DAVID MIZRACHI, el día 11 de abril de 1996, como consta en la foja 4, vuelta, del expediente, y dicha inscripción ha sido negada por el Registrador. Dicho funcionario fundamentó la negativa de inscripción en que el medio utilizado para la inscripción provisional de la medida cautelar decretada no era el idóneo para la realización de la inscripción provisional, a que se refiere el numeral 4° del artículo 1778 del Código Civil.

Esta Sala considera acertada la decisión del Registrador de la Propiedad, toda vez que las medidas cautelares decretadas por la autoridad jurisdiccional y que debe ser cumplida por otra autoridad son llevadas a cabo previa la comunicación del acto procesal que comunica la medida, y que debe ser presentada con el oficio suscrito por el juez que decretó la medida cautelar, adjuntando, además, el auto que decreta dicha medida cautelar, lo que evidentemente no ocurrió en el caso que motiva el recurso de apelación.

Cabe destacar, por otro lado, que el día 11 de abril de 1996, fecha en que se otorgó la Escritura Pública protocolizando los actos procesales ya mencionados y contenidos en la misma, la medida cautelar que los contenía había sido levantada mediante Auto N° 726, de 11 de abril de 1996, acto procesal que fue comunicado al Registrador de la Propiedad mediante oficio N° 930, de 11 de abril de 1996, es decir, el mismo día en que el secuestro originalmente decretado por el Juzgado Cuarto del Circuito en lo Civil había dejado efecto. No resultaba, por lo tanto, admisible que la medida cautelar se inscribiese, cuando la misma había sido dejado sin efecto, y esto le constaba al Registrador, por cuanto mediante comunicación de 20 de mayo de 1996, el Registrador de la Propiedad comunicó al tribunal que decretó la medida sobre su cumplimiento.

No obstante, es evidente que cuando se dictó el acto procesal negando la inscripción, que es de 14 de junio de 1996, ya el Registrador de la Propiedad había dejado sin efecto los actos procesales que se pretendía inscribir por tan singular medio. Debió, por tanto, rechazar la inscripción, como lo hizo, con el correcto fundamento en que se basó.

La Sala no puede dejar de señalar el comportamiento procesal del apoderado del apelante, consistente en utilizar un medio absolutamente impropio para poner en conocimiento del Registrador actos procesales dictados por una autoridad jurisdiccional y, no contento con ello, proceder, en fecha muy posterior, a promover recurso de reconsideración el día 28 de junio de 1996 y, aún, el recurso de apelación, el día 29 de agosto de 1996, que debió el Registrador rechazar de plano, por cuanto el objeto de la inscripción carecía de objeto, produciéndose con ello sustracción de materia. Este comportamiento abiertamente desleal es incrementado por la instauración de una advertencia de inconstitucionalidad, que fue rechazada de plano por esta Sala, lo que motivó que el recurrente procediese, sin el menor fundamento legal, a recusar a la totalidad de los Magistrados que le integran, recusación ésta que, como no podía ser de otra manera, fue rechazada por los Magistrados de la Sala Penal, a quienes les correspondió el conocimiento

de la recusación. Estas circunstancias constituyen una muestra palpable y notoria de deslealtad procesal, que no puede ser pasada por alto por esta Sala, y ser objeto de una sanción ejemplar, con fundamento en el artículo 199, ordinal 15°, en relación con el artículo 462, ambos del Código Judicial.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión del Registrador, y se IMPONE UNA MULTA al apoderado judicial del recurrente por la suma de MIL BALBOAS (B/.1.000.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO

SEABOARD MARINE LTD. Y SEA CARGO, S. A. APELA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 1996 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SEABOARD MARINE LTD. Y SEA CARGO, S. A. A CÍA. NACIONAL DE SEGUROS, S. A. AHORA ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. (POR FUSIÓN). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A.FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el proceso marítimo ordinario promovido por la COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A., ahora denominada ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. por fusión, contra SEABOARD MARINE LTD. y SEA CARGO, S. A., solidariamente, la parte demandante, por conducto del licenciado GUSTAVO ADRIÁN SANSÓN TONG, apoderado sustituto de dicha parte demandante (véase fojas 143 y 160) ha promovido incidente para la modificación de las costas fijadas en la sentencia oral proferida el día 15 de marzo de 1996 en la suma de DOS MIL BALBOAS (B/.2.000.00). El recurrente funda su disconformidad en que, a pesar de haber actuado de buena fe durante todo el proceso, el tribunal lo condenó en costas, a razón del VEINTE POR CIENTO (20%) de la cuantía de la demanda, argumentando, por una parte, que las costas a las que se refiere el artículo 431 del Código Procesal Marítimo se refiere sólo al numeral 1 y, además, que el comportamiento procesal de buena fe ameritaba una decisión sobre costas contraria a la que adoptó el Tribunal Marítimo en la mencionada resolución judicial.

Como quiera que en el expediente no figuraba la transcripción de la parte resolutiva de la sentencia, el Magistrado Sustanciador requirió al Tribunal Marítimo la transcripción de la aludida porción de la sentencia, lo que cumplió el tribunal de la causa, mediante oficio número 378, de 21 de noviembre de 1995.

El Tribunal Marítimo decidió la petición de revisión de costas mediante resolución de 28 de marzo de 1996, accediendo a la solicitud de la demandante y redujo, en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) las costas en referencia, contra cuya decisión apeló la parte contraria, demandada en la causa marítima ordinaria. Surtido el trámite procesal en referencia, se debe avocar la Sala a decidir la alzada, para lo que es competente por tratarse de una resolución apelable (artículo 482, numeral 10, Ley 8 de 1982).

Como es sabido, el sistema de costas judiciales se inspira, en nuestro ordenamiento procesal marítimo, lo mismo que en el ordenamiento procesal civil, en un sistema mixto, es decir, señala la regla general del principio del vencimiento en punto a la fijación de costas, pero permite que el tribunal libere a la parte condenada de ellas, lo que se traduce en que las mismas han de ser cubiertas conforme se hayan causado, cuando ha mediado comportamiento procesal

de buena fe. Esta Sala ha conceptuado que el sistema, para la fijación de las costas, puede ser variado por el Juez, si se desprende la existencia de buena fe de las partes, sobre lo que debe pronunciarse, entendiendo la Sala que si la resolución del tribunal se pronuncia sobre costas, puede decidir que, éstas se entienden que son cubiertas por las partes según se hayan causado, sin que sea necesario un pronunciamiento expreso sobre la conducta procesal para introducir un tratamiento que constituye una excepción al principio del vencimiento para la fijación de las costas. El pronunciamiento del tribunal, al fallar la causa, puede reflejar que el mismo ha tomado en cuenta el principio general del vencimiento o, excepcionalmente, pronunciarse sobre costas según se hayan causado en cuyo caso se ha de estimar que el tribunal, al resolver la causa, tomó en cuenta la conducta procesal de las partes.

No obstante lo expresado, es evidente que esto es materia que, por una parte, corresponde al criterio soberano del juzgador primario, pero, por la otra, éste ha de ajustarse a las limitaciones que la imposición de costas le impone el ordenamiento jurídico-procesal. Este establece con toda claridad que el juzgador bien puede, al momento de fijar las costas, reducir las mismas si se han tomado en cuenta con base en la tarifa que aprueben los organismos profesionales de abogados, pero esta reducción no puede trascender el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto de las costas. Aprecia la Sala que el Tribunal Marítimo, al atender la revisión que, sobre costas, planteó la parte actora, las redujo en un CINCUENTA POR CIENTO (50%), es decir, del VEINTE POR CIENTO (20%) de la cuantía, al DIEZ POR CIENTO (10%) de ella. Y esta decisión jurisdiccional colisiona, de manera frontal, con el artículo el artículo 437 de la Ley 8ª de 1982 (Código de Procedimiento Marítimo), y sus reformas, que dispone sobre el particular:

> "ARTÍCULO 437: Cuando un Colegio de Abogados o Asociación Forense hayan establecido tarifas para gestiones ante los tribunales marítimos, el Tribunal tomará dicha tarifa como base para la tasación de las costas de que trata el ordinal 1° del artículo 430, y sólo podrá el Tribunal alterar dicha tarifa en el cuarenta por ciento al verificar la tasación, según la cuantía del juicio, la naturaleza y complejidad del trabajo realizado y cualquier otra circunstancia especial".

Sobre la base de que el Tribunal Marítimo debe proceder de conformidad con la tarifa del Colegio Nacional de Abogados aprobada por la Corte Suprema de Justicia mediante Acuerdo N° 3 de 18 de mayo de 1988, la Sala de Negocios Generales, publicada en la Gaceta Oficial N° 20.980, de 2 de febrero de 1988, en el título "Asuntos de Derecho Procesal (Civil-Comercial), ordinal 2ª, "Procesos Ordinarios", literal (b), la liquidación de las costas serán:

B/.5.000.00 - 25% ... B/.1,250.00
6,628.16 - 20% ... 1,325.63
Total ... B/.2,575.63

De esta suma, de acuerdo con el artículo 437 del Código de Procedimiento Marítimo, es deducible sólo el CUARENTA POR CIENTO (40%) o sea, la suma de MIL TREINTA BALBOAS CON VEINTICUATRO CENTÉSIMOS (B/.1,030.24), quedando establecida las costas en la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON TREINTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.1,545.39).

Se toma en cuenta que dentro de sus facultades el Juez Marítimo expresó su voluntad de reducir las costas, por tanto sólo se modifica lo resuelto y recurrido para que se mantenga la reducción en el marco de lo permitido por la Ley.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA EN TODAS SUS PARTES la resolución del 28 de marzo de 1996, proferida por el Tribunal Marítimo en el proceso marítimo ordinario promovido por COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A., ahora, por fusión, ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A., contra SEABOARD MARINE LTD. Y SEA CARGO, S. A., LITISCONSORTES PASIVOS; y FIJA las costas en la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON TREINTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.1,545.39).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE FINACAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el proceso ordinario que **FINACAL, S. A.** le sigue a **INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A.**, esta Sala de la Corte declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la firma ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA actuando en representación de la parte demandada y como demandante en reconvención.

Encontrándose el negocio pendiente para que alegaran las partes en cuanto al fondo, los apoderados de ambos litigantes solicitaron la suspensión del proceso por el término de quince días, a lo que accedió el Magistrado Sustanciador.

Posteriormente, las firmas forenses ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA en su condición de apoderados especiales de RAFAEL COHEN HENRÍQUEZ y de la sociedad INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. (denominados cuando actúan conjuntamente EL GRUPO EUGANA) y, la firma de abogados GALINDO ARIAS & LÓPEZ como apoderados especiales de MARIO GUARDIA JAÉN y de las sociedades MINERAL BÁSICO, S. A., CALX INDUSTRIAL, INC. y FINACAL, S. A. (todos denominados EL GRUPO FINACAL), presentaron a la Secretaría de esta Sala de la Corte memorial contentivo de un **"CONVENIO DE TRANSACCIÓN Y DESISTIMIENTOS CONDICIONALES"**, con la intención de resolver de mutuo acuerdo todos sus conflictos, litigios y diferencias en los procesos que a continuación se enuncian:

"CONSIDERANDO

A. Que INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. sigue proceso ordinario contra MARIO GUARDIA JAÉN, del cual conoció en primera instancia el Juez Tercero del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, por medio del cual, entre otras cosas, se demanda la resolución del contrato de permuta de acciones suscrito por ambos con fecha 19 de octubre de 1983 y que, como consecuencia de dicha resolución, se condene al demandado a devolverle unos certificados de acciones de MINERAL BÁSICO, S. A. y CALX INDUSTRIAL, INC. o, en su defecto, que se condene a pagar al actor la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.750,000.00) más daños y perjuicios ocasionados por el actor en DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.250.000.00) intereses, costas y gastos del proceso, del cual conoce actualmente la Sala Primera Civil, de la Corte Suprema de Justicia por virtud de recurso de casación interpuesto por la representación de MARIO GUARDIA JAÉN.

B. Que, por su parte, FINACAL, S. A. siguió proceso ordinario contra INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. del cual conoció en primera instancia el Juzgado Sexto del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, por medio del cual, entre otras cosas, pidió que se condenara al demandado a traspasar a FINACAL, S. A. las acciones representadas en los certificados de acciones números 16, 17 y 19 emitidos AL PORTADOR POR MINERAL BÁSICO, S. A., o en su defecto a

pagar CIENTO CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.150.000.00) por el importe de su valor, así como a reembolsar la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BALBOAS (B/.125, 759.00) en concepto de gastos de saneamiento de las fincas números 5459 y 6051 de la Provincia de Panamá. Por su parte INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. presentó demanda de reconvención en el mismo proceso, en el que pide se declare a FINACAL, S. A. como responsable solidaria de las obligaciones contraídas por MARIO GUARDIA JAÉN en el Contrato de Permuta del 19 de octubre de 1983. Por sentencia de 7 de mayo de 1996, el Primer Tribunal Superior de Justicia decidió en segunda instancia negar las pretensiones tanto del actor FINACAL, S. A. como de la reconvencionista INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentra actualmente el proceso.

C. Que, RAFAEL COHEN HENRÍQUEZ sigue contra CALX INDUSTRIAL, INC., y MINERAL BÁSICO, S. A. proceso ordinario ante el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, por la suma de OCHENTA Y DOS MIL BALBOAS (B/.82,000.00), más intereses, costas y gastos, por concepto de prestación por servicios profesionales, más intereses, costas y gastos." (F. 1339, 1340).

Las cláusulas en que se fundamenta el convenio de transacción que celebran el grupo EUGANA y el grupo FINACAL son las siguientes:

"CLÁUSULAS

PRIMERA: Convienen tanto EL GRUPO FINACAL como EL GRUPO EUGANA en que, para terminar todos los litigios a los que se ha hecho mención en los Considerandos de este documento, FINACAL le hace entrega en este acto a INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. a través de sus apoderados judiciales, la firma forense ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, del cheque de gerencia N-01141 girado por el Banco Comercial de Panamá (Bancomer) el día 20 de noviembre de 1996, por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.392,500.00).

SEGUNDA: Por su parte, ARIAS FÁBREGA & FÁBREGA le expide y entrega en este acto a FINACAL, S. A. por razón de la entrega que se ha hecho del cheque indicado en la cláusula anterior, un recibo con firmas reconocidas o puestas ante notario, cuyo texto es el siguiente:

"ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, actuando como apoderada especial de INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. en la demanda ordinaria interpuesta por ella en contra de MARIO GUARDIA JAÉN y también en la demanda ordinaria que contra ella interpuso FINACAL, S. A. demanda ésta en la que se presentó una demanda de reconvención, por este medio hace constar que ha recibido de FINACAL, la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.392,500.00), como pago único, total y final por razón del convenio de Transacción y Desistimientos Condicionales celebrados el día 21 de noviembre de 1996 (en adelante EL CONVENIO)".

"Por razón del recibo de pago y su presentación, se cumple la condición prevista en EL CONVENIO y, en consecuencia, se entiende que INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. desiste y ha desistido de la pretensión ejercitada en contra de MARIO GUARDIA JAÉN y FINACAL, ejercitada y, en consecuencia, retira la demanda en contra de CALX INDUSTRIAL, INC. y MINERAL BÁSICO, S. A. lo cual ha hecho constar a través de su apoderado judicial en ese proceso; y que FINACAL, S. A. e INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. desisten y han desistido asimismo de sus respectivas pretensiones."

"Para constancia se firma este recibo en cinco (5) ejemplares de igual tenor y efecto, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996)."

"Arias, Fábrega & Fábrega"

TERCERA: Por razón del pago a INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. de parte de FINACAL, S. A. de la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.392,500.00), INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. le cede y traspasa, por este medio, a FINACAL, S. A. todos los derechos dimanantes del denominado "Contrato de Permuta de Acciones" celebrado entre INSTITUTO DE INVERSIONES, S. A. y MARIO GUARDIA JAÉN el día 19 de octubre de 1983, contrato éste que dio origen a los pleitos mencionados en los Considerandos de este documento. En consecuencia FINACAL, S. A. quedará como la dueña y poseedora de los certificados de acciones que las sociedades CALX INDUSTRIAL, INC. Y MINERAL BÁSICO, S. A. le emitieron a INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. que ésta entregó a MARIO GUARDIA JAÉN por razón del Contrato de Permuta de Acciones (certificados descritos en el Contrato) al tiempo que FINACAL, S. A. quedará relevada de la obligación de expedir acciones de su capital a nombre de INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. y si las hubiere emitido, quedará como dueña y poseedora de tales certificados de acciones, tan pronto como se haya expedido el recibo de pago a que se refiere la cláusula segunda de este documento. INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A., sin embargo, no se obliga a sanear ni responde de la legitimidad de los créditos, bienes y derechos cedidos.

CUARTA: Declara ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA que está autorizada, de manera irrevocable, por INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. para recibir la suma indicada en las Cláusulas PRIMERA Y SEGUNDA de este documento, la cual suma transferirá ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA inmediatamente a INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. o a quien ésta designe.

QUINTA: Tan pronto INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. reciba el cheque indicado en las cláusulas primera y segunda, los apoderados judiciales del GRUPO FINACAL presentarán ante los respectivos tribunales, el correspondiente comprobante de pago, entendiéndose que a partir de la presentación del recibo, INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. desiste y ha desistido de la pretensión ejercitada contra el Sr. MARIO GUARDIA JAÉN, es decir, la indicada en el considerando A; que FINACAL, S. A. e INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. desisten y han desistido de sus respectivas pretensiones a las cuales se refiere el considerando B y que el señor RAFAEL COHEN HENRÍQUEZ desiste y ha desistido de la pretensión y, en consecuencia, retira la demanda a que se refiere el considerando C, lo cual hará constar a través de su apoderado judicial en ese proceso. Es decir, una vez efectuado el pago y presentado el comprobante del mismo ante los tribunales de justicia, se tendrán, para todos los efectos legales, desistidos, transigidos y terminados todos y cada uno de los juicios descritos en los considerandos de este documento, incluyendo todas las pretensiones y acciones interpuestas, razón por la cual se entiende que las partes solicitan que no se condene en costas a ninguna de ellas, que se ordene el archivo de los expedientes y se levanten todos los secuestros y acciones colaterales y/o precautorias interpuestos, incluyendo a cualesquiera procesos previos que los hubiera involucrado, y se ordene, así mismo, liberar los bienes afectados y la devolución de las fianzas consignadas para asegurar los perjuicios de las acciones precautorias.

Además, todas las partes y personas en este convenio declaran que no tienen, para con las contrapartes, una vez hecho el pago y expedido el recibo correspondiente a que se refieren las cláusulas 1a. y 2a. de esta transacción, reclamación, derecho o acción de ninguna naturaleza, por lo que quedan terminadas y extinguidas todas y cualesquiera obligaciones, pretensiones, acciones o derechos derivados de los hechos que dieron lugar a los litigios mencionados en los considerandos, renunciando, además, a toda acción o

> reclamación pasada, presente o futura que tuvieren contra de las otras, por razón de los hechos o las causas que dieron lugar a los procesos mencionados en los considerandos, salvo las que se deriven de este contrato o de cualquier otro contrato futuro que celebren.
>
> SEXTA: A los efectos de este documento, adjuntamos copias debidamente autenticadas de las Acta de Reunión de las Juntas Directivas de INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A., MINERAL BÁSICO, S. A., CALX INDUSTRIAL, INC. Y FINACAL, S. A. mediante las cuales se faculta a ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA y a GALINDO, ARIAS & LÓPEZ a celebrar el presente convenio de transacción y desistimiento condicionales." (F. 1341, 1344).

La Sala pasa a decidir lo de lugar, previas las siguientes consideraciones:

En cuanto a la procedencia y formalidades de este medio excepcional de terminación del proceso -la transacción- se atenderá lo normado por el artículo 1068 del Código Judicial, que establece lo siguiente:

> ARTÍCULO 1068. En cualquier estado del proceso, inclusive durante el trámite del recurso de casación y dentro de las condiciones establecidas en el Código Civil, podrán las partes transigir la litis.
>
> Para que la transacción produzca sus efectos en el proceso, se acompañará a la respectiva solicitud el documento que la contenga o se hará constar en memorial dirigido al Juez que conoce del asunto.
>
> En ambos casos el escrito será presentado personalmente, salvo que la firma de las partes en el respectivo memorial haya sido autenticada ante el Juez o ante el Notario.
>
> Puede también celebrarse la transacción mediante acta judicial ante el Juez del conocimiento.
>
> Si la transacción requiere licencia o autorización judicial, el mismo Juez que conoce del proceso podrá resolver la solicitud como incidente". (Subrayado de la Corte).

Efectivamente, conforme lo establece la norma transcrita el contrato de transacción se ha realizado durante la tramitación de un recurso de casación y acorde a las condiciones que establece el Código Civil.

Igualmente en este caso, el escrito en que consta la transacción ha sido acompañada de las diferentes Actas de Reuniones de Junta Directiva, debidamente autenticadas, celebradas por las sociedades que figuran como partes, en las que se faculta a sus representantes judiciales para celebrar el presente convenio.

Sin embargo, se ha podido observar que con la transacción efectuada por los (autodenominados) grupos EUGANA y FINACAL se pretende que esta Sala declare y tenga, para todos los efectos legales, como desistidos, transigidos y terminados los tres procesos descritos en los considerandos del documento de transacción (antes transcritos), lo que resulta improcedente, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación.

En otras palabras, el pronunciamiento que emita esta Sala en relación al convenio de transacción celebrado entre las partes, sólo podrá recaer sobre el proceso que se está conociendo en virtud del recurso de casación interpuesto por INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A. contra la sentencia de 7 de mayo de 1996 dictada por el Tribunal Superior dentro del proceso ordinario que FINACAL, S. A. le sigue a la recurrente y del cual conoció en primera instancia el Juzgado Sexto del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial. Por tanto, no compete a esta Corporación decidir lo pertinente dentro de los procesos que se están ventilando en otros juzgados, si los mismos no se han acumulado al presente, aún cuando figuren las mismas partes, si lo que se debate en los mismos obedece a otra causa de pedir.

Sobre el particular la Corte sostuvo en la resolución de 28 de mayo de 1996, lo siguiente:

> "En otros casos se han presentado convenios de transacción en cuyas cláusulas se ven afectadas terceras personas y propiedades no involucradas en el proceso, por lo que la Corte ha permitido a los abogados de las partes presentar un nuevo convenio circunscrito a las partes y puntos relacionados con la litis. (Res. 21 de diciembre de 1993). Por esa razón, como en el convenio de transacción que se examina se incluye a una sociedad litigante en otro juicio, la decisión de esta Sala no puede extenderse a la controversia que se ventila en ese otro proceso. De allí que la aprobación que le impartirá la Sala a la transacción presentada se circunscribirá al proceso cuyas partes son MICHAEL CARUSO & Co. y ALDO ROSSINI, S. A., y donde ambas han manifestado su conformidad para que finalice la litis en los términos de la transacción acordada por ellas." (Michael Caruso & Co. Inc. -vs- La Sociedad Aldo Rossini, S. A. Sent. de 28 de mayo de 1996).

Así, siguiendo el criterio previamente citado, la transacción es aprobada sólo para efectos del presente proceso; igualmente, en relación al mismo se accede a la solicitud de no condenar en costas a ninguna de las partes, de levantar todos los secuestros y acciones precautorias, de liberar bienes afectados y devolver las fianzas, y ordenar el archivo del expediente.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, APRUEBA la TRANSACCIÓN Y el DESISTIMIENTO presentados sólo en cuanto al proceso civil ordinario instaurado por ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA en representación de FINACAL, S. A. contra INSTITUTO DE INVERSIONES EUGANA, S. A., resuelto en segunda instancia mediante sentencia de 7 de mayo de 1996, objeto del recurso de casación que se ventila ante esta Corporación; y, en consecuencia, ORDENA: el ARCHIVO del respectivo expediente, que se LEVANTEN los secuestros, otras acciones, se LIBEREN bienes afectados y DEVUELVAN fianzas consignadas dentro del referido proceso.

Fundamento de Derecho: Artículos 1068 y 1072 del Código Judicial vigente, Artículo 1500 del Código Civil y Artículo 1093 del antiguo Código Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A FÁBREGA Z. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA BOQUETEÑA, R. L. Y RODERICK TEDMAN Y CONSERVAS DE ANTAÑO, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA BOQUETEÑA, R. L. LE SIGUE A RODERICK TEDMAN Y CONSERVAS DE ANTAÑO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía que **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA BOQUETEÑA** le sigue a **RODERICK F. TEDMAN y CONSERVAS DE ANTAÑO, S. A.**, cada una de las partes ha interpuesto recurso de casación contra la Resolución de 29 de marzo de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial.

Cumplidas las reglas de reparto y una vez fijado en lista el negocio, sólo el apoderado de los demandados presentó escrito de oposición a la admisibilidad

del recurso de casación propuesto por la parte actora.

Al haberse confrontado los tres recursos de casación con los requisitos que determina el artículo 1165 del Código Judicial, la Sala llega a la siguiente conclusión:

1. El recurso de casación interpuesto por **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA BOQUETEÑA, R. L.**, visible de fojas 655 a 660, aunque establece los apartados que, conforme a la ley, deben expresarse para formalizar este medio extraordinario de impugnación, el contenido de los mismos revela desavenencia entre la causal y las disposiciones legales que se citan como violadas y el concepto de dicha violación.

Veamos:

La causal invocada es la "infracción de normas sustantiva de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, ...", el recurrente cita los artículos 770, 904 del Código Judicial y, posteriormente, se refiere al artículo 1 de la Ley 38 de 1980 en los siguientes términos:

> "...
> **TERCERO:** A través de la sentencia recurrida el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, transgrede en concepto de violación directa por omisión al Artículo 1 de la Ley 38 de 1980, dado que no lo aplica al considerar que el Contrato de Préstamo celebrado entre **RODERICK TEDMAN y la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA BOQUETEÑA, RESPONSABILIDAD LIMITADA**, es un acto de comercio, a pesar de establecer la citada norma que las Cooperativas no tienen fines de lucro, de allí que los actos que ella realiza con su asociado no tengan fines de lucro o por ende tampoco lo tendrán los actos accesorios como en el presente caso. ..." (Fs. 659).

Más adelante, sostiene el casacionista que la violación de las normas probatorias y la transgresión del artículo 1 de la Ley 38 de 1980 llevaron a la sentencia a la violación de la norma sustantiva, o sea, del artículo 1103 del Código Civil.

Vemos que el concepto de la infracción del citado artículo 38 no alude a un error en cuanto a la valoración de la prueba, por lo que no puede producirse, dentro de esta causal probatoria, la conculcación de la norma sustantiva. Lo dicho sobre la infracción de tal precepto es acorde con otra causal de fondo (Violación Directa), por lo que no es procedente su señalamiento como medio para arribar a la infracción de normas sustantivas.

En otras palabras, a través del artículo 1° de la Ley 38 del 1980, se quiere plantear la naturaleza del contrato en la disyuntiva de acto de comercio o acto civil. Esta deficiencia no constituye una cuestión de forma, susceptible de corrección.

Aunado a lo expuesto, también se observa que las disposiciones legales violadas son ajenas a los motivos.

Sobre este aspecto, se aprecia que aún el tercer motivo, que, aparenta ser el más concreto, pertenece a otro orden de cosas, distinto al que plantean las disposiciones legales, que como hemos señalado consistía en la determinación de si es acto de comercio o acto civil.

Por las razones expuestas el presente recurso de casación no puede ser admitido.

2. El segundo recurso de casación es en el fondo, ha sido interpuesto por el licenciado Jorge Roberto Mattos Alvarado, en representación de uno de los demandados, **CONSERVAS DE ANTAÑO, S. A.**, figura de fojas 661 a 665 y es a todas luces improcedente, ya que mediante el mismo se acusa al sentenciador de segundo grado de la indebida aplicación de diversas normas sobre costas.

La Sala ha reiterado en su jurisprudencia que las costas no son recurribles mediante el Recurso de Casación. En sentencia de fecha 30 de julio de 1990, esta Corporación señaló:

> "... Las costas son una **cuestión accesoria al proceso** y el aumentarlas, fijarlas o no en una decisión judicial no implica infracción de las normas sustantivas de derecho y, por consiguiente, no constituye razón alguna para interponer, como se ha hecho en el presente caso, recurso de casación en el fondo. ...".
>
> Jurisprudencia Civil al día, de Jaime J. Jované y José Martín Rodríguez (Fs. 170).

En consecuencia este recurso no puede ser admitido.

3. De fojas 666 a 675 consta el tercer recurso de casación; éste formalizado en nombre del otro demandado, **RODERICK F. TEDMAN**; la causal determinada es la "Infracción de la norma sustantiva en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba lo que ha influido de forma determinante en lo dispositivo del fallo". Se establecen cuatro motivos como fundamento de la causal, los cuales aparentan estar debidamente estructurados; sin embargo, de lo expresado en el tercer motivo parece desprenderse un cargo cónsono con la causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba y no así con la causal invocada. En este motivo se sostiene:

> "...
> 3. El Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial en la sentencia atacada mediante este recurso no cita o analiza las pruebas documentales enunciadas por nosotros en el punto 1 de este escrito por lo cual no le da ningún valor probatorio a los mismos máxime si tomamos en cuenta que el documento visto a foja 360 es de por sí un documento público y auténtico. ... (Fs. 667).

Esta incongruencia resulta notoria al observar las normas probatorias que se citan como infringidas y el concepto de su infracción. La primera disposición es el artículo 769 (párrafo 1) del Código Judicial, que establece cuáles son los medios de prueba, artículo que, como es sabido, es exclusivo de la causal de error de hecho; igual situación se tiene en relación con el artículo 821 ibídem, respecto al cual señala la censura que fue violado porque el tribunal no otorgó valor de documento público a la copia contenida en el documento pericial, "sin constatar su existencia". Esta incongruencia se observa además en el desarrollo del concepto de infracción de los artículos 822, 843 y 859 del citado Código, en que se alude a que fueron violados porque en la sentencia no se cita ni se establece la existencia de los documentos que figuran a fojas 11, 17 y 360 del expediente.

Resulta obvio que estas consideraciones son propias de la causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba, error del cual el recurrente quiere hacer derivar la causal que invocó, (error de derecho en la apreciación de la aprueba).

Aunado a lo expuesto, el recurrente también cita dentro de esta causal normas que implican errores improcedendo, o sea, normas de derecho que tienen como destinatario al Juez y no precisamente en atención a su actividad en la valoración de pruebas, como son el artículo 977 (reglas según las cuales se debe dictar la sentencia) y el artículo 782 del Código Judicial.

Por lo que se deja expuesto este recurso resulta ininteligible y debe ser rechazado.

Finalmente, la Sala advierte que en este caso los demandados, RODERICK TEDMAN y CONSERVAS DE ANTAÑO, S. A., han sido representados por el mismo apoderado judicial, a pesar de que entre ellos desde que se dictó la sentencia de primera instancia se evidencia la existencia de conflicto de intereses. Esta situación motivó la interposición de recursos de casación distintos, por el mismo abogado, puesto que en el fallo impugnado uno fue absuelto mientras que el otro

fue condenado.

En tal sentido, es necesario llamar la atención al licenciado Jorge Roberto Mattos pues continuó representando a los demandados, conociendo la circunstancia anteriormente observada.

El hecho de que la resolución atacada en casación haya sido favorable a CONSERVAS DE ANTAÑO, S. A. no justifica la presentación, en su nombre, de este extraordinario medio de impugnación, por lo que la Sala estima que es procedente su condena en costas, más no así la de los otros recurrentes, quienes sí tenían razón justificada para acudir a esta Superioridad.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE los recursos de casación presentados por COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA BOQUETEÑA, R. L.; por CONSERVAS DE ANTAÑO, S. A.; y, por RODERICK F. TEDMAN.

Las obligantes costas a cargo de CONSERVAS DE ANTAÑO, S. A. se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ROSA MATILDE DELGADO VDA. DE ARZE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE CÉSAR AUGUSTO ACHÓN BALLESTEROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La defensa técnica de **ROSA MATILDE DELGADO Vda. de ARZE**, en desacuerdo con la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 18 de diciembre de 1995, que sirviera para desatar en segunda instancia el proceso sumario de mayor cuantía incoado contra su representada por el abogado CÉSAR AUGUSTO ACHÓN BALLESTEROS, propuso recurso extraordinario de casación, a cuyo conocimiento tendrá la Sala Primera de la Corte que abocarse en vista de la correspondiente admisión de la cual ha sido objeto.

Para impugnar la decisión de segundo grado la recurrente ha empleado, como causal de fondo, la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución que se censura.

En los motivos que sirven de fundamento a la causal, la recurrente expresa los cargos de injuricidad atribuidos a la resolución del Tribunal Superior haciéndolos consistir en que se le concedió un valor legal del que carece al documento que contiene la diligencia de avalúo llevada a cabo por la firma AVALÚOS ZUBIETA Y ZUBIETA, S. A., basamento del juzgador para fijar los honorarios profesionales debidos al abogado CÉSAR AUGUSTO ACHÓN por los servicios prestados a su cliente con motivo de la gestión llevada a cabo en el proceso de sucesión ab-intestato de su finado esposo, EDGAR ARZE PONCE (q. e. p. d.), en desmedro del contenido de la diligencia de inventario y avalúo practicada por los peritos designados por las partes y el tribunal en el juicio de sucesión antes mencionado.

De acuerdo a la censura, yerra la resolución recurrida cuando sobrevalora la fuerza probatoria del dictamen de AVALÚOS ZUBIETA Y ZUBIETA, S. A., mientras equivoca su apreciación en cuanto al valor probatorio que le da a la diligencia extrajudicial de inventario y avalúo practicada en el juicio de sucesión, en el

propósito de establecer y fijar el verdadero valor comercial de los bienes que conforman la masa herencial del desaparecido ARZE PONCE. La sentencia de segunda instancia por el hecho de desconocer que el contenido de esta última diligencia forma parte de la sentencia del juicio de sucesión, luego elevada a escritura pública y debidamente inscrita en el Registro Público, perdió de vista el carácter de documento público que dicha prueba posee, en tanto le ha reconocido méritos probatorios suficientes a **"un peritaje"** (el avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA) que nunca fue autorizado por el tribunal y que fue practicado sin la participación de las partes y sin que se hubiesen definido los términos sobre los que debió versar su dictamen.

Se denuncian como infringidas las siguientes disposiciones legales: En primer lugar los artículos 821, 822 y 823 del Código Judicial que, como se sabe, son las normas en donde se recoge la definición del documento público, se enumera las distintas clases del mismo y se indica el valor legal que posee como pieza de convicción en el proceso. Se ataca la resolución del Tribunal Superior sosteniéndose que en ella no se le reconoció el valor legal que encierra la sentencia dictada en el juicio de sucesión de la que forma parte la diligencia extrajudicial de inventario y avalúo realizada en ese juicio y que, tal como se ha dicho, fue protocolizada e inscrita en el Registro Público.

Dícese violado el artículo 845 del Código Judicial que fija y establece el valor probatorio de los documentos privados auténticos, ya que al estimar el Tribunal Superior que los honorarios profesionales del abogado deben calcularse en base a lo establecido por el avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA no tuvo en cuenta que el documento no fue suscrito ni por la parte demandante ni por la parte demandada. Indica el recurrente:

> "Es incuestionable que la demandada y el demandante no suscribieron ese documento, por lo tanto el Tribunal Superior de Justicia al vulnerar la norma transcrita incurrió en un error de derecho de la prueba conocida o identificada como informe de avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA (fs. 83-101)."

El otro grupo de disposiciones procesales que se estiman violadas por la sentencia son los artículos 953, 954, 955, 956 y 967 del Código de Procedimiento. Esas disposiciones regulan la prueba pericial en todos sus aspectos. En concepto de la censura ellas se violaron al aceptarse el valor comercial de los bienes de la herencia que recibiera en calidad de heredera la señora ROSA MATILDE DELGADO Vda. de ARZE, apoyándose en el informe de ZUBIETA y ZUBIETA, siendo esta una diligencia efectuada unilateralmente a solicitud de un abogado ajeno a las partes en conflicto dentro del presente juicio sumario. Se afirma que se trata de un peritaje efectuado sin llenar los requisitos exigidos por la ley.

Por último, como norma sustantiva de derecho infringida se señala el artículo 976 del Código Civil cuyo tenor es el siguiente:

> "**Artículo 976**. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos."

La violación de dicha norma se produce, en opinión de la censura, porque:

> "Es evidente entonces, que la sentencia recurrida, proferida por el Tribunal Superior de Justicia eleva al rango de contrato entre las partes el informe de avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA, a pesar que el mismo no fue suscrito ni solicitado por las partes, por lo que incurre en una nítida infracción a contrario sensu, de la norma sustantiva mencionada. La génesis de ese informe o supuesto peritaje de avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA se ubica en una solicitud promovida por el apoderado de los otros herederos, a fin de facilitar la fase de repartición de caudal hereditario" (fs. 44).

BREVE RESEÑA DEL CASO

Los autos de este juicio sumario ilustran que el abogado César Augusto Achón Ballesteros interpuso demanda contra la señora Rosa Matilde Delgado Vda. de Arze a fin de que se le condenase a pagarle la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y OCHO (B/.54,668.38) en concepto de honorarios adeudados por su gestión profesional en el juicio de sucesión intestada del difunto EDGAR ARZE PONCE, más las costa gastos e intereses. La parte demandada opúsose a las pretensiones del actor aduciendo que los honorarios pactados no fueron, como se afirma en el hecho cuarto del libelo de la demanda, un 8% del valor comercial de los bienes hereditarios, sino el 6% del valor catastral de los bienes que se le adjudicaran a la señora Delgado Vda. de Arze y, en todo caso, ese porcentaje (6%) tendría que dividirse entre el abogado principal -Lic. Guillermo Serrano- y el abogado sustituto -Lic. Achón Ballestero-, conforme había sido acordado en el contrato de servicios profesionales celebrado entre las partes.

Del caudal probatorio aportado por la parte demandante es pertinente destacar el "Contrato de Prestación de Servicios Profesionales", visible a fojas 9 y 10 del expediente. En la cláusula cuarta de ese documento se establece lo siguiente:

> "CUARTA: Declaran LOS ABOGADOS y así lo acepta de manera expresa LA CLIENTE, que los Honorarios Legales, por la presentación, seguimiento y culminación del presente juicio de Sucesión Intestada, serán calculados en base al Porcentaje del Ocho (8%) Por Ciento del Valor Comercial de los bienes que compongan el Caudal Hereditario, es decir, los Honorarios Legales se fijarán en el 8% del valor total comercial, que se de en definitiva a dichos bienes, razón por la cual, se recurrirá a la apreciación de personas versadas en la materia ó al valor de dichos bienes en el mercado local al momento de terminarse el respectivo juicio sucesorio." (Fs. 9).

El documento contiene en su parte final una certificación extendida el 23 de agosto de 1991 por el Notario Público Tercero del Circuito de Panamá en donde se hace constar que las firmas de los abogados Guillermo Serrano y César Augusto Achón Ballesteros, así como la de la cliente Rosa Matilde Delgado Vda. de Arze, son auténticas, pues fueron reconocidas por los firmantes como suyas. Consta también en autos que la representante judicial de la parte demandada tachó el aludido documento, centrando lo medular de su defensa técnica en la supuesta falsedad del mismo. A fojas 136 puede leerse lo que sobre el particular fue denunciado:

> "POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPRESADO, RECHAZAMOS Y TACHAMOS DE FALSEDAD EL DOCUMENTO PRESENTADO COMO PRUEBA POR EL LIC. ACHÓN, POR SER DEL CONOCIMIENTO DE LA SRA. DELGADO VDA. DE ARCE Y DEL LIC. SERRANO QUE EL MISMO FUE ALTERADO AL SUSTITUIRSE COMPLETAMENTE SU PRIMERA PÁGINA **ANTES DE QUE EL MISMO FUERA SELLADO POR NOTARIO, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO SE TACHA EL DOCUMENTO (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES) PRESENTADO COMO PRUEBA**, la cual sustentaremos y probaremos oportunamente en escrito separado." (Fs. 136, énfasis y subrayado como aparece).

En el correspondiente escrito de tacha se sostuvo:

> "**SEXTO:** Que el contrato original suscrito por la Sra. Delgado Vda. de Arze con el Lic. SERRANO como ABOGADO PRINCIPAL y el Lic. ACHÓN como ABOGADO SUSTITUTO, se habían claramente establecido los honorarios que devengaría el Lic SERRANO por su actuación dentro del Juicio de sucesión intestada del Sr. Arze Ponce, el cual había sido establecido en **EL SEIS POR CIENTO (6%) DEL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES QUE SE LE ADJUDICARAN A LA SRA. DELGADO VDA. DE ARZE**, y en el mismo documento se convenía entre el ABOGADO PRINCIPAL y el ABOGADO SUSTITUTO que a cada uno le correspondería LA MITAD de dichos honorarios, esto es, EL TRES POR CIENTO (3%) DE LOS MISMOS PARA CADA UNO DE ELLOS. El contrato presentado como prueba por el Lic. **ACHÓN** en su primera página señala en la Cláusula Cuarta, que "Los

> honorarios legales, por la presentación, seguimiento y culminación del presente juicio de sucesión intestada, serán calculados en base a un Porcentaje del ocho (8%) Por Ciento del valor comercial de los bienes que compongan el Caudal Hereditario, es decir, los Honorarios legales se fijarán en el 8% DEL VALOR TOTAL COMERCIAL, QUE SE DE EN DEFINITIVA A DICHOS BIENES ...". (Fs. 152 y 153, énfasis y subrayado como aparece).

La parte actora, con el objeto de establecer el valor comercial de los bienes recibidos en herencia por la señora Rosa Matilde Delgado de Arze en el juicio de sucesión intestada de su esposo, presentó la copia del avalúo efectuado por la firma AVALÚOS ZUBIETA Y ZUBIETA, S. A. del que ya se ha hablado en este caso (Ver foja 83 y siguientes). En ese documento se indica que el valor actual de mercado de la finca número 57,236, inscrita al tomo 1278, folio 260 del Registro Público, Provincia de Panamá, asciende a la suma de B/.330,000,00 (fs. 85 a 99), y el de la finca número 56,673 inscrita al tomo 1473, folio 290 del Registro Público, Provincia de Panamá, a la suma de B/.242,500.00 (fs. 100 a 101). Ambos inmuebles fueronle adjudicados en herencia a la parte demandada. Este documento que constituye una copia del avalúo elaborado por la firma ZUBIETA Y ZUBIETA, a fin de establecer el valor real de los bienes inmuebles de la sucesión de Edgar Arze Ponce, fue debidamente reconocido en este juicio sumario por el señor Jorge Luis Antonio Zubieta Paredes, Presidente y Representante de la Compañía evaluadora, quien compareció al tribunal y bajo la gravedad del juramento reconoció el documento, su contenido y las firmas que allí aparecen como estampadas por su propio puño y letra (ver fs. 189). También consta en el expediente que la señora Rosa Matilde Delgado Vda. de Arze recibió además en herencia un automóvil valorado en B/.3,000.00 y acciones de una sociedad anónima valoradas en B/.5,000.00.

Se aprecia de autos que la parte demandada, con motivo de la actuación procesal desarrollada en este juicio, puso el mayor énfasis en tratar de demostrar la falsedad o la adulteración del contrato de servicios profesionales celebrado con los abogados que atendieron en su nombre el juicio de sucesión de su difunto esposo, dedicándole especial atención a lo dispuesto en la cláusula cuarta de ese pacto, de la que ya con anterioridad nos hemos ocupado. Ese esfuerzo de la parte demandada no logró fructificar en este juicio, pues ni el juez de primer grado ni los juzgadores de segunda instancia encontraron fundadas razones para aceptar las acusaciones y la tacha formulada, por carecer ellas del respaldo en pruebas que pudiesen verificarlas. Sobre esta materia, similar fue la opinión en ambas instancias, pero divergió el superior del juez de la causa en cuanto al alcance e interpretación que debía dársele a la cláusula cuarta del contrato celebrado. Mientras que para el Juez Tercero del Circuito el valor comercial de los bienes herenciales podía ser establecido a través de la diligencia de inventario y avalúo practicado como parte del juicio de sucesión llevado a cabo, para el Tribunal Superior en aquella diligencia sólo se indicaron los valores inscritos y registrados con que aparecen los inmuebles en cuestión tanto en el Registro Público como en la oficina del Catastro Fiscal, cantidades que no reflejan el valor de mercado que tienen esos bienes. Es de interés, para entender mejor los fundamentos en que se basa la sentencia atacada, reproducir lo que sobre el particular en ella se recoge en cuanto al punto alrededor del cual gira esta controversia.

> "Al momento de interpretar dicha cláusula el Juzgador primario, en una interpretación que no comparte esta Superioridad, concluye que al no haber evidencias en el proceso de que las partes hayan proferido algunas de las formas específicas, entre basarse en el peritaje de personas versadas a tomar el valor actual de mercado, se habría de ponderar la utilización de la diligencia de avalúo de bienes que fuera visible bajo el encabezado de DILIGENCIA EXTRAJUDICIAL DE INVENTARIO Y AVALUÓ DE LOS BIENES DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL FINADO EDGAR ARZE PONCE (Q. E. P. D.), al reverso de las foja 74 del expediente; criterio que no se comparte ya que de una atenta lectura se desprende, que a través de "personas versadas", o mediante cálculo del "mercado local", debía de resultar el "valor comercial" de los bienes, terminología esta que en nada es casual.

> Como se planteara a líneas superiores, este Tribunal no comparte el uso de los valores dados en la diligencia de inventario y avalúos, ya fuera extrajudicial o judicial como lo faculta el artículo 1571 del Código Judicial; toda vez que dichos avalúos tratándose de inmuebles se han de apegar por mandato de la Ley procedimental a los valores catastrales;
> ...
> Del contenido de la diligencia de avalúo que reposa en la protocolización allegada a este proceso, se aprecia que los valores asignados a los bienes inmuebles materia de este debate correspondieron, sin duda alguna, a los valores establecidos en las certificaciones expedidas por las oficinas de catastro fiscal (fs. 26 y 28) del Registro Público (Fs. 32 y 37); lo que no es más que una evidencia de que el avalúo se estableció en atención a los requerimientos procesales y no al valor del mercado de los bienes adjudicados. ...
>
> La apreciación del juzgador primario de señalar que el informe de la avaluadora ZUBIETA & ZUBIETA, profesional en el campo de avalúos de bienes raíces, no guardaba ninguna significación en la determinación de los honorarios de "Los Abogados" (Fs. 244), resulta del todo equivocada cuando se trata del único esfuerzo que, militando en el proceso, procuró y logró establecer el valor comercial del mercado de las Fincas N° 57,238 y N° 56,673, en las sumas de B/.330.000.00 y B/.242,500.00, respectivamente; cifras que advierte este Tribunal superior en los renglones de VALOR ACTUAL DE MERCADO que, para cada una de las fincas, aparece en el informe visible a fojas 83-101. ...
>
> Una vez que se comprueba que la intención de las partes fue tasar los honorarios en atención al valor comercial, la presentación del avalúo realizado por la firma ZUBIETA & ZUBIETA, oportuna por su condición de empresa reconocida en el mercado de bienes raíces, debió de ser confrontada por la demandada con otros avalúos comerciales, en caso de no estar conforme con el mismo.
>
> Se hace de suma importancia el destacar, que la realidad del valor comercial de las fincas N° 52,230 y N° 56,673, no escapó al conocimiento de la parte demandada; lo que se comprueba cuando su propio vocero Ramiro J. Abaúnza, condición esta que se encuentra reconocida por la apoderada judicial de la señora ROSA MATILDE DELGADO DE ARZE a fojas 137 del expediente; señaló haber conocido el avalúo realizado por la firma Zubieta & Zubieta y que además la misma fue utilizada para la negociación de los bienes." (Fs. 298-300).

DECISIÓN DE LA CORTE

El análisis cuidadoso del recurso de casación interpuesto le impone a la Sala la obligación de pronunciarse acerca de los cargos de injuricidad que se denuncian, con el propósito de descalificar la resolución atacada, comenzando con el señalamiento de que no se coincide con la recurrente cuando ésta le endilga a la sentencia yerros basados en la supuesta subvaloración de la prueba representada por la diligencia de inventario y avalúo practicada por los peritos designados por las partes y el tribunal dentro del juicio de sucesión intestada que le sirve de antecedente a este proceso sumario. Los razonamientos del Tribunal Superior que lo llevaron a desestimar como verdaderos los valores económicos que se le asignan a los bienes inmuebles heredados en aquella diligencia son claros y contundentes. En esa diligencia sólo fue consignado el valor con que se inscribieron y registraron tales bienes. No podía -y en esto tiene toda la razón el Tribunal Superior- aplicarse el contenido del inventario y avalúo practicado en el juicio de sucesión para medir con exactitud el valor comercial de los inmuebles que se heredaron, por más que el mismo formase parte de la sentencia con que culminó aquel juicio, puesto que resulta evidente que, en ese aspecto, un documento de esa naturaleza no es capaz de arrojar y reflejar la verdad sobre el valor económico de tales bienes. Lo pactado expresamente por las partes fue que los honorarios de los abogados se tasarían a base del 8% del

valor comercial de los bienes heredados, concepto que es por completo diferente al valor registrado con que ellos aparecen en el Registro Público o en las oficinas del Catastro Fiscal. Si esto es así, no encuentra la Sala que el Tribunal Superior, cuando se abstuvo de emplear como medio para determinar el valor comercial de las fincas heredadas, el recogido por la sentencia del juicio de sucesión, haya incurrido por ese hecho en una infracción de lo que disponen los artículos 821, 822 y 823 del Código Judicial que versan sobre la naturaleza, validez y alcance probatorio de los documentos públicos. Sencillamente, el documento descartado por el Tribunal Superior, de cuya subvaloración se queja la recurrente, no era idóneo para establecer el hecho sujeto a comprobación (es decir, cuál era el real y verdadero valor comercial de los inmuebles heredados, para poder inferir de ese valor la cuantía adeudada en concepto de los honorarios profesionales que se reclaman). No prospera, en consecuencia, el cargo que desde ese punto de vista le imputa la casacionista a la sentencia recurrida.

Concurrente con la anterior es la acusación que la casacionista le imputa a la sentencia cuando considera que sobrevaloró la prueba consistente en el informe de avalúo preparado por la firma AVALÚOS ZUBIETA Y ZUBIETA, S. A. de la cual se valió el Tribunal Superior para calcular los honorarios profesionales que se le adeudan al abogado que promovió la presente acción. Para sustentar su afirmación la recurrente confronta los dos informes elaborados con el propósito de establecer la tasación económica de los bienes y de los que, en efecto, se desprende una enorme diferencia. Ligada con esta impugnación estímase la violación del artículo 845 del Código de Procedimiento porque, según se afirma, los honorarios del abogado se calcularon en base al valor de un documento privado al cual se le ha otorgado una validez que la ley no le reconoce.

Ya fue apreciado que, de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios profesionales, las partes convinieron que el monto de los honorarios de los abogados equivaldría al 8% del valor comercial de los bienes transmitidos en herencia y que, para tasar ese valor, se recurriría "a la apreciación de personas versadas en la materia ó al valor de dichos bienes en el mercado local al momento de terminarse el respectivo juicio sucesorio". También sabemos que, después de terminado aquel juicio, entre uno de los dos abogados contratados (el licenciado Achón) y su cliente no fue posible alcanzar un acuerdo que sirviese para fijar el monto de tales honorarios, lo que provocó la controversia que ahora se ventila entre las partes. La parte actora presentó como una de sus pruebas el documento que corre de fojas 83 a 120 del expediente y que contiene un dictamen sobre el avalúo de mercado de los bienes inmuebles que formaban parte de la masa de la sucesión. En el mismo se incluyen las dos fincas que la demandada recibió como herencia. Se trata de un instrumento que es producto y está confeccionado por una firma especializada en esta clase de menesteres, o sea, su contenido arroja el resultado de "la apreciación de personas versadas en la materia", conforme se convino en el contrato. Con anterioridad se ha dicho que el documento y su firma fueron debidamente reconocidos en el juicio por el tercero que lo produjo. El Tribunal Superior llamó la atención, en la sentencia que dictó y que ahora se ataca, en el sentido de que, por haber servido ese avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA para la división, partición y distribución de la totalidad de los bienes de la sucesión intestada de EDGAR ARZE PONCE entre todos los herederos declarados (HOLDA MARÍA ARZE DE PONCE, ISMENIA ARZE DE OCAÑA, CARLOS ARZE PONCE y ROSA MATILDE DELGADO VDA. DE ARZE), no cabe estimar que hubiese desconocimiento de su contenido de parte de la señora VDA. DE ARZE, puesto que este avalúo fue el utilizado para la negociación de los bienes en los términos que finalmente fueron acordados por los herederos.

La Sala se ve en la necesidad de precisar que la parte demandada, entretenida en desvirtuar la autenticidad del documento que se incorporó al expediente como prueba del contrato de prestación de servicios profesionales y en su afán de demostrar, sin conseguirlo, que lo convenido entre las partes en materia de honorarios había sido un compromiso diferente al que aparece en ese documento -8% del valor comercial de los bienes inmuebles-, no se ocupó, como bien se señala en la sentencia de segundo grado, de probar que otro era el valor comercial de las fincas que había recibido en herencia. No sólo dejó de impugnar la prueba correspondiente dentro de los términos probatorios, sino que tampoco hizo llegar al expediente elemento de convicción alguno que contradijera el

contenido de la probanza que dice incorrectamente valorada por el sentenciador. Bajo tales circunstancias, la fuerza probatoria de la pieza de convicción aludida ha permanecido intacta, lo cual es algo que a la hora da valorar la prueba tiene que ser visto con total independencia de los motivos primarios que hubiesen motivado su preparación y elaboración. Contrario a lo sostenido por la recurrente, carece de importancia, a los fines de este juicio, con qué propósito originalmente fue confeccionado el avalúo. Lo relevante para este caso consiste en que ese avalúo fue preparado por una firma especializada y con reconocido prestigio en nuestro medio en cuanto a la tasación y comercialización de bienes raíces, tal como se estipuló en el contrato celebrado por las partes. El otro aspecto que nos debe interesar es el reconocimiento que el tercero de quien emanó y firmó la prueba que se cuestiona se hiciera en los términos previstos por el artículo 858 del Código Judicial, sin que se diera, volvemos a reiterar, impugnación o tacha proveniente de la parte en contra de la cual fue utilizada. No encuentra la Sala, en consecuencia, dentro de las condiciones apuntadas, razones jurídicas para que este cargo pueda prosperar en casación.

El último cargo de injuricidad imputado a la sentencia dictada por el Tribunal Superior está referido al pretendido error en que incurriese aquel cuerpo colegiado, en razón de haberle concedido valor legal al avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA, S. A., reclamándose, en esta oportunidad, como inadmisible que se le haya otorgado legitimidad a un peritaje nunca autorizado por el juez de la causa y practicado sin intervención de las partes, quienes en tales condiciones no designaron peritos ni definieron los puntos sobre los que debíose dictaminar.

No concuerda la Sala con el criterio de la recurrente. La prueba apreciada por el Tribunal Superior no es, técnica ni jurídicamente hablando, un peritaje como en esta parte del recurso es calificada la comentada pieza de convicción. La prueba, conforme a nuestro ordenamiento jurídico debe entenderse como perteneciente a las comprendidas entre las documentales a que, con un claro sentido de amplitud, se refiere el artículo 819 del Código de Procedimiento cuando nos dice que: "son documentos ..., en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo ...".

Desde ese punto de vista, es natural que pueda ser apreciada por el juzgador, en observancia de las reglas de la sana crítica, como un instrumento probatorio por disponer la ley que los medios de prueba se caracterizan conceptualmente por su idoneidad para ser racionalmente aptos para la formación de la convicción del juez (art. 769 del C. Jud.); en este caso, por tratarse de una prueba documental emanada de tercero que el juez debe estimar por haber sido sometida al trámite exigido por el artículo 858 del Código Judicial, ya que fue reconocida y ratificada expresamente por su autor en cuanto a su firma y contenido.

Dentro de ese marco conceptual se desenvuelve el contenido de la sentencia dictada por el Tribunal Superior y ello constituye razón suficiente para impedirnos reconocer como violadas o infringidas las normas de derecho contenidas en el Código de Procedimiento que regulan las experticias, el valor probatorio de las mismas y las formas en que deben practicarse, pues esas disposiciones legales no son aplicables a este caso. Por supuesto, de lo dicho se colige que no puede la Sala coincidir con la recurrente en su afirmación de que han sido violados los artículos 953, 954, 955, 956 y 967 del Código Judicial, cuyo contenido regla la prueba pericial dentro de las causas civiles que se sigan ante los tribunales de justicia.

Obligadamente la Sala desemboca en la conclusión de que ninguno de los cargos formulados por la censura configuran la violación de la ley sustantiva (art. 976 del Código Civil) invocada como infringida por la sentencia de segundo grado.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de fecha 18 de diciembre de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso sumario que ROSA MATILDE DELGADO VDA. DE ARZE le sigue a CÉSAR AUGUSTO ACHÓN BALLESTEROS.

Las costas de casación se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.300.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Estoy de acuerdo con la decisión, pero no comparto el planteamiento que se hace en relación con el avalúo realizado por la firma Zubieta & Zubieta, que fuera presentado por la parte demandante en el presente proceso.

En la página 15 de la Sentencia se expresa que dicha prueba "debe entenderse como perteneciente a las comprendidas entre las documentales a que, con un claro sentido de amplitud, se refiere el artículo 819 del Código de Procedimiento".

Considero que el mencionado avalúo no tiene el carácter de prueba documental, pues fue ordenado exclusivamente para determinar el valor de los bienes inmuebles que componían la masa hereditaria. En el caso concreto, su eficacia como medio probatorio lo califica como dictamen o informe técnico, de acuerdo con lo establecido por los artículos 880 y 881 del Código Judicial.

Por esta razón reservo el criterio.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EDUARDO AUGUSTO VIZCARRA SILVA Y JUANA ADELA CONDE MENDOZA DE VIZCARRA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A EDGAR HUMBERTO TEJADA KONG. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Jaime J. Jované, en representación de los señores **EDUARDO AUGUSTO VIZCARRA SILVA y JUANA ADELA C. DE VIZCARRA**, presentó recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 6 de junio de 1995, dentro del proceso ordinario instaurado por la parte recurrente contra el señor **EDGAR HUMBERTO TEJADA KONG**, cuya decisión en el fondo la Sala procede a resolver, previas las siguientes consideraciones.

Los señores EDUARDO AUGUSTO VIZCARRA SILVA y JUANA ADELA CONDE MENDOZA DE VIZCARRA presentaron demanda ordinaria con el objeto de obtener: 1) la nulidad del contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes y 2) la condena del promitente vendedor (HUMBERTO TEJADA KONG) al pago de los daños y perjuicios causados por razón del incumplimiento de dicho contrato de promesa de compraventa.

El Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, mediante sentencia N° 64 de 27 de octubre de 1993, desestimó las pretensiones de la parte demandante y la condenó en costas.

Como consecuencia de esa decisión, el apoderado judicial de los demandantes apeló de ella. El Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante Sentencia de 6 de junio de 1995, resolvió lo siguiente:

> "Por las consideraciones que se han dejado expuestas, el **PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA** la Sentencia N° 64 de fecha 27 de octubre de 1993, dictada por el Juzgado Séptimo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. Se **DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PETICIÓN FUERA DE TIEMPO** promovida por el señor EDGAR HUMBERTO TEJADA KONG; y, en consecuencia, se declara extinguida la pretensión demandada por los señores EDUARDO AUGUSTO VIZCARRA SILVA y JUANA CONDE MENDOZA DE VIZCARRA." (Fojas 534-535).

Contra la Sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia, el apoderado judicial de los demandantes formalizó recurso de casación en la forma, en el que se invoca como única causal "Por haber sido dictada la resolución por un tribunal incompetente."

Los dos motivos que le sirven de fundamento expresan lo siguiente:

> "PRIMERO: Que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, viola las normas de procedimiento relativas a la competencia, en virtud de que el Tribunal de Alzada, solamente tenía competencia para conocer sobre los hechos o puntos controvertidos planteados en la sustentación de la apelación de la parte actora, únicos impugnantes de la sentencia de primer grado, más sin embargo el Tribunal entró a conocer y efectivamente decidió una excepción para cuyo examen y decisión el Tribunal de Alzada era incompetente; de esta manera se obvió resolver la causa dentro de los parámetros establecidos en la sustentación del recurso de apelación.
>
> SEGUNDO: Que la sentencia del Tribunal Superior, impugnada mediante este recurso, de manera contraria a derecho y desconociendo el principio de la "reformatio in pejus" agravó la situación procesal de la parte actora, ya que el Tribunal Superior de Justicia al resolver la excepción alegada por el demandado y no resuelta en primera instancia sin que mediara reclamo del demandado, se atribuyó competencia para conocer la totalidad del proceso, desconociendo que era competente, sólo para conocer los aspectos desfavorables al apelante (parte actora) planteados en la apelación y no podía variar la actuación favorable al actor desplegada por el Tribunal de primera instancia al no resolver la excepción que alegó el demandado." (Foja 592).

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el recurrente en casación estima que se han violado los artículos 470, 981 y 1133 del Código Judicial.

El punto medular de la inconformidad planteada por el recurrente en casación radica en que el Tribunal Superior carecía de competencia para decidir la excepción de "petición fuera de tiempo", introducida por la parte demandada en el proceso. Según el recurrente, la Sentencia impugnada agravó la situación de los demandantes al declarar probada la citada excepción que no fue resuelta por el Juez de primera instancia y que la parte demandada no reclamó. En otras palabras, el recurrente alega que el Tribunal Superior no resolvió la apelación dentro de los parámetros que estableció en la sustentación del recurso.

Ahora bien, antes de detenernos en el análisis de este planteamiento es importante definir el concepto de excepción. HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, en el Tomo I de su obra "Compendio de Derecho Procesal", señala lo siguiente:

> "... la excepción es una especial manera de ejercitar el derecho de contradicción o defensa en general que le corresponde a todo demandado, y que consiste en oponerse a la demanda para atacar las

> razones de la pretensión del demandante, mediante razones propias de hecho, que persigan destruirla o modificarla o aplazar sus efectos." (Págs. 245-246).

Por su parte, en la misma obra anteriormente citada, se incluye la definición de excepción de CARNELUTTI:

> "... la excepción es una razón especial de la oposición del demandado a la pretensión del demandante, manifestada en forma activa, y por tanto, una contra razón frente a la razón de la pretensión del demandante". (Pág. 243).

Y el artículo 677 del Código Judicial que son "los hechos que impiden o extinguen total o parcialmente la pretensión o la modifican."

De las definiciones anteriormente transcritas se colige que las excepciones son una clase de defensa que puede utilizar el demandado, y consisten en hechos que producen la extinción o modificación de la pretensión. Las excepciones están en el ser de la pretensión, por tanto forman parte del objeto del proceso, en el sentido de que la sentencia debe resolver sobre ellas.

Es pertinente el artículo 1133 del Código Judicial, que a la letra dice:

> "ARTÍCULO 1133. La apelación se entiende interpuesta sólo en lo desfavorable al apelante y el superior no podrá enmendar o revocar la resolución apelada en la parte que no es objeto del recurso, a no ser que, en virtud de esta reforma, sea indispensable hacer a esta parte modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con la otra.
>
> Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o exista prevista la consulta para la que no apeló el superior resolverá sin limitaciones."

Del texto transcrito se colige que la única limitación que le impone la norma al juzgador de segunda instancia es la denominada prohibición de la reformatio in pejus. Esta consiste en la imposibilidad del superior que conoce del juicio por apelación, de modificar lo resuelto por el inferior en lo que aproveche o beneficie al recurrente, siempre y cuando los cambios en esta parte de la resolución no sean imprescindibles, por encontrarse íntimamente relacionados con la otra parte que se revoca o enmienda.

Esta afirmación se fundamenta, igualmente, en el texto del artículo 1122 del Código Judicial, que expresa que si el apelante no sustentare su recurso y se tratare de providencia o auto apelado, el Juez lo declarará desierto. Pero, no ocurre lo mismo cuando se trata de sentencia. El superior conocerá de la apelación, sin limitación impuesta por algo distinto a la reformatio in pejus.

Consecuentemente, en el caso que nos ocupa, el Tribunal Superior podía conocer de la denominada "excepción de petición fuera de tiempo", ya que ésto no agravaba la situación del recurrente pues ambas resoluciones, la de primera y la de segunda instancia, son en todo contrarias a la parte demandante.

No se está en el presente negocio ante un caso de violación del principio de reformatio in pejus como plantea el recurrente en casación, pues no hay en la sentencia de primera instancia parte que no fuera objeto del recurso de apelación.

En consecuencia, tampoco incurrió el Primer Tribunal Superior de Justicia en la causal de casación invocada.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, NO CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 6 de junio de 1995, dentro del proceso ordinario instaurado por los señores EDUARDO AUGUSTO VIZCARRA SILVA y JUANA ADELA C. DE VIZCARRA contra EDGAR HUMBERTO TEJADA KONG.

Las costas se fijan en trescientos balboas (B/.300.00) a cargo de la parte recurrente en casación.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ENERSA MARÍA RÍOS SAMANIEGO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A MANUEL ANTONIO SAMANIEGO NIETO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema dictó Resolución de fecha 18 de septiembre de 1996, **ordenando la corrección** del recurso de casación (de forma) presentado por el licenciado **EDWIN HORACIO CEDEÑO**, en representación de **ENERSA CEDEÑO RÍOS DE SAMANIEGO**, contra la Resolución de 22 de marzo de 1996 proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Según se observa en el expediente, el término para la corrección de este recurso venció sin que el procurador judicial de la recurrente hubiese efectuado la misma.

Así, al ingresar el negocio nuevamente al despacho del Magistrado Ponente para decidir en forma definitiva la admisibilidad del recurso, debe pronunciarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1166 del Código Judicial, en el sentido de declarar inadmisible el recurso, cuando "el recurrente no lo corrigiere conforme lo ordenado, dentro del término de cinco días".

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación propuesto por ENERSA MARÍA RÍOS DE SAMANIEGO en el proceso ordinario que le sigue a MANUEL ANTONIO SAMANIEGO NIETO.

Las obligantes condena en costas, a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE PANAMÁ RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE REVOCATORIA DE SECUESTRO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROMOVIDO POR PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. CONTRA CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Cajigas & Consocios, apoderada judicial del **CONCILIO**

GENERAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE PANAMÁ, presentó recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 20 de septiembre de 1996, que decidió en segunda instancia el incidente de revocatoria de secuestro promovido por la parte recurrente, dentro del proceso ejecutivo que le sigue el **PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A.**

Encontrándose el negocio en etapa de alegatos sobre la admisibilidad del recurso de casación, la firma Cajigas & Consocios presentó escrito ante la Secretaría de la Sala Civil, en el que manifiesta lo siguiente:

> "Somos **CAJIGA & CONSOCIO**, apoderados especiales del Concilio General de las Asambleas de Dios de Panamá dentro del incidente indicado en márgenes superiores de este memorial.
>
> Concurrimos ante usted en forma respetuosa, a fin de **DESISTIR** del recurso de casación formalizado contra el auto fechado 20 de septiembre de 1996 dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el incidente arriba descrito.
>
> Mediante este mismo memorial nos damos por notificados de la resolución que acoge el presente desistimiento."

El texto transcrito pone de manifiesto que el apoderado judicial de la parte recurrente en casación desiste del recurso. Al respecto, el artículo 1073 del Código Judicial contempla la posibilidad de que toda persona que haya presentado un recurso, desista de él. Aceptado el desistimiento, queda ejecutoriada la resolución contra la cual se había interpuesto, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1084 ibídem.

En el presente caso la Sala estima que el desistimiento reúne los requisitos que la ley exige. En primer lugar, se advierte que la firma forense de la parte recurrente en casación tiene facultad expresa para desistir, como se desprende del poder consultable a foja 25 del antecedente que contiene el juicio ejecutivo. En segundo lugar, el escrito de desistimiento fue presentado personalmente por el Licenciado Enrique Cajiga S., de la firma forense Cajigas & Consocios, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1075 del Código Judicial.

Por último, es preciso señalar que debe condenarse en costas a la parte recurrente en casación, al tenor del artículo 1085 ibídem.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, ADMITE el desistimiento del recurso de casación presentado por la firma forense Cajigas & Consocio, en representación del CONCILIO GENERAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE PANAMÁ y ORDENA la devolución del expediente al juzgado de origen.

Se condena en costas al Concilio General de las Asambleas de Dios de Panamá, que se fijan en la suma de setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ISABEL SÁNCHEZ RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE OPOSICIÓN A TÍTULO QUE LE SIGUE A INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Debe la Sala resolver el recurso extraordinario de casación en la forma que el letrado RODRIGO MIRANDA MORALES, en representación del señor ISABEL SÁNCHEZ GÓMEZ, ha propuesto contra la sentencia dictada el 31 de agosto de 1995 por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial que decidió en segunda instancia el juicio civil ordinario de oposición a título que tiene como parte demandada a la señora INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO.

Queda dicho que el remedio procesal extraordinario empleado por el recurrente es de casación en la forma, denunciándose particularmente que la sentencia recurrida no está en consonancia con las pretensiones de la demanda debido a que no resolvió uno de los puntos que fue objeto de la controversia (art. 1155, numeral 7, acápite b, Cód. Jud.).

De los motivos utilizados para relatar los hechos impugnados se desprende que los cargos de injuricidad imputados a la sentencia le censuran que, so pretexto de no haberse interpuesto el recurso de apelación contra la parte principal de la resolución de primer grado, sino nada más que en lo relativo a las costas, el Tribunal Superior se abstuvo o rehusó pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Admite el casacionista que, en efecto, al interponerse el recurso se hizo anunciándolo de manera "poco ortodoxa" (sólo contra las costas), pero que, como también se manifestó que se aducirían nuevas pruebas en segunda instancia, debió entenderse que la apelación se interponía integralmente en contra de la sentencia. Reitérase el cargo endilgado contra el Tribunal Superior de haberse desentendido de su obligación de resolver la controversia y de haber pasado por alto que toda apelación debe entenderse interpuesta contra la sentencia en su integridad, y no en cuanto a la cuestión accesoria de las costas, solamente. En cuanto a la terminología usada por el apelante cuando anunció el recurso, dice que la sentencia recurrida no debió dejar de reconocer un derecho por el solo hecho de no haberse empleado las palabras apropiadas.

Según el recurrente la sentencia atacada infringió los artículos 1263, 1269, 1270, 1116, 1133 y 978 del Código Judicial. En su orden las infracciones se hacen consistir en lo siguiente: 1) No se respetó el principio consagrado por la norma (art. 1263) acerca de que toda apelación interpuesta contra la sentencia debe entenderse que la afecta integralmente, sobre todo cuando se ha hecho la solicitud de que la causa sea abierta a pruebas en segunda instancia. 2) Deduce el recurrente que la infracción del artículo 1269, que se refiere al orden en que las partes que apelan en cuanto a lo principal deben alegar, señalando que primero lo hará el demandante, fue violado en forma directa , ya que toda apelación interpuesta contra la sentencia debe entenderse encaminada a enervarla en su totalidad, salvo que la apelación haya sido interpuesta por la parte favorecida y solamente en relación con las costas. 3) Como el Tribunal se encuentra obligado por el artículo 1270 a decretar la recepción de cualquier documento público que estime necesario para esclarecer los hechos controvertidos, así como las pruebas que sean necesarias para aclarar los puntos dudosos, eso significa, a juicio del casacionista, que una vez interpuesta la apelación contra una sentencia de primera instancia, el tribunal de segundo grado queda obligado a resolver el fondo de la controversia. 4) El recurso de apelación, dice el artículo 1116, "tiene por objeto que el superior examine la decisión dictada por el juez de primera instancia y la revoque o reforme", de lo cual infiere el recurrente que el recurso de apelación le impone al juzgador de segunda instancia la obligación de resolver siempre en cuanto al fondo "todos los puntos materia de la controversia". No lo hizo así el Tribunal Superior por lo que violó directamente la norma citada, por omisión. 5) Cita el recurrente el artículo 1133 del Código Judicial y precisa que dicha norma hay que interpretarla en el concepto de que toda apelación se entiende interpuesta contra aquello que le es desfavorable al apelante y no sólo contra una parte de la sentencia, por muy poco ortodoxa que haya sido la forma empleada para interponer el recurso. 6) El artículo 978 del Código Judicial establece el principio de que la sentencia debe estar en consonancia con las pretensiones aducidas en la demanda y las excepciones que aparezcan probadas y hubiesen sido alegadas. La sentencia censurada ha eludido pronunciarse sobre los puntos medulares del proceso, así como considerar las pruebas aportadas en segunda instancia, lo mismo que los alegatos presentados en esta etapa del juicio, incurriendo por lo tanto en

violación de la disposición legal mencionada.

De manera muy clara se expresa en la sentencia que es objeto del recurso que, para resolver la controversia que conoció en grado de apelación el Tribunal Superior, éste se encontraba sujeto, limitado y constreñido a actuar dentro del marco que le viene impuesto por el artículo 1133 del Código Judicial, en donde se consigna el principio conocido como la "reformatio in pejus". Efectivamente, se dejó sentado en la sentencia:

> "En vías de resolver el tribunal debe necesariamente hacer una referencia inicial a la materia que deberá ser objeto de revisión en razón de la impugnación interpuesta. Lo anterior resulta pertinente a la luz de lo dispuesto en los artículos 1117 y 1133 del Código Judicial que limitan el marco de apreciación de agravios precisamente a los puntos que en este sentido señala quien impugna. En el caso que nos ocupa la apoderada judicial de la parte demandante anunció tanto al tribunal como a la contraparte que apelaba pero que lo hacía "de las costas".
>
> A juicio del tribunal este anuncio expresó del apoderado judicial del apelante limita el marco de la materia a discutirse en la alzada a la procedencia o no de las costas y a su cuantía. Por ello no resulta procedente como aparece haber sucedido en este caso anunciar in primera instancia que se apelaba por las costas y solicitar en alegatos mucho más de esto, es decir, la revocatoria completa de la pieza dictada en primera instancia y el patrocinio de las pretensiones del demandante.
>
> Por ello el tribunal deberá ceñir el objeto materia de revisión en esta alzada a lo que a costas y su procedencia se refiere." (Fs. 114, 115).

Considera la Sala que es alrededor de este principio -"reformatio in pejus"-, su significado y sus alcances, que debe hacerse el análisis que conduzca al esclarecimiento, rechazo o aceptación de los cargos de injuricidad que se le imputan a la sentencia de segundo grado.

Bien entendido lo que se dice en el artículo 1133 del Código Judicial es que la competencia del superior que llega a conocer del juicio, en razón de un recurso de apelación, sólo se extiende a aquella parte de la decisión que le haya sido desfavorable al apelante; lo que también implica que, si el tribunal de segundo grado se pronuncia en torno a aquella parte de la resolución que le haya sido favorable o provechosa al recurrente y lo desmejora, estaría incurriendo en una usurpación de competencia que da lugar a la nulidad de lo actuado. La "reformatio in pejus" no tiene que ver con cualquier enmienda que pueda llegar a ser introducida por el sentenciador al proferir el fallo de segunda instancia, sino única y exclusivamente con aquellos aspectos de la decisión apelada que pudiesen traducirse, en la nueva sentencia que se dicte en agravación de las obligaciones que previamente fueron impuestas sobre el recurrente, aumentando y adicionando lo decretado en su contra, en relación con lo decidido en la sentencia de primera instancia. Lo que está prohibido, lo que no se puede hacer, de acuerdo con el artículo 1133, es simple y llanamente añadirle un gravamen más a la situación desfavorable en que se encuentra el apelante. A juicio de la Sala esa no era la situación ni la realidad procesal a la que se enfrentó el Tribunal Superior en esta causa: la de no poder enmendar o revocar la resolución apelada en la parte que no es objeto del recurso, ya que esa prohibición supondría que una parte de la decisión recurrida no le era desfavorable al recurrente. Ese supuesto no se produjo en el caso subjúdice, pues en la sentencia dictada en primer grado no existe nada, absolutamente nada, que le haya sido favorable a la parte que interpuso la apelación. De allí que incurrió en un yerro jurídico de naturaleza procesal el Tribunal Superior cuando decidió no considerar la pretensión principal al momento de proferir su fallo dando lugar a una aplicación incorrecta del artículo 1133 del Código Judicial.

Desde otro ángulo de análisis, tampoco es posible perder de vista que la apelación -el recurso propiamente tal- se descompone o se desdobla en dos actos,

en dos fases diversas. Existe una primera fase que es esa donde se propone, se promueve o se anuncia la apelación. Este acto es el que se cumple ante el juez que dictó la resolución y ante quien se expresa que se apela en contra de ella. Subsiguientemente, se entra en la otra fase del recurso que consiste en un segundo acto, mediante el cual se cumple y se lleva a cabo, ante el tribunal de segunda instancia, la diligencia conocida como la sustentación de la alzada, en donde el recurrente tiene la oportunidad de ir al fondo, planteando los motivos y razones en que fundamenta su recurso. La fuerza de la lógica nos indica que sólo será después de cumplida esa última etapa, después de concedido el recurso -y no antes-, cuando el Tribunal Superior podrá enterarse de cuáles son los aspectos de la sentencia que se cuestionan a través del recurso. No se concibe que el apelante pueda indicarle al juzgador los motivos en que fundamenta la apelación con antelación a la sustentación del mismo, es decir, en el acto de interposición del recurso, ya sea que esto ocurra al momento de la notificación o después de ella.

Hay que agregar que en el caso bajo estudio el recurrente adujo nuevas pruebas en segunda instancia y que éstas fueron aceptadas por el tribunal en los términos permitidos por el Código de Procedimiento. Una vez admitidas las pruebas, debieron ser consideradas para establecer si ellas confirmaban o no las pretensiones de la parte que las adujo, es decir, las de la parte actora en este juicio. No le parece a la Sala que tenga sentido haber admitido las pruebas que se incorporaron con la finalidad supuesta de demostrar los hechos en que se sustenta la pretensión de la demanda, y que luego el tribunal se abstenga de hacer la menor referencia a las mismas, amparándose en la excusa de que no podía entrar a considerar el fondo de la demanda, tal y como finalmente acabó pronunciándose.

Por todo lo expuesto, estima la Sala que, aún cuando no se trata de que la sentencia no está en consonancia con las pretensiones de la demanda, existen suficientes razones de orden jurídico para considerar que el Tribunal Superior se abstuvo de conocer y decidir un asunto que era de su competencia en este caso el medular, acerca de si la parte actora tiene o no derecho a oponerse a la solicitud de título formulada por la parte demandada.

Por tanto, esta Corporación encuentra fundamentada la causal de forma propuesta por el recurrente de modo que casa la sentencia de segunda instancia y procede a dictar la de reemplazo.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

El licenciado Rodrigo Miranda Morales, actuando como apoderado del señor **ISABEL GÓMEZ SÁNCHEZ** anunció demanda de oposición a la solicitud de adjudicación definitiva en venta, de un lote de terreno adjudicable, que forma parte de la finca (perteneciente al Municipio) N° 15519, folio 264, tomo 1447 (1714.80 m), que presentó **INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO**, ante el Alcalde Municipal del Distrito de Bugaba. Con ese anuncio (fs. 14) el licenciado Miranda Morales solicitó a la Alcaldía se remitiera el expediente al Juzgado de Circuito de Chiriquí por razón de la cuantía del negocio y presentó una serie de documentos que se observan de fojas 15 a 19.

La demanda de oposición a título municipal fue formalizada mediante escrito que corre a foja 33, señalando que su finalidad es que se declare que INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO no tiene derecho a que el Municipio le extienda el título de propiedad que pretende, por el hecho de que el demandante (ISABEL GÓMEZ SÁNCHEZ) es quien ostenta derechos posesorios sobre el mismo. Así, en los tres hechos que sirven de fundamento a la demanda, se dice textualmente lo siguiente:

> "1. La señora INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO ha solicitado al Municipio de Bugaba que le extienda título de propiedad sobre el globo de terreno antes descrito.
> 2. La petente no tiene derecho alguno a formular esa petición puesto que no ha poseído jamás ese terreno.
> 3. ISABEL GÓMEZ SÁNCHEZ es el poseedor, con ánimo de dueño, durante muchísimos años, del globo de terreno dicho."

En dicho libelo se indica que las pruebas serán aducidas oportunamente y se cita como derecho los artículos 425-452 del Código Civil.

Posteriormente, el Juez Municipal del Distrito de Bugaba se inhibe del conocimiento y ordena la remisión del juicio al Juzgado de Circuito de Chiriquí.

Por su parte, el apoderado de la demandada contesta la demanda (Fs. 44), sosteniendo que es cierto el hecho primero, porque el inmueble le pertenece a su representada y ha vivido allí durante 63 años; niega el hecho segundo "por cuanto que el primer punto da contestación al segundo"; sobre el tercer hecho, indica que es falso debido a que el terreno pertenece a su patrocinada y en relación a ello existen documentos que lo acreditan. Además, niega el derecho, la cuantía y anuncia que aducirá pruebas.

El negocio se abrió a pruebas y contrapruebas de primera instancia, sin que las partes hicieran uso del respectivo término.

Seguidamente el Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí dictó la Sentencia N° 143 de 4 de octubre de 1994, que consta a fojas 62 a 64, que resolvió NEGAR las declaraciones pedidas en este proceso, expresando las siguientes consideraciones:

> "El hecho primero de la demanda debe declararse probado ya que así consta a fojas 1, 2, 3, 7, 9, 10 y 11 de autos (expediente seguido en la Alcaldía Municipal del Distrito de Bugaba).
>
> El hecho Segundo no puede declararse probado ya que no existe elemento probatorio que lo compruebe tal como lo ordena el artículo 773 del Código Judicial.
>
> El Tercero igualmente, no puede declararse probado ya que no existe en autos prueba idónea o plena para acreditar lo aseverado en el hecho.
>
> Lo único que consta en autos son copias simples , presentadas en la Alcaldía de Bugaba (F. 6, 15, 16, 17, 18 y 19), las cuales hacen parte de la tramitación llevada en esa Dependencia. Las mismas no pueden ser estimadas ya que no cumplen con los parámetros de los artículos 820, y 844 del Código Judicial.
>
> Como queda dicho, abierto el proceso a pruebas, tanto la actora como la demandada, desaprovecharon el mismo y el Proceso terminó sin elemento probatorio alguno.
>
> Siendo que el Artículo 773 del Código Judicial obliga a las partes a probarlos (sic) hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favorable y como quiera que la demandada negó los hechos fundamentales de la misma, no queda más que negar lo pedido." (Fs. 63, 64).

Como se tiene dicho, el representante de la parte actora, dentro del presente proceso de oposición a título municipal, anunció Recurso de Apelación contra la citada sentencia, que le fue adversa en todas sus partes y, le impuso costas de B/.2,000.00.

La censura anunció que presentaría nuevas pruebas, en esta segunda instancia, las que figuran de fojas 75 a 96 del expediente, y son:

> "1. Copia auténtica de acuerdo suscrito ante la Alcaldía de Bugaba el 26 de noviembre de 1948.
> 2. Copia auténtica de Acuerdo Suscrito ante la Corregiduría de Bugaba el 27 de febrero de 1987.
> 3. Copia auténtica del Acuerdo del 4 de noviembre de 1988 ante la Corregiduría de Bugaba.
> 4. Copia auténtica de Resolución N° 5-89 del 30 de marzo de 1988 ante la Corregiduría de Bugaba.

5. Copia auténtica de declaraciones ante la Corregiduría de Bugaba el 3 y 4 de Octubre y el 1° de Noviembre de 1990 de los señores:
Rosa Elvira Gómez
Fulvia G. de Otero
Manuela Gómez (sic)
Isabel Gómez (sic)

6. Copia auténtica de Resolución 8-90 ante la Corregiduría de Bugaba el 5-11-90.
7. Copia auténtica de solicitud de Nulidad de Resolución N° 5-89.
8. Copia auténtica de Solicitud efectuada ante la Corregiduría de Policía de Bugaba el 2-1-91.
9. Copia auténtica del Auto de declaratoria de Herederos proferido por la Juez Segunda de Circuito". (Fs. 96 a 97).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1265, ordinal c) del Código Judicial, resultan admisibles todas las aludidas pruebas, salvo la numero 9, pues no aparece en la misma la firma del custodio de su original.

La parte demandada se opone a las pruebas de la actora, mediante escrito que consta a foja 94, señalando que INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO tiene muchos años (63) de ocupar el mismo inmueble por lo que tiene derecho a solicitar el título Municipal, en tal sentido consta como prueba documental en el Municipio de Bugaba la "**DONACIÓN**" que Manuela Gómez Sánchez le hace a su hija, o sea, a ella; además de las declaraciones de Liborio Hernández, Julio Chavarría, Celmira de Muñóz y Miriam María Martínez (Ex-Corregidora de Bugaba).

Los alegatos de las partes se encuentran de fojas 103 a 107, el del demandante, y el de la demandada de fojas 108 a 109.

Según se puede apreciar las nuevas pruebas presentadas por el apelante en esta oportunidad, en su gran mayoría, son las mismas que no fueron estimadas por el juzgador de primera instancia por no cumplir con los presupuestos de los artículos 820 y 844 del Código Judicial y que constan a fojas 6, 15, 16, 17, 18 y 19. Sin embargo, en esta instancia las aludidas copias se encuentran debidamente autenticadas, por lo que se procede a su examen en atención a las pretensiones del actor.

Ante todo, hay que reiterar que no existe duda de que la Sra. INOCENCIA GÓMEZ de LOMBARDO solicitó al Municipio de Bugaba que le extendiera título de propiedad sobre el globo de terreno que forma parte de la finca N° 151519, folio 264, tomo 1447 (área 1714.80 mt^2), el cual se encuentra dentro de las siguientes medidas y linderos:

Norte: mide distancia de 22.48 mts. y colinda con calle s/n.
Sur: mide distancia de 24.15 mts. y colinda con Isabel Gómez.
Este: mide distancia de 61.98
Oeste: mide línea grabada de 41.16 mts. y 38.21 mts. que suman 79.37 mts. y colinda con ISABEL GÓMEZ.

Acompañó con esta solicitud copia del plano N° 405-15309 con aprobación de los oficiales competentes.

Veamos entonces si las pruebas presentadas por el actor demuestran que INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO no ha poseído jamás el terreno que solicita, no teniendo derecho a formalizar esta petición; y, si el señor ISABEL GÓMEZ SÁNCHEZ, ha sido poseedor con ánimo de dueño de ese globo de terreno por "muchísimos años".

La prueba fotostática (autenticada) que obra a fojas 77 demuestra la diligencia que llevó a cabo la Alcaldía de Bugaba en 1948 a solicitud de la señora BARTOLA SÁNCHEZ VDA. DE GÓMEZ para la división de sus terrenos ubicados en ese distrito a favor de cada uno de sus hijos, quienes son MANUELA GÓMEZ, ISABEL GÓMEZ, AURA MARÍA GÓMEZ, DIGNA GÓMEZ y SANTOS GÓMEZ, (éste último, según consta, fue el único que no la suscribió y que no asistió al acto).

A fojas 78 consta un acuerdo de 27 de febrero de 1987, suscrito por MANUELA GÓMEZ SÁNCHEZ e ISABEL GÓMEZ SÁNCHEZ en que se cambian mutuamente terrenos con la condición de que cuando la primera muera (MANUELA GÓMEZ) su terreno pasará a ser propiedad de su hija mayor INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO.

A fojas 79 consta un documento de fecha 4 de noviembre de 1988 suscrito por las mismas partes en que anulan el acuerdo anterior o sea el de 27 de febrero de 1987. Así, MANUELA GÓMEZ SÁNCHEZ nuevamente asume la tenencia de la parcela que había permutado. Se alude a que en la parcela que ISABEL GÓMEZ cambió había una casa donde vivió la madre de ambos (BARTOLA SÁNCHEZ VDA. DE GÓMEZ) y en la que también vivió MANUELA GÓMEZ por corto tiempo por hospitalidad de su hermano.

A fs. 81 se aprecia un documento en que consta la declaración de ROSA ELVIRA GÓMEZ y de FULVIA DE OTERO en que señalan que tenían conocimiento de la anulación del acuerdo sobre el cambio de terrenos entre MANUELA e ISABEL GÓMEZ.

Posteriormente los suscriptores del acuerdo anulado ratifican su decisión en tal sentido (fs. 82, 83).

De fojas 85 a 89 se lee la solicitud que formuló RICCI GÓMEZ GONZÁLEZ, en nombre y representación de su padre ISABEL GÓMEZ SÁNCHEZ, para que se anulara la Resolución N° 5-89 proferida por la Corregidora de Bugaba.

Finalmente, consta a fojas 84 otra Resolución 8-90 de 5 de noviembre de 1990, suscrita por la Corregidora de Bugaba, en la que hace algunas declaraciones como son que RICCI GÓMEZ no actuó con mala intención ni engaño, sino que la anulación de la permuta fue de mutuo acuerdo entre las partes que intervinieron en ella, que la resolución 5-89 no tiene base, que MANUELA GÓMEZ no tiene capacidad porque no era propietaria de dicha parcela, que fue manipulada por su hija para hacer cosas las que hizo cuando la permuta había sido anulada.

No obstante, observa la Sala que con estas pruebas, a causa de lo confusas que resultan y debido a su gran incomprensión, no se demuestran los hechos principales en los que el apelante-demandante en este proceso de oposición fundamenta su pretensión, es decir, no dan fe de que ISABEL GÓMEZ SÁNCHEZ hubiese sido poseedor con ánimo de dueño de ese globo de terreno por "muchísimos años".

Aunado a lo expuesto, entre las pruebas que fueron estimadas en primera instancia para acreditar el hecho primero de la demanda, se encuentra la declaración rendida ante la Alcaldía de Bugaba (fs. 7) por uno de los colindantes del terreno en disputa, cuya área es de 1714.88 mt^2 según plano oficial 405-15309. Expresa el declarante que en el mismo ha vivido INOCENCIA GÓMEZ DE LOMBARDO por varios años y, que le consta que esa señora es la dueña de ese terreno.

En consecuencia, la oposición a la adjudicación del terreno municipal en cuestión resulta inocua, pues el oponente no ha demostrado tener un mejor derecho que la solicitante.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 31 de agosto de 1995 dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL y CONFIRMA la sentencia N° 143 de 4 de octubre de 1994, proferida por el Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí.

Las obligantes costas de segunda instancia se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/.500.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO)

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Estimo que no ocurre la causal invocada (Art. 1155, ord. 7°, literal (b) del Código Judicial).

No se trata de que la Sentencia no está en consonancia con las pretensiones de la demanda. Se trata de que el Tribunal Superior expresamente se abstuvo de conocer -decidir- de asunto que era de su competencia (Art. 1155, ord. 6°).

La Sala no puede cambiar las causales.

Por esas consideraciones, respetuosamente, salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) Rafael A. González
Sonia F. de Castroverde
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL DOCTOR CALIXTO MALCOLM, JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE PESQUERA TABOGUILLA, S. A. LE SIGUE A ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Doctor **CALIXTO MALCOLM**, Juez del Tribunal Marítimo, ha solicitado que se le separe del conocimiento del proceso ordinario instaurado por **PESQUERA TABOGUILLA, S. A.** contra la señora **ANA SUWALSKI KOSS DE EISENMAN**.

La solicitud del Juez MALCOLM es del tenor siguiente:

> "Por la presente les pongo en conocimiento en este Proceso Ordinario que PESQUERA TABOGUILLA, S. A. le sigue a ANA SUWALSKY DE EISENMAN, intervine como apoderado especial de la demandada, configurándose la causal 5ta. del artículo 146 del Código de Procedimiento Marítimo.
>
> En vista de lo anterior, respetuosamente solicito a la Sala me declare impedido del conocimiento de dicho caso."

La situación descrita por el Juez Malcolm corresponde al supuesto que establece el numeral 5 del artículo 146 del Código de Procedimiento Marítimo, como se desprende de los documentos consultables de fojas 26 a 30 del expediente, en los que consta la actuación del solicitante en este negocio.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Dr. CALIXTO MALCOLM, Juez del Tribunal Marítimo y DISPONE que sea llamado su suplente personal para que asuma el conocimiento del presente proceso.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE PÉREZ-CARRERA & CO. CON AUDIENCIA DEL HONORABLE JUEZ DEL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO INTERPUESTO POR GERMÁN BANGUERA CONTRA MOTONAVE NABAJOT. MAGISTARDO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados **PÉREZ-CARRERA & CO.** en su condición de apoderados de la **MOTONAVE NABAJOT** ha interpuesto **Incidente de Recusación** contra el Juez del Tribunal Marítimo de Panamá, Licenciado ÁLVARO CABAL, con el propósito de que se le declare impedido y separado para conocer del Proceso Especial para la Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado, que se tramita en dicho tribunal, instaurado por **GERMÁN BANGUERA SOLÍS.**

Cumplidas las reglas de reparto y admitido el incidente por el Magistrado Sustanciador, se solicitó al Honorable Juez del Tribunal Marítimo que rindiera informe sobre la verdad de los hechos en que se funda la recusación.

Conforme al informe secretarial que corre a fojas 66 del presente expediente se comunicó que mediante Acuerdo Número 261 de 14 de noviembre de 1996, el Pleno de la Corte Suprema nombró al licenciado **CALIXTO MALCOLM** en el cargo de Juez del Tribunal Marítimo de Panamá, quien tomó posesión del cargo en la misma fecha.

Por el hecho de que el licenciado **ÁLVARO CABAL** ya no se desempeña como Juez del Tribunal Marítimo carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre su separación de un proceso de ejecución de crédito marítimo del cual ya no tiene que conocer. Consecuentemente, en este caso se ha producido el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia y esta Sala procede a resolver este incidente en atención a dicha circunstancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE el Incidente de Recusación propuesto por la firma PÉREZ-CARRERA & CO., en representación de la M/N NABAJOT, contra el licenciado ALVARO CABAL en su calidad de Juez Marítimo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

WASHINGTON MAURILLO MORA RUIZ, ACTUANDO EN SU CONDICIÓN DE TESORERO Y REPRESENTANTE LEGAL, Y EN AUSENCIA DEL TITULAR, DE LA SOCIEDAD INDUSTRO-COMERCIAL INTERAMERICANA, S. A. (SICOISA) INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INTERPUESTO POR SOCIEDAD INDUSTRI-COMERCIAL INTERAMERICANA, S. A. (SECOISA) CONTRA JERRY LEE HAMAGIS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado GILBERTO BÓSQUEZ DÍAZ, apoderado judicial de la SOCIEDAD INDUSTRO-COMERCIAL INTERAMERICANA, S. A. (SICOISA), de conformidad con el poder que le confiriera su representante legal, señor WASHINGTON MAURILIO MORA RUIZ, promovió ante esta Corporación de Justicia, Recurso de Revisión contra la Resolución de fecha 23 de septiembre de 1994, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ejecutivo interpuesto por la SOCIEDAD INDUSTRO-COMERCIAL INTERAMERICANA, S. A. (SICOISA) contra JERRY LEE HARVEY.

Cumplidas las ritualidades inherentes al recurso extraordinario de revisión, tales como: fijación de la fianza para que el recurso pudiese ser acogido, siendo consignada oportunamente; así como la solicitud por parte de la Secretaría de la Sala al juzgado correspondiente para el envío del expediente que dio lugar a la sentencia impugnada, el cual, en efecto, fue remitido a esta Superioridad, constante de 885 fojas útiles.

Encontrándose el expediente con un proyecto en lectura, se recibió el escrito de DESISTIMIENTO formulado por el apoderado judicial de la parte revisionista, cuyo tenor es el siguiente:

> "Yo, Lcdo. GILBERTO BÓSQUEZ DÍAZ, varón, panameño, mayor de edad, abogado en ejercicio, con despacho profesional ubicado en El Cangrejo, calle 56 C), casa 3-M, lugar donde recibo notificaciones personales, y portador de la cédula de identidad personal N° 8-140-846, Actuando en mi condición de Apoderado Judicial de **WASHINTONG MAURILIO MORA RUIZ**, quien es varón, panameño, mayor de edad, comerciante, casado, con domicilio en Torre 300, avenida 12 de octubre de esta ciudad, y portador de la cédula de identidad personal N° N-14-794, quien actúa en su condición de Tesorero y Representante legal, y en ausencia del titular, de la **SOCIEDAD INDUSTRO-COMERCIAL INTERAMERICANA, S. A. (SICOISA)**, la cual se encuentra debidamente inscrita al Rollo 2185, Imagen 122, Ficha 39220 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, y con domicilio en Torre 300, avenida 12 de octubre de esta ciudad, vengo por este medio a solicitar el DESISTIMIENTO de la Acción interpuesta en este caso.
>
> Efectuando esto, Sírvase Ud. remitir toda la Actuación hacia el Juzgado Séptimo de Circuito, Ramo Civil, y Ordenar la devolución del depósito exigido por el artículo 1189 del Código Judicial". (F. 64).

La Sala no tiene objeción a lo solicitado, en virtud de que dentro de las facultades otorgadas al apoderado judicial se encuentran la de desistir, visible a foja 1 del expediente principal; además, conforme al artículo 1073 del ordenamiento jurídico, toda persona que haya entablado una demanda puede desistir expresa o tácitamente de la misma.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el apoderado judicial de la sociedad INDUSTRO-COMERCIAL INTERAMERICANA, S. A. (SICOISA), y ORDENA LA DEVOLUCIÓN de la fianza consignada mediante Certificado de Garantía N° 15307.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

DICIEMBRE 1996

ACUSACIÓN PARTICULAR

ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR EL LICENCIADO DAVID G. MEJÍA C., EN REPRESENTACIÓN DE OSCAR DE JESÚS OCAMPO CEBALLOS, CONTRA LUIS FERNANDO OQUENDO BAENA, POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia auto de 7 de agosto de 1995, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que no admite la acusación particular formulada por el licenciado David Mejía, quien actúa en nombre y representación de Oscar De Jesús Ocampo Ceballos, contra Luis Fernando Oquendo Baena, por la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa.

En lo medular del escrito sustentatorio de la alzada, el recurrente manifiesta su desacuerdo con el planteamiento que hace el tribunal de instancia, cuando sostiene, en primer lugar, que el poder carece de la expresión por la que el poderdante se obliga a probar la verdad de su relato y a continuar con la acusación y, en segundo lugar, que el libelo no especifica los nombres del acusador ni del acusado, las circunstancias esenciales del hecho y las disposiciones legales infringidas. En su opinión, "si bien es cierto, que en el poder no se señala esta expresión ... esto no es fundamento para rechazar la Acusación Particular, ya que lo procedente es ordenar que se corrija la misma" (f. 14). Por otra parte, "en el primer parrafo (sic) de nuestro libelo de Acusación Particular, se señala tanto los nombres del Acusador, del acusado con todas sus generales, además de las disposiciones legales infringidas y seguidamente se da una relación pormenorisada (sic) de los hechos" (f. 15).

Para resolver la alzada, esta Superioridad prestará exclusiva atención a los puntos a que se refiere el recurso, conforme lo tiene establecido el artículo 2428 del Código Judicial.

Realizado el estudio del libelo de acusación particular, a los efectos de determinar si cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 2013 del Código Judicial, reformado por el artículo 7 de la Ley N° 3 de 22 de enero de 1991, la Sala advierte que ciertamente el representante de la acción privada se aleja de la técnica establecida para formalizar correctamente esta iniciativa procesal, pues lo que hace es abundar en alegaciones que únicamente guardan relación con las circunstancias particulares del hecho punible que se le endilga a Luis Fernando Oquendo Baena (fs. 2-6), en lugar de exponer en forma expresa y separada la sección correspondiente a la parte acusadora y acusada, la conducta delictiva imputada, el lugar y fecha en que se perpetró el hecho y los preceptos legales que considera infringidos.

Por otra parte, la Corte observa que en el poder presentado por el acusador no se consigna el compromiso de continuar con la acusación y probar la verdad del relato (f. 1). Si bien en el libelo el apoderado judicial alude a este requerimiento (f. 6), lo cierto es que quien debe manifestarlo y comprometerse es el propio acusador, ya sea a través del poder que otorga o en un escrito separado. A este respecto se ha pronunciado la Sala Penal, señalando que "corresponde al acusador particular manifestar su compromiso de continuar la acusación y probar la veracidad de su relato, por lo que mal puede hacer tal afirmación quien recibe poder para representar judicialmente a la persona que se convierte en acusadora" (Registro Judicial, sept. 1993, pág. 210). Valga destacar además que el incumplimiento de esta exigencia legal resulta insubsanable, no sujeto a corrección, toda vez que "constituye un defecto de forma que impide el ejercicio de la acción penal, y consecuentemente, descarta la intervención activa y eficaz del acusador durante la etapa sumarial" (Registro Judicial, marzo de 1996, pág. 242).

Ante la comprobación de que el libelo de acusación particular no satisface

a cabalidad los requisitos legales previstos en el artículo 2013 del Código Judicial, la consecuencia procesal inmediata es la de declarar su inadmisibilidad y, por consiguiente, confirmar el auto recurrido.

En razón de lo expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 7 de agosto de 1995 dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que no admite la acusación particular promovida por Oscar De Jesús Ocampo Ceballos.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE CONCEDE FIANZA DE EXCARCELACIÓN EN FAVOR DE OMAR LORENZO TRUJILLO, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, COMETIDO EN PERJUICIO DE ANANÍAS PRETTEL SEGURA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá formalizó recurso de apelación contra auto calendado el 13 de noviembre de 1996, mediante el cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial concede el beneficio de fianza excarcelaria a Omar Lorenzo Trujillo, sindicado por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en perjuicio de Ananías Prettel Segura, y fija la cuantía de la fianza en la suma de B/.2,000.00.

El agente del Ministerio Público expresa su disconformidad con el auto impugnado, por considerar que la cuantía de la fianza "no es equitativa" con la gravedad y la repercusión social del hecho punible. Para reforzar ese criterio, el recurrente plantea que se debe tomar en cuenta que Lorenzo Trujillo, aunque no disparó el arma de fuego, auxilió al autor material del delito al entregarle el arma de fuego con la cual se ocasionaron las lesiones a la víctima.

Para concluir, el funcionario de instrucción solicita que la fianza que se fije contribuya a que el imputado reflexione "sobre la gravedad de sus actuaciones, cuando se encuentren gozando de la libertad ambulatoria" (fs. 18-19).

La Sala pasa a resolver la alzada, exclusivamente sobre los puntos de la resolución a que se refiere el recurrente, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2428 del Código Judicial.

Las sumarias informan que en la madrugada del 25 de octubre del año que decurre, en la casa N° 2 ubicada en el sector La Felicidad, barriada Mano de Piedra Durán, Distrito de San Miguelito, se realizaba el velorio de un familiar de Ananías Prettel. Durante el acto varios sujetos, entre ellos Omar Lorenzo Trujillo, se comportaban de manera desordenada, por lo que Prettel les solicitó que se retiraran del lugar. La petición ocasionó que uno de los sujetos le pidiera a Lorenzo Trujillo un arma de fuego para dispararle a Prettel. La víctima fue trasladada al Hospital Santo Tomás, debido a heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en el pie derecho y en la fosa ilíaca (f. 8), siendo dado de alta 4 días después, sin que se haya podido agregar al expediente la cuadrícula o el correspondiente examen médico legal sobre las heridas infringidas.

La decisión que ahora se examina fijó en B/.2,000,00 la cuantía del beneficio de fianza excarcelaria a Omar Lorenzo Trujillo, por considerar que en autos sólo es posible acreditar la figura jurídica del delito de homicidio en grado de tentativa. Para llegar a esa decisión, el a-quo tomó en consideración que en el expediente no están acreditados "los elementos probatorios suficientes para determinar mayores aspectos, componentes o circunstancias del hecho, sólo resalta una conducta humana llevada a cabo en forma espontánea, consistente en disparo de arma de fuego en detrimento de otra persona que le ocasionó heridas, desconocemos la gravedad de las mismas, porque no está incorporado el informe médico forense ..." (f. 15).

En el examen que de la causa le corresponde efectuar a esta Sala, es preciso analizar algunos elementos probatorios allegados al cuaderno penal.

Así se aprecia la declaración de la testigo Gladys Pamela Roberts, quien relata que el sujeto que apodan "Chombito" sacó un arma de fuego para dispararle a Ananías Prettel, pero debido a que su "arma se encasquillo ... le pidió el arma a otro sujeto ... apodado BEBY, y este se la entregó, y se volteo y disparó a quemarropa en contra el señor ANANÍAS PRETEL, en el abdomen y en su muslo izquierdo ... posteriormente ... estos sujetos se dieron a la fuga" (f. 7). Valga destacar que en la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, esta testigo identificó a Lorenzo Trujillo como una de las personas que intervino en la agresión física de que resultó víctima Ananías Prettel.

Otro elemento probatorio que es necesario atender consiste en que el informe de novedad visible a foja 11 del cuaderno penal indica que Trujillo fue aprehendido el 28 de octubre del año que decurre, en el sector de Samaria Piedra, con la indicación de que el imputado, al advertir la presencia de los miembros de la Fuerza Pública, "se introdujo en la residencia N° 171 del sector ... procedimos a informarle que saliera de la residencia o se le llamaría a la autoridad competente, el cual precedió a salir" (f. 11).

Finalmente, el antecedente del caso permite apreciar la declaración indagatoria rendida por el imputado el 31 de octubre del año en curso. En esa diligencia, el sindicado afirma que en la noche que ocurrió el hecho de sangre jugaba dominó en el mismo patio donde se realizaba el velorio, y que allí se produjo una discusión en la cual intervino la víctima, y que fue en ese momento cuando "se oyeron los tiros y la gente empezó a correr para todos lados y Yo corrí para donde corrieron todo el grupo ..." (f. 27). El imputado niega la posesión de arma de fuego (f. 28).

Los anteriores elementos probatorios permiten establecer que la fianza excarcelaria ha sido solicitada en una causa en la que se investiga la comisión de un delito contra la vida, en la que el imputado niega su posible participación, aunque contra él figura el terminante señalamiento de la testigo Gladys Pamela Roberts, quien afirma que el sindicado contribuyó en el delito al facilitarle el arma de fuego al sujeto apodado "Chombito".

A lo anterior se suma el hecho de que Trujillo trató de evadir a las autoridades de policía, lo cual revela su interés por eludir la acción de la justicia, todo lo cual justifica el reclamo del recurrente sobre la necesidad de un aumento de la cuantía de la fianza, cónsono con la gravedad del hecho imputado.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA el auto de 13 de noviembre de 1996, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y FIJA en CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00), la cuantía de la fianza excarcelaria que debe ser prestada por el imputado Omar Lorenzo Trujillo para gozar de libertad provisional.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

JUICIO PENAL SEGUIDO A LUIS ARNULFO CONTRERAS VEITÍA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, COMETIDO EN PERJUICIO DE JUAN NAPOLEÓN RODRÍGUEZ JUAN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el auto de 29 de mayo de 1996 (fs. 282 a 293), proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa criminal, por la vía en que interviene el jurado de conciencia, contra **LUIS ARNULFO CONTRERAS VEITÍA (A) "FULO"**, por presunto infractor de las normas contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, o sea, por el delito genérico de homicidio en perjuicio de JUAN NAPOLEÓN RODRÍGUEZ JUAN, hecho ocurrido el domingo 28 de mayo de 1995, en horas de la madrugada, en el local denominado BAR-RESTAURANTE-DISCOTEC "El Señorial", ubicado frente al Hotel de Changuinola, a un costado de la Distribuidora de Davidson, en el Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro.

El apoderado legal del sindicado **LUIS ARNULFO CONTRERAS VEITÍA**, Licenciado **Emilio de León Lokee**, presentó escrito de sustentación de apelación (fs. 316 a 321), en el cual solicita la revocatoria del auto apelado y, en consecuencia, la remisión del expediente a la esfera correspondiente, en base a lo siguiente:

> "Nuestra inconformidad para con la pieza atacada obedece a que a nuestro juicio no se le ha dado la adecuada denominación genérica con relación a si se trata o no de una conducta dolosa o culposa. ... En ese sentido consideramos que el Tribunal A-quo en virtud del principio indubio pro reo y de economía procesal debió estudiar o analizar la situación concreta que nos demuestra el expediente, para determinar si estamos o no ante la presencia de una conducta dolosa. ...
>
> ... se observa que hasta el momento la competencia se ha fijado en atención a los principios de territorialidad y supuestamente en razón de la materia del proceso, sin embargo, se habla muy someramente de delito de Homicidio, sin entrar en mayores consideraciones, por esa razón es que hablamos de supuestamente, a nuestro juicio se debió destacar los elementos por medio de los cuales se concluye que en el presente caso se trata de una conducta dolosa y luego de ello entrar a valorar la competencia.
>
> En una ocasión dentro de este proceso solicitamos Fianza Excarcelaria o para no ser detenido ante el Juzgado Municipal del Distrito de Changuinola, este a su vez remite el expediente al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, aduciendo razones de competencia, el referido Tribunal Superior niega el beneficio solicitado argumentando entre otras cosas que lo dicho por ASALIA HINÉS DE SÁNCHEZ en el sentido de que el brazo se le subió al sindicado y de que éste no tenía intenciones de causarle la muerte a nadie, mas que aportaciones objetivas, debían ser consideradas especulaciones de la declarante; de ese momento procesal a la fecha, las supuestas especulaciones han adquirido el debido valor legal para ser consideradas como prueba de las afirmaciones hechas por la aludida testigo, ...
>
> ASALIA HINÉS DE SÁNCHEZ desde su declaración inicial rendida ante la

> Policía Técnica Judicial ha manifestado que los disparos (2) se hicieron al piso, posteriormente ante la Personería Segunda Municipal del Distrito de Changuinola, que élla (sic) no sabía si Napoleón estaba vivo o esta (sic) muerto, porque ya había ido al lugar donde estaba tirado y unos decían que estaba vivo y otros que estaba muerto. En base a lo anterior esta testigo duda de que el hoy difunto estuviese en ese momento muerto, debido a que lo observó cuando éste se retiró del centro de diversión El Señorial.
>
> Finalmente, en la diligencia de reconstrucción de los hechos reitera las versiónes (sic) que sobre el hecho había expresado anteriormente, no hay que pasar por alto que ésta asegura la buena visibilidad que tenía el lugar del hecho. En esta última ocasión recalca que el imputado disparó hacia el piso, que no tenía intención de hacer blanco en la anatomía del hoy difunto, que tenía buena visibilidad y que inclusive mi representado se cersioró de que en el lugar no habían quedado huellas o manchas de sangre, por lo que le asguró (sic) que las balas no lo habían tocado y que todos los que estuvieron en ese lugar se retiraron plenamente convencidos de que los disparos no impactaron el cuerpo de RODRÍGUEZ JUAN. ...
>
> Con relación al otro testigo presencial el cual mientras mi defendido disparaba se encontraba de espaldas de nombre ELIÉCER DE LOS SANTOS ARAÚZ, éste coincide con la anterior testigo mencionada en que se retiraron del lugar plenamente convencidos de que los disparos no impactaron a RODRÍGUEZ JUAN, que se retiraron juntos seguros de que lo ocurrido no tenía mayor trascendencia y que se enteró al día siguiente como a las once (11:00) de la mañana de la muerte del ofendido.
>
> ... elementos éstos que más bien indican que el hecho materia de este proceso se produce por culpa, ya que para que se pueda hablar de dolo deben estar debidamente acreditadas las circunstancias o elementos que configuran el dolo, o sea que el "DOLO" de ninguna manera se puede presumir, debe comprobarse, lo que en este proceso no se ha demostrado. ...
>
> Los diversos elementos que conforman el expediente que nos ocupa se orientan a lo sumo a la comprobación de un hecho culposo, o al menos los elementos que existen en ese sentido no han sido desvirtuados. Al igual que la Jurisprudencia citada existen otras que sería largo enumerar en donde inclusive se ha considerado que disparos hechos en un sentido han realizado otro recorrido distinto a la voluntad del agente y han hecho blanco en objetos o cuerpos no deseados por el actor, ya sea por causas de falta de pericia, desvío de obstáculos y hasta imprudencia. Finalmente, de ninguna manera se puede considerar la rebeldía de nuestro patrocinado, dado a que se desconoce su paradero, como elemento de una actitud dolosa, por todos es sabido la lamentable situación que presentan nuestros centros penitenciarios. Tampoco hay que pasar por alto el testimonio del Guardia de Seguridad del Aeropuerto de Changuinola que asegura haber visto a otro sujeto con diferentes características a las de mi defendido perseguir al hoy difunto, ésta es otra circunstancia que favorece al prenombrado CONTRERAS VEITÍA y corrobora aún más la inexistencia del dolo en este hecho que ha motivado este proceso penal." (Fs. 316 a 321).

Por su parte, el Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial no hizo uso de su derecho, al corrérsele traslado del escrito de sustentación de apelación presentado por el defensor del imputado, a fin de que presentara las objeciones de lugar.

Consta en autos, copia autenticada de la cédula de identidad personal de **LUIS ARNULFO CONTRERAS VEITÍA** (f. 133).

ANTECEDENTES:

Mediante vista fiscal N° 59 de 7 de mayo de 1996 (fs. 259 a 263), el Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, Licenciado EDWIN ÁLVAREZ CAMAÑO, solicitó enjuiciamiento criminal contra **LUIS ARNULFO CONTRERAS VEITÍA (A) "FULO"**, por presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, o sea, por el delito genérico contra la vida y la integridad personal (homicidio), cometido en perjuicio de JUAN NAPOLEÓN RODRÍGUEZ JUAN.

La Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial, en la vista fiscal mencionada, expresa en parte de su opinión lo siguiente:

> "... se cuenta con las versiones que suministraron los testigos **ASALIA DIGNA HINÉS DE SÁNCHEZ (fs. 67-70 y 144-145) y ELIÉCER DE LOS SANTOS ARAÚZ MORALES (fs. 126-130).** Ambos concuerdan en afirmar que observaron aproximadamente entre las dos y quince minutos a dos y treinta minutos de la madrugada del día 28 de mayo de 1995, cuando en el interior del local denominado "El Señorial", ubicado en Changuinola, se suscitó un incidente o problema entre **LUIS CONTRERAS (a) Fulo**, Administrador de dicho Centro de Diversión, y uno de los empleados del mismo llamado **NAPOLEÓN RODRÍGUEZ**; que ello ocurrió porque este último le solicitó un vale o adelanto de dinero a CONTRERAS y como éste no se lo quiso dar, la víctima trató de agredirlo con una botella de cerveza sin que alcanzara tal propósito; y fue cuando el mencionado CONTRERAS sacó una pistola con la cual le efectuó varios disparos, yéndose del lugar NAPOLEÓN RODRÍGUEZ y enterándose con posterioridad que lo habían encontrado muerto cerca a una Estación de Gasolina, camino hacia Finca N° 6.
>
> También se incorporaron las versiones de un número plural de personas, entre las que se destaca la de los señores **EDGAR ARJONA LLORENTE (fs. 86-87 y 142-143), ELÍAS ARRACERA MONRROY (fs. 84-85 y 180-181), ROBERTO ANTONIO PINEDA HANSSEL (fs. 71-73) e ISAÍAS ANDERSON GUERRA (fs. 176-178),** los cuales aunque no dicen que hubiesen presenciado el momento preciso en que se suscitaron los hechos, hacen referencia a que observaron a la víctima herida y posteriormente en el lugar donde finalmente se le encontró sin vida." (Fs. 260 a 261).

En el proceso se encuentran las declaraciones juradas de ROBERTO ANTONIO PINEDA HANSELL, celador de las instalaciones de AUTO MUNDO LADA, S. A., situado al otro lado de la cerca del salón "El Señorial" (fs. 71 a 73), NÉSTOR ABDIEL HERNÁNDEZ PEÑA, quien se encontraba de celador en un local cercano (fs. 81 a 83), ELÍAS ARRACERA MONRROY, celador del aeropuerto en construcción de Changuinola, ubicado frente al local de AUTO MUNDO LADA, S. A. (fs. 84-85; -ampliación- fs. 180-181), EDGAR ARJONA LLORENTE, celador del área de la bomba de gasolina, de la gasolinera OMEGA ACCEL ubicada en Base Line Changuinola (fs. 86-87; -ampliación- fs. 142-143), ISAÍAS ANDERSON GUERRA, celador del taller de motores y servicios de la gasolinera OMEGA ACCEL (fs. 176 a 178; -ampliación- fs. 176 a 178), todos los cuales coinciden en que luego de escuchar las detonaciones, salió corriendo del salón "el Señorial" un sujeto con un suéter de rayas de colores y un pantalón negro, a quien luego identificaron como el hoy occiso, quien saltó la cerca que se encuentra en la parte posterior de AUTO MUNDO LADA, S. A., y se dirigió hacia el callejón que conduce a la gasolinera OMEGA ACCEL, donde fue encontrado muerto.

También aparecen en el expediente, las declaraciones juradas de GREGORIO ANTONIO RODRÍGUEZ JUAN, hermano del occiso (fs. 74 a 76), ILIANA PINTO ÁBREGO, salonera en el salón "El Señorial" (fs. 77 a 79), EDMUNDO ANTONIO CONTRERAS SAMUDIO, hermano del sindicado y dueño del local "El Señorial" (fs. 91-92), CRISTIAN MORALES MONRROY, aseador del salón "El Señorial" (fs. 96 a 98), JUAN ALBERTO YANGUEZ VIGIL, taxista que transportó a los tres sujetos que salieron del local "El Señorial" luego de ocurridos los hechos (fs. 122 a 125; -ampliación- fs. 150 a 152), las cuales no aportaron mayores indicios sobre los hechos.

La comisión del hecho punible ha quedado acreditada en el proceso a través de los elementos de prueba allegados al expediente, como los son la transcripción

del acta de diligencia de inspección ocular, reconocimiento, levantamiento y traslado de un cadáver (fs. 13 a 19), junto con el respectivo croquis del levantamiento del cadáver del occiso JUAN NAPOLEÓN RODRÍGUEZ JUAN (f. 65), cuyo cuerpo sin vida, el que presentaba lesiones traumáticas externas, fue encontrado a tempranas horas la madrugada del día domingo 28 de mayo de 1995, por el sector de la bomba de gasolina denominada estación OMEGA ACCEL, ubicada frente a la carretera principal que conduce del cuadrante de Base Line a finca 11, en jurisdicción del Distrito de Changuinola; el Protocolo de Necropsia correspondiente a JUAN NAPOLEÓN RODRÍGUEZ JUAN (fs. 103 a 118), donde se señala como causa de la muerte: "HEMORRAGIA INTRATORÁCICA MASIVA POR HERIDA MORTAL CON ARMA DE FUEGO.", y las fotografías (2) tomadas al cadáver del cuerpo exánime en la Morgue del Hospital de Changuinola (fs. 53-54); y, finalmente, el certificado de defunción de JUAN NAPOLEÓN RODRÍGUEZ JUAN, expedido por la Dirección General del Registro Civil del Tribunal Electoral (f. 272; -copia- f. 119).

Al pedirse en la fase sumaria la concesión del beneficio de fianza de excarcelación en favor del imputado, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial la negó, con fundamento en lo que se copia seguidamente:

> "Con el acopio de estas dos declaraciones, estima el tribunal que no resulta posible concluir prima facie, tal y como lo plantea el proponente, que la conducta del sindicado Luis Contreras tuvo su origen en una acción culposa. Ello resulta así por varias razones la primera, se desprende de algunos detalles que afloran del testimonio de Asalia Hinés de Sánchez quien afirma que el hoy occiso al ver que Luis Contreras se había provisto de un arma de fuego, se estaba retirando del local por la puerta principal en el momento en que se le propinaron los disparos (ver f. 68)). Por otro lado también con el aporte de este declarante es claro que el señor Luis Contreras al realizar los disparos estaba avanzando hacia la persona del hoy occiso, ello se evidencia con las constancias de la diligencia de la inspección ocular practicada en el Salón El Señorial, en la cual participó la señora Asalia Digna Hinés de Sánchez, cuando señala que al darse el primer disparo la distancia entre Contreras y Rodríguez era de 10.20 metros y que al darse el disparo la distancia entre ambos era de 8.65 metros. Por su parte de acuerdo con la narrativa que ofrece el testigo Eliécer de los Santos Araúz Morales, parece claro que si bien estuvo presente durante el suceso, no vio el momento en que el sindicado realizó los disparos, mas bien los oyó toda vez que se encontraba en dirección al occiso.
>
> Estima también el tribunal que las argumentaciones de la testigo Asalia Hinés de Sánchez en el sentido de que el brazo se le subió al sindicado y de que este no tenía intenciones de causarle la muerte a nadie; más que aportaciones objetivas deben ser consideradas especulaciones vertidas por la declarante.
>
> Por otro lado el tribunal también debe tomar en consideración la ubicación de la certeza lesión mortal ocasionada a Juan Napoleón Rodríguez Juan por el proyectil de arma de fuego que eventualmente le causó la muerte a causa de hemorragia intratorácica masiva por razón de perforación del corazón.
>
> Las anteriores consideraciones permiten concluir aun cuando sea de manera provisional, que el hecho investigado en las presentes sumarias encuentra encuadramiento típico en el artículo 131 del Código Penal que describe el homicidio doloso. ..." (Fs. 169 a 171).

En los autos aparecen las transcripciones del acta de la diligencia de registro o allanamiento efectuado en el local denominado "El Montecarlo" (fs. 24-25) y del acta de la diligencia de inspección ocular practicada al local denominado salón "El Señorial" (fs. 33 a 36), en la cual se tomaron las fotografías (5) visibles de fojas 49-51, junto con el croquis de la inspección ocular del salón "El Señorial" (f. 90). Consta además en el expediente, la transcripción del acta de diligencia de reconstrucción de los hechos en el salón "El Señorial" (fs. 219 a 226), con la participación del perito planimétrico de

la Procuraduría General de la Nación, Tec. Ing. PEDRO A. JIMÉNEZ M., y de los peritos del Departamento de Balística de la Policía Técnica Judicial, JOSÉ SAMANIEGO y JOSÉ CHAVARRíA. Y se aportaron al sumario las secuencias fotográficas de fojas 238 a 245 y cinco (5) diagramas explicatorios, realizados por el Jefe de la Sección de Planimetría de la Procuraduría General de la Nación, Tec. Ing. PEDRO A. JIMÉNEZ M. (fs. 233 a 237), quien en su informe DSPSP-117-95 de 3 de enero de 1996, informó entre otras cosas, que la testigo ASALIA HINÉS DE SÁNCHEZ:

> "... TENÍA BUENA VISIBILIDAD PARA OBSERVAR CUALQUIER HECHO QUE SE DIERE FUERA DEL MOSTRADOR, DONDE ELLA SE ENCONTRABA SI ESTUVIESE DENTRO DE SU CAMPO VISUAL TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL, AUNQUE NO CON LA CLARIDAD Y DETALLE QUE SE PUEDE PRESENCIAR UN HECHO A PLENA ILUMINACIÓN DEL DÍA. ..." (F. 232).

Luego del análisis de los argumentos presentados por el recurrente, la Sala pasará a decidir la alzada en los términos previstos en el artículo 2428 del Código Judicial, es decir, que tendrá conocimiento del proceso, sólo sobre los puntos de la resolución a que se refiera el recurrente.

En ese orden de ideas, observamos que el primer punto al que se refiere el recurrente se relaciona con la calificación dolosa que se hace del hecho que se le imputa a su defendido, pues en su criterio, "no se le ha dado la adecuada denominación genérica con relación a si se trata o no de una conducta dolosa o culposa ...". "El hecho que nos ocupa y que culminó con la muerte de JUAN NAPOLEÓN RODRÍGUEZ JUAN se cometió sin la figura jurídica conocida como dolo, pues mi defendido LUIS ARNULFO CONTRERAS nunca tuvo la intención de quitarle la vida al mencionado RODRÍGUEZ JUAN o sea no quiso la realización del hecho y a esa conclusión llegamos luego de examinar cada una de las piezas que componen el expediente y principalmente la relación de los testigos presenciales del hecho y los diferentes dictámenes periciales posteriores a la realización de la diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos, y sobre todo esta última diligencia en la cual se puede apreciar con claridad la manera en que se dieron los hechos la madrugada del domingo 28 de mayo de 1995".

Sostiene además el apelante que el "perito planimétrico de la Procuraduría General de la Nación, a su informe agrega una serie de fotografías sobre el lugar de los hechos y corrobora según su experticia que ASADIA GINES DE SÁNCHEZ tenía buena visibilidad para observar cualquier hecho que se diera fuera del mostrador, de manera que no podemos aceptar que se diga que en su testimonio esté especulando sobre la manera en que se dio el hecho".

Afirma que el otro testigo presencial de los hechos ELIÉCER DE LOS SANTOS ARAÚZ coincide "con la anterior testigo mencionada en que se retiraron del lugar plenamente convencidos de que los disparos no impactaron a RODRÍGUEZ JUAN, que se retiraron juntos seguros de que lo ocurrido no tenía mayor trascendencia y que se enteró al día siguiente como a las once de la mañana de la muerte del ofendido".

De otro modo, expresa el recurrente, a cuestionamiento que se le hiciera a los peritos, que éstos "no descartan las posibilidades de un accidente producto de la inexperiencia o imprudencia en el uso o manejo del arma por parte de nuestro representado, agregando a otros factores físicos como la gravedad de la tierra, las condiciones del arma, la longitud del cañón, el calibre del proyectil, su empuñamiento, la posición de los cuerpos, los movimientos del imputado y del ofendido, etc., etc., elementos éstos que más bien indican que el hecho materia de este proceso se produce por culpa, ya que para que se pueda hablar de dolo deben estar debidamente acreditadas las circunstancias o elementos que configuran el dolo, o sea que el dolo de ninguna manera se puede presumir, debe comprobarse, lo que en este proceso no se ha demostrado".

Agrega el recurrente que "tampoco hay que pasar por alto el testimonio del Guardia de Seguridad del Aeropuerto de Changuinola que asegura haber visto a otro sujeto con diferentes características a las de mi defendido perseguir al hoy difunto, ésta es otra circunstancia que favorece al prenombrado CONTRERAS VEITÍA y corrobora aún más la inexistencia del dolo en este hecho que ha motivado este proceso penal".

Concluye su sustentación señalando que, "los diversos elementos que conforman el expediente que nos ocupa se orientan a la comprobación de un hecho culposo o al menos los elementos que existen en ese sentido no han sido desvirtuados," por lo que termina diciendo que "las consideraciones anteriormente expuestas, hechas sin un mayor esfuerzo, nos llevan a concluir la inexistencia del dolo en el hecho que se le imputa a LUIS ARNULFO CONTRERAS VEITÍA, por lo tanto la competencia para el conocimiento de dicho hecho no corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia, en ese sentido les solicitamos, a pesar de que el Tribunal puede hacerlo de oficio, que el auto penal de fecha 29 de mayo de 1996 objeto de este recurso sea revocado o en su defecto se declare nulo todo lo actuado o consignado en ese auto y el expediente sea remitido a la esfera correspondiente".

El punto central de la inconformidad del recurrente con la resolución apelada radica esencialmente en que estima que no existe dolo en la conducta del imputado y ello lo fundamenta en los testimonios de ASALIA DIGNA HINÉS DE SÁNCHEZ y ELIÉCER DE LOS SANTOS MORALES y en lo que se expresa en parte de la diligencia de reconstrucción de los hechos.

Ya el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, al conocer de la petición de fianza formulada, tuvo la oportunidad de hacer una calificación provisional del hecho, con fundamento en el pronunciamiento que en parte hemos transcrito en esta resolución y en donde calificó el hecho ocurrido como homicidio doloso encuadrado dentro del artículo 131 del Código Penal.

Esa calificación se mantiene en el Auto apelado y la Sala no ve razón jurídica alguna para variarla, en orden a lo que seguidamente expresa.

Nuestro Código Penal, en su artículo 31, preceptúa que "obra con dolo quien quiere la realización del hecho legalmente descrito así como quien lo acepta previéndolo por lo menos como posible".

Al referirse a la prueba del dolo, de la que se ocupa el recurrente, en sus "Comentarios al Código Penal Colombiano", Tomo I, Parte General, Quinta Edición, a página 207, ANTONIO VICENTE ARENAS puntualiza lo siguiente:

> "Nos parece, siguiendo a MANZINI entre los autores extranjeros, y a CABAL entre los nacionales, que el *dolo genérico* se presume legalmente. Lo cual quiere decir que los actos u omisiones previstos como infracciones penales se reputan *intencionales*, mientras no se pruebe o resulte claramente lo contrario.
>
> Lo anterior no quiere decir que corresponda necesariamente al procesado suministrar la prueba contra la presunción de dolo. 'Quien se halla en el deber de buscar la prueba en contrario de la presunción del dolo genérico es el mismo que debe dar la prueba suficiente para destruir la presunción de inocencia, o sea el Estado'. 16. La diferencia entre las dos presunciones es la siguiente: la prueba en contra de la presunción de inocencia debe *producirla* el Estado para que pueda deducirse responsabilidad penal y condenarse al procesado. La prueba contra la presunción de dolo debe *buscarla* pero no es necesario que la encuentre. En el primer caso, si no se produce la prueba en contra de la presunción de inocencia, queda esta en pie. En el segundo caso, si no se encuentra la prueba contra la presunción de dolo, se debe admitir que el delito se cometió intencionalmente.
>
> Como las presunciones se establecen con fundamento en lo que sucede de ordinario, es natural que lo presumible en las infracciones penales es el dolo, no la culpa, pues 'los delitos intencionales son la regla general, los delitos culposos son la excepción' (ibídem). Sin embargo, el juez penal tiene obligación de buscar por todos los medios a su alcance, la prueba en contrario, pues 'la presunción de intencionalidad no funcionará sino cuando en el proceso no haya sido posible producir la prueba de la culpa o del caso fortuito'.

La presunción de dolo genérico se proyecta, tanto sobre el delito perfecto como sobre el delito imperfecto, pues lo inacabado es la tentativa y en el delito frustrado es la acción física, no el dolo.

Pero como el agente ha podido querer un resultado y obtener otro diferente, conviene advertir que 'el dolo genérico penal debe presumirse con respecto al resultado obtenido por el agente del hecho, y probarse con respecto al resultado no obtenido' (ibídem). Ejemplos: si una persona mata a otra debe presumirse, con presunción legal, que obró intencionalmente, es decir, con propósito de matar. Si el procesado alega que solo tuvo intención de lesionar, debe probarse este propósito para que pueda admitirse el homicidio preterintencional en vez del intencional. Y si sostiene que no mató de propósito sino por imprudencia, se debe probar esta ausencia de dolo para que sea procedente la calificación de homicidio culposo en vez de homicidio intencional.

Sobre la cuestión que nos ocupa dice FLORIAN lo siguiente:

'Pero si debe descartarse por completo una presunción de dolo en sentido técnico, sea legal o de derecho, también debe considerarse como totalmente erróneo y exagerado exigir siempre una prueba autónoma, una comprobación especial y específica del dolo.

'A menudo, una vez probado el hecho y la forma como se desarrolló, la convicción acerca del dolo surgirá por sí misma, sin necesidad de investigación especial, y esto no ya porque el dolo se presuma en alguna forma, sino porque acompaña lógicamente al hecho, es el índice, la síntesis lógica y moral del hecho; por el contrario, la demostración del dolo será necesaria cuando aparezcan motivos de duda o excepciones, o cuando se adviertan modalidades de la voluntad, diversas del contenido del dolo específico requerido en el caso concreto, o incompatibles con aquel ...'.

16. C. A. Cabal, ob. cit., pág. 62.
17. De las pruebas penales, t. I. De la prueba en general, Bogotá, Editorial Temis, pág. 360".

Pero aparte de lo que se deja transcrito, analizaremos primeramente los testimonios que en este proceso han vertido ASADIA DIGNA DE SÁNCHEZ y ELIÉCER DE LOS SANTOS ARAÚZ MORALES, a quienes cita la defensa para expresar que, a su juicio, el hecho investigado es de tipo culposo y no doloso.

La primera testigo, ASADIA DIGNA DE SÁNCHEZ, el mismo día en que sucede el hecho, 28 de mayo de 1988 (fojas 67-76), sobre lo ocurrido manifiesta que en esa fecha su jefe, de apodo "FULO" (LUIS ALBERTO CONTRERAS VEITÍA) y JUAN NAPOLEÓN RODRÍGUEZ discutieron, éste recogió una botella de cerveza y su jefe cogió hacia la cantina y sacó una pistola calibre 25, calmándose el problema porque un tercero intervino, pero al momento JUAN NAPOLEÓN RODRÍGUEZ tomó dos botellas de cerveza y se las lanzó a su jefe "pero ninguna de la (sic) llegó tocarlo, en eso mi jefe dio la media vuelta y dio unos pasos hacia JUAN hacia afuera de la cantina, al NAPOLEÓN al verlo a mi jefe con el arma de fuego en la mano, iba saliendo por la puerta principal NAPOLEÓN, de ahí mi jefe hizo disparo par el lado del paso, el cual lo hizo con la mano derecha entonces vino mi jefe nuevamente hizo otro disparo contra el piso pero al parecer el arma se le subió un poco arriba, nunca pensamos que el joven NAPOLEÓN éste tuviera (sic) herido en la forma que se fue corriendo", agregó en esta declaración que su jefe le hizo el primer disparo aproximadamente a diez metros y "el segundo lo hizo de siete pasos, porque el mismo caminó hacia adelante, al igual al principio él estaba de frente hacia la persona pero en la segunda ocasión el joven en mención estaba de espalda para salir corriendo". Además expresó que FULO después de hacer los disparos se quedó como tres o cuatro minutos en la cantina y después salió hacia afuera para ver si veía a JUAN y al no verlo "se devolvió a dar la orden para que cerraran el local, lo cual fue así, pero nunca él tiró para matarlo".

En la ampliación de su declaración, ASADIA DIGNA DE SÁNCHEZ (f. 144 y 145)

confirma que en el lugar donde ocurrieron los hechos "había buena visibilidad" lo que también expresa en la declaración que rinde en la reconstrucción de los hechos (f. 219-226) donde también expresa que su jefe "se paró e iba con dirección a la casilla del disjockey a apagar la música al él estar entrando el occiso le lanzó dos botellas pero ésta (sic) fue una, al entrar mi jefe en eso NAPOLEÓN retrocedió unos pasos atrás y le tiró la otra botella, de allí mi jefe se devolvió y apuntó hacia abajo con dirección a los pies de NAPOLEÓN y en eso que iban caminando hacia la salida con dirección a NAPOLEÓN volvió a hacer el otro disparo hacia los pies, de ahí NAPOLEÓN echó a correr por la salida del local, de ahí vino FULO y se sentó frente a la barra, pasaron como tres minutos y yo desde adentro de la barra le dije a FULO ve a ver si heriste al muchacho o no, él se levantó y fue hacia la salida, y regresó y me dijo no le pegué en el pie porque no había señal de sangre".

De lo que expone esta testigo se aprecia que se dio una discusión entre JUAN NAPOLEÓN RODRÍGUEZ JUAN y LUIS ARNULFO CONTRERAS VEITÍA, que aquel empleaba botellas de cerveza y éste, con un revólver calibre 25, aproximadamente a diez metros y a siete pasos, hizo dos disparos hacia donde estaba RODRÍGUEZ JUAN y que esos dos disparos, al decir de la testigo en la versión dada en su primera declaración, uno fue "para el lado de los pies" y el otro "contra el piso, pero al parecer el arma se le subió un poco arriba" y en su declaración en la diligencia de reconstrucción, a foja 220 indica que los dos disparos fueron dirigidos hacia los pies, ya no hacia el piso. Lo cierto es que, en uno u otro caso, dirigir dos disparos hacia el sitio en que está una persona sea hacia el piso o hacia los pies, en el momento en que se discute con dicha persona y existe un enfrentamiento entre ambos, a diez metros y a siete pasos, revela que se está en presencia de una conducta criminal dolosa, muy distinta a la de aquel que "realiza el hecho legalmente descrito por inobservancia del deber de cuidado que le incumbe de acuerdo con las constancias y sus condiciones personales y en el caso de representárselo como posible actúa confiado en poder evitarlo" (artículo 32 del Código Penal).

La afirmación que hace la testigo de que "nunca pensamos que el joven NAPOLEÓN estuviera herido" y de que no se sabía "si estaba vivo o muerto" no tiene ninguna relevancia para la calificación del hecho ocurrido y su manifestación de que su jefe FULO (LUIS ARNULFO CONTRERAS VEITÍA) nunca tuvo intención de cometer el hecho resulta un tanto desvirtuada cuando en su declaración en la diligencia de reconstrucción de los hechos expresa que ella le dijo a FULO "ve a ver si heriste al muchacho o no". Es más, la testigo habla primeramente que los disparos fueron dirigidos al piso pero "al parecer el arma se subió un poco arriba" mientras que en posterior declaración manifiesta que los disparos fueron dirigidos hacia los pies. La expresión que usa la testigo, "al parecer el arma se le subió un poco arriba" no denota ninguna percepción propia de su parte sino que evidentemente responde a una apreciación subjetiva de la declarante.

En la diligencia de reconstrucción de los hechos, a la que asistieron los peritos en balística JOSÉ SAMANIEGO y JOSÉ CHAVARRÍA, el defensor sustituto del imputado interrogó a dichos peritos y aún cuando el arma que disparó el día de los hechos LUIS ARNULFO CONTRERAS VEITÍA no se ha logrado traer al proceso, los peritos expresan que "debido a la evidencia encontrada en el lugar de los hechos, cabe la posibilidad que se haya utilizado un arma de fuego tipo pistola calibre 25 normalmente o más común de funcionamiento semi-automático" ... "que es necesario manipular la corredera para llevar la munición a la recámara para posteriormente ejercer presión sobre el disparador para que se efectúe un disparo, si previamente no se ha llevado una munición a la recámara, éste tipo de arma no puede producir un disparo a menos que el portador o tirador del arma posterior a que se efectúen los disparos haya llevado una munición a la recámara a lo que se dice popularmente 'ANDAR CON EL ARMA CARGADA'" y cuando la defensa interroga a los peritos sobre si es posible "que una persona dispare hacia un objetivo y acierte en otro lugar no destinado o viceversa" los peritos responden "cuando las armas de fuego son disparadas, ese proyectil va hacia donde está dirigido la boca del cañón, a menos que el disparo se considere de rebote y el proyectil describa una trayectoria desigual o diferente al punto de impacto donde estaba dirigido la boca de fuego del arma o cañón". Agregan los peritos que para "el perfecto conocimiento de una arma de fuego se necesita entrenamiento dictado

por personal idóneo en la materia, pero las armas de fuego actualmente cuentan con mecanismos sencillos de operar que una persona con poco conocimiento en la materia puede hacer uso de ella" y siguen expresando los peritos que "no podríamos definir si el tirador o el que utilizó el arma hizo el uso adecuado de los aparatos de puntería y de la presión ejercida sobre el disparador, pero debido a los resultados consignados el uso de la misma arrojó un resultado positivo ya que se encontró una persona lesionada" y sostienen los peritos que uno de los disparos no dio en el blanco porque "tanto como (sic) el sindicado como el occiso se encontraban en movimiento".

No es cierto, como afirma el recurrente, que los peritos en balística "no descartan las posibilidades de un accidente producto de la inexperiencia o impericia en el uso o manejo de armas por parte de nuestro representado". El informe de balística es claro cuando explica el mecanismo que es necesario emplear para el disparo de una pistola calibre 25, cuando señala que al dispararse un arma de fuego el proyectil "va hacia donde está dirigido la boca del cañón, a menos que se considere de rebote"; cuando indica que "debido a los resultados consignados el uso del arma arrojó un resultado positivo"; cuando explica que un disparo no dio en el blanco "porque tanto el imputado como el occiso estaban en movimiento"; cuando advierte que "actualmente las armas de fuego tienen mecanismos sencillos de operación que personas con poco conocimiento pueden hacer uso de ellas".

En todo caso, si se pretende alegar que una persona es inexperta en el uso de un arma, esa afirmación debe ser acreditada, por cuanto es de presumirse que quien porta y emplea un arma de fuego es en razón de que conoce el mecanismo apropiado para utilizarla. En el presente hecho, el proyectil como los dos casquillos fueron analizados (ver foja 247) por la Sección de Balística de la Policía Técnica Judicial donde se estableció que fueron disparados por un arma de fuego calibre 25 y los casquillos percutidos por una pistola calibre 25 e indicar la posibilidad que la herida fuera ocasionada "por rebote" es desconocer lo que se apreció en la necropsia correspondiente en el sentido de que la trayectoria de la herida mortal es de "arriba hacia abajo, con un ángulo de diez grados a quince grados, de adelante hacia atrás en línea recta".

Por ello también es insostenible la afirmación de la testigo ASALIA HINÉS DE SÁNCHEZ cuando declara que el disparo se dio en el momento en que JUAN A. RODRÍGUEZ JUAN se encontraba de espaldas a su agresor, pues igualmente en dicho protocolo se dejó expresado que "el orificio de entrada se localizó a nivel de región para-esternol izquierda en cuarto espacio intercostal" y la herida fue ocasionada con arma de fuego en tórax, que le perforó el corazón causándole la hemorragia intratoráxica masiva que le produjo la muerte", todo lo cual evidencia que el hoy occiso se encontraba de frente al sindicado al momento del disparo.

El recurrente expresa que el testimonio de ELIÉCER DE LOS SANTOS ARAÚZ "coincide con el de ASALIA en cuanto a que se retiraron del lugar convencidos de que los disparos no impactaron a RODRÍGUEZ y seguros de que lo ocurrido no tenía mayor trascendencia" y a esta afirmación señalamos que el hecho de que éstas personas se hubieran retirado bajo la creencia de que lo ocurrido carecía de significación no tiene ninguna relevancia para la calificación del hecho en una u otra forma dolosa o culposa, pues son otros muy distintos los factores que hay que atender para tal efecto.

Conviene destacar que ambos testimonios, el de ASALIA y el de SANTOS ARAÚZ coinciden en cuanto a la discusión y enfrentamiento que se dio entre JUAN y LUIS pero al narrar el preciso momento del hecho SANTOS ARAÚZ expresa, contrario a lo expuesto por ASALIA, que "en ese mismo instante que NAPOLEÓN le tiraba las botellas a LUIS yo escuché dos disparos seguidos en eso NAPOLEÓN se dio la vuelta y salió corriendo para la parte de afuera del local tomando hacia la derecha" (fojas 128) y al declarar sobre esta parte en la diligencia de inspección ocular expone que "cuando vi que NAPO tiró la botella en seguida escuché los dos disparos de allí NAPO se dio la vuelta en la entrada del local y se fue corriendo".

Otro aspecto que destaca el apelante es el relativo a la buena visibilidad que manifiesta la testigo ASALIA HINÉS DE SÁNCHEZ que existía en el local del

suceso, lo que le permitía "observar cualquier hecho que se diera fuera del mostrador" sobre este aspecto, señalamos lo que el testigo presente en el lugar de los hechos ELIÉCER DE LOS SANTOS ARAÚZ, manifestó sobre la iluminación del local en el momento en que se dieran los dos disparos. En su declaración, de fojas 126-130 y concretamente a foja 129 expresa que el local "solamente estaba alumbrado la luz del bar y la que refleja de la parte de afuera del local" y en su declaración rendida en la inspección indica que en el local "había poca iluminación, estaba el televisor prendido y los foquitos de navidad que se observan allí y la luz de afuera del local".

Tampoco es absolutamente cierto, como lo insinúa el recurrente, que el perito planimétrico de la Procuraduría haya expresado en su informe que ASALIA tenía buena visibilidad, pues lo que dicho funcionario expresa en su informe, foja 232, es que tenía buena visibilidad para apreciar cualquier hecho, si se encontraba dentro de su campo visual tanto horizontal como vertical, aunque no con la claridad y detalles con que se puede presenciar un hecho a plena iluminación del día.

Por último, el recurrente agrega que "tampoco hay que pasar por alto el testimonio del guardia de seguridad del Aeropuerto de Changuinola que asegura haber visto a otro sujeto con diferentes características a las de mi defendido perseguir al hoy difunto". A esa afirmación se manifiesta lo siguiente. Ya antes se ha visto que LUIS ARNULFO CONTRERAS, instantes después de producirse los disparos, salió del local para averiguar si había herido a JUAN A. RODRÍGUEZ JUAN y la testigo ASALIA HINÉS DE SÁNCHEZ expresó que LUIS "vestía una camisa rosada clara mangas largas, un pantalón oscuro y zapatos" (foja 128) y el celador al que hace referencia el recurrente ELÍAS ARRACEDA MONROY a fojas 84, declara que vio corriendo a un "sujeto que vestía una camisa blanca por fuera del pantalón la cual flameaba al correr, también tenía un pantalón de tono oscuro" y a fojas 181 reitera que se trataba "de una persona que vestía camisa manga larga, como color blanco, pantalón oscuro" y sostuvo que al conversar con el celador de LADA, éste le dijo que él vio también a otra persona, que ambos se fueron hacia el callejón y que después que pasó el primero "pasó el sujeto que yo miré vestido con camisa manga larga y pantalón oscuro".

ROBERTO PINEDA, a foja 72, efectivamente declara que vio a dos personas y después de describir al primero, el hoy difunto JUAN A. RODRÍGUEZ JUAN, describe al segundo y expresa que "tenía un pantalón negro y camisa blanca con zapatos negros", todo lo cual nos lleva a la conclusión de que esta segunda persona era LUIS ARNULFO CONTRERAS VEITÍA tratando de averiguar si había lesionado a JUAN A. RODRÍGUEZ JUAN, conclusión a la que también se arriba con lo expuesto por ASALIA HINÉS DE SÁNCHEZ y ELIÉCER DE LOS SANTOS ARAÚZ, en el sentido de que LUIS ARNULFO después de ocurrido el hecho, salió en busca de JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ JUAN para ver si lo había herido con los disparos que le hiciera.

De todo lo que se deja expuesto, concluimos que existen razones suficientes para estimar como dolosa la conducta del procesado y en consecuencia aprobar el pronunciamiento encausatorio apelado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto de 29 de mayo de 1996, proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa criminal, por la vía en que interviene el jurado de conciencia, contra LUIS ARNULFO CONTRERAS VEITÍA (A) "FULO", por presunto infractor de las normas contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, o sea, por el delito genérico de homicidio en perjuicio de JUAN NAPOLEÓN RODRÍGUEZ JUAN, hecho ocurrido el domingo 28 de mayo de 1995, en horas de la madrugada, en el local denominado BAR-RESTAURANTE-DISCOTEC "El Señorial", ubicado en el Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO CONSULTADO

SUMARIAS SEGUIDAS A MIGUEL CRUZ MARTÍNEZ MENDIETA Y EDUAR JAVIER AGUDELO MORÁN, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE NILSON JAIRO RAMÍREZ CÓRDOBA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia ha remitido a esta Sala, en grado de consulta, auto calendado 18 de octubre de 1996, mediante el cual se sobresee provisionalmente a Miguel Cruz Martínez Mendieta y a Eduar Javier Agudelo Morán, sindicados por la comisión del delito de homicidio en perjuicio de Nilson Jairo Ramírez Córdoba.

El cuaderno penal permite conocer que en horas de la noche del 29 de julio de 1995, en la comunidad de Viejo Veranillo, sector ubicado en las inmediaciones de la vía Bolívar, ciudad de Panamá, los agentes del orden público Miguel Cruz Martínez Mendieta y Eduar Javier Agudelo Morán, efectuaron varios disparos con sus armas de fuego contra Nilson Jairo Ramírez Córdoba, presunto autor de un delito de robo cometido en perjuicio de Bolívar Yunier Vásquez Villarreal. Según las consideraciones médico-legales consignadas en el Protocolo de Necropsia, la muerte de Ramírez Córdoba ocurrió a consecuencia de "A. HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO. B. SHOCK HEMORRÁGICO" (f. 73).

Para llegar a la decisión que ahora se consulta, el tribunal a-quo consideró "que los argumentos expuestos por los imputados no son del todo concluyentes en cuanto al uso de violencia desplegada y ante la endeble investigación, se impone una medida liberatoria de carácter provisional" (f. 209). No obstante, a juicio de esta Sala las piezas de convicción que obran en la encuesta sumarial permiten colegir que la actuación de los agentes Martínez Mendieta y Agudelo Morán se encuentra amparada en la excepción de legítima defensa o defensa necesaria, causa de justificación que exige la concurrencia de cuatro requisitos legales para su configuración.

El primero de ellos, exige la comprobación de una agresión injusta y actual por parte de la víctima, circunstancia que se desprende de la declaración indagatoria de Martínez Mendieta, quien relata que el día del hecho de sangre "nos interceptó ... BOLÍVAR JAIME VILLARREAL ... víctima de un Robo a Mano Armada ... vimos al sujeto ... se bajó el Agente de la Rosa quien fue en persecución de él ... le dijo `ALTO, POLICÍA ... el sujeto hizo caso omiso al llamado de atención del Agente quien hizo un disparo al aire y posteriormente hice yo otro disparo al aire, el sujeto siguió corriendo y antes de llegar a la vereda que entra a Viejo Veranillo ... se voltea y nos encañona con un arma de fuego ... y allí yo le disparé al sujeto, le efectué un disparo y simultáneamente AGUDELO que manejaba hizo dos disparos al sujeto" (fs. 97-98).

De igual manera, el imputado Agudelo Morán, al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria, manifestó que "el anticocial (sic) ... inició la fuga dándole el agente DE LA ROSA las voces de alto, haciendo caso omiso ... de la Rosa efectuó una detonación al aire ... el Sargento MARTÍNEZ efectuó una detonación también al aire y el sujeto hizo caso omiso. Cuando el antisocial llega a la entrada que conduce hacia la Barriada de Viejo Veranillo, se detiene y hace un giro apuntando hacia el patrulla, con el arma por lo que la reacción simultánea al ver el peligro inminente, yo efectué dos detonaciones y el Sargento MARTÍNEZ efectuó una detonación" (fs. 109-111).

La alegada agresión injusta y actual experimentada por los sindicados es corroborada por las declaraciones de Tomás Alberto De La Rosa Bethancourt: "me bajé del patrulla, dándole la voz de alto al ciudadano ... comenzó a darse a la fuga ... sacando a relucir un arma de fuego ... hice una detonación al aire de advertencia ... el sujeto se detuvo y se volteó hacia el patrulla y allí

simultáneamente escuché tres (3) detonaciones" (fs. 104-105), y Abdiel Pittí Ríos: "el Agente DE LA ROSA ... le dio voz de alto al sujeto e hizo una detonación al aire, pero el sujeto siguió corriendo ... se metió su mano a la altura de la cintura y dio vuelta apuntando hacia el patrulla y allí fue donde yo escuché inmediatamente la reacción de los policías en donde escuché unas detonaciones" (f. 161).

De otra parte, se aprecia que los imputados Martínez Mendieta y Agudelo Morán, como miembros de la Fuerza Pública, emplearon sus armas de fuego reglamentarias como el único mecanismo racional que tenían a su alcance para repeler la situación de peligro a que se encontraban expuestos. Valga señalar que la víctima utilizó una "pistola, calibre 22 corto, marca LLAMA, serie N° 60977" (f. 199).

Por lo que hace a la exigencia legal sobre la imposibilidad de eludir la agresión de otra manera, resulta importante destacar que, previo a los disparos que afectaron la anatomía del occiso, los agentes policiales efectuaron varios disparos al aire para evitar que escapara. No obstante, Ramírez Córdoba no sólo huyó sino que trató de utilizar su arma de fuego contra ellos, por lo que indica el sindicado Agudelo Morán que "la reacción simultánea al ver el peligro inminente, yo efectué dos detonaciones y el Sargento MARTÍNEZ efectuó una detonación" (f. 110).

Ahora bien, el hecho de que el peritaje balístico realizado al arma que portaba el occiso determinara que "La Pistola cuestionada presenta anomalía, no produce disparos (aguja percutora rota)" (f. 200), no es circunstancia que pueda variar el status procesal de los sindicados pues, como bien lo señaló el a-quo, es una "eventualidad que obviamente desconocían los uniformados durante el desarrollo de los eventos" (f. 208). Y, es que el sólo hecho de que el occiso portara un arma de fuego y la dirigiera hacia donde se encontraban las unidades de policía, racionalmente debía hacer pensar a los imputados que su vida se encontraba en peligro, por lo que su acción de disparar primero no puede considerarse viciada de ilegitimidad.

Finalmente, la Sala advierte que en autos no existe ningún elemento probatorio que evidencie que los sindicados Martínez Mendieta y Agudelo Morán hayan realizado alguna conducta que provocara el hecho punible investigado. Por el contrario los sumariados, como miembros de la Fuerza Pública, cumplían en ese momento con su deber legal de salvaguardar el orden social, intentando detener con voces de alto y disparos de advertencia al autor de un delito de robo.

Estas comprobaciones fácticas permiten favorecer a los imputados con un sobreseimiento definitivo, según lo establece el ordinal 3° del artículo 2210 del Código Judicial pues, como viene dicho, su proceder encuentra amparo en la causa de justificación consagrada en el artículo 21 del Código Penal, referente a la causa de justificación que la ley denomina "legítima defensa".

Por las anteriores consideraciones, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el auto de 18 de octubre de 1996 dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y, en su lugar, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE a Miguel Cruz Martínez Mendieta y Eduar Javier Agudelo Morán en las sumarias instruidas por el homicidio de Nilson Jairo Ramírez Córdoba.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE SOBRESEIMIENTO APELADO

APELACIÓN DE AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO

A RICARDO ROGELIO TORRES DEER, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE HAROLD GEORGE LAWTOS MARSDEN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 1° de agosto de 1996 el Segundo Tribunal Superior de Justicia dictó un auto de **SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL** a favor del señor **RICARDO ROGELIO TORRES DEER** por los delitos de robo y homicidio cometidos en perjuicio del señor Harold George Lawton Marsden (fs. 272-283).

Ante esa decisión jurisdiccional, la licenciada Cecilia R. López F., Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, anunció recurso de apelación, el cual sustentó dentro del término legal.

Concedido el recurso en el efecto que determina la ley, corresponde a esta superioridad el examen de los puntos disentidos.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

La licenciada López discrepa de los planteamientos expuestos por el tribunal a-quo al afirmar que constan en autos suficientes indicios graves que vinculan al imputado en la comisión del hecho punible investigado.

Señala así, que la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos resultó positiva; que la señora Rosa de Lawton dio la descripción del sujeto que agredió a su esposo a los detectives de la Policía Técnica Judicial; que de esa entrevista se ratificó el detective Higinio Fidel Góndola, quien además manifiesta que por medio de informantes lograron enterarse que el señor Ricardo Rogelio Torres (a) Ricacha pudiera ser el presunto homicida, conjuntamente con un sujeto apodado Juan o Fulo Merma y que una vez aprehendido el mismo, correspondía a la descripción dada por la señora Lawton y la evidencia recuperada -pantalón- era de la medida del imputado. Igual información brindan los detectives José Demera y Carlos Olmedo Pimentel Córdoba.

También menciona la apelante las declaraciones juramentadas de Danilo Williams, quien afirma que el imputado no estuvo con él la madrugada de los hechos, declaración mantenida en la diligencia de careo con el imputado.

Hace alusión a fallos de la Sala Segunda de lo Penal, referentes a lo que se debe entender por indicio y cómo deben ser apreciados por el juez. Concluye que los requisitos exigidos por el artículo 2222 del Código Judicial se han acreditado en autos, por lo que con los elementos de pruebas allegados a la investigación se debe elevar la causa al plenario, para que sea en esa instancia donde se debata la responsabilidad penal del señor Torres Deer (fs. 293-297).

OPINIÓN DE LA DEFENSA TÉCNICA

El licenciado Danilo Montenegro A., miembro del Instituto de Defensoría de Oficio, indica que en otras circunstancias la diligencia en reconocimiento en rueda de detenidos podría considerarse como indicio, pero que en esta ocasión no lo es, porque quien la realizó había declarado antes en la Personería Segunda Municipal que ella no le pudo ver la cara al agresor de su esposo.

Por otra parte, señala la defensa que la señora Rosa Bohorquez de Lawton no fue categórica, toda vez que al señalar al imputado manifestó que era la persona que más **se parece** a la persona que mató a su esposo.

En lo que respecta a los informes del detective Higinio Fidel Góndola, referentes a entrevistas con la señora Lawton, las mismas quedan desvirtuadas por ésta en su declaración jurada. En cuanto a las informaciones anónimas, estima que no tienen carácter de prueba, ni siquiera indiciaria.

Sobre el testimonio de Danilo Agustín Williams, lo considera contradictorio y carente de fuerza probatoria, además que no vincula a Torres Deer en el ilícito investigado.

Por todas esas razones solicita se confirme el auto apelado (fs. 300-302).

ANÁLISIS DE LA SALA

La presente investigación penal trata de la muerte violenta del señor Harold George Lawton Marsden, de 80 años de edad, a consecuencias de heridas producidas con arma blanca, hecho ocurrido a primera hora de la madrugada del día 16 de febrero de 1995, en su residencia ubicada en calle 8 Roosevelt y Santa Isabel, de la ciudad de Colón.

La única persona presente al momento del fatal incidente fue la esposa del occiso, señora Rosa Bohorquez de Lawton, de 72 años de edad, quien en declaración jurada rendida el 18 de abril de 1995 explica que se encontraban durmiendo cuando escuchó un ruido, al abrir los ojos vio una sombra en el otro cuarto, despertó a su esposo indicándole lo que había visto, éste se sentó en la cama y trató de buscar su revólver, ella se asomó por una rendija de la puerta y vio a un sujeto agachado, en momentos en que se lo comunicaba a su esposo, el sujeto se le abalanzó a éste como una fiera, sin darle tiempo a defenderse. Señala, que por miedo ella salió pidiendo ayuda y al abrir la puerta a los vecinos, el sujeto se había escapado por el cielo raso de la cocina, llevándose el arma de fuego de su esposo.

En cuanto a los rasgos del sujeto, afirma que sólo le vio parte del brazo y que era un poco claro. Explica que la cara no se la pudo ver porque no tenía los lentes puestos y todo ocurrió de manera rápida; además de que la luz estaba apagada y la ventana tenía cortina y cartones para que no entrara la luz. Al preguntársele si podría reconocer al sujeto que agredió de muerte a su esposo, es categórica al afirmar que es difícil, porque lo único que le pudo ver fue el brazo (fs. 64-65).

Esta declaración, tal como lo señala el tribunal a- quo, es contradictoria con la diligencia de reconocimiento al procesado, practicada aproximadamente siete meses después de los hechos.

Si bien consta el Informe de Entrevista signado por los detectives Higinio Fidel Góndola y Erving Hurtado, en donde afirman que la señora Lawton describió al sujeto que hirió de muerte a su esposo, la misma es totalmente contraria a su declaración jurada.

Ante esa realidad y al no existir testimonio que involucre al imputado con la comisión del ilícito, se estima prudente el sobreseimiento provisional decretado a su favor. Esta decisión, por su propia naturaleza jurídica, permite que en el caso de que surjan verdaderos elementos incriminativos se pueda reabrir la investigación, si no ha prescrito la acción penal.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto apelado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A LUIS ENRIQUE CALVO VARGAS Y JOSÉ DE LOS SANTOS CÁRDENAS VARGAS, SINDICADOS POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DE ZOILO VARGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Los licenciados Alcides Gabriel Zambrano González, defensor de oficio de Luis Enrique Calvo Vargas, y José Luis Varela, quien actúa en su calidad de defensor técnico de José De Los Santos Cárdenas Vargas, han interpuesto sendos recursos de casación en el fondo contra sentencia de 21 de junio de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual, previa reforma de la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de Los Santos, se condena a Calvo Vargas y a Cárdenas Vargas a la pena de 5 años de prisión, como responsables del delito de robo cometido en perjuicio de Zoilo Vargas.

Vencido el término de lista que establece el artículo 2443 del Código Judicial, le corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad de los recursos propuestos.

Con relación al libelo de casación presentado por el licenciado Zambrano González, se observa que los motivos que sirven de sustento a la causal invocada, cual es la prevista en el numeral 9 del artículo 2434 del Código Judicial, contienen cargos, no explicados, desprovistos de sustento fáctico apreciable, lo que impide conocer la injuridicidad que se le atribuye al fallo. Así, vemos que en el primer motivo se sostiene que el tribunal ad-quem determinó "que la revelación que efectuó mi defendido ... no obliga al juzgador a disminuirle la pena, sino que ... se trata de una facultad discrecional" (f. 649); en el segundo se indica que Calvo Vargas vinculó a José De Los Santos Cárdenas y Lucrecio Vergara González en la ejecución del hecho punible, mientras que el tercero se refiere a que el señalamiento de Calvo Vargas "permitió juzgar y condenar a JOSÉ DE LOS SANTOS CÁRDENAS" (f. 649). Tal como se aprecia, estos planteamientos carecen de **cargos concretos de infracción**, que pongan en evidencia los vicios o errores in iudicando supuestamente cometidos por el juzgador de segunda instancia al proferir su decisión. Esta comprobación trae como resultado que el vicio de injuridicidad no emerja, por encontrarse formulado inadecuadamente.

En lo que respecta a las disposiciones legales violadas, el casacionista afirma que el artículo 2112 del Código Judicial fue infringido en forma directa, por omisión (f. 650). Esta Superioridad ha sostenido que el concepto de violación directa por omisión deviene "cuando se omite la aplicación de la norma al caso o se hace caso omiso de su contenido" (Registro Judicial, noviembre de 1995, pág. 282). Ahora bien, si se tiene en cuenta que la resolución judicial impugnada establece que "la disminución de pena a que se refiere el artículo 2112 del Código Penal (sic) es una facultad discrecional del juzgador" (f. 623), mal puede alegarse entonces que el artículo 2112 resultó conculcado por omisión, cuando ese precepto legal fue examinado por el tribunal ad-quem para definir la situación jurídica de los imputados.

Con relación a la alegada infracción del artículo 186 del Código Penal, la Sala advierte que el casacionista se limita a indicar que ha sido conculcado "en concepto de aplicación indebida" (f. 651), sin explicar de qué manera la violación de esta disposición penal ha influido decisivamente en la sentencia que se impugna.

Por lo que hace al recurso de casación interpuesto por el licenciado Varela, se comprueba que la causal invocada no se compadece con los motivos. Ello es así porque se menciona como causal la "Interpretación errada de la ley sustancial al calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal" (f. 658), en tanto que como motivos se señala que "La Sentencia impugnada se opuso a la disminución de la pena de ... CÁRDENAS VARGAS, quien contribuyó ... a que fuera llamado a juicio" (f. 658), que no se tomó en cuenta "la oferta del funcionario de instrucción ... relacionada con la

disminución de la pena" (f. 658), que se "desestimó la confesión como atenuante" (f. 659), que no se ha "contemplado ningún aumento ni disminución al mínimo de la pena de cinco (5) años" (f. 659), y que no se tomó en cuenta "el método legal previsto para morigerar la sanción" (f. 660). Estos argumentos no guardan relación con el fin que persigue la causal, cual es determinar si el juzgador ciertamente le otorgó a la proposición jurídica aplicable al caso un sentido y alcance que no tenía de conformidad con su espíritu y finalidad, es decir, si comete un error cuando la interpreta (Cfr. FÁBREGA P., Jorge y GUERRA DE VILLALAZ, Aura. Casación, Impresora Varitec, S. A., San José, Costa Rica, 1995, pág. 324).

En lo que respecta a las disposiciones legales infringidas, este casacionista afirma que el artículo 2112 del Código Judicial ha sido infringido en concepto de violación directa por omisión (f. 660). No obstante, como se vio en párrafos precedentes, esta disposición legal fue considerada por el tribunal ad-quem, por lo que mal puede decirse que "No se aplicó en la decisión" (f. 660). Lo mismo ocurre con la supuesta infracción del artículo 2528-D del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, pues la medida jurisdiccional censurada también hace referencia a este precepto legal, señalando que "a los imputados se le fijó la pena base y se les disminuyó una tercera parte con fundamento en el artículo 2528-D del Código Judicial" (f. 622).

Otra disposición que se aduce como infringida es el artículo 66 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión. Para la Sala tal afirmación resulta incongruente con el argumento utilizado para sustentar la infracción alegada, pues si se dice que "La sentencia reconoce la existencia de la confesión del recurrente, pero no la toma en cuenta para disminución de la pena" (f. 662), el concepto que debió invocarse era el de violación directa por comisión, que sobreviene "cuando habiéndose aplicado la disposición que regula la situación planteada en el proceso, se desconoce un derecho claramente reconocido en ella, es decir, que se aplica la norma en forma incompleta".

Esta Corporación de justicia ha manifestado que "si el recurso adolece de coherencia entre los motivos, la disposición legal que se dice infringida y la causal aducida, de nada sirve cumplir en el libelo con cada uno de los requisitos previstos en el artículo 2443 del Código Judicial, cuando el recurso carece en sí mismo de sustento lógico-jurídico, lo que constituye un defecto de fondo que impide la admisión del recurso" (Registro Judicial, mayo de 1994, pág. 272).

Por lo antes expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE los recursos de casación en el fondo interpuestos por los licenciados Alcides Gabriel Zambrano González, defensor de oficio de Luis Enrique Calvo Vargas y José Luis Varela, apoderado judicial de José De Los Santos Cárdenas Vargas, contra la sentencia de 21 de junio de 1996 proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE A MOSTAFA NOR ALDEN O LUIGI MANDIS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su admisibilidad se encuentra pendiente recurso

extraordinario de casación en el fondo interpuesto por el licenciado Mauro Antonio Pérez Cittadini, en su condición de apoderado judicial del señor **LUIGI MANDIS** o **MOSTAFA NOR ALDEN**, contra la sentencia de segunda instancia dictada el 15 de marzo de 1996 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Pues bien, observa la Sala que la resolución impugnada es susceptible del recurso de casación, así como que el mismo ha sido interpuesto oportunamente por persona hábil. Sin embargo, al verificar los requisitos estructurales de formalidad, advierte la Sala que, la causal ha sido invocada de modo deficiente.

En efecto, el recurrente transcribe como única causal el ordinal 12 del artículo 2434 del Código Judicial, que a la letra dice: "Cuando la sanción impuesta no corresponda a la calificación aceptada respecto del delito, o a la responsabilidad del imputado o a las circunstancias que modifican esa responsabilidad".

La lectura atenta del citado precepto pone en evidencia que en realidad se trata de una causal compuesta, pues en ella se presentan tres causales o supuestos por los cuales se puede impugnar la sentencia de segunda instancia.

La Corte ha sostenido a través de su jurisprudencia que cuando se trate de causales compuestas, el casacionista está en la obligación de identificar cuál, de entre los diversos motivos que hacen viable la impugnación, es el que estima ha sido violado por el tribunal a quem.

Por otro lado, en cuanto a la sección de las normas infringidas y el concepto de la infracción no fue desarrollada de acuerdo a las exigencias jurisprudenciales y el recurrente no ha procedido de acuerdo a la técnica casacionista. No presenta cargos de injuridicidad que comprueben que las normas han sido violentadas, sino que presenta esta sección como si fuese un escrito de apelación en donde el recurrente presenta su disconformidad con los mecanismos utilizados por el juzgador al momento de fijar la pena a cumplir por su representado.

No cabe duda de que lo descrito contradice la técnica casacionista e impide que la Corte pudiera hacer, en su debida oportunidad, un análisis de los cargos de injuridicidad que se formulan contra la sentencia recurrida.

Por ello, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por el licenciado Mauro Octavio Pérez Cittadini, en su condición de apoderado judicial de LUIGI MANDIS o MOSTAFA NOR ALDEN, contra la sentencia de segunda instancia dictada dentro del proceso que se le sigue a su representado por delito contra la Salud Pública.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MARCOS EMILIANO UBARTE DUCASA SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Se encuentra pendiente de decisión la admisibilidad del recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado BERNARDINO GONZÁLEZ JR., en su

condición de abogado defensor de **MARCOS EMILIANO UBARTE DUCASA** en el proceso penal que se le sigue por delito contra la Salud Pública.

El recurso ha sido propuesto por persona hábil, en tiempo oportuno, pero la sentencia contra la que se promueve no es susceptible de impugnación, ya que se trata de sentencia proferida por un Juzgado de Circuito.

Como primer defecto formal se observa que el licenciado González interpone el recurso de casación "en contra de la sentencia N° 67, calendada el día dieciocho (18) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995), dictada por el Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Coclé, en la Ciudad de Penonomé, y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial de Panamá, en el cual confirma en todas sus partes la sentencia hoy impugnada, mediante la Resolución S/N calendada el día dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), en el sentido de DECLARAR CULPABLE A MI PODERDANTE como infractor de lo preceptuado en el Título VII°, Capítulo V° del Libro II° del Código Penal con fines de Tráfico, e IMPONER UNA CONDENA DE OCHENTA (80) MESES DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS POR EL PERÍODO DE TRES (3) AÑOS, según lo parametrado en el artículo N° 258 del mismo Capítulo" (la subraya es de la Corte).

De acuerdo al artículo 2434 del Código Judicial el recurso de casación en el fondo procede **"contra las sentencias definitivas de segunda instancia, dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por delitos que tengan señalada pena de prisión superior a dos (2) años ..."** Ello significa que en materia penal, en nuestro ordenamiento resulta imposible interponer, como lo hace el recurrente, un recurso de casación contra una sentencia proferida por un Juzgado de Circuito, es decir, contra una sentencia de primera instancia.

Ahora bien, observa la Corte que el casacionista comete otros errores al desarrollar la formalización del recurso interpuesto. En efecto, la historia concisa del caso no se ajusta a la forma en que se debe presentar este acápite. En esta sección deben aparecer todos los puntos relevantes del negocio penal, con énfasis en los vicios de injuridicidad de los que adolece la sentencia de segunda instancia y que sirven de sustento a la causal o causales que se invoquen. En este escrito, el recurrente narra situaciones y momentos que rodearon la investigación del hecho punible.

Por otro lado, los motivos que deben fundamentar las causales invocadas más que cargos de injuridicidad contra la sentencia impugnada (que debe ser la de segunda instancia), parecen ser alegatos de instancia, lo que tampoco responde a las exigencias de la ley.

En el negocio que nos ocupa el casacionista no ha cumplido con los patrones señalados en los párrafos anteriores, razón que hace que este recurso sea inadmisible.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso interpuesto por el licenciado BERNARDINO GONZÁLEZ JR. en representación de MARCOS EMILIANO UBARTE DUCASA.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A LORENZO SILVANO PERRY CARRASQUILLA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 6 de noviembre se recibió en la Sala Segunda de esta corporación de justicia el recurso de casación en el fondo promovido por el licenciado Javier Alexis Quiroz Murillo, apoderado judicial de **LORENZO SILVANO PERRY** contra la sentencia de 22 de julio del año en curso dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en la cual se confirma el fallo de 4 de marzo de 1996 emitido por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial que condenó a su representado a la pena de 5 años de prisión como reo del delito de posesión ilícita de drogas agravada.

Cumplido el trámite de lista como lo establece el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a este tribunal de casación determinar sobre su admisibilidad.

En primer lugar, se observa que se cumple con los presupuestos del recurso referentes a la impugnabilidad subjetiva y objetiva de que trata el artículo 2441 ibídem. De manera que es correcta la revisión concedida por el Tribunal Superior.

Corresponde en este segundo momento de admisibilidad del recurso presentado, determinar si se cumple con los requisitos formales tasados por el artículo 2443 numeral 3° del código procedimental.

No hay objeción que hacer a la historia concisa del caso, la cual se centra en detalles relevantes del proceso.

El casacionista invoca dos causales en el fondo: **Error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la ley sustancial penal y ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado** (art. 2434 n. 1 del Código Judicial) y **Error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en la extensión de la pena aplicable** (art. 2434 numeral 3° del Código Judicial), las cuales están correctamente formuladas.

Existe coherencia entre los motivos y las causales que pretenden sustentar.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas hace la transcripción debida señalando de manera adecuada el concepto de la infracción.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, en Sala Unitaria, representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación presentado por el licenciado Javier Alexis Quiroz murillo, en su calidad de apoderado judicial de LORENZO SILVANO PERRY en este proceso penal y DISPONE correrlo en traslado al Señor Procurador General de la Nación, por el término de cinco (5) días para que emita concepto.

Base Legal: artículos 2434, 2443 y 2445 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FERNANDO JAÉN DE LEÓN, POR DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS, EN DETRIMENTO DE CAVA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 13 de noviembre de 1996 fue sometido a las reglas de reparto el recurso de casación presentado por la licenciada Danitza del C. Vásquez Ortega, contra la sentencia calendada el 26 de julio de 1996, emitida por el **SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**, en el proceso penal seguido a **FERNANDO JAÉN DE LEÓN** por el delito de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos.

El 18 de noviembre, mediante providencia de esa fecha, al tenor de lo que establece el artículo 2443 del Código Judicial, se fijó en lista el negocio por el término de ocho días para que las partes interesadas tuvieran conocimiento del ingreso del proceso al Tribunal de casación.

A esta fecha, vencido el término de lista, corresponde decidir la admisibilidad del recurso, con fundamento legal en lo que señalan los artículos 2443 y siguientes de la excerta antes citada.

Al revisar las constancias de autos, se verifica que la recurrente cumplió con los requisitos de oportunidad y de legitimación objetiva y subjetiva, por cuanto anunció el recurso dentro del término establecido por la ley, es la defensora del procesado y el delito que se le imputa es sancionado de 1 a 3 años de prisión.

Con relación a los otros requerimientos formales que debe reunir el escrito de formalización del recurso, se puede apreciar que la historia concisa del caso recoge los puntos más relevantes del proceso además de enunciar someramente los vicios que le endilga a la resolución judicial censurada.

La casacionista invoca cuatro causales de fondo, lo que obliga a examinar una por una, ya que la técnica procesal en esta materia exige que cada causal se apoye en motivos y en las disposiciones legales que se infringen por razón de su existencia.

Primera causal: Es la contenida en el segundo párrafo del numeral 1° del artículo 2434 del Código Judicial, o sea, Infracción de la ley sustancial por error de derecho en la apreciación de la prueba, que influyó en lo dispositivo de la sentencia impugnada.

El primer motivo es una enunciación de un hecho que no incide directamente como soporte de la causal alegada. En cuanto a la disposición que se anota como infringida, la misma no contiene criterio alguno de valoración probatoria, pues se limita a enumerar algunos medios de prueba que pueden acreditar la existencia del hecho punible. Por otra faz, no se indica el concepto de la infracción y no se cita la norma de la ley sustancial que resultó violada como consecuencia del error incurrido en la correcta apreciación de la prueba.

Segunda causal: Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, lo cual influyó en lo dispositivo de la sentencia recurrida.

Los motivos se refieren a una prueba documental que no consta en autos y que no fue considerada por el juzgador de la instancia, e incurre en el error de incorporar apreciaciones subjetivas.

La disposición que se alega infringida no guarda relación con la causal alegada, además se omite señalar el concepto de la infracción y no se cita la norma sustancial penal que fue violada como consecuencia de esta causal de carácter probatorio.

Tercera causal: Se invoca la infracción de la ley sustancial por violación directa, pero los motivos que le sirven de fundamento no mantienen la coherencia requerida y por el contrario se incluyen comentarios sobre otras peticiones hechas al Tribunal de instancia para reemplazar la pena, que están fuera de contexto en esta causal. Las disposiciones legales que se aducen como infringidas no se adecúan a la pretensión de la casacionista, pues rebate la apreciación de los hechos, lo cual no se compagina con la causal alegada.

Cuarta causal: Es la prevista en el numeral 2° del artículo 2434 del Código Judicial.

Los motivos cuestionan los hechos que se dan por probados en la sentencia, no así la participación y correspondiente responsabilidad del procesado, ya que los hechos que se consideran probados es la expedición del cheque sin fondos y la autoría del mismo consta en autos. Con esta causal no se cuestiona la existencia del hecho punible, éste se acepta y sólo se discute la determinación que hace el juzgador sobre la participación y responsabilidad del imputado.

Por las razones anotadas, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por la licenciada Danitza del C. Vásquez Ortega en el presente caso.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A LUIS ALBERTO ZALDÍVAR, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Previo a la audiencia fijada dentro del trámite de este recurso de casación, el licenciado Gilberto Aniño, actuando en su condición de apoderado judicial de Luis Alberto Zaldívar, solicita se ordene la libertad de su representado, por considerar que desde el 12 de agosto de 1993 hasta 13 de diciembre del año en curso "ha cumplido la totalidad de la pena impuesta en la Sentencia recurrida" (f. 172).

Al contestar el traslado que le fuera corrido de esta petición, el Procurador General de la Nación opinó que le asiste razón al defensor técnico de Zaldívar, por considerar que "el imputado se encuentra detenido desde el 12 de agosto de 1993 y desde esa fecha al presente han trascurrido cuarenta (40) meses a que fue condenado ..." (f. 175).

Para decidir sobre la petición del recurrente, pasa la Sala a examinar algunos elementos probatorios allegados al cuaderno contentivo del recurso de casación. En ese sentido, se advierte que el recurrente interpuso recurso de casación en el fondo contra resolución dictada el 27 de diciembre de 1995, por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, confirmatoria de la sentencia de 21 de junio de 1995 proferida por el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condena a Zaldívar a la pena de 40 meses de prisión, como responsable de delito de robo cometido en perjuicio de Yadira Carrera Aguilar (fs. 108-115; 131-134).

Según informa el cuaderno penal, el 12 de agosto de 1993 miembros de la Policía Nacional condujeron a Luis Alberto Zaldívar a la corregiduría de Bella Vista, del Distrito de Panamá, por despojar a la ciudadana Yadira Carrera Aguilar de su cartera y otras pertenencias. Ese mismo día la autoridad de policía, mediante resolución N° 235. C. B. V-93 de 12 de agosto de 1993, sancionó a Zaldívar a la pena de 150 días de arresto por la falta cometida (f. 7). La meritada resolución administrativa fue remitida en consulta a la Alcaldía del Distrito de Panamá, siendo declarada la nulidad de la resolución consultada, por estimar que el comportamiento de Zaldívar tipificaba el delito de robo. Por esa razón, el tribunal consultor "ORDENA remitir las actuaciones a la Fiscalía de

Turno del Distrito de Panamá, **y se filie el detenido a órdenes de dicha autoridad"** (f. 12). Es así que el funcionario de instrucción, mediante resolución de 26 de octubre de 1993, decidió **"mantener la detención preventiva de LUIS ALBERTO ZALDÍVAR"**, por considerar que el delito endilgado, permite la aplicación de esa medida cautelar (f. 20). Tras cumplido el trámite de instrucción sumarial, la representante del Ministerio Público solicitó al Director de la Cárcel Modelo que filiara al detenido a ordenes del juez de la causa (f. 64).

Los anteriores elementos probatorios, aunados a que en el expediente no existe evidencia que indique que se le haya otorgado al sindicado una medida cautelar distinta de la detención preventiva, permiten concluir que Zaldívar se encuentra privado de su libertad desde el 12 de agosto de 1993. Según el tiempo trascurrido, el sindicado ha cumplido ya 40 meses de prisión preventiva, lo que, en consecuencia, equivale al cumplimiento de la pena principal impuesta por el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA la libertad de Luis Alberto Zaldívar Grenidge, por haber cumplido ya la pena principal de 40 meses de prisión impuesta por el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante resolución de 21 de junio de 1995, por el delito de robo cometido en perjuicio de Yadira Carrera de Aguilar, DECLARA EL CESE del procedimiento a partir de la ejecutoria de esta resolución, con base en lo que establece el artículo 1982 del Código Judicial, y ORDENA SU ARCHIVO.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FERNANDO JAÉN DE LEÓN, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Corresponde a la Sala Segunda de esta Corporación de Justicia resolver la admisibilidad del recurso de casación promovido por la defensa de FERNANDO JAÉN DE LEÓN contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el día 18 de marzo de 1996, por medio de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de Coclé el 31 de agosto de 1995 y en la que se sancionó al prenombrado Jaén a 24 meses de prisión y 100 días-multa como infractor del párrafo primero del artículo 260 del Código Penal.

Se observa que la impugnación ha sido formulada por persona hábil y en tiempo oportuno, lo que legitima el recurso presentado.

El recurrente pretende la revocatoria de una sentencia de segunda instancia dictada por Tribunal Superior de Distrito Judicial en un proceso por delito de posesión de drogas cuya pena principal oscila entre uno y tres años de prisión y 50 a 250 días-multa, lo que permite que se examine en casación el proceso en cuestión.

Antes de examinar si el escrito de formalización cumple los requisitos establecidos por el artículo 2443 del Código Judicial, que se refiere a los requisitos propios del recurso de casación, la Sala observa que el recurso bajo examen pretende que se discuta ante ésta Superioridad si al sentenciado se le

negó indebidamente el reemplazo de la pena privativa de libertad que el Código Judicial permite en el artículo 2398 del mismo y si el juzgador de primera y segunda instancia debió partir del mínimo de la pena prevista en el artículo 260 del Código Penal.

Lo antes expuesto pone en evidencia que los cargos que se formulan contra la sentencia en segunda instancia no guardan relación con la normativa del recurso de casación, ya que la concesión o no del reemplazo o suspensión de una pena sólo admite recurso de apelación y tal decisión no puede ser discutida por la vía del recurso de casación, que siempre será improcedente cuando se sustente en esta pretensión. Por otra parte, en reiterados casos la Sala ha venido sosteniendo que tampoco es admisible el recurso de casación cuando se pretende impugnar el arbitrio del juzgador que en un caso particular entre el mínimo y el máximo legal, aplicando los criterios del artículo 56 del Código Penal, individualizó la pena en una cantidad que se enmarca dentro de los parámetros de la figura respectiva.

Este recurso de casación no podrá prosperar, ya que la Corte no puede arrogarse las facultades del Tribunal de instancia para apreciar con su arbitrio y dentro de los parámetros legales, la pena que estime procedente para el caso. No cabe duda, por tanto, que no debe admitirse el recurso bajo examen en esta oportunidad.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por la defensa de FERNANDO JAÉN DE LEÓN por ser manifiestamente improcedente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A NIVALDO MADRIÑÁN APONTE, FELIPE CAMARGO AMAYA, RUBÉN AURELIO BULGIN ROBINSON Y ALAÍN ARCENIO ODA, POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE CARLOS RODOLFO WORREL BEST. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Efectuada la correspondiente audiencia oral, para que las partes recurrentes sustentaran los recursos de casación presentados contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 28 de diciembre de 1995 en la que se reformó la de primera instancia y consecuentemente se condenó a **NIVALDO MADRIÑÁN APONTE**, **FELIPE CAMARGO AMAYA**, **RUBÉN AURELIO BULGIN ROBINSON y ALAÍN ARSENIO ODA** a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación por ese mismo período para el ejercicio de funciones públicas, corresponde a la Sala dictar la resolución que corresponde.

Para tal fin deben examinarse los diversos recursos admitidos en su oportunidad, siguiendo el orden utilizado por la resolución de 20 de junio de 1996, por lo que se pasa a continuación a examinar las causales invocadas, los motivos que las fundamentan, las disposiciones que se dicen infringidas y el concepto en que supuestamente lo han sido.

Antes de entrar al estudio de los recursos la Sala debe dejar sentado que omite toda referencia a la vista del Procurador General de la Nación de fecha 8 de octubre de 1996, en la que se consigna la opinión del Jefe del Ministerio

Público sobre los recursos admitidos por la Sala, toda vez que la misma fue presentada en forma extemporánea.

A fojas 1032 vuelta consta que el expediente ingresó al despacho del Procurador el 18 de julio de 1996, por lo que a todas luces es extemporánea la opinión vertida el 8 de octubre del presente año, pues no se requieren mayores esfuerzos para observar que han transcurrido en exceso los cinco días concedidos al Procurador para emitir concepto. El Ministerio Público, en este caso representado por el Procurador General de la Nación, no puede recibir el expediente en julio de este año y notificarse del mismo el 8 de octubre cuando suscribe la vista correspondiente y la remite en esa misma fecha a la Sala. La actuación censurada implica una violación al debido proceso y al principio de igualdad de las partes, por lo que la Sala tiene por no emitida tal opinión. No esta demás señalar que en el acto de la audiencia oral el respresentante del Ministerio Público solicitó que no se casara la sentencia recurrida.

RECURSO A FAVOR DE RUBÉN A. BULGIN

El recurso en referencia alude a una sola causal: infracción de la ley sustancial penal, por error de derecho en la apreciación de la prueba.

La casual invocada tiene como fundamento dos motivos únicos, a saber: 1) que la sentencia recurrida da por acreditado el delito con el señalamiento único y directo del ofendido aunado al indicio de presencia y supuesta oportunidad; y, 2) que la sentencia impugnada da un valor probatorio a la declaración de Alexander Cubilla que no corresponde con el texto de la misma.

A propósito de las disposiciones legales infringidas se citan los artículos 969, 973 y 908 del Código Judicial y el artículo 160 del Código Penal.

Con relación al primero de estos artículos, se trata de la norma que consagra un concepto de indicio que el recurrente considera violado porque la afirmación del ofendido de que Rubén Bulgin lo fue a buscar a su casa, le manifestó que el Coronel Madriñán quería hablar con él y lo acompañó a las instalaciones del antiguo DENI no es suficiente para que estemos en presencia de torturas, castigo infamante, vejación o medida arbitraria, lo que no es suficiente para acreditar el cargo de injuridicidad imputado a la sentencia del Tribunal Superior, por lo que no prospera dicha alegación.

También se dice violado el artículo 973 del Código Judicial que establece que los indicios se apreciarán con la regla de la sana crítica, ya que a juicio de la defensa la sentencia consideró que la presencia de Bulgin en el lugar y hora en que el ofendido dice haber sufrido los vejámenes fue considerado como indicio probado de la presencia y oportunidad de su representado en el lugar de los hechos.

La Sala concuerda con el recurrente en que la sentencia recurrida da por probada la intervención de Bulgin en el delito en cuestión teniendo como fundamento para ello los indicios antes mencionados, lo que no se ajusta a la normativa procesal penal vigente. El Tribunal de segunda instancia ha incurrido en un error de derecho al darle un valor que no tienen a los indicios en referencia, ya que los mismos no son contundentes o inequívocos, sobre todo cuando el propio ofendido en sus distintas declaraciones manifestó que tenía la cabeza tapada cuando era objeto de golpes. El cargo se considera probado.

Por otra parte, respecto de la violación del artículo 908 que el recurrente estima violado por omisión, ya que no se tomó en cuenta que el testigo Cubilla oportunamente se retractó de los cargos que le hacía a Bulgin (fs. 287-288), se observa que el Tribunal Superior no tomó en cuenta este artículo que sin duda disminuye el valor probatorio del testimonio rendido por el señor Cubilla Quiroz, lo que supone un nuevo cargo de injuridicidad que la Sala estima debidamente comprobado.

Las razones antes expuestas son suficientes para exonerar de toda responsabilidad a RUBÉN A. BULGIN en el presente caso.

RECURSO A FAVOR DE ALAÍN ODA

El recurso en cuestión se fundamenta, al igual que el anterior, en la causal que se relaciona con una errada valoración de prueba apreciada por el Tribunal de segunda instancia, es decir la infracción de la ley sustancial penal por error de derecho en la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente, según el recurrente, en lo dispositivo de la sentencia.

Para fundar su recurso, la defensa de Oda aduce tres motivos. Según el primero, la sentencia de segunda instancia dio por probada la culpabilidad de su representado con base en el señalamiento directo del ofendido, cuyo relato se estimó concordante con las declaraciones de los testigos Carlos Puyol, Moisés Iglesias y Alexander Cubilla; de acuerdo con el segundo, se le atribuyó un valor inexistente al testimonio del ofendido sin tomar en cuenta otras pruebas directas e indirectas que el recurrente no menciona; y según el último, el fallo recurrido le atribuyó responsabilidad a su representado como autor del delito de tortura sin advertir la circunstancia que establece la correspondiente relación de causalidad entre los actos y su voluntad para producir una conducta típica, antijurídica y culpable, por lo que se violó de manera directa los artículos 38 y 160 del Código Penal.

Como disposiciones infringidas el recurrente señala los artículos 904 y 896 del Código Judicial y los artículos 38 y 160 del Código Penal.

Respecto del artículo 904 del Código Judicial, que ordena al Juez apreciar los testimonios y las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones según las reglas de la sana crítica, el recurrente considera violado dicho artículo de manera directa ya que a su juicio el Tribunal apreció incorrectamente las declaraciones de Puyol, Avila, Iglesias y Cubilla a pesar de que la ley no le reconoce el valor que el Tribunal les confirió, pues alega que las mismas no son concordantes.

Sobre el mismo artículo el defensor de Oda señala que los tres testimonios antes mencionados no vinculan a su poderdante con los maltratos o torturas de que fue víctima el denunciante, afirmación que se corrobora sin mayor esfuerzo intelectual al leer los correspondientes testimonios de los tres declarantes que aparecen en las diligencias iniciales del sumario.

La Sala concuerda con el recurrente en el sentido de que en las declaraciones de los testigos antes mencionados no tienen valor probatorio alguno para corroborar la versión del denunciante, lo que supone dar por comprobado el cargo de injuridicidad que se endilga a la resolución recurrida.

Por otra parte, de la misma declaración del denunciante que figura en una de las tantas ampliaciones de su denuncia se observa sólo atribuyó al sentenciado Oda el haberle dado un "culatazo en la espalda", afirmación que luego mantiene en la vista oral de la causa ante el Juez de primera instancia.

A juicio de la Sala está probado el cargo de injuridicidad atribuido a la sentencia recurrida, ya que la sola versión del denunciante no vincula plenamente al sentenciado Alaín Oda con los cargos que se consideraron probados en su contra. En nuestro ordenamiento jurídico un solo testigo no puede fundar una sentencia condenatoria.

Por otro lado el recurrente afirma violado los artículos 38 y 160 del Código Penal que se relacionan con el concepto de autor y el delito de apremios indebidos en el Código Penal, respectivamente.

A su juicio se violaron dichos artículos porque se reputó a su representado como autor de un delito que considera que no ha cometido. La Sala concuerda que la acción imputada al sujeto no está plenamente comprobada, sobre todo cuando el denunciante sólo imputó al individuo haberle dado un golpe por la espalda y reconoció que las reiteradas torturas de que fue víctima fueron producidas mientras tenía la cabeza tapada, por lo que nunca podría identificar con certeza a las numerosas personas que intervinieron en los ataques físicos que indebidamente se le hicieron en las instalaciones del antiguo DENI.

La Sala estima que Alaín Oda fue sancionado por el Tribunal Superior en base a una errada valoración de los elementos probatorios allegados al proceso. Dicha condena carece de fundamento, aún más si lo que se le atribuye a la persona es haber dado un golpe por la espalda, que bajo ningún concepto puede considerarse como una forma de tortura a la víctima, pues en todo caso pudo constituir una falta o infracción penal de otra naturaleza.

RECURSO A FAVOR DE FELIPE CAMARGO

En favor de Felipe Camargo la Sala admitió dos de las cuatro causales originalmente aducidas por el defensor del sancionado, por lo que deben examinarse separadamente ambas causales.

La primera causal admitida es de forma, ya que se aduce la falta de competencia del Tribunal. Esta causal la fundamenta el recurrente en ocho motivos los cuales giran en torno a las múltiples causas penales que en forma paralela se sustancian contra su representado por infracciones supuestamente cometidas respecto del mismo tipo penal.

A su juicio se han violado los artículos 2291, 2294, 2001 y 1974 del Código Judicial.

Las tres primeras normas que se consideran violadas guardan relación con la acumulación de procesos que el recurrente estima violadas, ya que a su representado se le han seguido numerosas causas por el mismo delito sin que se hayan acumulado las mismas. A juicio del recurrente no haber decretado la acumulación de este proceso implica que el Tribunal carecía de competencia y que se debió anular todo lo actuado con base a la causal de nulidad prevista en el artículo 1974 del Código Judicial.

La Sala no comparte el criterio de la defensa ya que el artículo 2003 que el mismo defensor aduce violado permite o autoriza que no se acumulen procesos cuando la misma implique gran retardo de alguno de ellos. La norma en referencia deja a criterio de cada juzgador decidir la acumulación, lo que no puede ser fundamento para alegar falta de competencia del Tribunal.

El Juez de circuito que actuó en la primera instancia es el Tribunal competente para conocer de esta causa y el Segundo Tribunal Superior de Justicia es el Tribunal competente para conocer de la causa en grado de apelación, lo que implica que no se ha producido la causal de forma alegada. En todo caso cuando concluyan todas las causas seguidas al señor Camargo, el mismo tiene derecho a que el Tribunal que conoció de la última unifique las penas que le hayan sido impuestas, de modo que no se le impongan penas que puedan vulnerar los límites máximos establecidos para estos casos por razón del concurso material y es obligación del Tribunal que conozca de la última causa proceder en tal sentido.

Se desestima, por tanto, la causal de forma aducida por la defensa.

La otra causal aducida en favor de Felipe Camargo gira en torno al error de derecho en la apreciación de la prueba, que implica violación de la ley sustancial.

El recurrente fundamenta su causal en cuatro motivos distintos, a saber: 1) que el Tribunal Superior consideró probado el hecho denunciado con base a la denuncia, sin considerar otros elementos aportados al expediente y las reglas de valoración de la prueba; 2) a su juicio los testimonios de Carlos Puyol, Moisés Iglesias y Alexander Cubilla no hacen cargo contra su representado; 3) que la deposición efectuada por el denunciante es producto de la relación sindicado-investigador, por lo que se valoró mal la misma sin tomar en cuenta contradicciones entre el denunciante y el hecho objeto de su relato; y 4) se apreció en el informe pericial de los médicos forenses sin valorarlo conforme a derecho y sin tomar en cuenta algunos elementos del mismo.

Como disposiciones infringidas se aducen los artículos 896, 904, 908, 2144 y 967 del Código Judicial, así como el artículo 160 del Código Penal.

En opinión del recurrente se infringió el artículo 896 del Código Judicial, según el cual en el proceso son testigos sospechosos el denunciante, el amigo íntimo o el enemigo manifiesto que tienen interés en el resultado del proceso, por lo que al no tomar en cuenta esta norma se ha violado directamente por omisión de la misma.

La Sala, comparte dicha alegación, pues el Tribunal debió tomar en cuenta que la versión de Worrel Best es la del denunciante que fue llevado ante Camargo, quien dirigía la investigación contra Worrel, lo que pone en entredicho la credibilidad de su afirmación.

Se alega que el artículo 904 del Código Judicial, ya antes mencionado en esta resolución, fue violado en forma directa por comisión puesto que las pruebas que constan en el proceso han sido apreciadas en contra de los principios de la sana crítica.

La Sala está de acuerdo con el recurrente, ya que la apreciación del Tribunal Superior desconoció el valor probatorio real y efectivo de la versión del denunciante y no apreció correctamente la declaraciones de los otros testigos que han sido utilizados para proferir la condena de Camargo, ya que se comprueba que de dichos testimonios no surge forma de vincular al sentenciado con los actos que se le imputan.

Prospera, por tanto, la infracción aducida por el casacionista.

También se alega la violación del artículo 908 toda vez que se alegan contradicciones en las declaraciones del denunciante que no han sido valoradas correctamente por el Tribunal competente.

Aduce también el recurrente la violación del artículo 2144 del Código Judicial que establece las reglas para la valoración del testimonio, pues a su juicio fue violado en forma directa por omisión. Considera el recurrente que al no tomar en cuenta este artículo el Tribunal de segunda instancia le confirió valor probatorio a un solo elemento de prueba que no cumple con los requisitos para su admisión.

Por otra parte, el recurrente también alega como violado el artículo 967 del Código Judicial que se refiere a la forma de apreciar la prueba pericial, ya que considera que el mismo fue violado en forma directa por omisión al no ceñirse la valoración de la prueba pericial con los criterios consagrado en dicha norma.

La violación de las tres últimas normas citadas ya carecen de trascendencia, toda vez que se estima procedente el recurso bajo examen y no es necesario ahondar en mayores consideraciones.

El recurrente estima violado el artículo 160 del Código Penal, ya que se considera probada la tipicidad de ese delito con un solo elemento probatorio indebidamente apreciado por el Tribunal de segunda instancia.

En virtud de las consideraciones sobre la violación de las tres primeras normas que se aducen infringidas, también se reconoce, como bien apunta el recurrente, la violación del artículo 160 del Código Penal, que fue aplicado indebidamente a este caso, como señala el defensor.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Superior el 28 de diciembre de 1995 y ABSUELVE a los señores RUBÉN A. BULGIN, ALAíN A. ODA y FELIPE CAMARGO de los cargos formulados en su contra en este proceso.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL INCIDENTE DE CONTROVERSIA, INTERPUESTO POR RAÚL CASTILLO SANJUR, CONTRA EL FISCAL SEXTO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, EN EL PROCESO PENAL SEGUIDO A DOLLY BTESH DE ABADI Y OTROS POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Corresponde a la Sala Segunda, de lo Penal, de esta Corporación resolver la admisibilidad del recurso de casación promovido por la defensa del señor **RAÚL CASTILLO**, quien a través de un recurso de hecho pretende que esta Superioridad revise lo actuado por el Segundo Tribunal de Justicia del Segundo Distrito Judicial, puesto que este Tribunal mediante auto de 16 de mayo de 1996 revocó la resolución de 11 de enero de 1996 proferida por el Juzgado Décimo Segundo del Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá por medio de la cual se acogió el incidente de controversia inicialmente presentado por RAÚL CASTILLO SANJUR contra el Fiscal Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá y a favor de ORLANDO SÁNCHEZ BERNAL, IDA DOMÍNGUEZ CASTILLERO y el propio RAÚL CASTILLO SANJUR.

El presente recurso trata de plantear ante la Corte Suprema de Justicia la revisión por la vía del recurso de casación de la decisión del Segundo Tribunal Superior que negó un incidente de controversia acogido inicialmente por el juzgador de primera instancia a favor de las personas antes mencionadas en el proceso que contra ellos se sigue ante la esfera circuital por supuesta falsedad y asociación ilícita cometidas en perjuicio de la señora DOLLY BTESH DE ABADI, hechos que se dice ocurrieron en octubre de 1994, cuando el señor Orlando Sánchez a nombre de la sociedad INVERSIONES MIGDAL, S. A. inscribió una diligencia hipotecaria teniendo como fundamento el valor catastral que tenía la finca 2.760 inscrita al Folio 440, del Tomo 114 R. A., de la Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, de la oficina del Registro Público, ya que la misma se fundamentaba el valor catastral que la mencionada finca se le fijó al confeccionar la Escritura Pública N° 9067 de 3 de octubre de 1980 de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá.

A todas luces se trata de un recurso de casación que ostensiblemente es improcedente, ya que estamos en presencia de un auto del Tribunal Superior que no le ha puesto fin al proceso, puesto que solamente se limitó a revocar una resolución del inferior que acogía un incidente de controversia contra el funcionario del Ministerio Público que tenía a su cargo la instrucción sumarial.

El auto recurrido, por tanto, no es de aquellos que decreten un sobreseimiento definitivo o impidan la continuación del proceso, ni es de aquellos que no admiten una acusación particular que se pretende instaurar, lo que necesariamente debe conducir a la inadmisión del recurso planteado.

Antes de concluir, sin embargo, la Sala ha podido contar con el cuaderno principal que sirve de sustento a esta actuación y observa que los hechos denunciados giran en torno a la confección de la Escritura Pública N° 9067 de 3 de octubre de 1980, por medio de la cual Mizrachi y Compañía, S. A. vendió a Inversiones Migdal, S. A. la finca antes descrita por la suma de B/.100,000.00 (Cien Mil balboas), a pesar de que la había adquirido de su propietario anterior el 30 de julio de ese mismo año por sólo B/.1,000.00 (Mil Balboas).

No cabe duda que pretender investigar la supuesta falsedad y asociación ilícita que se aduce por la denunciante han cometido los señores denunciados carece de sentido, ya que el transcurso del tiempo sin que se haya establecido dicha responsabilidad o enjuiciado a los probables responsables del hecho investigado ha permitido que se produzca la prescripción de la acción penal, ya que los hechos investigados datan de octubre de 1980 cuando estaba vigente el Código Penal de 1922 y a la fecha han transcurrido más de 16 años, por lo que

debe reconocerse que se cumplió el plazo establecido en el numeral 3 del artículo 93 del Código Penal.

Si desde octubre de 1980 a la fecha han transcurrido más de 16 años la acción penal, que se puede establecer contra quien resulte responsable de haber hecho incluir un hecho que se dice falso en la Escritura N° 9067, está prescrita, pues sin duda ya han pasado más de los seis años que se establece para la prescripción de la acción penal en casos que se relacionen con delitos cuya pena no exceda de seis años, como es el presente caso en que tanto la falsedad de documento público como la asociación ilícita no tienen pena superior a seis años de prisión.

Reconocer que se ha producido la prescripción de la acción penal no impide destacar la desafortunada práctica de fijar valores abultados o exagerados a fincas que no representan realmente el valor formal que se les otorga, sobre todo si dicha asignación no tiene un propósito valedero que sustente tal proceder, ya que de esta forma se obtienen bienes inmuebles con un valor irreal que no representan el verdadero valor que garantizan en los procesos en los que dichos bienes son utilizados.

La consideraciones que anteceden son suficientes para justificar el reconocimiento de la prescripción de la acción penal en el proceso penal promovido por DOLLY BTESH DE ABADI contra los señores SIMÓN ABADI, ORLANDO SÁNCHEZ, IDA DOMÍNGUEZ, RAÚL CASTILLO SANJUR y MOISÉS DAVID MIZRACHI, y cualesquiera otro que haya intervenido en la confección de la Escritura N° 9067 de 3 de octubre de 1980, de la Notaría Quinta de Panamá.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA la prescripción de la acción penal en esta causa, en los términos ya expuestos.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MEDINA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su admisibilidad, conoce la Sala Penal el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa técnica de Antonio Hernández Medina, dentro del proceso penal que se sigue al sindicado por la comisión de delito relacionado con drogas. A tales efectos, se pasa analizar el libelo de casación de conformidad con lo previsto en el artículo 2443 del Código Judicial.

Observa la Sala que el recurrente interpone el recurso de casación en el fondo "contra la sentencia fecha (sic) 4 de diciembre de 1995 proferida por el Juzgado Segundo del Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá ..." (f. 179). Salta a la vista entonces que la resolución atacada no es de aquellas contra las cuales se puede recurrir por esta vía extraordinaria, toda vez que el recurso de casación en el fondo se debe interponer, conforme establece el artículo 2434 del Código Judicial, contra "las sentencias definitivas de segunda instancia, dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial ...".

Aun cuando el anterior defecto es suficiente para la desestimación del recurso, resulta necesario destacar otras deficiencias de que adolece el libelo de casación. Así el recurrente, para fundamentar la causal de "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba", consagrada en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, plantea que la resolución impugnada "desconoció que la droga fue encontrada fuera de la residencia del procesado ...", que "desconoció la explicación razonada y lógica del procesado, de los testigos, de la impección (sic) ocular ..." , y que "... obvió el análisis dogmático-Jurídico frente a los hechos lo cual generó la aplicación de una proposición jurídica que no corresponde a la realidad ..." (fs. 182-183).

Como se aprecia, estos razonamientos conciernen otra causal de casación, cual es la de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, toda vez que esta procede cuando el juzgador "fundamenta su decisión en prueba que no figura en el proceso o que, encontrándose acreditada, omite considerarla, o cuando el juzgador tiene la creencia equivocada de que un hecho ha ocurrido cuando en autos no se encuentra acreditado (Sentencia de 5 de mayo de 1994, Sala Penal).

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, el recurrente utiliza una modalidad de presentación extraña a la técnica que debe ser empleada en la formalización del recurso de casación. El letrado indica que el artículo 904 del Código Judicial ha sido violado "en forma indebida" y "en forma directa por Omisión" (f. 184). En igual sentido, sostiene que el artículo 973 del Código Judicial, "fue violado directamente, porque, aunque el fallo no lo citó expresamente, porque no citó ningún artículo, entendemos que si fue aplicado al caso porque el Tribunal Superior en su análisis probatorio hace mención de la necesidad de probar los hechos sustentatorios de los mismos" (f. 184). De lo expuesto, salta al vista que el recurrente no precisa si las normas adjetiva en cuestión fueron violadas en forma directa, ya sea por comisión o por omisión.

En síntesis, el recurso ha sido formalizado contra una resolución judicial que la ley no contempla, además de que los motivos aducidos y las disposiciones legales invocadas no corresponden a la causal utilizada, por lo que resulta inevitable concluir que este recurso extraordinario no puede ser admitido, por no cumplir con los requisitos formales previstos en el artículo 2443 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado por la defensa técnica de Antonio Hernández Medina, dentro del proceso penal seguido en su contra por delito relacionado con drogas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A NICOLÁS MORENO MOSQUERA Y LUIS ARTURO G., SINDICADOS POR EL DELITO DE HURTO PECUARIO, EN PERJUICIO DE LEONARDO DE JESÚS PORRAS SULUAGA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La firma forense Vásquez y Vásquez, actuando en representación de Leonardo de Jesús Porras, quien interviene como acusador particular, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 12 de junio de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que sanciona a Nicolás

Moreno Mosquera y a Luis Arturo González Robles, a la pena de 35 meses de prisión, como responsables del delito de hurto pecuario.

En este momento procesal le corresponde a la Sala determinar si el recurso propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad que establece el artículo 2443 del Código Judicial.

A tales efectos, se observa que el casacionista aduce dos causales de fondo, las que se pasa a examinar. Se advierte de inmediato que con la primera causal aducida no se mencionan las disposiciones legales que se dicen infringidas y el concepto en que lo han sido, por lo que no se satisface la exigencia legal que consagra el literal c, numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial.

Por otra parte, el casacionista aduce como segunda causal la contenida en el numeral 12 del artículo 2434 del Código Judicial. Es así como sostiene que la sentencia atacada ha impuesto una sanción que "no corresponde a la calificación aceptada respecto del delito, o a la responsabilidad del imputado, o a las circunstancias que modifiquen su responsabilidad" (f. 297). Como se aprecia, el recurrente transcribe íntegramente el contenido del numeral 12, sin especificar cuál de las tres causales previstas en esta norma legal es la que invoca como fundamento del recurso. Sobre el particular la doctrina patria ha señalado que el recurrente, al invocar esta causal, "debe seleccionar la alternativa que encuadra exactamente al caso, pues si se limita a trascribir la totalidad del texto está invocando simultáneamente tres causales" (PONCE FÁBREGA, Jorge. GUERRA de VILLALAZ, Aura Emérita. Casación. Primera edición. Panamá. 1995. pág. 326).

Otro defecto de que adolece el libelo en cuanto a la segunda causal consiste en que el recurrente, a propósito de las disposiciones legales infringidas, aduce la infracción del artículo 184 del Código Penal, "por omisión" (f. 298), lo cual no se compadece con la sentencia atacada, pues a foja 282 se observa con claridad que el Tribunal Superior de Distrito Judicial sí aplicó la norma sustantiva que se dice infringida. En todo caso, si el recurrente censuraba la inaplicación del numeral 10 del artículo 184 del Código Penal, lo apropiado habría sido advertir la infracción de la norma sustantiva por comisión, toda vez que el recurrente alega que la sentencia atacada no tomó en cuenta el claro contenido de la norma penal.

En vista de las anteriores consideraciones, a juicio de la Sala el recurso presentado no cumple con los requisitos previstos en el numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial, lo que conduce a la no admisión de la iniciativa procesal.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por la firma forense Vásquez y Vásquez contra la sentencia de 12 de junio de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que sanciona a Nicolás Moreno Mosquera y a Luis Arturo González Robles, a la pena de 35 meses de prisión, como responsables del delito de hurto pecuario.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A GEOFREY S. LINDELL, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO Y LESIONES PERSONALES CULPOSAS, COMETIDO EN PERJUICIO DE DAMARIS DE LINDELL, NIDIA DE BETHANCOURT, KIMARA FAMANÍAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce esta Sala del proceso seguido contra Geofrey S. Lindell, sentenciado por el delito de homicidio y lesiones culposas, en virtud de recurso de casación que fuera presentado por el Nibardo Elías Cabrera contra la sentencia de 8 de julio de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Para dar cumplimiento a la sustanciación del recurso, el proceso se fijó en lista por el término de ocho (8) días con el objeto de que las partes tuvieran conocimiento de su ingreso a la Sala. Antes del vencimiento de dicho término, tras el cual correspondía decidir sobre su admisibilidad, el día 11 de diciembre del año en curso se recibió en la secretaría de la Sala Penal escrito del recurrente, en el que expresa su voluntad de "Desistir del Recurso de Casación en el fondo que he interpuesto" (f. 842).

La manifestación hecha por el licenciado Cabrera, quien se encuentra debidamente acreditado como defensor del sentenciado Lindell (fs. 209; 386), da cuenta del ejercicio de una potestad que establecen los artículos 1073 y 1110 del Libro Segundo del Código Judicial, aplicables al procedimiento penal por remisión del artículo 1971 ibídem, razón por la cual es del caso admitir el desistimiento sin entrar en mayores consideraciones.

Por las razones expuestas, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO del recurso de casación interpuesto por el licenciado Nibardo Elías Cabrera, en representación de Geofrey S. Lindell.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SILVINTON BARKER BAILEY, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Luego de efectuada la respectiva audiencia oral, en la que el recurrente sustentó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el 13 de noviembre de 1995, por la que se reformó la de Primera Instancia emitida por el Juez Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, debe la Sala pronunciarse sobre la impugnación correspondiente.

Para arribar a la decisión que corresponda, deben analizarse las dos causales aducidas por el recurrente, por lo que a continuación se examinan estas, los motivos que sustentan cada una de las causales invocadas, las normas que se dicen infringidas y el concepto de la infracción alegado por el recurrente.

Antes de comenzar el estudio del recurso, la Sala deja constancia que omite toda referencia a la Vista del Procurador General de la Nación, de 22 de octubre de 1996, ya que la misma fue presentada en forma extemporánea.

En efecto, la resolución de 16 de agosto del presente año por medio de la cual se admitió el recurso y se le concedieron cinco días al Procurador, para que opinara sobre el recurso en cuestión, fue notificada al Procurador el día 22 de octubre, pues aunque no aparece firma del mismo en el sello correspondiente, en esa fecha emite la Vista Fiscal que tiene como base el traslado por cinco días

que se le hizo en la resolución de 16 de agosto, lo que pone en evidencia que si el expediente ingresó al despacho del Procurador el 19 de agosto de 1996 (p. 189 vuelta) se debe entender que los cinco días de término para opinar vencieron mucho antes del 22 de octubre próximo pasado.

Por lo que respecta al recurso promovido por el Fiscal Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, se observa que el mismo plantea su impugnación en torno a dos causales, que serán analizadas por separado.

La primera causal aducida por el recurrente es la de violación directa de la ley sustancial, que el casacionista sustenta en tres motivos fundamentales, a saber:

1. Que la sentencia da por consumado el delito de tráfico internacional de drogas, previsto en el artículo 255 del Código Penal;
2. Que el Tribunal Superior aplicó una pena básica de ocho (8) años de prisión;
3. Que el Tribunal de segunda instancia redujo la pena a 72 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término.

Como disposiciones legales infringidas el recurrente alega la infracción del artículo 255, párrafo primero del Código Penal, tal como quedó luego de la modificación introducida por la Ley 23 de 1986.

A juicio del recurrente el artículo del Código Penal antes mencionado, única disposición que señala infringida, fue violado en concepto de violación directa, pues el Tribunal de segunda instancia sancionó a SILVINTON BARKER BAILEY a la pena de 72 meses de prisión, por lo que resultó una pena muy por debajo del mínimo del tipo penal antes mencionado.

En la audiencia de casación la representación del Ministerio Público se manifestó en desacuerdo con esta casual, por lo que recomendó desestimar el recurso en base a la misma.

La Sala concuerda plenamente con el representante del Ministerio Público toda vez que ni de los motivos alegados por el recurrente, ni de la disposición legal aducida como infringida se deduce la violación de la ley sustantiva.

Ni la causal invocada ni los motivos comprueban el cargo de injuridicidad que se aduce contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior, por lo que debe desestimarse la petición en base a la causal bajo estudio.

Respecto de la segunda causal aducida, que el casacionista identifica como "indebida aplicación de la ley sustancial al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes", la Sala expresa las consideraciones que se consignan a continuación.

A juicio del Fiscal recurrente esta segunda causal también se fundamenta en tres motivos, a saber:

1. Que el sancionado fue llamado a rendir declaración indagatoria el 23 de noviembre de 1993, pero evitó tal declaración por razón de acogerse al artículo 22 de la Constitución Nacional;
2. El día 13 de enero de 1994 el sancionado en su indagatoria aceptó la comisión del hecho delictivo; y
3. El Segundo Tribunal le aplicó en forma discrecional ocho (8) años de prisión, reconociendo una atenuante de una cuarta parte, por razón de una atenuante de confesión oportuna y espontánea del sujeto.

Como disposiciones legales infringidas se aducen el artículo 66, numeral 5 del Código Penal y el artículo 69 del mismo texto normativo. A juicio del recurrente la primera norma aducida fue violada en concepto de aplicación indebida, pues a su juicio la confesión del sentenciado no fue espontánea ni oportuna, sobre todo cuando el individuo ya lo habían detenido en flagrante delito los funcionarios aduaneros.

La otra norma infringida, a juicio del recurrente, es el artículo 69, párrafo primero que se considera ha sido violado en concepto de indebida aplicación, mientras que en el párrafo segundo del mismo artículo se alega ha sido violado en concepto de interpretación errada del mismo.

Respecto de esta segunda causal, el representante del Ministerio Público en la audiencia oral recomendó que se aceptara la misma y se casara la sentencia recurrida, como demanda el casacionista.

A juicio de la Sala, le asiste razón al recurrente por lo que respecta a esta segunda causal.

El Tribunal Superior se ha equivocado al apreciar una atenuante como la impugnada por el Fiscal recurrente, ya que no puede tenerse dicha confesión como oportuna y espontánea si el sujeto beneficiado con la atenuante, como bien anota el Fiscal en su recurso de casación, fue detenido en flagrante delito por las autoridades aduaneras.

La confesión oportuna y espontánea tiene la virtualidad de fundamentar una atenuación de pena cuando la misma es la que permite la identificación del individuo y la acreditación de su responsabilidad, pero no puede considerarse tal atenuante cuando ya otros elementos allegados al expediente permiten identificar al presunto responsable.

Las razones que anteceden son suficientes para dejar sentado que la confesión oportuna y espontánea como atenuante de pena no puede ser apreciada en casos de detención flagrante del sujeto, ya que a partir de ese momento dicha confesión carece de la virtualidad necesaria para justificar su apreciación como atenuante.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia recurrida y condena a SILVINTON BARKER BAILEY a la pena de ocho (8) años de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período después de cumplida la pena principal.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LERYS CANO CEDEÑO, POR DELITO DE LESIONES PERSONALES EN DETRIMENTO DE FILEMÓN MORALES. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado **JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS** en nombre y representación de **LERYS CANO CEDEÑO** formalizó recurso de Casación contra la Sentencia de Segunda Instancia de 15 de diciembre de 1994 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá mediante la cual se **REFORMA** la resolución de primera instancia, fechada en 6 de junio de 1994.

En escrito que antecede, recibido el 29 de noviembre último en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se formula el desistimiento expreso del recurso que fuera formalizado por el representante legal del señor **LERYS CANO CEDEÑO** fundado en lo dispuesto por el artículo 1073 del Código Judicial, el que permite a toda persona que haya interpuesto un

recurso que desista del mismo.

Observa la Sala que el poder conferido por **LERYS CANO CEDEÑO** al licenciado José Ramiro Fonseca Palacios, visible a fojas 500 del expediente, lo faculta para desistir y tiene establecido el artículo 1110 del Código de Procedimiento Civil que se refiere a los medios de impugnación y aplicable al procedimiento penal con vista en lo señalado por el artículo 1971 del Código judicial, que el recurrente puede desistir del recurso interpuesto antes de que se haya decidido el mismo.

De otro modo, no existe dentro de las normas que regulan la casación ninguna disposición que impida el desistimiento de este recurso extraordinario, razón por la cual se estima que procede admitir el desistimiento presentado por el licenciado José Ramiro Fonseca Palacios, en representación del señor **LERYS CANO CEDEÑO**, sobre el recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento presentado por el licenciado JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS dentro del recurso de casación por él presentado, contra la sentencia del Segundo Tribunal Superior de Justicia, de fecha 15 de diciembre de 1994, ordenando en consecuencia la devolución del proceso al lugar de su procedencia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LUCINO MIRANDA MORENO RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FELIPE CAMARGO, NIVALDO MADRIÑAN APONTE, LUIS ANTONIO CÓRDOBA MORALES, LUCINO MIRANDA MORENO, ARCENIO ODA ALAIN, ALFONSO MADRID Y OTROS, POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL, EN PERJUICIO DE EDUARDO SANCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado **ELIECER A. PÉREZ SÁNCHEZ** en nombre y representación de **LUCINIO MIRANDA MORENO** formalizó recurso de Casación contra la Sentencia de Segunda Instancia de 30 de mayo de 1994 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá mediante la cual se **REFORMA** la resolución de primera instancia, fechada el 13 de enero de 1994.

En escrito que antecede, recibido el 11 de diciembre último en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se formula el desistimiento expreso del recurso que fuera formalizado por el representante legal del señor **LUCINIO MIRANDA MORENO** fundado en lo dispuesto por el artículo 1073 del Código Judicial, el que permite a toda persona que haya interpuesto un recurso que desista del mismo.

Observa la Sala que el poder conferido por **LUCINIO MIRANDA** al licenciado Eliecer A. Pérez Sánchez, visible a fojas 80 del expediente, lo faculta para desistir y tiene establecido el artículo 1110 del Código de Procedimiento Civil que se refiere a los medios de impugnación y aplicable al procedimiento penal con vista en lo señalado por el artículo 1971 del Código judicial, que el recurrente puede desistir del recurso interpuesto antes de que se haya decidido el mismo.

De otro modo, no existe dentro de las normas que regulan la casación ninguna disposición que impida el desistimiento de este recurso extraordinario, razón por la cual se estima que procede admitir el desistimiento presentado por

el licenciado Eliecer A. Pérez Sánchez, en representación del señor **LUCINIO MIRANDA**, sobre el recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, **SALA PENAL**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley **ADMITE** el desistimiento presentado por el licenciado **ELIECER A. PÉREZ SÁNCHEZ** dentro del recurso de casación por él presentado, contra la sentencia del Segundo Tribunal Superior de Justicia, de fecha 30 de mayo de 1994.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
SECRETARIO SALA PENAL

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

APELACIÓN DEL INCIDENTE DE CONTROVERSIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A OMAR ALCIDES MEJÍA MUÑOZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JAIME RÍOS CASE. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado José Antonio Henríquez Solano, abogado defensor de **OMAR ALCIDES MEJÍA MUÑOZ**, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de **JAIME RÍOS CASE**, promovió incidente de controversia con motivo de la negación de una diligencia de careo solicitada al Fiscal Cuarto Superior, que tiene a su cargo la fase instructoria del proceso penal.

El Segundo Tribunal Superior, en auto calendado el 5 de junio de 1996, negó el incidente presentado, por cuanto es la opinión de ese colegiado que existen otros mecanismos probatorios por medio de los cuales el imputado y su defensor técnicos pueden desvirtuar los cargos que se le hacen a su patrocinado. También se fundamenta la decisión en el hecho de que la confrontación de testimonios que se pretende es entre el imputado y la concubina del occiso, quien estuvo presente en el momento en que su marido fue agredido violentamente a tiros que acabaron con su vida, a lo que se añade que ambos se conocen desde tiempos atrás porque residían en el mismo barrio.

Contra la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia, la defensa anunció y sustentó recurso de apelación, basado en lo que establece el artículo 2145 del Código Judicial, el cual no señala prohibición o límite alguno en materia probatoria y que es obligatorio agotar todas las diligencias que sean menester para lograr el descubrimiento de la verdad.

Por su parte, el Fiscal de la causa, al contestar el traslado del escrito de sustentación del medio de impugnación presentado por la defensa de Mejía Muñoz, indica que las razones que lo condujeron a negar la prueba de careo con la joven Indira González, concubina del occiso, obedece al hecho que hay otros testimonios que identifican a Omar Alcides Mejía Muñoz como el autor del ilícito. Además, el artículo 2145 del Código de Procedimiento que se cita como soporte jurídico de la apelación, le confiere una facultad discrecional al funcionario de instrucción al utilizar el verbo "podrá," que denota el uso de un criterio selectivo para aceptar la práctica de pruebas que contribuyan a incorporar elementos de juicio idóneos, destinados a esclarecer los hechos y descubrir la verdad.

La Sala al ponderar los argumentos del recurrente y los criterios jurídicos

y fácticos que motivan la resolución impugnada, toma en consideración la naturaleza del hecho punible que se investiga, pues se trata de un homicidio que tuvo lugar en presencia de la testigo contra quien se solicita la práctica de un careo, pues el imputado niega los hechos y se ubica en un lugar distante al sitio en el que se escenificó el homicidio de Jaime Ríos Case. No cabe duda alguna que el careo no es el mecanismo probatorio adecuado para desvirtuar el señalamiento e identificación que de su persona hace la testigo, ya que por lo general las diligencias de careos se limitan a una confrontación de las declaraciones vertidas en el expediente, donde cada parte se afirma en lo expresado, sin añadir elementos válidos que varíen la situación procesal anterior. Respecto al imperativo de la práctica de esta prueba por el funcionario de instrucción, la Sala observa que en las diligencias adelantadas hasta el presente, aparecen otros testimonios que identifican al señor Mejía Muñoz como supuesto autor del homicidio de Ríos Case, lo cual debilita la fuerza probatoria que pueda tener la diligencia solicitada.

Dado que la defensa ha iniciado su asistencia técnica desde las etapas preliminares de la investigación, aún tiene la oportunidad de promover el acopio de pruebas que acrediten la situación procesal de su patrocinado en este caso.

Por tanto, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA EL AUTO APELADO.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ABELARDO ANTONIO HERRERA, CONTRA LA RESOLUCIÓN CALENDADA 12 DE NOVIEMBRE DE 1996, DENTRO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, EN EL PROCESO PENAL SEGUIDO A JORGE ALBERTO MOSQUERA MURILLO, SINDICADO POR DELITO DE PECULADO, EN DETRIMENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ante la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el licenciado Abelardo Antonio Herrera, presentó Recurso de Reconsideración contra la resolución calendada 12 de noviembre de 1996, mediante la cual no se admitió el recurso de revisión que interpuso contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Segundo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá de fecha 19 de marzo de 1994 y su complemento la sentencia del 1 de diciembre de ese año, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

DISCONFORMIDAD DEL RECURRENTE

El licenciado Herrera sostiene que el Código Judicial en su artículo 614, numeral 3° y subsiguientes, al referirse a la validez de los poderes especiales otorgados ante Notario del Circuito no exigen como requisito que el poderdante deba estar revestido de alguna solemnidad, de alguna aureola de honestidad, ni siquiera que deba estar en paz con la justicia.

Por tanto, considera que el poder que le otorgó el señor Mosquera ante el Notario Público Quinto tiene plena validez y por lo tanto, debe ser admitido.

Cuestiona por qué fueron admitidos los poderes que otorgaron ante Cónsules en funciones notariales los señores Rafael Arosemena y el Capitán Bernal, quienes se mantienen al margen de la justicia panameña sin haber sido indagados por delitos graves.

Por otro parte, señala que la resolución impugnada califica a su representado de "prófugo de la justicia", a objeto de invalidar su poder notariado y declarar inadmisible el recurso de revisión.

Finalmente solicita a la Sala Penal revoque su resolución de 12 de noviembre de este año, y en su lugar declare admisible tanto el poder notariado como el recurso de revisión.

ANÁLISIS DE LA SALA

El recurso de reconsideración tiene por objeto que la parte que disiente con una decisión del juzgador solicite un nuevo análisis a objeto de que revoque, reforme, adicione o aclare su propia resolución.

De conformidad con el párrafo segundo del artículo 1114 del Código Judicial sólo son reconsiderables las providencias, autos y sentencias que no admiten apelación, situación que presenta la resolución impugnada, y por estar interpuesto el recurso dentro del término de ley, permite que se examinen los puntos objetados.

El basamento que tuvo la Sala para no admitir el recurso de revisión presentado por el licenciado Herrera fue el hecho de que el poder que le fuera otorgado por el señor Mosquera Murillo no se ajusta a lo normado en el artículo 614 numerales 2° y 3° del Código Judicial. Veamos:

El citado artículo, que regula los modos en que deben presentarse los poderes especiales para un determinado proceso, dispone en su numeral 2° que el poder se puede presentar por medio de un memorial que debe ser entregado en persona por el poderdante ante el secretario del juez que conoce o ha de conocer de la causa. Por su parte el numeral 3° indica **que, de no ser posible** lo anterior, se hará ante un juez Municipal o de Circuito, si se encuentra ante una cabecera de circuito o ante el Notario del Circuito.

En ese sentido la Sala ha manifestado que el "**Código Judicial permite la presentación de poderes ante notarios, pero en casos excepcionales, cuando no sea posible la comparecencia del poderdante ante el tribunal y por tanto, hay una obligación tácita de justificar las causas que dieron lugar a la no presentación del memorial ante el Juez del conocimiento**" (13 de febrero de 1995).

No explica el recurrente por qué no fue posible que su representado personalmente presentara el memorial ante la secretaría de la Sala Penal. Dado que las notarías laboran durante el mismo horario de los despachos judiciales, no cabe duda que era posible que el poderdante cumpliera con ese deber, pues si pudo hacerlo en una oficina notarial, igual pudo acceder al Tribunal correspondiente.

Tal vez se deba a que Mosquera Murillo durante todo el proceso en su contra **-que se inició desde 1989-** estuvo ausente e incluso fue declarado reo rebelde, ordenándose su detención en resolución de 25 de marzo de 1993 (fs. 97-100); y que al concluir el proceso penal con la sentencia de segunda instancia dictada el 1 de diciembre de 1994 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia que confirma las sentencia condenatoria, aún no se ha podido cumplir con las órdenes de captura en su contra, como lo afirmó el juez de la causa (f. 148).

Es el comportamiento asumido durante y después del proceso el que coloca a Mosquera Murillo como un prófugo de la justicia, por cuanto evade enfrentarse a ella. Ahora bien, si el recurrente tiene pruebas de la inocencia de su representado, como profesional del derecho y con una amplia experiencia tribunalicia sabe que la irregularidad presentada puede ser subsanada, pues la

ley le indica los trámites que debe realizar.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución emitida por esta Sala Penal el 12 de noviembre de 1996.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE HECHO

RECURSO DE HECHO, CONTRA PROVIDENCIA DE 10 DE OCTUBRE DE 1996, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, POR MEDIO DE LA CUAL SE DENIEGA EL AUTO DE 7 DE OCTUBRE DE 1996, MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZA DE PLANO EL INCIDENTE DE NULIDAD. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 28 de octubre del presente año, el licenciado Silvio Guerra Morales, abogado que representa la Acusación Particular promovida contra **ROBERTO PINZÓN** y **JACINTO MC DONALD**, procesados por el delito de homicidio de **JORGE FALCONETT** y **MARLENE MENDIZÁBAL**, presentó ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, un recurso de hecho contra la resolución de 10 de octubre de 1996, emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que deniega la apelación interpuesta contra el auto de 7 de octubre de 1996, dictado por el mismo Tribunal, el cual rechaza de plano el incidente de nulidad presentado por la acusación particular.

Por cumplidas las reglas de reparto, se dictó la resolución de 7 de noviembre (fs. 19-20), mediante la cual se fijó un término de tres días para que las partes presentaran sus alegatos, conforme lo prevé el artículo 1139 del Código Judicial. De esta resolución el Ministerio Público se notificó el 13 de noviembre, la acusación particular el 25 de noviembre, mediante memorial y la defensa el 2 de diciembre de 1996.

EL RECURSO DE HECHO

Según consta en el escrito presentado, el 7 de noviembre, un día antes de la fecha de audiencia fijada en este proceso penal, el representante de la acusación particular presentó un incidente de nulidad basado en que no había sido notificado personalmente de la fecha de audiencia ni del auto en que se admitían las pruebas de la defensa y tampoco del auto que acogió y negó algunas pruebas de la acusación particular.

Sostiene el recurrente que además de las omisiones apuntadas, el Tribunal no le entregó los tomos que conforman el expediente de la causa, tal cual lo preceptúa el artículo 2346 del Código Judicial y en ningún momento se corrió en traslado al Fiscal, ni al acusador particular ni a los defensores. Con motivo de estas omisiones, pide que se declare nulo lo actuado a partir del momento en que se venció el término probatorio y se le dé traslado a las partes para la lectura del expediente, tal cual lo prevé el procedimiento legal.

LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

La resolución censurada es la providencia de 10 de octubre de 1996 (fs. 14), mediante la cual se deniega la apelación interpuesta por el representante de la Acusación Particular, por cuanto la resolución recurrida en apelación no aparece en el artículo 2429 del Código Judicial, entre las susceptibles a ser impugnadas por este medio.

LOS ALEGATOS

Dentro del término legal, el abogado que funge como acusador particular, al igual que el que representa a la defensa, presentaron sendos escritos cuyos argumentos centrales pueden sintetizarse así: La acusación particular además de reiterar los hechos en que fundó su recurso, señala que la aplicación de las normas de notificación del libro II del Código Judicial al procedimiento penal, debe hacerse en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso penal, pero en este caso se suplió una notificación personal por una edictal fijada en la puerta de su despacho, que es un procedimiento contrario a la especificidad de las notificaciones personales en materia penal. Estima que al tenor de las nuevas corrientes doctrinales, tanto el imputado como la víctima tienen un espacio en el proceso y merecen igual tratamiento en cuanto a notificaciones y a los medios de impugnación.

El resto del escrito hace referencia a un fallo de la Sala que decidió otro recurso de hecho presentado en este proceso, con motivo de la negación de un recurso de apelación anunciado contra el auto que rechazó de plano el incidente de previo y especial pronunciamiento y como tales observaciones se refieren a otro caso, no procede su incorporación referencial en la decisión de este recurso.

Por su parte, la defensa en su alegato señala que este recurso debe ser rechazado de plano por cuanto se trata de la misma materia planteada en el recurso anterior, los argumentos son propios de un recurso de reconsideración del fallo de 18 de noviembre de la Sala Segunda y no del recurso de hecho presentado.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

De conformidad a los documentos que se aportan con el escrito que formaliza el recurso de hecho, se advierte que el incidente de nulidad de las notificaciones sobre la fecha y hora de la audiencia, de la admisión e inadmisión de pruebas y del incumplimiento del traslado y entrega de los expedientes, fue presentado el día 7 de octubre de 1996, un día antes de la fecha de audiencia que fue fijada mediante providencia calendada el 13 de septiembre de 1996.

Tratándose de recursos de hecho, conforme lo preceptúa el artículo 1141 del Código Judicial, lo primero que cabe examinar es si la resolución cuya apelación fue denegada, es impugnable por la vía de la alzada.

Como se anotó en párrafos precedentes, la resolución judicial expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial y que fuera objeto de apelación, obedeció a la presentación de un incidente de nulidad basado en la causal contenida en el numeral 5° del artículo 2297 del Código Judicial, que se refiere a no haberse notificado legalmente los autos y providencias que admiten o niegan pruebas.

El Tribunal rechazó de plano el incidente por considerarlo manifiestamente improcedente y motivó tal decisión señalando que las resoluciones que admitieron pruebas fueron notificadas por edicto y con posterioridad a la expedición de dichas resoluciones el incidentista se refirió a su contenido.

El punto a dilucidar consiste en determinar si un auto que rechaza de plano un incidente tiene la categoría de las resoluciones que deciden el mismo, al tenor de lo que dispone el numeral 3 del artículo 2429 del Código Judicial. Como es sabido las resoluciones judiciales pueden ser interlocutorias, de trámite o impulso procesal, declarativas o decisorias de las pretensiones o excepciones; a su vez pueden referirse a defectos formales subsanables sin entrar al fondo del asunto, o ser rechazadas de plano por ser manifiestamente improcedente, con lo cual no se entra a decidir la pretensión ínsita en el incidente. En estricto

derecho, no se podría hablar de una decisión propiamente tal, pues ni siquiera se tramitó el incidente.

Por otro lado, a pesar de que el recurrente utilizó la causal de nulidad sobre la notificación de las resoluciones que admiten o niegan pruebas, su fundamentación fáctica se extiende a la notificación de la fecha de audiencia y sobre el traslado del expediente, lo que desborda la causal invocada.

Si bien es cierto que el apelante anunció y presentó el recurso de hecho oportunamente y pidió y retiró las copias en el tiempo fijado por la ley, no puede perderse de vista el hecho de que la resolución cuya apelación le fue negada, por su propia naturaleza, no se encuentra entre las que deciden los incidentes.

Por las consideraciones que anteceden, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE EL RECURSO DE HECHO presentado por el licenciado Silvio Guerra Morales, representante de la Acusación Particular en el proceso penal seguido a ROBERTO PINZÓN y JACINTO MC DONALD por el delito de homicidio en perjuicio de BETSY MARLENE MENDIZÁBAL y JORGE ENRIQUE FALCONETT.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO DE REVISIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A IVÁN DE LOS REYES GODOY, POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El señor **IVÁN DE LOS REYES GODOY**, mediante nota manuscrita, remitida desde la Cárcel Modelo, a través de la Junta Técnica de dicho centro penitenciario, solicitó a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que revisara la sentencia condenatoria proferida en su contra, arguyendo violación del debido proceso y defectos probatorios graves.

Una vez cumplidos los trámites de reparto del caso, se dictó la providencia de 11 de octubre, mediante la cual se corrió traslado del negocio a la licenciada Beatriz Herrera Peña, Defensora de Oficio, para que estudiara la solicitud presentada por el procesado y en el supuesto de que existiera causal legal para hacer uso de este medio de impugnación extraordinario, formalizara el mismo en el término de ley.

El 13 de noviembre, por Secretaría de la Sala Segunda, se recibió un escrito de la licenciada Herrera Peña en el que expresa que después de estudiar la situación procesal de Iván de los Reyes Godoy, se percató que su caso fue tramitado en primera instancia en el Juzgado Décimo Tercero de Circuito, Tribunal que le impuso la pena de cinco años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, al considerarlo coautor del delito de robo en perjuicio de Da Xiong Qiu. Esa sentencia fue impugnada en apelación presentada por su abogado defensor, pero el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó la sanción impuesta en su contra.

Al momento que reingresó el caso al Tribunal de primera instancia, el licenciado Guillermo Ríos, quien funge como su abogado defensor, anunció recurso

de casación, el cual se encuentra en los trámites preliminares de formalización ante el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. Estima la licenciada Herrera que como quiera que no se han agotado los recursos destinados a que se revise la sentencia condenatoria impuesta al señor Godoy, cabe esperar la resolución final en el caso, antes de intentar un recurso de revisión.

Le asiste la razón a la Defensora de Oficio, ya que el caso penal que se le sigue al solicitante, aún no ha concluido, en virtud de que se tramita en estos momentos un recurso de casación anunciado por su abogado defensor y por tanto falta uno de los presupuestos esenciales en todo recurso de revisión, cual es el de la existencia de una sentencia debidamente ejecutoriada, lo que no se ha dado en el caso que nos ocupa por cuanto el recurso de casación tiene efectos suspensivos sobre la decisión de segunda instancia e impide el tránsito a cosa juzgada hasta que finalicen las fases de admisión, sustanciación y decisión.

En consecuencia, la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión propuesto por IVÁN DE LOS REYES GORDÓN en este caso.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LA DEFENSA TÉCNICA DE VIRGILIO HERNÁNDEZ FLORES, INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENA A SU REPRESENTADO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL, COMETIDO EN PERJUICIO DE LA MENOR EDILSA AVECILLA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La defensa técnica de Virgilio Hernández Flores ha presentado escrito mediante el cual aduce pruebas testimoniales dentro del recurso de revisión que le fuera admitido, consistentes en las declaraciones de Publio Mojica y José María Vergara Rodríguez (f. 49).

De acuerdo con lo normado por el artículo 2459 del Código Judicial, el recurrente deberá presentar "con el memorial" mediante el cual interpone el recurso "las pruebas los hechos fundamentales" que le sirven de sustento, lo que establece a su cargo la obligación de preconstituir las pruebas que aduce. En concordancia con esta interpretación, el artículo 2460, ibídem, señala que el término de pruebas que debe abrirse durante el trámite del recurso es **"para practicarlas"**, haciendo obviamente alusión a las que ya hubieren sido aducidas y acompañadas con el libelo. De allí que las pruebas que ahora aduce el recurrente durante el trámite de práctica de pruebas, resulten a todas luces extemporáneas.

Por lo antes expuesto, el Magistrado Sustanciador, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EXTEMPORÁNEAS las pruebas testimoniales que ahora aduce la defensa técnica de Virgilio Hernández Flores.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ELIZABETH ESPAÑA GIRALDO, SINDICADA POR DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Mabel Troya de Steppuhn en representación de **ELIZABETH ESPAÑA GIRALDO**, presentó recurso de revisión contra la sentencia de 6 de enero de 1995, dictada por la Juez Cuarta de Circuito, Ramo Penal, por el delito de emisión de cheques sin suficiente provisión de fondos.

Al revisar el texto del escrito mediante el cual se formaliza este recurso extraordinario de revisión, se advierte que la recurrente invoca la causal contenida en el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial, que se refiere a aquellos casos en que después de la expedición de la sentencia condenatoria, se descubran nuevos hechos que por sí mismos o combinados con las pruebas que existen en el expediente, den lugar a la absolución de la persona acusada o a la aplicación de una disposición penal menos severa. Acorde con esa causal sostiene que con posterioridad a la sentencia de 6 de enero de 1995, mediante la cual se condenó a su representada ELIZABETH ESPAÑA GIRALDO por el delito de emisión de cheques sin suficiente provisión de fondos, exactamente el 23 de julio de 1995, seis meses después, la señora ESPAÑA GIRALDO canceló el monto de los dos cheques sin fondo que dieron lugar al proceso penal, pero que la denunciante por desconocimiento de la ley y los procedimientos, no se apersonó a retirar la denuncia o a desistir de su acción.

La sola confrontación de las fechas suministradas por la recurrente demuestran que procesalmente hablando no cabía, ni desistir de la acción punitiva, ni el retiro de la denuncia, pues, a esa fecha ya se había dictado la sentencia condenatoria, la cual estaba debidamente ejecutoriada. En estas condiciones el pago realizado se ubica en la reparación civil derivada de delito, a través del reembolso patrimonial por razón de la lesión causada al bien jurídico de la denunciante.

El documento que aparece a folio 5 y que se aporta como prueba de la causal invocada, reafirma una acción a posteriori de la sentencia condenatoria dictada y por lo tanto, carente de idoneidad procesal para constituir la causal contenida en el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial. Los efectos serían diferentes si el pago o reembolso de los cheques sin fondos se hubiera llevado a cabo dentro de las diferentes etapas del proceso, ya sea en fase la sumaria, ya sea en la fase intermedia o en la plenaria, pues en tales circunstancias la pena aplicable hubiera sido diferente y en el supuesto de que ese reembolso se hubiera hecho en la fase sumaria cabría el desistimiento de la pretensión punitiva como forma extraordinaria de terminación del proceso penal.

Por las razones que anteceden, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso extraordinario de revisión presentado por la licenciada Mabel Troya de Steppuhn en este caso.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CECILIO AUSTIN

JACKSON, SINDICADO POR EL DELITO DE POSESIÓN AGRAVADA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Segunda de lo Penal recurso extraordinario de revisión que, en su propio nombre, interpusiera Cecilio Austin Jackson contra la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia que confirma la pena de 5 años de prisión que le fuera impuesta por el juzgador de primera instancia, como responsable del delito de posesión agravada de droga ilícita.

Como quiera que la iniciativa procesal propuesta requiere ser formalizada por un jurista, el 18 de octubre de 1996 el despacho sustanciador asignó como defensora de oficio del recurrente a la licenciada Carmen L. Tovar de Stagnaro, con el propósito de que "lo asista en cuanto a la correcta formalización del recurso interpuesto" (f. 21). En cumplimiento de este encargo, la defensora de oficio designada ha presentado escrito en el cual expresa que tanto el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal como el Segundo Tribunal Superior, para condenar "se fundamentan principalmente en la primera declaración indagatoria que rindió YIRKA CABALLERO, en la que formuló cargos contra mi patrocinado; sin embargo, un análisis de este testimonio pone en evidencia que el mismo carece de fuerza legal probatoria para sustentar la condena" (f.22). Sostiene la defensora técnica que "la testigo YIRCA CABALLERO rectificó su declaración inicial ... desvinculando totalmente al señor CECILIO AUSTIN JACKSON, contra quien había hecho cargos folsos (sic), según ella misma admitió" (f. 23), y acompaña una certificación expedida por el presidente de UTRACOLPA, S. A. sobre el horario de salida de los autobuses de la ruta Panamá-Colón.

La Sala procede a examinar el libelo presentado, a los efectos de decidir sobre la admisibilidad de la revisión que se solicita. En tal empeño se advierte que la defensora de oficio, a pesar de que manifiesta formalizar el recurso de revisión, no indica siquiera la causal que invoca en apoyo de su pretensión, entre las que enumera el artículo 2458 del Código Judicial. En adición a este vicio sustantivo, a pesar de que la jurisprudencia tiene establecido que el deber de acompañar con el libelo las pruebas de los hechos fundamentales del recurso (a. 2559) se refiere a la presentación de nuevos elementos de convicción que no hubieren sido considerados en la sentencia, lo que propiamente se persigue con esta iniciativa procesal es una **revaluación** del acervo probatorio de autos, ya ponderado por el juzgador de instancia, a la luz de una certificación expedida para desmentir un testimonio que, según se admite, fue oportunamente retractado.

Por las razones anteriores, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por la licenciada Carmen L. de Stagnaro, en representación de Cecilio Austin Jackson y ORDENA EL ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE SIGUE A HÉCTOR ROLANDO PÉREZ, CONDENADO POR EL DELITO DE HURTO AGRAVADO, COMETIDO EN PERJUICIO DE INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Melvis Ramos Ramos ha interpuesto recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 11 de julio de 1996, proferida por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condena a Héctor Rolando Pérez a la pena de 20 meses de prisión, como responsable del delito de hurto agravado cometido en perjuicio de Industrias Lácteas, S. A.

El libelo presentado a tales efectos identifica la sentencia cuya revisión se demanda, así como el tribunal que la pronunció, precisa el delito que dio lugar a la condena y señala que la sanción impuesta es de 20 meses de prisión.

Como fundamento de la pretensión se invoca la causal que contempla el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial; se acompaña, como prueba de los hechos fundamentales, copia autenticada de la resolución que abrió causa criminal contra Rolando Pérez, la sentencia que condena al sindicado y la indicación de que el expediente se encuentra radicado en el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial. El memorial también es acompañado por una certificación y contrato de trabajo expedidos por la empresa Tamburrelli e Hijos, S. A., y una certificación de trabajo emitida por la empresa Pizza Hut (fs. 8-29). Cabe destacar que el memorial sólo solicita que se allegue el expediente de la causa, para que obre como prueba documental, petición que deberá atenderse durante el término de la práctica de pruebas.

En cuanto a los fundamentos de derecho de la solicitud, se invocan los artículos 905, 2058, 2071, 2135-A, 2222, 22224, 2297, 2413 y 2458 del Código Judicial y el 183 del Código Penal (f. 7).

Como quiera que el recurso interpuesto cumple con las formalidades prevista en los artículo 2458 y 2459 del Código Judicial, la Corte considera procedente su admisión.

Por las anteriores consideraciones, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de 11 de julio de 1996, proferida por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condena a Héctor Rolando Pérez, por la comisión del delito de hurto agravado cometido en perjuicio de Industrias Lácteas, S. A., y DECLARA abierto a pruebas el proceso por el término de 30 días.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENA A NIVALDO DE GRACIA SANJUR A LA PENA DE 9 AÑOS DE PRISIÓN, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE COMETIDO EN PERJUICIO DE EUDES ARNOLDO ARJONA JURADO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema el recurso de apelación presentado por la licenciada Micaela Morales Miranda, defensora de oficio de Distrito Judicial, contra la sentencia de 13 de agosto de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que condena a Nivaldo de Gracia Sanjur a la pena de 9 años de prisión, por la comisión del delito de homicidio simple en perjuicio de Eudes Arnoldo Arjona Jurado.

La recurrente solicita se disminuya la pena de prisión impuesta, por

considerar que el hecho ocurrió por la ingesta de bebidas alcohólicas, que su defendido fue agredido por la víctima y porque De Gracia es un humilde agricultor que no tiene antecedentes penales (fs. 532-533).

La defensora de oficio solicita concretamente el reconocimiento de la circunstancia de atenuación común que prevé el numeral 7 del artículo 66 del Código Penal, por estimar que "la ingesta de alcohol de mi cliente ...", configura una eximente incompleta (f. 534).

Conocida la argumentación de la recurrente, se pasa a resolver la alzada sólo sobre los puntos a que se refiere la impugnante, tal como lo establece el artículo 2428 del Código Judicial. Con tal propósito, la Sala advierte que no son materia de discusión los argumentos que tienen el propósito de justificar la conducta de De Gracia, por considerar que la culpabilidad del reo fue decidida por un tribunal de jurados de conciencia (Cf. 326).

El cuaderno penal da cuenta de que en la tarde del 7 de mayo de 1995, en la cantina "Jardín Mi Cielo", ubicada en la comunidad de El Común, distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, se suscitó una riña entre Nivaldo De Gracia Sanjur y Eudes Arnoldo Arjona Jurado, la que fuera interrumpida por un hermano del fallecido. Luego de la pelea, De Gracia Sanjur, de manera cautelosa se aproximó a Eudes Arnoldo Arjona Jurado y le asestó una puñalada en el área del tórax, que le causó la muerte. El protocolo de necropsia revela que Arjona Jurado presentaba una "herida penetrante en tórax anterior, de predominio izquierdo que en su trayecto lacera la aurícula y ventrículo derecho, provocando una pérdida súbita de sangre, tanto al exterior como en cavidad pericárdica, que rápidamente conllevan a un desgaste hemodinámico, irreversibles y por ende a su muerte". Concluye el informe médico que Arjona murió por "I CHOQUE HEMORRÁGICO II HERIDA CORTANTE PENETRANTE A TÓRAX" (f. 184).

El Tribunal de la causa, tras encuadrar la conducta del procesado en el artículo 131 del Código Penal, individualizó la pena en 9 años de prisión, de conformidad con los factores que contempla el artículo 56 del Código Penal, sin que se acreditaran circunstancias de agravación o atenuación común modificativa de la responsabilidad penal (fs. 516-517).

La Corte considera correctamente individualizada la pena base fijada por el a-quo, ya que se advierte que el juzgador ha dosificado la pena dentro del marco de la discrecionalidad que autoriza nuestro ordenamiento jurídico, sustentada en la correcta apreciación legal de las pruebas y la determinación de los hechos y circunstancias que de ellas deben deducirse para la imposición de la pena. Toda vez que el a-quo ha ejercido debidamente la facultad que la ley le otorga para fijar el quantum de la pena base, el reparo que se formula a este respecto carece de asidero legal.

En cuanto a la circunstancia atenuante que invoca la recurrente, la Sala considera que, de conformidad con las constancias procesales, el agente se embriagó voluntariamente, por lo que no se configura la eximente de responsabilidad alegada, ya que el reconocimiento de la inimputabilidad resulta de la comprobación de la embriaguez total de naturaleza fortuita (a. 29, C. P.).

En síntesis, la Corte es del criterio que la pena impuesta por el a-quo lo ha sido conforme a la entidad del daño causado y a la individualización personal que corresponde en este caso.

Por las anteriores consideraciones, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad e la ley, CONFIRMA la sentencia de 13 de agosto de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que condena a Nivaldo de Gracia Sanjur a la pena de 9 años de prisión, por la comisión del delito de homicidio simple cometido en perjuicio de Eudes Arnoldo Arjona Jurado.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A DAMIÁN DE LEÓN BERROA, POR DELITO DE HOMICIDIO, EN PERJUICIO DE CARLOS ALBERTO IBARRA AMORES. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución calendada 21 de mayo de 1996 el Segundo Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado de conciencia condenó a **DAMIÁN DE LEÓN BERROA (a) "Huevito"** a la pena de catorce (14) años y ocho (8) meses de prisión como responsable del delito de homicidio en perjuicio de Carlos Alberto Ibarra Amores (fs. 353-360).

Al ser notificado de la condena que le fuera impuesta, el procesado De León Berroa apeló de la misma, siendo sustentado el recurso tanto por su persona como por su abogado defensor, el licenciado Carlos Arosemena Ramos, miembro del Instituto de Defensoría de oficio.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El procesado aboga por el reconocimiento de su calidad de delincuente primario, para que se parta de la pena mínima, que no se consideró su confesión, edad, grado de escolaridad y lugar en que se desenvuelve (fs. 361-vt).

Por su parte, el licenciado Arosemena Ramos sostiene que al momento de individualizar la pena el tribunal a-quo no calibró en su justa dimensión la calidad de los motivos determinantes ni las condiciones personales del sujeto activo o de la víctima, tales como: que su representado manifestó que el hecho ilícito se dio cuando logró agarrar el arma al hoy occiso y lleno de ira efectuó varios disparos; que tanto la víctima como el victimario estaban bajo los efectos de drogas; que el motivo determinante fueron los celos; y que a la declaración de María Isabel Prado Peter se le dio mucha preponderancia sin valorar que era novia del finado y la ex-novia del procesado.

Aunado a lo anterior se indica que no se consideró las circunstancias atenuantes ni la confesión espontánea del agente y las peculiares condiciones del ambiente.

Apoyado en esos hechos solicita a esta Sala revoque la sentencia atacada y profiera una sentencia que contemple las circunstancias atenuantes que por ley tiene derecho su defendido (fs. 363-365).

ANÁLISIS DE LA SALA

En efecto, el tribunal de grado al evaluar las piezas probatorias calificó de homicidio simple la conducta desplegada por De León Berroa, delito que tiene penalidad de 5 a 12 años de prisión.

Para la individualización judicial, consideró en su conjunto los siete factores que consagra el artículo 56 del Código Penal, dentro de los cuales se contempla la buena conducta anterior, lo cual no es atenuante. Es así que, entre los límites que señala la norma vulnerada, partió de once (11) años de prisión.

Luego, contrario a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 57 ibídem, consideró que no había atenuantes que valorar, después, aumentó una tercera parte en razón de la aplicación de la agravante prevista en el numeral 1° del artículo 67 de ese mismo código, quedando la pena líquida a cumplir en 14 años y ocho meses de prisión.

Al dar sustento a la agravante aludida, textualmente el a-quo al referirse a la conducta del procesado determina que su acción es agravada por lo siguiente:

> "... por el hecho de haber empleado medios que debilitaron la defensa del occiso, numeral 1° artículo 67 del Código Penal. Se sustenta lo expuesto porque DE LEÓN BERROA dejó pasar al finado y su compañera frente a él, sin hacer nada que pusiera al difunto en estado de alerta, pues aun cuando cantara "blo, blo, blo", no dejó ver que estaba armado y ello hizo que, de regreso, éste pasara quizás, con mayor confianza y el procesado, aprovechó, como en efecto lo hizo ese estado de indefensión que sagazmente él había armado".

No observa la Sala cuáles fueron los medios empleados que debilitaron la defensa del ofendido. En el ambiente en que ocurrieron los hechos el actuar del procesado, no se pude afirmar que debilitó la defensa del sujeto pasivo, no obstante se acepta que al estar armado con arma de fuego tenía superioridad sobre su víctima. No se debe perder de vista, tal como lo ha reiterado esta Sala, en este tipo de delito **"el arma utilizada es un instrumento esencial, ya que sólo por excepción se podría concebir su comisión sin auxilio de tal recurso"** (Octubre 28 de 1991). Sin embargo, en este caso hubo ensañamiento al hacerle varios disparos aún después de haber caído la víctima.

La situación planteada no fue advertida por la defensa técnica, quien no tuvo reproche alguno con respecto a la imposición de la mencionada agravante y dado que las normas procesales que regulan la materia del recurso de apelación obligan al tribunal de alzada a centrarse sólo al examen de los puntos objetados por el impugnante, (art. 2428 del C. J.) no podemos variar esa situación.

Ahora bien, en cuanto a las atenuantes que alega a favor del procesado la defensa, la Sala constata que en el expediente no aparece la confesión espontánea y oportuna del procesado, quien luego de disparar contra Ibarra Amores el 9 de marzo de 1994, ante testigos, huyó del lugar y no fue capturado hasta el 10 de abril.

Respecto a las otras atenuantes invocadas, cabe el reconocimiento de las peculiares condiciones del ambiente a que se refieren tanto el imputado como la defensa y que se encuentra en los artículos 56 y 66 del Código Penal. Veamos:

El joven De León Berroa al momento de su conducta típica, antijurídica y culpable tenía 20 años de edad, había cursado hasta tercer año de secundaria, no registraba antecedentes penales, pero se ha desenvuelto en un área altamente criminógena, cuya contribución significativa precisamente la dan los jóvenes de su edad, adictos a drogas, alcohol, desempleados, quizás motivados por fenómenos negativos tanto familiares como culturales y socio-económicos, que los lleva a un comportamiento delictivo sin la debida acción preventiva de parte de los organismos sociales y políticos.

Por esas razones, es de justicia disminuirle de conformidad con el artículo 69 del código punitivo patrio una tercera parte, quedando la pena líquida a imponer en once (11) años de prisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la sentencia apelada en el sentido de CONDENAR a DAMIÁN DE LEÓN BERROA, de generales conocidas en autos a la pena de ONCE (11) años de prisión por el homicidio de Alberto Ibarra Amores; y confirma en lo demás.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JUAN BARRÍA JIMÉNEZ Y CÉSAR AUGUSTO ROLDÁN DE GRACIA, POR DELITOS DE HOMICIDIO Y PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LIBERTAD INDIVIDUAL, EN PERJUICIO DE RAYMOND MONROE DRAGSETH Y FERNANDO BRATHWAITE. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia de 6 de febrero de 1996 el Segundo Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con el veredicto de culpabilidad que emitiera un jurado de conciencia en audiencia oral y pública celebrada en el mes de noviembre de 1995, **CONDENÓ** a **JUAN BARRÍA JIMÉNEZ** a la pena de veinte años (20) de prisión, por el delito de homicidio en perjuicio de Raymond Monroe Dragseth y Fernando Brathwaite; y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término una vez cumplida la anterior; y le impone las medidas de seguridad preventivas de carácter personal, de la obligación de presentarse mensualmente por el término de diez años ante el organismo respectivo del Ministerio de Gobierno y Justicia y a la prohibición de portar armas, por el término de veinte años, ésto una vez cumplida la pena de prisión. Asimismo **CONDENÓ** a **CÉSAR AUGUSTO ROLDÁN DE GRACIA** a la pena principal de cinco (5) años y diez (10) meses de prisión y a la accesoria de cuatro años una vez ejecutada la anterior, por el delito de privación arbitraria de la libertad individual de Raymond Monroe Dragseth, así como la medida preventiva de carácter personal de prohibición de portar armas por el plazo de cinco años después de salir del lugar donde guarde prisión (fs. 5,713-5, 727 vt.).

Esta decisión jurisdiccional fue apelada al momento de notificarse por el procesado Barría Jiménez y su abogado defensor, Dr. Bolívar Dávalos Moncayo al igual que el Acusador Particular, licenciado Luis Felipe Muñoz.

Por sustentado el recurso en tiempo oportuno por los profesionales del derecho, fueron concedidos los recursos interpuestos, lo que permite examinar las objeciones planteadas.

FUNDAMENTO DE LOS APELANTES

El licenciado Muñoz, solicita la reforma de la sentencia impugnada al considerar que contra Barría Jiménez pesan agravantes ordinarias no previstas como elementos constitutivos o específicas de dichos hechos, las cuales no fueron cuantificadas por el tribunal sentenciador al momento de emitir la condena.

Las agravantes que estima se dan son las contempladas en los numerales 1, 3, 6 y 7 del artículo 67 del Código Penal.

Explica así, que se acreditó el abuso de la superioridad y se emplearon medios que debilitaban la defensa de las víctimas, toda vez que fueron varios agentes de las extintas Fuerzas de Defensa los que contribuyeron a la ejecución de los homicidios de las víctimas mismas que habían sido atadas de las manos debilitando cualquier defensa.

Señala además, que se obró con saña porque antes de causarles la muerte les propinaron golpes y patadas; que los homicidios se ejecutaron con abuso de las facultades inherentes al cargo que desempeñaban Barría y sus compañeros, como agentes de las Fuerzas de Defensa; que los homicidios se ejecutaron con arma de fuego de gran calibre y con el auxilio de otros agentes.

Discrepa también, de la sentencia impugnada al considerar que tanto el homicidio de Dragseth como el de Brathwaite se cometieron en las mismas circunstancias, existiendo igualdad de gravedad, lo que hace discutible la

aplicación del literal a) del artículo 64 del Código Penal; lo que sentaría el precedente de que aún en casos de homicidios múltiples la pena por estos casos no pasaría de 20 años de cárcel (fs. 5,746-5,748).

Por su parte la defensa técnica, solicita la aplicación de la atenuante de imputabilidad disminuida como lo señala el artículo 66 del Código Penal en sus ordinales 7 y 8 en relación con el artículo 69 ibídem. Además, estima no es posible subsumir la conducta de Barría Jiménez en la norma contenida en el artículo 132 del código punitivo, siendo saludable por el bien de la justicia, que su actuación se califique como un homicidio simple. Apoya su tesis en citas jurisprudenciales patrias, en los informes psicológicos y psiquiátricos forenses, y en un análisis del numeral 3° del artículo 132 del Código penal (fs. 5,749-5758).

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

A temprana hora de la madrugada del día 20 de diciembre de 1989 en momentos que el ejército de los Estados Unidos de América invadía la República de Panamá, miembros de las extintas Fuerzas de Defensa irrumpieron en el edificio Sonesta ubicado en el sector de Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco de la Caleta, en la ciudad capital; y de manera violenta y fuertemente armados entraron al hogar del ciudadano norteamericano Raymond Monroe Dragseth a quien delante de su familia se lo llevaron como rehén, apareciendo muerto un días después junto con el ciudadano panameño Fernando Brathwaite.

Vinculados a ese ilícito fueron llevados al plenario Juan Barría Jiménez, a quien un jurado de conciencia declaró culpable de los homicidios de Dragseth y Brathwaite; y Cesar Augusto Roldán De Gracia, culpable por delito contra la libertad individual de Dragseth y absolutorio por el delito de asociación ilícita para delinquir en perjuicio de la Seguridad Colectiva.

FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA

De conformidad con las normas procedimentales se examinarán sólo aquellos puntos que han sido objetados por los apelantes (art. 2428 del C. J.).

El tribunal a-quo tomó como basamento para calificar la conducta típica, antijurídica y culpable de Barría Jiménez como homicidio agravado el cual está contemplado en el numeral 3° del artículo 132 del Código penal, referente al medio de ejecución atroz y que es sancionado con pena de prisión de doce (12) a veinte (20) años; al considerar que la materialización delictuosa representó una crueldad inaudita, contra sus víctimas, quienes ante la conmoción pública generada por la invasión, permanecían en sus hogares en un plan pacífico e inofensivo.

Luego aplicó la norma referente al concurso material contemplado en el artículo 64, literal a) que ordena que ante dos hechos punibles realizados por el agente se le impondrá la pena por el más grave, con un aumento de hasta la tercera parte que le correspondería por el otro.

Es así, que el tribunal a-quo consideró que el homicidio de Dragseth era más grave y escogió dieciséis (16) años de prisión y por el homicidio de Brathwaite el mínimo de doce (12) años, determinando la cuarta parte de éste último que serían cuatro años.

Por otra parte, estimó que no se daban circunstancias atenuantes o agravantes que alteraran la dosificación de veinte (20) años de prisión. Destaca que se tomaron en consideración las condiciones personales del inculpado, con ausencia de antecedentes penales y policivos, lo mismo que su evaluación psicológica y social.

En cuanto a los argumentos sostenidos por la Acusación Particular, estima esta Sala que en el presente caso no es correcto considerar ninguna de las agravantes que alega.

En primer lugar, en cuanto a las dos agravantes contempladas en el numeral

1° del artículo 67 del Código penal, abuso de superioridad o emplear medios que debiliten la defensa del ofendido, sólo fue un miembro de las Fuerzas de Defensa el que hirió de muerte a Dragseth; y aunque no hubiese estado atado de las manos, difícil sería su posibilidad de defensa, toda vez, que su victimario estaba armado con fusil T-65, que al decir del perito Darío Herrera, en el acto de audiencia, es un arma militar de gran alcance (f. 5,273).

Respecto al ensañamiento, que consiste en aumentar el mal causado por el delito con otros medios innecesarios, no puede considerarse esta agravante dado que se asemeja al elemento constitutivo del tipo penal utilizado por tribunal de primera instancia, al calificar el actuar reprochable de Barría Jiménez, es decir, se asemeja al homicidio agravado por razón de medios de ejecución atroces, y se produce precisamente cuando el sujeto activo del hecho punible realiza acciones tendientes a aumentar el dolor de la víctima, mismas que son innecesarias para obtener el fin deseado.

Por otro lado, esta Sala en forma reiterada ha desestimado el aumento correspondiente a la agravante referente a perpetrar el hecho punible con armas, cuando se trata de la ejecución del delito de homicidio, al considerar que **"es un instrumento esencial, ya que sólo por excepción se podría concebir su comisión sin el auxilio de tal recurso"** (Octubre 28 de 1991).

Finalmente, tampoco se podría aplicar la agravante referente al abuso de autoridad por parte de Barría Jiménez, porque la individualización judicial llevada hasta ese momento, es decir, la pena base y la punibilidad del concurso material homogéneo, hacen un total de veinte años de prisión y aplicar la agravante invocada, sería contrario a lo dispuesto en los artículos 47, 57 y 64 de la legislación punitiva patria, pues en ningún caso la pena podrá exceder del máximo de veinte (20) años de prisión.

Si bien el tribunal a-quo no lo señaló, aplicó las reglas del concurso material homogéneo, que acontece cuando el sujeto activo realiza una pluralidad de acciones independientes que encajan en un mismo tipo penal.

Nuestro Código penal, para la determinación de la punibilidad de esta forma de concurso, en el literal A del artículo 64 adopta el principio de acumulación jurídica que **"es un límite a la acumulación material de penas, sea que ello se presente de manera absoluta o relativa creando un marco penal máximo que no puede ser superado por el juzgador; o bien, reduciendo las penas imponibles para cada hecho en concreto según pautas previamente trazadas, las cuales se suman al final"** (Fernando Velásquez Velásquez. Derecho Penal. Parte General. Segunda Edición, 1995. Editorial Temis, S. A. pág. 604).

Sin obviar que el concurso de hechos punibles no es más que un problema de determinación de la pena, este principio, conduce a la aplicación de penas no draconianas.

Como lo indica la norma en comento, se debe imponer la pena por el delito más grave. En el caso sub-júdice, si bien se está ante dos hechos punibles que atentan contra la vida humana independiente, le cabe razón el tribunal de primera instancia cuando determinó que el homicidio cometido contra Dragseth era más grave, opinión que ciertamente no motivó.

En el caso de la muerte violenta del ciudadano norteamericano Dragseth, no se puede obviar la manera en que fue sacado de su hogar, el cual fue violentado y su familia amenazada, incluso fueron despertados y amenazados sus ancianos suegros.

Por su parte, las circunstancias de la detención arbitraria del ciudadano panameño Brathwaite, quien laboraba en la embajada norteamericana en el departamento de mensajería, son distintas. La misma se dio cuando se encontraba cerca de su casa al final de calle 13 Río Abajo.

Por tanto el tribunal a-quo no ha hecho más que ajustarse la individualización legal hecha por el legislador quien ante la presencia de

concursos de hechos punibles busca aplicar una pena que no sea inoperante e injusta.

Respecto a la alegación planteada por la defensa técnica, no se debe obviar que al ser considerado Barría Jiménez un sujeto imputable fue sometido a juicio, siendo declarado culpable por un jurado de conciencia.

El artículo 132 consagra las circunstancias en que se agrava la responsabilidad penal del sujeto que ha cometido un delito de homicidio y establece en su numeral 3° el motivo fútil y los medios de ejecución atroces. La sentencia examinada es clara al establecer que se calificó el delito como agravado por los medios de ejecución atroces ejecutados y no como afirma el licenciado Moncada Luna, por ambas modalidades.

Por otro lado, no resulta consecuente, la perturbación de conciencia -**imputabilidad disminuida-** alegada, porque Barría Jiménez, contrario a la afirmación de que tenía miedo, temor, con su actuar dio muestra de frialdad al dar muerte a dos personas totalmente indefensas, y mucho menos cuando constató la hegemonía del ejército de Estados Unidos sobre Tinajitas (fs. 5307), lo que evidencia más bien un deseo de venganza; además que se contradice en sus declaraciones.

A manera de comentario, esta Sala no comprende qué motivó al tribunal de grado ubicar el actuar ilícito de Roldán De Gracia en el tipo penal contemplado en el artículo 152 del Código Penal, cuando dada su calidad de servidor público correspondía aplicar el artículo 156 del código punitivo.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO CONTRA BENIGNO ORTÍZ RÍOS SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE VÍCTOR SAMUEL PÉREZ CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia calendada 3 de mayo de 1996, condenó a Benigno Ortíz Ríos a la pena principal de 12 años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, como responsable del delito de homicidio simple cometido en perjuicio de Víctor Samuel Pérez Castillo. Esa decisión jurisdiccional fue apelada por la licenciada Ana I. Belfon V., defensora técnica del reo, quien sustentó oportunamente la impugnación.

La recurrente se manifiesta en desacuerdo con la imposición de la pena máxima que contempla el artículo 131 del Código Penal a su patrocinado. Según su opinión, Ortíz Ríos merece una pena más "justa y adecuada", puesto que "no tuvo la intención dirigida o directa de matar a VÍCTOR MANUEL PÉREZ CASTILLO ... no existía entre ellos enemistad, ni se acreditó en el hecho un movil (sic)", y que "Durante 11 años trabajó en condiciones de estabilidad ... en Comerciales Asia"

(fs. 414-415).

Por otra parte, solicita el reconocimiento de la circunstancia de atenuación común que consagra el numeral 2 del artículo 66 del Código Penal, por estimar que su patrocinado "No tuvo la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo" (f. 415).

Conocidos los argumentos de la recurrente, le corresponde a la Sala decidir el recurso propuesto, exclusivamente sobre los puntos de la resolución que han sido objetados por la apelante, según lo dispone el artículo 2428 del Código Judicial. Cabe destacar que el examen de la sentencia se encuentra limitado a la consideración de la pena impuesta al autor de la conducta ilícita, toda vez que la culpabilidad del sentenciado fue declarada por un jurado de conciencia, decisión visible a foja 365 del cuaderno penal.

En relación con el primer reclamo, valga resaltar que las circunstancias mencionadas por la defensa para sustentar la disminución de la pena impuesta al reo guardan relación con los factores punitivos que considera el artículo 56 del Código Penal, los que deben ser tomados en consideración por el juzgador para tasar la sanción penal dentro de los límites señalados para cada hecho punible. Sobre este particular, la Corte ha señalado que la consideración de dicho precepto legal "debe ser a los efectos de que la operación matemática para determinar la pena líquida a imponer se ampare dentro de la discrecionalidad que para cada delito establece la normativa penal, sin que ello implique que también se le pueda considerar como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal" (Registro Judicial, agosto de 1993, pág. 152).

En el caso que ahora nos ocupa, se advierte que el tribunal a-quo, al momento de individualizar la pena correspondiente, dejó expuesto en forma expresa la aplicación del citado artículo 56 del Código Penal (f. 408), y en vista de que la pena líquida impuesta (12 años) se encuentra dentro de los límites establecidos por el tipo penal violado (art. 131 C. P.), se concluye que el reclamo formulado por la defensa a este respecto carece de fundamento legal.

En cuanto a la solicitud de que se reconozca la atenuante común de "No haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo", resulta necesario resaltar que esta circunstancia se asemeja a la figura de la "preterintención", es decir con el hecho de "producir un resultado que excede el propósito perseguido o sea un efecto que va más allá de la intención del agente" (Registro Judicial, octubre de 1991, pág. 26).

De acuerdo con las pruebas obrantes en autos, el día en que acaeció el hecho de sangre el sentenciado Ortíz Ríos ingería bebidas alcohólicas en compañía de Jimmy Wayler Escobar, Encarnación Mendoza, Luis Alberto Santos y Calixto Ortíz Pineda, en las inmediaciones de la Bodega "Hermanos Barría", ubicada en el poblado de Gonzalillo, sector N° 8, corregimiento de Alcalde Díaz, Distrito de Panamá. En ese momento escucharon voces y seguidamente la detonación de un arma de fuego. A raíz de este incidente, Ortíz Ríos sacó su arma de fuego y efectuó un disparo que lamentablemente impactó en la anatomía de Víctor Samuel Pérez Castillo, causándole la muerte.

Es un hecho incontrastable que el proceder del sentenciado Ortíz Ríos configura, por lo menos, el concepto de dolo eventual, pues al momento en que sacó su arma de fuego y efectuó la detonación debió representarse la posibilidad de que este comportamiento pudiera ocasionar daño a otra persona, daño eventualmente tan grave como la muerte, tal como en efecto ocurrió. A juicio de esta Corporación de Justicia, la conducta desplegada por el sentenciado excluye la posibilidad de reconocer el beneficio solicitado, pues la jurisprudencia penal ha sostenido que la atenuación "es aplicable en los casos en que el agente haya ideado la comisión del delito previendo su resultado, sin embargo, luego de cometerlo produce un mal mayor o más grave del que previó" (Registro Judicial, junio de 1991, pág. 41).

En vista de que no se encuentran fundados los reparos que le formula la defensa técnica, es del caso confirmar la medida jurisdiccional decretada por el a-quo.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 3 de mayo de 1996 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que condena a la pena de 12 años de prisión a Benigno Ortíz Ríos por el homicidio de Víctor Samuel Pérez Castillo.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

SOLICITUD FORMULADA POR FRANCISCO CÓRDOBA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CINCO (5) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Francisco Córdoba, quien se encuentra detenido en el centro penitenciario El Renacer por la comisión de delito contra la salud pública, solicita a la Sala Segunda de la Corte Suprema se le ponga a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección.

Antes de decidir sobre la petición formulada, se solicitó a la secretaría de la Sala si había ingresado a esta esfera jurisdiccional algún proceso penal en el que figure Francisco Córdoba (f. 4). En su respuesta afirmativa, la secretaría de la Sala Penal comunica que el 26 de junio de 1996 fue repartido el recurso de casación interpuesto a favor de Francisco Córdoba y otros, sindicados por delito contra la Salud Pública, el cual fue adjudicado a la Mgda. Aura E. Guerra de Villalaz (f. 5).

Con vista de esa información, por SALA UNITARIA se ORDENA que el libelo contentivo de la petición del imputado Francisco Córdoba sea devuelto a la secretaría de la Sala Penal, con el objeto de que sea sometido nuevamente a reparto.

Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA PRESENTADA CONTRA LA LICENCIADA ELVIA BATISTA, MAGISTRADA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ROBERTO LÓPEZ VILLARREAL Y MELQUISEDEC DE LEÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

V I S T O S:

Los señores **ROBERTO LÓPEZ VILLARREAL y MELQUISEDEC DE LEÓN** han promovido formal queja contra la Magistrada del Segundo Tribunal Superior de Justicia, licenciada **ELVIA BATISTA SOLÍS**, para que en proceso disciplinario se le sancione por supuesta "actuación negligente, morosidad en el cumplimiento de sus funciones e ignorancia inexcusable en la aplicación de la ley", dentro del proceso que se

les sigue a los quejosos por el delito de homicidio en perjuicio de LUIS HUERTAS DAVALOS.

El escrito contentivo de la citada queja fue presentado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y previa las reglas de reparto fue adjudicado al suscrito magistrado ponente. La queja viene fundamentada en el numeral 3 del artículo 285 del Código Judicial.

Ahora bien, todo tribunal ante el cual se dirija alguna acción, petición o recurso debe verificar previamente si posee competencia para conocer el asunto que le es sometido a su consideración.

En ese sentido, observa la Sala que carece de competencia para sustanciar y decidir la queja interpuesta. En efecto, el cargo disciplinarlo que se le endilga a la licenciada ELVIA BATISTA SOLÍS está consagrado dentro del Capítulo IX, Título XII, del Libro I del Código Judicial, esto es, dentro del capítulo identificado como "DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS".

El artículo 285 ibidem consagra los motivos que dan lugar a un proceso disciplinarlo contra los "servidores públicos del Escalafón Judicial y los del Ministerio Público de igual categoría". Conforme al artículo 277 de la mencionada excerta legal, "El escalafón comprende las categorías que van de Jueces Municipales de 2ª Categoría, a Magistrados de Distrito Judicial".

De lo anterior se deduce que la licenciada ELVIA BATISTA SOLÍS es funcionaria del escalafón judicial, debido a su condición de Magistrada del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

En ese orden de ideas, el artículo 288 del Código Judicial establece que la "jurisdicción disciplinaria sobre Jueces y Magistrados (entiéndase aquellos que pertenecen al escalafón judicial) será ejercida por el respectivo superior jerárquico".

Ello significa que corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como superior jerárquico de los Magistrados de Distrito Judicial -a quienes nombra de conformidad con el numeral 2 del artículo 88 ibidem-, conocer los procesos disciplinarios que se promuevan en su contra, y no a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

Si bien el artículo 95 del Código Judicial dispone que la Sala Segunda conocerá de "las causas por delitos o **faltas** cometidas por los Magistrados y los Fiscales de Distrito Judicial..." (lo resaltado es nuestro), el artículo 288 ibidem es una norma con sustrato normativo especial y, por tanto, desde este punto de vista, es obligatoria su aplicación.

En efecto, el concepto de falta a que alude el artículo 95 antes citado, incluye no sólo las causas disciplinarias sino aquellas causas que, tras lesionar el ordenamiento jurídico, no constituyen delito, como sería por ejemplo, los trámites a que dan lugar las colisiones vehiculares.

De donde resulta que el vocablo "faltas" alude a un concepto más abarcador. En esa perspectiva, no cabe la menor duda que el artículo 288 del Código Judicial es de aplicación preferencial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **SE INHIBE** en el conocimiento de la presente queja y **DECLINA COMPETENCIA** ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
SECRETARIO SALA PENAL

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO JUAN FAUSTINO QUINTO ÁLVAREZ CONTRA JORGE A. PLATA M. Y JOSÉ LUIS NAVARRO GUEVARA, POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su mérito legal, han ingresado a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia las sumarias que se relacionan con la denuncia que formulara el licenciado Juan Faustino Quinto Álvarez contra Jorge A. Plata M., Jefe Nacional del Departamento de Fiscalización Aduanera y José Luis Navarro Guevara, Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, por los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones públicas.

Según se afirma en el libelo de la denuncia, Jorge Antonio Herbert Tuñón fue detenido preventivamente mediante resolución emitida por Jorge A. Plata y puesto a órdenes de José Luis Navarro, bajo el cargo de haber transportado mercancías "desde la Zona Libre de Colón hasta el Aeropuerto de Tocumen, amparada en el formulario de Ley 26 N° 1600044, y que en el formulario mencionado existen irregularidades" (fs. 1-2). No obstante, a juicio del denunciante, en la encuesta sumarial "no existe elemento alguno que demuestre ... la comisión de delito aduanero por parte del imputado ... toda vez que ... el formulario ... no ha sido declarado por persona competente que sea falso o alterado, y en el mismo hay constancia de que la mercancía que supustamente (sic) no llegó a Tocumen fue recibida en ese lugar tal y como consta en la parte final de dicho documento" (f. 2).

Explica el licenciado Quinto Alvarez que los "servidores públicos han incurrido en abuso de sus funciones, toda vez que sin las formalidades descritas por la ley ... mantienen privado de su libertad al señor JORGE ANTONIO HERBERT TUÑÓN" (f. 2).

Antes de resolver sobre el mérito legal de las sumarias, la Sala ordenó que por Secretaría se solicitara al Ministro de Hacienda y Tesoro copia debidamente autenticada del Decreto de Nombramiento y Acta de Toma de Posesión de los servidores denunciados, a fin de determinar la calidad funcional que ostentan en la Dirección General de Aduanas (f. 62). Es así como, mediante Nota N° 401-01-204 calendada 4 de diciembre del año que decurre, la jefa del Departamento de Personal del Ministerio de Hacienda y Tesoro remitió la documentación requerida, en la que se hace constar que: Jorge A. Plata se desempeña como "ANALISTA DE RELAC. INTERNACIONALES III SUPERVISOR (JEFE DE ASESORÍA LEGAL-DITA)" (f. 65) y José Luis Navarro como "ADMINISTRADOR REGIONAL DE ADUANAS" (f. 68).

De lo antes expuesto se concluye categóricamente que ni Jorge A. Plata ni José Luis Navarro ejercen cargos con mando y jurisdicción en toda la República o en "dos o más Provincias que no formen parte de un mismo Distrito Judicial" (numeral 1 del artículo 95 del Código Judicial), lo que trae como consecuencia que esta Sala Penal carezca de competencia para conocer de la presente iniciativa procesal, siendo del caso declinar su conocimiento en la autoridad jurisdiccional a la que corresponda para cada uno de los funcionarios denunciados.

A juicio de la Corte, en lo que concierne a la situación jurídica de Jorge A. Plata, lo que corresponde en derecho es declinar la denuncia ante la esfera de los juzgados municipales, con fundamento en lo que establece el acápite A, numeral 1, del artículo 174 del Código Judicial, pues los hechos punibles endilgados son los de abuso de autoridad y extralimitación de funciones públicas. En cuanto a la situación procesal de José Luis Navarro, se colige que la competencia del negocio le atañe al Segundo Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 128 del Código Judicial, pues su calidad funcional -Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental (f. 20)- le otorga atribución en las provincias de Panamá y Darién,

según lo que establece el Decreto Ejecutivo N° 42 de 24 de noviembre de 1983, ambas pertenecientes al Primer Distrito Judicial.

Por lo antes expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA el conocimiento de este negocio penal ante el Juez Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, de turno y ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia en relación con la situación jurídica de Jorge A. Plata y José Luis Navarro, respectivamente.

Notifíquese y Envíese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA CONTRA HAYDEE G. PAOLO, CARLOS DE ICAZA, MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, Y CONTRA ALCIBÍADES RODRÍGUEZ, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su mérito legal, la Procuraduría General de la Nación ha remitido el cuaderno penal iniciado en virtud de denuncia que presentara el licenciado Eduardo E. Ríos, en representación de José del Rosario Muñoz, contra Haydee G. Paolo y Carlos de Icaza, Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, y contra Alcibíades Rodríguez, ex Magistrado de ese colegiado, por los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

Según expone el apoderado del denunciante, el 21 de marzo de 1992 José del Rosario Muñoz sufrió un accidente de tránsito "no profesional", y el 18 de diciembre de 1992, durante su incapacidad, la empresa Toyopan, S. A. le comunicó despido. De ese hecho tuvo conocimiento la junta de conciliación y decisión, la que declaró injustificado el despido, por considerar que, conforme al artículo 13 del Código de Trabajo, había precluído el término de la empresa para destituir a su trabajador. De esa actuación conoció el Tribunal Superior de Trabajo en grado de apelación, instancia que revocó el acto impugnado y absolvió a la empresa demandada, por considerar que el despido del trabajador se había realizado dentro del término de dos meses que establece el artículo 13 del Código de Trabajo, y porque la empresa demandada había pagado 36 días de incapacidad al demandante, conforme lo dispone el artículo 199 del Código de Trabajo (f. 2).

En relación con esta última actuación, el procurador del denunciante afirma que "el Tribunal recurrió a la falsedad y mentira, al señalar que a la fecha del accidente no profesional mi representado tenía treinta y seis (36) días en su fondo de enfermedad, puesto que en el expediente se aportó la certificación de la empresa en la que la misma bajo la gravedad del juramento informó a la Caja de Seguro Social que a la fecha del accidente no profesional José Del Rosario Muñoz tenía solamente quince días en su Fondo de Licencia por enfermedad, ya que había utilizado veintiún días (21) antes del accidente " (f. 3). Agrega, el letrado que, "Con esta maniobra fraudulenta el Tribunal despojó a mi representado de las prestaciones laborales a las que tenía derecho por despido injustificado, que suman mas de TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS (B/.35.000.00)" (f. 3).

El denunciante concluye afirmando que "es un acto arbitrario señalar que del período de incapacidad decretado por un médico, se descuenta los días de fondo de enfermedad que tenga derecho a cobrar un trabajador, para establecer el período real del tiempo de incapacidad; que aún en ese extremo, al ser quince (15) los que tenía en su fondo mi representado, y ser veintisiete el exceso de los dos meses de caducidad para comunicar el despido, quedaba un exceso de doce

(12) días, que hacía extemporáneo el despido comunicado el 18 de diciembre de 1992" (f. 3).

El libelo de la denuncia fue acompañado con copia autenticada de la resolución de 25 de noviembre de 1994, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión, y con copia de la resolución de 30 de mayo de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo (fs. 4-24).

Tras aprehender el conocimiento de la denuncia, el Procurador General de la Nación, mediante Vista N° 80 de 14 de noviembre de 1996, opina que de las constancias sumariales no se configuran los delitos imputados, por estimar que no se vislumbra la "intención dolosa por parte del funcionario de cometer el hecho punible" (f. 30).

De otra parte, el funcionario de instrucción advierte que la denuncia no es la vía idónea para atacar las decisiones jurisdiccionales, toda vez que el "ordenamiento jurídico procedimental establece remedios procesales a los cuales recurrir quien se considere afectado por una decisión judicial" (f. 28).

Considera que los hechos fundamentales de la denuncia "no configuran delito alguno, por lo que de acuerdo al numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial, solicito ... un sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal" (f. 31).

Es necesario destacar que en este caso la Sala sólo tiene competencia para conocer de los cargos de naturaleza penal que se le imputan a Haydee G. Paolo y a Carlos de Icaza, ambos en su calidad de Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, habida cuenta de que, en cuanto a Alcibíades Rodríguez, se encuentra inhibida para pronunciarse sobre su situación procesal, toda vez que es un hecho público y notorio de que el licenciado Rodríguez no tiene ya la condición de Magistrado de Tribunal Superior.

Luego de un análisis detenido de las piezas obrantes en autos, esta Corporación considera que los cargos formulados carecen de fundamento, no configuran la comisión de hecho punible alguno, por considerar que el desempeño de la función jurisdiccional, en este caso concreto la interpretación jurídica que el Tribunal Superior de Trabajo hiciera de los artículos 13 y 199 del Código de Trabajo, así como del acervo probatorio del proceso, para decidir la causa laboral, en modo alguno revela, por sí solo, la comisión de un acto doloso; por lo demás, el libelo de la denuncia no ofrece elementos de juicio convincentes para la comprobación de esa circunstancia. En todo caso, como bien señala el funcionario de instrucción, si el denunciante no se encontraba conforme con la interpretación del tribunal, podía atacar la decisión utilizando los recursos ordinarios que la ley laboral instituye.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESEE DEFINTIVAMENTE, DE MANERA OBJETIVA E IMPERSONAL, en esta causa, con base en lo que establece el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial, y DECLINA ante la esfera de los juzgados de circuito el conocimiento de la causa en lo concerniente al licenciado Alcibíades Rodríguez.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR FELICIA RIVERA DE ARAOLAZA CONTRA EL INGENIERO HÉCTOR MONTEMAYOR, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y LOS MIEMBROS DEL GRAN JURADO DE ELECCIONES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Felicia Rivera de Araolaza interpuso denuncia criminal ante la Procuraduría General de la Nación contra Héctor Montemayor, Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, y los miembros del Gran Jurado de Elecciones de ese centro superior de enseñanza, como presuntos autores de "diversas irregularidades y actos arbitrarios que ... son constitutivos de delitos penales" (f. 1).

Resulta importante destacar, como cuestión previa, que, de entre las personas denunciadas, la Corte Suprema sólo tiene competencia para conocer de los hechos en los que se compromete la situación jurídica del Rector de la Universidad Tecnológica, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 95 del Código Penal.

Según se expresa en el libelo de la denuncia, la imputación se fundamenta en el hecho de que Héctor Montemayor "ha nombrado en puestos administrativos a personas que según la Ley y el estatuto Universitario no cumplen los requisitos establecidos por las disposiciones legales aplicables y de manera arbitraria y en violación de lo establecido en la Ley 57 de 1996 ha despedido profesores de la Universidad Tecnológica que tienen más de cinco años de trabajar en esta Institución" (f. 2).

Tras aprehender el conocimiento de esta incitativa procesal, y en contestación del traslado que le fuera corrido, el Procurador General de la Nación, mediante Vista N° 89 de 6 de diciembre de 1996, solicita "el archivo del presente cuaderno penal" (f. 9), por considerar que "la denunciante omitió cumplir el requisito fundamental de aportar la prueba sumaria de su relato junto con su denuncia, como bien lo exige, de manera imperativa, el artículo 2471 del Código Judicial" (f. 8).

En el libelo no se especifica el hecho punible cuya comisión se atribuye al funcionario denunciado; sin embargo, los planteamientos hechos por la denunciante se refieren a "actos arbitrarios" (f. 1) en los que el funcionario acusado supuestamente ha incurrido, señalamiento que alude a con las conductas ilícitas que describe el Capítulo IV, Título X del Libro II del Código Penal, relativo al abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, tipo penal que, según los términos del artículo 2468 del Código Judicial, coloca el negocio entre los procesos especiales contra servidores públicos.

Con esa perspectiva, podemos concluir que los hechos que fundamentan la denuncia no permiten establecer que el funcionario acusado haya incurrido en responsabilidad penal alguna, además de que la denunciante incumple con la formalidad legal que en esta materia instituye el artículo 2471 del Código Judicial, que requiere se acompañe al libelo de la denuncia la prueba sumaria del relato, consistente "en cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido".

En lo concerniente al señalamiento que hace la denunciante contra los miembros del Gran Jurado de Elecciones, le corresponderá a los jueces municipales, ramo penal, de Panamá pronunciarse sobre su situación procesal.

Por las anteriores consideraciones, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE, DE MANERA IMPERSONAL, en esta causa, con base en lo que establece el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial, y DECLINA ante la esfera de los juzgados municipales de Panamá el conocimiento de este negocio en lo relacionado con los miembros del Gran Jurado de Elecciones de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DICIEMBRE 1996

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. DONALDO SOUSA GUEVARA EN REPRESENTACIÓN DE JAIME JAVIER OLIVE, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 889-96 D-G- DE 18 DE JUNIO DE 1996 DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Donaldo Sousa Guevara** ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en representación de **JAIME JAVIER OLIVE,** para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 889-96 D-G- de 18 de junio e 1996 dictada por la Directora General de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda incoada para verificar si ha cumplido con los requisitos exigibles para que se proceda a su admisión.

Se puede apreciar que la Resolución N° 889-96 D-G- de 18 de junio de 1996 objeto de impugnación en la presente demanda, confirma la Nota fechada de 29 de marzo de 1996, suscrita por el Director Nacional de Personal, en virtud de la cual decidió no acceder a la solicitud de **JAIME OLIVE**, en el sentido de que se le concediese simultáneamente el aumento salarial contemplado por el artículo 29 del Decreto-Ley 14 de 27 de agosto de 1954 y los aumentos dispuestos por cambios de categorías por la Ley 24 de 1983. Significa que el actor ha impugnado un acto confirmatorio, que según nuestra legislación contenciosa, no es necesario atacar, como sí lo es, con respecto al acto administrativo principal que causa la demanda, el que debe ser individualizado con toda precisión, tal como lo señala el artículo 43 de la Ley 135 de 1943.

La Sala Tercera en jurisprudencia reiterada, se ha manifestado a favor de esta posición, tal como se desprende del auto del 29 de junio de 1992:

> "Ya ha sido jurisprudencia de esta Sala que el acto que se impugne sea un acto principal y no los confirmatorios según se desprende del artículo 29 de la Ley 33 de 1946. Así lo confirman el auto de 15 de junio de 1984, el auto de 3 de enero de 1991 y el auto de 13 de septiembre de 1991 entre otros."

Al tenor del artículo 43 numeral 4 de la Ley 135 de 1943 claramente se establece que es requisito esencial que la demanda contencioso administrativa interpuesta ante la Sala Tercera, deberá contener el concepto de la violación, lo cual se expondrá sin ambiguedades y deberá fundamentarse en algunos de los motivos de ilegalidad contemplados en el artículo 26 de la Ley 135 de 1943 diferenciando con exactitud en cuanto a la infracción literal, ya que la misma se divide en violación directa, por comisión u omisión, según el caso; aplicación indebida e interpretación errónea. En este caso, en particular el recurrente no mencionó ni explicó el concepto de la violación en la forma que establece la ley.

La demanda no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943 debido a que no se presentó copia autenticada del acto. La autenticación del acto impugnado no es una formalidad superflua, sino un requisito de importancia exigido por ley, puesto que de esta forma se verifica la notificación o ejecución del mismo, y, por ende, el agotamiento de la vía administrativa.

La Sala ha manifestado en diversas ocasiones la necesidad de la autenticación de copias de los actos impugnados y la debida acreditación de la notificación. Incluso estipula el artículo 46, que de encontrarse imposibilitado de cumplir con lo establecido en dicha norma, el demandante podrá optar por

enunciar las oficinas donde se encuentra ubicado el original para que sea el Magistrado Sustanciador quien la solicite previo a la admisión de la demanda. Tampoco se observa en el expediente contentivo de la demanda documento alguno que demuestre que el demandante o su apoderado judicial solicitaran, en algún momento, la copia autenticada del acto impugnado y la constancia de la notificación de la institución correspondiente.

Por todo lo anteriormente expuesto, lo procedente es, pues, no admitir la presente demanda.

En consecuencia, el suscrito Magistrado sustanciador en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda presentada por el licenciado Donaldo Sousa Guevara en representación de JAIME JAVIER OLIVE.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALONSO ORTIZ DE ZEVALLOS, EN REPRESENTACIÓN DE CLÍNICA RADEL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-490 DE 12 DE FEBRERO DE 1996,EXPEDIDA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alonso Ortiz De Zevallos, actuando en nombre y representación de Clínica Radel, S. A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 213-490 de 12 de febrero de 1996, expedida por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda con el objeto de determinar si la misma reúne los requisitos necesarios para su admisión.

Observa quien suscribe que la demanda presentada no debe admitirse, ya que adolece de varios defectos.

En primer lugar, el apoderado judicial del demandante obvia mencionar dentro del libelo a las partes y a sus representantes, tal como lo preceptúa el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943. Aunado a lo anterior tampoco se menciona que la Procuradora de la Administración es parte en el presente recurso e interviene en interés de la Ley como lo dispone el numeral 1 del artículo 348 del Código Judicial.

En segundo lugar, el Magistrado Sustanciador observa que el recurrente no cumple con el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, que señala que en la demanda se expresen las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación.

En tercer lugar, observa el Magistrado Sustanciador que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, debido a que las copias de los actos acusados, no se encuentran debidamente autenticados, ni tampoco hay constancia en la misma de que se formuló la petición a la cual se refiere el artículo 46 de la mencionada Ley. La autenticación del

acto impugnado es un requisito de importancia exigido por la ley. Todo acto impugnado requiere su autenticación en vías de verificar la notificación o ejecución del mismo, y por ende, el agotamiento de la vía gubernativa.

Como el demandado omitió los requisitos mencionados, su demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del mismo cuerpo legal.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Alonso Ortiz De Zevallos, actuando en nombre y representación de Clínica Radel, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 213-490 de 12 de febrero de 1996, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR OLMEDO SANJUR G., EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE M. ILLUECA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO N° 5 DE 10 DE ABRIL, DICTADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Olmedo Sanjur G., en representación de **ENRIQUE M. ILLUECA**, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, el Acuerdo N° 5 de 10 de abril de 1996, dictado por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar el libelo presentado se percata el Magistrado Sustanciador que consta en el expediente Solicitud Previa de Petición de Documentos.

En efecto, la parte actora ha verificado tal solicitud en los siguientes términos:

> "Como no hemos podido obtener copia autenticada de la notificación formal del acuerdo N° 5 de 10 de abril de 1996, a pesar de haberlo solicitado formalmente, pedimos al Honorable Magistrado Sustanciador, que antes de admitir la demanda, solicite esa prueba a la secretaría General de la Universidad de Panamá, como lo autoriza el Artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

A fojas 55 y 56 del expediente, se aprecia que el demandante acompañó fotocopias de los escritos de fecha 19 de septiembre y 13 de noviembre de 1996, solicitando copia del acuerdo N° 5 de 10 de abril de 1996, lo que resultó infructuoso.

En consecuencia, el suscrito Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que se solicite copia autenticada de la notificación formal del Acuerdo N° 5 de 10 de abril de 1996, a la Secretaría General de la Universidad de Panamá, como lo autoriza el artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EMILIO DE LEÓN LOKEE, EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS IGLESIAS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 028 DE 31 DE MAYO DE 1995, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **EMILIO DE LEÓN LOKEE**, en representación de **ALEXIS IGLESIAS**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° 028 de 31 de mayo de 1995, expedido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

LO QUE SE DEMANDA

El apoderado judicial de la parte actora solicita a esta Superioridad que proceda a declarar la nulidad, por ilegal, de la citada resolución, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento del Ingeniero **ALEXIS IGLESIAS**. Que como consecuencia de la anterior declaración, se proceda a declarar que se restablece la vigencia del Resuelto N° 007 de 16 de febrero de 1990, expedido por el Director del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (**IDIAP**), mediante el cual se nombró en el cargo de Ingeniero Agrónomo, de manera permanente, al señor **ALEXIS IGLESIAS**. De igual manera, que se ordene al Director General del **IDIAP** que se restituya al aludido señor, en el cargo permanente de Ingeniero Agrónomo I que ocupaba en dicha institución, y que además, se ordene le sean pagados todos los sueldos dejados de percibir, desde la fecha en que se le destituyó hasta el día en que efectivamente se le restituya en la referida entidad.

LOS HECHOS U OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA PRESENTE ACCIÓN

El recurrente funda su demanda en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Mi representado inició labores en el IDIAP el 1 de octubre de 1973. Luego fue injustamente destituido el 15 de junio de 1987, por lo que posteriormente se verifica su reintegro mediante el Resuelto N° 007 de 16 de febrero de 1990.

SEGUNDO: el Ing. IGLESIAS se desempeñó como Técnico, desde octubre de 1973, hasta agosto de 1975, en el Departamento de Ciencias Pecuarias del MIDA. Desde agosto de 1975 hasta noviembre de 1979, labora en el IDIAP como Técnico en la Sección Genética y Manejo Animal, en la Estación Experimental de Gualaca. Desde noviembre de 1979 hasta agosto de 1984, trabaja como Investigador Pecuario en la Línea de Sistemas de Producción Animal, también en la Estación Experimental de Gualaca. Fue Coordinador Nacional del Estudio de los Sistemas Ganaderos de Doble Propósito (carne y leche) en Pequeñas y Medianas Fincas de Panamá, desde septiembre de 1984 hasta junio de 1987. Al ser reintegrado en febrero de 1990, hasta octubre de 1991, el Ing. IGLESIAS ocupa el cargo de Coordinador de la Estación Experimental de Gualaca. Seguidamente es ascendido al puesto de Administrador del IDIAP en la Región Occidental, desde octubre de 1991 hasta enero de 1992. Posteriormente se desempeñó como Coordinador del Sub. Centro

de Santa Marta.
...
QUINTO: Al momento de expedirse el acto de destitución del Ing. IGLESIAS, el 31 de mayo de 1995, éste aparecía nombrado en el IDIAP como Ingeniero Agrónomo I, devengando un sueldo de B/.1,150.00, siendo el empleado número 2267 en la planilla 2, tal como se reconoce en el resuelto recurrido.

SEXTO: Mi representado, como profesional y funcionario del IDIAP, demostró competencia física, moral, académica y técnica." ...

NORMAS ACUSADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Estima el demandante que el acto impugnado viola el artículo 29 de la Ley 135 de 1943, reformado por la Ley 33 de 1946. De igual manera, también infringe el artículo 10 de la Ley 22 de 1961, "Por la cual se dictan disposiciones relativas a la prestación de Servicios Profesionales en Ciencias Agrícolas", el artículo 16; literal ch) de la Ley 51 de 1975, "Por la cual se crea el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá y se determina su organización y funciones" y el artículo 18; literal a) del Reglamento Interno de Personal del IDIAP. Tales disposiciones en el orden establecido, preceptúan lo siguiente:

"**ARTÍCULO 29.** Las resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional deben notificarse personalmente al interesado, o a su representante o apoderado, dentro de los cinco días siguientes a su expedición, debiendo expresarse los recursos que por la vía gubernativa procedan y el término dentro del cual deben interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente."

"**ARTÍCULO 10.** Los profesionales idóneos al servicio del Estado podrán ser destituidos por razones de incompetencia física, moral o técnica. En cada caso particular, el Consejo Técnico Nacional de Agricultura hará las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de los cargos, oyendo a las partes. El Consejo Técnico Nacional de Agricultura decidirá y solicitará lo conducente al Órgano Ejecutivo si se hubiere cometido infracción al presente artículo."

"**ARTÍCULO 16.** Las funciones de la Dirección General son las siguientes:
...
ch. Preparar el Reglamento Interno, que contenga toda la organización técnico-administrativa del Instituto, y someterlo a la aprobación de la Junta Directiva;" ...

"**ARTÍCULO 18.**Los empleados al servicio del Instituto tendrán los siguientes derechos:

a. Estabilidad en el ejercicio del cargo, salvo los casos de remoción por causa determinada en la Ley y el Reglamento Interno, mediante el procedimiento que ésta y los reglamentos señalan al efecto." ...

En cuanto a la violación del artículo 29 de la Ley 33 de 1946, sostiene el recurrente que el mismo es violado en forma directa por comisión, porque no se le notificó personalmente del acto acusado. Además, cuando le informaron de la existencia del mismo, habían transcurrido más de cinco días de su expedición, y tampoco se le informó de los recursos que por la vía gubernativa procedían, ni el término dentro del cual deben interponerse.

Sobre el artículo 10 de la Ley 22 de 1961, manifiesta el demandante que el mismo ha sido infringido porque el resuelto impugnado desconoció su derecho a que el Consejo Técnico Nacional de Agricultura verificara la autenticidad de la causal de destitución alegada en el mismo. Esto equivale a que el acto recurrido

infringió la garantía del debido proceso que la precitada norma concede a los ingenieros agrónomos a servicio del Estado, sobretodo tratándose de un servidor público que contaba cono la permanencia en su cargo.

En lo concerniente a la transgresión del artículo 16; literal ch) de la Ley 51 de 1975, señala el actor que el acto impugnado viola dicha disposición, porque la misma no faculta al Director General del IDIAP a declarar insubsistente un nombramiento, por motivo de "restructuración administrativa".

En lo referente a la violación del artículo 18; literal a) del aludido Reglamento, sostiene el recurrente que el mismo ha sido infringido por cuanto, el acto demandado desconoce el derecho a la estabilidad y la garantía del debido proceso que se le reconoce a los funcionarios del IDIAP consagrada en esta disposición reglamentaria. Además, de que ni en la ley orgánica del IDIAP, ni en el Reglamento Interno del IDIAP, la restructuración administrativa, no se contempla como una causal de remoción.

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal de 29 de marzo de 1996, legible a folios 57-64, del expediente, sostiene que no le asiste razón al demandante en sus pretensiones, en atención a lo siguiente:

Referente a la violación del artículo 29 de la Ley 33 de 1946, manifiesta la aludida funcionaria que se opone a las alegaciones del recurrente, en virtud de que a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 135 de 1943, la falta de notificación personal así como la ausencia de mención en la parte resolutiva del Resuelto N° 028 de 31 de mayo de 1995, de los términos en los cuales podían interponerse los recursos procedentes en la vía gubernativa, fueron subsanados al interponerse los recursos de reconsideración y apelación, los que fueron decididos mediante el Resuelto N° 041-95 de 10 de julio de 1995, y el Resuelto N° 55 de 17 de agosto de 1995.

En lo atinente a la infracción del artículo 10 de la Ley 22 de 1961, la representante de los intereses de la Administración, sostiene que no comparte el criterio jurídico del actor, toda vez que el Ingeniero Alexis Iglesias, ocupaba un puesto de libre nombramiento y remoción, por lo cual su destitución no puede someterse a la consideración del Consejo Técnico Nacional de Agricultura, toda vez que no se le está declarando insubsistente en el cargo por incompetencia física, moral o técnica, sino por motivos de restructuración administrativa del IDIAP, aspecto este exclusivo de dicha institución estatal. Además, el cargo que desempeñaba el mismo, fue otorgado sin que mediara un concurso de méritos, único mecanismo que permite la estabilidad en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto al literal ch) del artículo 16 de la Ley 51 de 1975, la Procuradora estima que no le asiste razón al recurrente, toda vez que el Director General, en virtud del literal h) del artículo 18 de la Ley 51 de 1975, posee facultad para "nombrar, contratar y resolver al personal administrativo y técnico del Instituto", por lo que la declaración de insubsistencia del cargo se dio dentro de los parámetros legales.

Finalmente, sobre la infracción del literal a) del artículo 18 del Reglamento Interno del IDIAP, la aludida funcionaria expresa que la misma no se ha dado, toda vez que la estabilidad, como garantía fundamental en el ejercicio de funciones públicas, no puede establecerse a través de una reglamentación como el Resuelto R. I. P. V-02 de 23 de abril de 1980.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites legales instituidos para estos procesos, la Sala procede a resolver el presente negocio.

En lo que a la violación del artículo 29 de la Ley 135 de 1943, respecta, este Tribunal estima pertinente reiterar el criterio que ha venido sosteniendo en situaciones como la que nos ocupa. (Confróntese Sentencias de 31 de agosto de 1994 y de 7 de diciembre de 1995).

En efecto, la Sala ha establecido que en el caso de que la violación impetrada se sustente en el hecho de que el acto impugnado no se haya notificado personalmente, ni se hayan expresado los recursos que le asistan al afectado para enervar el acto administrativo sujeto a revisión, el aludido artículo 29 contiene dos garantías procesales básicas a saber: 1. que el afectado no quede en indefensión por no conocer de una actuación que pueda afectarle; y 2. que pueda impugnarla si no se encuentra conforme con la medida administrativa adoptada.

En el caso del señor **IGLESIAS** no se ha producido la violación a tales garantías, ya que el Resuelto N° 028 de 31 de mayo de 1995, que constituye el acto impugnado, fue objeto en tiempo oportuno de los recursos de reconsideración y apelación (ver fs. 3. 5 y 7-9 del exp. contencioso, respectivamente). Además de que, dichos recursos fueron decididos mediante el Resuelto N° 041 de 10 de julio de 1995 (ver f. 10 y 11 del exp. contencioso), y la Resolución N° 055 de 17 de agosto de 1995. (Cfr. f. 22 del exp. gubernativo).

De esta manera, se subsanó cualquier vicio que hubiese podido producirse por la omisión de notificar personalmente al afectado, o de no mencionar los recursos que procedían en la esfera gubernativa, en consideración a lo dispuesto en el artículo 32 de las Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 1007 del Código Judicial, que establecen entre otros mecanismos, para darle eficacia a la notificación en caso de que la misma no se pueda efectuar personalmente, el que la parte afectada utilice en tiempo los recursos legales correspondientes. El texto de estas disposiciones es el siguiente:

> "**ARTÍCULO 32.** Sin los anteriores requisitos no se tendrá por hecha ninguna notificación, ni producirá efectos legales la respectiva resolución, **a menos que la parte interesada dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.**" (Lo resaltado es de la Sala).
>
> "**ARTÍCULO 1007.** Si la persona a quien debe notificarse una resolución se refiere a dicha resolución en escrito suyo, o en otra forma se manifiesta sabedora o enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión con relación a la misma, dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal ..."

Por lo expuesto no prospera dicho cargo de violación.

En lo que respecta a la transgresión del artículo 10 de la Ley 22 de 1961, esta Superioridad procede a externar lo siguiente:

En primer término, no le asiste razón al recurrente, dado que como bien lo señaláramos en Sentencias de 12 de enero de 1996, de 23 de abril de 1996 y de 26 de agosto de 1996, lo dispuesto en tales disposiciones legales no debe entenderse como limitante para que se proceda con el despido de un funcionario que labora en el IDIAP.

No debe entenderse como limitante, dado que un funcionario del **IDIAP**, es ante todo un funcionario público, y como tal, debe estar supeditado a las disposiciones constitucionales que rigen para ellos en general.

En tal sentido, el segundo párrafo del artículo 295 de nuestra Constitución Nacional dispone que "Los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos; y la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad, y moralidad en el servicio". Por su parte el segundo párrafo del artículo de 297 de la misma excerta constitucional, establece que "los nombramientos que recaigan en el personal de carrera se harán con base en el sistema de méritos".

El ingeniero **ALEXIS IGLESIAS** no ha acreditado que ingresó a dicha Institución por concurso de mérito, que es lo que le otorgaría la estabilidad en su cargo por ser funcionario de carrera. Por consiguiente, al ser nombrado libremente, de la misma manera podía ser removido de su cargo en base a la potes-

tad discrecional de libre nombramiento y remoción de la entidad demandada, como en efecto procedió a hacer el Director General del **IDIAP.**

Esto así por cuanto, es potestad discrecional de la entidad nominadora el libre nombramiento y remoción de los funcionarios no amparados en cuanto a su estabilidad, por una Ley de Carrera Administrativa, o de una Ley especial en relación con funciones públicas.

Una ley de carrera administrativa sería la ley básica, preferente y especial en materia de estabilidad en la función pública, tal como se deduce del artículo 300 de la Constitución Nacional que instituye las carreras en los servicios públicos conforme al principio de sistema de méritos.

Como quiera entonces, que el Ingeniero **ALEXIS IGLESIAS** fue nombrado libremente, y al no estar su estabilidad sujeta a una Ley de Carrera Administrativa, o de una ley especial en relación con funciones públicas, y no de tipo profesional totalmente independiente del ejercicio de funciones públicas como es el presente caso, es potestad discrecional de la entidad demandada, repetimos, el libre nombramiento y remoción de sus miembros.

Todo lo expresado anteriormente, como bien lo indicara la Sala en Sentencia de 26 de agosto de 1996, tiene como fundamento la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase **Sólo**, contenida en el artículo 10 de la Ley 22 de 1961, mediante sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 28 de septiembre de 1984, que en su parte pertinente dispone lo siguiente:

> "Entiende la Corte que es inconstitucional la previsión legal que limita las causas de destitución o despido de Servidores públicos: -los profesionales en ciencias agrícolas- a tres supuestos específicos (a. Incompetencia física; b. Incompetencia moral; y, c. Incompetencia técnica), excluyendo otras causales comunes de destitución surgidas de los deberes que, de modo expreso, la Constitución instituye como garantía mínima para el ejercicio eficiente de la función. Esos deberes, comunes a todos los servidores públicos, constituyen entonces, las normas básicas que deberán orientar el régimen disciplinario; según la variedad de funciones. El régimen disciplinario, constituido por un conjunto de disposiciones especiales, se muestra, así, como el régimen penal del funcionario público, en cuanto al posible quebrantamiento de las normas que reglamentan su actividad. **Cuando los cargos no son de libre nombramiento y remoción, los funcionarios que ingresan a tal posición con base en el sistema de méritos y previa demostración de determinados requisitos exigidos para tal fin por una Ley preexistente, se crea a su favor un estado de inamovilidad** condicionada por su competencia, lealtad y moralidad en el servicio (art. 295, Constitución) y por el desempeño personalde su funciones a las que dedicarán el máximo de sus capacidades (art. 297 Constitución).
>
> Agregando el Pleno, también, que el funcionario público, entonces, podrá se destituído aún con un sistema de Carrera Administrativa, por razones de incompetencia física, moral o técnica, como lo señala el artículo 10 de la Ley 22 de 1961; pero podrá, igualmente, ser, destituído por razón del incumplimiento de los demás deberes expresamente señalados en la Constitución.
>
> En consecuencia, al ser limitadas las causas de destitución de los servidores públicos en los términos del art. 10 de la Ley 22 de 30 de enero de 1961, por la expresión SOLO PODRÁN excluyendo otras que surgen de los arts. 295 y 297, en la forma en que han sido examinados en esta resolución de la Corte, el término SOLO se torna inconstitucional, porque equivale a ÚNICAMENTE. Sin embargo, los funcionarios a quienes se refiere ese art. 10 mencionado, PODRÁN ser destituidos por las causas específicas que se señalan en ese artículo, PERO TAMBIÉN PODRÁN SER DESTITUIDOS, se repite, por el

> incumplimiento de los deberes, expresamente señalados en la Constitución para todos los servidores públicos, y por las demás causas que se establezcan en Leyes y Reglamentos.
>
> El Pleno de la Corte Suprema, en ejercicio de la potestad que le acuerda el art. 203 de la Constitución Nacional, **DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL** la frase Sólo, contenida en el artículo de la Ley 22, de 30 de enero de 1961." (Lo resaltado es por la Sala).

El criterio expuesto ha sido objeto de reiterados pronunciamientos por parte de esta Sala, entre los que podemos mencionar el fallo de 11 de octubre de 1994, en el cual se estimaba conculcado el artículo 23 de la Ley N° 7 de 14 de abril de 1981, que regula el ejercicio de la profesión de economista en todo el territorio nacional, cuyo texto establece:

> "Artículo 23: Los profesionales de la economía gozarán de estabilidad en sus cargos condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio".
>
> En aquella oportunidad la Corte señaló:
>
> "Con relación a este aspecto, es fundamental señalarle al recurrente, que no ha comprobado haber ingresado al Ministerio de Planificación y Política Económica por concurso de mérito que es lo que demostraría su competencia, y además, lo que le otorgaría estabilidad en su cargo por ser funcionario de carrera, obtenida la posición, repetimos, en concurso, donde es la única forma legal de ganar estabilidad."

Respecto de la violación del literal ch), del artículo 16 de la Ley 51 de 1975, la Sala estima que el mismo no es de aplicación al caso que nos ocupa, por cuanto el mismo dice relación con una de las funciones de la Dirección General de dicha entidad, consistente en preparar el Reglamento Interno que contenga toda la organización técnico-administrativa del Instituto y someterlo a la aprobación de la Junta Directiva, y no con la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del ingeniero **ALEXIS IGLESIAS.**

Aunado a que, contrario a lo manifestado por el recurrente el Director General del **IDIAP**, sí está facultado legalmente para declararle insubsistente de su cargo, de acuerdo con lo que establece el artículo 16 literal h), de la Ley 51 de 1975, que en su parte pertinente establece:

> "**ARTÍCULO 16**: Las funciones de la Dirección General son las siguientes:
> ...
> h. Nombrar, contratar, promover y resolver al personal administrativo y técnico del Instituto, de acuerdo a las disposiciones del Reglamento Interno ..."

En lo que se refiere a la infracción del artículo 18, literal a) del Reglamento Interno de Personal del **IDIAP** que contempla la estabilidad en el ejercicio del cargo dentro del Instituto, es pertinente reiterar lo indicado en párrafos anteriores, en el sentido de que la estabilidad debe ser contemplada a través de una ley de Carrera Administrativa, o de una Ley especial en relación con funciones públicas, y no por un reglamento interno, que resulta inaplicable para favorecer la pretensión del demandante. Y es que si dicha estabilidad es plasmada o reconocida solamente a través del reglamento interno de una institución determinada, la misma no amparará al funcionario lesionado, quien continuará siendo de libre nombramiento y remoción.

Lo expuesto nos conduce a concluir que los artículos 10 de la Ley 22 de 1961, 16 literal ch), de la Ley 51 de 1975, y el 18 literal a), del Reglamento Interno de Personal del **IDIAP**, no han sido transgredidos, por lo que no prosperan los cargos.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Resuelto N° 028 de 31 de mayo de 1995, expedido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. RIGOBERTO A. VERGARA, EN REPRESENTACIÓN DE BLANCA PANAMÁ BRIONES DE PAREDES PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 03-95 D. G. DE 2 DE JUNIO DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Rigoberto A. Vergara, en representación de **BLANCA PANAMÁ BRIONES DE PAREDES**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 03-95 D. G. de 2 de junio de 1995, expedida por el Director General del Instituto Panameño de Habilitación Especial, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

LO QUE SE DEMANDA

El apoderado judicial de la parte demandante solicita a esta Sala declare la ilegalidad de la Resolución enunciada en el párrafo anterior, mediante la cual la Dirección General del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), ordenó a la Dirección Administrativa de ese Instituto, implementar las medidas administrativas conrrespondientes, para resarcir al erario público la suma de B/.9,385.50 en concepto de emolumentos cobrados de más por parte de la señora **BRIONES DE PAREDES**, y, además se le ordena a esa Dirección que instruya lo pertinente para ajustar el salario base de la misma, con todos los emolumentos que le correspondan de acuerdo a la ley, al cargo que desempeña actualmente como Educadora Grado S-7.

Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad anterior, se declare que la profesora **BRIONES DE PAREDES** no debe suma alguna al Instituto Panameño de Habilitación Especial. De igual manera, se declare que el **IPHE** está obligado a pagar a la precitada funcionaria, todos los sobresueldos y demás derechos que le corresponden como educadora de conformidad con la ley.

LOS HECHOS U OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA PRESENTE ACCIÓN

Las pretensiones de la parte actora descansan en los siguientes hechos:

1. Que mediante Decreto N° 8 de 9 de febrero de 1982, la Directora del Instituto Panameño de Habilitación Especial nombró con carácter permanente con ajuste a su salario base a **BLANCA BRIONES DE PAREDES** como Educador R-1, Jefe de Personal, sueldo B/.1,066.00, en el Departamento de Personal de dicho instituto.

2. Que la aludida profesora tomó posesión del mencionado cargo, el 19 de febrero de 1982.

3. Que mediante Resuelto de Personal N° 12 de 22 de febrero de 1984, la Directora del **1PHE** nombró a la profesora **BRIONES DE PAREDES** con carácter permanente y por necesidad del servicio, como Supervisora Nacional S-7, con B/.1,148.00, en la Dirección Técnica, a partir del 1° abril de 1983, incluyéndose en el salario los sobresueldos y el 25%.

4. Que desde el año de 1983, la profesora **BRIONES DE PAREDES** ha reclamado la retención del pago de sus sobresueldos por antigüedad en los servicios otorgados a los educadores, los cuales le corresponden como docente en el **IPHE.**

5. Que el 31 de enero de 1995, la Profesora **BRIONES DE PAREDES** solicitó a la Sub-Contraloría General de la República a fin de que se realizara un áudito a su expediente y se determinaran los sobresueldos dejados de pagar, para poder acogerse a su jubilación.

6. Que producto de dicha solicitud, se realiza un informe de auditoría especial en el cual se señala que "Como resultado de la investigación se pudo determinar que la profesora Paredes ejerciendo el cargo de Jefa de Personal percibió aumentos y sobresueldos que no le correspondían por la suma de B/.18,385.50 ... se suspendió el pago de los aumentos y sobresueldos en compensación al monto cobrado de más, recuperándose la suma de B/.9,000.00, quedando un saldo por pagar al Estado de B/.9,385.00, sobre este aspecto la administración del IPHE debe implementar una acción administrativa encaminada a resarcir al erario público la suma adeudada". (Cfr. f. 22 del exp. principal).

7. Que por razón del hecho anterior, el Director General del **IPHE** actuando en forma conjunta con la Directora Administrativa expidieron la Resolución N° 03-95 D. G. de 2 de junio de 1995, cuya ilegalidad se acusa, mediante la cual se ordenó lo expuesto en el aparte concerniente a lo que se demanda.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

Mediante informe explicativo de conducta que reposa a 45-48 del expediente contencioso, el representante legal de la ente administrativo demandado, Instituto Panameño de Habilitación Especial (**IPHE**), indicó a esta Sala que la actuación administrativa llevada a cabo por dicha entidad obedece fundamentalmente, a que la profesora **BRIONES DE PAREDES**, en concepto de pago de su salario base, recibió tres incrementos salariales considerados ilegales en distintos períodos, y los mismos no se sustentan de acuerdo a lo previsto en la Ley #47 de 20 de noviembre de 1979, que cual establece la escala salarial para todos los educadores del sector gobierno.

DISPOSICIONES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Considera el apoderado judicial de la parte demandante que el acto cuya ilegalidad se demanda, es violatorio del artículo 9 de la Ley 53 de 1951, modificada por la Ley N° 27 de 30 de enero de 1961, artículos 2, 5, 6, 9 y 10, todos, de la Ley N° 47 de 20 de noviembre de 1979, así como también, de los artículos 159 del Código de Trabajo, y 967 del Código Judicial, que en el orden establecido disponen:

Ley 53 de 1951:

"Artículo 9. Son funciones del Secretario Administrativo:

a. Dirigir y orientar la labor administrativa de las escuelas que componen el Instituto bajo las pautas que señalen el Patronato y el Reglamento Interno.
b. Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Patronato.
c. Desempeñar las demás funciones que le asignen el reglamento y el Patronato".

LEY 47 DE 1979:

"Artículo 2. La remuneración mensual del Educador en servicio activo

estará integrada por:

a) el sueldo base del grado correspondiente al cargo en el cual esté clasificado de conformidad con la condición del nombramiento;
b) los sobresueldos ya adquiridos;
c) los sobresueldos que posteriormente se obtengan con base a la presente Ley;
d) las compensaciones adicionales legalmente establecidas; y
e) los aumentos de sueldo que otorgue el Gobierno Nacional."

"Artículo 5. En ningún caso, la aplicación de la presente Ley, producirá rebaja en el sueldo base devengado mientras el Educador se mantenga en el mismo cargo y condición de nombramiento".

"Artículo 6. La clasificación de los Educadores será la siguiente:

GRADO R

EDUCADOR R-1: Supervisor de Educación Primaria o de Educación Básica General con título Universitario de Profesor de Segunda Enseñanza.

GRADO S

EDUCADOR S-7: Supervisor Nacional de Educación Primaria o Educación Básica General con el título Universitario de Profesor de Segunda Enseñanza.

"Artículo 9. El Educador sujeto a la Escala de Sueldos mencionada en el Artículo 3 de esta Ley, nombrado con carácter de permanente o en período probatorio, si su labor ha sido evaluada satisfactoriamente tendrá derecho, a partir del inicio del año escolar de 1980 hasta marzo de 1982, por un período único de 3 años, al pago de sobresueldo correspondiente a su grado.

A partir del inicio del año escolar de 1983, si su labor ha sido evaluada satisfactoriamente, tendrá derecho, cada dos (2) años, al pago de sobresueldo correspondiente a su grado.
...
PARÁGRAFO 2: Se entiende por sobresueldo el incremento en la remuneración por antigüedad de servicio.

"ARTÍCULO 10. El período de tres (3) años, indicado en el Artículo 9°, que empezará a regir a partir del inicio del año escolar de 1980, será reconocido mensualmente así:
...
d) Del grado R al U, Cuarenta y dos Balboas (B/.42.00)."

CÓDIGO DE TRABAJO:

"Artículo 159. El salario pactado no podrá ser reducido por ninguna circunstancia, ni aún mediante el consentimiento del trabajador."

CÓDIGO JUDICIAL:

"Artículo 967. La fuerza del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación a las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso."

Sobre la violación del artículo 9 de la Ley 53 de 1961, modificada por la Ley N° 27 de 1961, señala el recurrente que la misma establece en forma clara cuáles son las funciones del Secretario Administrativo o Director Administrativo del **IPHE**, sin que se haga referencia a la facultad de firmar resoluciones en conjunto con el Director General de dicha institución. Por ende, alega que la

conducta realizada por la Directora Administrativa se enmarca dentro de la nulidad del acto administrativo por falta de competencia, ya que no existe disposición legal que la faculte para firmar este tipo de resolución, dado que la representación legal del **IPHE** recae sobre el Director General, tal cual lo establece la Ley N° 53 de 30 de noviembre de 1951.

En cuanto a la violación del artículo 2 de la Ley 47 de 1979, sostiene el demandante que la Resolución impugnada desconoce su contenido ya que pretende no reconocer el sueldo base del grado correspondiente al cargo en el cual esté clasificada, de conformidad con la condición del nombramiento, los sobresueldos adquiridos, los sobresueldos que posteriormente ha obtenido y las compensaciones adicionalmente establecidas a la profesora **BRIONES DE PAREDES.**

Para demostrar que el sueldo de la precitada funcionaria, está constituido de conformidad con la Ley, y por tanto es injurídico, agrega el recurrente, se tiene que señalar que mediante Resuelto de Personal N° 12 de 22 de febrero de 1984, se dispuso nombrar con carácter permanente y por necesidad del servicio a **BLANCA DE PAREDES** como Supervisor Nacional S-7, con sueldo base de B/.1,148.00, en la Dirección Técnica a partir del 1° de abril de 1983. Así como también, en dicho Decreto se establecía que en el salario estaban incluidos los sobresueldos y el 25%

Corrobora lo antes dicho, agrega el demandante, que a partir del 1 de abril de 1984, se reconoció a la profesora **BRIONES DE PAREDES**, Supervisor-7, un aumento de B/.25.00, con fundamento en la Resolución N° 72 de 24 de junio de 1982, por lo que producto de este aumento, el 17 de julio de 1984, el Director de Personal del **IPHE** ordenó incluir en el salario de la aludida profesora, dicho aumento, y la corrección del salario a B/.1,195.50.

En lo que a la infracción del artículo 5 de la Ley N° 47 de 1979, concierne, señala la parte actora que de acuerdo con la política salarial establecida por dicha ley para todos los educadores que laboran en el Ministerio de Educación, la misma no solamente comprende la fijación de un salario base, sino que incluye otras retribuciones que el Ministerio de Educación debe pagar como empleador al Educador con motivo de la prestación de su servicio.

De allí entonces que, al ajustarse el salario base con todos los emolumentos que le correspondan de acuerdo a la ley y al cargo que desempeña a la profesora **BRIONES DE PAREDES**, se ha violado el precitado artículo 5 de la Ley 47 de 1979, por razón de que el mismo es claro al establecer que en ningún caso, la aplicación de la referida ley, producirá rebaja en el sueldo base devengado mientras el Educador se mantenga en el mismo cargo y condición de nombramiento.

Sobre la violación de los artículos 6, 9 y 10 de la Ley 47 de 1979, manifiesta la parte actora que tales normas establecen claramente que la profesora **BRIONES DE PAREDES** tiene derecho a todos los sobresueldos que le han sido reconocidos por la Administración, y que la administración ha desconocido posteriormente. En tal sentido, señala que los Decretos de nombramiento aportados al proceso establecen que a la educadora **BRIONES DE PAREDES** se le ha nombrado en los cargos de Educador R-1 y S-7, respectivamente, los cuales se encuentran en la clasificación general establecida por la Ley.

En lo que respecta a la infracción del artículo 159 del Código de Trabajo, el recurrente indica que a pesar de que en dicha norma se establece con claridad meridiana que el salario no puede ser reducido bajo ninguna circunstancia, este principio ha sido violado por el acto impugnado. El mismo establece en su primer resuelve la reducción de salario de la profesora **BRIONES DE PAREDES**, situación que es violatoria de la Ley.

Finalmente, sobre la violación del artículo 967 del Código Judicial, la parte actora sostiene que el mismo ha sido violado de manera directa por comisión, ya que el acto impugnado no está en concordancia con los principios científicos en que se funda. En este punto señala que el dictamen elaborado por la Contraloría General de la República no guarda relación con el material de hecho que reposa en el expediente de la educadora **BRIONES DE PAREDES**, ya que a

pesar de que existen sobrados elementos de prueba que demuestran que la misma está nombrada como Educadora S-7 y que le corresponde un sobresueldo de B/.42.00, según lo establecido en la Ley, la Auditora de la Contraloría señala que a ésta sólo le corresponde un sobresueldo de B/.25.00.

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración, mediante Vista Fiscal N° 16 de 8 de enero de 1996, legible a folios 49-65 del expediente, solicitó a esta Superioridad denegar las pretensiones de la recurrente, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Sobre la violación del artículo 9 de la Ley N° 53 de 1951, reformado por el artículo 7 de la Ley 27 de 1961, sostiene la Procuradora de la Administración que si bien en la ley formal, no se plantea expresa y claramente la facultad de refrendo por parte de la Secretaria Administrativa del **IPHE**, esto no es óbice para invalidar lo actuado. Ello, en razón a que el señor Director de dicha entidad, quien es el funcionario facultado por ley para tomar ese tipo de decisiones fue el que directa y personalmente firmó como responsable de la adopción de la misma.

Por consiguiente, agrega que si bien la Secretaria Administrativa firmó dicha resolución, ello no era necesario para que dicho acto administrativo, surtiera plenos efectos jurídicos con relación a la parte actora, en virtud de que al recaer la representación del **IPHE**, exclusivamente sobre el Director General, la firma de la Secretaria Administrativa no debe alterar en nada lo decidido por ese alto funcionario, ni afecta negativamente la presunción de legalidad y validez del acto impugnado.

En lo que a la infracción de los artículos 2, 5, 6, 9 y 10 de la Ley N° 47 de 1979, respecta, la representante de los intereses de la Administración manifiesta estar en desacuerdo con lo alegado por el recurrente. La razón de dicha disconformidad radica en que a juicio de la precitada funcionaria, si bien existen Decretos que otorgaron sobresueldos a la profesora **BRIONES DE PAREDES**, en la época en que le fueron otorgados los mismos, la misma no se desempeñaba como educadora (docente), sino como administrativa (Jefa de Personal), y, por tanto, no tenía derecho a percibir los mismos.

Por tanto, manifiesta la Procuradora de la Administración, que en el presente caso no estamos ante una forma de rebaja salarial dado que se trata de un ajuste correcto al cálculo de salario de la demandante.

Al referirse a la violación del artículo 967 del Código Judicial, manifiesta la Procuradora no compartir el criterio externado por la demandante en atención a que en primer lugar, fue la demandante la persona que solicitó la participación de la Contraloría General de la República en su causa administrativa, luego, no tiene porqué cuestionar las facultades y procedimientos fiscalizadores de esta institución dedicada exclusivamente al control contable del manejo de fondos públicos. En segundo lugar, la fundamentación del Informe 004-04-95 de la Contraloría General de la República, está plenamente documentada en autos, y, además, dice relación con una adecuada e impecable interpretación de la materia de sobresueldos en el ramo educativo.

En lo concerniente a la transgresión del artículo 159 del Código de Trabajo, la aludida funcionaria indica que esta norma no es aplicable a la relación jurídico laboral de los servidores públicos, por razón de que la ley laboral aplicable a ese tipo de relaciones de trabajo, lo es sólo por mandato legal expreso, de conformidad con el artículo 2 del precitado Código.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites legales instituidos para estos procesos, la Sala procede a resolver el presente negocio.

Sobre la violación del artículo 9 de la Ley N° 53 de 1951, reformado por

el artículo 7 de la Ley 27 de 1961, "por la cual se crea el Instituto Panameño de Habilitación Especial", esta Superioridad estima que a pesar de que en el aludido artículo, no se plantea expresa y claramente la facultad de refrendo por parte de la Secretaria Administrativa de las actuaciones llevadas a cabo por el Director General del Instituto Panameño de Habilitación Especial **(IPHE)**, como es el caso que nos ocupa, esta situación no constituye vicio de nulidad de lo actuado. De acuerdo con la ley formal es el Director General de dicho ente estatal, el funcionario encargado de la adopción de tales medidas administrativas, funcionario que tal y como se desprende de las pruebas (cfr. copia autenticada del acto acusado a fs. 1 y 2 del expediente principal), y lo expresado por el propio recurrente, fue quien expidió y firmó el acto administrativo cuya ilegalidad se demanda.

Por tanto, este Tribunal concuerda con los planteamientos vertidos por la Procuradora de la Administración, dado que si bien el acto está firmado por la Secretaria Administrativa del **IPHE**, ello no era necesario para que el mismo surtiera plenos efectos jurídicos con relación a la parte actora. Y es que, al ser el Director General la persona que ejerce la representación legal del **IPHE**, la firma de la Secretaria Administrativa no debe alterar en nada lo decidido por dicho funcionario, ni afecta negativamente la presunción de legalidad y validez del acto impugnado.

Vale la pena indicar que la nulidad de un acto administrativo se produce entre otros motivos, por la falta de competencia, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 135 de 1943, modificado por la Ley 33 de 1946, la cual se da cuando el funcionario que emite el acto no tiene la capacidad jurídica para hacerlo, a tenor de lo dispuesto en la Constitución y las leyes. Sin embargo, en el caso in examine vemos que el acto impugnado sí fue expedido y firmado por el funcionario competente para hacerlo, y por ende, no procede el cargo de violación endilgado al artículo 9 de la Ley 53 de 1951.

También se aducen infringidos los artículos 2, 5, 6, 9 y 10 de la Ley 47 de 1979, "Por la cual se establece la Política Salarial para todos los Educadores que laboran en el Ministerio de Educación y se dictan otras medidas relacionadas con dicha Política", que por la estrecha vinculación que guardan entre sí, procedemos a analizarlos en conjunto.

Según se desprende de las constancias procesales, la profesora **BLANCA DE PAREDES** realizó una serie de reclamaciones de pago de sobresueldos ante el Instituto Panameño de Habilitación Especial **(IPHE)**, así como también ante el Sub-Contralor General de la República. Esta última mediante informe N° 004-04-95 D. E. C. A. I. de Auditoría General de la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo establecido en el informe de conducta (obsérvese f. 46), procedió a indicar lo siguiente:

> "Como resultado de la investigación se pudo determinar que la Profesora **PAREDES** ejerciendo el cargo de Jefa de Personal, percibió aumentos y sobresueldos que no le correspondían por la suma de B/.**18,385.50** ya que éstos eran otorgados sólo a los educadores.
>
> A partir de abril de 1985, la Profesora **DE PAREDES** reinicia su desempeño como educador (R-1), y por instrucciones de la Directora General del I. P. H. E., Profesora **MARITZA NORIS HERRERA**, se suspendió el pago de los aumentos y sobresueldos en compensación al monto cobrado de más, recuperándose la suma de B/.**9,000.00** quedando un saldo por pagar al Estado de B/.**9,385.50**, sobre este aspecto la Administración del I. P. H. E. debe implementar una acción administrativa encaminada a resarcir al erario público la suma adeudada.
>
> Es importante señalar que dicha educadora a la fecha percibe salario de Jefe de Personal B/.**1,195.00**desempeñándose actualmente como educadora grado S-7 cuyo salario es de B/.**710.00**, razón por la cual se le debe ajustar el salario según la escala salarial que rige para todos los educadores del país."

Posteriormente, se observa que mediante la Resolución N° 03-95 D. G. de 2 de junio de 1995, cuya ilegalidad se demanda, la Dirección General del **IPHE** procedió a ordenar a la Dirección Administrativa de dicha entidad, implementar las medidas administrativas conrrespondientes para resarcir al erario público la suma de B/.9,385.50 en concepto de emolumentos cobrados de más por parte de la señora **BRIONES DE PAREDES**, y además, se le ordena a esa Dirección que instruya lo pertinente para ajustar el salario base de la misma, con todos los emolumentos que le correspondan de acuerdo a la ley y al cargo que desempeña actualmente como Educadora Grado S-7.

A juicio de esta Sala la actuación llevada a cabo por parte de la Administración del **IPHE**, conlleva vicios de ilegalidad, en atención a las siguientes razones:

De conformidad con las pruebas aportadas al presente proceso, a la profesora **BRIONES DE PAREDES** se le nombró mediante Decreto N° 8 D. P. del 9 de febrero de 1982, con carácter permanente y con ajuste a su salario base como Educador **R-1**, Jefe de Personal, con sueldo de B/.1,066.00, en el Departamento de Personal del Instituto Panameño de Habilitación Especial, a partir del 1° de febrero de 1982 (Confróntese fs. 18 y 11 de los expedientes administrativo y contencioso, respectivamente).

De igual manera, se observa que mediante Resuelto de Personal N° 12 de 22 de febrero de 1984, a la precitada educadora **BRIONES DE PAREDES**, se le nombró en el cargo de Supervisora Nacional **S-7**, con sueldo de B/.1,148.00, en la Dirección Técnica del Instituto Panameño de Habilitación Especial, a partir del 1° de abril de 1983. Estableciéndose además, que en el salario estaban incluidos los sobresueldos y el 25% (Ver f. 22 y 12 de los expedientes gubernativo y contencioso, respectivamente).

Por otro lado, también se aprecia copia autenticada de la Resolución N° 210 de 15 de junio de 1984, en la que se estableció que a la profesora **DE PAREDES** nombrada en el cargo de Educador **R-1** no se le pagó el sobresueldo de B/.42.00, ni el aumento salarial de B/.50.00 otorgado a todos los educadores del país. Que, por consiguiente, se ordenaba corregir su salario de B/.1,066.00 a B/.1,170.50, a partir del 12 de enero de 1984 (Cfr. f. 13 exp. contencioso).

De tales constancias se desprende pues, que el nombramiento de la profesora **BLANCA DE PAREDES** como Jefa de Personal se dio dentro del Grado de **Educador R-1**, tal como consta a folios 18 y 11 de los expedientes gubernativo y contencioso, respectivamente. Esta clasificación gradual tiene su asidero legal en el artículo 6 de la Ley 47 de 1946, transcrito anteriormente, así como también en el artículo 1 de la referida Ley, que en ningún momento establecen que el otorgamiento de sobresueldos y demás emolumentos a los educadores, es exclusivo para aquellos que se desempeñan en funciones de docencia, y no para los educadores que se desempeñan en puestos administrativos tales como el de Jefa de Personal en el cual se desempeñara la profesora **BRIONES DE PAREDES.**

A estos efectos, del texto del artículo 1 de la Ley 47 de 1946, se desprende claramente que no sólo es educador, el que imparte enseñanza, sino también el que dirige, u organiza o supervisa en instituciones educativas oficiales bajo la dependencia del Ministerio de Educación, y que por consiguiente, los mismos (ya se trate de educadores docentes o administrativos), están sujetos a la clasificación y remuneración establecidos en dicha ley.

En tal sentido, el artículo 2 de la precitada ley, señala que la remuneración del Educador la integran; el sueldo base del grado conrrespondiente al cargo en el cual esté clasificado de conformidad con la condición del nombramiento, los sobresueldos ya adquiridos, y los que posteriormente se obtengan con base a dicha ley, las compensaciones adicionales legalmente establecidas y los aumentos de sueldo que otorgue el Gobierno Nacional. El texto de las referidas disposiciones es el siguiente:

> "**ARTÍCULO 1.** El personal que imparte enseñanza, o dirige, u organiza o supervisa en instituciones educativas oficiales bajo la

dependencia del Ministerio de Educación, tendrá la denominación común de `Educador y estará sujeto a la clasificación y remuneración que establece esta Ley."

"**ARTÍCULO 2.** La remuneración mensual del Educador en servicio activo estará integrada por:

a) el sueldo base del grado correspondiente al cargo en el cual esté clasificado de conformidad con la condición del nombramiento;
b) los sobresueldos ya adquiridos;
c) los sobresueldos que posteriormente se obtengan con base a la presente ley;
d) las compensaciones adicionales legalmente establecidas; y
e) los aumentos de sueldo que otorgue el Gobierno Nacional."

Así las cosas, a la profesora **BRIONES DE PAREDES** sí le correspondía su respectivo incremento salarial, y de igual forma, el pago de sus sobresueldos como en efecto, lo reconoció la Administración en la Resolución N° 210 de 15 de junio de 1984, en la que se estableció claramente que a la profesora **DE PAREDES** nombrada en el cargo de Educador **R-1** no se le pagó el sobresueldo de B/.42.00, ni el aumento salarial de B/.50.00 otorgado a todos los educadores del país, ordenándose consecuentemente, corregir su salario de B/.1.066 a B/.1,170.50, a partir del 12 de enero de 1984.

Mal podía entonces la Administración proceder a revocar su propia actuación al desconocer todos los derechos (aumentos y sobresueldos) que le habían sido otorgados y adquiridos por la profesora **BLANCA BRIONES DE PAREDES** al momento en que ejercía el cargo de Jefa de Personal en el **IPHE** dentro del Grado de Educador **R-1**. Por consiguiente, no podía suspendérsele como en efecto se hizo desde 1985, de acuerdo con las aseveraciones vertidas por la Administración en su informe de conducta, el pago de los aumentos y sobresueldos a que tiene derecho, so pretexto de compensar el monto que durante la permanencia de la educadora **BRIONES DE PAREDES** como Jefa de Personal, que a su juicio, había percibido ilegalmente.

En cuanto a la adopción de la medida administrativa de ajustar el salario base a la aludida profesora al cargo que desempeña como Educadora Grado **S-7**,este Tribunal considera que la misma es manifiestamente improcedente y arbitraria.

La razón medular es que éste constituye un derecho adquirido y otorgado por la propia Administración, que encuentra pleno asidero jurídico en el Resuelto de Personal N° 12 de 22 de febrero de 1984, por el cual se nombró con carácter permanente y por necesidad del servicio a la Profesora **BLANCA B. DE PAREDES** como Supervisor Nacional **S-7**, con sueldo de B/1.148.00, en la Dirección Técnica de dicha entidad, a partir del 1° de abril de 1983, así como también en el pretranscrito artículo 5 de la referida Ley 47 de 1979. Esta disposición legal es clara al establecer que en ningún caso la aplicación de dicha ley, "producirá rebaja en el Sueldo Base devengado, mientras el Educador se mantenga en el mismo cargo y condición de nombramiento".

Conforme hemos visto, y ha sido expresado por la propia Administración, la profesora **BRIONES DE PAREDES** actualmente se desempeña como **Educadora Grado S-7** en el **IPHE**, por lo que no le es jurídicamente permitido a la Administración pretender ajustarle su salario base con todos los emolumentos que le correspondan.

Por las consideraciones anotadas, prosperan los cargos de violación endilgados a los artículos 2, 5, 6, 9 y 10 de la Ley 47 de 1979. Como de la confrontación del acto impugnado con los precitados artículos, ha resultado su ilegalidad, resulta innecesario confrontarlo con otras normas cuya ilegalidad se acusa.

Aunado a lo expresado, este Tribunal es del criterio de que al proceder la Administración (Instituto Panameño de Habilitación Especial), a suspender el pago de los aumentos y sobresueldos desde el año de 1985, que ella misma había reconocido, (Cfr. Resolución N° 210 de 15 de junio de 1984, legible a folio 13

del exp. principal), así como también ajustar el salario base con todos los emolumentos legales que le correspondan a la funcionaria **BRIONES DE PAREDES**, se extralimita en sus facultades legales, lo que cual es manfiestamente violatorio del principio de irrevocabilidad de los actos administrativos. Este principio de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia reiterada de esta Sala, prohibe a la Administración revocar de oficio sus propios actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo a favor de los particulares. Máxime si se trata de derechos que están expresamente consagrados en la ley.

Aceptar que la Administración revoque libremente su actuación como lo ha hecho el **IPHE** en el presente proceso, contraviene el principio de certeza jurídica del que gozan todos los actos administrativos hasta tanto, el órgano jurisdiccional, en nuestro caso, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, se pronuncie acerca de su ilegalidad o no.

En nuestra legislación, la administración no puede anular sus propios actos cuando los mismos afecten derechos subjetivos, ya que el artículo 29 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 20 de la Ley 135 de 1946, dispone los recursos a utilizar ante el superior jerárquico por parte de los afectados por el acto administrativo, y que los mismos tienen como fin, la aclaración, modificación, o revocación de los actos administrativos que provengan del funcionario de inferior jerarquía.

Los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales, ilustran el criterio expuesto:

> "DROMI señala que "la estabilidad del acto administrativo es un carácter esencial de éste, que significa la prohibición de revocación en sede administrativa de los actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que extinga o altere el acto en beneficio del interesado" (DROMI, Roberto. El Acto Administrativo. Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid 1985. pág. 153).
>
> Lo anteriormente citado es lo que se conoce en la doctrina como la irrevocabilidad de los actos administrativos, específicamente cuando estos últimos han creado, reconocido, o concedido un derecho subjetivo. En este caso, la Directora General de Comercio cuando ordenó la publicación de la solicitud de inscripción de la marca FOSIL, y luego anuló todo este proceso, su actuación conllevó un perjuicio contra el derecho del actor, quien solicitó dicha inscripción luego de que el propio Ministerio de Comercio le certificara la disponibilidad de la marca en mención.
> ...
> **En nuestra legislación, la administración no puede anular sus propios actos cuando los mismos afecten derechos subjetivos, ya que el artículo 29 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 20 de la Ley 135 de 1946, dispone los recursos a utilizar ante el superior jerárquico por parte de los afectados por el acto administrativo, y que los mismos tienen como fin, la aclaración, modificación, o revocación de los actos administrativos que provengan del funcionario de inferior jerarquía.**" ... (Sentencia de 24 de agosto de 1993, Registro Judicial de agosto de 1993, págs. 209-210).
>
> "Sin embargo, este Tribunal es del criterio de que al proceder la Administración (Ministerio de Educación), a dejar sin efecto el nombramiento que le fuera otorgado mediante concurso al profesor **VILLALOBOS**, se extralimita en sus facultades legales, lo que constituye una clara y manifiesta violación al consagrado principio de irrevocabilidad de los actos administrativos. Este principio prohibe a la Administración revocar de oficio sus propios actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo a favor de los particulares. En este caso, y como hemos visto, el derecho subjetivo consiste en el nombramiento por concurso del profesor **VILLALOBOS** en

> la Escuela Secundaria Nocturna Oficial, I. P. T. Nocturno de Panamá, mediante el Decreto de Personal N° 114 de 18 de abril de 1995, por un período de 18 horas hasta finalizar el año escolar, es decir, desde el 19 de abril de 1995, hasta diciembre de 1995, que hacen un período de nueve (9) meses." (Sentencia de 29 de octubre de 1996).

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA:

1. QUE ES NULA, POR ILEGAL, la Resolución N° 03-95 D. G. de 2 de junio de 1995, expedida por el Director General del Instituto Panameño de Habilitación Especial,
2. Que la profesora BLANCA BRIONES DE PAREDES no adeuda suma alguna a la aludida institución,
3. Que el Instituto Panameño de Habilitación Especial está obligado a pagar a la educadora BRIONES DE PAREDES todos los sobresueldos y demás derechos que le corresponden como tal, de conformidad con la ley, desde el momento en que fuera suspendido el pago de los mismos.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO Y YOUNG EN REPRESENTACIÓN DE LLANTAGANGAS DE PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 87-96 DE 29 DE MAYO DE 1986, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS, EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La señora Procuradora de la Administración, mediante vista N° 463 de 17 de octubre de 1996, ha presentado recurso de apelación contra la resolución de 4 de septiembre del corriente, que decidió admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción instaurada por la firma Arrocha, Blandón, Castro y Young, en representación de **LLANTAGANGAS DE PANAMÁ, S. A.**, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 87-96 de 29 de mayo de 1996, dictada por el Director General de Aduanas, el silencio administrativo y para que se hagan otras declaraciones.

La inconformidad de la señora Procuradora de la Administración, radica en el hecho de que la sociedad demandante no ha acreditado su personería, a través de certificación expedida por el Registro Público, según lo exige, indica, el artículo 47 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 626 del Código Judicial.

A continuación un extracto del escrito de promoción y sustentación del recurso de apelación presentado por la señora Procuradora de la Administración:

> "Nótese que en el Poder que presenta la Firma Forense Arrocha, Blandón, Castro y Young para actuar en nombre y representación de la parte actora, se indica que "el señor Juan Filopoulos, actúa en calidad de Presidente y Representante Legal de la sociedad LLANTAGANGAS, S. A., debidamente constituida e inscrita en el Registro Público según consta en la certificación adjunta", sin embargo, entre las 32 fojas que -hasta el momento tiene el expediente

judicial no se observa la aludida certificación, por lo que no hay constancia de la personería que dice ostentar la demandante."

El opositor hizo valer sus objeciones al recurso de apelación, argumentando básicamente que si bien es cierto no acompañaron la certificación del Registro Público con el escrito de formalización del recurso, no era menos cierto que adujeron el expediente administrativo que reposa en la Dirección General de Aduanas, donde evidentemente consta dicha certificación:

> "**PRIMERO:**En el escrito de formalización del recurso, los suscritos aducimos el expediente administrativo, en el cual consta la certificación expedida por el Registro Público, en la que se certifica la existencia, vigencia y representación legal de la sociedad que nos concedió poder para actuar. Dicha certificación fue expedida hace menos de un año. Valga señalar además, que si bien el artículo 626 del Código Judicial establece que la certificación del Registro Público "hará fe" de la existencia y representación legal de una sociedad, lo cierto es que no dice que solamente dicho documento puede dar fe de dichas circunstancias. Observemos que el artículo 47 de la Ley contencioso administrativa habla de "documento idóneo", si bien es un documento idóneo, no es el único documento idóneo para acreditar el carácter con que el actor se presenta al juicio, cuando éste se trata de una persona jurídica.
>
> **SEGUNDO:** Dentro de las pruebas aportadas con dicho escrito de formalización, se encuentra la resolución dictada por la Dirección General de Aduanas y correspondencia recibida en nuestro Despacho, en la que se hace referencia tanto a la razón social LLANTAGANGAS DE PANAMÁ, S. A. como el representante legal de la misma, siendo estos las mismas personas que nos otorgan poder para presentar el recurso que ocupa nuestra atención."

Encontrándose el proceso en este estado, el presente Tribunal **"ad quem"** entra a decidir la controversia instaurada señalando que le asiste la razón a la señora Procuradora, toda vez que en la demanda incoada el actor, efectivamente, ha omitido acompañar el documento idóneo que acredita la existencia jurídica de la parte actora, toda vez que nos encontramos ante una demanda presentada por una persona jurídica, esta es la sociedad anónima **LLANTAGANGAS DE PANAMÁ, S. A.**

Esta situación contraviene lo dispuesto en el artículo 626 del Código Judicial, cuyas normas tienen aplicación supletoria en estos procesos, en el sentido de que la certificación en mención, comprueba la existencia legal de la parte actora, tal como lo contempla la norma supracitada que es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 626. Para comprobar la existencia legal de una sociedad, quien tiene su representación en proceso, o que éste consta en el Registro, hará fe el certificado expedido por el Registro dentro de un año inmediatamente anterior a su presentación".

No consta pues, en el expediente, que se haya acompañado la certificación del Registro Público acreditando la existencia jurídica de la sociedad demandante, y en el caso de que efectivamente se encontrase registrada, no existe certeza sobre si quien otorgó el poder para acudir ante el Tribunal contencioso administrativo, tenía efectivamente facultades para ello, tal como lo exige el artículo 47 de la Ley 135 de 1943.

En vista de que el libelo presentado no cumple uno de los requisitos legales previstos en las leyes contencioso administrativas, es de lugar negarle curso legal a la demanda presentada en atención a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Providencia de 4

de septiembre de 1996, NO ADMITE, la demanda presentada por la firma Arrocha, Blandón, Castro y Young en representación de LANTAGANGAS DE PANAMÁ, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. SOFÍA PUELLO DE IGLESIAS, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA POSITIVA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 25-95 DE 14 DE FEBRERO DE 1995, DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada **Sofía Puello de Iglesias**, en nombre y representación de **CONSTRUCTORA POSITIVA, S. A.**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 25-95 de 14 de febrero de 1995 dictada por la Junta Directiva del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y para que se hagan otras declaraciones.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Manifiesta el demandante que el día 12 de julio de 1994 se llevó a cabo en el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) la Tercera Convocatoria de la Licitación Pública N° 028-93 para el financiamiento, diseño, suministro, transporte, rehabilitación, entrega en el sitio, adiestramiento, supervisión y montaje, pruebas, puesta en servicio y entrada en operación comercial de un ciclo combinado de 130 MW en la Central 9 de Enero de Bahía Las Minas. Que en dicha Licitación Pública participaron las siguientes empresas **CONSTRUCTORA POSITIVA, S. A.**, ANSALDO GIE, S. r. L., Guiehr, S. A., Wilaskandia e Ingeniería Especializada, S. A. Que la empresa Ansaldo Gie, S. R. L. fue escogida para la adjudicación de la licitación. Que el 19 de julio de 1994 se instaló la Comisión Evaluadora de dicha Licitación para la evaluación de las propuestas. También señaló el recurrente, que los miembros de la Comisión Evaluadora, luego de un pormenorizado análisis de las propuestas, basándose en el Pliego de Cargos, comprobó que hubo un error en los cálculos económicos de **CONSTRUCTORA POSITIVA, S. A.**, Guiehr, S. A. y de Ingeniería Especializada, S. A. Que la Comisión Evaluadora al hacer un análisis serio, objetivo e imparcial de todas las propuestas presentadas, observó que la empresa ANSALDO GIE, S. r. L. había incurrido en diversas omisiones y fallas en la presentación de su propuesta, al no cumplir con los requisitos establecidos en el Pliego de Cargos y Especificaciones. Que a pesar de esta evaluación, el representante del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) en la Comisión, oficiosamente intentó defender a la empresa ANSALDO GIE, aduciendo que dos de los puntos fueron debidamente aclarados, situación esta que implica una modificación de la propuesta. Que el representante de la Contraloría General de la República señaló, que después de la adjudicación provisional no pueden hacerse cambios ni modificaciones a las que han sido recomendadas.

Que la Junta Directiva del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), violando el Pliego de Cargos y Especificaciones, además del Código Fiscal, ignoró totalmente los señalamientos de dicha Comisión y expidió la Resolución N° 25-95 de 14 de febrero de 1995, adjudicando en forma definitiva la Licitación N° 028-93 a la firma ANSALDO GIE, S. r. L.

Que la Junta Directiva, arrogándose funciones privativas de la Comisión Evaluadora, designó en forma irregular y extemporánea una Comisión Ad-Hoc, supuestamente para aclarar la duda surgida sobre la validez técnica de los sistemas de control ofertada y que dicha Comisión Ad-Hoc respaldó el criterio de la Comisión Evaluadora.

Finalmente indica el actor que la Junta Directiva del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), a solicitud del M. I. P. P. E. dictó la Resolución N° 311-94 de 7 de diciembre de 1994, mediante la cual contrató a la firma extranjera K & M ENGINEERING AND CONSULTING CORPORATION, para evaluar las ofertas, pues no existe en toda nuestra legislación fiscal, ni en el Pliego de Cargos, autorización para que después del criterio de la Comisión Evaluadora se autorice a un funcionario a designar Comisiones Ad-Hoc, ni a contratar empresas consultores para que sus opiniones priven por encima de la Comisión Evaluadora. Que la Junta Directiva del IRHE, en forma irregular, no sólo acogió en forma extemporánea la información corregida de ANSALDO GIE, S. R. L., sino que oficiosamente le suministró a K & M ENGINEERING AND CONSULTING CORPORATION la supuesta información corregida de aquella empresa y sobre la misma, dicha firma consultora emitió su criterio aparentemente favorable a ANSALDO GIE, la cual fue acogida por la Junta Directiva.

INFORME DE CONDUCTA

Posteriormente, el Magistrado Sustanciador, procedió a solicitarle al Director del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación un informe de conducta en relación a la demanda incoada por **CONSTRUCTORA POSITIVA, S. A.** El precitado funcionario mediante Nota N° DAL-221-95 de 11 de julio de 1995, manifestó que la Comisión Evaluadora de las propuestas recomendó la Adjudicación Definitiva de la Licitación Pública N° 028-93 a la empresa **CONSTRUCTORA POSITIVA, S. A.**, argumentando que la propuesta de ANSALDO GIE, S. R. L. parecía no cumplir con algunos aspectos técnicos. Que la Junta Directiva de la Institución estimó conveniente y por ello, designó una Comisión Ad-Hoc para aclarar las dudas surgidas sobre la validez técnica del Sistema de Control ofertado por las empresas. Que posteriormente, el M. I. P. P. E. solicitó la opinión de una firma especializada y la Junta Directiva contrató los servicios de una firma consultora denominada K & M ENGINEERING para que emitiera una opinión independiente en relación a los diferentes aspectos técnicos de las propuestas.

Por último, que luego de tomar en cuenta los informes técnicos y opiniones emitidas al respecto de las propuestas recibidas y en particular sobre la propuesta de ANSALDO GIE, S. R. L., la Junta Directiva de la Institución, mediante la Resolución N° 25-95 antes mencionada, adjudicó definitivamente a la proponente ANSALDO GIE, S. R. L. el acto público en comento.

POSICIÓN DE LA EMPRESA ANSALDO GIE, S. R. L.

De la demanda, se le corrió traslado a la empresa ANSALDO GIE, S. R. L., para que interviniera dentro del proceso y mediante apoderado judicial, solicitó se rechazaran las pretensiones del demandante por carecer de fundamento, ya que las Actas atacadas no adolecen de vicio de ilegalidad (ver fojas 46 a 50 del expediente).

CRITERIO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

También se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración del libelo propuesto por la empresa **CONSTRUCTORA POSITIVA, S. A.**, quien mediante Vista N° 409 de 29 de septiembre de 1995, se opuso a la pretensión del demandante.

Considera la Procuradora que el actor se ha equivocado en sus apreciaciones, en cuanto a las supuestas modificaciones introducidas después de la adjudicación provisional, toda vez que desde un inicio, casi todas las propuestas presentadas se ajustaban a lo establecido en el pliego de cargos. Que sin embargo, al ser estudiadas por la Comisión Evaluadora Técnica se detectó que las únicas que cumplían con lo establecido en el pliego de cargos, eran las

propuestas de la empresa **CONSTRUCTORA POSITIVA, S. A.**, la propuesta de la empresa Wilaskandia, S. A., así como también la de la empresa ANSALDO GIE, S. R. L., pero que esta última presentaba una única duda respecto al Sistema de Control para la turbina de vapor ofrecida, por lo que la Junta Directiva del IRHE solicitó a dicha empresa una aclaración para así escoger la propuesta que representara los mejores intereses para el Estado de acuerdo a la ley. Que es por esto que el 5 de septiembre de 1994 ANSALDO GIE le envía a la Junta Directiva del IRHE, una Nota en la cual explica lo solicitado por la entidad. Que también, la Junta Directiva del IRHE, le solicitó a esta última empresa aclarara lo concerniente a la Tasa de Costo Administrativo Consular, por lo que el día 3 de agosto de 1994 se envía nota aclaratoria. Que estas aclaraciones rendidas por ANSALDO GIE, no contenía ningún tipo de modificación a la propuesta inicial.

POSICIÓN DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA TERCERA

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala, entran a resolver la presente controversia.

El demandante considera que se ha violado el artículo 17 del Decreto N° 33 de 9 de mayo de 1985, el artículo 47 C del Código Fiscal, modificado por la Ley 31 de 30 de diciembre de 1994, cláusulas 9.10 párrafo segundo; 9.11; 10; 11; 15.2; 17.3 de las condiciones generales del Pliego de Cargos; y la cláusula 1.6, literal c, f, g, Capítulo II numerales 1 y 5 de las instrucciones de los proponentes.

Este Tribunal quiere señalar que coincide con la Procuradora de la Administración en el sentido en lo que respecta al artículo 47 del Código Fiscal, modificado por la Ley 31 de 30 de diciembre de 1994, el mismo no será confrontado con el acto acusado de ilegal, como lo es la Resolución N° 25-95 de 14 de febrero de 1995, ya que al momento de emitirse dicho acto, no estaba vigente la norma señalada como infringidas puesto que el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) realizó el llamado a una Tercera Convocatoria del acto de Licitación Pública N° 028-93 el día 12 de julio de 1994, y la Ley N° 31 de 1994 no había sido promulgada para entonces.

Una de las normas que se estima conculcada es el artículo 17 del Decreto N° 33 de 9 de mayo de 1985, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 17. El formulario de propuesta contendrá la declaración de que el postor acepta sin restricciones ni objeciones todo el contenido del Pliego de Cargos".

Manifiesta el demandante que la norma transcrita ha sido violentada por la Resolución N° 25-95 de 14 de febrero de 1995, dado que considera que el postor debe aceptar sin restricciones ni objeciones todo el contenido del pliego de cargos, lo cual debe estar advertido en el formulario de propuesta. Que insólitamente el IRHE le permitió a la empresa ANSALDO GIE, efectuar una modificación de la propuesta, después de efectuada la adjudicación provisional, a pesar de las claras advertencias formuladas por el Representante de la Contraloría General de la República, quien ante los intentos de dicha empresa de introducir modificaciones, bajo el pretexto de aclarar, y del mismo IRHE de permitírselo, señaló que después de la adjudicación provisional no se pueden hacer cambios ni modificaciones a las propuestas, situación que deja constancia la Comisión Evaluadora. Que la empresa ANSALDO GIE no sólo hizo modificaciones o cambios a su propuesta, sino que también impuso condiciones que se apartaran del Pliego de Cargos, de la Ley Fiscal y de los intereses de la República.

Frente al argumento esgrimido por el demandante queremos señalar que de acuerdo a las constancias procesales que reposan en el expediente que contiene los antecedentes de este proceso, que en ningún momento la empresa ANSALDO GIE, S. R. L., modificó su propuesta, tal como lo quiere hacer ver el recurrente. Esto lo decimos, ya que en la Nota de 3 de agosto de 1994 suscrita por el Representante Legal de ANSALDO GIE, S. R. L. (ver foja 59 del expediente) se plasma la intención de aclarar lo solicitado por el IRHE. Esta aclaración es del tenor siguiente:

"Estimados Señores:

Con referencia a Vuestra carta DEDI-DP-PDPTEG. 32-94 de fecha 3 de Agosto de 1994, les damos las siguientes aclaraciones:

1. El sistema de control ofrecido para:

a) La turbina de gas nueva, es MARK V-TMR (Triple redund).
b) Las dos (2) turbinas de gas rehabilitadas, es MARK V-TMR (Triple redund).
c) La turbina nueva de vapor, es tipo WOODWARD (Triple redund) y puede ser también, MARK V-TMR (Triple redund).

2. Les confirmamos que nuestros precios incluyen todos los gastos necesarios (Seguro, flete, TCAC, etc.) para el suministro CIF en el sitio y lugar de la obra de los materiales y equipos.

Lo expresado en nuestra oferta significa que no hemos incluido los impuestos especificados ser pagados por el IRHE (artículo 49.1, Volumen III, pág.64 del pliego de cargo y especificaciones)".

El 5 de septiembre de 1994, ANSALDO GIE, S. R. L. aclara nuevamente al IRHE, el punto relacionado con el Controlador de Turbinas de Vapor, y lo hace de esta manera (ver foja 146 de los antecedentes):

"Estimado Señores:

Con referencia a el INFORME DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 028-93 (Tercera Convocatoria) PARA EL FINANCIAMIENTO, DISEÑO, SUMINISTRO, TRANSPORTE, REHABILITACIÓN, ENTREGA EN EL SITIO, ADIESTRAMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONTAJE, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y ENTRADA EN OPERACIÓN COMERCIAL DE UN CICLO COMBINADO DE 130 MW EN LA CENTRAL 9 DE ENERO DE BAHÍA LAS MINAS, queremos manifestar que no estamos conforme con el dictamen de la Comisión Evaluadora, según lo recomendado por la mayoría de los miembros de la Comisión, fundamentando nuestro desacuerdo en los siguientes planteamientos:

1. En base a este Dictamen, existe solamente una única duda según lo manifestado en el informe, por lo que no hemos sido recomendados para la adjudicación definitiva. Esta duda se refiere al Controlador de la Turbina de Vapor ofertado o sea el Woodward 505.

Sobre el particular confirmamos nuevamente que el equipo ofrecido cumple con lo establecido en el Pliego de Cargos de la Licitación Pública N° 028-93 (tercera convocatoria), tal como lo demostramos con la nota y el esquema que adjuntamos del propio fabricante WOODWARD.

En dicha nota, se desprende que el sistema ofrecido es equivalente y ejecuta las mismas funciones del MARK V- TMR. Inclusive si aún persiste la duda, estamos dispuestos, en cualquier momento que así lo solicite el IRHE, de traer a los propios técnicos del fabricante para que hagan todas las explicaciones que se requieran.

2) Una vez aclarado la única duda levantada por la Comisión deseamos resaltar las siguientes ventajas que presenta nuestra oferta: ...".

Como puede apreciarse, en ningún momento la empresa ANSALDO GIE, S. R. L. hizo alguna modificación a su propuesta, sólo se limito a aclararles a la Comisión Evaluadora por medio de los Directivos del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) ciertos puntos de su ofrecimiento en cuanto al aspecto técnico y en lo concerniente al precio.

Cabe destacar que la Comisión Evaluadora dentro del período de evaluación de las propuestas puede solicitar que se aclaren pruebas de los ofrecimientos, para así llevar a cabo una selección justa y apegada a la ley, que compagine con

los intereses del Estado; de lo contrario, sino procediera a verificar los puntos ambiguos, no claros o confusos de las propuestas, dicha Comisión Evaluadora no estaría cumpliendo debidamente con el encargo que el Estado, por medio de sus instituciones centralizadas o descentralizadas pone en sus manos para que escoja el mejor ofrecimiento que lo beneficie a cabalidad.

También debemos puntualizar y esto lo hemos reiterado en otras ocasiones, que el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 y 50 del Código Fiscal, tiene el derecho de rechazar propuestas o aceptar la que mejor le convenga, tomando en cuenta el precio más económico, pero que representen mayor calidad.

Si bien es cierto, el dictamen de la Comisión Evaluadora no es obligatorio, el mismo es considerado a la hora de que la Institución, por medio de las autoridades correspondientes, tomen la decisión de adjudicar definitivamente una Licitación Pública, como ocurre en este caso.

Por consiguiente, estimamos que el artículo 17 del Decreto N° 33 de 1985, no ha sido transgredido por la Resolución N° 25-95 de 14 de febrero de 1995. En este mismo sentido queremos hacer alusión a las cláusulas 9.11, 10 y 17.3 de las Condiciones Generales y la cláusula 1.6 literal c de las instrucciones de a los proponentes, las cuales son consideradas igualmente violadas por las mismas razones expuestas por el demandante en líneas anteriores, por lo que le aplicamos el criterio vertido en relación al artículo 17 del Decreto N° 33 de 9 de mayo de 1985.

En lo que concierne a las otras cláusulas de las Condiciones Generales del Pliego de Cargos, pasaremos a analizarlas de manera conjunta por encontrarse todas íntimamente relacionada. Estas cláusulas son las siguientes: 9.10; 11; y 15.2; El tenor de cada una de ellas es el siguiente:

> "9.10 PRECIO UNITARIO Y TOTAL
> ...
> Todo gasto de manejo local o intereses, incluyendo la Tasa de Costo Administrativo Consular (TCAC), debe ser considerado dentro del precio CIF-Sitio de la obra a ofertar".

> "11. IDIOMA OFICIAL
> Las propuestas, así como cualquier otra documentación, serán presentadas en idioma castellano, salvo folletos y/o catálogos que podrán presentarse preferentemente en español o inglés".

> "15.2 Quien presida este acto público rechazará de plano, en el acto mismo de la apertura de los sobres, las proposiciones que no fueren acompañadas de la fianza provisional, las que no presenten el correspondiente Certificado de Postor Y LAS QUE CONTENGAN OFERTAS CONDICIONADAS, ALTERNATIVAS O INDETERMINADAS".

El recurrente indica que las cláusulas aludidas han sido transgredida por la Junta Directiva del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

En primer lugar, porque el proponente debe responder por los gastos de manejo local o intereses, incluyendo la Tasa de Costo Administrativo Consular, que debe ser considerado dentro del precio CIF-Sitio de la Obra, y la empresa ANSALDO GIE, sólo incluyó en sus precios la Tasa de Costo Administrativo Consular (TCAC), lo que era motivo suficiente para que la Junta Directiva rechazara la propuesta. En este orden de ideas considera este Tribunal, que dicha situación no es acorde con la realidad, ya que tal como se desprende de una de las aclaraciones que hiciera ANSALDO GIE a la Comisión Evaluadora, uno de los puntos aclarados fue el de los gastos de manejo local o intereses, incluyendo la Tasa de Costo Administrativo Consular, considerándose dentro del precio CIF-Sitio de la Obra:

> "2. Les confirmamos que nuestros precios incluyen todos los gastos necesarios (Seguro, flete, TCAC, etc.) para el suministro CIF en el sitio y lugar de la obra de los materiales y equipos".

En segundo término manifiesta el recurrente que la cláusula 11 ha sido conculcada dado que ANSALDO GIE presentó su propuesta financiera en el idioma inglés sin traducción oficial al español, afirmación ésta que no coincide con la documentación que reposa en los antecedentes de este caso, además de que la parte actora no ha demostrado lo que aduce en su argumentación.

En tercer lugar, lo que respecta a la cláusula 15.2 el demandante señala que la oferta de la empresa favorecida con la Licitación Pública N° 028-93 es indeterminada o alternativa, pero la parte afectada no explica en que consiste esas supuestas anomalías o datos indeterminados, que debió considerar la Junta Directiva del IRHE para rechazar de plano la propuesta de aquella.

Finalmente, la empresa **CONTRUCTORA POSITIVA, S. A.** considera que la Resolución N° 25-95 de 14 de febrero de 1995, vulnera la cláusula 1.6 literales c, f y g, numerales 1 y 5 de las instrucciones de los proponentes.

> "1.6 **CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS...**
> f. Si la Comisión Evaluadora determina que la propuesta no se ajusta sustancialmente al Pliego de Cargos, la descalificará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el proponente.
>
> g. Estarán sujetas a descalificación las propuestas que:
> (1) Incluyen condiciones diferentes a las estipuladas en el Pliego de Cargos.
> ...
> (5) Presenten desviaciones técnicas sustanciales".

Arguye el demandante que los literales f y g numerales 1 y 5 fueron violados en razón de que la Junta Directiva del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación permitió que la empresa ANSALDO GIE, incluyera condiciones diferentes y presentaran desviaciones técnicas sustanciales en sus propuestas y además de que las condiciones de su oferta eran desventajosas para el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

Disentimos del criterio del actor, en virtud de que de las constancias que obran en el expediente, como ya lo hemos señalado, la empresa ANSALDO GIE presentó su propuesta de acuerdo a lo requerido en la Licitación Pública N° 028-93, y sólo aclaró algunos puntos de la misma, a solicitud de los encargados de la evaluación técnica y financiera. En este mismo sentido cabe reiterar que el Estado escoge la mejor propuesta, de acuerdo a sus intereses y necesidades, lo que no hace válido el cuestionamiento del afectado de que si la propuesta es ventajosa o no para el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) **(ver artículos 49 y 50 del Código Fiscal**). Es por ello que consideramos que no se ha violentado lo previsto en la cláusula 1.6, literales f y g, numerales 1 y 5.

En conclusión, no prospera la acusación impetrada contra la Resolución N° 25-95 de 14 de febrero de 1995, en el sentido de que violentaba lo preceptuado en el artículo 17 del Decreto N° 33 de 1985, y en las cláusulas 9.10 párrafo segundo; 9.11; 10; 11; 15.2; 17.3 de las condiciones generales del Pliego de Cargos; y la cláusula 1.6, literal c, f, g, Capítulo II numerales 1 y 5 de las instrucciones a los proponentes.

De acuerdo a todo lo anterior, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 25-95 de 14 de febrero de 1995 dictada por la Junta Directiva del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ECUATORIANA DE AVIACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 1994, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense SHIRLEY & DÍAZ, actuando en nombre y representación de la Empresa ECUATORIANA DE AVIACIÓN, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la resolución dictada por la Junta Directiva de la Dirección de Aeronáutica Civil, en la reunión celebrada el 25 de agosto de 1994, sobre el tema tres de puntos varios del Orden del Día, que se refiere a la solicitud de la Empresa ECUATORIANA DE AVIACIÓN de que se la exceptuara del pago de la tasa de estacionamiento de la aeronave marca McDonell Douglas, Modelo DC-10-30, la cual fue resuelta así: "no exceptuar del pago de tasa de estacionamiento a la empresa por el estacionamiento de la aeronave McDonel Douglas, Modelo DC-10-30" (f. 132).

La parte actora solicita que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la decisión que impugna, le sea devuelta la suma de B/.84,928.58 pagada en concepto de tasa de estacionamiento en el Aeropuerto de Tocumen, por el período comprendido entre el 23 de septiembre de 1993, fecha en que se decretó el primer Secuestro sobre la aeronave McDonel Douglas, Modelo DC-10-30 y el 11 de agosto de 1994, fecha en que fue levantado el último secuestro que pesaba sobre esa nave (f. 136).

Al ser admitida la demanda se solicitó el informe explicativo de conducta al funcionario demandado y se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, quien emitió concepto mediante la Vista Fiscal N° 364 de 28 de agosto de 1995 (f. 45-52).

La parte actora estima que las disposiciones legales violadas son las siguientes:

> **Código Civil**
> Artículo 34 d): "Es fuerza mayor la situación producida por hechos del hombre, a los cuales no haya sido posible resistir, tales como los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, apresamiento por parte de enemigos y otros semejantes.
>
> En caso fortuito el que proviene de acontecimientos de la naturaleza que o hayan podido ser previstos, como un naufragio, un terremoto, una conflagración y otros de igual o parecida índole".

La parte actora estima que esta norma fue violada directamente, por omisión, ya que la Junta Directiva de la Dirección de Aeronáutica Civil no tomó en cuenta al dictar la decisión impugnada, que las medidas cautelares dictadas sobre la nave por los Jueces de Circuito Sexto y Quinto del Ramo Civil y por la Administración Regional de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, constituyen situaciones de fuerza mayor, inevitables e irresistibles por ser actos dictados por funcionarios públicos, "a los cuales no es posible resistir, salvo que se incurra en desacato o violación de la ley".

El otro artículo que se dice infringido es el 990 del Código Civil, cuyo tenor literal es el siguiente:

> "**Artículo 990**. Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de

aquellos sucesos, que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables".

La parte actora sostiene que este articulo exonera de responsabilidad y del cumplimiento de las obligaciones a las personas que se encuentren ante sucesos imprevistos, que no hubieran podido preveer y aunque previstos fueran inevitables e irresistibles como la fuerza mayor, y alega que las medidas cautelares recaídas sobre la aeronave McDonel Douglas, Modelo DC-10-30, son un acontecimiento de fuerza mayor.

En el hecho décimo primero de la demanda, a foja 11, la parte actora expresa que la decisión adoptada por la Junta Directiva de Aeronáutica Civil es violatoria del artículo 15, numeral 8, de la Resolución N° 62 a) de 26 de enero de 1978, adicionado por la resolución 089-JD de 23 de junio de 1993. Esta norma, que no exceptúa del pago de tasa de estacionamiento al propietario u operador de la nave cuando se trate de caso fortuito o de fuerza mayor, no fue transcrita entre las normas infringidas y tampoco se explicó en qué concepto fue infringida. Adicionalmente, la Resolución N° 089-JD empezó a regir el 23 de junio de 1994, con posterioridad al inicio del período en que la nave estuvo secuestrada y estacionada en Aeronáutica Civil.

Agotados los trámites legales pertinentes, la Sala procede a resolver la presente controversia.

Contra la aeronave operada por la empresa Ecuatoriana de Aviación se dictaron diversos secuestros por los Juzgados Quinto y Sexto de Circuito (fs. 53-57) y por la Administración Regional de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro (fs. 101-103).

Estos secuestros fueron posteriormente levantados en razón de desistimiento de los secuestrantes y arreglos extra judiciales entre las partes, en distintas fechas. El primero de los secuestros fue decretado por el Juzgado Sexto del Circuito contra Empresa Ecuatoriana de Aviación y a favor de Aeronautic y Astronautic Services Inc. sobre la citada nave, y este fue el último secuestro que se levantó en el mes de agosto de 1994 (fs. 72-77). Durante este período de tiempo la aeronave marca McDonell Douglas, Modelo DC-10-30 estuvo estacionada en la Dirección de Aeronáutica Civil y esta institución está cobrando la correspondiente tasa de estacionamiento.

La Procuradora de la Administración al emitir concepto expresó, que para que pueda alegarse la excepción de fuerza mayor es necesario que el evento ocurrido sea irresistible (f. 50). A su juicio en el caso en estudio la empresa Ecuatoriana de Aviación pudo haber resistido los efectos o consecuencias de las medidas cautelares ordenadas contra la aeronave y por tanto estima que debe declararse legal el acto de la Junta Directiva de la Dirección de Aeronáutica Civil.

La Sala comparte el criterio vertido por la Señora Procuradora, en cuanto a que las medidas cautelares decretadas en su contra, que el demandante invoca como acontecimientos de fuerza mayor, son sucesos que pudieron ser evitados.

El numeral 7 del artículo 521 de nuestro Código Judicial preceptúa que, en caso de secuestro, el secuestrado podrá solicitar, antes de que se adopte la medida, durante su ejecución o después de ejecutada, que se evite, revoque o levante, siempre que, a juicio del Juez, ofrezca bienes suficientes en garantía. Por tanto, el secuestro pudo ser evitado, revocado o levantado si la Empresa Ecuatoriana de Aviación hubiese ofrecido bienes suficientes como garantía.

Además, estamos ante una situación de incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la Empresa Ecuatoriana de Aviación que trajo como consecuencia que la aeronave se mantuviera secuestrada en los estacionamientos que arrenda Aeronáutica Civil, durante casi once meses.

La doctrina excluye expresamente los acontecimientos provocados por el incumplimiento de las obligaciones, de aquellos que pueden invocarse como fuerza mayor o caso fortuito que exime del cumplimiento de obligaciones. En el caso que

nos ocupa Empresa Ecuatoriana de Aviación fue demandada a causa de un contrato de arrendamiento, con opción de compra, suscrito con Aeronautic and Astronautic Services Inc. sobre el avión secuestrado a petición de la arrendadora, DC-10-30, N/S 46575 y motor adicional. Este fue el primer secuestro que se decretó, por el Juzgado Sexto el 24 de septiembre de 1993, y el último que se levantó el 10 de agosto de 1994 (f. 72).

También "la moderna jurisprudencia alemana y suiza entienden por fuerza mayor un acontecimiento que no guarda relación con la industria y actividades del deudor y que se produce al margen de ella con fuerza inevitable". (Diccionario de Derecho Privado, T. 1, Editorial Labor, S. A., Barcelona, Madrid, 1961, p. 2005). En este caso, las medidas cautelares practicadas se dieron precisamente por el incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa Ecuatoriana de Aviación, arrendataria de la aeronave McDonel Douglas DC-10-30.

Por lo expuesto deben desestimarse los cargos de violación de los artículos 34 d) y 990 del Código Civil.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la decisión dictada por la Junta Directiva de Aeronáutica Civil, en reunión celebrada el 25 de agosto de 1994, que consta en el Punto N° 3 del Acta de dicha reunión que a la letra dice:

> "Los miembros de la Junta Directiva decidieron no exceptuar del pago de tasa de estacionamiento a la empresa de la Aeronave McDonel Douglas, Modelo DC-10-30".

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO RAMÍREZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN ALEXIS RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL OFICIO DE 15 DE ENERO DE 1996, SUSCRITO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL, LA RESOLUCIÓN N° 169 DE 28 DE MARZO DE 1996 DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL Y LA RESOLUCIÓN N° 180 DE 29 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ELOY ALFARO DE ALBA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Julio Ramírez, actuando en nombre y representación de Juan Alexis Rodríguez, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el oficio de 15 de enero de 1996, suscrito por el Director Ejecutivo del Fondo de Emergencia Social, la resolución N° 169 de 28 de marzo de 1996 dictada por el Presidente de la Junta Directiva del Fondo de Emergencia Social y la Resolución N° 180 de 29 de abril de 1996, dictada por el Director Ejecutivo del Fondo de Emergencia Social, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito fechado el 5 de noviembre de 1996, que consta a foja 77 del expediente, la parte actora presentó desistimiento de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

En virtud de que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 señala que la parte demandante puede desistir en cualquier momento del proceso, procede la Sala a admitir el desistimiento y dar por terminado el proceso.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Julio Ramírez, actuando en nombre y representación de Juan Alexis Rodríguez, DECLARA que ha terminado el proceso contencioso administrativo y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. VASCO TORRES DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LAS NOTAS N° VIP-638-95 DE 23 DE JUNIO DE 1995 Y N° VIP-805-95 DE 24 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDAS POR EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS, BECAS Y SABÁTICAS, APROBADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN SU REUNIÓN N° 39-95 DE 30 DE AGOSTO DE 1995, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Vasco Torres De León** en su propio nombre y representación, presentó demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción con el propósito de que se declaren nulas, por ilegales, las Notas N° VIP-638-95 de 23 de junio de 1995 y N° VIP-805-95 de 24 de julio de 1995, suscritas por el Vicerrector de la Universidad de Panamá, el Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas aprobado por el Consejo Académico en su Reunión 39-95 de 30 de agosto de 1995, y para que se hagan otras declaraciones.

Cumplidos los trámites procesales en la presente acción, pasa la Corte a decidir el fondo de la controversia.

Opina la parte demandante que las resoluciones recurridas violan los artículos 2, y 4 del Reglamento de Licencias Académicas para docentes e investigadores de facultades, centros regionales e institutos de la Universidad de Panamá, así como el punto 8 de las políticas de licencias, becas y sabáticas aprobadas por el Consejo Académico, de la Universidad de Panamá, en la reunión N° 26-95 de 14 de junio de 1995.

Las disposiciones violadas y el concepto de la infracción los expone el demandante de la siguiente manera:

> "La Nota VIP-638-95 de 23 de junio de 1995 de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá y la Nota VIP-805-95 de 24 de julio de 1995, confirmadas por el Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas aprobado por el Consejo Académico en reunión N° 39-95 de 30 de agosto de 1995, han violado las siguientes disposiciones legales:
>
> 1. Disposición Infringida. El Artículo 2 del Reglamento de Licencias Académicas para Docentes e Investigadores de Facultades, Centros Regionales e Institutos de la Universidad de Panamá cuyo texto es el siguiente:

ARTÍCULO 2. Las licencias pueden ser concedidas para los siguientes fines:

a) Realizar estudios;
b) Participar en eventos académicos o culturales de carácter nacional o internacional (Congresos, Simposios, Seminarios, etc.);
c) Ejercer cargos públicos nacionales o en organismos internacionales, así como prestar servicios de asesoría;
ch) Participar en intercambios de profesores o de investigadores, con otras Universidades o entidades académico-científicas nacionales o internacionales;
d) Efectuar actividades de carácter personal.

Concepto de la Infracción. La Nota VIP-638-95 de 23 de junio de 1995 infringió en concepto de INDEBIDA APLICACIÓN el literal "d" del Artículo transcrito a mi solicitud de Licencia Sin Sueldo por Motivo de Estudios e infringió en concepto de VIOLACIÓN DIRECTA el literal "a" que reconoce el derecho a Licencia por Estudios sin distinguir entre licencias sin sueldo y licencias remuneradas.

Al resolver la Nota VIP-638-95 de 2 de junio de 1995 que `según el Artículo 2 d), del Reglamento ... no procede la Licencia' el Señor Vicerrector aplicó a mi solicitud de Licencia para realizar estudios la norma correspondiente a Licencias para efectuar actividades de carácter personal, es decir, aplicó una disposición, cuyo texto es claro, a una situación de hecho no contemplada en dicha disposición dando lugar a la infracción de INDEBIDA APLICACIÓN.

Esta infracción por INDEBIDA APLICACIÓN dio lugar a que a mi solicitud de Licencia por Estudios se aplicara el Acuerdo aprobado por el Consejo Académico en reunión N° 17-93 de 9 de junio de 1993 que exige, a las Licencias para efectuar actividades de carácter personal, no exceder el término del contrato. El sentido literal del Acuerdo no admite interpretación en contrario vista de claridad de su texto: `las licencias concedidas a profesores especiales para efectuar actividades de carácter personal no podrán exceder el término del Contrato' (subrayado añadido).

La Nota VIP-805-95 de 24 de julio de 1995 y el Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas aprobado por el Consejo Académico en reunión N° 39-95 del 30 de agosto de 1995, al confirmar ambos la Nota VIP-638-95 de 23 de junio de 1994, reiteran la INDEBIDA APLICACIÓN del literal "d" y la VIOLACIÓN DIRECTA del literal "a" del Artículo 2 transcrito. Más grave aún, esta infracción es cometida por los actos confirmatorios pese a la existencia de la Nota N° CJ-571-95 de 20 de julio de 1995, de la Consultoría Jurídica de la propia Universidad de Panamá, que claramente explica que el requisito de no exceder el término del contrato sólo es aplicable a las licencias para efectuar actividades de carácter personal `y no (a) las licencias sin sueldo otorgadas para realizar estudios'.

2. Disposición infringida. El Artículo 4 del Reglamento de Licencias Académicas para Docentes e Investigadores de Facultades, Centros Regionales e Institutos de la Universidad de Panamá cuyo texto es el siguiente:

ARTÍCULO 4. Los aspirantes a licencias remuneradas para realizar estudios de Especialización, Maestría, Doctorado o Post-Doctorado deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Realizar estudios en áreas prioritarias para la Universidad;
b) Haber prestado dos años de servicios continuos como docente o investigador de la Universidad;
c) Haber sido aceptados por la Universidad o Institución donde van a realizar los estudios.

Concepto de la infracción. La Nota VIP-805-95 de 24 de julio de 1995, al confirmar la Nota VIP-638-95 de 23 de junio de 1995 y añadir un nuevo argumento jurídico en su defensa -el de los dos años de servicios continuos como docente-, nuevamente incurre en infracción por INDEBIDA APLICACIÓN ahora del literal "b" del Artículo 4 transcrito al aplicar a mi solicitud de Licencia Sin Sueldo por Motivo de Estudios el requisito establecido en dicho literal "b" del Artículo 4 para las Licencias Remuneradas por motivo de estudio. En efecto, la Nota VIP-805-95 de 24 de julio de 1995 afirmó que la Licencia Sin Sueldo no procedía, pues, no se había cumplido el requisito previsto en literal "b" del Artículo 4 transcrito; y, con ello, aplicó una disposición, cuyo texto es claro, a una situación de hecho no contemplada en dicha disposición dando lugar a la infracción de INDEBIDA APLICACIÓN.

La infracción se comete en la Nota VIP-805-95 de 24 de julio de 1995, otra vez, pese a lo dispuesto por la Consultoría Jurídica de la Universidad de Panamá, previa consulta presentada personalmente por el actor, en su Nota N° CJ-48-95 de 18 de enero de 1995 donde dice:

`El Reglamento de Licencias Académicas, establece el derecho del personal docente de `separarse de su cargo con licencia' sin señalar ningún límite de tiempo, reservando ésta exigencia para las licencias remuneradas que requieren del docente haber `prestado dos (2) años de servicios continuos como docente o investigador en la Universidad' y en el artículo 4 del mencionado reglamento.

Conforme a lo anterior, siendo su licencia no remunerada, no requiere ningún tiempo previo de servicio para ser concedida' (Subrayado añadido).

El Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas aprobado por el Consejo Académico en reunión N° 39-95 del 30 de agosto de 1995, al confirmar la Nota VIP-638-95 de 23 de junio de 1994 y la Nota VIP-805-95 de 24 de julio de 1995, reitera la infracción por INDEBIDA APLICACIÓN del literal "b" del Artículo 4 transcrito.

3. Disposición Infringida. El Punto 8 de las Políticas de Licencias, Becas y Sabáticas aprobadas por el Consejo Académico en reunión N° 26-95 de 14 de junio de 1995 que dice así:

8. Las licencias por estudios en la Universidad de Panamá ya sean remuneradas o no requerirán del cumplimiento del Artículo 4, acápite b y c, del Reglamento de Licencias, Becas y Sabáticas.

Concepto de la Infracción. La Nota VIP-805-95 de 24 de julio de 1995 infringió en concepto de INTERPRETACIÓN ERRÓNEA las Políticas de Licencias, Becas y Sabáticas aprobadas por el Consejo Académico en reunión N° 26-95 de 14 de junio de 1995 al aplicarlas con efecto retroactivo, esto es, más allá del ámbito de aplicación en el tiempo de la propia norma.

Al margen de las reservas sobre la legalidad de las Políticas, que, según la propia Nota N° CJ-643-95 de 23 de agosto de 1995 de la Consultoría Jurídica de la Universidad de Panamá, son incongruentes con el Artículo 97 de la Constitución Política de la República de Panamá y el Artículo 113 de la Ley Orgánica de Educación aplicable a la Universidad de Panamá por disposición del Artículo 162 de su Estatuto, ellas no fueron aprobadas sino hasta el 14 de junio de 1995 y mi solicitud de licencia fue presentada seis meses antes: el 16 de diciembre de 1994.

Del Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas aprobado por el Consejo Académico en reunión N° 39-95 de 30 de agosto de 1995, que no acoge favorablemente el recurso de reconsideración

contra, y por tanto confirma, la Nota VIP-638-95 de 23 de junio de 1995, se infiere que mi solicitud de licencia sin sueldo es negada por aplicación de lo dispuesto en las Políticas de Licencias, Becas y Sabáticas aprobadas el 14 de junio de 1995 bajo el erróneo entendido de que dichas Políticas son aplicables por haber sido aprobadas antes de que la tramitación de mi licencia llegase a la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas del Consejo Académico.

Ya en el Recurso de reconsideración contra la Nota N° VIP-638-95 de 23 de junio de 1995 se indicó que la fecha a partir de la cual se determina la aplicación de las Políticas es la fecha de presentación de la solicitud de licencia y no la fecha de cada una de las etapas que según el Estatuto y reglamentos pertinentes debe cumplir la tramitación de la misma. Fue en este sentido que se invocó entonces, y se invoca nuevamente, el Artículo 43 de la Constitución Política de nuestra República que establece el principio de la irretroactividad de las leyes.

Mi solicitud de licencia sin sueldo fue presentada ante la instancia correspondiente el día 16 de diciembre de 1994 y a tal fecha no existía requisito alguno sobre número de años como docente de la Universidad de Panamá para aprobar una licencia sin sueldo por motivo de estudios, tal y como lo declaró la Nota N° CJ-48-95 de 18 de enero de 1995 de la Consultoría Jurídica de la Universidad de Panamá. El hecho de que la tramitación de mi licencia se extendiera por más de seis meses en los distintos despachos administrativos de la Universidad de Panamá en modo alguno puede tener por consecuencia que le sean aplicables normas aprobadas después de la fecha de solicitud de la licencia, como es el caso de las Políticas aprobadas el 23 de junio de 1995."

El Vicerrector de Investigación y Postgrado, al rendir su informe, lo hizo, de manera sintetizada, de la siguiente forma:

"En mi calidad de Vicerrector de Investigación y Postgrado y miembro del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, me corresponde como Presidente de la Comisión Permanente de Licencias, Becas y Sabáticas de ese Consejo, presentar al Presidente del Consejo Académico informes periódicos sobre las actividades de la Comisión; sin embargo, debido a que el 4 de agosto de 1995 la Licenciada Jazmina I. Rovi Sánchez representante legal del demandante interpuso ante el Señor Rector de la Universidad de Panamá, Presidente del Consejo Académico, Dr. Gustavo García de Paredes, recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la Nota N° VIP-638-95 de 23 de junio de 1995, recurso este último que resolvió el Consejo Académico en su reunión N° 39-95, aprobando el Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, que implica confirmación de la decisión recurrida, la que por tratarse de decisión en grado de apelación no procede recurso de reconsideración en su contra, es potestad del Consejo Académico de la Universidad de Panamá y no de mi persona `declarar nulas por ilegales, la Notas N° VIP-638-95 de 23 de junio de 1995 y N° VIP-805-95 de 24 de julio de 1995 subscritas por el Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá, y el Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas aprobado por el Consejo Académico en su reunión N° 39-95 del día 30 de agosto de 1995 y notificada al subscrito por medio de la Nota N° 1189/95-SGP de 4 de septiembre de 1995 de la Secretaría General de la Universidad de Panamá."

La Procuradora de la Administración al contestar la demanda, y en referencia a los cargos de ilegalidad contra el acto impugnado, lo hizo así:

"La demanda contencioso administrativa que nos ocupa, se dirige en primer lugar contra la Nota VIP-638-95 de 23 de junio de 1995, suscrita por el Vicerrector de la Universidad de Panamá, en la cual se expresa que el Profesor Vasco Torres De León, docente de la

UNACHI (Universidad Nacional, Sede de Chiriquí), presentó documentación a la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, sin embargo, se observa `que según el Artículo 2 d), del Reglamento, el término de las Licencias Sin Sueldo por estudios, no deberá exceder al término del Contrato del docente. Al no haber Contrato vigente, no procede la Licencia' (ver folios 3).

Igualmente se acusa la Nota N° VIP-805-95 de 24 de julio de 1995, en la cual la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, señala como cónsono a la situación del Profesor Vasco Torres De León, el Punto N° 8 del Documento de Políticas de Licencias, Becas y Sabáticas, aprobado por el Consejo Académico en su reunión N° 26-95, de fecha 14 de junio de 1995 -demandado como violado- (ver folios 4 a 6).

Como última actuación administrativa impugnada, el demandante señala el Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, aprobado en su reunión N° 39-95, del día 30 de agosto de 1995, en el cual se `recomienda al Consejo Académico no acoger favorablemente el recurso de reconsideración con apelación en subsidio presentado por la señora Jasmina I. Rovi Sánchez, representante del señor Vasco Torres De León en el sentido de que se le apruebe licencia no remunerada para realizar estudios ...' (ver folios 7 a 10).

Como se observa, la demanda se origina al producirse la negación de la solicitud de una licencia no remunerada al Profesor Vasco Torres De León, por parte de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, presentada por éste, ante el Director del Centro Regional Universitario de Chiriquí, el 16 de diciembre de 1994.

La evaluación de la pretensión formulada por el Profesor Vasco Torres De León, nos conduce a considerar un aspecto fundamental en la negación de la licencia por él solicitada, constituido por el Documento de Políticas sobre Licencias, Becas Sabáticas, aprobado por el Consejo Académico en su reunión N° 26-95, verificada el 14 de junio de 1995. En el cual se determinó en su Punto N° 8, que:

`Las licencias por estudios en la Universidad de Panamá ya sean remuneradas o no requerirán del cumplimiento del Artículo 4, acápite b y c, del Reglamento de Licencias, Becas y Sabáticas.

En atención a la norma arriba transcrita, quienes pretendan disfrutar de licencia por estudios, ya sea remunerada o no, tendrán en primer término que `Haber prestado dos años de servicios continuos como docente o investigador de la Universidad , de acuerdo a lo ordenado por el acápite b), del Artículo 4 del Reglamento de Licencias, Becas y Sabáticas, y por otro lado, `Haber sido aceptado por la Universidad o Institución donde va a realizar los estudios , conforme lo dispone el acápite c), del mismo Reglamento.

Al disponer el Punto N° 8 del Documento de Políticas sobre Licencias, Becas y Sabáticas, en forma general para las licencias por estudios, sea ésta con disfrute o no del salario, el cumplimiento de las exigencias contenidas en los acápites a) y c), del artículo 4 del Reglamento de Licencias, Becas y Sabáticas; excluye la posibilidad -como lo pretende el demandante-, de que las peticiones de dichas licencias sin sueldo puedan ser aprobadas a los docentes que no cuenten con el mínimo de dos (2) años de servicios en la Universidad de Panamá.

En efecto, el demandante carece del término señalado de dos (2) años ininterrumpidos de docencia, pues que él ingresó como Profesor Eventual de Tiempo Completo al Centro Regional Universitario de Chiriquí el día 28 de abril de 1995 (ver folios 36) y mantuvo esa condición hasta el 21 de enero de 1995, cuando le fue concedida Li-

cencia Sin Sueldo por un período de 8 meses, para realizar estudios de Doctorado, en el extranjero. (Ver folios 1 y 2).

A pesar de cumplir con la aceptación de la Universidad de Oviedo, España, para realizar estudios doctorales (finalizarlos), el demandante no cumple con la exigencia del período mínimo de docencia continua, y por ello, no es viable la aportación de la licencia que él solicita.

Es preciso advertir, que no obstante la presentación el día 16 de diciembre de 1994, por parte del Profesor Vasco Torres De León, de su solicitud de licencia sin sueldo por motivos de estudio, el Consejo Académico -ente encargado de conceder las licencias académicas a los docentes-, debe sujetarse a las normas y procedimientos que para tales efectos de encuentren vigentes en la Universidad de Panamá. De allí que, estimamos que no se ha producido la aplicación retroactiva del Punto N° 8 del Documento sobre Licencias, Becas y Sabáticas -como se afirma en la demanda-, puesto que al momento de decidir la solicitud del Profesor Torres De León, ya el mencionado Documento se encontraba vigente, al haber sido aprobado por el Consejo Académico, el 14 de junio de 1995, en su reunión N° 26-95.

Por las anteriores razones, solicitamos a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que declare legales las Notas N° VIP-638-95 de 23 de junio de 1995, dictada por el Vicerrector de la Universidad de Panamá, la N° VIP-805-95 de 24 de julio de 1995, dictada por el Vicerrector de la Universidad de Panamá y el Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, aprobado por el Consejo Académico en su reunión N° 39 de 30 de agosto de 1995."

MOTIVACIONES DE LA CORTE

Expuestos todos los argumentos de los interesados, pasa la Sala a desatar la controversia legal.

El presente caso tiene su origen cuando el profesor universitario Vasco Torres De León, de servicio en el Centro Regional Universitario (C R U) de Chiriquí, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, quien había sido contratado a partir del 28 de abril de 1994 hasta el 21 de enero de 1995, como profesor especial a tiempo completo, solicitó el 16 de diciembre de 1994 una licencia sin sueldo por motivos de estudios a partir del 21 de enero de 1995 hasta el 22 de septiembre de 1996, para terminar estudios de doctorado en Derecho en la Universidad de Oviedo, España, iniciados en 1990.

Esta solicitud de licencia sin sueldo por estudios fue aprobada el 13 de enero de 1995, por la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas del Centro Regional Universitario de Chiriquí, mediante Resolución N° 1-95, a partir del 22 de enero de 1995, por un período de ocho (8) meses.

El 17 de febrero de 1995, el Centro Regional Universitario de Chiriquí, remitió la solicitud de licencia aprobada a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, de la Universidad de Panamá, la que mediante nota 638-95, de 23 de junio de 1995, respondió observando que "según el artículo 2 d) del Reglamento, el término de las licencias sin sueldo por estudios, no deberá exceder el término del contrato del docente. Al no haber contrato vigente, no procede la licencia."

Consta en el expediente a fojas 36 el acta de toma de posesión del profesor **VASCO TORRES DE LEÓN**, en que claramente se expresa que su cargo es **eventual**, que terminará el día 21 de enero de 1995, por tanto, es claro que su contrato había dejado de tener vigencia al momento en que se debía iniciar la licencia por estudio y no es posible que una persona que ha dejado de ser parte del personal docente universitario se le otorgue una licencia de un cargo inexistente al momento de empezar la supuesta licencia.

Por lo expuesto, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte

Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES las Notas VIP-638-95 de 23 de junio de 1995 expedida por el Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá así como las Notas VIP-805-95 de 24 de julio de 1995, de la misma autoridad referida y el informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas aprobado por el Consejo Académico en su reunión N° 39-95 de 30 de agosto de 1995 y por tanto SE NIEGAN las declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. JAIME J. JOVANÉ, EN REPRESENTACIÓN DE MARVIODAL, S. A. Y LUJÁN, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 201-589 DE 25 DE MARZO DE 1994, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **JAIME J. JOVANÉ,** en representación de **LUIS ALBERTO NUQUES MACHADO** y las sociedades anónimas **MARVIODAL, S. A., LUNILDA, S. A., y LUJÁN, S. A.**, ha interpuesto solicitud de Aclaración de Sentencia de 13 de noviembre de 1996, que resuelve la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción que interpusiera en representación de **LUIS ALBERTO NUQUES MACHADO** y las sociedades anónimas **MARVIODAL, S. A., LUNILDA, S. A., y LUJÁN, S. A.**, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 201-589 de 25 de marzo de 1994, proferida por el Director General de Ingresos del Ministerio Hacienda y Tesoro, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

La demanda que nos ocupa culminó en una sentencia en cuya parte resolutiva se establece lo siguiente:

> "En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **DECLARA QUE NO ES ILEGAL** la Resolución N° 201-589 de 25 de marzo de 1994, proferida por el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro".

El apoderado judicial de **LUIS ALBERTO NUQUES MACHADO** y las sociedades anónimas **MARVIODAL, S. A., LUNILDA, S. A., y LUJÁN, S. A.**, solicita la aclaración de la parte motiva de la sentencia anteriormente citada.

De los planteamientos esgrimidos por el recurrente en su solicitud de aclaración de la Sentencia de 13 de noviembre de 1996, se observa que los mismos están dirigidos o obtener por parte de este Tribunal, nuevos pronunciamientos acerca de las consideraciones y motivaciones que dieron lugar a la decisión antes citada, como se expone a continuación:

> "A juicio de la Sala, la norma no es aplicable irretroactivamente, sin embargo estimamos prudente transcribir lo dispuesto en el artículo 12 de la citada ley, que dispone:
>
> `Artículo 12 (Transitorio). Concédase un crédito fiscal a los productores de banano radicados en la provincia de Bocas del Toro que sufrieron daños por razón del movimiento telúrico ocurrido el 22

> de abril de 1991 y que procedan a la rehabilitación de las fincas afectadas según la clasificación siguiente:
> ...
> Como vemos pues, en la ley se contempló la aplicación retroactiva, a los efectos del terremoto de 22 de abril de 1991, lo dispuesto en la Ley N° 16 de 18 de junio de 1993, `Por la cual se conceden incentivos a la producción del banano en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones , publicada en la Gaceta Oficial N° 22.312 de martes 22 de junio de 1993. Por todo lo expresado, respetuosamente solicitamos a la Sala la aclaración de este punto oscuro trascendental y definitivo en la sentencia que ha resuelto la pretensión contenida en nuestra demanda."

Pese a que la solicitud de aclaración de sentencia es una vía que la ley abre para el caso de que se produzca una resolución judicial que contenga puntos oscuros en su parte resolutiva, a tenor de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 33 de 1946, en concordancia con el artículo 986 del Código Judicial, que señala que la aclaración de sentencia es procedente en cuanto a esclarecer puntos oscuros, frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, pero no puede recaer sobre el asunto principal del negocio, que es lo que en realidad pretende el demandante, este Tribunal estima prudente indicarle lo siguiente:

De conformidad con lo expuesto por el recurrente, el citado artículo 12 de la Ley N° 16 de 18 de junio de 1993, es la norma especial de aplicación retroactiva a sus pretensiones, (concesión de un crédito fiscal por razón del movimiento telúrico ocurrido el 22 de abril de 1991), tal como se desprende del contenido y del carácter transitorio de la misma, no así el artículo 4 de la referida Ley, que fue la disposición alegada como infringida por la Resolución N° 201-589 de 25 de marzo de 1994, acto acusado. Cabe recordar, que en las acciones Contencioso Administrativas, la Sala Tercera sólo puede examinar el acto impugnado a la luz de las disposiciones legales invocadas en las demandas, a diferencia de los procesos de inconstitucionalidad, en que el Pleno de la Corte no se limita a estudiar la disposición tachada de inconstitucionalidad, únicamente a la luz de los textos citados en la demanda, sino que debe examinarla, confrontándola con todos los preceptos de la Constitución.

Aunado a lo anterior, la solicitud de crédito fiscal presentada ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, no cumplió con los presupuestos legales requeridos para tales efectos, a fin de probar que los daños sufridos en **FINCA ENILDA** fueron consecuencia directa del terremoto, y que la resiembra se efectuó en el área afectada.

En otras palabras, que no consta en el expediente que los demandantes al momento de efectuar su solicitud de crédito fiscal, aportaron la correspondiente certificación o el informe de inspección y determinación de los daños sufridos, expedido por la Dirección Nacional del Banano en consulta con la Comisión Nacional del Banano a fin de acreditar que las catorce hectáreas afectadas de la **FINCA ENILDA**, fueron consecuencia directa del movimiento telúrico ocurrido el 22 de abril de 1991, y de que se efectuaran las resiembras en esas catorce hectáreas.

En consecuencia, la Sala Tercera Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO POR IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de sentencia interpuesta por el licenciado JAIME J. JOVANÉ, en representación de LUIS ALBERTO NUQUES MACHADO y las sociedades anónimas MARVIODAL, S. A., LUNILDA, S. A., y LUJÁN, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ C., EN REPRESENTACIÓN DE EUSEBIO YEPES M. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S/N DE 13 DE AGOSTO DE 1996, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS MELCHOR LASSO DE LA VEGA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Víctor Manuel Martínez C.**, en representación de **EUSEBIO YEPES M.**, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución S/n de 13 de agosto de 1996, expedida por la Directora de la Escuela Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si reúne los requisitos mínimos para su admisión.

Observa el suscrito, que la acción propuesta, concretizada en la demanda de plena jurisdicción, está prescrita, no ha sido incoada en tiempo oportuno, es decir, la misma es extemporánea.

El artículo 42 b) de la Ley 135 de 1943, reformado por el artículo 27 de la Ley 33 de 1946, en lo que respecta a la prescripción de la acción de plena jurisdicción, preceptúa lo siguiente:

> "La acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de dos meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda".

Efectivamente el acto acusado de ilegal en este proceso es la Resolución S/n de 13 de agosto de 1996, expedida por la Directora de la Escuela Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega, la cual fue confirmada mediante Resolución 12 de 2 de septiembre de 1996. El afectado tenía dos meses a partir de la fecha de notificación del acto confirmatorio para interponer la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción ante este Tribunal, es decir, que si la notificación se realizó el día 11 de septiembre de 1996, tal como consta a folio 6 del expediente, la demanda debió ser presentada el día 12 de noviembre (dado que el 11 es feriado) y no el día 13 de noviembre como consta a folio 16 del expediente.

Además el actor ha incumplido el último numeral del artículo 43 de la ley 135 de 1943 referente a la expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación. En este negocio el recurrente no especifica a cuál de los motivos de ilegalidad se ajusta el acto administrativo, de conformidad con el artículo 16 de la ley 33 de 1946, ya sea la infracción literal de los preceptos legales, (violación directa, por comisión; violación directa por omisión o falta de aplicación; interpretación errónea, indebida aplicación de la ley), la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o de la entidad que dictó el acto administrativo, el quebrantamiento de las formalidades legales o la desviación de poder.

Así, la Sala Tercera ha sido categórica y reiterativa, señalando que la ausencia de tal descripción produce la desestimación del cargo de ilegalidad formulado, al verse imposibilitada para apreciar los motivos que ocasionan la infracción.

Aunado a lo anterior se observa que el actor estima conculcados preceptos

de rango constitucional, los cuales son de competencia ventilar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, en el renglón referente a la parte demandada, no menciona la forma y el concepto en que debe intervenir la Procuradora de la Administración, quien actúa en defensa del acto impugnado.

En consecuencia el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda presentada por el licenciado Víctor Manuel Martínez C., en representación de EUSEBIO YEPES M.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ MARÍA LEZCANO, EN REPRESENTACIÓN DE OLGA MARÍA SANTOS DE EVANS, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° 2220/762/96 DE 14 DE JUNIO DE 1996, EXPEDIDA POR EL VICE-MINISTRO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José María Lezcano, actuando en nombre y representación de OLGA MARÍA SANTOS DE EVANS, ha promovido demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota N° 2220/762/96 de 14 de junio de 1996, dictada por el Vice-Ministro de Vivienda, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

A juicio de la Magistrada Sustanciadora, esta demanda no debe admitirse porque cuando fue presentada había precluido el término de dos meses que la ley establece para su presentación, tal como lo dispone el artículo 27 de la Ley 33 de 1946, que textualmente dice, en lo pertinente:

> "La acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de dos meses a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda."

Lo anterior es así, porque el demandante se notificó personalmente el 17 de junio de 1996, de la Resolución N° 2220/762/96 de 14 de junio de 1996, mediante la cual el Vice-Ministro de Vivienda informa a la señora OLGA MARÍA DE EVANS "que a partir del 17 de junio del presente año, se dan por terminadas sus relaciones laborales con este Ministerio, se fundamenta este hecho en el artículo 88, acápite 10, 11, 12, 14, 16, 17 del Reglamento Interno ..." (foja 1).

Posteriormente, la demandante interpuso recurso de reconsideración el 19 de junio de 1996 ante el Vice-Ministro de Vivienda. Este recurso fue resuelto por el Ministro de Vivienda mediante Resolución N° 87-96 de 4 de octubre de 1996, señalando que contra las decisiones asumidas por el Ministro o Vice-Ministro de Vivienda sólo procede el recurso de reconsideración y no el de apelación por ser "única instancia", y advirtió al denunciante que la vía gubernativa estaba agotada, a lo cual interpuso demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción ante la Sala el 13 de diciembre de 1996, es decir, después de precluido el término de dos meses que la ley de lo Contencioso-Administrativo otorga para interponer la acción.

Como la prescripción extingue la acción, la Sala no puede pronunciarse sobre la pretensión.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de lo Contencioso-Administrativo, en Sala Unitaria, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción presentada por el licenciado José María Lezcano, en representación de OLGA MARÍA SANTOS DE EVANS, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota N° 2220/762/96 de 14 de junio de 1996, expedida por el Vice-Ministro de Vivienda, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ROSCAM, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 35-95 F. C. DE 13 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 1 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante escrito fechado el 29 de noviembre de 1996, la firma Galindo, Arias & López, en condición de apoderados de ROSCAM, S. A., ha desistido de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción promovida el 18 de junio de 1996, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 35-95 F. C. de 13 de diciembre de 1995, emitida por la Comisión de Vivienda N° 1 del Ministerio de Vivienda, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Del escrito de desistimiento se corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración, por el término de tres días, quien no se opuso al mismo.

A juicio de la Sala, el desistimiento presentado por el demandante es procedente de conformidad con lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 1081 del Código Judicial, y por tanto, debe acogerse.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACOGE EL DESISTIMIENTO de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, promovida por la firma Galindo, Arias & López, actuando en nombre y representación de ROSCAM, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 35-95 F. C. de 13 de diciembre de 1995, emitida por la Comisión de Vivienda N° 1 del Ministerio de Vivienda.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ELOY ALFARO (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS, EN REPRESENTACIÓN DE RIGOBERTO ANTONIO SOSA, PARA QUE

SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 96-1592 DE 17 DE ABRIL DE 1996, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo Ríos, actuando en nombre y representación de RIGOBERTO ANTONIO SOSA, promovió recurso de apelación contra el auto de 7 de noviembre de 1996, mediante el cual el Magistrado Sustanciador no admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 96-1592 de 17 de abril de 1996.

Una vez anunciada la impugnación, el Sustanciador mediante providencia de 18 de noviembre de 1996, concedió el recurso de apelación, y por providencia de 27 de noviembre de 1996, se otorgó un término de 3 días para que el apelante sustentara su recurso y 3 días adicionales para las objeciones de rigor.

Vencidos los términos señalados, según el informe secretarial de 17 de diciembre de 1996, el apelante no sustentó la alzada, por lo que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1122 del Código Judicial, debe declararse desierto el recurso de apelación promovido.

Por las anteriores consideraciones, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN DESIERTO el recurso de apelación promovido por el licenciado Eduardo Ríos, en representación de RIGOBERTO ANTONIO SOSA, contra el auto de 7 de noviembre de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ELOY ALFARO

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR MANUEL E. BERMÚDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE CONFECCIONES INTERNACIONALES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 12-96-JD DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 1996, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Manuel E. Bermúdez, actuando en nombre y representación de Confecciones Internacionales, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 12-96-JD de 10 de septiembre de 1996, expedida por la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

En la parte final de su libelo, el doctor Manuel E. Bermúdez solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado. Sin embargo, por razones de economía procesal, la Sala debe examinar si la demanda cumple con los requisitos legales para ser admitida.

Al resolver la admisibilidad de la demanda, el Magistrado Sustanciador considera que la misma no debe admitirse, ya que la parte actora dirige equivocadamente su acción contra la Resolución N° 12-96-JD de 10 de septiembre 1995, pues, la misma confirma la Resolución N° GG-28-96 de 17 de julio de 1996

(f. 1-6) expedida por el Gerente General del Banco Nacional de Panamá, por medio de la cual se adjudicó en forma definitiva el contrato para el suministro de uniformes al personal femenino de la Institución, a la empresa Confecciones Moal, S. A. Al respecto, el artículo 29 de la Ley 33 de 1946 dispone que no solamente no es necesario dirigir la demanda contra los actos confirmatorios, sino que es un requisito sine qua non para la admisibilidad de la demanda dirigirla contra el acto administrativo original, que a juicio de la parte actora, es ilegal.

Por otro lado, observa el Magistrado Sustanciador que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, debido a que la copia del acto acusado, no se encuentra debidamente autenticada, ni tampoco hay constancia en la misma de que se formuló la petición a la cual se refiere el artículo 46 de la mencionada Ley. La autenticación del acto impugnado es un requisito de importancia exigido por la ley. Todo acto impugnado requiere su autenticación en vías de verificar la notificación o ejecución del mismo, y por ende, el agotamiento de la vía gubernativa.

Como el demandado omitió el requisito mencionado, su demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del mismo cuerpo legal.

De consiguiente, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el doctor Manuel E. Bermúdez, en nombre y representación de Confecciones Internacionales, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 12-96-JD de 10 de septiembre de 1996, expedida por la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE PROMED INTERNATIONAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1081-96-D. G. DE 10 DE JULIO DE 1996, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Galindo, Arias & López, actuando en nombre y representación de **PROMED INTERNATIONAL, S. A.**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 1081-96-D. G. de 10 de julio de 1996, expedida por el Director de la Caja de Seguro Social.

Con el libelo de la demanda, la parte actora solicitó la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, alegando que de no suspenderse, los usuarios del Hospital de Puerto Armuelles adquirirán un equipo que no se ajusta al pliego de cargos preparado para la licitación pública N° 28-94, por lo que se han violado normas esenciales relativas a la contratación pública.

Antes de resolver la medida cautelar solicitada, los Magistrados de la Sala consideran necesario dictar auto para mejor proveer de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley 135 de 1943, y los artículos 782 y 880 del Código Judicial, con el fin de solicitar a la Dirección General de la Caja de Seguro Social, el expediente que contiene el Acto de Licitación Pública N° 28-94 de 17

de mayo de 1995, aducido por la parte actora como prueba en la demanda interpuesta, a fin de verificar las afirmaciones en torno al pliego de cargos y las especificaciones cumplidas o no cumplidas por la empresa Tecnología Médica de Avance, S. A., a quien se el adjudicó definitivamente la licitación pública mencionada mediante el acto impugnado en esta demanda.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaria se requiera al Director General de la Caja de Seguro Social, que en el término de cinco (5) días nos remita el expediente de la Licitación Pública N° 28-94 de 17 de mayo de 1995, la cual se adjudicó definitivamente a la empresa Tecnología Médica de Avance, S. A., mediante la Resolución N° 1081-96-D. G. de 10 de julio de 1996, impugnada en esta demanda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ISTHMIAN CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Galindo, Arias y López, en nombre y representación de ISTHMIAN INVESTMENT CORPORATION, ha interpuesto demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, emitida por el señor Contralor General de la República, por la cual se ordena: 1) Que el Director General del Registro Público se abstenga de inscribir cualquier acto, medida o resolución que enajere, traspase o segregue, entre otras, la finca número 490, inscrita al tomo 12, folio 170 de la Provincia de Panamá, propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano; 2) Que la Dirección General de Ingeniería de la Contraloría General de la República efectúe una diligencia pericial sobre cada una de las fincas mencionadas en el punto anterior y que pertenecen a los terrenos de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, determinando sus medidas, linderos, superficie, ubicación y valor por hectárea; y 3) Que la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General, elabore un Informe de Auditoría que investigue lo relacionado con la enajenación de los terrenos y fincas de la Corporación del Bayano para precisar si se ha cometido actos que lesionen el patrimonio público.

La parte actora solicitó también la nulidad, por ilegal, de la Nota N° 163-DC-1-F-28 de 26 de mayo de 1994, por la cual el funcionario demandado dio orden al Director General del Registro Público de abstenerse de inscribir cualquier acto, medida o resolución que enajene, traspase o segregue, entre otras, la mencionada finca 490, inscrita al tomo 12, folio 170; y que se le ordene al señor Contralor General de la República, que levante la medida cautelar que impide la inscripción de la Escritura N° 3,134 en el Registro Público, "Por la cual EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, de la finca N° 490 de la Provincia de Panamá, segrega 5 globos de terreno para que formen finca nueva cada uno de ellos en el Registro Público, y vende estas nuevas fincas a ISTHMIAN INVESTMENT CORPORATION" (fs. 81 y ss.), otorgada ante Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá el 28 de abril de 1994 y sea ordenada su inscripción al Director General del Registro Público.

Al ser admitida la demanda se solicitó el informe explicativo de conducta al funcionario demandado (fs. 151-157); y además, se corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante Vista N° 14 de 5 de enero de 1996, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones formuladas por el demandante, por carecer de sustento jurídico (fs. 158-167).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 3, 23, 25 y 26 del Código Fiscal, cuyo texto transcribimos a continuación:

CÓDIGO FISCAL

"**Artículo 3**. Son bienes nacionales, además de los que pertenecen al Estado y de los de uso público, según lo enumera la Constitución en sus artículos 208 y 209, todos los existentes en el territorio de la República que no pertenezcan a los Municipios, a las entidades autónomas o semi-autónomas ni sean individual o colectivamente de propiedad particular.

Artículo 23. El Órgano Ejecutivo podrá vender, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, los bienes muebles o inmuebles que, a su juicio, no requiere para el uso o servicio público. Salvo excepciones establecidas en la Ley, toda venta de bienes del Estado deberá estar precedida de Licitación Pública, Concurso de Precios o Solicitud de Precios, según el valor real del bien que será determinado mediante avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda y Tesoro y la Contraloría General de la República. Cuando el valor real de los bienes no exceda la suma de CIENTO CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.150,000.00), de acuerdo con el avalúo de que hable este artículo, el Ministerio de Hacienda y Tesoro hará la venta, informando de inmediato al Presidente de la República.

La venta de los bienes cuyo valor excede de CIENTO CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.150,000.00) deberá estar precedida de autorización del Consejo de Gabinete.

Los bienes de dominio público son indisponibles, salvo que sean previamente desafectados en la forma que determine la Ley.

Artículo 25. En los casos de venta o arrendamiento de bienes nacionales se evaluará el bien o se determinará el canon básico del arrendamiento para la licitación por medio de peritos, conforme a las reglas que señala el artículo 17 de este Código.

Artículo 26. Cuando cualquier dependencia del Gobierno estime que algunos de los bienes muebles que tengan en su poder no sean necesario para el servicio oficial o cuando se encuentren deteriorados, pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio de Hacienda y Tesoro para que dicho Ministerio, cuando sea el caso y por conducto del Órgano Ejecutivo autorice la venta de tales bienes de acuerdo con las formalidades legales.

Si la venta no pudiere efectuarse, el Órgano Ejecutivo podrá aprovechar tales bienes aplicarlos a programas de beneficencia y asistencia social, o donarlos a instituciones oficiales y, si ello no fuera factible, ordenará su destrucción."

Al exponer el concepto de la infracción de las normas anteriormente citadas, el demandante alega que el acto impugnado es violatorio de dichas normas, por aplicación indebida, porque las fincas, propiedad de la Corporación, son bienes inmuebles que por pertenecer a esta entidad autónoma, están excluidos taxativamente de la calificación de bienes nacionales que contempla el artículo 3 del Código Fiscal, por lo que tanto el artículo 23 que explica el procedimiento para disponer de los bienes muebles o inmuebles del Estado que no requiera para uso o servicio público; el artículo 25 del Código Fiscal que trata de la venta

y arrendamiento de bienes nacionales y el artículo 26 del Código Fiscal que trata sobre el procedimiento que para la venta de bienes muebles debe seguir cualquier dependencia del Estado, son presupuestos no aplicables al caso en particular de las fincas de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano.

Por otro lado, el demandante señala que el acto impugnado viola los artículos 1 y 12 de la Ley 93 de 22 de diciembre 1976, Orgánica de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, que en su tenor literal establece lo siguiente:

LEY 93 DE 22 DE DICIEMBRE 1976

> **"Artículo 1°** Créase la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, la cual tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa en su régimen interno, sujeto a la política económica del Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. La Contraloría General de la República ejercerá las funciones de fiscalización y control que la Constitución y las leyes establezcan."
>
> **Artículo 12.** La Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano está facultada para ejercer derechos y contraer obligaciones en general y en especial para comprar, vender, hipotecar, permutar, arrendar bienes muebles e inmuebles contratar personal especializado, construir obras, desarrollar programas de infraestructura, establecer empresas de todo tipo y ejecutar sus programas de acuerdo con la política que establezca en su Junta Directiva."

En cuanto al artículo 1° de la citada ley, el recurrente aduce que ha sido violado en forma directa por falta de aplicación, ya que en su lugar se aplicaron las normas fiscales que hacen referencia a la venta o disposición de los bienes nacionales, sin tomar en consideración que la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, como entidad autónoma, cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa en cuanto a su régimen interno.

Con relación al cargo de violación del artículo 12 de la misma Ley, manifiesta el recurrente que ha sido violado por omisión, porque la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano en uso de las facultades que le atribuye la norma en mención, cumplió con el requisito de autorización por parte de la Junta Directiva, para la segregación y venta de los bienes inmuebles que están bajo su propiedad, dándoles el destino más conveniente para el desarrollo económico y social del área. Sin embargo, la Contraloría General de la República objetó mediante el acto impugnado, la venta de estas fincas alegando que al tratarse de bienes nacionales, la transacción de las mismas debía ceñirse al procedimiento fiscal propio de esos bienes.

Indica también el demandante que, el acto impugnado es violatorio del artículo 29 de la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República, el cual establece lo siguiente:

> **"Artículo 29.** Cuando la Contraloría descubra irregularidades graves en el manejo de los bienes y fondos públicos que, a su juicio, ameriten la suspensión del agente o empleado de manejo, así lo solicitará a quien corresponda y así deberá ordenarse por el período que resulte necesario. En este caso la Contraloría deberá exponer las razones en que fundamente su petición.
>
> Cuando las circunstancias lo ameriten, la Contraloría podrá suspender el pago del salario, remuneraciones o asignaciones de cualquier clase que el Estado o cualquier entidad pública deba hacer a favor del agente o empleado de manejo o de otro funcionario o personas que se encuentre involucrada en las irregularidades descubiertas y adoptará cualquier otra medida precautoria sobre bienes o fondos de tales personas o funcionarios, a fin de proteger los intereses públicos.

> Cuando sea el caso, la Contraloría General dispondrá lo pertinente para que se inicie el correspondiente juicio de cuentas y para que se abra la investigación sumarial de rigor".

La parte actora aduce que la norma impugnada viola en forma directa por comisión la norma citada, porque la Contraloría se excedió en sus facultades. Lo anterior es así, porque en el momento en que la Contraloría adoptó como acción precautoria la Resolución 33-94 de 18 de mayo de 1994, (la cual prohíbe la inscripción en el Registro Público de las escrituras públicas de segregación y venta de una serie de fincas, entre ellas la Finca N° 490, todas de propiedad de la Corporación del Bayano) no existía una investigación previa elaborada por la Contraloría con evidencias del caso, que justificaran la medida tomada.

El recurrente señaló que el alcance y sentido del artículo 29 fue expuesto por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia de 30 de noviembre de 1994, y transcrita en la Sentencia de 6 de julio de 1995, en la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por Zacata Agroganadera Chepana, S. A. y Hernán Delgado, contra la misma Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994.

Alega el demandante también, que los actos impugnados, particularmente la Resolución N° 234-95 de 25 de agosto de 1995, por la cual la Contraloría General de la República rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad ISTHMIAN INVESTMENT CORPORATION, contra la Resolución 33-94 de 18 de mayo de 1994, viola el artículo 3 del Código Civil, que en su tenor literal preceptúa que:

> "Las leyes no tendrán efectos retroactivos en perjuicio de derechos adquiridos".

Considera el demandante, que lo anterior es así, porque la Resolución N° 678 de 29 de diciembre de 1994 fue dictada por el Consejo de Gabinete, meses después de que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario e ISTHMIAN INVESTMENT CORPORATION, hubiesen suscrito y presentado ante el Registro Público la Escritura 3,134 de 28 de abril de 1994, que contenía la segregación y contrato de compraventa celebrados al amparo de lo dispuesto en la Resolución N° 768 de 22 de diciembre de 1993 y N° 96 de 9 de febrero de 1994. Lo que la Contraloría General de la República pretende es que la segregación y compra que contiene dicha Escritura se ajuste a lo dispuesto en la resolución posteriormente dictada, es decir, la Resolución N° 678 de 29 de diciembre de 1994, por la cual se modificaron las Resoluciones de Gabinete N° 768 de 22 de diciembre de 1993 y N° 96 de 9 de febrero de 1994, que autorizaban al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a la distribución de las tierras de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, que en su parte resolutiva y en lo referente a la venta de fincas a expropietarios, resolvió en su artículo tercero que el precio de venta de las tierras propiedad de la Corporación se establecería de acuerdo al avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda y Tesoro y la Contraloría General de la República de acuerdo a las disposiciones del Código Fiscal. Por lo que de aplicar lo dispuesto en la citada Resolución de Gabinete N° 678 de 29 de diciembre de 1994, la Contraloría estaría dándole efectos retroactivos a una norma posterior en perjuicio de derechos adquiridos al amparo de la Resolución N° 768 de 22 de diciembre de 1993, que estaba vigente a la sazón (f. 141).

Finalmente, la demandante señala que los actos impugnados violan en forma directa, por omisión, el artículo 43 de la Constitución Nacional. Al respecto, la Sala observa que se cita como violado un precepto constitucional, cuyo cargo no se puede entrar a conocer, porque ello corresponde al Pleno de esta Corporación de Justicia.

El demandante expresa que los actos impugnados violan el principio de legalidad, tal como lo expresó la Sala Tercera en la Sentencia de 6 de julio de 1995, dentro del proceso que Zacata Agroganadera Chepana, S. A. y Hernán Delgado presentaron contra los mismos actos impugnados en este proceso (Resolución 33-94 de 18 de mayo de 1994 y Nota 163-DC-1-F-28 de 26 de mayo de 1994).

A estos cargos se opuso la señora Procuradora de la administración, expresando que, con relación a los artículos 3, 23, 25 y 26 del Código Fiscal, éstos son aplicables al caso en estudio, porque la Contraloría General de la República, mediante Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, no hace distinción entre bienes nacionales u otra clase de bienes, sino que dispone la cautelación de doce fincas, propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, cuya finalidad es la segregación y venta de estas fincas, de modo tal que se ajusta a los procedimientos establecidos por las normas del Código Fiscal.

La señora Procuradora de la Administración reconoció que los artículos 1° y 12° de la Ley 93 de 1976, otorgan a la Corporación patrimonio propio, autonomía administrativa y facultad para vender sus bienes, no obstante señala que la parte actora al exponer los cargos de violación de las normas en mención, olvidó que ante el vacío legal de la Ley 93 de 1976 (Ley Orgánica de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano), en relación con la venta o disposición en alguna forma de sus bienes, son aplicables supletoriamente las normas del Código Fiscal, de acuerdo con el artículo 7 que señala en lo pertinente lo siguiente:

> "Artículo 7. Las disposiciones de este Código, en las materias no especificadas en el artículo anterior, tendrán el carácter de supletorias para los Municipios, Asociaciones de Municipios y entidades autónomas del Estado, en cuanto sean aplicables."

En cuanto al cargo de violación del artículo 29 de la Ley 32 de 1984 (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República), la señora Procuradora de la Administración estima que el mencionado artículo faculta a la Contraloría para solicitar la suspensión del agente o empleado de manejo, así como para suspender el pago del salario u otros emolumentos que el Estado deba hacerle, e incluso para ordenar cualesquiera otras medidas precautorias sobre sus bienes, si descubre irregularidades de gravedad en el manejo de bienes y fondos públicos que lesionen los intereses del Estado; que debe contarse con suficientes elementos que revelen la afectación de los intereses públicos, pero obviamente como el fin de las medidas precautorias es asegurar que el resultado del proceso de que se trate, no sea ilusorio, su práctica en términos generales tiene lugar al iniciar la investigación, de allí su denominación: "precautoria" (f. 165).

La señora Procuradora de la Administración también se opone al señalamiento que hace el demandante, referente a que la medida cautelar contenida en la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, viola por omisión el principio de no retroactividad consagrado en el artículo 3 del Código Civil, porque considera que éste acto administrativo no está relacionado con la Resolución de Gabinete N° 678 de 29 de diciembre de 1994, dictada con posterioridad por el Consejo de Gabinete. Considera, que lo que en realidad pretende el demandante es asegurar que los efectos de la Resolución N° 678 de 29 de diciembre de 1994, no alcancen el contrato de compraventa, que consta en la Escritura N° 3,134 de 28 de abril de 1994.

Agotados los trámites legales pertinentes, los Magistrados que integran la Sala proceden a resolver la presente controversia, confrontando el acto impugnado con las normas que se estiman infringidas.

Mediante la Resolución de Gabinete N° 768 de 22 de diciembre de 1993, modificada por la Resolución de Gabinete N° 96 de 9 de febrero de 1994, el Consejo de Gabinete expresó en su parte motiva, que debido a que la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano no cumplió a cabalidad con las funciones a ella encomendadas, tales como, estimular la iniciativa privada hacia la realización de programas, planes y actividades que se tradujeran en el mejoramiento económico y social de sus habitantes, su Comité Ejecutivo autorizó al Ministro de Desarrollo Agropecuario para que realizara las gestiones pertinentes ante el Consejo de Gabinete, con la finalidad principal de:

1. Otorgar en propiedad ciertas hectáreas a comunidades o asentamientos humanos que eran moradores de las mismas.

2. Proceder a la venta directa de otras fincas a quienes habían sido propietarios y quienes habían sido expropiados de tales inmuebles; y a quienes

venían arrendándolos y que manifestaban su interés en adquirirlos para la explotación agropecuaria.

3. Vender el resto de las tierras mediante Licitación Pública.

De esta forma, quedó establecido en la Resolución de Gabinete N° 768, adicionada por la N° 96 de 9 de febrero de 1994, un listado de expropietarios y arrendatarios a quienes se les beneficiaría con la excepción de licitación pública y la venta directa de los globos de terreno. En este orden de ideas, Roberto Heurtematte en representación de ISTHMIAN INVESTMENT, compró 1,015 hectáreas pertenecientes a la finca 490, propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, por un valor de B/.375.00 por hectárea, pagando un total de B/.380,625.00 (fs. 79 y 80), a favor del Tesoro Nacional-Cuenta 210 BNP.

Analicemos primeramente los cargos de violación de los artículos 3, 23, 25 y 26 del Código Fiscal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Código Fiscal, los bienes pertenecientes a las entidades autónomas no pueden considerarse bienes nacionales, es decir, que la finca 490 es propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano. Observa la Sala que, como el artículo 1° de la Ley 93 de 1976, Orgánica de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, le da personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa a esta institución, con sujeción a la política económica del Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y que es la Contraloría el ente gubernativo con la facultad de ejercer las funciones de fiscalización y control establecidos en la Constitución y las leyes. Por tanto, la Sala considera que no se han violado los artículos 2, 23, 25 y 26 del Código Fiscal, que regulan la venta o arrendamiento de los bienes muebles o inmuebles del Estado y el procedimiento para su venta.

Tal como consta en autos, la petición del Consejo Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano fue acogida, respaldada y autorizada a través de las Resoluciones de Gabinete N° 768 de 22 de diciembre de 1993 y N° 96 de 9 de febrero de 1994, que establecieron los parámetros para proceder a la venta directa de 5 lotes de terreno de la Finca madre N° 490, entre otras, a ISTHMIAN INVESTMENT CORPORATION.

Según se desprende de las citadas resoluciones de gabinete y de los documentos probatorios aportados por el demandante, la empresa cumplió con las exigencias del artículo noveno de la Resolución de Gabinete N° 768 de 22 de diciembre de 1993, la que excluye de licitación pública, a los expropietarios de las tierras expropiadas por la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, en los siguientes términos:

> "ARTÍCULO NOVENO: Exceptuar del requisito de Licitación Pública al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y autorizar la venta directa de los globos de terreno que se encuentran en las Fincas N° 639, Tomo, 15, Folio N° 28, **Finca N° 490**, **Tomo 12**, **Folio 170**, Finca N° 48,088, Tomo N° 1134, Folio 152, Finca N° 1455, Tomo N° 28, Folio N° 40, Finca N° 1721, Tomo N° 31, Folio N° 440, inscrita en Registro Público, Provincia de Panamá, a las siguientes personas:
> ...
> EXPROPIETARIOS
> Roberto Heurtematte 1,015 has.
> ..."

En la Resolución Ejecutiva N° 27 de 8 de octubre de 1974 (G. O. N° 17.728 de 25 de noviembre de 1974), consta que el Gobierno Nacional negoció con el señor Roberto Heurtematte la adquisición por compra de la Finca N° 490, inscrita al Tomo 12, Folio 170, cuya cabida superficiaria estaba libre de gravámenes y pertenecía en propiedad a la Sociedad denominada ISTHMIAN INVESTMENT CO., representada por Roberto M. Heurtematte (f. 12).

El artículo 12 de la Ley 93 de 1976, dispone que la Corporación está facultada para ejercer derechos, contraer obligaciones, así como para comprar y vender bienes muebles e inmuebles. Esta disposición es aún más clara cuando el artículo 7 de la misma ley señala que corresponde al Comité Ejecutivo de la

Corporación autorizar los gastos y contratos que excedan de cincuenta mil balboas, situación que ocurrió así con la venta de las fincas mencionadas, tal como consta en la parte motiva de la Resolución de Gabinete N° 768 de 29 de diciembre de 1993 (fs. 20 y siguientes).

El artículo 29 de la Ley de la Contraloría dispone que cuando la Contraloría descubre irregularidades en el manejo de los bienes y fondos públicos, está facultada para adoptar cualquier medida precautoria sobre bienes o fondos del Estado, a fin de proteger los intereses públicos. Observa esta Corporación de Justicia, que el funcionario demandado sustenta su actuación de cautelar la Finca N° 490 cuando se encontraba en la etapa final de inscripción en el Registro Público, con fundamento en esta norma.

El papel fiscalizador de la Contraloría General de la República en la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, lo prevé el artículo 1° de la Ley 93 de 1976, en relación al cual la Corte ha señalado que el control fiscal de la Contraloría debe ajustarse a lo previsto en esa norma jurídica especial, y este control se debe ejercer de manera razonable y compatible con el interés público.

En Sentencia de 6 de julio de 1995, en el ya mencionado caso ZACATA AGRO-GANADERA CHEPANA, S. A. Y HERNÁN DELGADO, proceso similar al que se encuentra bajo estudio, se señaló que la privatización de las propiedades de la Corporación no surge de manera improvisada o sin las investigaciones pertinentes; que fueron los estudios, los que revelaron que la privatización de tierras de Alto y Bajo Bayano se debía realizar conforme a lo previsto en la Ley 16 de 1992 que regula la privatización de empresas, bienes y servicios estatales. En el caso de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, su privatización obedeció a la incapacidad de la entidad de hacer frente a los múltiples problemas de arrastre que se presentaban en el área por razón de la invasión de precaristas, al asentamiento de indígenas y colonos que de hecho ocupaban grandes extensiones de tierras, sumado al abandono de terrenos cuya explotación agropecuaria sería fructífera, y a la necesidad de brindar custodia efectiva a tierras sujetas a un interés científico por ser parte de la Cuenca Hidrográfica, actividades de custodia que la Corporación se veía impedida de realizar.

La Resolución N° 33-94 fue dictada el 18 de mayo de 1994 y éste es el acto impugnado en el caso que nos ocupa; que con posterioridad, el 29 de diciembre de 1994 fue dictada la Resolución de Gabinete N° 678 de 29 de diciembre de 1994, publicada en la Gaceta Oficial N° 22.705 de 18 de enero de 1995; que si bien esta resolución de gabinete modifica el precio de venta de las tierras de propiedad de la Corporación, sus efectos, empiezan a partir de su publicación, conforme al artículo 9 de dicha resolución. Por tanto, esta resolución no es aplicable a la venta contenida en la Escritura N° 3,134 de 29 de abril de 1994, cuya inscripción se pide en esta demanda.

No obstante, en el concepto de la infracción del artículo 3 del Código Civil, el demandante señala que es la Resolución N° 678 de 29 de diciembre de 1994 la que viola el artículo 3 por lo que dicho cargo no es contra el acto impugnado, sino contra la Resolución N° 678 mencionada, la cual no es objeto de la demanda, por lo que se desestima este cargo de violación.

Cabe observar, que la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, cautela otras fincas de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, que fueron enajenadas con fundamento en las Resoluciones de Gabinete N° 768 y N° 96, pero el caso que nos ocupa se limita a pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad del acto administrativo acusado, en cuanto a la pretensión de ISTHMIAN INVESTMENT CORPORATION.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE SON NULAS, POR ILEGALES, el punto primero de la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994 y la Nota N° 163-DC-1-F-28 de 26 de mayo de 1994, dictadas por el Contralor General de la República, que ordenó al Director del Registro Público abstenerse de inscribir la Escritura N° 3,134, suscrita por la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO por una parte,

y por la otra ISTHMIAN INVESTMENT CORPORATION, en relación a la segregación y venta de cinco globos de terreno, y ORDENA al Director del Registro Público la inscripción definitiva de los terrenos en las porciones determinadas en la Escritura a favor de ISTHMIAN INVESTMENT CORPORATION.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO NELSON ROVETTO, EN REPRESENTACIÓN DE CARMELO ISAAC GARCÍA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL MEMORÁNDUM N° 237-95D-ADM DE 20 DE FEBRERO DE 1995, SUSCRITO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Nelson Rovetto, actuando en nombre y representación de CARMELO ISAAC GARCÍA, ha promovido demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en el Memorándum N° 237-95D-ADM de 20 de febrero de 1995, suscrito por la Directora Administrativa del Municipio de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar la presente demanda para determinar si cumple con los requisitos para ser admitida se observa que adolece de varios defectos.

En primer lugar, el demandante omitió presentar copia autenticada del acto impugnado con constancia de su notificación, tal como lo exige el artículo 44 de la Ley 135 de 1943.

En segundo lugar, el actor no ha probado que agotó la vía gubernativa en ninguno de los tres presupuestos que preceptúa el artículo 36 de la Ley 135 de 1943 que en su tenor literal señala que:

"Se considerará agotada la vía gubernativa:

1. Cuando interpuestos alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 33 se entienden negados, por haber transcurrido **un plazo de dos meses** sin que recaiga decisión resolutoria sobre ellos;

2. Cuando no se admita al interesado el escrito en que interponga cualquiera de los recursos señalados en el artículo 33.

La circunstancia que contempla este inciso debe ser probada plenamente;

3. Cuando transcurra el **plazo de dos meses** sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semiautónoma siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción Contencioso-administrativa.

Si se comprobare plenamente que no fue admitido el memorial en que se hizo la solicitud de que trata el inciso, anterior, se considerará agotada la vía gubernativa."

Contra el acto impugnado de 20 de febrero de 1995, el demandante interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio el 8 de julio de 1996, el cual fue recibido por insistencia por la Secretaría Judicial del Municipio de Panamá, mientras que la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción fue interpuesta ante esta Sala el 16 de diciembre de 1996, habiendo transcurrido con exceso el término de dos meses para recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (artículo 27 de la Ley 33 de 1946).

Por las razones expuestas, no debe dársele curso a la presente demanda, en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, el suscrito Magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por el licenciado Nelson Rovetto, en representación de CARMELO ISAAC GARCÍA, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en el Memorándum N° 237-95D-ADM de 20 de febrero de 1995, suscrito por la Directora Administrativa del Municipio de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ MENA DE BARRÍA DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE CHIRIQUÍ LAND COMPANY, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 264-92 DE 13 DE OCTUBRE DE 1992, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRAD0 PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. José Mena Barría De León, actuando en representación de CHIRIQUÍ LAND COMPANY, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en la cual solicita que la Sala declare que es nula la Resolución N° 264 de 13 de octubre de 1992, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social.

En la demanda se formula una pretensión consistente en que se declare la nulidad de la Resolución N° 264-92 de 13 de octubre de 1992, en la que se niega el pago del imprevisto laboral sufrido por el asegurado Ricardo Ríos G., en el año de 1976 y se condena a la empresa al pago íntegro de las prestaciones económicas que dé lugar el dicho imprevisto reportado como ocurrido en ese año. Igualmente se solicita que se declare nula la denegación tácita por silencio administrativo de la solicitud de revocatoria de dicha resolución, que fue formulada en recurso de reconsideración con apelación en subsidio el 20 de noviembre de 1992. Finalmente, la parte actora solicita que como consecuencia de las declaraciones anteriores, la sociedad CHIRIQUÍ LAND COMPANY está exenta de responsabilidad por el supuesto riesgo profesional, que la Caja de Seguro Social denominó "imprevisto laboral", por lo que esta última está obligada a asumir la responsabilidad y a pagar la indemnización y demás prestaciones económicas derivadas del riesgo profesional.

ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL DEMANDANTE

La parte actora aduce como violados los artículos 1 y 77 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970, el artículo 301 del Código de Trabajo, los artículo 1°, 8 literal h) y 11 del Reglamento de la Comisión de Prestaciones de

la Caja de Seguro Social y el artículo 12 numeral 2 del Código de Trabajo. El texto de los artículos mencionados en su orden respectivo es el siguiente:

> ARTÍCULO 1: A partir de la vigencia del presente Decreto de Gabinete corresponde a la Caja de Seguro Social la aplicación y gestión del Seguro Obligatorio de Riesgos Profesionales, el cual tendrá financiamiento y contabilidad propios. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social dictará el Reglamento respectivo basándose para tal efecto en las normas de este Decreto de Gabinete y en los estudios técnicos y actuariales pertinentes.
>
> ARTÍCULO 77: El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente Decreto de Gabinete, exonera al patrono de toda otra indemnización según el derecho común, por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por negligencia o por culpa del patrono o de sus representantes, que dieren lugar la indemnización según la legislación común, la Caja de Seguro Social procederá a demandar el pago de esa indemnización la que quedará a su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que la Caja de Seguro acordare por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo si lo hubiere.
>
> La Acción para demandar la idemnización según el derecho común podrá ser interpuesta por la víctima o su causahabientes".
>
> "ARTÍCULO 301: Si el riesgo profesional hubiere sido consecuencia de dolo o culpa atribuible al empleador, que diere lugar a prestación en dinero reclamable ante los tribunales ordinarios, se entenderá que de aquellas deben rebajarse las prestaciones que el empleador haya satisfecho, de acuerdo con este Código."
>
> ARTÍCULO 1: La Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro es el Organismo Interdiciplinario, encargado de resolver, en primera instancia, las solicitudes de prestaciones en dinero y otros beneficios, que expresamente le asigna la Legislación Orgánica de la Caja de Seguro Social y las disposiciones Reglamentarias que la desarrollan."
>
> ARTÍCULO 8: La Comisión de Prestaciones tendrá las funciones siguientes:
>
> h) En el programa de Riesgos Profesionales, conceder o rechazar las pensiones de invalidez permanente o parcial e incapacidad permanente absoluta, lo mismo que las indemnizaciones."
>
> ARTÍCULO 11: La Comisión de Prestaciones apreciará libremente y de acuerdo con los requisitos que establecen la Ley y los Reglamentos, los documentos y pruebas presentados en las solicitudes de las prestaciones y servicios señalados en el artículo 9° de este Reglamento.
>
> PARÁGRAFO: La Comisión podrá solicitar cualquier información adicional cuando así lo creyere conveniente con el fin de calificar debidamente la solicitud de que se trate."
>
> ARTÍCULO 12: La prescripción se regirá por las siguientes reglas:
>
> 2. Las acciones derivadas de un riesgo profesional prescriben en dos (2) años.

Entre los hechos y omisiones en que la parte actora fundamenta su solicitud figura que la CHIRIQUÍ LAND COMPANY, División Puerto Armuelles y Ricardo Ríos Gantes celebraron varios contratos de trabajo por tiempo definido como jornalero en el período comprendido entre el 3 de diciembre de 1975 al 19 de febrero de 1977; desde el 31 de marzo a la fecha, labora como jornalero en forma permanente. Afirma el apoderado judicial de la parte demandante, que desde el inicio de la

relación obrero patronal, se pagó a favor del trabajador las cuotas de seguro social, incluyendo la prima por riesgo profesional. El señor Ríos Gantes presentó reclamo por riesgo profesional sufrido hace 16 años atrás, lo que indica, a juicio del actor, que dicha reclamación no fue presentada oportunamente. A juicio del Lcdo. José Mena Barría De León, la Comisión Médico-Calificadora del Barú de la Caja de Seguro Social, en su sesión de 28 de abril de 1992, determinó con base en elementos de juicio totalmente "inapropiados, insuficientes y no idóneos", como lo fueron declaraciones de cuatro testigos, que el señor Ríos estuvo expuesto y en contacto prolongado con agroquímicos DIPROMO CHLOROPROPANO (FUMAZONE), por lo que probablemente padecía de infertilidad secundaria, no obstante, tuvo que plasmar en el mismo informe, que el trabajador sufrió trauma en el pene y en su testículo izquierdo, por golpe con un tablón en el año de 1979, que a su criterio, pudo ser la causa de la infertilidad. A lo anterior añade que la CHIRIQUÍ LAND COMPANY no recibió traslado alguno por parte de la Caja de Seguro Social de la reclamación formulada por el trabajador Ríos Gantes. En cuanto a la conclusión que llegó la Comisión Médico-Calificadora sobre el padecimiento y causa de la enfermedad profesional del señor Ríos Gantes, estima el Lcdo. José Mena Barría Morán que es contradictoria e incierta, pues, por un lado la evaluación dada por los Servicios del Programa de Salud Ocupacional y Urología de Puerto Armuelles y David de la Caja de Seguro Social dictaminó mediante oficio (P. S.) M. T. #001-92 de 3 de febrero de 1992, suscrito por el Dr. Alberto Carbonó Gómez, que el trabajador padece de "Infertilidad Primaria" y, por el otro lado, la Comisión Médico-Calificadora del Barú señala que dicho trabajador sufre de "Infertilidad Secundaria". Argumenta el apoderado judicial de la parte demandante, que al momento que el trabajador Ríos Gantes solicitó a la Caja de Seguro Social el pago de la indemnización respectiva y demás prestaciones económicas, ésta a través de la Comisión de Prestaciones Económicas le negó tal solicitud y condenó a la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY del imprevisto laboral por considerar que el caso es imputable a ella, sin explicar las razones fácticas o de hecho en las que se basó y sin invocar la norma o normas legales respectivas, sin soslayar el hecho que dicha comisión no tiene competencia para ello, dado que esa decisión compete a los tribunales comunes (civiles).

En cuanto a las disposiciones alegadas como infringidas, opina el actor que los artículos 1 y 77 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970 han sido violados en el concepto de indebida aplicación y de forma directa por omisión respectivamente, dado que la Caja de Seguro Social por un lado, elude la responsabilidad en la prestación de la asistencia económica. No obstante, acepta que hubo un imprevisto laboral y condena a la CHIRIQUÍ LAND COMPANY a hacer los pagos que a ella le corresponde cuando no es competente para ello, pues, debió pagar y luego accionar y probar ante los tribunales ordinarios que Chiriquí Land Company es la culpable o responsable o negligente, por lo que debe resarcirle de esas erogaciones. Igualmente, en cuanto al artículo 301 del Código de Trabajo, que hace referencia al riesgo profesional que es atribuible al empleador, opina la parte actora que fue violado de manera directa por omisión dado que en él se dispone que la responsabilidad será reclamable ante los tribunales ordinarios, por lo que la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social se atribuye una facultad que no le compete.

Los artículos 1° y 8° literal h) del Reglamento de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, opina que también fueron violados en el concepto de indebida aplicación y el artículo 11 del mismo reglamento afirma que fue violado en forma directa por omisión. A su juicio, los artículos 1 y 8 literal h) del reglamento en referencia, fueron violados dado que en ellos sólo se autoriza a la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social a resolver solicitudes relativas a beneficios económicos concedidos por la Legislación Orgánica de la Caja de Seguro Social y las disposiciones reglamentarias que la desarrollan, e igualmente, sólo tiene competencia en lo atinente al programa de riesgos profesionales, para conceder o rechazar las pensiones de invalidez, lo mismo que las indemnizaciones. En cuanto a la violación por omisión del artículo 11 del Reglamento bajo examen, afirma el apoderado judicial de la parte actora que la Comisión de Prestaciones no efectuó una debida valoración de las pruebas presentadas de acuerdo con lo establecido en las leyes y reglamentos pertinentes que incluyen las normas del Código Judicial, limitándose a fundamentar la resolución impugnada sobre la base de una prueba de testigos que nada cierto afirmaron. Finalmente, en relación al artículo 12 numeral 2) del Código de

Trabajo, en el que se prevé que las acciones derivadas de un riesgo profesional prescriben a los 2 años, afirma el actor que fue violado de manera directa por omisión, dado que dicha prescripción debió aplicarse y declararse en la resolución impugnada.

INFORME DE CONDUCTA EXPEDIDO POR DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

El Director General de la Caja de Seguro Social, rindió informe explicativo de conducta mediante nota sin número ni fecha la cual es visible de foja 58 a 61 del expediente y que es del tenor siguiente:

> "Mediante Resolución N° 264-92, fechada el 13 de octubre de 1992, la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, resolvió "Negar el pago del imprevisto laboral, surtido por el asegurado RICARDO RÍOS G., S. S. 111-9697, en el año 1976 y, condenar a la empresa al pago íntegro (sic) de las Prestaciones Económicas que dé a lugar el infortunio laboral reportado como ocurrido en el año de 1976."
>
> La decisión anteriormente referida, contenida en el acto administrativo supracitado se fundamentó en el Artículo ° 277 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970 que es del tenor siguiente:
> ...
> Presentada la reclamación por riesgo o enfermedad profesional, la Comisión de Prestaciones es el organismo competente en instancia administrativa para conocer de estos casos, por lo que habiéndolo evaluado, luego de haber realizado las investigaciones de rigor, arribó a la decisión contenida en la Resolución N° 264-92.
>
> Dicha decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:
>
> 1. El Doctor Máximo Chacón, Presidente de la Comisión Médico Calificadora de Barú, en misiva dirigida a la Dirección Nacional de Prestaciones Económicas, fechada el 28 de abril de 1992, entre otras cosas señala:
>
> "1. El señor RICARDO RÍOS GANTES estuvo expuesto y en contacto con agro-químicos; (1-2 DIBROMO 3 CHLOROPROPANO), (FUMAZONE) según consta por testigos en investigación realizada a ellos por el Departamento de Riesgos Profesionales-Área de Barú.
>
> 2. Estuvo hospitalizado el 7 de agosto de 1977, por 10 días en el Hospital Dionisio Arrocha, por dermatitis por contacto en el área escroto, según documentación de hospitalización que consta en el expediente clínico.
>
> 4. Paciente evaluado por Urología-David-, el 22 de junio de 1991, por el Dr. Oliver Candanedo; dictamina; AZOOSPERMIA, luego de contacto prolongado con agroquímicos."
>
> Al respecto de la alegación sostenida por la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY en el sentido de que ésta aplicó el nematicida fumazone en los años 1970-1971, fecha en la cual el trabajador RÍOS GANTES no laboraba aún para la misma, la Directora Nacional de Prestaciones Económicas, mediante Nota N° DSD-530-92 de 20 de julio de 1992, le solicitó al Director de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud establecer con exactitud los años en que la empresa en cuestión utilizó en el área de Puerto Armuelles el agroquímico Dibromo Cloropropano (Fumazone).
>
> La respuesta se dio a través de la Nota N° 485/FD de 18 de agosto de 1992, y fue la siguiente:
>
> "En atención a su nota DSO-530-92 del 20 de julio del presente, referente a la investigación de uso sobre DIBROMO-CLOROPROPANO

(FUJMAZONE), por parte de la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY, le podemos expresar que este producto NO posee Registro Sanitario en este Departamento y, que nuestros archivos, no consta la autorización de ningún Permiso Especial para su uso, lo cual se confirmó con el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en consulta con el Dr. Leonardo Lamoth."

Se deduce de la Nota supracitada, que dicha empresa violó disposiciones sanitarias de la República de Panamá con la utilización de un agroquímico no sujeto a control (Registro Sanitario) por la autoridades de salud de nuestro país.

De las investigaciones realizadas se pudo comprobar, mediante testigos, que el señor RÍOS GANTES estuvo expuesto, en el ejercicio de sus labores con la CHIRIQUÍ LAND COMPANY.

En atención a las pruebas que reposan en el expediente y de las cuales hemos hecho mención, la Comisión de Prestaciones tomó la decisión ya conocida, teniendo como fundamento legal lo expuesto en el Artículo 77 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970."

DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

El entonces Procurador de la Administración mediante la Vista N° 410 de 8 de septiembre de 1993, no coincidió con lo expuesto por la parte actora y solicitó a la Sala que desestime las pretensiones de la parte actora.

Evacuados los trámites de ley procede la Sala a resolver la presente controversia con las siguientes consideraciones.

La Caja de Seguro Social cubre diversos riesgos o contingencias, entre los que figuran lo llamados Riesgos Profesionales. Mediante el Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970, se centraliza en la Caja de Seguro Social la cobertura obligatoria de los mismos, tanto para los trabajadores del Estado como de las empresas que operan en la República de Panamá. El artículo 2° del decreto en mención, define como Riesgo Profesional, "los accidentes y las enfermedades a que están expuestos los trabajadores a causa de las labores que ejecutan por cuenta de un patrono". En ese orden de ideas, igualmente se contempla, que accidente de trabajo es "toda lesión corporal o perturbación funcional que el trabajador sufra, sea en la ejecución, con ocasión o por consecuencia del trabajo, y que dicha perturbación sea producida por la acción repentina o violenta de una causa exterior, o del esfuerzo realizado"; el artículo 5° define enfermedad profesional, como "todo estado patológico que se manifieste de manera súbita o por evolución lenta a consecuencia del proceso de trabajo, o debido a las consecuencias del proceso de trabajo, o debido a las consecuencias específicas en que éste se ejecute."

Para resolver, la Sala entra a considerar la facultad de la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social para conceder o rechazar y en caso de esto último, bajo qué medidas exigir el pago de la indemnización, en caso de culpa o negligencia del empleador ante un riesgo profesional. En ese sentido, se observa que el artículo 60 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970, prevé que es la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, a quien le corresponde resolver las solicitudes de pensiones en el seguro de Riesgos Profesionales y que tendrá en cuenta para ello, el informe de la Comisión Médica Calificadora y demás exámenes que la Comisión considere necesario y para la cual se expedirá un reglamento. En efecto, mediante la Resolución N° 7212 de 22 de julio de 1986, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social aprobó en segundo debate el Reglamento de Prestaciones Económicas, y el artículo 1° le otorga a la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social esa facultad. En relación a ello, el artículo 8° literal h) del mismo decreto, prevé entre sus funciones, conceder o rechazar las pensiones de invalidez permanente absoluta, lo mismo que las indemnizaciones, en el programa de Riesgos Profesionales.

En cuanto a las prestaciones y subsidios que la concreción de los Riesgos

Profesionales diere lugar, el Título IV del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970, los contempla y a su vez los subdivide en Prestaciones Médicas, Prótesis y Ortopedia; del Subsidio por Incapacidad Temporal; de la Incapacidad Permanente; de las Prestaciones en Caso de Muerte; e igualmente contempla disposiciones comunes a las prestaciones para cuyos fines prevé la existencia de un reglamento. Las Prestaciones Médicas, Prótesis y Ortopedia incluye la necesaria asistencia médica y hospitalaria como el suministro de otros medios terapéuticos, la provisión, reparación y renovación normales de los aparatos de prótesis y ortopedia. El Subsidio por Incapacidad Temporal prevé el subsidio diario en dinero **cuando el trabajador se incapacite temporalmente para el trabajo** y por tal motivo deje de recibir salario. En la Incapacidad Permanente se cubre tanto la Invalidez Permanente Parcial, que es la que se produce por alteraciones incurables o de duración no previsible **que disminuya la capacidad de trabajo del asegurado** e igualmente cubre la Incapacidad Permanente Absoluta producida por alteraciones orgánicas o funcionales incurables o de duración no previsible, **que impidan al asegurado desempeñar cualquier clase de trabajo remunerado**. Finalmente las Prestaciones en Caso de Muerte cubren las pensiones a que tienen derecho los beneficiarios cuando el accidente de trabajo o la enfermedad profesional causen la muerte del asegurado.

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, mediante el Acuerdo N° 1 de 29 de mayo de 1995, expidió el Reglamento General de Prestaciones de Seguro de Riesgos Profesionales, donde se establecen las prestaciones y subsidios a que los trabajadores tienen derecho en caso de una contingencia. Para ello, y retomando lo antes expuesto, la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social tomará en cuenta el informe de la Comisión Médica Calificadora y otros exámenes y pruebas que dicha comisión estime que sean necesarios. Queda claro pues, que la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, tiene facultad para conceder o rechazar las solicitudes que en materia de Riesgos Profesionales a ella se sometan.

Los antecedentes del caso demuestran, sin lugar a dudas, que la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social al expedir la Resolución N° 264-92, siguió el procedimiento previsto, dado que su negativa al pago "del imprevisto laboral" sufrido por el señor RICARDO RÍOS GANTES en el año de 1976, tuvo como fundamento la misiva dirigida a esa comisión por parte del doctor Máximo Chacón, Presidente de la Comisión Médico Calificadora de Barú, en la que se señala que el señor Ríos Gantes estuvo expuesto y en contacto con agro-químicos (Fumazone) según testigos en investigación realizada por ellos. Igualmente señala el informe, que el señor Ríos Gantes estuvo hospitalizado por diez días en agosto de 1977, debido a una "dermatitis por contacto en el área escrotal" y en evaluación efectuada por el doctor Oliver Candanedo el 22 de junio de 1991 se dictaminó "AZOOSPERMIA", luego de contacto prolongado con agroquímicos. También se tomó en consideración, para los efectos del acto acusado, la Nota N° 485/FD de 18 de agosto de 1992, dirigida a la Directora Nacional de Prestaciones Económicas por el Director de Farmacias del Ministerio de Salud, en la que se expresa que DIBROMO-CLOROPROPANO (FUMAZONE) "no posee registro sanitario en ese departamento y no consta ningún permiso especial para su uso."

Ahora bien, en cuanto a la condena al pago íntegro de las prestaciones económicas que dé lugar el infortunio laboral sufrido por el señor Ríos Gantes, que igualmente se observa en la Resolución N° 264-92 de 13 de octubre de 1992, y que a juicio de la parte actora la Comisión de Prestaciones Económicas no tenía facultad para ello, la Sala estima por los efectos que de ella se derivan, por un lado, que hubo un error por parte de la Comisión de Prestaciones en utilizar el término "condenar" y por el otro lado, hubo una mala interpretación de parte del recurrente. A criterio de la Sala, la utilización del verbo "condenar" a la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY al pago íntegro de las prestaciones económicas, no era mas que para destacar la responsabilidad de la empresa, una vez que investigara y comprobara que hubo negligencia de su parte por lo que ésta debía asumir ese riesgo. Aunado a lo anterior, no se observa fijación de cuantía alguna, por lo que mal podía ser una condena en los términos expuestos por la parte demandante.

En cuanto a la interpretación dada por el actor al artículo 77 del Decreto

de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970 que alega como infringido de manera directa por omisión, la Sala disiente del criterio expuesto, dado que al momento de la expedición del acto acusado, la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social sólo se limitó a rechazar la solicitud planteada, mas no efectuó cálculo alguno de las prestaciones conforme están previstas en ese decreto, y a las que hubiese tenido derecho el trabajador por la enfermedad o accidente sufrido y en base a la tabla para ello establecida, para posteriormente proceder a "demandar" el pago de la indemnización según la legislación civil que diere lugar la culpa o negligencia del empleador, y en consecuencia cubrir las prestaciones otorgadas y entregar al trabajador el saldo si lo hubiere. Eso es sin perjuicio de que la víctima, en este caso RICARDO RÍOS GANTES, o sus causahabientes una vez determinada la culpa o negligencia de la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY, pueda demandar la indemnización según el derecho común.

La Sala ha podido constatar según las pruebas acopiadas en el expediente administrativo, y en particular de las declaraciones de personas que laboraban en la empresa, que RICARDO RÍOS GANTES utilizó y aplicó el producto conocido como FUMAZONE cuando laboraba como jornalero para la CHIRIQUÍ LAND COMPANY. Coinciden los testigos en que no se les dio instrucciones precisas ni se tomaron las medidas pertinentes para el manejo de dicho producto, e igualmente coinciden que no fueron atendidos ni evaluados por profesionales a fin de diagnosticar clínicamente si estaban afectados como consecuencia del FUMAZONE (Ver fojas 161-168, 169-174, 175-180). Aunado a ello, se observa de las pruebas periciales aducidas por la parte actora y la Procuradora de la Administración, que, efectivamente el DIBROMO CHLOROPROPANO (FUMAZONE) produce esterilidad (ver fojas 139 -140) y el señor RICARDO RÍOS GANTES sufre de "infertilidad secundaria", es decir, la infertilidad que se le presenta a un individuo que ha tenido hijos anteriormente, lo cual se corrobora con la prueba de genética solicitada por la parte actora en la que se determinó que RICARDO RÍOS GANTES es el padre biológico de ALEXANDER RÍOS CONTRERAS cuyas generales son visibles en el expediente adjunto. (Ver informe rendido por el Lic. Alejandro Vernaza, que concluye con la probabilidad de ser el progenitor en un 99.13%).

La Sala no considera confiables las declaraciones rendidas por CÉSAR MOLINA CHACÓN, ERNESTO MÉDICA CASTILLO, JOSÉ ANTONIO JARAMILLO BATISTA, testigos aducidos por la parte actora, dado que el artículo 896 numeral 3 del Código Judicial, prevé como sospechosos para declarar "el trabajador, empleado o dependiente de la parte que pidió la prueba, salvo que se trate de una entidad de derecho público." Dichos señores ocupan dentro de la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY a la fecha, cargos evidentemente de confianza como Gerente del Área de Productores Asociados, Asesor de Control de Sigatoka y Superintendente o Supervisor de Área respectivamente (Ver 181-189, 191-196, 197-201). En cuanto a la prueba pericial que igualmente adujo la parte actora a los archivos y libros de los departamento de Agricultura, Contabilidad y cualquier otro departamento de la Chiriquí Land Company, suscrita por los contadores públicos autorizados Miguel A. Fanovich y Armando A. Aguilar, la Sala estima que no es relevante para los efectos del caso que nos ocupa, pues, salvo que señala que el señor Ríos Gantes fue contratado desde el 3 de diciembre de 1975 en esa empresa, no brinda mayores luces en cuanto al uso del FUMAZONE para esa época dado que en el Departamento de Contabilidad-División Puerto Armuelles- se dijo que "los archivos del año de 1984 para atrás fueron destruidos en el año 1988 por orden del Contralor de la empresa en esa época, señor JOSÉ BORDA y que no se confeccionó acta al respecto. Por tanto, no podemos determinar si el señor RICARDO RÍOS GANTES, dentro de sus labores habituales aplicó el agroquímico FUMAZONE y mucho menos en qué fincas lo hizo" (Ver de foja 154 a 157 del expediente).

Dada la situación anotada, es obvio que la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY incurrió en negligencia, por lo que la Caja de Seguro Social no es responsable del "pago del imprevisto laboral" sufrido por RICARDO RÍOS GANTES en 1976, razón por la que no se ha vulnerado de forma alguna lo establecido en los artículos 1° y 77 del Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970, y los artículos 1°, 8 literal h) y 11 del Reglamento de Prestaciones Económicas. En relación a los artículos 301 y 12 numeral 2) del Código Laboral alegados como infringidos, la Sala estima que no corresponde su aplicación dentro del procedimiento administrativo sino cuando se interponga la acción ante los tribunales ordinarios y, por ello, no se han infringido.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 264-92 de 13 de octubre de 1992, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, como tampoco lo son sus actos confirmatorios.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO ANTONIO CANDANEDO, EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE ELIZONDRO AGUILAR, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DRP N° 466-96 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Julio Antonio Candanedo**, en representación de **ENRIQUE ELIZONDRO AGUILAR**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución DRP N° 466-96 de 6 de septiembre de 1996, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador se percata de que previo al trámite de admisión de la demanda, el recurrente ha solicitado que se proceda a la suspensión de los efectos del acto impugnado.

Los hechos en que descansa la aludida medida cautelar son los siguientes:

"PRIMERO: **ENRIQUE ELIÉCER ELIZONDO AGUILAR**, ha acreditado plena y jurídicamente que es el real y verdadero propietario de la Finca #3574, inscrita al Tomo 142 R. A., Folio 172; Finca #25333, inscrita al Tomo 17742, Folio 2; Finca #25978, inscrita al Tomo 5249, Folio 5; y la Finca #36110, inscrita al Tomo 17902, Folio 1; todas de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, acorde a los medios de prueba que exige la ley al efecto.

SEGUNDO: La Dirección de Responsabilidad Patrimonial, a través de la Resolución DRP N° 466-96 del 6 de Septiembre de 1996, y de la Resolución DRP N° 592-96 de 6 de Noviembre de 1996, ha sostenido en forma equivocada y contra derecho, que el propietario de las Fincas mencionadas lo es el señor **OTILIO MIRANDA CEDEÑO**, por ello ha mantenido la cautelación de dichos inmuebles, con notable perjuicio para su real propietario.

TERCERO: Los perjuicios patrimoniales que viene sufriendo el señor **ENRIQUE ELIÉCER ELIZONDO AGUILAR**, por no poder utilizar a su plena y total satisfacción la Finca #3574, inscrita al Tomo 142 R.A., Folio 172; Finca #25333, inscrita al Tomo 5149, Folio 5; y la Finca #36110, inscrita al Tomo 17902, Folio 1; todas de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, son obvios y evidentes, por cuanto que dichas Fincas las adquirió para usufructuarlas y desarrollarlas de conformidad a proyectos agropecuarios y ganaderos que al efecto pretendía implementar en tales inmuebles; y hasta la fecha no lo ha

podido realizar como consecuencia de las Medidas Cautelares que sobre tales bienes, ha impuesto la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.

La naturaleza lógica y clara de la Petición de Suspensión, deviene del hecho cierto y notorio de que toda persona que compra un inmueble es para usufructuarlo a cabalidad y acorde a sus mejores intereses, siendo ello evidente y natural; de allí que sea comprensible, al normal razonamiento, el daño evidente y cierto que se le infringe a **ENRIQUE ELIÉCER ELIZONDO AGUILAR** por no poder, reitero, usufructuar los bienes inmuebles ya anotados, a su plena y total discreción; daños patrimoniales a más de los morales que en verdad le viene ocasionando la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, al mantener las Medidas Cautelares sobre los inmuebles mencionados.

Las pruebas para pedir la suspensión se encuentran en las fotocopias autenticadas que se acompañan con la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción.

PRUEBAS: Con las pruebas que se adjuntaron a la demanda, se acredita en forma cierta los hechos en que fundamentamos la Petición de Suspensión Provisional de las Medidas Cautelares a que se refiere el Recurso; de allí que estimemos la viabilidad de la petición que encierra esta solicitud."

Encontrándose la petición en este estado, los Magistrados entran a resolver la misma.

En el caso que nos ocupa, vemos que las pretensiones del solicitante recaen sobre la suspensión de los efectos de la citada Resolución DRP N° 466-96 de 6 de septiembre de 1996, expedida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría de la República. Mediante dicha resolución la autoridad demandada decidió mantener las medidas cautelares adoptadas por la Contraloría General de la República sobre diferentes fincas dentro del proceso que por posible lesión patrimonial se le sigue al exlegislador **Otilio Miranda Cedeño**.

La razón de tal solicitud la fundamenta el peticionista en que las enunciadas fincas, contrario a lo alegado por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, son de su propiedad, y no del señor **Otilio Miranda**.

Cabe señalar que, únicamente se admite la suspensión del acto administrativo impugnado, en aquellos casos en los cuáles el actor comprueba fehacientemente ser titular de un derecho subjetivo lesionado, y que por su inminente y urgente protección, demuestre que los daños irreparables y notoriamente graves que alega le serían causados, son de difícil o imposible reparación.

Ahora bien, en reiteradas ocasiones (cfr. Autos de 15 de noviembre de 1994, 31 de julio de 1996 y 6 de septiembre de 1996), este Tribunal ha manifestado que para poder acceder a tal suspensión no sólo basta conque el recurrente alegue en qué consisten tales perjuicios, sino que los mismos deben ser plenamente probados. Esto equivale a que la solicitud de suspensión provisional como medida cautelar requiere del demandante un sustancial esfuerzo previo, en el sentido de que suministre las constancias procesales indispensables para que, como prueba preconstituída, el Juez concluya que efectivamente, y a prima facie, cuenta en lo medular con la apariencia de buen derecho a su favor, ya que debe recordarse que en esta procesal no se practican pruebas.

Frente a lo expuesto, el Pleno de esta Sala se percata que el caudal probatorio aportado por el demandante para probar la medida de suspensión de los efectos de la Resolución DRP N° 466-96 de 6 de septiembre de 1996, no constituye elemento de juicio suficiente para acceder a tal solicitud. El recurrente alega ser el propietario de tales fincas, sin embargo, no ha aportado la documentación requerida a tales efectos, es decir, que no ha acreditado por los medios legales

tal propiedad como manifiesta, que es lo que prima facie, demostraría a esta Superioridad que el mismo es el titular del derecho que dice lesionado por el acto recurrido.

En las pruebas aportadas por el recurrente al momento de decidirse esta solicitud previa, no se establece que éste sea el propietario de las fincas sobre las cuáles recaen las medidas precautorias a las que hace alusión la Resolución cuya suspensión se solicita (Resolución DRP N° 466-96 de 6 de septiembre de 1996), más bien se alude a la existencia de suficientes elementos de juicio para asumir que el verdadero propietario de las fincas es el señor **Otilio Miranda Cedeño** (Cfr. f. 6 del expediente).

De conformidad con el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la facultad de suspender los efectos del acto, resolución o disposición es discrecional, si a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave y de difícil reparación. Por consiguiente, es claro que para poder acceder a ello, es indispensable, repetimos, que quien se dice afectado con la ejecución del acto acusado, acompañe las pruebas necesarias para tal fin. Como quiera que el recurrente en esta etapa incipiente del proceso no ha comprobado la adopción de tal medida, no es procedente acceder a la misma.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la solicitud de Suspensión Provisional de los efectos de la Resolución DRP N° 466-96 de 6 de septiembre de 1996, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE TAMARA RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, PROFERIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, promovida por el Lic. Carlos Ayala, en representación de TAMARA RODRÍGUEZ para que se declare nulo por ilegal el Decreto de Personal N° 187 de 25 de julio de 1995 emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones el Magistrado Sustanciador mediante auto dictado el 18 de enero de 1986 no admitió la demanda y contra ella se propuso recurso de apelación que fue sustentado oportunamente el 12 de abril de 1996 la Sala de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con el fin de resolver adecuadamente ordenó que se solicitara al Ministerio de Educación copia del Decreto de Personal impugnado con constancia de su notificación y certificación de la solicitud de reconsideración propuesta contra dicho decreto. Inexplicablemente el negocio retornó al sustanciador sin que se hubiese resuelto el recurso de apelación y este prosiguió la actuación como si se hubiese revocado la providencia de 18 de enero de 1996, sin que ello en realidad hubiese ocurrido.

Ahora mediante resolución de 14 de octubre de 1996 el sustanciador advierte la irregularidad y declara nulo todo lo actuado a partir de foja 27 hasta la foja 46 del expediente.

Como la nulidad es de carácter relativa, ya que está referida a deficiencias en la secuencia procesal, las pruebas que fueron solicitadas mediante resolución de 12 de abril de 1996 y que constan en los folios 30 y 31, conservan su valor probatorio y como de ello resulta que el acto impugnado no fue notificado, es fundada la apelación.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución de 18 de enero tantas veces mencionadas y en su lugar ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Carlos Ayala, en representación de TAMARA RODRÍGUEZ para que se declare nulo por ilegal el Decreto de Personal N° 187 de 25 de julio de 1995 emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones.

No se solicita informe de conducta, ni se corre traslado a la Procuradora de la Administración porque ambos trámites han sido evacuados y con la corrección del trámite mediante la presente acción, dichos actos han sido convalidados.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MIRIAM AMORES CORREA, EN REPRESENTACIÓN DE ERIC A. RAMÍREZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL DECRETO DE PERSONAL N° 171, DEL 14 DE JUNIO DE 1996, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Miriam Amores Correa en nombre y representación de **ERIC A. RAMÍREZ**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, el acto administrativo contenido en el Decreto de Personal N° 171, del 14 de junio de 1996, dictado por el Presidente de la República por Conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar la demanda se observa que el acto impugnado no ha sido debidamente notificado como lo estipula la ley.

Además se acompaña a la demanda una solicitud previa mediante la cual se requiere que antes del trámite de admisión de la misma el Magistrado Sustanciador oficie al Ministerio de Gobierno y Justicia la información referente al estado del recurso de Reconsideración que presentó en ese Ministerio el 2 de agosto de 1996, y a la Policía Nacional, una copia auténtica del Resuelto N° 268 del 30 de mayo de 1996 con la constancia de su notificación, toda vez que aún cuando aquellas han sido solicitadas, no le ha sido entregadas.

La ley exige la autenticación del acto impugnado debidamente notificado con el objeto de verificar el agotamiento de la vía administrativa, para establecer si la demanda se presentó en término oportuno, requisitos esenciales para considerar su admisibilidad.

Igualmente, la ley señala el mecanismo para la consecución de dicha autenticación por medio del Magistrado Ponente en caso que la oficina donde se

encuentre el original deniega la expedición auténtica de la copia, artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

Con ello se logra que la Administración no burle el derecho de las partes a recurrir contra sus actos.

En consecuencia, el suscrito Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que se solicite al Ministerio de Gobierno y Justicia copia auténtica, con acuso de recibo del recurso de reconsideración presentado el día 2 de agosto de 1996 contra el Decreto de Personal N° 171 de 14 de junio de 1996 y a la Policía Nacional, una copia auténtica del Resuelto N° 268 del 30 de mayo de 1996.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR HUMBERTO RICORD, EN REPRESENTACIÓN DE ABRAHAM BELL E., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° FAP-D 467 DE 13 DE JUNIO DE 1996, EXPEDIDA POR LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y LA RESOLUCIÓN N° 96-2312 DE 24 DE JUNIO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECTORA DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Humberto Ricord en nombre y representación de **ABRAHAM BELL E.**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota N° FAP-D-467 de 13 de junio de 1996, expedida por la Decana de la Facultad de Administración Pública, y la Resolución N° 96-2312 de 24 de junio de 1996, dictada por la Directora de Personal de la Universidad de Panamá, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Además se acompaña a la demanda una solicitud previa mediante la cual se requiere que antes del trámite de admisión de la misma el Magistrado Sustanciador oficie al Secretario General de la Universidad para que remita copia autenticada de la Resolución CJ-1396 de 27 de septiembre de 1996, dictada por el Rector de la Universidad de Panamá, así como copia autenticada de la Nota N° FAP-D-467 de 13 de junio de 1996, de la Decana de la Facultad de Administración Pública, Profesora Luzmila de Young.

La ley exige la autenticación del acto impugnado debidamente notificado con el objeto de verificar el agotamiento de la vía administrativa, para establecer si la demanda se presentó en término oportuno, requisitos esenciales para considerar su admisibilidad.

Igualmente, la ley señala el mecanismo para la consecución de dicha autenticación por medio del Magistrado Ponente en caso que la oficina donde se encuentre el original deniega la expedición auténtica de la copia, artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

Con ello se logra que la Administración no burle el derecho de las partes a recurrir contra sus actos.

En consecuencia, el suscrito Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en

nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que se solicite al Secretario General de la Universidad de Panamá, copia autenticada de la Resolución CJ-1396 de 27 de septiembre de 1996, dictada por el Rector de dicha institución, así como copia autenticada de la Nota N° FAP-D-467 de 13 de junio de 1996, emitida por la Decana de la Facultad de Administración Pública, Profesora Luzmila de Young.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO UBALDINO RODRÍGUEZ BOTELLO, EN REPRESENTACIÓN DE DOMINGO ANTONIO BONVINI YANIS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL DECRETO GERENCIAL N° 17 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1996, EXPEDIDO POR EL GERENTE DE LA SUCURSAL LAS AMÉRICAS DE LA CAJA DE AHORROS, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ubaldino Rodríguez Botello, en representación de **DOMINGO ANTONIO BONVINI YANIS**, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, el acto administrativo contenido en el Decreto Gerencial N° 17 de 16 de septiembre de 1996, expedido por el Gerente de la Sucursal las Américas de la Caja de Ahorros, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede en primer término al análisis del libelo incoado, a fin de verificar si la misma cumple con los requisitos mínimos para que pueda ser admitida.

Observa el suscrito que la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción no puede ser admitida en virtud de que adolece de formalidades que están contempladas en la ley.

De esta forma, no consta en el expediente copia autenticada del acto confirmatorio (resolución N° E-37/96) que de constancia de su notificación, a fin de determinar si la demanda ha sido presentada en tiempo oportuno de conformidad con el artículo 42 b) de la ley 135 de 1943 que contempla que la acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de dos meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda.

Dicha falta es subsanable, cuando el actor demuestra sumariamente que trató de acompañar los documentos debidamente autenticados y que no obtuvo respuesta, por lo que entonces esta Corporación de Justicia puede diligenciar la obtención de los mismos antes de admitir la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la ley 135 de 1943.

Por lo expuesto, el Magistrado sustanciador, en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE la demanda contencioso administrativa interpuesta por el licenciado Ubaldino Rodríguez Botello, en representación de DOMINGO ANTONIO BONVINI.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE JAIME NELSON CARRANZA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 731 DE 22 DE AGOSTO DE 1990, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Carlos Ayala** en representación de **JAIME NELSON CARRANZA**, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto de Personal N° 731 de 22 agosto de 1990, dictado por conducto del Ministerio de Obras Públicas.

El Magistrado Sustanciador procede en primer término al análisis del libelo incoado, y en este estudio se percata que el actor ha incluido en su demanda una solicitud especial, para que se oficie al Ministro de Obras Públicas a fin de obtener copia auténtica de dicho Decreto.

Por tanto, es preciso determinar, por razones de economía procesal, si el libelo presentado ha cumplido con los requisitos mínimos que le permitan ser admitido.

Con relación a la solicitud previa ya mencionada, debemos indicarle al actor que el mismo no cumplió con la exigencia de emprender todas las acciones pertinentes en la búsqueda de obtener la documentación idónea que requiere el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, ya que el recurrente no presenta con la demanda incoada, documento alguno en el que conste que por sus propios medios requirió se le expidiera copia autenticada del acto que impugna.

Si el actor demuestra sumariamente que trató de acompañar los documentos debidamente autenticados y no obtuvo respuesta, esta Corporación de Justicia puede diligenciar la obtención de los mismos, y lo más importante, se subsana la ineptitud de la demanda.

Más importante aún, es recordarle al actor que un proceso contencioso administrativo de nulidad es aquél que persigue la nulidad de un acto administrativo objetivo, general e impersonal por transgredir el orden legal. Confirma lo anterior el hecho de que la Procuraduría de la Administración interviene emitiendo concepto sobre la legalidad del acto acusado, en interés y defensa precisamente del ordenamiento legal supuestamente transgredido, y no en defensa del acto proferido por la administración, tal como lo señala el artículo 348 numeral 1 del Código Judicial.

En el presente caso el actor ha errado la vía, ya que el acto impugnado es un Decreto de Personal, cuya ilegalidad debe ser demandada a través de un proceso contencioso de plena jurisdicción, por cuanto se presumen afectados derechos personales. Es precisamente la jurisdicción en comento la que persigue el resarcimiento de los derechos subjetivos supuestamente conculcados a persona determinada.

Aún cuando el actor hace énfasis, en el contenido de la demanda, señalando que se trata de una acción popular por lo que solicita se decrete la nulidad del Decreto, se entiende claramente que el fin que persigue es el reingreso de su poderdante **JAIME NELSON CARRANZA** al puesto que ocupaba dentro del Ministerio de Obras Públicas.

Si bien es cierto, mediante resolución de 6 de noviembre de 1992, el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá señaló que "las firmas que aparecen en los decretos de personal no fueron hechas de puño y letra del señor Presidente, si no que es una falsificación de firma", la vía para hacer valer el derecho a solicitar la nulidad del Decreto de personal N° 731 de 22 de agosto de 1990 y por ende el reingreso de los afectados, era la contenciosa administrativa de plena jurisdicción. Consta en archivos de la Secretaría de la Sala Tercera que el licenciado Carlos Ayala, apoderado de **JAIME NELSON CARRANZA** presentó el día 3 de agosto de 1995 demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción en favor del prenombrado señor **CARRANZA**, lo que nos indica que el licenciado Ayala conocía perfectamente cuál era la vía idónea para solicitar el resarcimiento del derecho individual afectado en perjuicio de su representado.

En dicha ocasión, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, resolvió no admitir la demanda por las siguientes razones:

> "Sobre el particular es importante destacar, que las solicitudes de reintegro al Ministerio de Obras Públicas debieron presentarse ante el Ministro de esta entidad del Estado y no al Presidente de la República como erróneamente enuncia el licenciado **Ayala**, dado que el Ministro del ramo correspondiente, es el responsable de los nombramientos y remociones o destituciones efectuadas en conjunto con el Presidente de la República. En consecuencia, el Ministro de Obras Públicas es el funcionario que debió ser identificado como la parte demandada en la presente demanda, en atención a lo señalado en el artículo 181 de la Constitución Nacional.
> ...
> Aunado a lo anterior, en todas estas demandas se aprecia que el licenciado Ayala no presentó las solicitudes de reintegro en comento con el sello de recibido, así como tampoco adjuntó el libelo de las demandas correspondientes, la petición de certificación de no pronunciamiento de las pretensiones formuladas, por parte de la autoridad competente."

Dichas omisiones impidieron la admisibilidad de aquella demanda, a tenor del texto del artículo 50 de la Ley 135 de 1943 puesto que, no se podía corroborar el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo ante el Ministro de Obras Públicas, lo cual a su vez equivalía a la negativa tácita de la pretensión, y por consiguiente, se confrontó la imposibilidad de verificar la prescripción de las acciones de plena jurisdicción promovidas por el licenciado Ayala.

Todo esto evidencia que el apoderado del señor **JAIME NELSON CARRANZA** conocía la vía idónea para solicitar el resarcimiento del derecho subjetivo de su representado, afectado por el Decreto de Personal N° 731 de 22 de agosto de 1990, sin embargo la demanda le fue inadmitida por las razones expuestas, por lo que ahora acude a la vía contencioso administrativa de nulidad, lo cual resulta manifiestamente improcedente dado que la pretensión que se persigue colisiona con la naturaleza de estos procesos, que como ya indicamos sólo busca la anulación del acto objetivo demandado, y no la reparación de un derecho personal afectado.

Por las anteriores consideraciones el Magistrado que suscribe, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad presentada por el licenciado Carlos Ayala en representación de JAIME NELSON CARRANZA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. EMILIO EFFIO, EN REPRESENTACIÓN DE CONTADORA RESORT INC., S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 5°, 6°, 11°, Y 12° DEL ACUERDO N° 6 DE 2 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BALBOA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Emilio Effio, en representación de **CONTADORA RESORT INC., S. A.**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declaren nulos, por ilegales, los artículos 5°, 6°, 11° y 12° del Acuerdo N° 6 de 2 de agosto de 1995, emitido por el Consejo Municipal del Distrito de Taboga.

LO QUE SE DEMANDA

El apoderado judicial de la parte demandante solicita a esta Superioridad que declare la ilegalidad de los tributos o gravámenes establecidos en el citado Acuerdo Municipal por el cual se establece un régimen impositivo especial bajo el rubro de actividades comerciales, para los contribuyentes de la Isla de Contadora ubicada en el Distrito de Balboa, específicamente los artículos 5°, 6° (Códigos 1.1.2.5., 1.1.2.5.43 y 1.1.2.6), 11°, y 12°, cuyo texto es el siguiente:

"QUINTO: Los tributos municipales de la Isla Contadora, para su administración se dividen así Impuestos, Tasas y Derechos, otros tributos varios."
SEXTO: ...

Código
1.1.2.5. ACTIVIDADES COMERCIALES

a. Por cada pasajero que llegue a la isla en avión u otro medio de transporte comercial pagarán una tasa de ... $1.00
b. Restaurantes en general pagarán por mes o fracción de mes de ... $125.00 a 200.00
c. Bares en general pagarán por mes o fracción de mes de ... $150.00 a $225.00
d. Otro locales en general pagarán por mes o fracción de mes de $100.00 a $150.00

1.1.2.5.43 HOTELES Y MOTELES

a. Tomando en cuenta la ubicación comercial y capacidad productiva, los hoteles y moteles pagarán por mes o fracción de mes de $25.00 a $30.00 por cada habitación.

1.2.1.4 INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS

a. Por residencia al año en concepto del servicio de limpieza y recolección de basura pagarán una tasa anual de ... $1,000.00

1.1.2.6 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

a. Los solares sin edificar en la Isla de Contadora pagarán un impuesto anual de ... $300.00
b. Por cada automóvil pagarán al año ... $500.00
c. Por cada motocicleta pagarán al año ... $50.00

DÉCIMO PRIMERO:

Toda persona que establezca en la isla turística de Contadora, cualquier negocio, empresa o actividad gravable, está obligado a comunicarlo inmediatamente al Tesorero Municipal y la comisión

administradora integrada por dos (2) representantes designados por la asociación de residentes, propietarios y usuarios de la Isla Contadora (ARPVIC) y un (1) representante designado por los hoteles que operen en la isla, para su clasificación e inscripción en los registros respectivos.

DÉCIMO SEGUNDO:

Las recaudaciones en concepto de impuesto, derechos, tasas, y contribuciones será distribuido por el Municipio de Balboa de la siguiente manera:

1. El 70% destinado a la Asociación de residentes de la Isla Contadora para la ejecución de obras comunales en la isla.
2. El 30% para el Municipio de Balboa, destinado a promover el desarrollo de las comunidades y la realización del bienestar social del resto del Distrito de Balboa.

Parágrafo: Queda entendido que los acuerdos establecidos o que en el futuro se establezcan para regular las cargas impositivas de aquellas actividades que por sus características especiales, sean necesarias o sujetas a negociación o convenio entre el municipio y el contribuyente, quedarán vigentes y podrán ser objeto de ser reformadas."

NORMAS ACUSADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

El demandante opina que el Acuerdo Municipal impugnado es violatorio de los artículos 21 (ordinal 6), 38, 57 (ordinal 1), 74 y 84, todos de la Ley 106 de 1973, "Sobre Régimen Municipal". El texto de las mismas, en el orden establecido, es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 21. Es prohibido a los Consejos:
...
6. Gravar con impuestos lo que ya ha sido gravado por la Nación."

"ARTÍCULO 38. Los Consejos dictarán sus disposiciones por medio de Acuerdos o Resoluciones que serán de forzoso cumplimiento en el distrito respectivo tan pronto sean promulgadas, salvo que ellos mismos señalen otra fecha para su vigencia."

"ARTÍCULO 57. Los Tesoreros Municipales tienen las atribuciones siguientes:

1. Efectuar las recaudaciones y hacer los pagos del Municipio, por lo cual llevarán libros de ingresos y egresos."...

"ARTÍCULO 74. Son gravables por los Municipios con impuestos y contribuciones todas las actividades, industriales, comerciales o lucrativas de cualquier clase que se realicen en el Distrito."

"ARTÍCULO 84. Toda persona que establezca en los Distritos de la República cualquier negocio, o empresa o actividad gravable está obligada a comunicarlo inmediatamente al Tesoro Municipal para su clasificación e inscripción en el registro respectivo".

En cuanto a la violación del artículo 21 (ordinal 6), de la Ley 106 de 1973, el demandante sostiene que la misma se ha dado de manera directa por omisión, porque mediante dicho Acuerdo se pretende gravar una actividad que está previamente gravada por Ley. En tal sentido, señala que el artículo 1° de la Ley N° 83 de 22 de diciembre de 1976, grava la actividad de los hoteles por prestar servicios de hospedaje y se encuentra gravada con impuestos nacionales mensuales. Aunado a que, el hospedaje se brinda en habitaciones, por lo que reitera que se incurre en un doble gravamen por la Nación y por el Municipio.

En lo que respecta al artículo 38 de la 106 de 1973, manifiesta el

recurrente que la infracción del mismo ha sido de forma directa por omisión, porque los Acuerdos Municipales tienen vigencia en todo el Distrito y su aplicación es de forzoso cumplimiento en el mismo. Por ende, al sectorizar el Acuerdo N° 6 de 2 de agosto de 1995, la Isla Contadora, lo hace en contradicción a la forma prevista en la aludida norma, ya que grava a sus residentes o contribuyentes de manera diferente al resto del Distrito de Balboa, por lo que el mismo no es de aplicación general para todo el Distrito, tal como lo dispone el artículo en referencia.

Sobre el artículo 57 (ordinal 1), de la Ley 106 de 1973, el demandante señala que la infracción al mismo se ha producido de manera directa por comisión, al establecer dicho Acuerdo entre las funciones del Regidor Especial, la de recaudación de Tributos Municipales. Dicha función manifiesta, es exclusiva del Tesorero Municipal, por lo que no es una responsabilidad que debe ser atribuida a otro funcionario.

En lo que al artículo 74 de la Ley 106 de 1973, concierne, la parte actora indica que el mismo ha sido violado de manera directa, por comisión, ya que el Acuerdo impugnado, al establecer impuestos a los pasajeros (personas), no está gravando la actividad turística, en todo caso, como industrial, por lo que es evidente la violación literal a la norma en comento, ya que se está gravando un objeto de tributación como lo es el pasajero, no previsto en la ley para ser gravado, quien tiene locomoción libre de impuestos en todo el país.

Agrega también que, otra infracción que se produce a dicho artículo estriba es que mientras el mismo permite gravar la actividad de hoteles, el referido Acuerdo desglosa la actividad de Hoteles y Moteles para gravar las habitaciones que es el hospedaje, como si fuera ésta la actividad hotelera.

A estos efectos sostiene que, no puede el Consejo seleccionar por separado los servicios que brinda un hotel o motel para gravarlos individualmente, pues la actividad hotelera que le está permitido sujetar a impuestos es una, integral, que comprende un todo y la ley no le autoriza para gravar aparte la piscina, canchas deportivas, restaurantes, habitaciones, además de que, estas últimas pagan un impuesto nacional.

Finalmente, en lo que atañe al artículo 84 de la Ley 106 de 1973, sostiene el recurrente que el artículo 11 del Acuerdo impugnado lo infringe de manera directa por comisión, porque al incluir como obligación del contribuyente comunicarlo a la Asociación de Residentes, propietarios y usuarios de la Isla Contadora, **(ARPVIC)** y a un representante designado por los Hoteles que integran la Comisión Administradora, está imponiendo obligaciones que la Ley no contempla y que le está vedado al Consejo y al Municipio establecer, por cuanto los Acuerdos deben ajustarse a la ley.

CRITERIO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal N° 160 de 11 de abril de 1996, que reposa a folios 49-61 del expediente de marras, indicó a esta Superioridad, en primer lugar, tanto el artículo DÉCIMO PRIMERO como el DÉCIMO SEGUNDO del Acuerdo Municipal N° 6 de 1995, cuya ilegalidad se objeta, son legales. Ello, en atención a que lo que consigna el artículo DÉCIMO PRIMERO es la obligación para toda persona que establezca un negocio, empresa o actividad gravable en la Isla de Contadora de comunicarlo a la Tesorería Municipal y a la Comisión Administrativa, mientras tanto, en el DÉCIMO SEGUNDO lo que se ordena es la forma de distribución de las recaudaciones que realice el Municipio. Por consiguiente, solicita que debe desecharse el cargo de violación que se le atribuye a dichos artículos, en relación con el artículo 84 de la Ley 106 de 1973.

En lo que concierne a los aforos 1.1.2.5.43. y 1.1.2.6, bajo la nomenclatura de "HOTELES Y MOTELES",y "OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS", respectivamente, sostiene la señora Procuradora que a la luz del numeral 6, del artículo 21 de la Ley 106 de 1973, los mismos resultan evidentemente ilegales.

La razón de tal aseveración estriba en que el gravar la habitación de un

hotel o motel, implica el gravar el hospedaje, lo que sin lugar a dudas produce la doble tributación a la que alude la sociedad demandante, toda vez que, por medio de la Ley N° 82 de 22 de diciembre de 1976, se creó un impuesto que afecta esa actividad.

La existencia de un impuesto nacional, agrega la aludida funcionaria, como lo es el ordenado por la Ley N° 82 de 1976, impide que pueda crearse otro gravamen (nacional o municipal), que incida sobre el servicio de hospedaje, cualquiera que sea la forma que éste revista (hoteles, moteles, aparthoteles, cabañas y otros).

En segundo lugar, en lo que respecta a la categoría de impuestos regulada en el aforo 1.1.2.6 del Artículo 6 del Acuerdo impugnado, denominada "OTROS IMPUESTOS", la Procuradora manifiesta que nuevamente en el Acuerdo N° 6 de 1995, se establece un impuesto aplicable a los automóviles y las motocicletas, a pesar de que el Decreto N° 160 de 7 de junio de 1993, "Por el cual se expide el Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de Panamá", en su artículo 151, fija el Impuesto Nacional de Circulación, que le corresponderá recaudar al respectivo Municipio donde se encuentre registrado el vehículo o la motocicleta.

Por ende, a su juicio, es ilegal la imposición de un nuevo tributo por parte del Municipio de Balboa, a los automóviles y motocicletas que circulan en la Isla de Contadora, pues con tal acción se produce la violación del artículo 21, numeral 6 de la Ley 106 de 1973.

Frente a la violación del artículo 38 de la Ley 106 de 1973, alega la Procuradora que el mismo contiene el principio de la territorialidad de la ley municipal que ordena que los Acuerdos y las Resoluciones son de forzoso cumplimiento en el Distrito que no contempla excepción alguna que pueda permitir fraccionar o ampliar dentro o fuera del Distrito su aplicación, y que, por lo tanto, al disponerse que los Acuerdos Municipales rigen dentro del Distrito respectivo, no es posible que se fraccione o limite su exigibilidad a un sector o parte de él como ocurre en los artículos QUINTO y SEXTO del citado Acuerdo N° 6 de 1995, que hace referencia en forma exclusiva a la Isla de Contadora, de forma tal que su aplicación se limita a esa área.

Así las cosas, opina la precitada funcionaria, que es procedente el cargo de ilegalidad que se les formula a los mismos.

En lo que a la transgresión del artículo 57 de la Ley 106 de 1973, respecta, sostiene la señora Procuradora que tanto la recaudación de ingresos, como el deber de hacer los pagos del Municipio son atribuciones centralizadas en el Despacho de Tesorería Municipal, que constituye una función de carácter indelegable, y, que por ende, al contener el Acuerdo N° 6 de 1995, impugnado, en su artículo PRIMERO, último párrafo, la función de recaudación atribuida al Regidor de la Isla de Contadora se está vulnerando efectivamente, el citado artículo 57.

En cuanto a los cargos atribuidos al artículo 74 de la Ley 106 de 1973, la Procuradora concuerda con los planteamientos de la sociedad demandante, ya que, a pesar de que en el aforo 1.1.2.5, del artículo SEXTO de dicho Acuerdo se indica que se grava la actividad comercial; del texto del aparte a), se infiere con claridad que los pasajeros pagarán una tasa de $1.00 independientemente, del medio de transporte en el que llegue el pasajero a la Isla, por lo que éste resulta afectado por el gravamen. De allí que, no se le impone el tributo a la actividad, sino a la persona.

Además, sostiene que al gravarse la habitación, en efecto se separa el hospedaje del resto de la actividad que lleven a cabo los negocios de hotelería, lo que implica que se genera por el uso de la habitación un impuesto adicional al ya mencionado del diez por ciento (10%), del valor total del importe de cada cuenta de hospedaje.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites legales instituidos para estos procesos, la Sala

procede a resolver el presente negocio.

En cuanto al Artículo 21 (ordinal 6), de la Ley 106 de 1973, que establece la prohibición de los Consejos Municipales de gravar con impuestos lo que ya ha sido gravado por la Nación, la Sala considera que al confrontar los cargos de violación endilgados al mismo con lo dispuesto en el artículo **SEXTO** del Acuerdo N° 6 de 1995, específicamente los Códigos **1.1.2.5** (Actividades Comerciales), **1.1.2.5.43** (Hoteles y Moteles), y **1.1.2.6** (Otros Impuestos indirectos), el mismo sí ha sido objeto de violación, por las siguientes razones:

Según lo establecido en el ordinal 8 del artículo 17 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley 52 de 12 de diciembre de 1984, los Consejos Municipales tienen competencia exclusiva para establecer impuestos, contribuciones, rentas, derechos y tasas de conformidad con las leyes, para atender los gastos de la administración, servicios e inversiones municipales, siempre y cuando, no se trate de cosas, objetos y servicios previamente gravados por la Nación.

En el presente caso vemos que en los referidos códigos del Acuerdo Municipal N° 6 de 1995, se pretende gravar en primer lugar, con un impuesto de B/.25.00 a B/.30.00 mensuales por cada habitación en los hoteles y moteles de la Isla de Contadora. Esta situación a nuestro juicio, rebasa los límites de la facultad legal conferida a los Consejos Municipales en la Ley 106 de 1973, en razón a que la actividad hotelera está gravada por la Ley N° 83 de 22 de diciembre de 1976, "Por la cual se adoptan normas que introducen modificaciones relativas al régimen orgánico del IPAT" que en su artículo 4°, establece una tasa consistente en el 10% del valor total del importe de la cuenta de la totalidad del servicio de hospedaje, la cual será percibida por el Instituto Panameño de Turismo, entidad de carácter nacional. El texto de la citada disposición es el siguiente:

> "Artículo 4° ...
> f) La totalidad del servicio de hospedaje que por este medio se establece y que consiste en el diez por ciento (10%) del valor total de importe de la cuenta de hospedaje. Esta tasa será percibida por el Instituto Panameño de Turismo quien la reglamentará." ...

Por consiguiente, al gravar el Acuerdo impugnado la actividad correspondiente a Hoteles y Moteles, se viola la prohibición legal de la doble tributación, consagrado en el artículo 21 (ordinal 6), en concordancia con el artículo 79 de la Ley 106 de 1973. Es por ello que prospera el cargo de violación endilgado al artículo 21 de la citada Ley N° 106 de 1973.

En segundo lugar, el Acuerdo en mención en su artículo SEXTO, aforo 1.1.2.6, establece un impuesto anual para los automóviles y las motocicletas de B/.500.00 y 50.00 respectivamente, situación que es a todas luces ilegal, por razón de que esta actividad está regulada por el Decreto N° 160 de 7 de junio de 1993, "Por el cual se expide el Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de Panamá", que en su artículo 151, establece el Impuesto Nacional de Circulación, el cual corresponde recaudar al Municipio donde se encuentre registrado el vehículo o la motocicleta. El texto de dicho artículo es el que se transcribe a continuación:

> "ARTÍCULO 151. La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia por intermedio de los municipios, por autorización expresa de esta institución previo el pago de Impuesto Nacional de Circulación en el respectivo Municipio y la presentación del Paz y Salvo de Rentas y de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre."

Por tanto, al establecer el Acuerdo impugnado un impuesto anual para tales vehículos, infringe la prohibición legal de doble tributación, que se establece en el aludido artículo 21 de la Ley 106 de 1973. De allí entonces que, prospera el cargo de violación contra el artículo 21 de la Ley 106 de 1973.

En lo que respecta a la violación del artículo 38 de la Ley 106 de 1973, que consagra el principio de territorialidad de las leyes municipales (Acuerdos o Resoluciones), emitidas por el Consejo Municipal, que el recurrente endilga al artículo QUINTO, la Sala estima que sí se ha producido tal infracción, al indicar dicha disposición que tales tributos son de aplicación exclusiva para la Isla de Contadora.

La Ley 106 de 1973, es clara al establecer la facultad que tienen los Consejos Municipales de gravar con impuestos y demás contribuciones todas las actividades, industriales, comerciales o lucrativas de cualquier clase que se realicen en el Distrito (art. 74 de la ley ibidem), por lo que debe entenderse que la facultad legal conferida a los Consejos Municipales es la de gravar a los contribuyentes de todo el Distrito por la realización de las citadas actividades, y no parte de los contribuyentes o residentes del Distrito.

Por consiguiente, mal puede el Consejo Municipal de Balboa, gravar a los residentes o contribuyentes de la Isla de Contadora de manera distinta y exclusiva, de los demás contribuyentes del Distrito de Balboa. En tal sentido, el artículo 38 en mención, sostiene que los acuerdos o resoluciones municipales son de forzoso cumplimiento para todo el Distrito, por lo que debe entenderse, que la facultad legal atribuida a dichos Consejos está destinada a imponer tributos o contribuciones a las actividades que se realicen en todo el Distrito, no en parte de él, como lo dispone el Acuerdo impugnado en su artículo QUINTO.

Por lo expuesto, prospera el cargo de violación endilgado al artículo 38 de la Ley 106 de 1973.

También se aduce violado el artículo 57 (ordinal 1), de la Ley 106 de 1973, que establece la atribución que tiene el Tesorero Municipal de efectuar las recaudaciones del Municipio. Función que según alega el recurrente, ha sido rebasada por el artículo PRIMERO del Acuerdo impugnado, por razón de que el mismo le ha atribuido dicha función al Regidor Especial de la Isla de Contadora.

A juicio de este Tribunal, le asiste razón a la parte demandante en virtud de que al atribuir el artículo PRIMERO del Acuerdo Municipal N° 6 de 1995, la facultad de recaudación de los tributos municipales al Regidor de la Isla Turística de Contadora, lo hace en abierta contradicción a lo dispuesto en el artículo 17 (ordinal 6), de la Ley 106 de 1973, que claramente establece entre otras, que es función de los Consejos Municipales "crear o suprimir cargos municipales y determinar sus funciones, períodos, asignaciones y viáticos, de conformidad con lo que disponga la Constitución y las leyes vigentes".

Por ende, y dado que la facultad de recaudación como hemos visto, es una atribución que por Ley (artículo 57, ordinal 1), le corresponde al Tesorero Municipal, mal puede el aludido Acuerdo atribuir dicha facultad al Regidor Especial de la Isla de Contadora, por lo que, prospera el cargo de violación endilgado al artículo 57 (ordinal 1), de la Ley 106 de 1973.

En torno a la infracción del artículo 74 de la Ley 106 de 1973, que establece las actividades gravables por los Municipios, que según alega el recurrente, ha sido transgredido por el Código 1.1.2.5 del Artículo SEXTO del Acuerdo en mención, en razón de que el mismo pretende gravar a cada pasajero que llegue a la isla de Contadora en avión u otro medio de transporte comercial con una tasa de B/.1.00, la Sala procede a indicar lo siguiente:

Conforme lo dispone el artículo 74 de la Ley 106 de 1973, los Consejos Municipales sólo están facultados para gravar con impuestos municipales y contribuciones todas las actividades industriales, comerciales o lucrativas de cualquier clase que se realicen en el Distrito. Por su parte, el artículo 75 de la ley en mención, establece los tipos de negocios o actividades sujetos a dichos gravámenes, entre los que no se incluye la de gravar a las personas naturales o jurídicas por ser pasajeros.

En el presente caso, al gravarse a los pasajeros que lleguen a la Isla, el acuerdo en mención lo hace independientemente, de si éstos realizan, una actividad de carácter comercial o lucrativo, que de conformidad con lo expresado,

es la única facultad legal que tienen los Municipios para la imposición de gravámenes. Los pasajeros no están ejerciendo ninguna actividad (de carácter industrial, comercial o lucrativa), solamente están recibiendo el servicio de transporte a la Isla a cambio del pago de un pasaje en base a una tarifa legal, previamente establecida por la autoridades correspondientes. De allí que, prospera el cargo de infracción endilgado al artículo 74 de la Ley 106 de 1973.

En lo que respecta a los artículos DÉCIMO PRIMERO como el DÉCIMO SEGUNDO del Acuerdo N° 6 de 1995, que en su contenido señalan la obligación que tiene cualquier persona que establezca en la Isla de Contadora cualquier negocio, empresa o actividad gravable de comunicarlo a la Tesorería Municipal y a la Comisión Administradora, y la forma de distribución de las cargas impositivas por parte del Municipio de Balboa, a juicio de esta Superioridad, las mismas no son violatorias del orden impositivo legal vigente.

Los artículos 82 y 84 de la Ley 106 de 1973, claramente establecen la obligación que tiene toda persona que establezca en los Distritos de la República cualquier negocio, empresa o actividad gravable de comunicarlo inmediatamente al Tesoro Municipal, así como también disponen entre otros, que los impuestos, contribuciones, tasas, serán usados e invertidos en beneficio exclusivo del respectivo Distrito, que en efecto, es lo que se desprende del texto de los citados artículos DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO del Acuerdo Municipal N° 6 de 1995.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NULOS POR ILEGALES, los artículos QUINTO, SEXTO (Códigos 1.1.2.5, 1.1.2.5.43, y 1.1.2.6) del Acuerdo Municipal N° 6 de 2 de agosto de 1995, expedido por el Consejo Municipal de Balboa, y DECLARA QUE NO SON ILEGALES, los artículos DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO del referido Acuerdo Municipal N° 6 de 2 de agosto de 1995.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA LUQUE, CORONELL Y LAM, EN REPRESENTACIÓN DE UTRACOLPA, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS RESUELTOS N° 397 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1993 Y EL N° 153 DE 31 DE MAYO DE 1996, AMBOS DICTADOS POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Luque, Coronell y Lam, actuando en nombre y representación de UTRACOLPA, S. A., ha promovido demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declaren nulos, por ilegales, los Resueltos Ministeriales N° 397 de 25 de noviembre de 1993 y N° 153 de 31 de mayo de 1996, ambos dictados por el Ministro de Gobierno y Justicia.

Corresponde al Magistrado Sustanciador determinar la admisibilidad de la presente demanda.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, con la demanda contencioso-administrativa, ya sea de nulidad o de plena jurisdicción, debe acompañarse "una copia autenticada del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos". Sin embargo, cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la

certificación sobre su publicación, el demandante debe expresarlo así en la misma demanda y solicitar al Magistrado Sustanciador que pida dicha copia al funcionario respectivo, antes de que se admita la misma.

Adicionalmente, la parte final del artículo 775 del Código Judicial señala en su tenor literal lo siguiente:

> "Toda Ley, Decreto-Ley, Decreto de Gabinete, acuerdo, ordenanza, reglamento, resolución, dictamen, informe, fallo, documento o acto de cualquier género, emanado de alguna autoridad o funcionario de cualquier órgano del Estado o de un Municipio de cualquier entidad autónoma, semiautónoma o descentralizada y publicado en los Anales del Órgano Legislativo, en la Gaceta Oficial, ... hará plena prueba en cuanto a la existencia y contenido del documento.
> ...
> Exceptúase el caso en que el acto en cuestión sea objeto de la demanda, en el cual se aportará conforme a las normas comunes."

En el caso bajo estudio, el recurrente no aportó ni solicitó copia de los actos impugnados. Sólo hizo mención en la parte final de la demanda, de los números de gacetas oficiales en que se encontraban dichos resueltos ministeriales.

Considera así el Magistrado Sustanciador, que al no aportar el demandante copia autenticada del acto impugnado, ni haberla solicitado en la demanda, se ha inobservado uno de los requisitos fundamentales para la admisión de la misma por lo que de acuerdo al artículo 50 de la citada Ley, no debe admitirse.

De consiguiente, el suscrito Magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por la firma Luque, Coronell y Lam, en representación de UTRACOLPA, S. A., para que se declaren nulos, por ilegales, los Resueltos N° 397 de 25 de noviembre de 1993 y N° 153 de 31 de mayo de 1996, ambos dictados por el Ministro de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

IMPEDIMENTO

CALIFICACIÓN DE IMPEDIENTO DE LA MAGISTRADA KALIOPE TSIMOGIANIS, DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL PROCESO EN EL CUAL SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EL SEÑOR AVELINO SAMANIEGO, POR IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LAS RECAUDACIONES FISCALES EN EL MATADERO DE AZUERO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Kaliope Tsimogianis, Magistrada de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, ha manifestado impedimento para conocer del proceso que se sigue en la Dirección de Responsabilidad Patrimonial a Avelino Samaniego, por irregularidades en el manejo de las recaudaciones fiscales en el Matadero de Azuero, S. A.

La Magistrada Kaliope Tsimogianis fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

"Cursa a fojas 31 del expediente el poder especial otorgado a favor del licenciado AZAEL P. TSIMOGIANIS VILLALOBOS, quien resulta ser hermano de la suscrita, para que asuma su representación y defensa del señor SAMANIEGO en el caso mencionado".

A juicio de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, la causal de impedimento citada por la licenciada Tsimogianis, se adecua a lo establecido en el numeral 1 del artículo 749 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990.

En virtud de lo anterior, lo procedente es declarar legal el impedimento invocado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que es LEGAL el impedimento invocado por la Magistrada Kaliope Tsimogianis para conocer del proceso que se sigue en la Dirección de Responsabilidad Patrimonial a Avelino Samaniego, por irregularidades en el manejo de las recaudaciones fiscales en el Matadero de Azuero, S. A. y, en base al artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990, llama al Magistrado Suplente, para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL BUFETE VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DE LATINO AMERICANA DE REASEGUROS, S. A., (LARSA) LATIN AMERICAN REINSURANCE, COMPANY, INC., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° CNR-17 DE 7 DE JULIO DE 1993, EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE REASEGUROS DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE. MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Magistrado **EDGARDO MOLINO MOLA** ha presentado solicitud para que se le declare impedido y en consecuencia se le separe del conocimiento de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el bufete Vallarino, S. A. (LARSA) LATIN AMERICAN REINSURANCE, COMPANY, INC., para que se declare nulo por ilegal, la Resolución N° CNR-17 de 7 de julio de 1993, emitida por la COMISIÓN NACIONAL DE REASEGUROS DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, y para que se hagan otras declaraciones.

Sostiene el Magistrado MOLINO MOLA, para fundar su solicitud de impedimento que:

"Solicito, muy respetuosamente, a los Honorables Magistrados que declaren que es legal el impedimento que invoco para conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Bufete Arturo Vallarino, en representación de LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A., para que se declare nula por ilegal la Resolución N° CNR-17 de 7 de julio de 1993, emitida por la Comisión Nacional de Reaseguros del Ministerio de Comercio, toda vez que en la actualidad tengo pendiente una acusación particular interpuesta por el Honorable Legislador Arturo Vallarino (apoderado judicial de LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A.) en mi contra ante la Comisión

de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales de la Asamblea Legislativa.

Fundamento, mi impedimento en el numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial".

Considerando la manifestación del Magistrado MOLINO MOLA a la luz del numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial es dable resolver favorablemente su petición de que se declare impedido para conocer de este caso.

El texto de la precitada disposición legal en su numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial es el siguiente:

"Artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
...
11. Tener alguna de las partes proceso, denuncia o acusación pendiente o haberlo tenido dentro de los dos años anteriores, contra el Juez o Magistrado, su cónyuge, sus ascendentes, descendentes o hermanos; ..."

Por las razones expuestas, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento del Magistrado EDGARDO MOLINO MOLA, para conocer de este caso propuesto por el Bufete Vallarino, en representación de LATINO AMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (LARSA) LATIN AMERICAN REINSURANCE, COMPANY, INC., para que se declare nulo por ilegal, la Resolución N° CNR-17 de 7 de julio de 1993, emitida por la COMISIÓN NACIONAL DE REASEGUROS DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS.

De acuerdo con el artículo 78 del Código Judicial se designa al Magistrado, ROGELIO FÁBREGA Z. para que reemplace al Magistrado impedido.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO OSCAR VARGAS VELARDE, DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ANTECEDENTES N° 12-01-95-DAG-DEAE, QUE GUARDA RELACIÓN CON LOS FONDOS ASIGNADOS AL EX LEGISLADOR DÁMASO LOMBARDO DE LA COMARCA DE SAN BLAS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **OSCAR VARGAS VELARDE**, Honorable Magistrado de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, mediante oficio DRP N° 133-O-166, de 26 de noviembre de 1996, manifestó que está impedido para conocer y decidir el mérito del Informe de Antecedentes N° 12-01-95-DAG-DEAE que guarda relación con la investigación realizada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, para determinar el uso de los fondos asignados al Ex-legislador Dámaso Lombardo del Circuito Electoral 10-1 de la Comarca de San Blas, mediante el programa multiagencial de proyectos comunitarios de los legisladores del período 1984-1989, por las siguientes razones:

"... expreso mi impedimento para conocer del precitado Informe de Antecedentes, toda vez que mi esposa, la señora Aura E. de Vargas, con cédula de identidad personal N° 8-197-23 aparece en las fojas

> 44, 50, 53, 55, 56, 59, 62, 70, y otras del expediente, en función del cargo que desempeñaba en la Dirección General para el desarrollo de la Comunidad.
>
> Por lo anteriormente expuesto en atención a lo que disponen los artículos 749, numeral 1, 754 del Código Judicial; y en cumplimiento de lo expresado en el artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990".

El numeral 1 del artículo 749 del Código Judicial establece como una de las causales de impedimento "El parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre el Juez o su cónyuge, y alguna de las partes".

A juicio de los Magistrados que integran la Sala, no debe resolverse favorablemente lo solicitado, porque según consta a foja 7 del Informe de Antecedentes N° 12-01-95-DAG-DEAE cuyo mérito debe decidir el Magistrado **OSCAR VARGAS VELARDE**, que las personas que aparecen vinculadas a la irregularidad del uso de los fondos asignados al ex Legislador Dámaso Lombardo, mediante el programa multiagencial de proyectos comunitarios, son: el ex Legislador Dámaso Lombardo, Blanca Colman de Lombardo, Compañía de Ventas Blancol, S. A., Servi Seven, S. A., Ureña Rodríguez Co. y Luis Octavio Silva, y no habiéndose probado el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, entre ninguna de las partes y el Magistrado **OSCAR VARGAS VELARDE** o su cónyuge, no prospera dicha causal.

Adicionalmente, considera la Sala que los hechos expuestos por el Magistrado **OSCAR VARGAS VELARDE** no configuran ninguna de las causales del artículo 749 del Código Judicial. Si bien la esposa del Magistrado Vargas Velarde, Aura E. de Vargas, suscribió los documentos que aparecen en las fojas indicadas en el impedimento, que consisten en Comprobantes de Pago extendidos por la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad, Fondo Proyecto de Inversiones Comunitarias (DIGEDECOM), del Ministerio de la Presidencia, en las que certifica que "este Comprobante es correcto y que los servicios han sido prestados" (fs. 44, 50, 53, 56, 59, 62 y 70); este hecho no acredita su interés en el proceso, ya que lo que certifica dicha funcionaria como Directora de Administración y Finanzas, es que efectivamente se ha pagado a las empresas beneficiarias de los cheques, por los artículos o servicios descritos en la primera parte, registra los números de cuenta bancaria del fondo y un balance de débito y crédito, y al final del comprobante aparece el cheque expedido por la institución a favor de la empresa que ha vendido los artículos o prestado los servicios.

A juicio de la Sala, los documentos suscritos por la señora Aura E. de Vargas, esposa del Magistrado **OSCAR VARGAS VELARDE**, certifican que las empresas destinatarias de los cheques girados por la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad (DIGEDECOM), vendieron los artículos o prestaron los servicios descritos en la primera parte del Comprobante de Pago, mientras que la investigación contenida en el Informe de Antecedentes N° 12-01-95-DAG-DEAE consiste en "un examen de los desembolsos efectuados para determinar **las obras realizadas**" e incluye un avalúo por parte de la Dirección de Ingeniería de dichas obras, y determina irregularidades por la suma de B/.181,450.07, en el **uso de los fondos asignados**, y no en la prestación de los servicios, tales como:

1. Materiales y equipos **no recibidos** por las comunidades a las cuales se destinaron, B/.80,729.26;

2. De los cheques girados para la compra de plantas eléctricas, motosierras, implementos agrícolas **no recibidos** en las comunidades del Circuito 10-1, B/.28,465.56;

3. Se confeccionó contrato para la construcción de Comedor Infantil el cual **no se realizó**, no obstante se efectuó el pago, B/.13,608.41; y

4. Obras realizadas cuyo valor según avalúo, resultó inferior a las sumas efectivamente gastadas para realizarlas, 58,646.84. (Fs. 6 del informe de

antecedentes).

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL EL IMPEDIMENTO presentado por el licenciado OSCAR VARGAS VELARDE, en su calidad de Magistrado de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, y ORDENA que continúe conociendo del proceso que por responsabilidad patrimonial le sigue la DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL al ex Legislador Dámaso Lombardo Bennett, Luis Silva Espinosa y Blanca Colman de Lombardo.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA,SOLICITUD DE IMPEDIMENTO DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE PLUTARCO ANTONIO CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4-1 DE 20 DE FEBRERO DE 1992, PROFERIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, Y EL CONTRATO CELEBRADO POR EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL Y BERASVAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Por medio del escrito fechado el 11 de diciembre de 1996, el Magistrado Edgardo Molino Mola solicitó que se le separe del conocimiento de la demanda contencioso-administrativa de nulidad, interpuesta por la firma Rosas y Rosas, en representación de PLUTARCO ANTONIO CASTILLO, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 4-1 de 20 de febrero de 1992, proferida por la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional, y el contrato celebrado por el Banco Hipotecario Nacional y Berasvas, S. A.

En el escrito de manifestación de impedimento el Magistrado Molino Mola expresó:

"...
Esta solicitud la fundamento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943, en asocio con el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial, en virtud de que la demanda en comento fue presentada ante la Sala Tercera de la Corte por la licenciada ROSA MARI MOLINO PAZ quien es mi sobrina, actuando por ROSAS Y ROSAS, tal como se evidencia a folios 26-43 del expediente, y por tanto se encuentra en relación a mi persona en el tercer grado de consanguinidad".

Las normas legales en las que fundamenta la manifestación de impedimento textualmente preceptúan:

LEY 135 DE 1943:
"Artículo 78. Son causas de impedimento y recusación en los miembros del Tribunal de lo Contencioso-administrativo las siguientes:
...
3. Estar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con alguna de las partes o sus apoderados; ...

CÓDIGO JUDICIAL:
Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual está impedido. Son causales de impedimento:

> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo; ...

El impedimento manifestado por el Magistrado Edgardo Molino Mola configura las causales que señala el numeral 3 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943, y el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial, por lo que el mismo debe declararse legal.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola, lo separa del conocimiento del negocio y para reemplazarlo designa al Magistrado Rogelio A. Fábrega Z. de la Sala Civil quien le sigue en turno.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO LUIS CERVANTES DÍAZ, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA & DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA FAMILIAR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 6337-94 SUB-D. G., DE 30 DE MAYO DE 1994, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Honorable Magistrado Luis Cervantes Díaz ha manifestado impedimento para conocer de la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la resolución N° 6337-94 SUB- D. G., de 30 de mayo de 1994, emitida por la Subdirectora General de la Caja de Seguro Social, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Luis Cervantes Díaz fundamenta el impedimento invocado, señalando que es socio de la firma Arosemena y Díaz que aparecen como demandantes en este negocio.

A juicio de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, la causal de impedimento citada por el Magistrado Luis Cervantes Díaz, se adecua a lo establecido en el numeral 4 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con los numerales 2 y 5 del artículo 749 del Código Judicial.

En virtud de lo anterior, lo procedente es declarar legal el impedimento invocado.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (contencioso-administrativa) de la Corte Suprema Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por el MAGISTRADO LUIS CERVANTES DÍAZ, la separan del negocio interpuesto y proceden a llamar al MAGISTRADO RAFAEL GONZÁLEZ, de la Sala Primera, para que integre la Sala.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

EXCEPCIÓN DE NOVACIÓN Y DE ILEGITIMIDAD DE UNO DE LOS DEMANDADOS INTERPUESTO POR EL LCDO. ISAÍAS BARRERA EN REPRESENTACIÓN DE JUSTINIO CEDEÑO PÉREZ DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A JUSTINO CEDEÑO, LECHERÍA LA VIRGINIA, S. A. Y JOSÉ RAFAEL SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Isaías Barrera en nombre y representación de **JUSTINO CEDEÑO PÉREZ** ha interpuesto excepción de novación y de ilegitimidad de uno de los demandados, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Banco de Desarrollo Agropecuario le sigue al incidentista, a **LECHERÍA AGROPECUARIO** y **JOSÉ RAFAEL SÁNCHEZ.**

ARGUMENTO DEL INCIDENTISTA

El incidentista sustenta la excepción de novación de la obligación, y la excepción de ilegitimidad de uno de los demandados, bajo el argumento de que el Banco de Desarrollo Agropecuario procedió a demandarlo a través de un proceso ejecutivo hipotecario de cobro coactivo, por la supuesta obligación que mantenía con dicho Banco. Que según Escritura Pública N° 8907 de 13 de octubre de 1993, el Banco de Desarrollo Agropecuario declaró cancelada la hipoteca y anticresis que tenía la entidad bancaria a su favor y adquirida por el señor **CEDEÑO PÉREZ.** Este último a su vez vende unas fincas de su propiedad a la **Lechería La Virginia, S. A.**, y esta a su vez celebra contrato de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética con el Banco de Desarrollo Agropecuario, que consta en Escritura Pública desde el 3 de enero de 1994.

Continúa manifestando el recurrente que según la Escritura Pública N° 8907 de 13 de octubre de 1993, consta que el señor **JUSTINO CEDEÑO PÉREZ** novó la obligación que el mantenía con el Banco de Desarrollo Agropecuario, y la misma fue asumida por **Lechería La Virginia, S. A. y José Rafael Sánchez.** Que esto trae como consecuencia que la obligación demandada por el Banco, sea inexistente por la novación aludida.

CONTESTACIÓN DEL GERENTE REGIONAL DEL
BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DE LA PROCURADORA

Al corrérsele traslado de las excepciones al Gerente Regional del Banco de Desarrollo Agropecuario este se opuso a las mismas.

De igual manera se le corrió traslado al Procurador de la Administración quien mediante Vista N° 426 de 26 de septiembre de 1996, solicitó a los Magistrados que integran esta Sala Tercera que declararan probadas las excepciones propuestas.

El criterio de la Procuradora de la Administración consiste en que consta en el expediente de cobro coactivo que lleva el Banco de Desarrollo Agropecuario, es que el señor **JUSTINO CEDEÑO PÉREZ** vendió las Fincas N° 9701 y N° 42,295, así como los derechos posesorios sobre un globo de terreno de 9 hectáreas más 8,990 m2. a la Sociedad **Lechería La Virginia, S. A.** quedando liberado con dicha venta de toda obligación con el Banco. Que igualmente consta que el Banco de Desarrollo Agropecuario, al aceptar el contrato de compraventa entre el señor **JUSTINO CEDEÑO**

y la sociedad antes mencionada novó la obligación y concedió nuevo préstamo a dicha sociedad, tal como consta en la Escritura N° 8,907 de 13 de octubre de 1993, visible de foja 8 a 24 del expediente de cobro coactivo.

Por último manifiesta la Procuradora, que también se ha probado la excepción de ilegitimidad de personería del demandado **JUSTINO CEDEÑO PÉREZ**, ya que en la Escritura Pública N° 8,907 de 13 de octubre de 1993 señala el Banco `que se declara cancelada la hipoteca y anticresis de bienes muebles e inmuebles y prenda agraria constituida a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario, por Justino Cedeño Pérez, mediante Escritura Pública N° 2,301 de 4 d marzo de 1983 de la Notaría Tercera del Circuito ... Que en tal virtud se redime de todo gravamen para con el Banco de Desarrollo Agropecuario, las Fincas N° 9,701, Tomo 303, Folio 466 y la N° 42,295, Tomo 1,019, Folio 166, ambas de la Sección de la Propiedad del Registro Público'.

CRITERIO DE LA SALA TERCERA

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera entran a resolver las excepciones propuestas:

De acuerdo a las constancias que obran e el expediente, coincidimos con el argumento de la Procuradora de la Administración , en el sentido de que consta en el expediente prueba fehaciente de que el señor **JUSTINO CEDEÑO PÉREZ** fue relevado de la deuda que mantenía con el Banco de Desarrollo Agropecuario, tal como constan en las cláusulas primera, segunda y tercera de la Escritura Pública N° 8,907 de 13 de octubre de 1993 (ver fojas 9 y 10 de los antecedentes de este proceso). Su parte pertinente dice lo siguiente:

> **"PRIMERO:** Que declara cancelada la hipoteca y anticresis de bienes muebles e inmuebles y Prenda Agraria constituida a favor del **BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO**, por **JUSTINO CEDEÑO PÉREZ**, mediante Escritura Pública número dos mil trescientos uno (2301) del cuatro (4) de marzo de mil novecientos ochenta y tres (1983), de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá e inscrita a Ficha cero treinta y siete mil seiscientos uno (037601), Rollo cuatro mil doscientos cincuenta y siete (4257), Ficha dieciséis mil seiscientos setenta y uno (16671), Imagen cero ciento sesenta y ocho (0168), de la Sección de Micropelículas (Hipoteca y Anticresis), a la Ficha dieciséis mil seiscientos setenta y uno (16671), Rollo cuatro mil doscientos cincuenta y siete (4257), Imagen cero ciento ochenta y ocho (0188), de la Sección de Micropelículas (Hipotecas de Bienes Muebles) y a la Ficha P.cero cero cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro (P.004434), Rollo cuatro mil doscientos cincuenta y siete (4257), Imagen cero doscientos ocho (0208), de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público y me pidió que hiciera constar en Escritura Pública lo siguiente: **SEGUNDO:** Que en tal virtud se redime de todo gravamen para con el **BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO**, las fincas número nueve mil setecientos uno (9701), inscrita al tomo trescientos tres (303), Folio cuatrocientos sesenta y seis (466) y Finca número cuarenta y dos mil doscientos noventa y cinco (42295), inscrita al tomo mil diecinueve (1019), folio ciento sesenta y seis (166), ambas de la Sección de la Propiedad del Registro Público. **TERCERO:** Se hace la presente liberación por razón de que la **LECHERÍA VIRGINIA, S. A.**, ha novado la Operación número siete-ochenta y tres (7-83), Programa trescientos setenta y seis (376) a nombre de **JUSTINO CEDEÑO PÉREZ**, y se deja constancia que esta cancelación no tendrá ningún efecto legal sino se inscribe conjuntamente con el contrato de préstamo que le otorga el **BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO** a **LECHERÍA LA VIRGINIA, S. A.**, y **JOSÉ RAFAEL SÁNCHEZ CÓRDOBA."**

Cabe agregar que luego que el Banco de Desarrollo Agropecuario liberara al señor **JUSTINO CEDEÑO PÉREZ** de la hipoteca y anticresis, celebró contrato de préstamo con la empresa **Lechería La Virginia, S. A.**, después de que el señor **CEDEÑO** suscribiera con esta sociedad un contrato de compraventa en donde le

vendía las fincas, que un principio estuvieron gravadas a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario, y que esta entidad liberó de acuerdo a la Escritura Pública N° 8,907 de 13 de octubre de 1993, antes mencionada.

El artículo 1089 del Código Civil es claro al disponer que las obligaciones pueden modificarse, entre otras situaciones, por la sustitución de la persona del deudor. En este sentido y en concordancia con otras disposiciones del Código Civil que tratan la misma materia (artículo 1090), es muy importante establecer la sustitución del deudor de manera clara, para que se extinga la obligación y este requisito se cumplió en la Escritura Pública anteriormente identificada.

Concluimos que en el caso in examine, el incidentista ha demostrado palmariamente que fue relevado de los gravámenes de hipoteca y anticresis a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario, y quien realmente aparece como obligado para con dicha entidad bancaria, es la sociedad **Lechería La Virginia, S. A.**. Por esto, somos del convencimiento de que las excepciones de novación y de ilegitimidad de uno de los demandados han sido probados.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARAN probadas las excepciones de novación y de ilegitimidad, propuesta por el licenciado Isaías Barrera en nombre y representación de JUSTINO CEDEÑO PÉREZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ DOMINGO FAJARDO, EN REPRESENTACIÓN DE CHATARRA SUDAMERICANA, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO LE SIGUE A CHATARRA AMÉRICA CENTRAL, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Fajardo Gómez, en representación de CHATARRA SURAMERICANA, S. A., ha interpuesto tercería excluyente dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, del Ministerio de Hacienda y Tesoro, a CHATARRA AMÉRICA CENTRAL, S. A.

La tercerista solicita a esta Sala que se excluya del embargo decretado mediante el auto de 27 de octubre de 1995, por el Administrador Regional de Ingresos, de la provincia de Panamá, diez mil toneladas de chatarra ferrosa depositada en el Puerto de Samba Bonita, Corregimiento de Cativá, Colón y en Concepción, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí, adquirida por Chatarra Suramericana, S. A. mediante el contrato de compraventa celebrado con la sociedad Chatarra América Central, S. A.

En los hechos de su demanda, el apoderado de la tercerista manifestó que la sociedad Chatarra Suramericana, S. A., compró a Chatarra América Central, S. A. diez mil toneladas de chatarra ferrosa por la suma de B/.300,000.00, tal como consta en la Escritura Pública N° 5997 otorgada el 27 de mayo de 1994 por la Notaría Décima del Circuito Notarial de Panamá; que mediante Resolución dictada el 27 de octubre de 1995, por el Administrador Regional de Ingreso de la Provincia de Panamá, decretó formal embargo contra Chatarra América Central, S. A. hasta la suma de B/.158,409.23 y ordenó a las administraciones regionales de ingreso el inventario y avalúo de la chatarra en los centros de acopio de la

sociedad ejecutada, localizados en diferentes partes del país, entre los cuales están los centros de Puerto Samba Bonita en Colón y el de Concepción, Chiriquí, en donde está depositada la chatarra que compró Chatarra Suramericana, S. A.

Admitida la tercería se corrió en traslado a la ejecutada, a la Procuraduría de la Administración y al Juez Ejecutor de la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá.

Por medio de la Vista Fiscal N° 403 dictada el 11 de septiembre de 1996, la señora Procuradora de la Administración contestó el traslado y estuvo de acuerdo con la pretensión de la tercerista, porque de conformidad con los documentos aportados, es evidente que cumple con lo señalado en el artículo 1788 del Código Judicial.

Consta a foja 69 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo, que a través del Auto dictado el 20 de octubre de 1995, por el Juzgado Ejecutor de la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, se libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra Chatarra América Central, S. A. y a favor del Tesoro Nacional, por la suma de B/.158,409.23, más los recargos e intereses que se venzan hasta el completo pago de la obligación, así como los gastos de cobranza; y que mediante Resolución dictada el 27 de octubre de 1995, se decretó formal embargo sobre los bienes de la ejecutada.

De acuerdo con lo previsto en los ordinales 1, 2 y 4 del artículo 1788 del Código Judicial, las tercerías excluyentes pueden introducirse desde que se decrete el embargo de los bienes hasta antes de adjudicarse el remate; su tramitación es la señalada para las excepciones en proceso ejecutivo, y en ella se reputarán demandados el ejecutante, el ejecutado y los demás terceristas que hubiere; sólo pueden promoverse fundándose en un título de dominio o derecho real cuya fecha sea anterior al auto ejecutivo o al auto de secuestro que haya precedido el embargo; y si se trata de bienes muebles, la anterioridad del título debe referirse a la fecha del auto ejecutivo o de secuestro según el caso.

En el presente caso la tercerista presentó copia, expedida por la Notaría Décima de Circuito, de la Escritura N° 5997 fechada el 27 de mayo de 1994, mediante la cual la sociedad Chatarra América Central, S. A., y Chatarra Suramericana, S. A., celebran contrato de compraventa de bienes muebles, autorizados por actas de junta de accionistas de cada sociedad, y cuya cláusula primera establece que la vendedora es propietaria "de diez mil toneladas de Chatarra Ferrosa adquirida del Estado Panameño que se encuentra depositada en el Puerto de Samba Bonita, Corregimiento de Cativá, Distrito de Colón", cláusula que posteriormente fue corregida adicionándole que la chatarra ferrosa también estaba depositada "en Concepción, distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí." (Fs. 2 y su reverso).

La cláusula séptima del contrato de compraventa entre Chatarra América Central, S. A. y Chatarra Suramericana, S. A. señala que "LA COMPRADORA entrará en disposición de los bienes a partir de la firma del presente contrato de compraventa y asumirá todos los gastos para el traslado a los lugares que disponga LA COMPRADORA, para tal efecto tendrá noventa (90) días para el mismo." (Fs. 4).

Tal cual lo establece el numeral 4 del artículo 1788 del Código Judicial, en las tercerías excluyentes son admisibles todas las pruebas con que pueda acreditarse los derechos reales sobre bienes muebles. En el presente caso la tercerista probó que su derecho real es anterior al auto ejecutivo, pero no probó que la chatarra embargada en los centros de acopio es la misma objeto del contrato de compraventa celebrado el 18 de marzo de 1994, porque no fue retirada en la fecha pactada en el correspondiente contrato, ya según la cláusula séptima, la compradora debió hacerlo en un plazo de 90 días a partir del día en que se firmó.

Adicionalmente la Sala observa que la cláusula primera de la Copia de la Escritura N° 5997 de 27 de mayo de 1994 de la Notaría Décima del Circuito de la Provincia de Panamá, fue adicionada con la frase "y en Concepción, distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí", corrección que no es válida por no reunir los

requisitos establecidos en el artículo 1733 del Código Civil, cuyo párrafo segundo establece, en relación con las correcciones de Escrituras otorgadas ante Notario, lo siguiente:

> "Artículo 1733. ...
>
> En todos los casos de este artículo se pondrá a la margen del respectivo instrumento y enfrente de lo corregido, una nota repitiendo íntegramente las palabras enmendadas, subrayadas o sobrepuestas, expresando su estado, y si valen o no, nota que será suscrita con la firma usual de los otorgantes, de los testigos instrumentales y del notario. Si por la mucha extensión de lo corregido no cupiere la nota al margen, se pondrá aquélla al fin del instrumento; y si ya estuviere éste firmado, en seguida de él, firmando la nota como queda dicho, los otorgantes, los testigos y el notario."

Como quiera que no ha quedado debidamente acreditado que la chatarra embargada es la que compró la sociedad Chatarra Suramericana, S. A., ya que no se probó que esos bienes no fueron retirados de los depósitos de la ejecutada en el término convenido en el contrato, y por tanto la chatarra allí depositada es la que compró Chatarra Suramericana, S. A., en mayo de 1994, la tercería excluyente promovida debe declararse no probada.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADA la tercería excluyente promovida por CHATARRA SURAMERICANA, S. A., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá a CHATARRA AMÉRICA CENTRAL, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO A. DE YCAZA DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE GARRIDO & GARRIDO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO, QUE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, LE SIGUE A LA EMPRESA AEROVÍAS LAS AMÉRICAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ricardo Alberto De Ycaza Díaz, en representación de la firma GARRIDO & GARRIDO, ha interpuesto tercería coadyuvante dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL a AEROVÍAS DE LAS AMÉRICAS, S. A.

La tercerista fundamenta la pretensión de su representada en los hechos siguientes:

> "Primero: Con fecha 13 de abril de 1993, el señor Ramón E. Álvarez otorgó un pagaré a favor de Garrido & Garrido, por la suma de Doscientos Sesenta Mil Dólares (US $260,000.00), moneda legal de los Estados Unidos de América, e intereses a una tasa anual de dieciocho por ciento (18%), con vencimiento el día 31 de mayo de 1993.
>
> Segundo: El mencionado pagaré otorgado y librado por Ramón E. Alvarez, en su propio nombre y en nombre y representación de

AEROVÍAS LAS AMÉRICAS, S. A., KOKO DEVELOPMENT, INC., AIR LEASING CORPORATION, S. A. y NAKED GUN CORP., S. A., se encuentra vencido desde el 31 de mayo de 1993 y no ha sido pagado por los obligados antes mencionados.

Tercero: Hasta la fecha de la presente solicitud, **GARRIDO & GARRIDO,** no ha recibido de los demandados el pago de los **Doscientos Sesenta Mil Dólares (B/.260,000.00),** moneda legal de los Estados Unidos de América que es el valor del pagaré, más los intereses vencidos al 31 de mayo de 1993, y que corresponden a la suma de que son deudores los demandados, siendo la obligación de plazo vencido, líquida y exigible.

Cuarto: Los deudores renunciaron expresamente al domicilio, a la presentación de este documento, al aviso de haber sido desatendido el documento, al requerimiento o intimación de pago y a los trámites del juicio ejecutivo, y relevan a **EL ACREEDOR** de la obligación de prestar fianza de costas en relación con cualquier ejecución o juicio relativo al presente documento." (Fs. 5 y 6).

La tercerista denunció bienes de la ejecutada y aportó como prueba pagaré por la suma de US $260,000.00, de 13 de abril de 1993, suscrito por Aerovías las Américas, Koko Development, Inc., Air Leasing Corporation, S. A., Naked Gun Corp., S. A., Eternity Bound, Corp., Surrender Investment, Inc., Lewiston Investment, S. A. y por Garrido & Garrido, debidamente notariado por el Notario Público Quinto del Circuito de Panamá el día 16 de diciembre de 1994 (fs. 1 a 3).

Admitida la tercería, se corrió en traslado a los ejecutados, a Omicron Panamá Corporation, al Juez Ejecutor de la Dirección General de Aeronáutica Civil y a la señora Procuradora de la Administración.

La señora Procuradora de la Administración contestó el traslado mediante la Vista Fiscal N° 440 de 2 de octubre de 1996, señalando que la tercería propuesta es extemporánea, porque la acción para el cobro del pagaré ha prescrito, y que además, no se aportó copia autenticada de las resoluciones mediante las cuales el Juez Ejecutor de la Dirección de Aeronáutica Civil libró mandamiento de pago y decretó formal secuestro contra Aerovías Las Américas, S. A.

El Juez Ejecutor de la Dirección de Aeronáutica Civil contestó el traslado negando todos los hechos y el derecho invocado por la tercerista.

Los representantes judiciales de la ejecutada y de Omicron Panamá Corporation, presentaron sendos escritos que fueron recibidos en la Secretaría por insistencia, con fundamento en el artículo 476 del Código Judicial.

En la presente tercería no consta la copia autenticada del auto ejecutivo dictado en contra de la ejecutada por la Dirección de Aeronáutica Civil, ni del auto de secuestro de los bienes propiedad de ésta, así como tampoco se identificó en la demanda dichas resoluciones, sino que la parte actora se limitó a señalar que otorgaba poder especial, amplio y suficiente al licenciado Ricardo Alberto De Ycaza Díaz para que "soliciten a su despacho se declare TERCERÍA coadyuvante en el Proceso de cobro coactivo que se enuncia en el margen superior del presente escrito.", en el que especificó que el proceso es el seguido por la DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL -VS- AEROVÍAS DE LAS AMÉRICAS, S. A.

En cuanto al criterio expresado por la señora Procuradora de la Administración, esta Sala debe señalar que la prescripción de la acción para el cobro de la deuda derivada del título ejecutivo presentado por la tercerista debe ser alegada por la ejecutada, pero comparte el criterio emitido en relación con la necesidad de que conste la fecha del auto ejecutivo que libra mandamiento de pago en la jurisdicción coactiva, con el propósito de comprobar los presupuestos contenidos en el numeral 5 del artículo 1794 del Código Judicial, el cual establece literalmente lo siguiente:

"Artículo 1794. Las demandas de tercerías coadyuvantes se sujetarán a las siguientes disposiciones:
...
5. La tercería coadyuvante debe apoyarse en alguno de los documentos que presten mérito ejecutivo y de fecha cierta anterior al auto de embargo. Pero si se tratare de las sentencias a que se refieren los ordinales 1 y 2 del artículo 1639, las tercerías serán admisibles con fecha posterior, siempre que el proceso, en que dicha sentencia se hubiere dictado se haya promovido con anterioridad al auto ejecutivo; y ..." (El resaltado es de la Sala).

En virtud de que en los hechos de la tercería, la parte actora no menciona el auto ejecutivo, ni lo aduce como prueba, no puede esta Sala constatar si la misma reúne los presupuestos procesales exigidos por la norma y por tanto, debe declararla no probada.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADA la tercería coadyuvante propuesta por el licenciado Ricardo A. De Ycaza Díaz, en representación de GARRIDO & GARRIDO, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que la DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, le sigue a la EMPRESA AEROVÍAS LAS AMÉRICAS, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ELOY ALFARO (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA EXCLUYENTE INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA CORTÉS EN REPRESENTACIÓN DE OMICRON PANAMÁ CORPORATION, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE AERONÁUTICA CIVIL LE SIGUE A AEROVÍAS LAS AMÉRICAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Alma Cortés, en representación de OMICRON PANAMÁ CORPORATION, ha interpuesto tercería excluyente dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, a AEROVÍAS LAS AMÉRICAS.

La tercerista fundamenta principalmente su pretensión señalando que en el proceso ejecutivo por cobro coactivo seguido por Aeronáutica Civil contra Aerovías Las Américas, S. A. se cautelaron bienes de la empresa entre los que se inventarió una copiadora DC-1435, serie 461122560 con un valor de B/.1,795.50, vendida por Omicron Panamá Corporation a la ejecutada, mediante el contrato de 31 de agosto de 1995, cuya cláusula octava establece que el vendedor conserva su derecho de dominio sobre el artículo hasta tanto no se haya pagado totalmente el precio estipulado.

Señaló que, mediante orden de pedido de 22 de agosto de 1995, Omicron Panamá Corporation entregó la copiadora Mita a Aerovías Las Américas, quien abonó la suma de B/.359.10 y firmó cuatro letras por el mismo valor.

La tercerista, entre otras pruebas, presentó copia autenticada del contrato de venta N° 2193 de 31 de agosto de 1995, suscrito entre Omicron Panamá Corporation y Aerovías Las Américas, también adujo como prueba el expediente contentivo del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Dirección de Aeronáutica Civil a Aerovías Las Américas.

Admitida la tercería se corrió en traslado al Juez Ejecutor de la Dirección

de Aeronáutica Civil, a la señora Procuradora de la Administración, a Omicron Panamá Corporation y posteriormente, mediante providencia de 24 de julio de 1996, se ordenó correrle traslado a la ejecutada Aerovías Las Américas, quien a través de su apoderado judicial se notificó el 12 de agosto de 1992, sin presentar escrito de contestación a la tercería interpuesta (fs. 27 y reverso).

La señora Procuradora de la Administración, en su Vista Fiscal N° 223 de 23 de mayo de 1996, solicitó que se declare no probada la presente tercería, porque Omicron Panamá Corporation no acreditó que el comprador reconociera su firma en el contrato de compraventa con retención de dominio, y por tanto ese documento privado no es auténtico.

Consta a foja 6 y 7 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo que mediante sendos autos de 27 de octubre de 1995, la Dirección de Aeronáutica Civil libró mandamiento de pago contra Aerovías Las Américas hasta la concurrencia de B/.103,051.31, en concepto de alquileres, consumo de energía eléctrica y uso de teléfono, más los recargos, intereses legales y gastos de cobranza, y decretó formal secuestro sobre los bienes, negocios, crédito, valores, dinero en efectivo, y cualesquiera otra suma de dinero que tenga o deba recibir de terceras personas la ejecutada, elevando dicho secuestro a la categoría de embargo el 15 de enero de 1996, y ordenando que se fijara la fecha del remate.

En el expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo consta el acta de inventario de mobiliario, equipo y piezas de aviones de Aerovías Las Américas, levantado por la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección de Aeronáutica Civil el 14 de diciembre de 1995, en el que se encuentra descrita la fotocopiadora Marca Mita, Modelo DC1435, y a la cual se le hizo la anotación de que era alquilada y que estaba dañada.

Según lo establecen los numerales 1, 2 y 4 del artículo 1788 del Código Judicial, las tercerías excluyentes pueden introducirse desde que se decrete el embargo de los bienes hasta antes de adjudicarse el remate; su tramitación es la señalada para las excepciones en proceso ejecutivo, y en ella se reputarán demandados el ejecutante, el ejecutado y los demás terceristas que hubiere; sólo pueden promoverse fundándose en un título de dominio o derecho real cuya fecha sea anterior al auto ejecutivo o al auto de secuestro que haya precedido el embargo; y si se trata de bienes muebles, la anterioridad del título debe referirse a la fecha del auto ejecutivo o de secuestro según el caso; y para ello son admisibles todas las pruebas con que pueda acreditarse los derechos reales en bienes de esa clase.

Según el contrato de compraventa con retención de dominio presentado por la tercerista, Aerovías Las Américas abonó en el mes de agosto de 1995, al costo total de la fotocopiadora, la suma de B/.359.10, quedándole pendiente el pago de cuatro letras mensuales por igual cantidad cada una, que debían cancelarse en el mes de diciembre de 1995, por lo cual, al momento de dictarse el auto de secuestro de los bienes muebles ubicados dentro del local ocupado por la ejecutada, el 27 de octubre de 1995, no se había completado el pago de la referida fotocopiadora, conservando la tercerista el dominio de dicho bien mueble.

La Sala considera que la tercerista acreditó su título de dominio sobre la fotocopiadora marca Mita, modelo DC-1435, porque Aerovías Las Américas, en su calidad de ejecutada fue debidamente notificada de la tercería excluyente presentada por Omicron Panamá Corporation y no objetó la firma de su representante en dicho documento privado, por tanto debe considerarse como auténtico, tal cual lo dispone el numeral 3 del artículo 843 del Código Judicial en concordancia con el artículo 848 del mismo Código:

> "Artículo 843. Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público. El documento privado es auténtico en los siguientes casos:
> ...
> 3. Si habiéndose aportado al proceso, no hubiere sido tachado u objetado en los términos del artículo 848;

...
Artículo 848. Un documento privado se tendrá por reconocido cuando hubiere obrado en el proceso con conocimiento de la parte que lo firmó, de sus causahabientes o de su apoderado, si la firma no hubiere sido negada dentro del término del traslado del escrito con el cual fue presentado.

Si la parte negare expresa y directamente la firma, estará a cargo del presentante la comprobación de su autenticidad. Si la firma del documento no fuere negada, pero sí su contenido o fuese impugnado de falso, corresponderá a la parte que reconoció la firma, comprobar la falsedad o alteración alegada. ..."

Por lo anteriormente expresado y por el hecho de que la propia Dirección de Aeronáutica Civil reconoció en el Acta de Inventario levantado, que la máquina fotocopiadora no es de propiedad de la empresa ejecutada, corresponde a esta Sala declarar probada la presente tercería excluyente.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA la tercería excluyente interpuesta por la licenciada Alma Cortés en representación de OMICRON PANAMÁ CORPORATION, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL le sigue a AEROVÍAS LAS AMÉRICAS.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ELOY ALFARO (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PAGO E INEXISTENCIA DE MOROSIDAD POR ERROR ARITMÉTICO, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS EN REPRESENTACIÓN DE ROSA ELVIRA SERRACÍN, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo Ríos, actuando en nombre y representación de ROSA ELVIRA SERRACÍN, ha promovido y sustentado recurso de apelación contra la Resolución de 24 de septiembre de 1996, dictada por el Magistrado Sustanciador en las excepciones interpuestas dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Caja de Ahorros le sigue a su representada.

Mediante la resolución de 24 de septiembre de 1996, se acogió como prueba aducida por el Juez Ejecutor, el expediente ejecutivo por cobro coactivo que la Caja de Ahorros le sigue a la excepcionante, se admitieron como pruebas la copia autenticada del certificado de detalle de liquidación expedido por la Caja de Ahorros el 27 de agosto de 1996, a nombre de Rosa Serracín, la solicitud N° 1984 expedida por la Caja de Ahorros (Casa Matriz), a favor de Rosa Serracín el 1° de marzo de 1985 y la certificación expedida por la Caja de Ahorros el 11 de mayo de 1996, y no se admitió el peritaje aducido por la excepcionante, por no indicar los puntos sobre qué ha de versar el dictamen de los peritos. Para la práctica de las pruebas se señaló un término de diez días.

Manifiesta el apelante en el escrito de sustentación del recurso de apelación que:

"... la única manera de establecer que existe un error aritmético en la liquidación del préstamo de mi representada es verificando en su

totalidad todos los movimientos de las cuentas, documentos y sus registros de los préstamos citados por la relación contable y jurídica obviamente existente entre ambos." (Fs. 29).

En el presente caso la parte actora ha interpuesto recurso de apelación contra el auto mediante el cual el Magistrado Sustanciador de las excepciones interpuestas por Rosa Elvira Serracín, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros, admitió algunas pruebas y no admitió otras; por lo que se pasa a resolver.

Aunque es cierto, como indica el Magistrado Sustanciador que el excepcionante al aducir el peritaje no presentó el cuestionario correspondiente, es cierto, asimismo que conforme al artículo 954, segundo párrafo del Código Judicial, el juez puede ordenar la práctica de la prueba, a más de que conforme al artículo 953, el juez puede asistirse por uno o más peritos, con el fin de descubrir la verdad sustancial.

Siendo ello así, como en efecto lo es, el recurso es procedente.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMAN el auto dictado el 24 de septiembre de 1996, mediante el cual el Magistrado Sustanciador admitió algunas pruebas y no admitió otras, en las excepciones interpuestas dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Caja de Ahorros le sigue a ROSA ELVIRA SERRACÍN y admite la prueba pericial solicitada, y DISPONE que se proceda conforme a los artículos 954 y 956 y siguientes y concordantes del Código Judicial y CONFIRMA el auto apelado en todo lo demás.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ELOY ALFARO

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL PONCE GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE BENJAMÍN RÍOS, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, SUCURSAL DE VOLCÁN, A WALTER SANTAMARÍA E ISABEL MIRANDA O ISABEL SANTAMARÍA. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Rafael Ponce González, en representación de BENJAMÍN RÍOS, ha interpuesto tercería excluyente dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, SUCURSAL DE VOLCÁN, a WALTER ELIÉCER SANTAMARÍA e ISABEL MIRANDA o ISABEL SANTAMARÍA.

La tercerista solicita a esta Sala que se levante el embargo decretado sobre la futura cosecha de papa de la variedad Amigo y Granola, sembradas en la finca N° 5282, inscrita al Tomo 492, Folio 70, de la Provincia de Chiriquí, que pertenece a su representado, y que se ordene depositar el dinero producto de la venta de los bienes inventariados, avaluados y dados en depósito, objeto de la presente tercería excluyente. Además fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:

"PRIMERO: El Juez Ejecutor del **BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ÁREA OCCIDENTAL**, decretó embargo sobre la futura cosecha de papa sembrada en la Finca 5282, inscrita al Tomo 492, Filio 70, de la Provincia de Chiriquí.

SEGUNDO: El Juez Ejecutor del **BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ÁREA OCCIDENTAL**, dictó la Resolución del 20 de junio de 1995, dentro del proceso de jurisdicción coactiva, en contra del señor **WALTER ELIÉCER SANTAMARÍA MIRANDA e ISABEL MIRANDA (Nombre Legal) o ISABEL SANTAMARÍA (Nombre usual)**, como si estos fueran los dueños de la papa sembrada en la Finca 5282, inscrita en el Tomo 492, Folio 70 de la provincia de Chiriquí.

TERCERO: La papa sembrada en la Finca 5282, inscrita al Tomo 492, Folio 70, pertenece a mi representado, ya que la misma fue sembrada como producto de la compra de 200 quintales de semillas hechas al señor **RICAUTER PITTÍ**, que corresponden a 60 quintales de papa variedad Amigo y 140 quintales variedad Granola.

CUARTO: Los señores **SEBASTIÁN RÍOS y OMAR RÍOS GALLEGOS** le arrendaron a mi representado 12 hectáreas de la Finca 5282, inscrita al Tomo 492, Folio 70, que es el sitio en donde se encuentran sembrados y por cultivar las papas objeto del embargo decretado por el Juez Ejecutor del **BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ÁREA OCCIDENTAL.**

QUINTO: El Juez Ejecutor, procedió el 21 de junio de 1995 al inventario, avalúo y depósito de las papas que se encuentran sembradas en la Finca 5282, inscrita al Tomo 492, Folio 70." (Fs. 5 y 6).

Admitida la tercería, se corrió en traslado a los ejecutados, a la Procuradora de la Administración y al Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Volcán, y se ordenó suspender el remate.

La representante judicial del Banco Nacional de Panamá contestó la tercería negando todos los hechos, pruebas y derecho de la demanda y señaló que el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional, mediante Auto N° 55 de 21 de junio de 1995, embargó cuatro hectáreas de cultivos de papas, variedad granola y amigo, sembradas en la Finca N° 5082, Tomo 492, Folio 72, Provincia de Chiriquí y no sobre la Finca N° 5282. Además, indicó que las papas embargadas son de propiedad de los demandados y que la tercerista no probó su título de dominio sobre las papas embargadas, porque no identificó plenamente los bienes en litigio mediante una inspección judicial o diligencia exhibitoria.

Mediante la Vista Fiscal N° 519 de 30 de noviembre de 1995, la señora Procuradora de la Administración contestó el traslado y manifestó que la Escritura Pública N° 5580 de 14 de junio de 1995, no es prueba suficiente de la existencia de un derecho real del tercerista sobre la "futura cosecha de papas", motivo por el cual solicitó a esta Sala que declare no probada la presente tercería excluyente.

Mediante Auto N° 55 de 21 de junio de 1995, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Área Occidental, libró mandamiento de pago en contra de Walter Eliécer Santamaría Miranda e Isabel Miranda (nombre legal) o Isabel Santamaría (nombre usual), hasta la concurrencia de B/.27,996.56 en concepto de capital, gastos de cobranza e intereses vencidos, sin perjuicio de los intereses que se venzan hasta el completo pago de la obligación, decretó formal embargo sobre bienes inmuebles y muebles de propiedad de los ejecutados y sobre la futura cosecha de cuatro hectáreas de cultivos de papas, variedad amigo y granola, de cuatro meses de edad o evolución con producción estimada de 1,500 quintales, de propiedad de Walter Eliécer Santamaría, sembrada en la finca N° 5082, del Tomo 492, Folio 72, del Registro Público, Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, Distrito de Bugaba, de propiedad de Omar Sebastián Gallegos, y ordenó la venta de los bienes embargados con citación de sus dueños.

De acuerdo con lo previsto en los ordinales 1, 2 y 4 del artículo 1788 del Código Judicial, las tercerías excluyentes pueden introducirse desde que se decrete el embargo de los bienes hasta antes de adjudicarse el remate; su tramitación es la señalada para las excepciones en proceso ejecutivo, y en ella se reputarán demandados el ejecutante, el ejecutado y los demás terceristas que

hubiere; sólo pueden promoverse fundándose en un título de dominio o derecho real cuya fecha sea anterior al auto ejecutivo o al auto de secuestro que haya precedido el embargo; y si se trata de bienes muebles, la anterioridad del título debe referirse a la fecha del auto ejecutivo o de secuestro según el caso; y para ello son admisibles todas las pruebas con que pueda acreditarse los derechos reales en bienes de esa clase.

En el presente caso la tercerista presentó la Escritura Pública N° 5580 de 14 de junio de 1995, por la cual los señores Sebastián Ríos y Omar Ríos Gallegos, en su calidad de propietarios de la Finca 5082, inscrita al Tomo 492, Folio 70, ubicada en la provincia de Chiriquí, y el señor Benjamín Ríos, en su calidad de arrendatario, celebran contrato de arrendamiento de dicha finca. La cláusula tercera de dicho contrato establece que la finca será utilizada para la siembra y cultivo de papas y hortalizas.

La Sala observa que la parte actora cometió un error en el libelo de la demanda al señalar que el número de la finca en la que se sembró la papa cuya cosecha fue embargada por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, es la Número 5282, cuando realmente corresponde a la Finca N° 5082, tal cual lo establecen la Escritura Pública N° 5580 de 14 de junio de 1995 de la Notaría Cuarta del Circuito, prueba presentada por el propio tercerista, y el Auto Ejecutivo N° 55 de 21 de junio de 1995.

Aclarado lo anterior, esta Sala debe señalar que la tercerista no aportó prueba que acredite su derecho real sobre la futura cosecha de la papa sembrada en la finca N° 5082, porque presentó un contrato de compraventa de semillas de papa variedad amigo y granola, celebrado entre Benjamín Ríos y Ricauter Pittí el día 8 de enero de 1995, que no reúne los requisitos de un documento auténtico. Además, el auto ejecutivo fue dictado el 21 de junio de 1995, y en el mismo se señala que el cultivo de la papa sembrada sobre la finca N° 5082, es de la variedad granola y amigo, y tiene "cuatro meses de edad o evolución", con una producción estimada de 1,500 quintales de papa, además el contrato de arrendamiento fue celebrado apenas seis días antes del mandamiento de pago ejecutivo.

Por lo anterior se deduce que las semillas de papa fueron sembradas sobre la finca N° 5082 antes del 14 de junio de 1995, fecha en la que se firmó y protocolizó el contrato de arrendamiento entre los dueños de la referida finca y el tercerista excluyente, y cuya cláusula tercera establece que "será utilizada para la siembra y cultivo de papas y hortalizas" (reverso de foja 3), con lo cual se entiende que a la fecha no se había sembrado la papa que la parte actora aduce que es de su propiedad.

Por lo anterior, la tercería excluyente promovida debe declararse no probada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADA la tercería excluyente interpuesta por el licenciado Rafael Ponce González, en representación de BENJAMÍN RÍOS, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ÁREA OCCIDENTAL, a Walter Eliécer Santamaría o Isabel Miranda o Isabel Santamaría.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ELOY ALFARO (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDRULFO ESPINALES MIRANDA, EN REPRESENTACIÓN DE NELSON VARGAS MARTÍNEZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Edrulfo Espinales Miranda, actuando en representación de NELSON VARGAS MARTÍNEZ, ha promovido excepción de prescripción en el Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS a su representado.

El recurrente fundamenta su pretensión afirmando que la obligación surgida del contrato de préstamo N° 15757 de 9 de agosto de 1987, que fue presentado como título ejecutivo, era exigible, al igual que los demás documentos sustentadores de la demanda a partir de 1981 y que el pagaré señala que es exigible a partir de enero de 1975, por lo que al notificarse a su representado el 13 de junio de 1996, había transcurrió más de los quince años establecidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (I. F. A. R. H. U.) para la prescripción de esta clase de obligaciones.

Finalmente solicitó a esta Sala que considere que el Instituto para la formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (I. F. A. R. H. U.) pretende cobrarle a su representado, por la vía de jurisdicción coactiva, un préstamo que éste nunca suscribió y que según el artículo 1110 del Código Civil, nadie puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado o sin que tenga por ley su representación legal, la cual nunca otorgó a persona alguna.

Admitida la presente excepción de prescripción se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y a la señora Procuradora de la Administración por el término de ley.

El representante judicial del Juzgado Ejecutor del I. F. A. R. H. U. negó todos los hechos de la excepción y solicitó a esta Sala que rechace la excepción de prescripción propuesta y niegue lo pedido por la parte actora por las siguientes razones:

> "No es cierto que han transcurrido 15 años desde que la deuda se hizo exigible, pues además de los conceptos jurídicos vertidos arriba acerca de la vigencia del cobro del pagaré y de la letra de cambio, hay que destacar que el señor NELSON VARGAS firmó mediante apoderado un contrato de préstamo con el IFARHU para realizar estudios por tres (3) años, a partir de octubre de 1977, al término de los cuales debía regresar al país, ya que los estudios eran en el extranjero, iniciarse como asalariado y pagar el préstamo descrito. El contrato fue firmado el 30 de agosto de 1977. La deuda entonces era exigible desde el 30 de diciembre de 1980, si consideramos los tres (3) años de estudios descritos en el contrato y dos meses para producir la morosidad según nuestra legislación civil vigente. A partir de esa fecha se inicia el término de prescripción de 15 años establecidos en el Artículo 29 de la Ley 1 del 11 de enero de 1965, los cuales se cumplían el 30 de diciembre de 1995.
>
> Si como se ha descrito y consta en autos, la resolución auto N° 231 con la que se inicia el proceso de jurisdicción coactiva tiene fecha del 20 de abril de 1995, la obligación no estaba prescrita.
>
> Cabe señalar también, que de acuerdo a nuestra legislación civil vigente, el tiempo para que se suscite la prescripción de las acciones que tienen por objeto reclamar el cumplimiento de obligaciones de capital con interés, corre desde el último pago o abono a la deuda, y en este sentido el señor Nelson Vargas ha efectuado múltiples abonos, siendo el último de febrero de 1993, tal como consta en el expediente judicial." (Fs. 12).

Mediante la Vista Fiscal N° 409 de 13 de septiembre de 1996, la señora

Procuradora de la Administración se manifestó en contra de las pretensiones del excepcionante y señaló que el término de prescripción se hizo exigible en diciembre de 1987, tal como consta a foja 6 del expediente del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo, por lo que el auto ejecutivo de 20 de abril de 1995, según lo contempla el artículo 1711 del Código Civil, interrumpió el término de prescripción de quince años previsto por la ley del I. F. A. R. H. U. Señaló además, que tal como lo contempla el artículo 1708 del Código Civil, el término de prescripción también fue interrumpido con el último pago o abono a la deuda que hizo el señor Vargas en febrero de 1993, según consta a foja 8 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo.

Consta en autos, a foja 14 del expediente ejecutivo por cobro coactivo, el Auto N° 231 de 20 de abril de 1995, mediante la cual el Juzgado Ejecutor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva a su favor en contra de Nelson Vargas Rodríguez, Diana de De la Victoria y Cristy Córdoba hasta la concurrencia de B/.7,373.07 en concepto de capital, intereses vencidos, seguro de vida, sin perjuicio de los nuevos intereses y gastos que se produzcan hasta la fecha de su cancelación total.

A foja 9 del expediente del proceso ejecutivo consta además, copia autenticada de la certificación emitida por la Directora de Recaudación y Gestión de Cobros del I. F. A. R. H. U., en la que se establece que al 17 de febrero de 1995, Nelson Vargas Rodríguez, cédula 4-101-1570, con el contrato de préstamo N° 1575, debe un total de B/.6,666.45 en concepto de capital, interés y seguro de vida, y a foja 111 del precitado expediente, se establece que al mes de mayo de 1996, dicho saldo asciende a la suma de B/.7,633.04 en concepto de capital, intereses, seguro de vida y gastos de cobranza.

El artículo 29 de la Ley Orgánica del I. F. A. R. H. U. preceptúa que las obligaciones que surjan de los actos y contratos del Instituto prescribirán a los quince (15) años contados a partir de la fecha en que la obligación sea exigible. Los artículos 1698 y 1711 del Código Civil y el artículo 658 del Código Judicial establecen en relación con la prescripción de las acciones lo siguiente:

> **"ARTÍCULO 1698:** Las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la ley.
>
> **ARTÍCULO 1711:** La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.
>
> **ARTÍCULO 658:** La presentación de la demanda interrumpirá el término para la prescripción de cualquier pretensión que se intente, siempre que antes de vencerse el término de la prescripción se haya notificado la demanda a la parte demandada, o se haya publicado en un periódico de circulación nacional diaria o en la Gaceta Oficial un edicto emplazatorio o un certificado del Secretario del Juzgado respectivo en el cual se haga constar dicha presentación."

Consta en autos que el último pago que se hizo a la obligación, en reconocimiento de la deuda contraída con el I. F. A. R. H. U. fue en febrero de 1993 por la suma de B/.40.00, interrumpiendo de esta forma la prescripción de los 15 años que empezó a correr a partir de la fecha en que fue exigible el préstamo que se le otorgó a través de la Resolución N° 140 de 9 de agosto de 1977. Desde febrero de 1993 hasta el día 25 de junio de 1996, fecha en que el excepcionante presentó su escrito, no han transcurrido los 15 años establecidos como término para la prescripción de la acción, por lo que no procede declararla.

La Sala debe desestimar lo señalado por el excepcionante sobre la falta de representación legal de quien firmó dicho contrato a su nombre, ya que consta copia auténtica del poder otorgado por Nelson Vargas Rodríguez, cédula 4-101-1570 a Berta Lilia Vargas Rodríguez, cédula 4-115-304, en la ciudad de Bogotá, Colombia el 4 de marzo de 1977, facultando a ésta para que firmara el contrato

respectivo y cualesquiera otros documentos accesorios y/o adicionales que requiera el I. F. A. R. H. U., poder que fue debidamente autenticado por la Sección Consular de la Embajada de Panamá y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADA la excepción de prescripción propuesta por NELSON VARGAS MARTÍNEZ, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS (I. F. A. R. H. U.).

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ EN REPRESENTACIÓN PROPIA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Rogelio Cruz, actuando en su propio nombre, ha promovido y sustentado recurso de apelación contra la Resolución de 24 de septiembre de 1996, dictada por el Magistrado Sustanciador en las excepciones interpuestas dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Banco Nacional de Panamá sigue en su contra.

Mediante la resolución de 24 de septiembre de 1996, se acogió como prueba aducida por el Juez Ejecutor, el expediente ejecutivo por cobro coactivo que el Banco Nacional de Panamá le sigue al excepcionante, y no se admitieron como pruebas la certificación del Registro Público, ni la escritura pública aducidas por el excepcionante, por inconducentes. Para la práctica de las pruebas se señaló un término de diez días.

Manifiesta el apelante en el escrito de sustentación del recurso de apelación que:

> "La prueba aducida, y que ha sido inadmitida, es conducente, pues el hecho quinto de la excepción formulada postula la inexistencia de las obligaciones hipotecarias que se reclaman, aunque sea por la vía simple; la prueba no es obviamente inconducente o ineficaz, como lo requiere la ley procesal para su rechazo; tampoco es la prueba una prohibida por la ley o notoriamente dilatoria, por lo que debe ser admitida." (Fs. 25).

Esta Sala de apelación concuerda con la Sala unitaria por las siguientes razones:

a) Sirve de recaudo ejecutivo la certificación bancaria sobre saldos pendientes del deudor (fs. 4 y 5) autorizado por los artículos 1639, numeral 15 y 1803 del Código Judicial;

b) Esa certificación de saldos se encuentra apoyada por la constancia de la Tesorería Municipal de Panamá en la que aparece ese vehículo registrado como hipotecado al Banco Nacional de Panamá (fs. 14) y la constancia de débito que aparece a foja 20 del cuaderno principal, y como por otra parte, el presente no

es un proceso ejecutivo hipotecario, las pruebas relacionadas con esa clase de negocios, son inconducentes ya que se apartan de lo que se debate.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN el auto dictado el 24 de septiembre de 1996, mediante el cual el Magistrado Sustanciador admitió algunas pruebas y no admitió otras, en las excepciones interpuestas dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Banco Nacional de Panamá sigue en su contra.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA LIDIA V. MEDINA DE AIZPURÚA, EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO DE ISTMO, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, LE SIGUE A TRANSPORTACIONES DE TIERRAS Y DERIVADOS, S. A., TRACTORES DEL ATLÁNTICO, S. A. Y MANUEL ESPINO. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Lidia V. Medina de Aizpurúa, en representación del BANCO DEL ISTMO, S. A., ha interpuesto tercería excluyente dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá a TRANSPORTACIONES DE TIERRAS Y DERIVADOS, S. A., TRACTORES DEL ATLÁNTICO, S. A. y MANUEL ESPINO DOMÍNGUEZ.

La apoderada judicial de la tercerista fundamentó su solicitud en los siguientes hechos:

"PRIMERO: El día 22 de mayo de 1996, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá dictó, dentro del presente proceso, Auto Ejecutivo N° 671 en contra de TRANSPORTACIONES DE TIERRAS Y DERIVADOS, S. A., TRANSPORTES DEL ATLÁNTICO, S. A. y MANUEL ESPINO DOMÍNGUEZ ordenando el embargo de los bienes de los demandados dados en garantía, a saber:

1. Tractor Oruga marca Caterpillar modelo D8H, buldozer, Serie S46A21558, año 1980.

2. Tractor Oruga Marca Caterpillar Modelo D8K, Serie 77V-14495-17515650.

3. Cargador Frontal neumático Caterpillar Modelo 980, Sri 42H450, año 1982.

SEGUNDO: En la diligencia de Inventario, Avalúo y Depósito, realizada el 11 de junio de 1996, se inventarió y depositó el Tractor Marca Caterpillar PS, Año 1985, modelo D8K17S9629-77V9081, con Bulldozer y Tilldozer con riper de 4 botellas, 350 HP, 183 Hidralic Control, serie 77V14495-41V14994, propiedad de TRANSPORTACIONES DE TIERRAS Y DERIVADOS, S. A., el cual como podemos apreciar no formaba parte de los bienes dados en garantía por el demandado TRANSPORTACIONES DE TIERRAS Y DERIVADOS, S. A. y cuyo embargo ordenó el Banco Nacional de Panamá, de conformidad con el citado Auto N° 671, de 22 de mayo de 1996.

TERCERO: Que con fecha 21 de junio de 1996, se emitió Aviso de Remate sobre los bienes embargados y en el mismo se incluyó el bien mueble descrito en la cláusula segunda, el cual no se encuentra embargado por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ.

CUARTO: El bien mueble mencionado en la cláusula SEGUNDA anterior se encuentra hipotecado a favor del BANCO DEL ISTMO, S. A., tal como consta inscrito en la Ficha 049487, Rollo 4170, Imagen 00035, de la Sección de Micropelículas (Hipotecas de Bienes Muebles), desde el 18 de noviembre de 1992.

QUINTO: El derecho real de hipoteca de Banco del Istmo, S. A. sobre el bien mueble antes mencionado se encuentra vigente a la fecha tal como hemos señalado, es anterior a la fecha en que se dictó el Auto Ejecutivo y orden de Embargo en contra de los demandados TRANSPORTACIONES DE TIERRAS Y DERIVADOS, S. A., TRACTORES DEL ATLÁNTICO, S. A. y MANUEL ESPINO DOMÍNGUEZ y sobre los bienes muebles dados en garantía dentro de los cuales al momento de la diligencia de Inventario, Avalúo y Depósito se incluyó el bien mueble dado en garantía a favor de nuestra representada y que se encuentra descrito en la cláusula segunda anterior." (Fs. 5 y 6).

Admitida la tercería, se corrió en traslado a los ejecutados, a la Procuraduría de la Administración y al Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá.

La señora Procuradora de la Administración contestó al traslado mediante la Vista Fiscal N° 424 de 25 de septiembre de 1996, y solicitó que se declare probada la tercería, porque el Banco del Istmo, S. A. posee un título de dominio o derecho real de fecha cierta anterior al auto ejecutivo del Banco Nacional de Panamá y cumple con los requisitos de los numerales 2 y 4 del artículo 1788 del Código Judicial.

Consta a foja 34 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo, que mediante Auto N° 671 de 22 de mayo de 1996, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra las sociedades Tractores del Atlántico, S. A., Transportación de Tierra y Derivados, S. A. y Manuel Espino Domínguez por la suma de B/.76,925.00, en concepto de capital, intereses vencidos y gastos de cobranza, sin perjuicio de los intereses que se causen hasta el completo pago de la obligación, y decretó formal embargo sobre los siguientes bienes muebles gravados a su favor con hipoteca inscrita a la ficha 260196, rollo 35479, imagen 13, de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público:

1. Un (1) Tractor Oruga marca Caterpillar modelo D8H, accionado por motor diesel de 6 cilindros, con cuchilla angulable (buldozer) en la parte delantera y Riper trasero, con capacidad hasta de 3 ganchos, posee caseta de metal para el operario, año 1980, serie 46A21558.

2. Un (1) Tractor Oruga marca Caterpillar modelo D8K, accionado por motor diesel de 6 cilindros, con cuchilla angulable en parte delantera y riper trasero con capacidad hasta de tres (3) ganchos, posee caseta de metal y vidrio dotada de aire acondicionado, año 1981, número 77V14495-17515650.

3. Un (1) cargador frontal neumático, marca Caterpillar modelo 980, año 1982, accionado por motor diesel de 6 cilindros con balde delantero, de 5 1/2 yardas cúbicas con metal para el operario, serie 42H450, pertenecientes a la Sociedad denominada Tractores del Atlántico, S. A.

De acuerdo con lo previsto en los ordinales 1, 2 y 4 del artículo 1788 del Código Judicial, las tercerías excluyentes pueden introducirse desde que se decrete el embargo de los bienes hasta antes de adjudicarse el remate; su tramitación es la señalada para las excepciones en proceso ejecutivo, y en ella se reputarán demandados el ejecutante, el ejecutado y los demás terceristas que hubiere; sólo pueden promoverse fundándose en un título de dominio o derecho real cuya fecha sea anterior al auto ejecutivo o al auto de secuestro que haya

precedido el embargo; y si se trata de bienes muebles, la anterioridad del título debe referirse a la fecha del auto ejecutivo o de secuestro según el caso.

En el presente caso la tercerista presentó certificación expedida por el Registro Público el 19 de julio de 1996, en la que consta que a la Ficha 049487 rollo 4170 imagen 00035 Sección de Micropelículas (Hipotecas de bienes muebles) está inscrito y vigente el contrato de préstamo celebrado entre Banco del Istmo, S. A. y Transportaciones de Tierras y Derivados, S. A. (deudor) desde el 18 de noviembre de 1992 y que el bien mueble hipotecado es un Tractor Marca Caterpillar PS, año 1985, modelo D8K17S9629-77V9081, con Bulldozer y tilldozer con riper de 4 botellas, 350HP, 183 Hydralic Control, serie 77V14495-41V14994 (fs. 1 y su reverso).

Como quiera que se ha probado que el derecho real constituido por el Banco del Istmo, S. A. sobre el bien mueble hipotecado a su favor, y su inscripción es anterior al auto ejecutivo mediante el cual el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá libró mandamiento de pago contra Transportaciones de Tierras y Derivados, S. A. y otros, la tercería excluyente debe declararse probada.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA la tercería excluyente promovida por BANCO DEL ISTMO, S. A., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá a TRANSPORTACIONES DE TIERRAS Y DERIVADOS, S. A., TRACTORES DEL ATLÁNTICO, S. A. y MANUEL ESPINO DOMÍNGUEZ.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ELOY ALFARO (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO SIXTO ÁBREGO CAMAÑO, EN REPRESENTACIÓN DE EPIFANIO LINARES TORRES, CONTRA LA SENTENCIA DE 1° DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EPIFANIO LINARES TORRES -VS- INDUSTRIA NACIONAL DE PLÁSTICO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Sixto Ábrego Camacho, en representación de **EPIFANIO LINARES TORRES**, ha interpuesto recurso de casación laboral contra la sentencia de 1 de julio de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso laboral: **EPIFANIO LINARES TORRES -VS- INDUSTRIA NACIONAL DE PLÁSTICO, S. A.(INPSA)**, dado que considera que ese Tribunal de Segunda Instancia ha violado los artículos 10, 128, 159, 198, 199, 208, 405 y 407 del Código de Trabajo.

ANTECEDENTES DEL RECURSO DE CASACIÓN

Este recurso tiene su génesis en un proceso común instaurado por **EPIFANIO LINARES TORRES** ante el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección, en reclamo de diferencia salarial, vacaciones y décimo tercer mes, a la empresa **Industria Nacional de Plásticos, S. A. (INPSA).** Estas prestaciones, según el actor obedecen a que el precitado trabajador solicitó una licencia sin sueldo por un período de dos años de acuerdo a lo establecido en el artículo 128 numeral 16 del Código de Trabajo, a partir del 31 de octubre de 1984 al 30 de octubre de

1986. Que luego de vencida la licencia, el señor **LINARES TORRES** se reincorporó a su puesto de trabajo, en la empresa antes mencionada y sólo se le continuó remunerando de acuerdo a su último salario que percibía antes de que se le otorgara la licencia.

Que durante el período en que se encontraba de licencia sin sueldo el señor **LINARES TORRES**, por disposición de la Convención Colectiva vigente durante ese lapso de tiempo, la empresa hizo aumentos generales de salarios: el 30 de diciembre de 1984, B/.0.08 por hora y que el 30 de diciembre de 1985, B/.0.08 por hora. Que de acuerdo a estos aumentos, el trabajador demandante tenía derecho a los mismos, aunque el no se encontraba laborando por licencia, ya que al reintegrarse no se interrumpen sus derechos y obligaciones contractuales; que la suma reclamada hace un total de B/.6,397.83, en concepto de diferencia por aumento salarial, diferencia de vacaciones, décimo tercer mes, recargos e intereses.

El Tribunal de Primera Instancia al decidir la controversia, profirió sentencia N° 55 de 29 de agosto de 1995, en la que absolvió a la empresa **INDUSTRIA NACIONAL DE PLÁSTICOS, S. A. (INPSA)**, de la obligación de pagar prestación alguna al señor **LINARES TORRES**, ya que la licencia sin remuneración constituye una causa de suspensión de los efectos del contrato de trabajo y que si el trabajador demandante no prestó servicios en el tiempo en que se concedieron los aumentos salariales, por la referida licencia sin sueldo, no existía para el empleador la obligación de pagar el aumento del salario.

La Resolución del Juzgado Segundo de Trabajo, fue apelada ante el Tribunal Superior de Trabajo. El Tribunal de Segunda Instancia al conocer del recurso de alzada, confirmó la decisión del Tribunal a-quo, por medio de sentencia de 1 de julio de 1996.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO

La decisión del Tribunal Superior de Trabajo, para confirmar la sentencia de primera instancia se fundamentó en los siguientes razonamientos:

1. Que es jurisprudencia reiterada, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 198 y 208 del Código de Trabajo, los efectos de la suspensión de los contratos de trabajo se refiere a que en este período se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio para el cual había sido contratado, y para el empleador la obligación de pagar el salario convenido, salvo que la ley determine lo contrario;

2. Que de acuerdo a lo anterior, mal puede el trabajador demandante reclamar una supuesta diferencia de salario, vacaciones, décimo tercer mes, más intereses y recargos, por razón de unos aumentos salariales que entraron a regir como aumentos generales de salarios por Convención Colectiva de Trabajo, cuando a la fecha en que los mismos se aplicaron, el trabajador demandante no prestaba servicios para la empresa por encontrarse de licencia sin sueldo por dos años, ejerciendo una función pública;

3. Que el trabajador debía encontrarse laborando para la empresa, al momento en que entraron en vigor los aumentos generales de salario, para haber tenido derecho a dichos aumentos.

Como consecuencia del fallo del Tribunal Superior de Trabajo, la parte trabajadora interpuso recurso de casación ante esta Sala Tercera, del cual se le corrió traslado a la empresa de acuerdo a lo establecido en el artículo 927 del Código de Trabajo. La Industria Nacional de Plásticos, S. A. (INPSA) por medio de apoderado judicial se opuso al referido recurso en tiempo oportuno.

CRITERIO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA TERCERA

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala, entran a resolver el recurso en cuestión:

Las normas que considera el casacionista que han sido conculcadas por parte del Tribunal Superior de Trabajo, son: artículo 10; 128; 159; 198; 199, 208, 405 y 407, todos del Código de Trabajo y las mismas serán estudiadas de manera conjunta por esta Superioridad, dado que se encuentran íntimamente relacionadas.

El punto central de discusión en este caso, es determinar si el trabajador **EPIFANIO LINARES TORRES** tiene derecho o no a los aumentos salariales que se concedieron para el mes de diciembre de los años 1984 y 1985.

El señor **EPIFANIO LINARES TORRES**, solicitó a la empresa Industria Nacional de Plásticos, S. A. una licencia sin sueldo por el término de dos (2) años para desempeñarse en cargo público, a partir del 31 de octubre de 1984 al 30 de octubre de 1986. En el transcurso de estos dos años, se llevaron a cabo aumentos salariales, que exactamente entraron a regir el 30 de diciembre de 1984 y 30 de diciembre de 1985, (el casacionista señala equivocadamente que estos incrementos salariales fueron en noviembre) de B/.0.08 la hora respectivamente, con la salvedad de que esos aumentos serían pagados al trabajador que tuviera mínimo 3 meses de laborar permanentemente dentro de la empresa (ver cláusula 62).

El señor **LINARES** se reintegra a su puesto de trabajo el día 31 de octubre de 1986 y la empresa continuó remunerándolo con el salario que devengaba antes de que se hiciera efectiva la licencia sin sueldo a la que nos hemos referido, es decir B/.1.46 por hora, que representa B/.70.08 semanal.

De acuerdo a lo anterior, es criterio de este Tribunal Colegiado, que el trabajador no tiene derecho a los aumentos salariales estipulados en la Convención Colectiva, que se hicieron efectivos a partir del 30 de diciembre de 1984 y 30 de diciembre de 1985, a pesar de su reintegro a su puesto de trabajo, luego de que cesara la licencia sin sueldo otorgada por la empresa.

Lo anterior obedece, a que si bien es cierto los artículos 128 numeral 16, 198 y 208 del Código de Trabajo preceptúan que el trabajador al reintegrarse a sus labores, luego de una licencia, debe restablecérsele los derechos emanados del contrato de trabajo, no es menos cierto que solamente se refiere a aquellos derechos que se suspendieron al iniciarse el cese temporal del contrato. En este sentido, el trabajador demandante **EPIFANIO LINARES** al acogerse a la licencia sin sueldo otorgado por la empresa **INDUSTRIA NACIONAL DE PLÁSTICOS, S. A.**, inmediatamente se le suspendieron aquellos derechos emanados del contrato inicial, por medio del cual fue contratado incluyendo los efectos de la convención colectiva.

Al momento de verificarse los aumentos salariales dentro de la empresa mencionada, de acuerdo a la convención colectiva, los mismos favorecen a las personas, que al momento de surgir estos aumentos, se encontraban laborando. Inclusive la propia cláusula 62 establece una excepción, y es que los aumentos salariales serán otorgados a aquellos trabajadores que tengan al 30 de diciembre de 1984 y 30 de diciembre de 1985, tres meses laborando permanentemente en la empresa, requisito este que no reunía el trabajador **LINARES**, puesto que no se encontraba en la empresa.

Dado lo indicado, no son aplicables al caso en comento los artículos 405 y 407 del Código de Trabajo, ya que los mismos hacen referencia a que las cláusulas de la convención colectiva se aplicarán a todas las categorías de trabajadores comprendidas en ella, pero a partir de la fecha de ingreso a la empresa. Esto demuestra una vez más, que los aumentos a que debía tener derecho el trabajador **LINARES**, eran aquellos que surgieron al momento en que se encontraba laborando en la empresa, de lo contrario, no debía ser favorecido con incrementos salariales si no estaba prestando servicios en el tiempo en que los mismos surtieran sus efectos.

El texto de los artículos 128, 198 y 208 del Código de Trabajo es el siguiente:

> "Artículo 128. Son obligaciones de los empleadores, además de las que surjan especialmente del contrato, las siguientes:

...
16. Conceder a los trabajadores licencias no remuneradas para el desempeño de una comisión o cargo público por un término no menor de seis meses ni mayor de dos años, conservando el derecho al reintegro dentro del plazo fijado, con todos los derechos derivados de sus respectivos contratos;" (Subrayado es nuestro).
...
"Artículo 198. La suspensión de los efectos del contrato de trabajo, en lo relativo a las obligaciones de prestar el servicio y, cuando la ley no disponga lo contrario, de pagar el salario, no implica su terminación, ni extingue los restantes derechos y obligaciones que emanen de los mismos, en especial en cuanto al reintegro al trabajo y la continuidad del contrato." (Subrayado es nuestro).

"Artículo 208.
...
El período de suspensión de los contratos de trabajo no afectará la antigüedad de servicios de los trabajadores y, en consecuencia, se computará para la determinación de todas las indemnizaciones y prestaciones establecidas en este Código, derivadas de la antigüedad en el trabajo ..." (Subrayado es nuestro).

En lo que concierne al artículo 10 del Código de Trabajo el mismo no es aplicable al caso subjúdice, en virtud de que al trabajador **LINARES** se le está remunerando de acuerdo a su contrato de trabajo, documento este que prima para los efectos de conocer los derechos que tiene el **mismo** y que subsisten a su reintegro a la empresa, luego de una licencia sin sueldo.

El artículo 10 mencionado es del tenor siguiente:

"Artículo 10. Se garantiza el principio de igualdad de salario. A trabajo igual al servicio del mismo empleador, desempeñado en puesto, jornada, condiciones de eficiencia y tiempo de servicio iguales, corresponde igual salario, comprendido en éste los pagos ordinarios y extraordinarios, las percepciones, gratificaciones, bonificaciones, servicios y cualesquiera sumas o bienes que se dieren a un trabajador por razón de la relación de trabajo."

Por tanto y de acuerdo a lo expresado consideramos, que no le asiste la razón al demandante, en lo relativo a la violación de los artículos 10, 128, 198, 208, 405 y 407 del Código de Trabajo.

Por último en lo que respecta a los artículos 159 y 199, los mismos no serán estudiados, dado que en el presente caso no se está discutiendo la reducción de salarios, sino, aumentos de salarios no pagados, ni se está discutiendo la suspensión temporal por licencia para ejercer una comisión del Estado.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la Sala Tercera (Casación Laboral) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASAN la sentencia de 1 de julio de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral EPIFANIO LINARES TORRES -VS- INDUSTRIA NACIONAL DE PLÁSTICO, S. A.(INPSA).

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JUAN B. ACOSTA, EN REPRESENTACIÓN DE VÍCTOR SÁNCHEZ Y OTROS, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 30 DE MAYO DE

1996 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: VÍCTOR SÁNCHEZ Y OTROS VS DÍAZ Y GUARDIA, S. A. Y/O D. G. ARQUITECTOS E INGENIEROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Juan B. Acosta, en representación de VÍCTOR SÁNCHEZ y OTROS, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 30 de mayo de 1996, expedida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO que decide la alzada promovida en el litigio laboral existente entre el señor Víctor Sánchez y otros trabajadores y las empresas DÍAZ y GUARDIA, S. A. y/o D. G. ARQUITECTOS e INGENIEROS, S. A.

La Resolución acusada al decidir la apelación revocó la sentencia N° 53, de 28 de diciembre de 1995, emitida por el Juez Cuarto Seccional de Trabajo de la Primera Sección, que condenaba a las empresas demandadas al pago de diferencias por monto de TREINTA UN MIL OCHOCIENTOS UN BALBOAS CON VEINTIDÓS CENTÉSIMOS (B/.31,801.22), en concepto de prestaciones laborales, y las absuelve de ambas pretensiones incoadas por los trabajadores.

El presente negocio consiste en una controversia laboral en que los trabajadores demandan la suma de TREINTA MIL VEINTITRÉS BALBOAS CON VEINTISIETE CENTÉSIMOS (B/.30,023.27), en concepto de indemnización y prima de antigüedad, más, gastos, costas y recargos legales, conforme al libelo de la demanda corregida que corre de fojas 102 hasta la 109 inclusive.

La parte demandada no presentó escrito de oposición dentro del término que señala la Ley, dejando precluir dicha etapa procesal sin hacer uso de esa potestad.

La Corte observa que el recurso de casación interpuesto cumple con los requisitos establecidos en los artículos 925 y 926 del Código de Trabajo, por lo que pasa a su análisis.

El casacionista acusa la Resolución impugnada de ser violatoria de los artículos 1, 6, 149 y 226 del Código de Trabajo.

La primera de dichas normas conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 44 de 1995, dispone lo siguiente:

> "Artículo 1: El presente Código regula las relaciones entre el capital y el trabajo, sobre la base de justicia social concretada en la Constitución Política de la República de Panamá, fijando la protección estatal en beneficio de los trabajadores. El Estado intervendrá para promover el pleno empleo, crear las condiciones necesarias que aseguren a todo trabajador una existencia decorosa y procurar al capital una compensación equitativa por su inversión, en el marco de un clima armonioso de las relaciones laborales que permita el crecimiento de la productividad".

A juicio del casacionista, esta disposición fue violada porque se ha desconocido el derecho que le asiste a los trabajadores de tener una existencia decorosa, pues para el cálculo de la indemnización y de la prima de antigüedad no se les contabilizó el salario promedio percibido durante jornadas ordinarias y extraordinarias efectivamente trabajadas durante los seis meses o treinta días anteriores a la fecha de exigibilidad del derecho, así como tampoco el salario promedio del total de la remuneración percibida durante los últimos cinco años trabajados, para sufragar una y otra prestación, respectivamente (foja 4 del cuadernillo que contiene el recurso).

Con fundamento en lo expuesto, la parte actora asevera que no se le brindó la debida protección estatal a sus patrocinados, la cual no es una dádiva sino una garantía para que se produzca el clima armonioso y objetivo que permita el

aumento de la productividad.

La Sala, luego de valorar los argumentos del recurrente y las piezas probatorias que obran en el expediente, estima que la sentencia expedida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO no ha infringido el citado artículo 1 del Código de Trabajo, porque como consta en autos en razón de las dificultades económicas que padecían las empresas demandadas se suspendieron las relaciones de trabajo que aquellas mantenían con los trabajadores y ante el reclamo de las prestaciones que éstos realizaron, luego de varios intentos de conciliación y negociaciones entre las partes ante el Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, se logró un entendimiento del cual surgió un acuerdo celebrado el 21 de febrero de 1991 en el que la patronal se comprometió a hacerle frente a sus obligaciones. La sala observa que durante esas conciliaciones estuvieron presentes, cumpliendo la función que le corresponde tanto el Estado, los trabajadores, representados por sus abogados y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, al igual que la empresa.

Estima la Sala que la Resolución de segunda instancia no es susceptible de ser acusada de ser violatoria de los principios que consagra el artículo 1 del Código copiado, o sea, la justicia social y el principio pro operario, y la compensación adecuada al capital producto de su inversión, ya que el acto jurisdiccional impugnado consideró legítimos, con cierta razón, unos acuerdos celebrados entre los interesados que si bien no son perfectos, lograron en lo que se refiere a la indemnización pedida un pacto que debe ser respetado.

Ciertamente, como bien lo señala el ad quem en la Resolución que se intenta casar, el tema relativo a la indemnización pretendida fue objeto de un acuerdo entre las partes, por lo que "Calcular las prestaciones laborales en la forma en que lo piden los demandantes no es más que desconocer la existencia de unos acuerdos que fueron adoptados de buena fe y a la cual deben pleno cumplimiento, no solo la parte empleadora sino incluso la parte trabajadora, máxime que los mismos **no implican la renuncia de un derecho adquirido**" (foja 442).

Uno de los puntos en que centra esta controversia consiste en el reclamo de indemnización porque los trabajadores opinan que fueron objeto de un despido injustificado; y sobre el carácter de la indemnización vale recordar que esta Sala ha expresado en el pasado que no es un derecho cierto cuando no media despido injustificado o renuncia justificada. Por ejemplo, en sentencia de 29 de julio de 1982, se sostuvo lo siguiente:

> "En el presente caso, el convenio celebrado entre las partes se refiere a un solo derecho cierto del trabajador el cual es las vacaciones proporcionales. La indemnización ha dicho la Sala que sólo surge del despido injustificado, y si éste no existe, la falta de su pago no implica renuncia de derechos y por consiguiente en este caso es susceptible de ser negociado entre el empleador y el trabajador, por no ser derecho cierto" (Rómulo Aguilar Fedee Vs. Oficentro, S. A.).

El acuerdo referido por la sentencia impugnada consta a fojas 28 del Expediente en copia de un Acta fechada el 21 de febrero de 1991 autenticada el 24 de febrero de 1992 y es un mutuo acuerdo permitido por la Ley, suscrito ante las autoridades de trabajo, y en el que tras acordar la terminación de la relación de trabajo existente entre las empresas demandadas y un grupo de 34 trabajadores, la empleadora se obliga mediante la cláusula primera a entregar a cada trabajador que aparece en el listado adjunto, y que acepten el acuerdo, un desglose de sus prestaciones laborales, a saber: vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad, indemnización, bonificación por asistencia, aumento convencional (de junio 89 al 3 de enero de 1991), el 50% de los salarios que corren desde el 3 de enero de 1991 al 28 de febrero de 1991 y 6% de cesantía.

A fojas 30 y 31 aparece el nombre y firma de los 34 trabajadores a quienes abarca el citado pacto laboral, o sea: Aristides Ávila, Héctor Salcedo, Tomás Ruiz, Arturo Berguido Pérez, Víctor Sánchez, Arcelio De León, Samuel Ríos, Nicolás Urriola, Luis G. Saavedra, Guillermo E. Salaza B., Arturo Figueroa, Florentino Vargas, Aristides Rodríguez, Arcesio Santana, Francisco Aguilar, Juan

Pablo Palma, Manuel Gutiérrez, Ismael Giraldez, Federico Velázquez, Clemente Rodríguez, Víctor M. Ramos, Faustino Emilio Marín, Luis Herrera, Manuel Moreno, Policarpio Segundo Vega, Carlos Samaniego, José Cundumi, Eleuterio Rodríguez, Marcelino Caballero, Alfonso M. Jiménez, Bolívar Fuller, José Chu y Agripino Ríos, 29 de los cuales son demandantes en el presente proceso, lo cual demuestra su conformidad con lo convenido, y se aprecia que no se dio renuncia de derechos. De fojas 35 hasta la 94 obra los detalles de las liquidaciones hechas a los mencionados trabajadores por la empresa D. G. ARQUITECTOS E INGENIEROS, S. A. en concepto de las prestaciones indicadas en la cláusula primera del mutuo acuerdo, lo cual comprueba que la empleadora cumplió con su obligación de saldar las prestaciones adeudadas como fue acordado.

Las razones anteriores son suficientes para que esta Superioridad comparta el criterio vertido por el Tribunal de segunda instancia, mas sólo en lo que concierne a la indemnización, cuando reseña conforme el artículo 210 del Código de trabajo, que la relación laboral termina por el mutuo consentimiento siempre que se dé por escrito y no conlleve renuncia de derechos, y que en el presente caso debe tenerse presente que al referirse la Ley a derechos adquiridos, "... está haciendo alusión a prestaciones como lo son salarios, vacaciones décimo tercer mes, pero de ninguna manera al pago por ejemplo de indemnizaciones, que solo se da cuando de un despido injustificado o de una renuncia con causa justificada se trata pero nunca en el caso de la terminación de la relación por mutuo acuerdo, por lo que el empleador no está obligado a pagar indemnización alguna". Inmediatamente para reafirmar lo dicho, considera el Tribunal de segunda instancia que:

> "El hecho de que a veces aparezca fijado en documentos de esta clase, el acuerdo de pagar una indemnización, es por la sencilla razón de que siendo estos derechos de dudosa y discutible condición bien pueden ser objeto de transacción o acuerdo entre las partes. En consecuencia no siendo esta prestación un derecho irrenunciable mal puede pretenderse que el Juzgado cambie lo acordado por las partes o que el trabajador pretenda alegar que hubo engaño en la liquidación, máxime que con la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo no existe obligación legal alguna **para el pago de la indemnización prevista en el artículo 225 del Código de Trabajo**" (Subraya la Sala, foja 439 y 440).

La relación laboral entre las partes terminó a través de un mutuo acuerdo autorizado por la Ley bajo ciertos requisitos. Si la relación de trabajo termina por mutuo acuerdo, existe la posibilidad de que las partes transijan con respecto a la indemnización; y precisamente uno de los puntos convenidos y aceptados por los trabajadores para poner término al vínculo laboral fue reconocerle indemnización a los trabajadores sin ser una obligación natural de la empresa, ya que por la forma como finalizó dicha relación, distinta a un despido sin causa o renuncia justificada, éste no constituía un derecho cierto o adquirido de los trabajadores, de allí que era permitido su negociación, y en tal sentido el cuantum de esa prestación podía oscilar como a bien lo acordaran los interesados. Tampoco consta, pese a que existen indicios en el expediente de los cuales se aprecia que la empresa atravesaba por problemas económicos, que la finalización de la relación de trabajo haya sido por causas económicas, por lo cual hubiese sido aplicable lo dispuesto en el artículo 215 del Código Laboral. Consecuentemente, estima la Sala que hay que atenerse a lo convenido entre las partes sobre la indemnización.

La segunda de las disposiciones del Código de Trabajo que el recurrente estima infringida es el artículo 6, cuyo texto preceptúa:

> "Artículo 6. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones de trabajo legales, convencionales o reglamentarias, prevalecerá la disposición o interpretación más favorable al trabajador".

El casacionista, a fin de fundamentar la alegada infracción de la norma, transcribe parte de las motivaciones de la Resolución atacada, y luego cuestiona

si estamos ante un acuerdo o una terminación de la relación de trabajo por decisión unilateral del empleador, al considerar que la empresa reconoce el pago de la indemnización a los trabajadores. Igualmente copia extractos de un fallo emitido por esta Corporación de Justicia sobre una "situación dudosa". Al interrogante que formula responde que en el caso discutido estamos en presencia de un despido sin causa justificada porque "de otro modo no se pagaría indemnización", por ello no existe acuerdo alguno y la indemnización y la prima de antigüedad deberán pagarse en atención a los artículos 149 y 226 del Código Laboral; violándose el artículo 6 ut supra al no escogerse la interpretación más favorable al trabajador ante la duda que el actor considera subsistió en el presente asunto.

La Sala disiente de las apreciaciones esgrimidas por el recurrente y se percata que éste no visualiza que, el texto que cita contenido en la sentencia que emitiera esta Superioridad el 30 de junio de 1994 (Marta Guerrero De La Torre Vs Banco Internacional de Costa Rica), el negocio procesal ventilado era un caso de despido injustificado, en los que la indemnización no es un derecho sujeto a la incertidumbre, como señaláramos con anterioridad, todo lo contrario, el despido sin causa en los casos de contrataciones por término indefinido, produce el derecho del trabajador a reclamar una indemnización sin duda alguna a cargo del empleador, si no opta por su reintegro, lo cual no sucede en este asunto porque la terminación de la relación de trabajo entre las empresas ahora demandadas y los trabajadores se produjo a través de un acuerdo conocido como mutuo consentimiento (foja 28), que es una de las formas que prevé el Código de Trabajo para poner fin a la relación obrero- patronal (Art. 210, Numeral 1). A lo anterior hay que añadir la aclaración que la norma que se considera conculcada contiene dos de las manifestaciones o reglas del conocido Principio Tuitivo o Pro operario vigente en el Derecho Laboral, y que recoge nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 74 de la Constitución Política y el artículo 1 del Código de Trabajo. En efecto, dichas reglas del artículo 6 transcrito son la de la "Norma Más Favorable" y propiamente el "In Dubio Pro Operario"; la primera cobra eficacia en caso de conflicto o colisión entre dos o más disposiciones de trabajo con categoría de Ley, Convención Colectiva o Reglamento; mientras que la segunda, se refiere a la duda razonable que puede surgir en el ánimo del Juzgador o encargado en su momento de aplicar la norma también de prosapia legal, convencional o reglamentaria, supuesto ante el cual debe acogerse la interpretación que sea más beneficiosa para el trabajador. Aquélla es, pues, una regla de aplicación, mientras que ésta es una regla o criterio hermenéutico.

La Sala considera que en este asunto no se ha producido la violación del artículo citado, puesto que el Juzgador de segunda instancia, según se aprecia de los autos, falló sin abrigar duda sobre la interpretación de las normas aplicables al negocio ventilado, y tampoco se verificó un conflicto normativo, de allí que no hubo lugar a elegir la disposición que resultara más beneficiosa para el trabajador. Consecuentes con lo señalado, se desestima el cargo contra el artículo 6 del Código de Trabajo.

Las dos últimas normas que el actor afirma que fueron violadas por la sentencia de 30 de mayo de 1996, son los artículos 149 y 226 del Código de Trabajo, mismos que copiamos a continuación:

> "Artículo 149: Para la determinación del monto de las indemnizaciones y de cualesquiera otras prestaciones que deban pagarse a los trabajadores, se entenderá por salario el promedio percibido durante las jornadas ordinarias y extraordinarias efectivamente trabajadas durante los seis meses o treinta días anteriores a la fecha de la exigibilidad del derecho, según sea más favorable al trabajador".
>
> "Artículo 226. Para la determinación del importe de la prima de antigüedad se entenderá como salario por cada año de servicios prestados por el trabajador el promedio del total de la remuneración percibida por éste durante los últimos cinco años trabajados.
>
> El monto de la indemnización por despido injustificado se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 149".

El actor asegura con respecto a la primera disposición transcrita que ha sido violada porque la indemnización pagada a los trabajadores no se calculó conforme a lo que ella establece. Afirma que para el cálculo de esta prestación se consideró un período en que los trabajadores no laboraron, "pese a que se le reconoció un 50% del salario regular", y dicha norma es "clara cuando se refiere al salario promedio para el cálculo de la indemnización, como el promedio percibido durante las jornadas ordinarias o extraordinarias efectivamente trabajadas" (foja 8).

En atención a la segunda excerta copiada, la infracción se funda en que la parte actora no tomó en cuenta para el cálculo de la prima de antigüedad, el período comprendido entre el 3 de enero de 1991 y el 28 de febrero de 1991, cuando se pagó el 50% del salario aunque los trabajadores no prestaron servicio en ese lapso, y como la excerta exige que sean considerados para dicho cómputo los cinco últimos años trabajados efectivamente, pese a la concesión de la empresa de sufragar el 50% de salario, ello "no implica que el cálculo debe tomar en cuenta dicho porcentaje del salario, máxime cuando esa concesión o bonificación, como desee llamarle, no obedece a un servicio efectivamente prestado o un trabajo realizado". Además comenta el casacionista que no ha alegado la violación del artículo 8 del Código de Trabajo, que trata de la irrenunciabilidad de derechos, pues el cálculo de la prima de antigüedad y la indemnización sobre la base de un 50% de salario no es consecuencia de ningún acuerdo convenido entre trabajadores y las empresas demandadas, en el que se haya cedido a la empresa el poder de determinar el importe de esas prestaciones, sino que nos encontramos ante un despido injustificado o decisión unilateral de las demandadas para poner término a la relación de trabajo (foja 9).

La Sala considera que le asiste la razón al casacionista al afirmar que la sentencia del ad-quem ha violado los artículos 149 y 226; pero sólo en lo que en ellas se refiere al cómputo de la prima de antigüedad, la cual es un derecho adquirido y como tal no puede ser calculada arbitrariamente sino de acuerdo a lo que señala la Ley.

El artículo 149 está íntimamente ligado al artículo 226 del Código de Trabajo, ya que éste remite al primero, y se refiere al cálculo de las indemnizaciones y cualesquiera otras prestaciones que se adeuden a los trabajadores, operación ante la cual de acuerdo al texto del artículo 149 debe entenderse por "salario el promedio percibido durante las jornadas ordinarias y extraordinarias efectivamente trabajadas durante los seis meses o treinta días anteriores a la exigibilidad del derecho, según sea más favorable al trabajador", y en el presente asunto se calculó una de esas prestaciones, nos referimos a la prima de antigüedad, tomando en cuenta un período que no fue efectivamente laborado y en que únicamente se remuneró a los trabajadores con 50% de salario según lo convenido afectando ese promedio desfavorablemente a los trabajadores. Por ello, la Sala estima que es procedente el cargo contra el artículo 149 aludido.

El artículo 226 citado regula la manera de precisar el monto de la prima de antigüedad; y ésta prestación sí constituye un derecho adquirido cumplidos los requisitos establecidos en la Ley para hacerse acreedor a ella, por lo que el pacto que puso fin a la relación obrero patronal no puede afectarla sin violar la Ley, y así debió reconocerlo en su sentencia el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. En efecto, sobre este derecho el artículo 224 del Código laboral antes de las reformas introducidas por la Ley 44 de 1995 preceptuaba que a la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa de terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado, desde el inicio de la relación, siempre que se trate de servicios continuos por más de diez años con el empleador, sin consideración a la edad del trabajador. Según esta norma para calcular el cuantum en concepto de prima de antigüedad de reputarse como salario "por cada año de servicios prestados por el trabajador el promedio del total de la remuneración percibida por éste durante los últimos cinco años trabajados". El período cuestionado por los trabajadores, que va desde el 3 de enero al 28 de febrero de 1991, no fue laborado; durante ese lapso la empresa reconoce, según se aprecia en autos, que sus obreros no prestaron servicio, y aunque la empresa haya decidido remunerarlo y se convino la terminación de la relación de trabajo

el 28 de febrero de 1991, ese lapso, a juicio de la Sala, no puede computarse para determinar la prima de antigüedad adquirida por los demandantes, pues el artículo 226 es claro cuando exige que sean considerados para su cómputo "... los últimos cinco años trabajados", para dentro de ese parámetro obtener una cifra promedio en concepto del derecho de que hablamos, y porque, además, un pacto como el aludido no puede desconocer lo establecido en la Ley en desmedro o disminución de los derechos adquiridos por los trabajadores, lo cual se evidencia ya que en ese período los trabajadores sólo percibieron un 50% de su salario habitual, en consecuencia, procede el cargo de violación analizado, y así debe declararlo este Tribunal Colegiado.

De consiguiente, la Sala Tercera -Laboral- de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 30 de mayo de 1996 emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO dentro del litigio laboral: VÍCTOR SÁNCHEZ y OTROS -Vs- DÍAZ y GUARDIA, S. A. y/o D. G. ARQUITECTOS e INGENIEROS, S. A., y ORDENA que la prima de antigüedad a la que tengan derecho los trabajadores demandantes sea contabilizada de acuerdo a lo que establece el Código Laboral en su artículo 226, sin tomar en cuenta el período transcurrido entre el 3 de enero hasta el 28 de febrero de 1991, el cual no fue efectivamente laborado, y se añadan los recargos establecidos en el artículo 169 de la misma excerta y confirma el fallo recurrido en todo lo demás.

Sin costas.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ELOY ALFARO (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA LANDERO, MORALES & CHIARI EN REPRESENTACIÓN DE MARYLIN ANGUIZOLA LASTRA Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 201-377 DE 26 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS. MAGISTRADO PONENTE: ELOY ALFARO DE ALBA. PANAMÁ, VIENTE (20) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Landero, Morales y Chiari, ha interpuesto advertencia de inconstitucionalidad de los artículos 10 del Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965 y 16 del Decreto Ejecutivo N° 170 de 27 de octubre de 1993, modificado por el artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 198 de 22 de diciembre de 1993. La advertencia ha sido presentada dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por la firma forense Landero, Morales & Chiari, en representación de MARYLIN ANGUIZOLA LASTRA Y OTROS, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 201-377 de 26 de marzo de 1996, dictada por el Director General de Ingresos.

Como el artículo 2549 del Código Judicial exige que, una vez presentada la advertencia, el funcionario judicial que conoce del proceso, sin más trámite, eleve la consulta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Sustanciador procede de conformidad con dicha norma.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONSULTA al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad de los artículos 10 del Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965 y 16 del Decreto

Ejecutivo N° 170 de 27 de octubre de 1993, modificado por el artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 198 de 22 de diciembre de 1993.

Notifíquese.

(fdo.) ELOY ALFARO DE ALBA
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

DICIEMBRE 1996

CARTA ROGATORIA

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA ISLA CAIMÁN, EN LA CAUSA N° 35 DE 1996, ENTRE CHILE HOLDINGS (CAYMÁN) LIMITED CONTRA SGO. DE CHILE HOTEL CORPORATION, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Carta Rogatoria librada por el Tribunal Superior de la Isla Gran Caymán dentro de la causa N° 35 de 1996, caratulada **CHILE HOLDING (CAYMÁN) LIMITED** contra **SGO. DE CHILE HOTEL CORPORATION, S. A. Y OTROS.**

A este expediente se acumuló igualmente el negocio procedente de la causa N° 35 de 1996 entre CHILE HOLDING (CAYMÁN) LIMITED (Presuntos Demandantes) contra CONTADORA ENTERPRISES, S. A. Y OTROS (Presuntos Demandados) tal como se observa a foja 128.

Al respecto es pertinente destacar que esta Corporación es competente para "Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que puede cumplirlo", de acuerdo a lo estatuido en el artículo 101 numeral 3 del Código Judicial. Por consiguiente procede examinar la viabilidad del exhorto bajo análisis.

En este orden de ideas se observa que la resolución del 26 de junio de 1996 (cfr. fojas 8-9) autoriza al demandante a "diligenciar un auto de emplazamiento en el formulario anexo a la presente," así como a notificar todas las demás resoluciones correspondientes a la acción judicial precitada, al "Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Presuntos Demandados", que se encuentran fuera de la jurisdicción de la isla Gran Caymán.

Es así como en esta oportunidad en particular, el primero y el segundo de los demandados son precisamente las sociedades **SGO. DE CHILE HOTEL CORPORATION, S. A.** Y CONTADORA ENTERPRISES, tal como se pone de manifiesto a foja 8 del presente negocio, cuales son las personas jurídicas que concretamente se desean notificar a través del mismo.

En este sentido se observa que la petición formulada a través de la embajada británica se sustanciará en atención a la buena fe que debe caracterizar a los países miembros de la comunidad internacional, y al principio de la reciprocidad, tomando como marco legal el artículo 864 del Código Judicial panameño, dado que el Reino Unido de la Gran Bretaña y la República de Panamá no han suscrito convenio alguno que rija la cooperación judicial de carácter internacional.

Dicho precepto contempla como requisitos para acceder a la solicitud imperada, básicamente que la documentación aportada se suministre en idioma **castellano** producto de la traducción de intérprete público autorizado, así como debidamente legalizados por el consulado o embajada Panameña con funciones en el país del cual procedan los documentos in examine, o en su defecto, por el representante consular o diplomático de una nación amiga; así como en todo caso se admite igualmente la legalización por medio de apostilla que suprime el procedimiento de legalización consular-diplomático y que, en consecuencia, minimiza el trámite que usualmente se efectúa a través de estas oficinas.

En este orden de ideas se pone de relieve una vez analizada acuciosamente la documentación aportada, que la demanda interpuesta ante la justicia de Gran Caymán al igual que las resoluciones expedidas por el Tribunal Superior de dicho territorio, no fueron debidamente autenticadas por parte de los interesados, ya sea por la mencionada vía consular o por medio de apostilla, dado que el documento al cual se adjuntó la acotación de apostilla antes mencionada, carece

de importancia para efectos de ponderar la certeza de la legalidad de los documentos, puesto que contienen simplemente una declaración escrita efectuada por el señor Hubert William Ashton, quien las firma en su calidad de "solicitor". Tales documentos inclusive no están traducidos al español, tal como se confronta a fojas 13, 24, 27 y 39 del negocio cuya entrada se distingue 375-96, así como a fojas 52, 55, 58, 61, 70, 73 y 79, del negocio cuya entrada se distingue 379-96.

En este punto es importante resaltar a manera general que el sistema jurídico inglés es el marco legal que entiende la figura del "solicitor" como el abogado que presta asesoría jurídica y prepara lo relacionado con un expediente determinado para la posterior defensa del interesado por parte del "barrister", quien actúa con exclusividad ante los Tribunales Superiores; pudiendo el "solicitor" ejercer la abogacía únicamente ante los Tribunales inferiores. (ALCARAZ Varó, Enrique y HUGHES Brian. Diccionario de Términos Jurídicos Inglés-Español Spanish English. Edit. Ariel, S. A., 2da. ed., Barcelona, pág. 285-286.

De la explicación anterior se desprende claramente que los documentos aportados no se encuentran legalizados conforme lo requiere el artículo 864 del Código Judicial en comento, y en consecuencia, no son admisibles para su diligenciamientos ante la justicia panameña, puesto que la documentación procedente del Tribunal Superior de Gran Caymán que no está autenticada por el funcionario judicial facultado para tales efectos, debió someterse además posteriormente a la autenticación por medio de la acotación de apostilla o a la autenticación por la vía consular o diplomática; trámite consular o de apostilla al cual debe someterse igualmente la certificación expedida por el notario del Condado de Dade, en el Estado de la Florida, Estados Unidos Unido de América.

Por otro lado cabe destacar que los documentos legibles a fojas 19-23 y 31, del negocio cuya entrada se distingue 375-96 y así como los documentos legibles a fojas 47-51 y 62, tampoco se encuentran traducidos al español, por lo que tal documentación incumple las formalidades exigidas en el precitado artículo 864 del Código Judicial, para estimar viable la petición de cooperación judicial internacional.

Ante las circunstancias expuestas, no procede acceder a la petición de notificación de las sociedades **SGO. DE CHILE HOTEL CORPORATION, S. A.** y **CONTADORA ENTERPRISES, S. A.** (presuntos demandados) formulada por la sociedad **CHILE HOLDINGS (CAYMÁN) LIMITED** (presunto demandante).

En mérito de lo expresado, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE las Cartas Rogatorias libradas por el Tribunal Superior de la Isla Gran Caymán dentro de la causa N° 35 de 1996, caratuladas CHILE HOLDINGS (CAYMÁN) LIMITED (presunto demandante) contra SGO. DE CHILE HOTEL CORPORATION, S. A. y CONTADORA ENTERPRISES, S. A. Y OTROS (presuntos demandados).

Notifíquese.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARTA ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA ISLA CAIMÁN EN LA CAUSA N° 36 DE 1996 CARATULADA ARGENTINE HOLDINGS (CAYMÁN) LIMITED (PRESUNTO DEMANDANTE) CONTRA BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION, S. A. Y OTROS (PRESUNTOS DEMANDADOS). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Carta Rogatoria librada por el Tribunal Superior de la Isla Gran Caymán dentro de la causa N° 36 de 1996, caratulada **ARGENTINE HOLDINGS (CAYMÁN) LIMITED** (presunto demandante) contra **BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION, S. A. Y OTROS** (presuntos demandados).

Al respecto es pertinente destacar que esta Corporación es competente para "Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que puede cumplirlo", de acuerdo a lo estatuido en el artículo 101 numeral 3 del Código Judicial. Por consiguiente procede examinar la viabilidad del exhorto bajo análisis.

En este orden de ideas se observa que la resolución del 26 de junio de 1996 (cfr. fojas 15-16) autoriza al demandante a "diligenciar un auto de emplazamiento en el formulario anexo a la presente," así como a notificar todas las demás resoluciones correspondientes a la acción judicial precitada, al "Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Presuntos Demandados", que se encuentran fuera de la jurisdicción de la isla Gran Caymán.

Es así como en esta oportunidad en particular, el primero de los demandados es precisamente la sociedad **BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION Y OTROS**, tal como se pone de manifiesto a foja 15 del presente negocio, cual es la persona jurídica que concretamente se desea notificar a través del mismo.

En este sentido se observa que la petición formulada a través de la embajada británica se substanciará en atención a la buena fe que debe caracterizar a los países miembros de la comunidad internacional, y al principio de la reciprocidad, tomando como marco legal el artículo 864 del Código Judicial panameño, dado que el Reino Unido de la Gran Bretaña y la República de Panamá no han suscrito convenio alguno que rija la cooperación judicial de carácter internacional.

Dicho precepto contempla como requisitos para acceder a la solicitud impetrada, básicamente que la documentación aportada se suministre en idioma **castellano** producto de la traducción de intérprete público autorizado, así como debidamente legalizados por el consulado o embajada Panameña con funciones en el país del cual procedan los documentos in examine, o en su defecto, por el representante consular o diplomático de una nación amiga; así como en todo caso se admite igualmente la legalización por medio de apostilla que suprime el procedimiento de legalización consular-diplomático y que, en consecuencia, minimiza el trámite que usualmente se efectúa a través de estas oficinas.

En este orden de ideas se pone de relieve una vez analizada acuciosamente la documentación aportada, que la demanda interpuesta ante la justicia de Gran Caymán al igual que las resoluciones expedidas por el Tribunal Superior de dicho territorio, no fueron debidamente autenticadas por parte de los interesados, ya sea por la mencionada vía consular o por medio de apostilla, dado que el documento al cual se adjuntó la acotación de apostilla antes mencionada, carece de importancia para efectos de ponderar la certeza de la legalidad de los documentos, puesto que contienen simplemente una declaración escrita efectuada por el señor Hubert William Ashton, quien las firma en su calidad de "solicitor". Tales documentos inclusive no están traducidos al español, tal como se confronta a fojas 17, 21, 25, 38 y 41.

En este punto es importante resaltar de manera general que el sistema jurídico inglés es el marco legal que entiende la figura del "solicitor" como el abogado que presta asesoría jurídica y prepara lo relacionado con un expediente determinado para la posterior defensa del interesado por parte del "barrister", quien actúa con exclusividad ante los Tribunales Superiores; pudiendo el "solicitor" ejercer la abogacía únicamente ante los Tribunales inferiores. (ALCARAZ Varó, Enrique y HUGHES Brian. Diccionario de Términos Jurídicos Inglés -Español Spanish English. Edit. Ariel, S. A., 2da. ed., Barcelona, pág. 285-286.

De la explicación anterior se desprende claramente que los documentos

aportados no se encuentran legalizados conforme lo requiere el artículo 864 del Código Judicial en comento, y en consecuencia, no son admisibles para su diligenciamientos ante la justicia panameña, puesto que la documentación procedente del Tribunal Superior de Gran Caymán que pareciera estar autenticada por el funcionario judicial facultado para tales efectos, debió someterse posteriormente a la autenticación por medio de la acotación de apostilla o a la autenticación por la vía consular o diplomática; trámite consular o de apostilla al cual debe someterse igualmente la certificación expedida por el notario del Condado de Dade, en el Estado de la Florida, Estados Unidos de América.

Por otro lado cabe destacar que los documentos legibles a fojas 17, 20, 21, 24, 25, 33-38, 41 y 42 tampoco se encuentran traducidos al español, por lo que tal documentación incumple las formalidades exigidas en el precitado artículo 864 del Código Judicial, para estimar viable la petición de cooperación judicial internacional.

Ante las circunstancias expuestas, no procede acceder a la petición de notificación de la sociedad **BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION, S. A.** (presuntos demandados) formulada por la sociedad ARGENTINE HOLDINGS (CAYMÁN) LIMITED (presunto demandante).

En mérito de lo expresado, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NO VIABLE la Carta Rogatoria librada por el Tribunal Superior de la Isla Gran Caymán dentro de la causa N° 36 de 1996, caratulada ARGENTINE HOLDINGS (CAYMÁN) LIMITED (presunto demandante) contra BUENOS AIRES HOTEL CORPORATION, S. A. (presuntos demandados).

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA ISLA CAIMÁN EN LA CAUSA N° 36 DE 1996, CARATULADO ARGENTINE HOLDINGS (CAYMÁN) LIMITED (PRESUNTO DEMANDADOS) CONTRA RHONE DEVELOPMENTS, S. A. Y OTROS (PRESUNTOS DEMANDADOS). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Carta Rogatoria librada por el Tribunal Superior de la Isla Gran Caymán dentro de la causa N° 36 de 1996, caratulada **ARGENTINE HOLDINGS (CAYMÁN) LIMITED** (presunto demandante) contra **RHONE DEVELOPMENT, S. A. Y OTROS** (presuntos demandados).

Al respecto es pertinente destacar que esta Corporación es competente para "Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que puede cumplirlo", de acuerdo a lo estatuido en el artículo 101 numeral 3 del Código Judicial. Por consiguiente procede examinar la viabilidad del exhorto bajo análisis.

En este orden de ideas se observa que la resolución del 26 de junio de 1996 (cfr. fojas 38-39) autoriza al demandante a "diligenciar un auto de emplazamiento en el formulario anexo a la presente," así como a notificar todas las demás resoluciones correspondientes a la acción judicial precitada, al "Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Presuntos Demandados", que se encuentran fuera

de la jurisdicción de la isla Gran Caymán.

Es así como en esta oportunidad en particular, el tercero de los demandados es precisamente la sociedad **RHONE DEVELOPMENT, S. A. Y OTROS,** tal como se pone de manifiesto a foja 38 del presente negocio, cual es la persona jurídica que concretamente se desea notificar a través del mismo.

En este sentido se observa que la petición formulada a través de la embajada británica se sustanciará en atención a la buena fe que debe caracterizar a los países miembros de la comunidad internacional, y al principio de la reciprocidad, tomando como marco legal el artículo 864 del Código Judicial panameño, dado que el Reino Unido de la Gran Bretaña y la República de Panamá no han suscrito convenio alguno que rija la cooperación judicial de carácter internacional.

Dicho precepto contempla como requisitos para acceder a la solicitud impetrada, básicamente que la documentación aportada se suministre en idioma **castellano** producto de la traducción de intérprete público autorizado, así como debidamente legalizados por el consulado o embajada panameña con funciones en el país del cual procedan los documentos in examine, o en su defecto, por el representante consular o diplomático de una nación amiga; así como en todo caso se admite igualmente la legalización por medio de apostilla que suprime el procedimiento de legalización consular-diplomático y que, en consecuencia, minimiza el trámite que usualmente se efectúa a través de estas oficinas.

En este orden de ideas se pone de relieve una vez analizada acuciosamente la documentación aportada, que la demanda interpuesta ante la justicia de Gran Caymán al igual que las resoluciones expedidas por el Tribunal Superior de dicho territorio, no fueron debidamente autenticadas por parte de los interesados, ya sea por la mencionada vía consular o por medio de apostilla, dado que el documento al cual se adjuntó la acotación de apostilla antes mencionada, carece de importancia para efectos de ponderar la certeza de la legalidad de los documentos, puesto que contienen simplemente una declaración escrita efectuada por el señor Hubert William Ashton, quien las firma en su calidad de "solicitor". Tales documentos inclusive no están traducidos al español, tal como se confronta a fojas 14, 20, 23 y 40.

En este punto es importante resaltar de manera general que el sistema jurídico inglés es el marco legal que entiende la figura del "solicitor" como el abogado que presta asesoría jurídica y prepara lo relacionado con un expediente determinado para la posterior defensa del interesado por parte del "barrister", quien actúa con exclusividad ante los Tribunales Superiores; pudiendo el "solicitor" ejercer la abogacía únicamente ante los Tribunales inferiores. (ALCARAZ Varó, Enrique y HUGHES Brian. Diccionario de Términos Jurídicos Inglés-Español Spanish English. Edit. Ariel, S. A., 2da. ed., Barcelona, pág. 285-286.

De la explicación anterior se desprende claramente que los documentos aportados no se encuentran legalizados conforme lo requiere el artículo 864 del Código Judicial en comento, y en consecuencia, no son admisibles para su diligenciamiento ante la justicia panameña, puesto que la documentación procedente del Tribunal Superior de Gran Caymán que pareciera estar autenticada por el funcionario judicial facultado para tales efectos, debió someterse posteriormente a la autenticación por medio de la acotación de apostilla o a la autenticación por la vía consular o diplomática; trámite consular o de apostilla al cual debe someterse igualmente la certificación expedida por el notario del Condado de Dade, en el Estado de la Florida, Estados Unidos de América.

Por otro lado cabe destacar que los documentos legibles a fojas 9-13, 19, 24 y 61, tampoco se encuentran traducidos al español, por lo que tal documentación incumple las formalidades exigidas en el precitado artículo 864 del Código Judicial, para estimar viable la petición de cooperación judicial internacional.

Ante las circunstancias expuesta, no procede acceder a la petición de notificación de la sociedad **RHONE DEVELOPMENT, S. A. Y OTROS** (presuntos

demandados) formulada por la sociedad ARGENTINE HOLDINGS (CAYMÁN) LIMITED (presunto demandante).

En mérito de lo expresado, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la Carta Rogatoria librada por el Tribunal Superior de la Isla Gran Caymán dentro de la causa N° 36 de 1996, caratulada RHONE DEVELOPMENT, S. A. Y OTROS (presuntos demandados).

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA S/N LIBRADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, VENEZUELA DENTRO DEL PROCESO DE OFERTA REAL SEGUIDO CONTRA LA SOCIEDAD MERCANTIL MITSUBISHI INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo de la Comisión rogatoria S/N librada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Venezuela dentro del proceso de oferta Real seguido contra la sociedad mercantil MITSUBISHI INTERNATIONAL, S. A. y que fuera interpuesto por la sociedad Centro Clínico Familia, C. A.

La diligencia solicitada por las autoridades venezolanas consiste en requerir:

1. Solicitar del Banco The Dai-Ichi Kangyo Bank, LTD. Panamá Banch, ubicado en la siguiente dirección: Plaza Internacional, Vía España, Edificio Banco Nacional, Planta Baja, Local 16-17, Panamá, República de Panamá, la siguiente información:

1° Si la cuenta N° H-10-759-100022 de esa institución bancaria corresponde a la empresa MITSUBISHI INTERNATIONAL, S. A.

2° Si MITSUBISHI INTERNATIONAL, S. A., tuvo disponible en la cuenta N° H-10-759-100022, que mantiene en dicho banco, la cantidad de **veinte y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos dólares de los Estados Unidos de América con 69/100 (US $24.842,69)** a partir del día 17 de enero de 1994, la cual fue el resultado del depósito de dos (2) cheques, a saber, del cheque N° 17499 del Banco del Orinoco, S. A. C. A. por la cantidad de Diez mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (US $10.200,00).

3° Si MITSUBISHI INTERNATIONAL, S. A., tuvo disponible en la cuenta N° H-10-759-100022, que mantiene en dicho banco, la cantidad de siete mil novecientos un dólares de los Estados Unidos de América con 71/100 (US $7.901,71) a partir del día 16 de febrero de 1994, la cual fue el resultado del depósito de un (1) cheque distinguido con el N° 22646 del Banco del Orinoco.

4° Si MITSUBISHI INTERNATIONAL, S. A., tuvo disponible en la cuenta

N° -H-10-759-100022, que mantiene en dicho Banco, la cantidad de siete mil seiscientos cincuenta y cuatro dólares de los Estados Unidos con 04/100 (US $7.654,04) a partir del día 30 de marzo de 1994.

5° Si MITSUBISHI INTERNATIONAL, S. A., tuvo disponible en la cuenta N° H-10-759-100022, que mantiene en dicho banco, la cantidad de cuatro mil cuatrocientos treinta y un dólares de los Estados Unidos de América con 10/100 (US $4.431,10) a partir del día 26 de julio de 1994, la cual fue el resultado del depósito de un cheque distinguido con el N° 1239 del Banco de Caroní, C. A. contra la cuenta que mantiene dicho banco en el Chase Manhattan Bank, N. A.

6° Si MITSUBISHI INTERNATIONAL, S. A., tuvo disponible en la cuenta N° H-10-759-100022, que mantiene en el banco The Da-Ichi Kaygo Bank, Ltd. Panamá Branch.

De esta manera y luego de haber visto en que consiste el pedido hecho por las autoridades venezolanas, la Sala Cuarta de Negocios Generales, ente competente para recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por los tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo, conforme lo establece el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial.

Es importante señalar que la documentación aportada con la solicitud de asistencia judicial ante esta corporación judicial carece tanto de las legalizaciones consulares exigidas por el artículo 864 del Código Judicial y aún cuando el artículo 6 de la Ley 12 de 1975 establece que, los exhortos o las cartas rogatorias se transmitan por la vía consular diplomática o por medio de autoridad central será innecesario el requisito de la legalización, es menester recalcar que el artículo 864 del Código Judicial es una norma posterior a la Ley 12 de 1975 que versa sobre la misma materia, y dadas las reglas de la hermenéutica legal consagradas en el artículo 14 numeral 2 del Código Civil, deben aplicarse estas últimas que exigen que los documentos que se envíen por exhorto o carta rogatoria cuenten con la legalización consular.

Por otra parte es pertinente poner de relieve, que las disposiciones de los convenios internacionales ratificados por la asamblea legislativa y convertidos en ley de la República, susceptibles inclusive de revisión constitucional según sentencia de 13 de junio de 1990, deben interpretarse y aplicarse integralmente, de manera que prime la congruencia y el sentido que persigue el derecho positivo. En adición a lo expuesto, el artículo 17 de la misma Convención Interamericana permite que el Estado requerido rehuse el cumplimiento de un exhorto cuando sea manifiestamente contrario a las normas de orden público. En el caso que nos ocupa, se indica que el articulado referente a las autenticaciones es de orden público ya que de ello dependerá la certeza que tendrá el Juez al valorar las constancias procesales o probatorias que se le presenten.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la Comisión Rogatoria S/N librada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Venezuela dentro del proceso de Oferta Real seguido contra la sociedad Mercantil MITSUBISHI INTERNACIONAL, S. A. y que fuera interpuesto por la sociedad Centro Clínico Familia, C. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

RICARDO MARTÍNEZ ROBLES, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO PROFERIDA POR LA CORTE DEL CIRCUITO DEL 11° CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE DADE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, CON FECHA 24 DE AGOSTO DE 1995, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA A LA SEÑORA MARTA MARÍA PÉREZ DE CORCHO DE LEÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

RICARDO MARTÍNEZ ROBLES mediante su apoderado legal, el licenciado PEDRO PEREIRA AROSEMENA, solicita a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema el reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera, dictada dentro del proceso de divorcio instaurado ante los Tribunales de Justicia de los Estados Unidos de América entre RICARDO MARTÍNEZ ROBLES contra MARTA MARÍA PÉREZ DE CORCHO DE LEÓN, el cual fue decidido mediante sentencia en firme, decretándose la disolución del vínculo matrimonial que los unía.

El peticionario fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> PRIMERO: RICARDO MARTÍNEZ ROBLES, panameño y la señora MARTA MARÍA PÉREZ DE CORCHO, norteamericana, contrajeron matrimonio el día 13 de enero de 1981, en la República de Panamá.
>
> SEGUNDO: El matrimonio se inscribió al tomo 211, asiento (partida) 771, libro de matrimonio de la provincia de Panamá.
>
> TERCERO: Los cónyuges trasladaron su residencia a Miami, Estado de la Florida, Estados Unidos, en donde inscribieron el matrimonio habido entre ellos.
>
> CUARTO: Mediante sentencia del 24 de agosto de 1995, La Corte Suprema del Circuito del 11avo Circuito Judicial de Dade, del Estado de La Florida, declaró disuelto el matrimonio entre Ricardo Martínez Robles y Marta María Pérez de Corcho De León.
>
> QUINTO: La sentencia fue dictada como consecuencia del ejercicio de pretención (sic) personal y no fue dictada en juicio de ausentes es decir en rebeldía y fue notificada a ambas partes, y también hubo de conformidad al numeral 3 de la sentencia arreglo de propiedad y pensión alimenticia.
>
> SEXTO: La sentencia se encuentra debidamente autenticada por el Consul (sic) de Panamá en Miami, Certificada por el Departamento Consular y Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y debidamente traducida."

Además de la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio se adjuntaron los siguientes documentos: Copia de la Sentencia de 24 de agosto de 1995, expedida por la Corte del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América debidamente autenticada y traducida al idioma español y el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General del Registro Civil de Panamá.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 52 de 30 de octubre de 1996 señala lo siguiente:

> "El negocio jurídico del cual es colofón la sentencia extranjera cuyo reconocimiento y ejecución en Panamá se pretende es lícita en este país, ya que no viola el ordenamiento jurídico-positivo nacional."

> "La copia de la sentencia incorporada a los autos aparece autenticada por el Cónsul General de Panamá en Miami y traducida al idioma español".
>
> "Resulta entonces procedente arribar al criterio de que se han cumplido los requisitos de ley en el presente proceso de exequátur, por lo cual conceptuamos que debe accederse a la petición formulada".

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que, efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, fue dictada como consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía puesto que la parte demandada se presentó en el Acto de Audiencia. Se aprecia, además, que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la Sentencia de Divorcio de 24 de agosto de 1995, expedida por la Corte del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de América, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado el 13 de enero de 1981 en la República de Panamá, entre el señor RICARDO ABDIEL MARTÍNEZ ROBLES y la señora MARTA MARÍA PÉREZ DE CORCHO DE LEÓN.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios, en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ALEX DARÍO VALDÉS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR LA CORTE SUPREMA DE CALIFORNIA, CONDADO DE SANTA CLARA, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN VIRTUD DE LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA A LA SEÑORA ANA MITZILA REYES VALDÉS. MAGISTRADO RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

ALEX DARÍO VALDÉS, solicita se declare ejecutable en Panamá la sentencia proferida por la Corte Suprema de California, Condado de Santa Clara, Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial que lo unía con la señora ANA MITZILA REYES VALDÉS.

De acuerdo al numeral 2 del artículo 101 de nuestro Código de procedimiento, corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, examinar y declarar si las resoluciones judiciales pronunciadas por Tribunales extranjeros pueden ser ejecutadas en nuestro país.

Conforme al trámite para estos negocios, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, para que emitiera concepto, quién a través de la Vista N° 54 de 26 de noviembre de 1996 consideró lo siguiente:

> " ... Me habéis corrido traslado de la solicitud mencionada a través de la resolución de 22 de octubre de 1996, para que emita concepto.
>
> Nos corresponde observar que luego de acometer el examen de las constancias del presente negocio, se puede determinar que el peticionario no ha aportado la copia auténtica de la sentencia cuya ejecución pretende, con lo cual incumple las exigencias de ley, puesto que lo que trae a los autos es la traducción del fallo pronunciado en el extranjero.
>
> Luego no procede acceder a lo solicitado, sino proveer la concesión al peticionario de un término para que aporte el documento contentivo del fallo pronunciado en el extranjero y así subsanar la omisión en que ha incurrido".

Devuelto el expediente al despacho del Magistrado Sustanciador se procede resolver, previas las siguientes consideraciones:

La Sala al ponderar la documentación aportada por la parte interesada, con la opinión vertida por la señora Procuradora General, encargada, en su vista fiscal, coincide con esta última en el sentido que la petición presentada por la parte interesada en la que solicita la ejecución de la sentencia proferida por la Corte Suprema de California, Condado de Santa Clara, Estados Unidos de América, sea reconocida y ejecutada en Panamá, no debe ser declarada ejecutable en virtud de que la misma no reúne los requisitos formales contemplados en el artículo 1409 del Código Judicial, específicamente el numeral 4 de dicho artículo.

La Sala sustenta lo esgrimido en líneas anteriores de acuerdo a las siguientes consideraciones: Que el documento visible a foja 7 del expediente no constituye una copia auténtica de la sentencia sujeta al trámite de exequátur, no se aprecia en ella sello de la autoridad que la emitió, en este caso la Corte Superior de California. Dicho documento sólo representa una traducción, realizada por una asociación de traductores del Estado de California, del fallo estipulado dentro del Caso N° 630889, del cual no se aprecia su original, así como tampoco se aprecia el original de la sentencia de divorcio, emitida por la Corte Superior del Estado de California.

Así mismo, la certificación de nuestra autoridad Consular, es realizada con respecto al Notario Público del Estado de California, mas no con respecto a la autoridad judicial, que aparece a foja 7 del cuadernillo.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, EN SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE al peticionario, el término de cuarenta y cinco (45) días para que subsane la omisión señalada, al tenor de las disposiciones procesales vigentes sobre esta materia.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MELISSA BERTUCCI DE JORDAN, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL DEL ESTADO DE LOUISIANA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DENTRO DEL PROCESO DE GUARDA, CUSTODIA Y REGLAMENTACIÓN DE VISITAS DE LOS MENORES WILL MARTIN JORDAN BERTUCCI Y DE JOHN PAUL JORDAN BERTUCCI. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

MELISSA BERTUCCI DE JORDAN mediante su apoderada legal, la Lcda. Lilia C. Herrera Mow, solicita a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema el reconocimiento y ejecución de la sentencia dictada por la Trigésima Cuarta Corte de Distrito Judicial para la Parroquia de St. Bernard-Estado de Louisiana, Estados Unidos de América, el día 5 de noviembre de 1995 para un dictamen sobre Custodia y Visitación.

La peticionaria fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Mi representada y el Sr. Will Martin Jordan tramitaron con audiencia de ambos, el proceso de Guarda, Custodia y Reglamentación de Visitas de sus menores hijos WILL MARTIN JORDAN BERTUCCI, menor de tres años y medio de edad y JOHN PAUL JORDAN BERTUCCI de un año de edad para aquella época y que actualmente cuentan con seis y cuatro años de edad respectivamente.
>
> SEGUNDO: El tribunal del Estado de Louisiana, Estados Unidos de América, concedió la guarda u Custodia de los menores a la madre de ellos, Sra. Melissa Bertucci.
>
> TERCERO: El proceso surtido ante el juez del Estado de Louisiana, Estados Unidos de América, se surtió con la comparecencia del padre de los menores; es decir no se surtió en rebeldía.
>
> CUARTO: Dicho proceso obedeció a una pretensión personal como lo es la derivada del derecho de familia en cuanto a guarda y custodia se refiere.
>
> QUINTO: La obligación a que fue sometido el fallo el Sr. Jordan Sarasqueta, es lícita en Panamá.
>
> SEXTO: El tribunal del Estado de Louisiana, Estados Unidos de América, concedió la Guarda y Custodia de los menores a que se refiere el hecho primero, a favor de la madre, en virtud de que a la edad tan tierna de los niños y atendiendo al mejor y supremo interés de los menores y la forma de vivir de ambos padres, la madre debía tener la custodia de los menores, como efectivamente se le concedió a la madre con visitación otorgada al padre".

Además de la solicitud de ejecución y reconocimiento de la sentencia extranjera adjuntaron los siguientes documentos: Copia de la Sentencia distinguida como 72-513 de fecha de 5 de noviembre de 1993, proferida por el Tribunal Trigésimo Cuarto del Estado de Louisiana, Estados Unidos de América, debidamente autenticada y traducida al idioma español y los certificados de nacimiento de los menores emitidos por la Dirección del General del Registro Civil de Panamá.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 55 de 2 de diciembre de 1996 señala lo siguiente:

> "Según se infiere del texto de la sentencia extranjera que nos ocupa, el proceso concerniente a la custodia, guarda y visitas se surtió con la participación de los padres de los mencionados menores, es decir, la señora MELISSA BERTUCCI DE JORDAN y el señor WILL MARTIN JORDAN BERTUCCI, debidamente representados".
>
> "La sentencia extranjera pronunciada en el proceso mencionado ordena, adjudica y decreta la custodia de los prenombrados menores a la peticionaria, señora MELISSA BERTUCCI DE JORDAN, con derecho de visitas a favor del señor WILL MARTIN JORDAN, "durante un día de fin de semana desde las 9:00 a. m. a 6:00 p. m."

"Después de este examen, es válido concluir que se han cumplido los requisitos legales inherentes al presente proceso de exequátur, por lo cual conceptuamos que debe accederse a la petición formulada".

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía puesto que la parte demandada fue representada por su Abogado, Gayle A. Reynolds lo que evidencia que éste tuvo un conocimiento pleno sobre el proceso que fue instaurado en su contra. Se aprecia, además, que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la Sentencia dictada por la Trigésima Cuarta Corte de Distrito Judicial para la Parroquia de St. Bernard-Estado de Louisiana, Estados Unidos de América, el día 5 de noviembre de 1995 sobre un dictamen de Custodia y Visitación, mediante la cual se Ordena, Adjudica y Decreta la custodia de los niños menores, Will Martin Jordan II, y John Paul Bertucci sea otorgada únicamente a Melissa Seville Bertucci con visitación otorgada a Will Martin Jordan durante un día de fin de semana por semana desde las 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VILMA FARIN DE LONGMAIRE A TRAVÉS DE SU APODERADO ESPECIAL EL LICENCIADO EDUARDO VILLAREAL CISNEROS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE SUPREMA DEL ESTADO DE NUEVA YORK, CONDADO DE BRONX, FECHADO 23 DE MAYO DE 1988. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Eduardo Villareal Cisneros, en representación de la señora Vilma Celestina Farin de Longmire, ha presentado ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que sea reconocida y ejecutada en la República de Panamá, la sentencia extranjera de divorcio dictada por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado de Bronx, fechada 23 de mayo de 1988.

ANTECEDENTES DEL CASO

Entre los antecedentes del caso se cuentan que la señora Vilma Celestina Farin de Longmire y el señor Dexter Jerome Longmire, de nacionalidad estadounidense, contrajeron matrimonio el día 15 de marzo de 1982, en el Juzgado Cuarto Municipal del Distrito de Panamá.

La referida solicitud de reconocimiento se sentencia extranjera se fundamenta en el hecho cierto que la existencia de divorcio de fecha 23 de mayo de 1998 dictada por la Corte Suprema del Estado de Nueva YorK, Condado de Bronx,

Estados Unidos de América, que disuelva el vínculo matrimonial existente entre las partes mencionadas en el párrafo anterior.

Ante estas circunstancias, la solicitante aporta como piezas probatorias las siguientes:

1. Poder otorgado a favor del licenciado Eduardo Villareal Cisneros.
2. Copia autenticada de la sentencia proferida por la Corte Suprema del Estado de New York, condado de Bronx, Estados Unidos de América.
3. Traducción de la referida sentencia al idioma español realizada por intérprete público autorizado.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1410 del Código Judicial, se le corrió traslado del presente negocio al Procurador General de la Nación para que emitiera concepto.

Por su parte, el Procurador General de la Nación en su Vista N° 56 de 2 de diciembre de 1996 (f. 14), estimó que la resolución cumple con los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico por lo cual es pertinente acceder a la ejecutabilidad de la sentencia bajo examen.

DECISIÓN DE LA SALA

Cumplido con todo el procedimiento establecido en el Código Judicial panameño para la homologación de sentencias extranjeras, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, pasa a decidir sobre la petición presentada con la finalidad de examinar si la resolución que se pretende reconocer y ejecutar en nuestro país es conforme o no con nuestro orden público interno.

La Sala se manifiesta de acuerdo con lo expresado por el señor Procurador General de la Nación, atendiendo a que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1409 del Código Judicial, para la ejecución de las sentencias extranjeras.

De hecho la pretensión es lícita en la República de Panamá y de carácter personal. De igual forma no se ha producido el fenómeno de la rebeldía, puesto que en la sentencia extranjera se especifica que "al demandado se le notificó en el estado, personalmente". Así mismo, se establece que "de acuerdo a Declaración Jurada el demandado ha renunciado al período establecido por la ley para comparecer o contestar (f. 10)", de lo que se concluye que no se ha vulnerado el orden jurídico interno.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá sentencia extranjera de divorcio dictada por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Condado del Bronx, Estados Unidos de América fechada 23 de mayo de 1988, mediante el cual se disuelve el vínculo matrimonial que unía a los señores Vilma Celestina Farin y Dexter Jerome Longmire celebrado el día 15 de marzo de 1982.

Se AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTOS

EXHORTO S/N DE 10 DE JULIO DE 1996, LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 8 SECRETARÍA N° 15 (JUEZ DR. JORGE A. URSO), DE LA CAPITAL FEDERAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, DENTRO DE LA CAUSA N° 1577 CARATULADA "MONNER SANS, RICARDO S/DENUNCIA". MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conoce del exhorto s/n de 10 de julio de 1996, librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 Secretaría N° 15 (Juez Dr., Jorge Urso) de la capital federal de la República de Argentina, dentro de la causa N° 1577 caratulada **"MONNER SANS, RICARDO S/DENUNCIA"**, el cual se nos remite por conducto de la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La finalidad de la comisión rogatoria antes mencionada se circunscribe a que la República de Panamá suministre a las autoridades Argentinas la siguiente información:

a) Si el Gobierno de Panamá solicitó el 9 de agosto de 1991, por intermedio del Ministerio de Gobierno y Justicia, a la empresa Debrol, S. A. Internacional Trade, "una cotización de armas livianas para ser usadas por las fuerzas policiales de seguridad panameña"; requirimiento que había sido formulado a la Dirección General de Fabricaciones Militares de Argentina.

b) Que se determine la autenticidad del pedido de cotización, debiendo informarse si para la fecha de la petición formulada fungía como vice-ministro del Ministerio de Gobierno y Justicia el Dr. José Miguel Alemán, firmante de la solicitud en mención.

c) Que se informe si se concretó la operación de compra de armas a la Dirección General de Fabricaciones Militares y por ende que se exprese la cantidad y calidad de armamento adquirido, especificándose las fechas y vías en que los envíos fueron realizados;

d) Y, finalmente, que se proporcionen las copias de los documentos relativos a las tareas de descarga realizadas en el Puerto de Cristóbal, así como se suministren los datos sobre las operaciones efectuadas en dicho Puerto por las naves que se detallan a continuación:

1. Buque OPATIJA de la compañía naviera CROATIA LINE que partió del Puerto de Buenos Aires el 20 de septiembre de 1991 y el 13 de agosto de 1993.

2. Buque de bandera Jamaicana SENJ, de la compañía naviera CROATIA LINE, que partió del Puerto de Buenos Aires el 8 de junio de 1993;

3) Buque de bandera Jamaicana KRK, de la compañía naviera CROATIA LINE, que partió del Puerto de Buenos Aires el 25 de junio de 1993;

4) Buque de bandera maltesa GROBNIK, de la compañía naviera CROATIA LINE, que partió del Puerto de Buenos Aires el 27 de noviembre de 1993;

5) Buque de bandera Maltesa LEDENICE, de la Compañía Naviera CROATIA LINE, que partió del Puerto de Buenos Aires el 12 de marzo de 1994; y,

6) Que se informe todo lo relativo a las firmas KARATON TRADE CO. y R. A. ALAN D. D. O., ambas con domicilio en la calle Elvira Méndez N° 10 de Panamá, "y en especial de las actividades desarrolladas por los mismos, así como toda la información que se posea respecto de los titulares de los mismos".

A estos efectos, es importante destacar que la Sala Cuarta de Negocios

Generales de esta Corporación de Justicia es el ente idóneo para "Recibir los exhortos y comisiones rogatorias libradas por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo", por lo que procede examinar la petición de recepción de pruebas formuladas por la República de Argentina.

Ante estas circunstancias se observa que tanto Panamá como el Estado Argentino son suscriptores de la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, la cual en su artículo IV estatuye los requisitos formales que deben concurrir para ponderar efectivamente la viabilidad de la presente carta rogatoria.

En este sentido debe precisarse producto del estudio acucioso de la petición incoada que, prima facie, el requerimiento efectuado por el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal N° 8 de la Capital Federal, Secretaría N° 15, no ha sido acompañado por los escritos y resoluciones que motiven el presente exhorto, así como del informe "resumido del proceso y de los hechos materia del mismo en cuanto fuere necesario para la recepción u obtención de la prueba"; por lo que evidentemente se infringen los preceptos antes mencionados, contemplados en la Convención precitada, correspondiente a la Ley 13 de 23 de octubre de 1995 de la República de Panamá.

Por otro lado se aprecia que el documento legible a foja 3 del negocio que se surte, no está legalizado debidamente por la acotación de apostilla o por la vía consular, ya que dicho documento no es más que una simple copia fotostática que no causa certeza a esta Corporación de Justicia de su contenido y/o firma. Se pone de relieve por consiguiente, que la apostilla que reposa al reverso de la foja 2 únicamente autentica el documento público contentivo de la carta rogatoria in examine.

En atención a lo expresado no procede acceder a la solicitud promovida a través de la comisión rogatoria bajo estudio.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NO VIABLE la carta rogatoria librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 Secretaría N° 15 (Juez Dr., Jorge Urso) de la capital federal de la República de Argentina, dentro de la causa N° 1577 caratulada "MONNER SANS, RICARDO S/DENUNCIA".

Notifíquese.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO S/N DEL 7 DE FEBRERO DE 1995 LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 35, SECRETARÍA ÚNICA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, EN LOS AUTOS CARATULADOS "ROMERO, BASILIO VÍCTOR CONTRA TECHINT CÍA. TÉCNICA INTERNACIONAL, S. A. C. I., SOBRE S/DAÑOS Y PERJUICIOS", EXPEDIENTE N° 94.962/92. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Directora General Encargada de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, exhorto librado por el Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 35, Secretaría Única, de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, dentro de los autos caratulados "ROMERO, Basilio Víctor c/ TECHINT CÍA. TÉCNICA

INTERNACIONAL, S. A. C. I. s/ Daños y Perjuicios", expte. N° 94.962/92.

El Mencionado Tribunal de Justicia argentino solicita:

"El Presente Exhorto, se libra ... a fin de solicitarle se sirva designar un perito único de oficio en la especialidad contable y de libros, quien previa aceptación del cargo y juramento del desempeño en legal forma deberá informar:

1. Analizando los libros contables de TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP. (TECNO), informará si se trata de una sociedad regularmente constituida de conformidad con las leyes de esa República.
2. Definición de su objeto social y sede societaria.
3. Si la sociedad ha sido inscrita regularmente en los organismos competentes de la República.
4. Si consta respecto de la constitución de una sucursal en la ciudad de Buenos Aires, con arreglo a las normas vigentes en el país.
5. Si la sociedad cuenta con patrimonio propio y disposición de bienes materiales e inmateriales destinados al logro de la finalidad societaria. ...

Librar oficio a la Superintendencia de Compañías Comerciales de esa ciudad para que informe si en la Dirección General de Registro Público se encuentra registrada la sociedad TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP. (TENCO) y si se encuentra debidamente constituida conforme a las leyes vigentes y cuál es su domicilio social." (Cfr. fojas 2 y 3).

De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y Comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

Seguidamente, procede el tribunal a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan a ambas naciones, relativos a la materia.

Observa la Sala Cuarta, que tanto el Estado panameño, como el Estado argentino, son signatarios de las Convenciones Interamericanas sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. Así las cosas, analizaremos el presente negocio a la luz de las citadas convenciones internacionales.

La Ley N° 13 (Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero), preceptúa en su Artículo IV que "los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite la recepción u obtención de pruebas o informes en el extranjero deberán contener la relación de los elementos pertinentes para su cumplimiento, a saber: 1. Indicación clara y precisa acerca del objeto de la prueba solicitada; 2. Copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el exhorto o carta rogatoria ... 4. Informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo ...".

Resulta palmario, ante la escasa información aportada por las autoridades argentinas, que el presente suplicatorio no reúne los requisitos previstos para su diligenciamiento, toda vez que la autoridad se limita a solicitar las pruebas más no expone su fundamento u objeto, conforme lo establecido en el convenio supra citado.

Como corolario de lo expuesto, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto librado por el Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 35, Secretaría Única, de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, dentro de los autos caratulados "ROMERO, Basilio Víctor c/ TECHINT

CÍA. TÉCNICA INTERNACIONAL, S. A. C. I. s/ Daños y Perjuicios", expte. N° 94.962/92.

Notifíquese.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR JUDITH ESTER COSSÚ DE HERRERA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 01-96 DE FECHA VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996), EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO FAMILIA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, recurso de apelación propuesto por la licenciada Gisela Chung, quien representa a la licenciada JUDITH ESTER COSSÚ DE HERRERA en este proceso administrativo, a fin de sustentar recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la decisión contenida en la Resolución N° 23-96 de 10 de octubre de 1996, mediante la cual se reformó la Resolución N° 01-96 de 23 de julio del mismo año, en el sentido que se adicionó 7.58 puntos al puntaje otorgado a la licenciada **JUDITH ESTER COSSÚ DE HERRERA** en el concurso para la posición 1567 de Juez Segundo Seccional de Familia de Panamá, por lo que se mantuvo en la lista de seleccionables al obtener 78.93 puntos.

> En su parte central, la recurrente se apoya en los siguientes hechos:
> "...
> SEGUNDO: Que al revisar la evaluación asignada a mi mandante se observa en el documento fechado el 23 de marzo de 1996 que no se le asigna puntaje en la experiencia no profesional, la cual mi mandante demostró con la certificación del Ministerio de Educación la cual indica que la misma laboró en dicho Ministerio por 19 años, 7 meses y diez días como educadora, no como abogada ...
>
> TERCERO: Que a mi mandante no se le valoró el Servicio Docente Universitario, colocándose en la certificación expedida por la Universidad Latina de Panamá, la sigla "NV" ...
>
> CUARTO: Que a mi mandante en la evaluación de los seminarios presentados, no se valoró apropiadamente los siguientes seminarios descritos como: S3, S4, S15, S19, S21, S23, S31 ...
>
> QUINTO: Que a mi mandante según consta en el Acta N° 01-96 del 23 de julio de 1996, de la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Familia, no se le valoraron apropiadamente las ponencias presentadas ... ya que las mismas todas son MATERIA APLICABLES en el concurso para el cual se presentaron ...
>
> En el mismo orden queremos resaltar que algunos puntajes asignados a la ponencia no fueron sumados, ya que se adjuntaron a las que se consideraron "repetidas".

La Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Familia, mediante la Resolución 23-96, impugnada en este proceso, consideró que lo concerniente a la certificación de docencia expedida por la Universidad Latina se aclaró que es indispensable que se especifique la calidad en la cual imparte

la licenciada de Herrera sus clases en dicho Centro de estudios Superiores, en virtud de que el Reglamento de Carrera Judicial lo exige para efectos de otorgar la calificación correcta a su desempeño.

En lo relativo a las ponencias se determinó que habían calificado correctamente los seminarios aportados por la recurrente, toda vez que guardan relación con materia de menores y materia penal, no obstante, se ha establecido que lo relativo a materia aplicable al cargo reciben mayor puntaje que aquellos de materia relacionada que, incluso, forman parte de otra jurisdicción.

Con relación a las ponencias no ponderadas se estimó que ello se debió a que las mismas estaban repetidas con respecto de otras ya valoradas dándole gran relevancia a la profundidad, extensión y base científica de las mismas y no las veces que haya sido expuesta, ya que se duplicaría el puntaje por una misma ponencia, lo cual no contempla como permisible el Reglamento de Carrera Judicial.

Ante este escenario de ideas ponderativas procede la Sala al estudio de la controversia instaurada, a fin de determinar si existen o no elementos que justifiquen una modificación en la resolución recurrida.

Con relación a la valoración de la experiencia docente universitaria alegada por la recurrente es indispensable señalar que si bien es cierto, reposa en el expediente bajo estudio la constancia de sus labores en la Universidad Latina, resulta pertinente resaltar que dicha certificación alude efectivamente a que la licenciada de Herrera fue contratada por la prenombrada entidad de estudios superiores, pero sin especificar en que calidad imparte clases. Ello nos indica que la certificación aportada por la licenciada de Herrera debió especificar en detalle la posición docente que ocupa dentro de la organización existente en la Universidad Latina de manera que claramente se ubique a la prenombrada en su categoría correspondiente, a efectos de valorar correctamente el esfuerzo profesional de la recurrente en ese centro de estudios superiores. Resulta palmario, de conformidad con el Reglamento de Carrera Judicial, que no procede acceder a la petición de evaluación de la experiencia laboral docente de la recurrente en dicha casa de estudios.

Este Tribunal conceptúa, en lo referente a la disconformidad aducida por la licenciada de Herrera en lo relativo a la puntuación conferida a los seminarios descritos como S: 3, 4, 15, 19, 21, 23 y 31, que es correcto el planteamiento vertido al respecto por la Comisión de Personal al resolver el recurso de reconsideración interpuesto, puesto que efectivamente se aprecia que dichos documentos, (salvo los distinguidos como 3 y 19 contentivos de un seminario de Derecho Cooperativo, no relacionado con el concurso en comento y, de un certificado como ponente del cual no se adjuntó el manuscrito correspondiente e indispensable para su ponderación y valoración como ejecutoria, conforme lo estatuye el artículo 24 del Reglamento de Carrera Judicial), están relacionados (aun cuando no directamente) con el cargo sometido a concurso y con una duración inferior a 40 horas, por lo que sólo les corresponde 0.25 por puntuación, tal como efectivamente fueron valorados por la Comisión de Personal antes mencionada, sin que por ello se desmeriten como elemento de juicio que coadyuven a actualizar una óptica más integral de las situaciones que se sometan a consideración del titular de dicha posición, toda vez, que si bien es cierto sus temas no se refieren directamente a la jurisdicción especial de Familia pudieran intervenir de forma indirecta en un negocio determinado.

Los argumentos vertidos por la recurrente en lo atinente a ejecutorias no valoradas por la Comisión de Personal, este Tribunal confirma que cada una de las conferencias adjuntadas fueron calificadas de acuerdo al mérito que se desprendiera de cada una de ellas, y que efectivamente se dejó de valorar las que se encontraban repetidas en virtud de que una misma conferencia fue dictada en oportunidades distintas; por lo que, lo ponderable es el contenido del escrito presentado y no si dicho contenido fue expuesto en ocasiones reiteradas. Esta concepción se fundamenta en virtud de que es improcedente valorar dos veces el mismo crédito que se presente ante un concurso determinado de acuerdo al reglamento de Carrera Judicial.

La Sala estima pertinente ponderar la conferencia denominada "Los

Procedimientos en materia de menores según la Ley 3 de 1994", dictada ante el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, ya que de su análisis se observa que no le fue otorgada puntuación alguna, por lo que procede reconocerle a la recurrente 0.15 puntos en adición a los 78.93 obtenidos por la licenciada de Herrera conforme se colige de la Resolución N° 23-96 de 10 de octubre de 1996.

Como corolario de todo lo expuesto, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la Resolución N° 23-96 de 10 de octubre de 1996, en el sentido de que se adicionan 0.15 puntos a la suma de 78.93 puntos obtenidos por la licenciada JUDITH ESTER COSSÚ DE HERRERA correspondiente a la ejecutoria denominada "Los Procedimientos en materia de menores según la Ley 3 de 1994"; quedándole por tanto un puntaje total de 79.08 puntos que la MANTIENE dentro de la lista de seleccionables del concurso N° 127-96 (mixto) para la posición 1567 de JUEZ SEGUNDO SECCIONAL DE FAMILIA DE PANAMÁ, pero en un cuarto lugar.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

FULVIA DE SIMMONS INTERPONE DENUNCIA CONTRA EL LICENCIADO ARIEL CARRERA PITTÍ POR FALTA A LA ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO. AGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, ha ingresado a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el cuaderno que contiene la denuncia por Falta a la Ética y Responsabilidad del Abogado, interpuesta por la señora Fulvia de Simmons contra el licenciado ARIEL CARRERA PITTÍ.

El Tribunal de Honor, en virtud de lo preceptuado por el artículo 26 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, resolvió mediante Vista de 26 de agosto de 1994 (visible de foja 18 a 26 del expediente), "remitir a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia el proceso disciplinario seguido a ARIEL BOLÍVAR CARRERA PITTÍ para que resuelva lo de lugar, por tratarse de una excepción que requiere de decisión jurisdiccional".

Resulta preciso advertir que el Tribunal de Honor "considera que la conducta profesional del abogado acusado ante el hecho de no iniciar las gestiones para las que fue contratado por la señora de Simmons y haber recibido la suma de B/.100.00, encuadra perfectamente en la falta a la ética profesional prevista en el acápite b del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. Sin embargo, como el colega denunciado conforme a certificación de la Secretaría del Colegio, no es miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá resulta cuestionable jurídicamente por decir lo menos, la facultad de este tribunal precisamente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, para investigar y recomendar citación a juicio de un abogado que no forma parte del Colegio, toda vez que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la colegiación obligatoria del Colegio Nacional de Abogados de Panamá" (subraya el Tribunal de Honor y Disciplina).

Con fundamento en las consideraciones antes expuestas, la Sala considera pertinente externar su criterio.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 24 de junio de 1994, declaró "inconstitucional la frase " Colegio Nacional de Abogados de Panamá" del artículo 1 de la Ley 9 de 1984 por ser contraria a los artículos 19, 39 y 214 de la Constitución", toda vez que se arribó a la conclusión de que "no puede la Ley, porque ello tampoco lo permite el artículo 19 de la Constitución, consagrar un tratamiento jurídico privilegiado en favor de una persona jurídica -en este caso una asociación profesional de abogados- en detrimento de las demás que libremente deseen fundar los abogados de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Constitución en concordancia con el artículo 214 del mismo cuerpo legal o de las otras ya existentes a las cuales pertenecen o desean ingresar otros abogados. No puede tener el Colegio Nacional de Abogados de Panamá la exclusividad en cuanto a ser el único al cual deben afiliarse todos los abogados de la República para poder ejercer su profesión liberal porque dicha exclusividad contraría el modelo constitucional panameño en materia de asociación profesional de los abogados que es el del pluralismo: la Constitución otorga a todos los abogados la libertad de escoger la asociación profesional a la cual desean unirse para cumplir con el requisito legal de la colegiación obligatoria que actualmente exige la Ley en nuestro sistema jurídico".

Ante este escenario jurídico, el cual recoge los preceptos constitucionales vulnerados por el artículo 1 de la Ley 9 de 1984, que al interpretarse el principio del pluralismo atinentes a las agrupaciones profesionales de abogados, debe hacerse en virtud del principio de interpretación constitucional denominado el de unidad de la Constitución, el cual ha sido sustentado en innumerables sentencias de nuestro más alto Tribunal de Justicia. Las asociaciones profesionales de abogados son reconocidas a través de nuestra Carta Magna, como se desprende del texto del artículo 214.

En este orden de ideas, el Pleno de la Corte Suprema arribó a la decisión de que el mencionado artículo 1 de la Ley 9 de 1984 era inconstitucional, consecuentemente confiere el derecho a todo abogado de afiliarse a la agrupación profesional de abogados a la que desee pertenecer, no obstante, hay que destacar que el alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad no abarca lo relativo a las atribuciones del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados.

Este Tribunal, al ponderar el espíritu de la aludida sentencia invocada por el Tribunal de Honor y Disciplina del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, en el caso bajo análisis, determina de que resulta contrario a ésta, la interpretación dada por el Tribunal de Honor y Disciplina, al determinar que "resulta cuestionable ... , la facultad de este tribunal precisamente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, para investigar y recomendar citación a juicio de un abogado que no forma parte del Colegio" por la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 9 de 1984, criterio que sustentamos conceptuando que, partiendo del estudio detenido de la sentencia de inconstitucionalidad, a través de todo su texto se percibe, como principio rector, la intención de que se cumplan disposiciones de nuestra Carta Magna, específicamente lo relativo a la libertad al abogado de afiliarse al gremio de profesionales del derecho que desee, con el objeto de que no sea vulnerado, y a la vez, resaltar a través de una diversidad de grupos colectivos de profesionales del derecho los principios éticos, morales y sociales que deben primar en la conducta del abogado, no obstante, resulta contrario a éstos la interpretación del Tribunal de Honor toda vez que resulta imperativo para los abogados litigantes y para los ciudadanos en general contar con un ente encargado de velar por los principios éticos y morales de este grupo de profesionales.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, esta Corporación determina que el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados es competente para investigar las denuncias por las faltas a la ética interpuestas contra abogados litigantes, para lo cual resulta irrelevante el hecho de que el profesional sea miembro o no del Colegio Nacional de Abogados, correspondiendo a esta Sala la facultad exclusiva de decretar el juzgamiento, de conformidad con lo preceptuado por la Ley 9 de 18 de abril de 1984, Reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, artículos 21, 26, 27 y concordantes.

La denuncia interpuesta por la señora Fulvia de Simmons de fecha 28 de septiembre de 1993, formulada ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de

Abogados de Panamá (visibles en fojas 1,3 y 4), resalta el hecho de que el licenciado Ariel B. Carrera P. no cumplió con el trabajo encomendado, relativo a la presentación de un proceso de sucesión intestada, el cual, según la señora Simmons, se comprometió a realizar en 3 meses, para lo cual abonó cien balboas (B/.100.00) (cfr. foja 2) a los honorarios que fueron fijados en trescientos balboas (B/.300.00). Además afirma la señora Simmons, que ha intentado en múltiples ocasiones localizar al licenciado Carrera P. a través del servicio de mensajes por teléfonos y que no le devolvió las llamadas, y que por medio del teléfono de su oficina fue igualmente imposible dado que estaba fuera de servicio.

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá en su Vista de 26 de agosto de 1994, "considera que la conducta profesional del abogado acusado, ante el hecho de no iniciar las gestiones para las que fue contratado por la señora de Simmons y haber recibido la suma de cien (B/.100.00) encuadra perfectamente en la falta a la ética profesional prevista en el acápite b del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado" (cfr. foja 19), decidió remitir a esta Superioridad el presente proceso bajo estudio para resolver lo de lugar. Con el fin de esclarecer los hechos denunciados el Tribunal de Honor ofició nota S/N calendada 28 de junio de 1994 (a foja 13) al Juzgado Quinto de Circuito, el cual en respuesta a la misma (a foja 14) manifiesta que "en ese tribunal se encuentra radicado el proceso de Sucesión Intestada el señor TOMÁS LABASTILL o TOMÁS LAVASTIDA (Q. E. P. D.), el cual fue propuesto por FULVIA MARÍA LAVASTIDA DE SIMMONS o FULVIA MARÍA LABASTID DE SIMMONS, con cédula N° 8-71-500. El poder de representación para el proceso en comento le fue otorgado al licenciado LUIS HUERTA DÁVALOS" (a foja 14).

Resulta palmario que en el Juzgado Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá no consta ninguna actuación del licenciado Ariel B. Carrera P. dentro del proceso en mención.

El licenciado Ariel B. Carrera P. presentó en tiempo oportuno el escrito de descargos y oposición, fundamentando sus argumentos sustancialmente en los siguientes hechos:

> "... Haciendo de su conocimiento que la primera instancia se tenían que realizar diligencias pertinentes a la legalización del nombre del difunto, para demostrar que era en vida el legítimo propietario del inmueble y a su muerte, se debía legalizar la confusión en el nombre, para que de ese modo ella pudiera hacerse legalmente de la propiedad del bien antes citado. Le expliqué perfectamente, de manera clara y que ella entendió bien, que para continuar el juicio y llevarlo a su fin había que hacer primeramente unas diligencias en ese sentido y que ello conllevaría, por parte de ella, como contratante verbal de mis servicios profesionales, el abono de la suma de B/.300.00 (Trescientos Balboas con 00/100), la susodicha señora me hizo entrega en efectivo, el día 5 de julio de 1993, la suma de B/.100.00 (Cien balboas) quedando comprometida a cancelar el resto del abono solicitado a más tardar, cuando se hiciera la corrección pertinente y se presentaran los documentos al Juzgado. A pesar de lo anterior y hasta la fecha de hoy dicha señora jamás se preocupó de hacer efectiva su palabra y su obligación de la contraprestación de servicios profesionales, motivo por el cual señalo que su acción no solo es temeraria y falsa, sino que está munida de mala fe" (foja 37).

Previo el análisis de las anteriores consideraciones, procede este Tribunal al estudio del contenido de la denuncia.

La actuación del licenciado Ariel Carrera P. frente a lo preceptuado en los artículos 10 y 11 del Código de Ética y Responsabilidad del Abogado, transcritos en párrafos precedentes, evidencia que el licenciado Carrera no determinó un contrato de servicios profesionales el cual definiera los derechos y las obligaciones propias dimanantes de su defensa, y de igual forma, los derechos y obligaciones pertinentes a la señora Fulvia de Simmons, persona que contrató los servicios profesionales del licenciado Carrera. Esa circunstancia impide que se

tenga como una referencia firme que hubiese pedido como abono inicial la suma de trescientos balboas (B/.300.00) y que la señora de Simmons no hubiera cumplido con ese requisito.

Ciertamente recibió un abono a los honorarios por cien balboas (B/.100.00) por sus servicios profesionales, el 5 de julio de 1993 (foja 2), y un año después, según consta en el Oficio N° 804 de 14 de julio de 1994, expedido por el Juez Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, no había realizado gestión que aparente **prima facie** ser suficiente; de lo que se queja precisamente la señora Fulvia de Simmons.

También obra como argumento de prueba para proseguir con este proceso, la dificultad que encontró la señora de Simmons, al igual que el Tribunal de Honor y Disciplina y la Secretaría de esta Sala para comunicarse con el licenciado Ariel B. Carrera P., como lo evidencian los informes a fojas 8 y 31.

En su escrito, el licenciado Carrera P., describe una serie de actos previos, que afirma haber realizado en atención al proceso de la señora de Simmons, no obstante no aportó al expediente certificaciones o constancias del Registro Civil o Registro Público a las cuales hace referencia.

Sostiene además, el denunciado que la señora de Simmons se comprometió a cancelar el resto del abono solicitado a más tardar, cuando se hiciera la corrección pertinente y se presentaran los documentos al Juzgado, y que jamás lo hizo, porque no volvió a comunicarse con él, y así las cosas, el pensó que la señora de Simmons había prescindido de sus servicios y no se ocupó más del asunto dado que ella no había cancelado el resto del abono por él solicitado (foja 38).

El licenciado Carrera ha expresado que acordó con la señora de Simmons que el resto del abono tenía que ser entregado a más tardar cuando se realizara la corrección pertinente y se presentaran los documentos al Juzgado, no obstante, reiteramos que estas actuaciones no constan en este proceso, razón por la cual este Tribunal no alcanza a comprender la actitud del licenciado al afirmar que no se ocupó más del caso porque la señora de Simmons no canceló el resto del abono, si no existen constancias de su gestión en el Juzgado Quinto de Circuito Civil como apoderado de la señora de Simmons.

Esta Superioridad es del criterio que los argumentos vertidos por el licenciado Carrera P. justificando el abandono del caso en cuestión no han sido comprobados, toda vez que los centra en el hecho de que la señora de Simmons no se volvió a comunicar con él, cuando es la denunciante quien ha manifestado que en reiteradas ocasiones lo llamó al teléfono que el le suministró y que se encontraba fuera de servicio, eventos estos que motivaron la interposición de la presente denuncia.

Así las cosas, y en virtud de que la señora de Simmons no buscó los servicios de otro abogado, como se desprende del oficio proferido por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Civil, resulta palmario que la denunciante confiaba en los servicios profesionales que le prometió el licenciado Carrera P. de continuar el proceso de sucesión, como parte interesada en el mismo.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Sala advierte que las actuaciones del licenciado ARIEL B. CARRERA P. no parecen conformarse a lo establecido en el Código de Ética y Responsabilidad del Abogado; por lo que esta Superioridad encuentra suficientes elementos de juicio que ameritan el llamamiento a juicio del licenciado ARIEL B. CARRERA P.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL LLAMAMIENTO A JUICIO, del licenciado ARIEL B. CARRERA P., varón , panameño, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal N° 4-100-1349 con localización posible en Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio San Miguel N° 553, de la Ciudad de Panamá, con fundamento en la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por la denuncia interpuesta por la señora Fulvia de Simmons, panameña, portadora de la cédula de identidad personal N° 8-71-500, con domicilio en Pueblo Nuevo Calle 3ra., por faltas a la

ética y la responsabilidad profesional del abogado y, ESTABLECE, que la Secretaría de esta Sala fijará en fecha posterior el día y hora de la celebración del debate oral, en cuyo acto se practicarán las pruebas que presenten las partes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO DISCIPLINARIO EN CONTRA DEL FUNCIONARIO ROBERTO ROMERO, PRESENTADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS EN RELACIÓN A AUSENCIAS A SU PUESTO DE LABORES SIN AUTORIZACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El 23 de septiembre de 1996, fue recibida en la Dirección de Recursos Humanos la nota N° 189/PRP/96 procedente de la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas, mediante la cual se hizo la siguiente solicitud:

"Licenciada Arosemena:

Solicito a usted una acción enérgica en contra del fotógrafo Roberto Romero, quien en la tarde del jueves 19 se ausentó de su puesto de trabajo sin estar autorizado por mí. No es la primera vez que Romero se retira sin pedir permiso, ni excusarse.

Por otro lado, en el transcurso de esta semana le llamé la atención verbalmente porque solicitó un permiso; se lo concedí y cuando se fue se llevó la cámara que es propiedad de la institución. El aduce que la dejó en una gaveta de su escritorio. Sin embargo, dos funcionarios de esta dirección revisaron su escritorio esa tarde para la toma de unas fotografías y no la encontraron.

Ayer por la tarde tomó posesión ante el Magistrado Arturo Hoyos, el Magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés y esta dirección no cuenta con fotografías de este acto porque Romero se ausentó sin mi permiso.

Las desapariciones repentinas de Romero causan perjuicios a la dirección. Por esta práctica le he llamado la atención verbalmente desde su ingreso a esta organización sin que él haya enmendado su conducta; por lo que le reitero mi solicitud para que se le aplique la sanción correspondiente a este funcionario".

Dicha queja fue remitida a la Sala Cuarta de Negocios Generales, a fin de imprimirle los trámites de un proceso disciplinario, por lo que se dispuso llamar a la quejosa para que ratificara los cargos formulados contra el señor Roberto Romero, bajo la gravedad del juramento.

A fojas 6-7 de este cuaderno aparece la declaración jurada de la licenciada María Victoria González, en la que se ratificó del contenido de su nota de queja y formula cargos contra el fotógrafo de la Dirección de Relaciones Públicas del Órgano Judicial.

En cumplimiento del trámite establecido por la ley, se corrió traslado al señor Roberto Romero por el término de cinco días, quien dio respuesta al primer cargo, relacionado con su ausencia durante el día jueves 19 de septiembre de 1996, sin autorización de la Directora, indicando que el Secretario

Administrativo, licenciado Antonio Orozco lo había enviado esa tarde a una misión oficial desde la 1:00 p. m. hasta la 5:00 p. m. También expresó que con base al acumulativo de tiempo compensatorio, confrontaba dificultades porque no los podía obtener cuando los necesitaba.

Anota que en las últimas dos ocasiones en que se ausentó, en una de ellas recibió la autorización de la Directora de Prensa y Relaciones Públicas y la otra obedeció al acatamiento de una orden superior.

En cuanto al segundo cargo, referido al uso de la cámara de la institución que se presumía había sido retirada por él, pues no la encontraron en su escritorio, indica que ello no pudo ocurrir por cuanto es propietario de un equipo de nueve modelos de cámaras fotográficas con sus respectivos lentes, los cuales ha prestado a la institución para darle calidad a algunos trabajos fotográficos.

Respecto al contenido de los memorándumes en los que se le solicita más calidad a las fotografías tomadas, señala que la falta de un mejor equipo fotográfico le limita su labor porque no tiene acceso a un laboratorio de revelado de fotos y tiene instrucciones precisas de la dirección de no poder realizar más de una a dos fotos por evento.

Dentro del período de práctica de pruebas, el señor Roberto Romero aportó el documento que aparece a fojas 22, firmado por el licenciado Antonio Orozco, Secretario Administrativo, quien certifica que el 19 de septiembre de 1:00 a 5:00 p. m. estuvo realizando unas cotizaciones para un programa de los Tribunales de Menores.

Por su parte, la Directora de Prensa y Relaciones Públicas, mediante escrito que hizo llegar a la Secretaría General de la Corte, adujo el testimonio de tres personas que laboran en la Dirección de Relaciones Públicas, a fin de corroborar los cargos formulados en su nota de 20 de septiembre. Además, aportó copia de dos de los memorándumes remitidos al fotógrafo Romero el 12 de junio y el 24 de septiembre, respectivamente, y copias de fotografías tomadas por otros funcionarios de esa dirección con la cámara del Órgano Judicial y que no presentan los defectos advertidos en las que realiza el señor Romero.

En cumplimiento de la ley que regula los procesos disciplinarios, se otorgó un término común de cinco días a las partes para que presentaran sus respectivos alegatos. Durante ese lapso, sólo la Directora de Relaciones Públicas hizo uso de ese derecho (fs. 38-39) en el que reitera los motivos de su queja y sostiene que no se trata de confrontación de jerarquías, sino de que cada funcionario que es requerido por un superior lo comunique al jefe inmediato, a objeto de que puedan adoptar las medidas para cubrir su ausencia temporal en los caos en que se necesiten sus servicios. Alega que no se trata de un caso aislado, sino de una sucesión de comportamientos que han merecido amonestación verbal y escrita.

Según el contenido de la nota N° 189/PRP/96, los cargos que se le hacen al señor Roberto Romero consisten en haberse retirado la tarde del día 19 de septiembre de 1996 sin estar autorizado por la Directora de Prensa y Relaciones Públicas y haber hecho uso de un permiso que se le concedió, llevándose la cámara fotográfica de la institución.

Con relación al primer cargo, consta en autos que la ausencia del señor Romero la tarde del 19 de septiembre de 1996, se produjo con desconocimiento de las causas que motivaron dicha ausencia por parte de su Jefa inmediata. Si bien es cierto que el Director Administrativo del Órgano Judicial requirió sus servicios y esa fue la razón de su ausencia, no menos cierto es que tanto el Director Administrativo como el fotógrafo estaban en el deber de comunicarlo a la Directora de Prensa y Relaciones Públicas y ninguno de los dos funcionarios administrativos cumplieron con ello. Tal comportamiento se ubica en el numeral 4° del artículo 12 del Acuerdo N° 46 de 27 de septiembre de 1991, mediante el cual se aprueba el reglamento de la Carrera Judicial. Tal como se establece en los artículo 100 y siguientes de dicho reglamento, el régimen disciplinario no tiene otro propósito que el de lograr el buen funcionamiento de la institución, logrando que todos los servidores judiciales y administrativos observen una

conducta cónsona a las delicadas funciones que la Constitución y la Ley nos confían.

Si bien es cierto que la falta cometida no reviste mayor gravedad, en virtud de que un funcionario de superior jerarquía había requerido sus servicios, la Corte estima que el mejor funcionamiento de la institución y la autonomía administrativa se preservan cuando cada servidor público sea consciente de sus deberes y derechos y cumpla con las normas legales y reglamentarias que rigen en la institución en la cual presta servicios.

En razón de lo expuesto, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, AMONESTA SEVERAMENTE al señor ROBERTO ROMERO por haber infringido el numeral 4° del artículo 12 del Reglamento de Carrera Judicial en relación con el artículo 297 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=